

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

*La construcción (teórica) de los movimientos
sociales en Chile:
El campo de batalla de la Sociología (Política) y la
Nueva Historia (Social)*

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
DOCTORA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

PRESENTA:
Mónica Iglesias Vázquez

TUTORA PRINCIPAL:
Diana Margarita Favela Gavia
(CEIICH-UNAM)

MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:
Massimo Modonesi
(CES-FCPyS-UNAM)
María Raquel Gutiérrez Aguilar
(ICSyH-BUAP)



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

*A Cecilia Magni, a la 'Comandante Tamara',
socióloga y revolucionaria*

Índice

AGRADECIMIENTOS	7
PRESENTACIÓN	9
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES TEÓRICO-METODOLÓGICAS	17
1.1. Se hace camino al andar... ..	18
1.2. El <i>qué</i> , el <i>porqué</i> y el <i>cómo</i> de esta investigación.....	20
1.3. La construcción teórica de los movimientos sociales en Chile	27
1.3.1. El campo académico chileno	28
1.3.2. El enfoque teórico-metodológico	32
1.3.3. Un proyecto político y societal.....	34
1.4. Sociología de la sociología y de la historiología	36
CAPÍTULO II: EL GOLPE AL SABER	49
2.1. Las ciencias sociales <i>desarmadas</i>	54
2.1.1. La depuración de las ciencias sociales	54
2.1.2. El desarme ideológico de las ciencias sociales	60
2.2. Las ciencias sociales <i>renovadas</i>	74
2.2.1. La reconstrucción extrauniversitaria	74
2.2.2. La renovación ideológica de las ciencias sociales.....	81
2.3. Las ciencias sociales <i>huérfanas</i>	98
2.3.1. La difícil reconstrucción universitaria.....	98
2.3.2. De la sociología de la decadencia a la decadencia de la sociología... ..	102
2.4. Consideraciones finales	111
CAPÍTULO III: LA DECADENCIA DE LA SOCIOLOGÍA (POLÍTICA): NEGACIÓN Y SUBORDINACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES	117
3.1. La irrupción de “nuevos” actores	118
3.1.1. Emergencia de los estudios sobre movimientos sociales: El Encuentro de Chantilly (1982).....	128
3.2. SUR y la sociología negacionista	132
3.2.1. La “desintegración de un movimiento social imposible”: anomia, fragmentación, desviación.....	135
3.2.2. Del “miedo al Estado” al “miedo a la sociedad”	139

3.3.	La Flacso, la sociología transicional y la subordinación de los movimientos sociales	142
3.3.1.	El lugar de los movimientos sociales en la transitología.....	143
3.3.2.	La “columna vertebral” de la sociedad chilena y la “transición invisible”	148
3.3.3.	La democracia política contra la democratización social: la subordinación de los movimientos sociales	152
3.3.4.	La autonomización de la política.....	160
3.4.	Una sociología “en la medida de lo posible”: ¿La desaparición de los movimientos sociales?.....	164
3.4.1.	Constatando una paradoja: ¿Democracia sin movimiento social?	167
3.4.2.	Democracia de los consensos: abstracción del conflicto.....	173
3.4.3.	Disciplinamiento de los movimientos sociales	180
CAPÍTULO IV: LA EMERGENCIA DE LA NUEVA HISTORIA (SOCIAL): AFIRMACIÓN DEL MOVIMIENTO POPULAR		187
4.1.	ECO: Educación popular y protagonismo popular.....	190
4.1.1.	La educación popular: de lo transitorio a lo permanente	191
4.1.2.	El protagonismo popular: La afirmación de los saberes populares....	194
4.1.3.	Las Jornadas de Protesta: rupturas y desafíos para el movimiento popular.....	201
4.1.4.	La transición a la democracia: “Un tiempo peligroso”	207
4.2.	“Una ciencia para una nueva historia social”	215
4.2.1.	La generación del ‘85: el juicio al teoricismo	217
4.2.2.	La “historia desde abajo y desde dentro”	220
4.2.3.	La afirmación de la afirmación: opción epistemológica y política	226
4.2.4.	Los movimientos sociales: Tiempos, espacios y formas de la política popular.....	232
4.3.	Lo social y lo político: miradas desde la Historia Social	237
4.3.1.	La posdictadura: ¿Caminos divergentes?	237
4.3.2.	El Chile contemporáneo y “el topo de la historia”	244
4.3.3.	Historia Social e Historia Política: ¿Un debate necesario?	248
CONSIDERACIONES FINALES		253
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS		258

Agradecimientos

A Margarita Favela, por su amistad y especialmente por haberme acompañado en este largo recorrido, con honestidad, respeto y mucha dedicación.

A Massimo Modonesi, por su lectura aguda y crítica, por la confianza depositada en mí y por su gran apoyo en los avatares de la academia.

A Mario Garcés, por orientarme en el mapa intelectual chileno, por compartir conmigo las enseñanzas que son parte de su vida, de su trayectoria y de esta tesis.

A Lucio Oliver, por haberme convencido de que postulara al Posgrado en Estudios Latinoamericanos; por su talante afable y gentil, siempre dispuesto a escuchar y a debatir con generosidad.

A Raquel Gutiérrez, por sus comentarios inspiradores para pensar y repensar los temas de fondo de esta tesis.

A Juan Cristóbal, “mi amor, mi cómplice y todo”. Lo mejor que pueda tener este trabajo es fruto de nuestras conversaciones y de su imperturbable optimismo.

A mi hermana, Lucía, por ayudarme a corregir los chilenismos que, como guiños traviosos, se cuelan en mi escritura.

A mi madre y a mi padre, Rosa y Antonio, por su presencia constante, aún más cierta en la distancia.

A Arantxa, pedacito de “casa” en México, terreno compartido de sabores y de acentos, remedio contra la morriña.

A *Bruno*, por recordarme que los héroes son hombres de carne y hueso.

A la familia cubano-chilena, Nérida, Patricia, Nahia y Andrea, por el baile, el trago y la risa.

Por el presente, que está cargado de lucha, que está preñado de sueños.

Esta investigación fue posible gracias al apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), que me concedió una beca para la realización de estudios de doctorado. Asimismo, conté con el apoyo para la elaboración de la tesis, del proyecto IN303813 “Subalternidad, antagonismo y autonomía en los movimientos socio-políticos en México y América Latina” dirigido por el Dr. Massimo Modonesi, financiado por el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Presentación

I

Este trabajo nace de una pregunta alumbrada en el curso de una investigación previa¹: *¿Por qué la sociología chilena había negado la existencia de movimientos sociales en Chile? ¿Por qué había escamoteado esa categoría al amplio, diverso y profundo repertorio de acciones de protesta y de sobrevivencia desplegadas por los pobladores² en la década de los ochenta del siglo pasado? La acrimonia en el tratamiento que esos sociólogos dispensaron a los pobladores traslucía, desde un principio, que la respuesta no podía circunscribirse al ámbito académico o, en todo caso, que se trataba de una disputa académica con una gran trascendencia política. Indudablemente la difusión de aquella tesis –la negación de los movimientos sociales– sirvió al proceso de transición política que tuvo lugar en Chile, conducida por los cauces institucionales, centrada en las élites políticas, legitimando la legalidad pinochetista y garantizando la permanencia del modelo económico vigente. Y todo ello prescindiendo del sujeto popular (Baño 2013b). El uso político de la negación teórica de los movimientos sociales es incuestionable (Salazar 2006, Moyano 2011b, Garcés 2012, entre otros). Con todo, lo que yo no alcanzaba a entender era por qué una sociología que se decía crítica, que se situaba en la oposición a la Dictadura, que había abrazado con entusiasmo, en un primer momento, el estudio de los movimientos sociales, había producido una amplia literatura que negaba y/o subordinaba a los actores que, con su audacia y sus saberes, habían logrado no sólo sobrevivir a la represión política, económica y cultural, sino también impulsar procesos de democratización de la sociedad.*

A primera vista, esta inquietud podría parecer pueril, pero una revisión inicial de la literatura existente al respecto me demostró que no lo era. Varios trabajos coinciden en expresar, con sorpresa, una suerte de incredulidad ante la desaparición de los movimientos sociales en los primeros años de la posdictadura (Delamaza 1999, V. Espinoza 2000, entre otros); en eso consistiría, precisamente, la paradoja de la transición chilena (Oxhorn 2004, Paley 2001, Correa, Figueroa, y otros 2001, Guerrero 2008, Beasley-Murray 2010, Bastías 2010).³ La reiteración del carácter paradójico de

¹ Se trata de la investigación conducente al grado de Maestra en Estudios Latinoamericanos, publicada con el título *Rompiendo el cerco: El movimiento de pobladores contra la Dictadura* (Santiago de Chile: Radio Universidad de Chile, 2011).

² *Pobladores* es el nombre que reciben en Chile los pobres de la ciudad, los que no tienen acceso a un terreno para vivir y muchas veces tienen que *tomárselo*, erigiendo asentamientos precarios en sitios eriazos, en los márgenes de la ciudad, con escasa o nula infraestructura y servicios, autoconstruyéndose sus casas con materiales precarios. Ese acto, el de la *toma* y construcción de sus *poblaciones*, constituye el eje de la identidad atribuida desde afuera, al ser definidos simplemente por su condición de *pobladores*, de habitantes de ese espacio; también ha sido el pilar de la identidad creada por ellos, al tratar de construir en torno a la *población* relaciones sociales más democráticas, participativas y autónomas.

³ Incluso el *Informe de Desarrollo Humano en Chile*, del PNUD, elaborado en 1998, dedicó un capítulo a “las paradojas de la modernización”.

esa circunstancia –la *desaparición* de los movimientos sociales justo con el retorno de la “democracia”– ponía en evidencia la *contradicción* entre lo que el “sentido común” auguraba de un sistema democrático y la constatación de un “mundo político” que no sólo se autonomizaba progresivamente de los sectores populares, sino que, para ello, se empeñaba “en desmovilizar” a la ciudadanía (Correa, Figueroa, y otros 2001, 339).

Una explicación más o menos recurrente para ese aparente “absurdo” ha sido la de la *traición* de la élite académica y política a los sectores populares y al propio proyecto originario de la Concertación de Partidos por la Democracia.⁴ Coincido con Enzo Faletto en que ésta es la conclusión a la que se llega después de leer *Chile Actual: Anatomía de un mito* de Tomás Moulian (1997), libro, por lo demás, fundamental para la comprensión del pensamiento sociológico y político de las últimas décadas. La laudada transición a la democracia se habría demostrado una operación *gatopardista*, en la que las élites políticas se habrían puesto de acuerdo para producir un cambio de régimen que dejaba intacto el modelo económico y político impuesto por la Dictadura. Ciertamente esto es así, pero la tesis de la traición –aun cuando ésta haya existido, sin duda, en múltiples casos– no me satisfizo completamente, pues hace descansar el análisis en aspectos personales (la falta de lealtad); y en todo caso no explica *per se* cuáles fueron las condiciones y los procesos que permitieron o facilitaron esa deslealtad hacia los sectores que aspiraban a una democracia sustantiva. Asimismo, ese razonamiento circunscribe el análisis al periodo posdictatorial: la traición se habría producido una vez que la Concertación se hizo Gobierno y no cumplió con las promesas que, previamente, había realizado; en ese sentido se habría traicionado a sí misma, a sus propios principios. Pero sólo es posible apelar a la traición, en este sentido, estableciendo una clara diferencia entre la Concertación en la oposición y la Concertación en el Gobierno. En consecuencia, para comprender la difícil relación entre movimientos sociales y partidos políticos bastaría con fijarse en las tensiones surgidas durante la posdictadura, asumiendo que había existido una buena articulación durante la Dictadura.

Por otra parte, esa interpretación es rechazada, con rotundidad, no sólo por la oficialidad *concertacionista* sino también por los artífices intelectuales de la transición política: “Aquí nadie ha traicionado a nadie” (Garretón 2009), porque “no es cierto que la Concertación desmovilizó, eso es una mentira absoluta” (Garretón 2013c). Desde esta perspectiva, la ausencia de movilizaciones y la “apatía” política de amplios sectores sociales, principalmente de los jóvenes, se explica a partir de la supuesta debilidad e impotencia de los actores sociales, reforzando con ello la tesis de la negación de los movimientos sociales. Bajo esta interpretación, la *desaparición* de los movimientos sociales en los noventa se comprende precisamente por la fragmentación, anomia y carácter pre-político de las formas de protesta y de movilización de los ochenta. Así pues, los movimientos sociales no habrían resultado relevantes en la lucha contra la Dictadura, debido a sus propias insuficiencias, y en consecuencia, habrían sido las élites políticas las que habrían protagonizado la “gesta” de derrotarla “en su propia cancha”

⁴ Referencias en este sentido pueden encontrarse en V. Espinoza (2000), Portales (2013) y Salazar (2015), entre otros.

(Aylwin 1998, 14).⁵ De la misma manera, las insuficiencias en la profundización democrática verificadas durante la posdictadura también serían atribuibles, fundamentalmente, a la ciudadanía –no a los partidos políticos–, a su déficit de autonomía, de civismo, de politización y a su compulsión consumista.

A nuestro juicio, ninguna de las dos líneas interpretativas resulta plenamente satisfactoria. Tanto la tesis de la traición como la de la extrema fragilidad de los actores sociales o de la inexistencia de movimientos sociales, hacen descansar todo el peso explicativo en uno de los dos polos de la relación entre lo social y lo político: en el primer caso, la problemática se reduce al proceder de las élites que no “cumplieron” su palabra; en el segundo, se le achaca toda la responsabilidad a la ciudadanía, aparentemente despolitizada, consumista y apática. Lo que asoma en ambas argumentaciones es precisamente la *escisión* y la distancia abismal entre lo social y lo político. Y lo que resulta fundamental, desde nuestra perspectiva, es que si bien esa escisión fue *forzada* por la represión militar y las políticas dictatoriales, fue después *legitimada* por la propia conceptualización que la sociología hizo de los movimientos sociales como actores apolíticos, que precisaban de la conducción partidista (propia política). La subordinación de los movimientos sociales, en esa perspectiva, constituye no una situación transitoria o un efecto indeseable, fruto del contexto dictatorial, sino un principio fundamental de todo el entramado discursivo y del engranaje político. Por eso la perplejidad ante la supuesta desaparición de los movimientos sociales y la fetichización y esclerosis de la “política” se desvanece si atendemos a *la construcción teórica de los movimientos sociales*.

II

Tras la *negación teórica* de los movimientos sociales sospechábamos la existencia de *razones e xtra-teóricas*, de *pre-supuestos* epistémicos y políticos, que permitían delimitar mejor los alcances y los límites de las interpretaciones sobre los movimientos sociales y sobre las problemáticas que les corresponden: la formación de subjetividades políticas y la transformación social. La construcción teórica de los movimientos sociales se nos presentó como un *campo de bat* *allá* en el que no sólo se evaluaba el conocimiento científico sobre las formas de protesta y movilización en la década de los ochenta, sino también se *disputaba la orientación de las prácticas y de las líneas de acción política*. Negar o subordinar a los movimientos sociales comportaba restarles protagonismo, o anularlos, en la definición de las vías de salida de la Dictadura y en las propuestas de democratización; por el contrario, argumentar la existencia de movimientos sociales y afirmar sus potencialidades para coadyuvar, o liderar, la democratización de la sociedad, suponía encauzar la transición por la vía del

⁵ Así lo refleja la siguiente cita: “¿Y de qué pueblo, de qué movimiento social hablamos que se deja desmovilizar durante 17 años? ¿Qué estaban haciendo los movimientos sociales en ese período? ¿En el período del 90 hasta 2006? *Consumiendo, pues*. En eso estaban” (Garretón 2013c). Sin desconocer, efectivamente, que el consumo (y el endeudamiento) fue usado como un mecanismo de sujeción de los “desórdenes” sociales, y que amplios sectores sociales quedaron atrapados en esa lógica, este argumento hace descansar toda la responsabilidad en el movimiento.

protagonismo popular. Cada una de estas opciones epistémicas y políticas fue adoptada y desarrollada por una corriente de pensamiento distinta.

El primer objetivo de esta investigación fue delimitar y evaluar las interpretaciones sobre los movimientos sociales, esto es, la perspectiva de la sociología que hemos llamado *renovada*, y la perspectiva de la *Nueva Historia*. El segundo objetivo fue tratar de explicar a qué se debían esas perspectivas contrapuestas en el examen de los movimientos sociales. Para ello fue necesario dar cuenta de la historicidad de cada una de las corrientes de pensamiento, de las influencias y de las transformaciones sufridas con posterioridad al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, que constituyó un parteaguas de la historia chilena, y que afectó profundamente todos los órdenes de la vida social.

La sociología, que era una ciencia social con amplio desarrollo universitario y con una institucionalización sólida al momento del golpe militar y también con un compromiso explícito con el proyecto de transformación de la sociedad, pues había nacido vinculada a la idea de cambio social, vivió un proceso de auto-cuestionamiento, de la mano de la *renovación socialista*, que introdujo modificaciones sustantivas en la forma de concebir el quehacer científico y el rol del sociólogo, así como las posibilidades de la transformación social. De ese proceso la sociología salió *renovada*, es decir, con una apariencia nueva a pesar de, o precisamente por, su recorrido anterior. En cambio, la *Nueva Historia* es una corriente que, como su mismo nombre indica, pretende inaugurar una forma distinta de investigar y de contar la historia social, sin ataduras con corrientes historiográficas precedentes. Es una corriente forjada al calor de la lucha contra la Dictadura, y que “sistematiza” sus principios teóricos y epistemológicos en la disputa, mediata, con la Sociología. El cuestionamiento de los historiadores a las tradiciones de pensamiento anteriores, que lo hubo, no asumió la forma de la ruptura amarga y de la renegación, sino de una crítica que busca superar las limitaciones advertidas en aquellas corrientes.

III

La confrontación entre estas dos corrientes en el examen de los movimientos sociales, se expresa no sólo en el carácter *renovado* de una y la condición *nueva* de la otra, sino también en que esta sociología está fuertemente influenciada por la *política*, mientras que la *Nueva Historia* es de tipo *social*. Aquí se manifiesta nuevamente la escisión entre lo social y lo político. Expliquemos esto.

En el caso de la separación entre lo “social” y lo “político”, como entre la alta cultura y la cultura popular, “actuar como si bastase rechazar en el discurso la dicotomía entre distinciones [...] existente en la realidad para hacerla desaparecer es creer en la magia. Es una forma ingenua de utopismo o moralismo” (Bourdieu y Wacquant 2005, 133).⁶ Es decir, la única forma de anular la distinción es mediante la transformación real

⁶ Lo mismo había señalado Marx (1845) en la IV *Tesis so bre F euerbach*, quien “arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal. No advierte que, después de realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se

de los procesos que hacen que ella se justifique y se legitime. La dicotomía ciertamente existe en la realidad y tiene efectos prácticos: desde el golpe de Estado y más claramente desde la reconfiguración del escenario político en la década de los ochenta, se evidenció una fractura entre partidos políticos y movimientos sociales. Diversos autores dieron cuenta de la separación entre los procesos de reconstitución del tejido social, de recomposición de las solidaridades sociales (Valdés 1986), de democratización desde la base o de la transición invisible (Garretón 1987e), por un lado, y la recomposición de los partidos políticos en un contexto de ilegalización y persecución y el fenómeno de la transición política, por el otro. En definitiva, de la tensión entre lo social y lo político (Baño 1985).

Decimos que la sociología *renovada* es *política*, primordialmente en dos sentidos: primero, porque está *colonizada* por las preocupaciones de la ciencia política, esto es, por el fenómeno de la transición entre regímenes políticos, los problemas de la gestión gubernamental y el rol de los actores “propiamente” políticos –en esencia, los partidos–, pero, sobre todo, y en un sentido más profundo, porque el *punto de partida* de la epistemología que subyace en esta mirada es que la sociedad se construye desde el Estado, que la política consiste en el ejercicio del poder, que el poder reside en el Estado y que la subjetividad política (la construcción de sujetos políticos) sólo es posible en su vinculación y proyección hacia el Estado. Por contraposición, lo social es un espacio natural, a-político.

En cambio, la Nueva Historia se define como una historia *social*, no sólo porque en ella tengan *centralidad epistémica* los “actores sociales” sino, sobre todo, porque su propuesta de interpretación de la historia *parte de* la consideración de que son los sujetos sociales populares, las comunidades, las asociaciones y los colectivos, los protagonistas de la transformación social y, por lo tanto, asumen también, en ella, *centralidad política*. En este sentido, los movimientos sociales son movimientos políticos siempre. El hecho de que esta historiología se asuma como “social” no significa que se considere a-política, sino más bien a-partidista, o a-Estatalista, o al menos, que reconoce que los partidos políticos y el Estado no son los únicos *loci* del poder y de la política. La política rebasa los límites del Estado, el partido convive con otras formas de organización y la representación deja de ser la única vía de constitución de subjetividades políticas. Esta mirada, desde los actores sociales, tiende a superar la fractura entre lo social y lo político –porque la política residiría fundamentalmente en los movimientos sociales– pero como ésta escisión no es sólo discursiva sino que tiene una traducción en los procesos sociales y en los actores que entran en conflicto por la capacidad de construir la sociedad, la Nueva Historia se asume como *social*, en antagonismo con la primera acepción de la política. Con todo, la dificultad de propugnar esta disolución de la política en lo social, lleva a que algunos historiadores sociales planteen la necesidad de hacer una Nueva Historia *Política*, para dar cuenta de la

separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, sólo puede explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal consigo misma. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por consiguiente, después de descubrir, v. gr., en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla”.

relevancia de la militancia y de los partidos políticos en las luchas sociales (Grez 2005, Moyano 2011a, entre otros).

IV

Una aclaración introductoria más se hace necesaria, en relación con la estructura de este trabajo, que está dividido en cuatro capítulos. En el primero de ellos, abordamos algunas cuestiones teórico-metodológicas a propósito de cómo pensamos la reflexión teórica y en qué corriente de pensamiento ubicamos nuestra investigación; así como de los conceptos que empleamos como claves de lectura del proceso de construcción teórica de los movimientos sociales.

En el segundo capítulo delimitamos y evaluamos las transformaciones objetivas y subjetivas que experimentó el campo académico chileno a partir del golpe de Estado. Describimos de un lado, la intervención militar de las universidades, la expulsión y persecución de los científicos sociales críticos y la instauración de un modelo académico excluyente y autoritario; de otro, la emergencia de “centros académicos independientes” que fueron conformando un entramado institucional alternativo al universitario, en donde se ancló la oposición intelectual a la Dictadura y donde se produjo la reflexión sobre los movimientos sociales; y finalmente, durante la posdictadura, el complejo e inacabado retorno de las ciencias sociales a los espacios universitarios. Prestamos especial atención a los procesos de cuestionamiento y autoinculpación de los sociólogos, y a las orientaciones y temáticas que hegemonizan su pensamiento, desde la negación y renegación de un paradigma sociológico anterior, hasta la construcción de una sociología *renovada*.

En el tercer capítulo nos adentramos en las teorizaciones específicas sobre movimientos sociales desde la sociología *renovada*. Examinamos dos vertientes que, a nuestro juicio, se complementan, porque comparten los mismos presupuestos: una, que se enfocó en los problemas de subjetivación política de los actores sociales que protestaban contra la Dictadura y que concluyó que no había propiamente movimientos sociales en Chile; y, otra, que analizó el lugar que las movilizaciones y las protestas debían ocupar en la estrategia de la transición a la democracia, en la que el papel central y director lo ocupaban las élites políticas y que, por lo tanto, estableció el carácter subordinado y dependiente de los movimientos sociales en la transformación de la sociedad.

El cuarto capítulo está dedicado a la Nueva Historia, corriente historiográfica que presenta en su seno más diferencias que la Sociología *renovada*, pero que se estructura en torno de la idea de la *centralidad política del movimiento popular*. Identifico dos trayectorias principales que convergen en torno del año 1985: la reflexión de un grupo de historiadores y educadores populares nucleados en la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, entre los que destaca Mario Garcés; y la reflexión del historiador Gabriel Salazar.

Por último, en las consideraciones finales expongo los hallazgos de la investigación, en torno a los presupuestos epistémicos y políticos detrás de cada una de

estas corrientes teóricas y acerca de cómo ellos condicionan la manera de construir teóricamente al movimiento social.

CAPÍTULO I

Consideraciones teórico- metodológicas

En la ciencia no hay caminos reales [royale], y sólo tendrán esperanzas de acceder a sus cumbres luminosas aquellos que no temen enfrentarse al escalar por senderos escarpados.

Karl Marx (2008 [1872], 21)

Minino de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí? Eso depende, en gran parte, del sitio al que quieras llegar –dijo el Gato.

Lewis Carroll (2003 [1865], 60)⁷

La ciencia social debe ser ciencia política.

André Gunder Frank (1967, XIV)

⁷ Tomo este epígrafe prestado del sociólogo argentino Tomás Amadeo Vasconi (1991, 39).

1.1 Se hace camino al andar...

El recurso a la etimología sirve a menudo para salvar la distancia entre los significados actuales de las palabras y su sentido primigenio, vinculándolas a su origen –a la razón de su existencia– y sorteando las múltiples mediaciones simbólicas que han ido diversificando el contenido de un determinado término. Por esa vía tratamos de descubrir el significado veraz de una palabra, cuya proximidad con una realidad concreta a menudo nos ayuda a presentar una imagen más evidente de lo que queremos decir. «Método» es una palabra de origen griego, compuesta por las partículas *μετά* (más allá) y *ὁδός* (camino). Literalmente podría traducirse como “el camino para ir más allá”. Por lo tanto, el método supone un punto de partida y una meta hacia la que se dirigen las acciones, y consiste en una ruta, un procedimiento (ordenado, consciente) para ir del uno a la otra.

En el caso de la ciencia, el fin es la “verdad” o, de otro modo, un conocimiento más preciso o más exhaustivo sobre un aspecto particular de la realidad. Vaya por delante que el concepto de ciencia está “históricamente condicionado” (Gómez 2009), por lo que su contenido –lo que entendemos por ciencia– y el valor que le otorgamos, depende de las condiciones sociales de su producción. En todo caso, para saber qué camino tomar (esto es, qué método adoptar) es imprescindible saber a dónde queremos llegar, tal como advierte el gato de Cheshire en el diálogo que sostiene con Alicia. De lo contrario, nuestro caminar puede ser errático, es decir, no conducirnos a ninguna parte o no saber a dónde nos condujo, que, en términos epistémicos, significa que no somos conscientes de la adquisición o no de nuevo conocimiento y, por lo tanto, tampoco de la secuencia de las operaciones llevadas a cabo en la investigación. Con todo, el sociólogo francés Pierre Bourdieu, advierte que “hacer sin saber del todo lo que uno hace es darse una oportunidad para descubrir en aquello que se hace algo que uno no sabía” (2008 [1984], 18). El camino nunca está perfectamente delineado de antemano, ni constituye una senda desbrozada que conduce directamente hacia un fin: es más un sendero escarpado que un camino real, como sostiene Karl Marx. De otra forma el conocimiento sería algo trivial e incontrovertible, pues la realidad se explicaría por sí misma. El filósofo alemán lo planteó de la siguiente manera: “Toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación y la esencia de las cosas coincidiesen directamente” (Marx 2006 [1894]b, 1041). De ahí que la tarea de la ciencia consista en evidenciar la contradicción entre la apariencia y la esencia de las *cosas* y, concretamente, en “reducir el movimiento visible y solamente aparente al movimiento real interno” (Marx 2006 [1894]a, 400).

Esa labor –que supone denunciar el carácter mistificador de las apariencias– implica un ir y venir de la realidad a la construcción teórica que expresa y confiere sentido a dicha realidad, que se mantiene, no obstante, *relativamente autónoma*.⁸ Por

⁸ “El sujeto real mantiene, antes como después, su autonomía fuera de la mente, por lo menos durante el tiempo en que el cerebro se comporte únicamente de manera especulativa, teórica” (Marx 2007 [1857-1858], 22). El *carácter relativo* y no absoluto de la autonomía de la sociedad con respecto a las representaciones teóricas que de ella se producen se debe al hecho de que Marx concibe la verdadera ciencia como aquella que, a la vez que devela las apariencias para explicar el movimiento real del objeto de estudio, denuncia las injusticias para cambiar la realidad. Así lo sentenció en la tesis XI

eso el procedimiento permanece siempre inacabado (histórico) y sujeto a revisión: se hace camino al andar. Se anda y se desanda, y se van dejando las huellas que trazan el camino. Las llamadas ciencias naturales lo expresan con la fórmula de “ensayo y error”, que significa que el investigador hace diversas pruebas hasta que se aproxima a una solución. Esto significa que el investigador debe *controlar* su propio proceso de investigación, “debe ser su propio metodólogo y su propio teórico, lo cual sólo quiere decir que debe ser un artesano intelectual” (Mills 1969 [1959], 136) o, de otra forma, requiere someterse a una “vigilancia epistemológica” permanente (Bourdieu 2008 [1984], 28) que supone un trabajo no sólo sobre el objeto de estudio sino también sobre el propio *sujeto* de conocimiento.

Además de *explicitar* los criterios implícitos de la experiencia cotidiana para impedir que se introduzcan subrepticamente en la actividad científica, controlar significa también *desnaturalizar* tanto la propia actividad científica como los productos de dicha actividad. Entender la ciencia como una práctica social requiere “descenderla” al reino de este mundo y situarla en relación con otras prácticas sociales, atravesada por condicionantes económicos, políticos, culturales, etc. Desnaturalizar algo supone *situarlo* social e históricamente: no hay leyes naturales, eternas e inmutables, aplicables a la sociedad. Todo conocimiento –toda “ley” social– es fruto de un contexto histórico. No otro es el propósito de Bourdieu en su trabajo sobre el campo académico francés, titulado *Homo ac ademicus*: convertir el espacio en el que se lleva a cabo la investigación científica, el propósito mismo de objetivar el mundo y el propio sujeto de la investigación, en *objeto de la investigación*. Volviendo las herramientas de la investigación sobre la propia actividad científica el autor pretende “integrar todo aquello que no se puede saber a menos que uno lo sea y todo aquello que no se puede o no se quiere saber porque uno lo es” (Bourdieu 2008 [1984], 11).

De todo ello debemos concluir que no existe tal cosa como la neutralidad valorativa: “Ciencia es siempre ‘ciencia para’, en aras de objetivos práctico-políticos. Y siempre a partir de ‘un desde’” (Gómez 2009). La dimensión empírica y la dimensión valorativa constituyen condiciones determinantes de la práctica científica. La pretendida neutralidad –presentada como apoliticismo o empirismo– no es más que la voluntad de *naturalizar lo social*. Tras ella se esconde el interés de conservar el estado de cosas actual (justificado por medio de la descripción sin explicación, por el “saber por el saber mismo”) y, a su vez, de enmascarar la propia relación que mantiene el investigador con su objeto de estudio, pues –ahora con Bourdieu (2008 [1984], 26)– “toda toma de posición sobre el mundo social se ordena y se organiza a partir de una posición determinada en ese mundo, es decir, desde el punto de vista de la conservación y el

sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo” (Marx 1845). La ciencia crítica, juntamente con proveer explicaciones aporta las herramientas para superar las injusticias evidenciadas: es una guía para la acción revolucionaria. De ahí la vinculación necesaria entre ciencia verdadera y praxis política. Con todo, “la fuerza propulsora de la historia, incluso la de la religión, la filosofía, y toda otra teoría, no es la crítica, sino la revolución” (Marx y Engels 1974 [1846], 40). Y es en la práctica revolucionaria donde la ciencia debe demostrar su efectividad (o veracidad). Ése es el complemento *necesario* de la afirmación leninista: “Sin teoría revolucionaria tampoco puede haber movimiento revolucionario” (Lenin 2010 [1902], 40).

aumento del poder asociado a esa posición”. Reconociendo esto, de lo que se trata es de explicitar, formular y controlar “las aspiraciones éticas o políticas asociadas a los intereses sociales inherentes a una posición en el campo científico” (Bourdieu 2008 [1984], 28). Esto es, reconocer en la valoración de la práctica científica y de sus productos mismos la dimensión ética y política que contiene la producción de conocimiento científico; aspectos que no le restan científicidad a dicho conocimiento, sino que contribuyen a comprenderlo como una práctica históricamente situada y socialmente condicionada. Lo que es, y lo único que puede ser.

Tomando en consideración las premisas anteriores, en el siguiente apartado, exponemos el objeto de esta investigación, su propósito y el método seguido.

1.2 El qué, el porqué y el cómo de esta investigación

Esta investigación nace de la preocupación por comprender el modo como se han estudiado (o *construido* como objeto o sujeto de estudio) los movimientos sociales en Chile. Se centra, por lo tanto, en el proceso de construcción de conocimiento; aunque la revisión crítica de dicho proceso nos arroje también elementos de caracterización de las formas de protesta y de movilización comprendidas en el período de análisis, y aun de las condiciones políticas, económicas y culturales que las explican. Ya hemos señalado que el pensamiento de una época es reflejo del “estado de cosas” que hace posible dicho pensamiento, porque –recordemos– que los seres humanos que “desarrollan su propia producción material y su intercambio material cambian también, al cambiar esta realidad, su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia” (Marx y Engels 1974 [1846], 26). Así pues, el estado de conocimiento sobre una cuestión particular –en este caso, los procesos de protesta y lucha sociopolítica– da cuenta, *en parte* y sólo en parte (recordemos la autonomía relativa de la realidad), del estado de “desarrollo” de dicho objeto de estudio; y, a la vez, debe ser *explicado* por referencia a estructuras “externas” al ámbito científico-académico.

Con todo, y para evitar caer en un materialismo ramplón –desvirtuación de las tesis *marxianas*– que presupone que el mundo político e intelectual es una reacción mecánica a los cambios operados en la estructura económica, debemos considerar también que el propio *campo* académico⁹ guarda una *autonomía relativa* con respecto a los otros campos, es decir constituye una “estructura” objetiva cuyas dinámicas propias le permiten hasta cierto grado, explicarse *por sí mismo*. El grado de autonomía hace referencia a cómo y con qué intensidad los factores externos al campo académico, fundamentalmente los factores políticos, son incorporados y procesados, esto es, *traducidos*; de manera que su impacto en el quehacer académico nunca es directo, pues ello presupondría una dependencia absoluta. La dialéctica autonomía/dependencia

⁹ Recurrimos aquí a la noción de “campo” elaborada por Bourdieu, que enfrenta precisamente el sustancialismo presente en algunos análisis que consideran que las prácticas sociales de los actores se derivan mecánicamente de las posiciones sociales que dichos actores ocupan en la estructura social. Sobre el concepto de “campo”, véase Bourdieu (2002); y un examen sobre el “campo académico” francés, en Bourdieu (2008 [1984]).

permite explicar de qué manera se conjugan los elementos internos y externos al campo, para forjar una determinada organización y producción de conocimiento:

El grado de autonomía de un campo, en consecuencia, tiene como indicador principal su poder de refracción, de traducción. A la inversa, la heteronomía de un campo se manifiesta esencialmente en el hecho de que los problemas exteriores, en especial los políticos, se expresan directamente en él (Bourdieu 2000b, 76).

Para llevar a cabo esta investigación nos serviremos del concepto *bourdiano* de “campo”; sin embargo, no realizaremos un examen exhaustivo sobre el campo académico chileno, ni siquiera sobre el campo de las ciencias sociales. Como ya hemos señalado, nos interesa una producción científica particular: aquella que se refiere a los movimientos sociales como una línea específica de investigación. No se trata entonces de un análisis del campo académico, sino de la producción académica sobre un fenómeno particular, para lo cual presuponemos la existencia del campo académico (y, por lo indicado en el primer apartado, la vinculación de éste con el político). Para ello, consideraremos algunos aspectos institucionales y algunas obras específicas sobre movimientos sociales, y no el conjunto de la producción de un autor. Bourdieu (2000a, 149) señala que:

La teoría del campo conduce efectivamente a rechazar tanto la puesta en relación directa de la biografía individual y la obra (o de la “clase social” de origen y de la obra) como el análisis interno de una obra singular o aun el análisis intertextual, es decir la puesta en relación de un conjunto de obras. Porque es necesario hacer todo esto junto.

Eso es lo que pretendemos: analizar la producción teórica sobre movimientos sociales en relación con la trayectoria académica de los investigadores considerados, su ubicación institucional, su vinculación con la esfera política y la estructura conceptual para la comprensión de la acción colectiva construida y desarrollada en un número – significativo cuantitativa y cualitativamente– de obras.

La noción de campo nos servirá, asimismo, para no perder de vista que en el ámbito académico se lleva a cabo una *disputa*. Para Bourdieu, aquél es, como todo campo, “el lugar de una lucha por determinar las condiciones y los criterios de la pertenencia y de la jerarquía legítimas” (2008 [1984], 23). Uno de los elementos centrales de la batalla que tiene lugar de manera sublimada en ese campo –aunque también se desarrolla en otros– son precisamente los sistemas de clasificación, y “las formas de clasificación son formas de dominación” (Bourdieu 2000a, 35), por lo que la sociología del conocimiento es una sociología política o tiene implicaciones políticas. Dicho de otra manera: “La lucha teórica es una lucha política y en ella la guerra por la palabra es fundamental” (Roitman 2007, 14). Lo que nos interesa manifestar es que el interés por la construcción de conocimiento no es una cuestión baladí ni un afán de erudición. La epistemología –en cuanto historicidad de los fundamentos de la ciencia– permite comprender las condiciones sociales de la producción de conocimiento, y “la sociología de la sociología es una dimensión fundamental de la epistemología sociológica” (Bourdieu y Wacquant 2005, 113), requisito fundamental de una

sociología rigurosa. Por ello “la resistencia política [...] necesita tener como postulado la resistencia epistemológica” (Santos 2009, 179).

Nomen est nomen, afirma el proverbio latino: nombrar es conocer. Y nombrar supone indefectiblemente seleccionar y clasificar, sin que la clasificación deba adoptar necesariamente la forma de una dicotomía, que implica un grado de simplificación no siempre acorde con la complejidad de los fenómenos sociales.¹⁰ Siguiendo el método adoptado por Marx en la crítica de la economía política, el proceso de conocimiento involucra procesos de abstracción y de síntesis, a través de los cuales se construyen categorías simples y complejas, cuya correcta articulación permite arribar a la comprensión de una realidad *concreta*, esto es, “la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento” (Marx 2007, 21). No obstante, la composición de un todo (del pensamiento) por la articulación de sus partes, a través del “método que consiste en elevarse de lo abstracto a lo concreto” (Marx 2007, 22) siempre es un producto distinto del proceso de formación del concreto mismo y, en última instancia, “la totalidad de lo real no se reduce a la suma de las partes” (Santos 2009, 33). Conocer no es abarcar y representar *el conjunto* de la realidad; por otra parte, el sujeto cognoscente y la propia sociedad constituyen una entidad material *externa* al producto del conocimiento, con lo cual existe un desfase espacial y temporal que imposibilita cualquier saber de la *completitud* (Osorio 2001). Por ello, en el proceso de analizar un determinado objeto de estudio, lo “diseccionamos” en distintas partes y le atribuimos un orden de importancia (o de interrelación) a cada una de ellas, de acuerdo con la interpretación que sostenemos del fenómeno en cuestión, elaborando categorizaciones y jerarquías.

El análisis científico, como forma de conocer –no única, ni necesariamente mejor, por cierto–, supone la descomposición y la reunión jerarquizada de las partes, para transformar intuiciones y representaciones en *conceptos*. Los conceptos se construyen seleccionando determinadas características de una realidad que –a primera vista– se presenta como compleja y caótica, y colocándoles una etiqueta para discernir sus rasgos específicos. Y la articulación de esos conceptos y categorías configura un *marco* teórico que encuadra nuestra mirada sobre la realidad, destacando unos elementos e invisibilizando o desdibujando otros. La metáfora de las anteojeras es acertada, en la medida en que la teoría funciona como una herramienta que dirige la mirada hacia ciertos aspectos de la realidad y oculta otros. De todas formas, los procesos de construcción de *marcos*¹¹, en el sentido de estructuras de percepción y organización de la experiencia, no son propiamente un aparejo de quita y pon, sino que configuran sedimentos culturales (y mentales) de los cuales no resulta sencillo

¹⁰ En efecto, la preponderancia del pensamiento binario o dicotómico constituye una característica destacada del paradigma dominante de la ciencia moderna que, a juicio de Boaventura de Sousa Santos (2009), entró en crisis.

¹¹ El análisis de los marcos es un enfoque teórico que procede del ámbito de la comunicación pero que se ha aplicado y desarrollado en el examen de los movimientos sociales para determinar de qué manera las personas encuadran y dotan de sentido su experiencia. Un marco “es una estructura general, estandarizada y predefinida (en el sentido de que ya pertenece al conocimiento del mundo del receptor) que permite el reconocimiento del mundo y orienta la percepción [...] permitiéndole construir expectativas definidas acerca de lo que va a suceder, es decir, dando sentido a su realidad” (Donati 1992, 141-142, traducción propia).

desprenderse. De ahí que Marx considerara que “el pícaro, el sinvergüenza, el pordiosero, el parado, el hombre de trabajo hambriento, miserable y delincuente son *figuras* que no existen para ella [la Economía Política], sino solamente para *otros ojos*; [...] son fantasmas que quedan fuera de su reino” (1999, 124, cursivas nuestras).

Elaborar teorías supone, pues, construir una *mirada*, una visión determinada del mundo. En la práctica científica se contraponen distintas visiones. Para Bourdieu, a medida que el campo académico se va autonomizando de los otros campos, la batalla que tiene lugar en su seno depende mayormente de criterios específicos, derivados directamente del “capital de autoridad científica o de notoriedad intelectual” (Bourdieu 2008 [1984], 71), y no del capital económico y político, que obedece a la posición del investigador en esos otros campos. A su juicio, estos dos principios de jerarquización dentro del campo académico son antagónicos, pero siempre coexistentes. Por lo tanto, a la hora de producir y hacer valer una concepción del mundo, los académicos echan mano de sus respectivos capitales. Determinar el peso relativo de cada uno de ellos forma parte del análisis del campo:

Cuanto más heterónomos son los campos, mayor es el desfase entre la estructura de la distribución en el campo de los poderes no específicos (políticos), por una parte, y la estructura de la distribución de los poderes específicos: el reconocimiento, el prestigio científico, por la otra (Bourdieu 2000b, 95).

Sin embargo, en virtud de esta inexcusable imbricación, “los conflictos intelectuales también son siempre, desde cierto punto de vista, conflictos de poder” (Bourdieu 2000b, 94).

Esta disputa es, entonces, una “lucha simbólica por la producción del sentido común o, más precisamente, por el monopolio de la nominación legítima” (Bourdieu 2000a, 138). Los académicos tratan:

[...] de cambiar las categorías de percepción y de apreciación del mundo social, las estructuras cognitivas y evaluativas: las categorías de percepción, los sistemas de clasificación, es decir, en lo esencial, las palabras, los nombres que construyen la realidad social tanto como la expresan, son la apuesta por excelencia de la lucha política, lucha por la imposición del principio de visión y de división legítimo, es decir por el ejercicio legítimo del efecto de teoría (Bourdieu 2000a, 137).

Las teorías funcionan como una estrategia de encuadre que, emanando de la realidad, contribuyen a su construcción, *en la medida en que* la realidad no permanece como un conjunto de datos externos a los actores sociales, sino que constituye una trama con sentido, de significados y de valores. La ciencia social no trata sólo sobre el *ser* de las cosas (ontología) sino también acerca de su *deber ser* (ética). Y en ese sentido orienta acciones, justifica o descarta luchas, legitima o censura actores. Por eso resulta importante señalar que:

La legitimación del orden social no es el producto, como algunos creen, de una acción deliberadamente orientada de propaganda o de imposición simbólica; resulta del hecho de que los agentes aplican a las estructuras objetivas del

mundo social estructuras de percepción y de apreciación que salen de esas estructuras objetivas y tienden por eso mismo a percibir el mundo como evidente (Bourdieu 2000a, 138).

La evidencia –naturalización– de ciertas realidades conforma el *sentido común* de una determinada época. De ahí que una de las grandes victorias de una particular visión del mundo sea simbólica y cultural, esto es, que se identifique con un nuevo sentido común: “Todo el conocimiento científico busca constituirse en sentido común” (Santos 2009, 54).

Lo anterior fue trabajado, entre otros, por Antonio Gramsci, para quien:

La historia de la filosofía [...] es la historia de las tentativas y de las iniciativas ideológicas de una determinada clase de personas para cambiar, corregir, perfeccionar las concepciones del mundo existentes en cada época determinada y por lo tanto para cambiar las correspondientes y relativas normas de conducta, o sea para cambiar la actividad práctica en su conjunto (Gramsci 1975a, 150).

Unidad, por lo tanto, de teoría y acción, expresada en la filosofía de la praxis. El marxista italiano otorgó una gran importancia a la *batalla de ideas*, como pone de manifiesto el concepto de “hegemonía cultural”, que se refiere al liderazgo intelectual y moral ejercido por una clase social. De ahí el papel central que Gramsci reservó a los intelectuales, concretamente al “intelectual orgánico del proletariado”, pues la transformación de clase subalterna en clase dirigente pasa necesariamente –a su juicio– por la elaboración de una concepción del mundo *propia* y por la *penetración* de dichas verdades y valores en otros grupos sociales, proceso constitutivo del proyecto revolucionario. Para elaborar esa nueva visión es necesario considerar que:

La concepción dualista y de la “objetividad del mundo” tal cual fue arraigada en el pueblo por las religiones y las filosofías tradicionales convertidas en “sentido común”, no puede ser desarraigada y sustituida más que por una nueva concepción que se presente íntimamente fundida con un programa político y una concepción de la historia que el pueblo reconozca como expresión de sus necesidades vitales (Gramsci 1975a, 182).

Para llevar a cabo ese proceso la actividad filosófica debería ser entendida como una “lucha cultural para transformar la ‘mentalidad’ popular y difundir las innovaciones filosóficas que demostrarán ser ‘históricamente verdaderas’ en la medida en que se vuelvan concretamente, o sea históricamente, universales” (Gramsci 1975a, 209). Es decir, en cuanto configuren un nuevo sentido común.

Como todo sentido común es un producto histórico, de lo que se trata es de superarlo a partir de la crítica:

He ahí por qué debe hacerse resaltar cómo el desarrollo político del concepto de hegemonía representa un gran progreso filosófico además de político-práctico, porque necesariamente implica y supone una unidad intelectual y una ética correspondiente a una concepción de lo real que ha superado el sentido común y se ha convertido aunque dentro de límites todavía restringidos, en crítica (Gramsci 1975b, 253).

Así, pues, la crítica es el primer paso en la construcción de una nueva concepción del mundo. Frecuentemente las distintas teorías emergen y se desarrollan como una reacción contra los enfoques predominantes en el propio contexto científico en el que surgen. Señalando las deficiencias y/o insuficiencias de esas aproximaciones para explicar y comprender la razón de ser y el funcionamiento de un determinado fenómeno es como se justifican y fundamentan las innovaciones científicas. Marx, con la perspicacia que le caracterizaba, definió así su labor teórica:

Pero, si construir el futuro y asentar todo definitivamente no es nuestro asunto, es más claro aun lo que, al presente, debemos llevar a cabo: me refiero a la crítica despiadada de todo lo existente, despiadada tanto en el sentido de no temer las consecuencias de la misma y de no temerle al conflicto con aquellos que detentan el poder (Marx 1843).

A su vez, Gramsci, consideraba que:

Los modos de vida parecen a quien los vive absolutos, “como naturales”, como suele decirse, y que es ya una cosa grandísima el mostrar su “historicidad”, el demostrar que están justificados en cuanto existen ciertas condiciones, pero cambiadas éstas no están ya justificados, sino que son “irracionales” (Gramsci 1975c, 154-155).

Por eso “el hecho de que un modo de vivir, de pensar, de vivir y actuar, se haya vuelto *irracional* en algún lugar tiene una importancia grandísima” (Gramsci 1975c, 155, cursivas nuestras). La construcción de una ciencia desde y para los explotados, oprimidos y excluidos del modo de vida capitalista debe tomar en cuenta, pues, las expresiones de *irracionalidad* que ponen de manifiesto ciertos sectores sociales (esto es, el hecho de que ciertos aspectos de ese modo de vida aparezcan para esos sectores como irracionales) porque en ellas reside el germen de una nueva concepción del mundo que permite evidenciar, de un lado, el carácter histórico (y por lo tanto, finito, contra toda pretensión de poner “fin a la historia”) del modo de vida actual, esto es, su desnaturalización; y de otro, los elementos (razones y valores) que pueden conformar una nueva cosmovisión.

Socializar el sentido común, hacerlo no evidente, esto es, mostrar que la percepción del mundo no es algo “natural”, contribuye a su vez a poner de manifiesto que su naturalización “cuando se reconoce en ciertas posiciones sociales, entre los dominados en particular, representa la forma más radical de aceptación del mundo, la forma más absoluta de conservadurismo” (Bourdieu y Wacquant 2005, 120). Bajo este prisma no es tan diferente la mentalidad del esclavo y la mentalidad del esclavista; ambas participan de la naturalización de la estructura y las prácticas de la esclavitud. A su vez, “no hay manera más completa de encontrar condiciones naturales de existencia que sean chocantes para alguien socializado bajo otras condiciones y que no las capta por medio de las categorías de percepción modeladas por ese mundo” (Bourdieu y Wacquant 2005, 120-121).

Ciertamente, los movimientos sociales (que en la historia han emergido principalmente para transformar o reformar los sistemas vigentes), se sustentan en gran

medida en la crítica¹² de la concepción del mundo existente y en la construcción de una nueva, por medio de los procesos de “enmarcado”, a los que ya nos hemos referido brevemente; en la conformación germinal de nuevas organizaciones y normas sociales, aspecto que enfatizó la perspectiva interaccionista del estudio del comportamiento colectivo (Laraña 1999, 50-54); y en la construcción de una identidad colectiva, como pone de manifiesto el enfoque “europeo” de los movimientos sociales. Todas estas teorías suponen una aproximación constructivista a los fenómenos de acción colectiva que destaca la necesidad de transformar “una situación que era considerada como una *desgracia*, sin ninguna implicación moral, [...] en una *injusticia*, que entraña una cuestión moral (Laraña 1999, 54). Es decir, en socializar lo que había sido naturalizado en el pensamiento. Por ello, varios autores (Rauber 2013, 9 y 39, Zibechi 2008, 20 y 126) han puesto de relieve que los movimientos sociales no sólo anuncian un nuevo mundo, sino que constituyen la semilla de ese otro *nuevo mundo* –que en buena medida significa una nueva manera de *comprender y aprehender* el mundo. La hegemonía cultural requiere no sólo construir una imagen del nuevo mundo, sino sostener la factibilidad del mismo, esto es hacer creíble que es realizable aquí y ahora: de ahí la convicción de que “otro mundo *es posible*”.¹³ Así, el anuncio del nuevo mundo comienza por el *testimonio*, es decir, hay que vivirlo.

En lo que respecta al examen de los movimientos sociales en Chile –como en todas partes–, nos encontremos con perspectivas epistemológicas muy diversas y con construcciones teóricas que enfatizan unos aspectos y soslayan otros. Todas ellas involucran una dimensión ética o normativa y la pretensión de verdad. Explicitar las diferencias y determinar a qué se deben es el objetivo fundamental de esta investigación.

En síntesis, el conocimiento no es nunca, ni cuando lo pretende, una actividad independiente de las condiciones sociales que lo hacen posible, y de las posiciones que ocupan en la estructura social quienes lo producen. Tampoco es, como hemos visto, una acción mecánica determinada por la posición social. De ahí que sea necesario comprender la producción del saber científico como una *acción compleja y relacional* en la que se encuentran involucrados diversos actores que pugnan por hacer valer sus puntos de vista y reproducir su capital simbólico al interior del campo (aunque, en ocasiones, algunos actores puedan pretender transformar el campo, es decir, las propias “reglas de juego”): “El universo del que ella [la ciencia social] debe dar cuenta es el objeto, y al menos por una parte el producto, de representaciones en competición, a veces antagónicas, que aspiraran todas a la verdad y, por eso mismo, a la existencia” (Bourdieu 2008 [1984], 26). Por ende, el conocimiento tiene siempre usos políticos, que, por cierto, no siempre dependen de quienes lo produjeron.

¹² La crítica contiene, al menos implícitamente, los elementos de construcción de una nueva visión, pues en lo que se niega existe, aunque sea embrionariamente y como reverso, lo que se afirma.

¹³ A su vez, la demarcación de lo que es o no posible constituye una de las operaciones fundamentales de la hegemonía cultural. Si la política es definida como el “arte de lo posible” se convierte en administración de lo dado, y excluye la búsqueda y realización de alternativas; para que esto último sea posible la política debe “dar cuenta de las posibilidades abiertas para hacer posible lo imposible, y para realizarlo” (Hinkelammert 1995, 186).

Ése es nuestro punto de partida. El conocimiento científico no es una verdad a-histórica ni un conjunto de proposiciones absolutamente relativas a la perspectiva de quien las formula, más bien, esa perspectiva es la síntesis de múltiples determinaciones (biográficas, históricas, políticas, económicas, etc.). La noción de autonomía relativa (del campo académico) permite “salir de la alternativa de la ‘ciencia pura’, totalmente liberada de cualquier necesidad social, y la ‘ciencia servil’, sometida a todas las exigencias político-económicas” (Bourdieu 2000b, 75). La ciencia constituye una práctica social involucrada en un “juego” de relaciones con otras prácticas sociales. Por lo tanto, aquello que se presenta como conocimiento científico en cada época está condicionado por las propias circunstancias históricas así como por la lógica específica de la actividad científica, que también es histórica. La posición que ocupa el investigador dentro del campo científico, y en relación con otros campos, tiene un peso concreto en su producción académica. En el caso que nos ocupa, sostenemos que la concepción de lo que son los movimientos sociales y de qué expresiones concretas de la realidad chilena encajan en esa categoría está en relación directa con el modelo de transición (de la dictadura a la democracia) fraguado en la década de los ochenta y con el prototipo de sociedad (posdictatorial) que los distintos investigadores defienden. Nos interesa develar, entonces, las condiciones de producción del conocimiento científico sobre los movimientos sociales: ¿Qué agentes –y en qué instituciones– teorizaron sobre los movimientos sociales? ¿Qué presupuestos ontológicos, epistemológicos y éticos subyacen a esa producción teórica? ¿Cómo se relacionan los distintos resultados de las investigaciones? Y también, muy especialmente, ¿qué vinculación existe entre una específica construcción teórica de los movimientos sociales y la defensa de determinados proyectos políticos y sociales?

1.3 La construcción teórica de los movimientos sociales en Chile

El interés académico por los movimientos sociales ha experimentado altibajos, desde la década de los ochenta, en la que florecieron debates y trabajos centrados en las características de las protestas y movilizaciones sociales contra la Dictadura, pasando por la *larga dé cada* de los noventa, caracterizada superficialmente por la desmovilización social y la apatía política (el “no estar ni ahí” de los jóvenes)¹⁴, hasta la actualidad, específicamente desde 2006 y más recientemente, a partir de 2011, con las movilizaciones estudiantiles. Consideramos que el hecho de que los movimientos sociales hayan recibido mayor o menor atención se debe, en primer lugar, a los acontecimientos históricos que tuvieron lugar a lo largo de estas tres décadas, es decir, a la propia ocurrencia o no de “grandes” expresiones de protesta y de movilización social, cuya irrupción en el espacio público provocó una reacción de distintos actores sociales, y entre ellos, de los académicos. La teoría va inevitablemente a la zaga de los hechos históricos, aunque tenga la pretensión de predecirlos. Así, las veintidós jornadas de protesta que se sucedieron entre 1983 y 1986, cuya masividad y cuya radicalidad no

¹⁴ Expresión chilena que se convirtió en el leitmotiv de los estudios sobre juventud en los años noventa, que presenta una imagen estereotipada de los jóvenes como absolutamente desafectos de la política (institucional).

dejaron indiferente a nadie –aunque fueron vistas con sorpresa– obligaron a los científicos sociales a ocuparse del estatuto teórico de dicho fenómeno: ¿Existen movimientos sociales en Chile?, se preguntaron algunos sociólogos (Campero 1986). De la misma forma, las multitudinarias marchas de los estudiantes durante el año 2011 tampoco pasaron desapercibidas y han sido leídas como el retorno de los movimientos sociales, con mayúsculas: se ha considerado al movimiento estudiantil el “principal movimiento social que ha conocido el Chile de los últimos cuarenta años” (Mayol 2012, 20) o el “más significativo de los últimos veinte años de la historia chilena” (Garcés 2012, 137). Sin embargo, la visibilidad de las acciones colectivas no es razón suficiente para explicar la presencia o la ausencia de estudios sobre ellas, y tampoco las características de esa producción. Si bien es cierto que las jornadas nacionales de protesta inspiraron un cúmulo de trabajos sobre los movimientos sociales, la conclusión de la sociología que hegemonizó esa reflexión fue que no existían movimientos sociales en Chile. Empero, el debate académico sobre la cuestión convocó otras miradas, que argumentaron en sentido contrario, aunque no lograron imponerse –al menos en el corto plazo– en el contexto académico. ¿Cómo explicar interpretaciones radicalmente opuestas sobre un mismo fenómeno? Ésa fue la pregunta inicial de esta investigación, en qué factores descansa la diversidad de explicaciones, en ocasiones complementarias pero frecuentemente antagónicas, sobre realidades tan concretas como las jornadas de protesta nacional y las prácticas de los pobladores en Chile. La constatación de esa pluralidad de miradas y su descripción, lejos de satisfacernos, nos agudizó la inquietud, porque “no es posible quedarse satisfecho con un modelo explicatorio que no sea capaz de diferenciar a aquellas personas –mejor dicho, posiciones– que la intuición ordinaria acerca del universo específico nos dice que son diferentes” (Bourdieu y Wacquant 2005, 164).

De ahí que sea preciso, tratar de descubrir “las determinaciones invisibles inherentes a la postura intelectual en sí misma” (Bourdieu y Wacquant 2005, 115). Junto con la inevitable influencia que los acontecimientos históricos ejercen sobre las teorías sociales, resulta imprescindible tomar en consideración las propias condiciones históricas que influyen sobre las miradas académicas: a) las dinámicas internas de la construcción de las ciencias sociales y de la producción de conocimiento en el marco de una estructura determinada; b) la propia adopción de un específico paradigma teórico-metodológico y las determinaciones consideradas en el concepto de movimiento social; y c) la importancia atribuida a la protesta y la movilización para la realización de proyectos políticos más amplios. A lo largo de este trabajo prestaremos atención a estas tres dimensiones involucradas en la explicación de cuándo y de qué manera se han examinado los movimientos sociales en Chile. Especificamos aquí, brevemente, cada una de ellas; las desarrollaremos ampliamente en los capítulos que siguen.

1.3.1 El campo académico chileno

La teoría de los campos nos advierte de que “la lógica que desempeña el análisis científico trasciende largamente las intenciones y las voluntades individuales o colectivas (el complot) de los agentes más lúcidos o los más poderosos, aquellos a los que la búsqueda de ‘responsables’ señala” (Bourdieu 2008 [1984], 15). Por eso ninguna

interpretación científica sobre los movimientos sociales –por ejemplo la de negar su existencia– puede ser evaluada en términos exclusivamente de “traición”, porque ésta no es una explicación propiamente sociológica. En nuestro análisis sobre la producción científica acerca de los movimientos sociales, debemos partir considerando las características del campo académico.

El campo académico chileno sufrió un *golpe* brutal el 11 de septiembre de 1973. Algunas universidades fueron consideradas “un nido de extremistas” (G. Gómez 1977) y concretamente las ciencias sociales, cuya institucionalización databa de fechas recientes, fueron estigmatizadas como productoras de “extremistas de ultraizquierda” (Pinochet 1979, 95). La sociología había expresado, de manera más notoria, un fuerte compromiso con el proceso de cambio que experimentaba el país, y los sociólogos entendían su labor científica como parte de la construcción de la transición del capitalismo al socialismo. La ciencia social se había convertido, en el mejor de los sentidos, en una filosofía de la praxis que orientaba la acción transformadora de la realidad. El compromiso asumido por los científicos sociales y la radicalidad de su empresa (que proveía esa otra concepción del mundo que todos los proyectos emancipadores requieren, a la vez que develaba el carácter mistificador de las apariencias y la condición conservadora de las teorías funcionalistas) hizo que fueran identificados por la Dictadura, desde el primer instante, como *enemigos*.

Desde el momento mismo del golpe militar se inició un proceso de intervención en las universidades que cercenó la práctica científica, eliminando casi por completo la autonomía del campo académico: se nombraron rectores delegados (militares jubilados o en servicio), se cerraron centros académicos, se eliminaron carreras, se depuraron planes de estudio, se persiguió, exoneró, exilió, torturó, desapareció y asesinó a profesores, a estudiantes y a personal no docente, bajo el pretexto de que su permanencia podía “significar peligro para el orden y seguridad interna [...] que puede incidir en la seguridad nacional” (G. Gómez 1977) en atención a la afinidad expresada por los afectados “para con dicha ideología” (ídem.), esto es, con el marxismo. Cabe señalar que, con anterioridad al golpe, si bien el campo académico gozaba de mayor autonomía respecto del campo político, estaba fuertemente jalonado por el impacto que los acontecimientos y las disputas políticas tenían en su interior; de hecho, el proceso de reforma universitaria que estalló en 1967 es la expresión paradigmática de lo anterior. La consecuencia de esa débil autonomía es, junto con la intervención militar, la re-traducción de ese dramático acontecimiento que se expresará en la propia autocrítica que realizarán inmediatamente algunos académicos respecto de sus prácticas científicas y de su “sometimiento” a proyectos partidistas.

Esa persecución de la ciencia social y, particularmente, del pensamiento crítico provocó el desplazamiento de la investigación social desde las universidades a un conjunto de centros académicos independientes (del gobierno y de la estructura universitaria) creados algunos de ellos al amparo de la Iglesia, y con el apoyo financiero de fundaciones extranjeras. Así, el campo académico que nos interesa no está conformado por las instituciones universitarias formales sino por este amplio abanico de organizaciones, de distinta índole, pero en los que se re-articuló una comunidad de científicos sociales preocupados por la transición, en este caso de la dictadura a la

democracia. Es en este contexto en el que nace en Chile la investigación sobre movimientos sociales, en la década de los ochenta. De manera predominante en los siguientes centros: SUR, ECO y FLACSO-Chile.

En la posdictadura la red de instituciones académicas y de investigadores vinculados a ciertos problemas científicos se trastocó nuevamente. La paulatina apertura de la infraestructura universitaria (así como su extensión), dio inicio al trasvase paulatino, y no exento de dificultades, de la práctica científica en ciencias sociales desde los centros académicos independientes hacia las universidades. Y se abrió espacio – todavía muy acotado– en la estructura formal de educación superior para el retorno de los académicos exiliados y/o expulsados de las universidades tradicionales.

Estas transformaciones del espacio en el que se produce la investigación sobre movimientos sociales no pueden no ser relevantes con respecto a las características que ésta adopta. Si en general el campo académico constituye una estructura objetiva que influye en la construcción de saber científico (privilegiando enfoques, jerarquizando problemas, seleccionando prácticas, etc.), en este caso, las profundas intervenciones externas que sufrieron las universidades e instituciones de educación superior bajo la Dictadura, que determinaron incluso la emergencia de un campo académico “autónomo”, fuera del control del gobierno, y paralelo o con muy pocos vínculos con el campo académico “formal”, dan lugar a una configuración particular de la producción científica. Que el campo emergente haya sido definido como “independiente” no significa que no hayan existido relaciones económicas y políticas que lo delimitaban. De hecho, resulta significativa la estrecha vinculación con partidos políticos de la oposición, aun en situación de clandestinidad, así como la dependencia financiera de instituciones extranjeras “interesadas” en apoyar la lucha contra la Dictadura, a su vez, vinculadas a partidos y colectividades políticas de Estados Unidos y Europa, fundamentalmente socialdemócratas o demócrata-cristinas.¹⁵ Por eso no sería correcto decir que la autonomía respecto de los partidos políticos fue mayor que en décadas pasadas, como podrán de manifiesto los enfoques sobre los movimientos sociales, que refuerzan una transición a la democracia sustentada fundamentalmente en la negociación y en las élites políticas o, por el contrario, en la movilización social y en la autoorganización popular. Cada proyecto suponía privilegiar actores y alternativas políticas. De hecho, la desaparición misma de la esfera político-partidaria, durante la Dictadura, hizo que el campo académico-intelectual se convirtiera en el espacio privilegiado de la confrontación de orientaciones y proyectos políticos. Por lo mismo, después de un lapso de cuestionamiento interno, tras el golpe de Estado, podemos decir que no fue menos *comprometida* la sociología de los ochenta que la de los sesenta y setenta.¹⁶ Con todo, una estructura mayormente diversificada y descentralizada, y el

¹⁵ Precisamente fruto de la ilegalización de los partidos políticos, la investigación y reflexión en ciencias sociales *blanqueaba*, de alguna forma, discusión política y la confrontación de alternativas y proyectos de sociedad.

¹⁶ Como frecuentemente sucede, resulta difícil establecer periodizaciones para delimitar *procesos* sociales. Aun así, respecto de las transformaciones que sufrió el campo académico y específicamente las ciencias sociales nos parece importante delimitar tres periodos: una primera fase, de “auténtico” desconcierto, que deriva del impacto del golpe militar y de la desarticulación de la institucionalidad académica vigente a manos de los militares y que se traduce en un periodo de sobrevivencia

relajamiento de las barreras de ingreso, es decir, de los requisitos que toda persona debe cumplir para ser considerada un agente legítimo dentro del campo, contribuyeron a subrayar ciertas problemáticas, como la de los movimientos sociales, y a combinar perspectivas disciplinarias y teórico-metodológicas diversas en una orientación tendencialmente interdisciplinaria.

A su vez, la posterior desarticulación de los centros académicos independientes y la “reunificación” del campo académico también ha sido un proceso complejo, en donde la autonomía parece ser muy deficitaria, todavía hasta la actualidad, tanto respecto del poder político, como sobre todo del poder económico, toda vez que el *campo* universitario se confunde con el *mercado* universitario (Brunner 2007). La unificación institucional y la mayor centralización que presenta la estructura del campo, se ha visto relajada solamente por las facultades que confieren la exaltación y la práctica exacerbada de la libertad económica, dando lugar a la proliferación de instituciones de enseñanza privadas o subvencionadas, lo cual no ha redundado en la apertura teórico-metodológica ni en la confrontación de “visiones del mundo”, sino en la sumisión a los dictados del “libre mercado” y en la persecución del lucro. En ese sentido, desde el punto de vista de la construcción de conocimiento, se ha configurado un campo rígido, excluyente y cerrado.

Por todo ello nos parece necesario dar cuenta de las modificaciones en el campo académico aludidas: del proceso de desarticulación-bifurcación-reunificación de la comunidad académica y de la lógica que ha caracterizado en cada caso a la actividad científica. De las características del campo, y especialmente de los factores que determinan la combinación entre rasgos autónomos –predominio de los principios específicos– y rasgos heterónomos –preponderancia de principios no específicos–, dependerán en buena parte las características que presente la producción sobre movimientos sociales: el tipo de investigaciones, los enfoques predominantes, las dimensiones atañidas y el valor otorgado a los propios resultados científicos y a los fenómenos que constituyen el objeto de estudio.

profesional y personal de los científicos sociales y de fuerte cuestionamiento y renuncia a su identidad, o a la identidad que construyen de sí mismos y de su quehacer con anterioridad al 11 de septiembre de 1973, y que se prolonga aproximadamente hasta 1979/1980; una segunda etapa, que abarca toda la década de los ochenta, que contempla, por un lado, el fortalecimiento y la ampliación de la red de centros académicos independientes que cobijan a los científicos sociales expulsados de las universidades, una suerte de academia alternativa en la que se produce, además, el fenómeno de *renovación* de las ciencias sociales (de la mano de la renovación socialista) que implica, después del cuestionamiento, definir los nuevos parámetros del rol del científico social, de los enfoques y prácticas académicas y de los proyectos de sociedad viables; y un tercer momento, que se inaugura con el retorno de la democracia y que se refiere al “ocaso” de los centros académicos independientes y a la difícil rearticulación universitaria y, a la vez, a la tecnificación de las ciencias sociales que supone una pérdida de su dimensión crítica y el acomodamiento al modelo político y económico heredado de la Dictadura.

1.3.2 *El enfoque teórico-metodológico*

Ya hemos señalado que la ciencia es siempre ciencia *desde* y ciencia *para*. O lo que es lo mismo, el saber científico es una construcción de verdad y de sentido *situada*. La elección de un determinado enfoque teórico-metodológico es, en gran parte, producto de una determinada posición del investigador en el campo,¹⁷ que hace coherentes los presupuestos ontológicos, epistémicos y éticos de dicho enfoque con su concepción de lo que es el mundo, lo que se puede conocer científicamente del mundo y lo que, a su juicio, debería ser, y que a la vez refuerza dicha concepción. En ello no hay determinismo, sino historicidad. Uno no piensa como quiere, sino como *puede*; y la posibilidad de pensar ciertas cosas o de determinada manera está condicionada por el contexto histórico y por las experiencias de vida del investigador. En ese sentido podemos decir que todo conocimiento es hijo de su época. A su vez, hemos indicado que el hecho de explicitar y *vigilar* de manera científica la propia actividad académica es quizás la única herramienta de que los científicos sociales disponen para *controlar* la validez de dicho conocimiento, evitando “transformar su sociología espontánea, esto es, su visión interesada del mundo social, en una sociología aparentemente científica” (Bourdieu y Wacquant 2005, 111). En el análisis estadístico una variable de control es aquella que se introduce con el fin de determinar si la relación inicial entre la variable dependiente –la que queremos explicar– y la(s) independiente(s) –la(s) que esgrimimos como causal(es)–, es verdadera, o bien se debe a una tercera variable con la que ambas se relacionan de manera velada. Así, controlar el proceso de investigación implica disminuir –cuanto más, mejor– el peso que en los resultados de la investigación pudieran tener variables derivadas más del capital social del investigador o de su posición en otros campos, y menos de los principios que la comunidad científica ha definido como específicos. Bourdieu lo expresa de la siguiente manera:

Tal vez sólo se pueda, efectivamente, hacer avanzar el conocimiento del campo científico a condición de servirse de la ciencia que se pueda tener para descubrir y superar los obstáculos que le implica a la ciencia el hecho de ocupar en ese campo una posición, y un posición determinada, y no, como ocurre en general, para reducir las *razones* de los adversarios a *causas*, intereses sociales (Bourdieu 2008 [1984], 28).

El enfoque –ya lo hemos apuntado– constituye una estructura conceptual que guía la percepción, la interpretación y la valoración de los fenómenos estudiados. En nuestra vida cotidiana, necesariamente los seres humanos funcionamos con estructuras cognitivas que nos permiten aprehender ciertos aspectos de una realidad que resulta inconmensurable, y actuar en ella. En el caso del conocimiento científico, el enfoque es una estructura –históricamente cambiante– consciente y razonada que orienta nuestra investigación sobre un problema particular. A propósito de esto, el sociólogo italiano Alberto Melucci ha indicado: “En lo que se refiere a los conceptos, uno nunca debería olvidar que no estamos abordando la ‘realidad’, sino más bien instrumentos o lentes a través de los cuales leemos la realidad”. Y agrega:

¹⁷ Definida por su capital científico, esto es, por su autoridad y el reconocimiento de sus pares.

Los cambios en la conceptualización y los cambios en nuestra comprensión del significado práctico-político de los fenómenos colectivos, están conectados por una relación circular. El círculo no es vicioso si los conceptos nos ayudan a ver más de los fenómenos a los que se aplican, a verlos de manera diferente. A la inversa, si estos fenómenos empíricos son filtrados e interpretados a través de los lentes conceptuales, ellos pueden ayudarnos a perfeccionar y mejorar la calidad de los propios lentes (Melucci 1996, 77, traducción propia).

De hecho, esto es tan notorio en el caso de los movimientos sociales que este campo de estudio solo pudo constituirse y autonomizarse de las teorías funcionalistas de la modernización y la desviación social y del marxismo estructuralista, en la medida en que fue cambiando la opinión sobre el papel y la relevancia que las formas de protesta y de movilización sociopolítica tienen en la democratización de las sociedades.

Los conceptos funcionan “como faros que iluminan lo que [el sociólogo] considera necesario analizar y dejan en la sombra lo secundario” (Laraña 1999, 17), esto es, lo que de acuerdo con un determinado enfoque resulta menos importante o irrelevante. Así podría pensarse que cada concepto pone de relieve una determinada dimensión del problema científico, lo cual puede resultar muy satisfactorio y podría contribuir a la adopción del pluralismo metodológico. Pero como los conceptos están integrados en una estructura objetiva –un enfoque, un marco– que ordena los distintos elementos y los jerarquiza, de acuerdo con determinados presupuestos acerca de cómo funciona la realidad, el hecho de subestimar ciertos aspectos y realzar otros, tiene efectos sobre las tesis generales de la teoría. De tal manera que incluir o suprimir en el análisis ciertas dimensiones tiñe de un particular “color” al conjunto de la estructura de pensamiento. Si alguien define el impacto que los movimientos sociales puedan tener sobre el sistema político como un elemento central de su desarrollo, la propia noción de movimiento social incorporará la dimensión de la visibilidad pública, y los aspectos que no tienen que ver con ese eje desaparecerán o serán relegados en el análisis; muy distinto es el caso si entendemos el movimiento social como una construcción colectiva dirigida a modificar las vidas de los que se sienten partícipes del mismo, por ejemplo. Por eso los conceptos pueden funcionar como cortapisas de una mejor o más profunda comprensión.

Muy a menudo los investigadores sobre movimientos sociales en Chile procedieron como el mítico posadero griego Procasto, que invitaba a los viajeros a acostarse en una cama y cortaba los pies de aquellos que sobresalían o, en el caso de que fueran más pequeños que el lecho, los descoyuntaba para estirarlos y hacerlos encajar en él. Así también, algunos sociólogos, deformaron la realidad para hacerla encajar en el concepto o bien cercenaron aquello que no cabía. En cualquier caso, el resultado de las operaciones anteriores es una insatisfactoria comprensión de la “realidad”. Aunque como bien señalamos más arriba, para darnos cuenta de esto, es necesario que haya ciertos grupos que no se sienten representados en la construcción teórica que sobre ellos se ha formulado, o que ciertos investigadores, desde otra *posición*, adviertan la misma contradicción entre la realidad concreta y el “concreto de pensamiento”. Esto es, que perciban la “irracionalidad” de una determinada construcción de la realidad.

El examen de los movimientos sociales ha ocupado, en Chile, un lugar destacado tanto en el programa de investigación de la sociología como en el de la historia social. Quizás, como sostiene el propio Bourdieu, esta separación disciplinaria sea artificial y absurda, “totalmente desprovista de justificación epistemológica: toda sociología debería ser histórica y toda historia sociológica” (Bourdieu y Wacquant 2005, 141). Sin embargo, la división existe y se refleja, quizás con mayor drasticidad en este caso, en construcciones teóricas radicalmente distintas acerca de los movimientos sociales.¹⁸ Es ésa la diferencia –a la que aludíamos más arriba– que nos interesa explicar. A su vez, esta distinción nos presenta diversos grados de complejidad, debido precisamente a la menor inclinación de los historiadores respecto de los sociólogos “a forjar conceptos, a construir modelos o a producir discursos teóricos o metateóricos más o menos pretenciosos, pudiendo enterrar bajo elegantes narraciones los compromisos que con frecuencia van de la mano de la discreción” (Bourdieu y Wacquant 2005, 141-142). Esto significa que en las producciones de los historiadores a menudo la construcción categorial es menos explícita que en los textos sociológicos. Como contrapartida –y a contrapelo de lo que señala la segunda parte de la cita anterior– los historiadores sociales particularmente son mucho menos escurridizos a la hora de explicitar su anclaje social, el punto de vista desde donde se aproximan al problema, y no apelan a la neutralidad valorativa como trinchera.

1.3.3 *Un proyecto político y societal*

En tercer lugar, debemos considerar que la comprensión sobre un fenómeno particular, como en este caso, las acciones colectivas y, concretamente, los movimientos sociales, no puede escindirse completamente de una visión más amplia sobre la organización de la sociedad y el cambio social, a la luz de la cual se define la relevancia de los mismos. Es decir, “a cada enfoque subyace una concepción más amplia de la sociedad en la que surgen los movimientos y de las formas de poder institucionalizado en ellas” (Laraña 1999, 18). Si creemos, como Marx y Engels, que una vez disuelta la comunidad, “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases” (1848) valoraremos muy positivamente la *lucha* económica, política y cultural de la clase obrera, por liberarse de un sistema deshumanizador, es decir, conferiremos un valor central en la explicación de los procesos sociales a la dimensión conflictiva y antagonista de los grupos involucrados. Y destacaremos la significación práctico-política de la *lucha* en relación con otras formas de acción sociopolítica. Por el contrario, si concebimos la transformación social como la sumatoria de pequeños cambios para mejorar ciertos aspectos de la realidad de manera que den respuesta a las necesidades insatisfechas de ciertos grupos sociales, valoraremos especialmente la acción conciliadora y negociadora de determinadas élites –o grupos de presión– para llegar a acuerdos. Estos dos polos de un continuum no significa que no pueda haber

¹⁸ Pero, además de la tendencia a la diferenciación, las disciplinas también habrían vivido en su desarrollo procesos de integración: “La dialéctica de las diferenciaciones e integraciones constituye la base de la construcción del conocimiento” (García 2006, 84). La necesidad de la investigación interdisciplinaria, que no consiste sólo en crear equipos multidisciplinarios, proviene de la definición de lo que el epistemólogo argentino Rolando García ha denominado “sistemas complejos”.

transformaciones revolucionarias que contribuyen a modificar radicalmente la sociedad, pero cada enfoque privilegia una concepción del cambio posible y deseable y orienta acciones políticas en tal dirección. Quiero decir, la dimensión ética de la ciencia implica que el investigador social tiene una concepción acerca de cómo debería ser el mundo y en función de eso le otorga un valor particular a su propia actividad científica y al objeto de ella. En el caso de los movimientos sociales, esta relación es tanto más notoria, por cuanto la acción colectiva se configura en la disputa con ciertos actores sociales para transformar uno o varios aspectos de la sociedad. De ahí que las proposiciones teóricas muchas veces asuman la forma de juicios normativos. Sólo en parte se puede escapar de este sesgo cognitivo, y es a costa de objetivar la propia ciencia social: “La mayoría de los discursos sobre el mundo social apuntan a decir no aquello que las realidades consideradas (el Estado, la religión, la escuela, etc.) *son*, sino lo que valen, si son buenas o malas” (Bourdieu y Wacquant 2005, 133).

En relación con esta dimensión resulta particularmente importante prestar atención a la conexión entre el campo académico y el campo político, y valorar la autonomía relativa del primero. Para ello, tomar en consideración las ligazones entre centros académicos y partidos políticos, y las posiciones que los académicos en cuestión mantienen en ambos campos es imprescindible. Ya hemos reseñado que el campo académico de los ochenta, aunque definido como “independiente” del gobierno, guardaba una gran cercanía con los partidos políticos de la oposición, proscritos durante la Dictadura, pero que sobrevivieron en la “clandestinidad” o en el exilio. La oposición partidaria a la Dictadura no constituye un todo homogéneo por más que la bandera de la democracia permitiera aunar muy diversas posiciones y voluntades políticas, y aunque la memoria oficial construida por la Concertación de Partidos por la Democracia, que fue el conglomerado de partidos que hegemonizó aquella bandera tras el triunfo electoral de 1989, haya construido esa imagen de unidad y de buena avenencia.

Un examen un tanto más exhaustivo de la oposición a la Dictadura, hace emerger inmediatamente múltiples disputas y una esencial, en su seno, acerca de las formas posibles de transición a la democracia y, en correspondencia con ello, de los actores legítimos y de las reivindicaciones pertinentes. La explicación y la valoración de los movimientos sociales se constituyeron en uno de los “escenarios” de la confrontación por cuanto se situaban en el centro de la posibilidad democratizadora de la sociedad. La *sociología transicional* –es decir aquella que investigó y normó la transición posible desde su punto de vista– relegó a los movimientos sociales a un segundo plano, por medio de una operación conceptual de escisión entre la democracia política (que implicaba el cambio de régimen político) y la democracia social, que requería modificaciones más profundas (del modelo socio-económico) que se postergaban y se condicionaban –en dicho modelo– a la consolidación democrática. Este tipo de transición privilegió necesariamente los acuerdos políticos y los pactos inter-élites y desplazó a un segundo lugar, subordinándolas a la estrategia de la negociación, a las movilizaciones sociales (denominación que se prefería, desde esta perspectiva, a la de movimientos sociales).

Algunos estudios ya han indagado la vinculación de los sociólogos (*transitólogos*) que construyeron este marco conceptual para comprender y producir la

transición, y negar la existencia de movimientos sociales, con los partidos políticos que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia, y que una vez en la posdictadura, comenzaron a asumir posiciones de gobierno. La literatura al respecto los define como *technopols*, porque combinan elevadas capacidades técnicas (y másteres y doctorados en el extranjero) con posiciones de liderazgo político y ejercicio directo del poder político. El predominio de los expertos contribuye a la *naturalización* de una forma política, al aparecer las decisiones políticas desprovistas de elementos subjetivos y de visiones del mundo en conflicto, y recubiertas de parafernalia técnica y científica, aparentemente objetiva, neutral y externa a los intereses de quien las defiende.

En la reflexión teórica sobre los movimientos sociales por parte de esta sociología es posible encontrar una de esas típicas estrategias de la construcción de la realidad social a las que alude Bourdieu: “Construir el futuro, por una predicción creadora destinada a delimitar el sentido, siempre abierto, del presente” (2000a, 137). Frente a las varias posibilidades que se presentaban en la lucha antidictatorial, la apuesta de un cierto sector por una salida negociada requería instituir la como la única factible prácticamente y, por tanto, la única real. Para ello la construcción científica sobredimensionó los elementos de irracionalidad, emotividad, explosividad, desorganización, violencia, ausencia de objetivos, de programa, etc. de las expresiones de protesta y de autoorganización de los sectores populares. Esto es, enfatizó la dimensión “destruccionista” del movimiento popular. Por el contrario, la práctica política de los partidos (que trabajaban por la negociación con el dictador y con la derecha política) era presentada como racional, instrumental, coherente, moderada, esto es, como constructiva, propositiva. La sociología contribuyó a construir un orden según el cual el pacto y la negociación son lo natural, lo prudente, lo deseable. La insubordinación de los movimientos que pugnaban por una transformación efectiva del modelo económico, político y social construido por la Dictadura, era presentada como utópica y peligrosa por estos sectores. La tarea de los movimientos sociales, y de los intelectuales que se reconocen parte de ellos, ha sido desde entonces extender el límite de lo políticamente posible, que comienza por lo *pensable*. Algo en lo que la historia social tiene mucho que decir.

La otra de las más típicas estrategias de construcción de la realidad social es aquella que “apunta a reconstruir retrospectivamente un pasado ajustado a las necesidades del presente” (Bourdieu 2000a, 137). Ésa ha sido también recurrentemente empleada por los sociólogos transitólogos, en las décadas más recientes, que necesitan continuamente reafirmar la idea de que la única salida posible a la Dictadura era aquella por la que se optó, y por lo tanto, revalidar su acción y su pensamiento para conservar su posición de dominio en el campo académico y en el campo político.

1.4 Sociología de la sociología y de la historiología

El trabajo que presento está situado en una triple frontera, en la intersección entre la sociología, la historiología y la epistemología. Pretende, como ya hemos indicado, evidenciar los presupuestos epistemológicos detrás de las *construcciones* sociológica e histórica de los movimientos sociales. A través de ese ejercicio buscamos contribuir al

conocimiento de los movimientos sociales y, primordialmente, de los sujetos que los teorizan, dando cuenta, según la feliz expresión de Bourdieu (2002, 11), de “las categorías de pensamiento impensadas que delimitan lo pensable y predeterminan lo pensado”. De acuerdo con este autor, el sociólogo “es el que trata de decir la verdad de las luchas donde se dirime –entre otras cosas– la verdad” (Bourdieu 2002, 17). Es en este sentido que denominamos nuestro quehacer como una sociología de la sociología y de la historiología.

Si bien no parto *ex nihilo*, no son muchos los trabajos que han incursionado por esta ruta. Con posterioridad al golpe de Estado se produjo una revisión –cáustica en muchos casos– de los presupuestos de las teorías sociológicas y de las “leyes” históricas aceptadas hasta entonces que, no sólo pretendía evidenciar el carácter “espurio” de tales interpretaciones sino que responsabilizaba a los intelectuales “de haber impulsado a los conflictos más allá de los cauces institucionales” (Lechner 2007, 340). Ese proceso de introspección y cuestionamiento –realizado fundamentalmente en términos de examen de conciencia, de mea culpa y, por lo mismo, no propiamente sociológico– no derivó necesariamente en manuscritos sobre el particular sino que impregnó la reflexión más amplia de intelectuales y de actores sociopolíticos y salpicó sus obras y su práctica política, según fuera el caso, derivando en un profundo pero dispar fenómeno de renovación de las ciencias sociales y del pensamiento político, de acuerdo con las culturas y colectividades sociopolíticas, como veremos en el siguiente capítulo. No obstante, tras ese primer impulso “autorreflexivo” con respecto a la labor de los intelectuales en los años inmediatamente anteriores al golpe militar, ha sido más lenta la indagación sobre las condiciones y características de la producción y la acción intelectuales posteriores.

Salazar (2012a, 52) ha llamado la atención sobre el hecho de que “no existe una historia crítica de la sociología en Chile”; Baño (2012, 79) constató que “nunca existió una sociología del conocimiento de la sociología” y Lechner (2007, 340), en un artículo publicado originalmente en 1997 sobre “intelectuales y política”, señaló lo mismo advirtiendo que “sobre tal revisión crítica del propio quehacer descansa la credibilidad intelectual”. De ese modo la sociología –y las ciencias sociales en general– estarían necesitadas y urgidas de ese autoexamen. Uno de los primeros trabajos al respecto, publicado en 1992, adelantaba la hipótesis de que esta falta de investigaciones sobre el campo académico y su interrelación con la política se debía a que “la historia política contemporánea de Chile ha sido escrita por los mismos intelectuales [...] evitando una y otra vez la elaboración de un autoanálisis sobre su propio papel en los episodios políticos nacionales” (Silva 1992, 140). Desde entonces algunas cosas más se han escrito y ciertamente, en los últimos lustros, la sociología de la sociología, que en aquel momento fue definida como “casi un tema tabú” (Silva 1992, 141), parece estarse constituyendo en una área de trabajo en desarrollo entre los sociólogos chilenos.

La relación entre sociología y política como un elemento fundante del pensamiento social chileno ha sido constatada por numerosos estudiosos, como bien ha señalado Eduardo Devés (1998); según un “tópico recurrente” esta relación se trocó en una influencia (o confusión) perversa para la sociología –que habría sacrificado su carácter científico– particularmente en el período de la Unidad Popular y quizás desde

un poco antes.¹⁹ Sin negar que existió una correlación entre crecimiento de la disciplina y desarrollo del conflicto socio-político en el país, este autor concluye que las ciencias latinoamericanas, y chilenas particularmente, del periodo “están hegemónicas por las posiciones progresistas, que sin duda ligan su quehacer teórico a un proceso de cambio social pero haciendo un énfasis mucho menor en la politización de las ciencias sociales de lo que una crítica interesada ha querido destacar” (Devés 1998, 183). Si esta concomitancia fue ampliamente subrayada e incluso exagerada en la crítica que la sociología (y otras disciplinas) vierte sobre sí misma con posterioridad al golpe de Estado, mucha menor atención ha recibido la superposición entre sociología y política en los años ochenta y noventa del siglo pasado. Sin embargo, no es menos cierto que en los últimos lustros, la sociología también ha emprendido una autorreflexión sobre sus prácticas y sus practicantes, superando la primera frontera de la recolección de datos acerca de instituciones, temáticas preferentes y autores más citados, con un marcado carácter positivista (Brunner y Barrios 1987 y 1988b, Brunner 1990, Courard y Frohmann 1999, Garretón 2007), y adentrándose en las explicaciones acerca de la estructura del campo académico y de la interrelación entre pensamiento social y posición-acción política, esto es, avanzando por la senda de la crítica sociológica de la sociología (o del análisis de campos, en términos de Bourdieu).

Ciertamente la preocupación por los usos que los distintos agentes hacen del conocimiento científico adquirió relevancia en el caso chileno en el contexto mismo de la transición política. Así lo evidencia, por ejemplo, el hecho de que entre 1989 y 1991 se desarrollara en la sede de Flacso-Chile un “Programa sobre utilización del conocimiento producido por la investigación social”. En el marco de ese programa se publicaron tres libros: en el primero, *Paradigmas de conocimiento y práctica social en Chile* (Brunner, Hopenhayn, y otros 1993), se revisan el positivismo, el marxismo y el humanismo crítico como paradigmas de conocimiento y en relación con el uso (político) que sus cultores buscan hacer de dicho conocimiento; el segundo libro, titulado *Usos de la investigación social en Chile* (Briones, y otros 1993), está formado por cinco investigaciones que exploran el uso de los saberes producidos científicamente en cinco áreas específicas: educación, pobreza, sector agrario, opinión pública y mujer. Por último, el tercer volumen, *Conocimiento, sociedad y política* (Brunner y Sunkel 1993) avanza hacia la construcción de un “modelo” de utilización del conocimiento científico, y de su relación con los “mercados” de conocimiento, es decir, en clave de oferta-demanda de saberes. Con todo, esta investigación –quizás a excepción del primer volumen– está orientada en un sentido muy positivista, constatando usos de saberes específicos y apertura de mercados para la investigación en ciencias sociales, que las orienta hacia la especialización y la tecnificación, pero no indaga críticamente las condiciones sociales de la producción de esos conocimientos y cómo la posición del académico en los campos académico y político se vincula con su elaboración teórica.

¹⁹ En referencia a la sociología de aquella época, Brunner y Barrios (1987, 81) sostienen que “los sociólogos pierden en perfil profesional lo que ganan en audiencia político partidaria”. Según estos autores, esa transformación se traduce en un vínculo estrecho con el campo de la política, en detrimento del fortalecimiento académico, pues “no se espera que los sociólogos publiquen; se espera que transformen el mundo” (*id.*).

En ese sentido, resulta mucho más interesante otro libro que ve la luz ya bien entrado el nuevo siglo; se trata del libro compilado por Marcelo Mella (2011a) que combina trabajos que, desde distintas perspectivas, exploran el papel de los intelectuales en la configuración de la transición chilena; el libro está estructurado en relación con tres colectivos de intelectuales: “los que ponen las reglas” (gremialistas y empresarios), “los ambivalentes” (reúne básicamente a los intelectuales renovados) y “los contraadaptativos” (comunistas y educadores populares). Para nuestra discusión aquí son fundamentales dos capítulos: en primer lugar, el del propio Mella (2011b) sobre “Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo” en el que da cuenta de la construcción consciente y deliberada –estratégica–, desde bastante temprano, de la vía de salida de la Dictadura que finalmente se impuso, cuyas concepciones no se limitaban a la transición, sino que tenían ya un carácter *fundante* de un nuevo orden social:

El surgimiento de un conjunto de fuerzas crecientemente coordinadas desde 1983, con capacidad para liderar la movilización social, es antes que nada, resultado de un pensamiento racional constructivista que surge desde los C.A.I. [Centros Académicos Independientes]. Es por esta actividad constructivista que tales fuerzas se constituyen en una oposición política propiamente tal (Mella 2011b, 156).

En segundo lugar, el trabajo de la historiadora Cristina Moyano acerca de los intelectuales-políticos vinculados al Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU) –escisión de la Democracia Cristiana, partido político generacional, no al uso, con una cultura política cohesionada y una fuerte vocación de poder– y la renovación socialista en Chile (Moyano 2011).²⁰ Sus reflexiones abonan a la idea de que la “fusión” entre la academia y la política fue prácticamente absoluta durante la Dictadura pues “el trabajo intelectual no sólo tenía inclinaciones políticas, sino que era ‘la forma’ pública y tolerada de hacer política” (Moyano 2011, 198).²¹ Por eso, para la historiadora resulta inútil intentar comprender la transición chilena y los gobiernos de la Concertación sin una referencia explícita y amplia a muchos de quienes integraron la agrupación, cuya articulación entre la producción de saberes y el ejercicio del poder político constituye una amalgama altamente exitosa, pues “por sus imágenes, transcripciones y representaciones pasó el diseño nominal de algunos de los caminos que condujeron a nuestra particular transición a la democracia” (Moyano 2011, 197-198).

²⁰ De la misma autora también es importante el trabajo sobre el MAPU durante la Dictadura (Moyano 2010a).

²¹ Esta constatación llama a la prudencia a la hora de caracterizar el campo académico chileno como más autónomo durante la Dictadura que en etapas anteriores. A nuestro juicio las ciencias sociales chilenas, particularmente la sociología y la ciencia política, en sus versiones dominantes, asumieron un compromiso explícito con un modelo de transición pactada entre élites que asegurara la estabilidad política y la gobernabilidad democrática, para lo cual produjeron un significativo y explícito conocimiento científico que respaldaba esa vía –encarnada primero en la Alianza Democrática y después en la Concertación de Partidos por la Democracia– como la única posible y/o deseable. Rodrigo Baño (1984) sostuvo, muy tempranamente, que el carácter político (o politizado) que había caracterizado la investigación social pre-golpe de Estado, no había desaparecido y aun parecía haberse fortalecido en el contexto dictatorial. Sobre este debate volveremos en el segundo capítulo.

Son en gran medida *ex mapucistas* quienes mejor ilustran la categoría de “technopols” (agentes que combinan capitales –en sentido *bourdiano*– racionales o científicos y políticos), que es uno de los conceptos claves de las investigaciones del politólogo Alfredo Joignant (2011, 2012) acerca, precisamente, de los usos políticos del saber.²² Su sociología de las élites pone de manifiesto “la influencia de una razón que concilia ciencia y política, saber y poder, conocimiento y razón de Estado” (Joignant 2012, 315). De acuerdo con el autor “esta comunidad de agentes, a la vez política y científica, en que convergen profesionales de las ciencias sociales que militan en diversos partidos de oposición y políticos que tienen una relación de utilidad con la investigación debe ser comprendida también como el grupo fundador de lo que luego será la Concertación” (Joignant 2012, 321) y, lo que es más importante, como el artífice del modelo consociativo de gobierno, lo que se ha dado en llamar “democracia de los acuerdos” que requería un “trabajo de desmovilización de la ‘sociedad civil’, y de neutralización ideológica de lo que se encontraba en juego, [que] participa de un modo de gestión de la incertidumbre transicional, y al mismo tiempo de un modo de dominación, ambos justificados por una relación utilitaria de las ciencias sociales que da a luz a una razón de Estado” (ibíd.: 341).²³

Entre los veinte *technopols* de Joignant están algunos de los autores que resultan de interés también para nuestra investigación como José Joaquín Brunner, Enrique Correa, Ángel Flisfisch o Edgardo Boeninger. No obstante, están ausentes los agentes fundamentales de nuestro trabajo; ello quizás se deba al hecho de que la categoría de *technopol* hace referencia a la complementariedad y competencia de saberes científicos y políticos pero con un fuerte énfasis en la posición ocupada dentro del campo político. De ahí que el primer criterio de selección para Joignant sea el hecho de haber sido ministro o subsecretario de Estado. En ese sentido su preocupación fundamental es cómo los agentes políticos usaron un determinado conocimiento científico; se trata de políticos con un gran capital científico o académico. En cambio, los sociólogos que más nos interesan (Eugenio Tironi²⁴, Manuel Antonio Garretón, principalmente) destacan por su posición dominante al interior del campo académico, aunque con una gran cercanía y con posiciones de poder también en el campo político (en el ámbito de los partidos políticos primero y después en algunas asesorías, pero no en los primeros cargos de gobierno); por ende son intelectuales con un gran capital político, del que hicieron uso en su labor académica.²⁵

²² Más temprano, Silva (1992, 141) se había referido a la emergencia de este nuevo tipo de intelectual como “una forma híbrida de tecnócratas-políticos”.

²³ La antropóloga estadounidense Julia F. Paley también constató en una tesis doctoral realizada durante el gobierno de Aylwin la importancia del conocimiento y de la información tanto para el ejercicio del poder, como para la resistencia a dicho poder, en los primeros años de la posdictadura: “En una época de campañas mediáticas y de toma de decisiones económicamente sofisticadas, grupos de líderes en la *población* se dedican a la producción cultural intencional y consciente del conocimiento” (Paley 1994, 12, traducción propia).

²⁴ Joignant considera a Tironi un *technopol* pero no lo incluye en su estudio.

²⁵ Además de las investigaciones de Joignant, resulta especialmente relevante para nuestro trabajo la tesis de magíster de Antonio Almendras (2007), sobre los *Usos de la transición política. El saber sociológico como oráculo de la transición política chilena*. Si bien en términos generales Almendras sigue a Joignant en su línea de análisis, la relevancia de su trabajo radica, para mí, en el hecho de que

El capítulo de Joignant (2012) forma parte del libro *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente* (Ariztía 2012) que da cuenta del ensamblaje entre conocimiento social y práctica política o, como el mismo título indica, de la producción de lo social. El capítulo de Tomás Ariztía y Oriana Bernasconi (2012) también resulta de especial interés para nuestro trabajo por cuanto indaga a partir del examen de cuatro obras cumbre de la sociología chilena de los noventa²⁶ la voluntad de construir un relato del cambio social que explique el presente y que oriente el futuro definiendo y enmarcando las posibilidades, esto es, con un fuerte contenido normativo o político. Con todo, lo más interesante no es esa vocación de futuro sino que con sus relatos y la interpelación que provocan en la sociedad, los autores se encuentran “produciendo el presente mediante relatos del cambio” (Ariztía y Bernasconi 2012, 158). Esta idea acerca del poder creador (*performativo*²⁷) de la palabra (de los discursos académicos), es la que orienta todo el libro; el capital científico es la capacidad de *nombrar legítimamente*, como dice Bourdieu, y en ella reside el papel político que puedan jugar los intelectuales: “En la medida en que [...] logran explicitar las lecciones del pasado y abrir una perspectiva de futuro, vuelven a tener la palabra” (Lechner 2007, 340).

El libro editado por Ariztía inspiró un comentario-reseña a propósito de la “sociología de la sociología” de José Joaquín Brunner (2014) que es, sin lugar a dudas, uno de los principales intelectuales-políticos (un *technopol*, en el lenguaje de Joignant) y también uno de los sociólogos que más se ha investigado el desarrollo de las ciencias sociales chilenas, desde la perspectiva de su institucionalización. El autor, reconociendo que “las prácticas discursivas propias de estas disciplinas [las ciencias sociales] contribuyen a constituir o producir la realidad que nombran” (J. J. Brunner 2014, 149), constata que “los debates relativos a los malestares de la modernidad y ‘el modelo’ vienen acompañándonos desde los años 1997-1998 y han pasado a ser la ‘madre de todas las batallas’ en el campo ideológico” y “que la política se piensa, comunica y actúa [...] a través de conceptos proporcionados por la investigación social” (J. J. Brunner 2014, 151). El sociólogo también conviene en la transformación que ha experimentado la relación entre política y conocimiento en las últimas décadas, que se expresa precisamente en la profesionalización de las ciencias sociales y la tecnocratización de la política y, por ende, en el predominio de los *technopols*.²⁸ Ese cambio se verificó en Chile con la llamada transición a la democracia y el primer gobierno posdictatorial. La política dejó de discutir sobre proyectos de sociedad y se convirtió en administración de lo dado; entonces el intelectual-crítico cedió terreno frente al intelectual-conformista en la medida en que se pretendió anular la batalla de las ideas, la lucha ideológica, que es la confrontación de modelos de sociedad distintos. La

dedica un capítulo a la invisibilización de los nuevos movimientos sociales por parte de este saber sociológico. Ésta es precisamente una de las hipótesis que tratamos de contrastar aquí.

²⁶ *Bienvenidos a la modernidad* (1994) de José Joaquín Brunner; *La faz sumergida del iceberg* (1994) de Manuel Antonio Garretón; *Chile A ctual: an atomía de un m ito* (1997) de Tomás Moulian; y *La irrupción de las masas* (1999) de Eugenio Tironi.

²⁷ El concepto de “performatividad” es deudor del trabajo de Judith Butler (2004).

²⁸ Sobre el recambio en el peso que han tenido los intelectuales en la política entre “intelectuales humanistas” a “tecnócratas” ver también Silva (1992).

función performativa de las ciencias sociales se volvió tanto o más importante que antes, pero la hegemonía neoliberal ensombreció la confrontación de paradigmas. La mayor operación performativa en ese entonces fue el discurso del *fin de la historia* que formuló Francis Fukuyama, en cuanto aspiración de quienes aceptaron y legitimaron el modelo dictatorial.

La centralidad que adquirieron los intelectuales en el diseño de la transición pactada ha llamado la atención de algunos investigadores extranjeros. Uno de los trabajos principales es el de Jeffrey M. Puryear (1994), *Thinking Politics. Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*, que advierte, precisamente, del carácter distintivo en la transición chilena a la democracia del “extraordinario rol jugado por los intelectuales” (Puryear 1994, X). Su investigación cuenta con la ventaja de que el autor conoció personalmente y entrevistó a muchos de los científicos sociales y políticos que constituyen su objeto de estudio. Con todo, sus reflexiones parten de la valoración del carácter exitoso de la transición a la democracia y valoran la contribución que los intelectuales realizaron a dicho “éxito”. A su parecer, fue durante los años 1987 y 1988 cuando los intelectuales tuvieron un mayor peso en la esfera política²⁹ y, no casualmente, fue entonces cuando “la oposición pasó a una estrategia centrada en los procesos electorales más que en las protestas callejeras” (Puryear 1994, 125, traducción propia). Siguiendo el análisis de Puryear, otra investigadora estadounidense, Carolyn K. Sorkin (2003), realizó su tesis doctoral sobre este particular; titulada “Intersections of Power and Knowledge: Chilean Social Scientists and the Transition to Democracy” en la que indaga las confluencias entre el mundo académico y el mundo político en la década de los noventa, a través por ejemplo de la disputa entre los sectores “autoflagelantes” y los “autocomplacientes”.

Más recientemente, la tesis doctoral de Alexis Cortés (2014) constituye una significativa contribución para pensar la construcción teórica del movimiento social a partir de dos casos: *pobladores*, en Chile, y *favelados*, en Brasil. Desde la hipótesis de la capacidad performativa de las ciencias sociales, el autor busca comprender cómo éstas favorecieron o dificultaron el despliegue histórico de dichos movimientos. Para el caso de los *pobladores* chilenos, Cortés identifica tres interpretaciones o construcciones teóricas del movimiento: como *movimiento comunitario*, como *anti-movimiento* y como *constructor de l e espacio popul ar*. Mientras que las dos primeras son claramente identificables en la literatura producida al respecto, la tercera constituye, a nuestro juicio, un esfuerzo del autor por definir una lectura “intermedia” del movimiento, entre las tesis que enfatizaban la autonomía radical de los *pobladores* y las que negaban la

²⁹ Esta tesis, con la que coincidimos en lo esencial, contradice en parte la afirmación de que los intelectuales fueron relegados y perdieron centralidad en la lucha política durante la Dictadura como sostiene Lechner (2007, 339): “De vanguardias de la lucha ideológica pasan a ser elementos subversivos, en el mejor de los casos, marginales”. Si bien los intelectuales fueron expulsados de las universidades y perseguidos por la Dictadura, su rearticulación en los centros académicos independientes les permitió desplegar una gran influencia en los debates sobre el autoritarismo y la transición a la democracia, proveyendo los análisis necesarios para justificar la transición pactada. En la misma línea se sitian las constataciones de Moyano, referidas más arriba, acerca de la fusión entre mundo académico y mundo político en el contexto dictatorial. Los intelectuales adquieren una proyección social y política en los ochenta que pierden, relativamente, con el retorno de la democracia formal y la hegemonía neoliberal.

existencia de un movimiento social y aun la posibilidad de que se constituyera a partir de los que eran definidos como sujetos marginales. Tanto la construcción del movimiento comunitario como la del anti-movimiento constituyen, a su parecer, lecturas idealizadas del movimiento social: “En los primeros hay una idealización inductiva, es la práctica la idealizada, y en los segundos, una idealización deductiva, es la definición teórica la idealizada” (Cortés 2014, 237-238). La radicalización de ambas lecturas se explica, en parte, por la influencia de la coyuntura transicional en la propia definición del movimiento, y por el distinto papel que les atribuían a los *pobladores* en ese proceso histórico. En cambio, la interpretación centrada en la dimensión espacial y en la territorialidad de las luchas *poblacionales* lograría, desde esta perspectiva, trascender el contexto de la transición política y otorgar al movimiento de *pobladores* un sustento teórico capaz de proyectarlo en el tiempo.

Para finalizar con esta indagación preliminar sobre la sociología de la sociología, es pertinente señalar que recientemente se advierte un renovado interés en desarrollar investigaciones críticas sobre la producción y las prácticas sociológicas. Es indicativo de este deseo de *sociologizarse* los hallazgos de un estudio sobre las tesis producidas en las carreras de Antropología Social y Sociología de la Universidad de Chile entre 1988 y 2008; según sus autores, el autor más citado en ambas disciplinas es Pierre Bourdieu con un marcado ascenso a partir de 2001 (Pinilla, y otros 2009). Coinciden con este resultado los hallazgos de un estudio en el que se le preguntó a 117 sociólogos académicos de las regiones Metropolitana y Valparaíso por los autores más relevantes para sus investigaciones; un 46% mencionó al sociólogo francés, seguido en un 29% por Michel Foucault, lo cual no deja de ser significativo, por las implicancias “develadoras” de los intereses detrás de los discursos y de las prácticas, presentes en los trabajos de ambos autores (Marileo 2007, 41). A estas conclusiones también contribuirían otros análisis específicos sobre el campo de las ciencias sociales en Chile (Ramos-Zincke, Canales y Palestini 2008, Ramos-Zincke 2005).

Si la Sociología (junto con la Ciencia Política) tuvo un papel central en la construcción de la transición chilena que finalmente se llevó a cabo y, en ese sentido, resultó exitosa, la Historia Social resultó ser la “derrotada” en esa *batalla de ideas*, pues su apuesta epistémica y política situaba a los sectores populares en el centro de su salida de la Dictadura y, por lo tanto, contemplaba una verdadera ruptura con el modelo económico y político dictatorial y no descartaba para ello ninguna forma de lucha o al menos privilegiaba los procesos que tenían lugar a nivel de los movimientos sociales (desde abajo). La orientación de la historia social apuntaba, pues, a derroteros distintos de aquellos por los que finalmente se encaminó la transición política; y los usos políticos del saber social producido por esta corriente historiográfica también eran radicalmente contrarios a los que persiguió la sociología dominante. Es quizás por ello que “los historiadores han permanecido al margen del análisis de los fenómenos que definen las peculiaridades de la transición chilena y, en consecuencia, no se han hecho cargo de los debates que ello ha provocado” (Goicovic 2006, 7). Pero, por el contrario, existen algunos trabajos en la perspectiva que hemos denominado sociología de la historiología, esto es, de reflexión crítica sobre los principios teóricos, epistémicos y prácticos de la Historia Social.

Quizás el primer texto a considerar sean las Actas del Seminario de Historia de Chile (1986), titulado “Historiografía chilena: balance y perspectivas”, realizado en Santiago de Chile, entre julio y noviembre de 1985, que como su mismo título indica constituye uno de los eventos fundamentales de crítica de los paradigmas históricos dominantes hasta entonces y de la emergencia, todavía difusa, de un nuevo paradigma de comprensión del quehacer de los historiadores. No obstante, es el libro *La historia desde abajo y desde dentro*, del historiador Gabriel Salazar (2003a), que compila un conjunto de trabajos publicados por separado anteriormente, el mayor esfuerzo por ahondar en las opciones epistemológicas y políticas de esta corriente historiográfica y en las dificultades de su ejercicio concreto en los contextos dictatorial y posdictatorial. Claro que este trabajo tiene dos peculiaridades: se trata de la reflexión del sujeto cognoscente sobre su propia práctica cognoscitiva; y, por ende, expresa la particular mirada de Salazar sobre su quehacer historiográfico. Pero si tenemos en cuenta que la Historia Social a la vez que se fue consolidando como propuesta epistemológica dio lugar a diferencias en su seno –una de las más reconocidas es la que trata de distinguir entre una historia social *con* política y otra *sin* política³⁰ deberíamos atenernos a la crítica que podrían formular desde perspectivas que se distancian de la mirada *salazariana*. Con todo, consideramos que, en términos generales, el trabajo de Salazar expone los pilares de la Nueva Historia que, aun con disputas en su seno, es claramente diferenciable tanto de la historia conservadora y marxista clásica, como de la perspectiva sociológica dominante.

Varios trabajos constatan la revitalización de la discusión historiográfica que ha tenido lugar en los últimos lustros, a la vez que evalúan críticamente los aportes y los límites de la Nueva Historia en sus distintas versiones (Correa 2001, Grez 2004, 2007 y 2008, Ponce y Pérez 2013, Gaudichaud 2013, Thielemann 2013, Díaz 2014). El punto de partida de este renovado interés en las miradas a propósito del pasado reciente fue el arresto de Pinochet en Londres en 1998 y la carta que dirigió a los chilenos a fines de ese año con el propósito de “ayudar a descubrir la verdad y la justicia de la historia que se juzga” (Pinochet 1998). Ese acontecimiento y la misiva del dictador autojustificando su régimen de terror originaron una batalla historiográfica entre la perspectiva conservadora –encabezada por el historiador Gonzalo Vial³¹– y los historiadores de la Nueva Historia que publicaron un *Manifiesto de historiadores* (Grez y Salazar 1999). Esa confrontación tuvo en el centro de la disputa la cuestión de la *memoria*, lo que ha dado origen a su vez a una interesante reflexión sobre las relaciones entre memoria(s) e historia, y acerca de la complejidad de la propia noción de memoria como herramienta conceptual; la disputa no se da sólo entre la “verdad” del Dictador y la memoria de los opositores, sino también en el seno de la oposición, entre una historia “oficial” construida por los gobiernos de la Concertación a través de los informes sobre verdad y

³⁰ Planteamiento que desarrollara el historiador Sergio Grez (2005) específicamente en su artículo “Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX)”. También Moyano (2010b) se hace eco de la necesidad de contribuir a la revitalización de una Nueva Historia Política. No ahondaremos en estos planteamientos aquí porque lo discutiremos en el cuarto capítulo.

³¹ En unos fascículos publicados en el diario *La Segunda* referidos al periodo 1964-1973.

reconciliación (*Informe Rettig*, de 1990) y sobre prisión política y tortura (*Informe Valech*, de 2004) y una memoria de los “derrotados” por la transición pactada, o sea, una memoria popular. Uno de los trabajos que mejor refleja esa confluencia es el libro *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX* (Garcés, Milos, y otros 2000). Desde la perspectiva de la historia social, la batalla de las ideas se torna en *batalla de la memoria* –según la feliz expresión de María Angélica Illanes (2002)–. El carácter estratégico de esa batalla no lo desconoce ni el propio Pinochet, como pone de manifiesto la siguiente afirmación referida al momento en que la historia reconozca “su” obra: “Será, sin embargo, la hora de la victoria, la hora en que los ideales que iluminaron nuestros sueños terminen *siendo comunes* a todos los chilenos” (Pinochet 1998, cursivas mías). O de otra forma, cuando los valores impuestos a sangre y fuego por la Dictadura acaben constituyendo el *sentido común* de los chilenos, ése será el día de la victoria en esa batalla.

Algunos autores advierten en esas disputas “la permeabilidad del debate historiográfico al debate político” (Palieraki y Torrejón 2008, 38) y acusan la confusión entre dos registros, el historiográfico y el político, reeditando así las acusaciones de una ciencia en extremo ideologizada. En este caso se trataría de la politización de la Historia Social. Ciertamente la relevancia concedida por esta corriente al testimonio oral –principal vehículo de la memoria popular–, “le otorgaba el status de otra historia” (Nicholls s.f.). La centralidad de la oralidad en gran parte de la investigación histórica desde los ochenta no es sólo un agregado de fuentes primarias, sino que “permite, por lo menos, que los que no han tenido nunca voz teórica sean escuchados en su lengua y en su habla ‘en’ el mundo teórico” (Salazar 1993) marcando así un giro epistémico significativo. A nuestro parecer, la acusación de confusión lo que hace precisamente es confundir –al oscurecer o enmascarar las intersecciones– en lugar de ayudar a comprender la interpenetración inevitable entre quehacer académico y posicionamiento político.

Por último, quisiéramos hacer mención del trabajo del historiador Mario Garcés (2011) referido a la producción intelectual y a las prácticas de la ONG ECO, Educación y Comunicaciones, en la década de los ochenta que es, a nuestro juicio, un buen ejemplo de la preocupación por explicitar el *valor* y los usos otorgados a los saberes producidos desde la educación popular y la historia social. El trabajo de este autor se sitúa en la encrucijada entre esas dos “corrientes”: el saber elaborado por los educadores populares constituye uno de los principales aportes a la renovación historiografía que converge en el “nacimiento”, alrededor de 1985, de la Nueva Historia, por lo que lo consideramos, *grosso modo*, parte del mismo esfuerzo de elaboración teórica y praxis política. La contribución fue crítico-propositiva, pues el trabajo de recuperación de la memoria local impulsado por esta organización:

Dejó al descubierto los vacíos de la propia historiografía nacional, que centrada en el estudio de las elites, de los procesos políticos y económicos de larga duración, había dejado de lado a los vastos sectores populares, sólo subordinándoles en tanto alusión al folklore o a raíz de las irrupciones que de tanto en tanto, los grupos con mayor conciencia política o las masas más radicalizadas realizaban en el escenario nacional (Nicholls s.f.).

Además, la producción de ECO a la que nos referiremos en extenso en este trabajo constituye uno de los principales esfuerzos de sistematización de una nueva epistemología de las luchas y de los movimientos sociales y políticos, pues buscaba “crear un nuevo conocimiento, no transmitir uno ya formulado” (Nicholls s.f.).

En definitiva, tanto en la sociología como en la historia social recientes se constata una preocupación creciente entre sus practicantes por explicitar y discutir críticamente los presupuestos que orientan su labor académica, y la vinculación entre los saberes que producen (o que sistematizan) y una determinada praxis política. Tras un, a menudo, interesado cuestionamiento de la relación entre saber y política en relación con determinada academia que simultáneamente invisibilizó, desconoció o legitimó los vínculos que ella misma sostenía con determinados proyectos de sociedad, ha ido ganando terreno la opinión entre los científicos sociales de la necesidad de reconocer su voluntad de coadyuvar a la transformación de la sociedad en un sentido o en otro. No obstante la mayoría de la producción sociológica e historiográfica referida a su propio quehacer académico si bien constituye un avance en aras de hacer una auténtica sociología de sus respectivas disciplinas, adolece –la sociología más que la historia– de una débil consideración de los conflictos y disputas existentes en el campo académico y por lo tanto de una perspectiva crítica. Los trabajos tienden a considerar la producción y los “estilos” de investigar como un todo homogéneo, sin disputas por imponer visiones de mundo, por lo tanto, prescinden de su vinculación con proyectos de sociedad contradictorios. Se especifican las condiciones institucionales de investigación, se delimitan las áreas de interés, los enfoques y las metodologías, se enumeran las producciones pero no se explicitan y explican los conflictos que jalonan esas prácticas.

La manera como sociólogos e historiadores sociales han pensado los movimientos sociales y el cambio social constituye un área en la que aterrizar la preocupación por el ensamblaje entre conocimiento y práctica política, y su codeterminación. La disputa por nombrar la realidad, y construirla, y el carácter *disciplinario* de los conceptos enarbolados por la producción social adquieren en este caso una gran densidad.³² Los movimientos sociales –lo que eran o lo que podían ser y lo que no– constituyó la *arena de lucha* de distintas concepciones epistemológicas y posiciones políticas. Esta investigación pretende ser un aporte a esa sociología de la sociología y de la historiología.

¿Cómo explicar la producción de distintas teorizaciones sobre movimientos sociales en Chile? ¿A qué se debe el *carácter antagónico* de la producción teórica elaborada sobre esta cuestión por parte de la sociología (hegemónica) y de la historia social? ¿Se trata únicamente de que los marcos conceptuales empleados por una y otra dirigen la atención hacia dimensiones diferentes de las prácticas de lucha y movilización social?

³² Disciplinario en los dos sentidos del término: en cuanto pertenece a una disciplina y en cuanto somete y sujeta a determinados límites la realidad así nombrada.

¿O por el contrario, las explicaciones sociológica e histórica constituyen exclusivamente una estrategia política disfrazada de cientificidad? Éstas son las preguntas con la que comenzamos la investigación. El concepto *bourdiano* de campo nos ayuda a comprender que no se trata de una cosa o de la otra, de manera excluyente. En la producción del conocimiento social se conjugan las *normas específicas* que rigen en el campo académico y en la actividad científica –y que no están presentes en otros campos– con los condicionantes sociales, económicos o políticos, que atraviesan la actividad científica en cuanto práctica o conjunto de prácticas sociales. Dar cuenta del grado en que se combinan las *posiciones académicas* y las *disposiciones políticas* permite comprender la especificidad de cada producción científica.

En el *camino* de nuestra investigación tuvimos que ir clarificando las categorías y conceptos utilizados en cada caso (aun cuando, como en los trabajos de los historiadores, no siempre sean explícitos). Además, debimos sacar a la luz los presupuestos ontológicos, epistémicos y éticos que subyacen en las construcciones conceptuales. Y dar cuenta de las características del campo académico y de sus relaciones con el campo político, en lo que respecta a los científicos sociales que reflexionaron sistemáticamente sobre los movimientos sociales. Nuestros hallazgos son expuestos en los siguientes capítulos.

CAPÍTULO II

El golpe al saber

El feo rostro de la dictadura traería consigo una mueca, c así irónica, ante la cual la sociología chilena quedó, por fin desarmada.

José Joaquín Brunner y Alicia Barrios (1987, 82)

Cuando la dictadura no basta ya para salvar su dominio sobre la sociedad, la democracia entonces. Hay que resucitar la democracia para que, llegado el momento en que la dictadura se pierda, la revolución no se encuentre.

Los Incontrolados (2004, 107)

El golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 fue la reacción exasperada de las fracciones dominantes del capital nacional e internacional para frenar y revertir un proceso de transformación profunda de la sociedad en favor de, y en gran medida impulsado por, los sectores populares. Fue el acto desembozado de una clase que veía como perdía de manera exponencial no sólo el control político y económico, sino también la capacidad de dirección cultural de la sociedad –usando un lenguaje *gramsciano*– frente a otro proyecto que comenzaba a volverse hegemónico.³³ Por eso, el golpe militar fue, también, un *golpe* al saber: al pensamiento crítico y a la praxis transformadora.

No por muy esperado causó menor desconcierto el golpe. Para muchos sectores, “después del 73 se inauguró la perplejidad y el escepticismo. Desde la certeza ortodoxa caímos en el pozo de la incertidumbre y el miedo” (Devés 1991, 127). Pero lo que produjo auténtica consternación fue la violencia (insospechada) que desataron los militares, y que fue creciendo a medida que pasaban los meses y los años, con cada nueva constatación de la *voluntad exterminadora* de la Junta Militar. Quizás la turbación por el curso de los acontecimientos pueda explicarse, en parte, por la idea de *progreso* que impregnaba el pensamiento social y político de la época.³⁴ Era un pensamiento forjado al calor de un ciclo histórico ascendente de luchas, del cual la Unidad Popular era su expresión más gráfica. Illanes (2002, 140) sostiene que “en historia existe el tiempo de la energía social como potencia y el tiempo de la energía social como liberación. Este último fue el histórico tiempo que comenzó en Chile en los años 60. ‘La era estaba pariendo un corazón; se moría de dolor...’”. El dolor no menguaba la alegría por la *buena nueva*. Era el clima de una época, el ejemplo victorioso de Cuba, la resistencia heroica de Vietnam... Era un pensamiento troquelado por la certeza del triunfo. La historia *no podía* dar marcha atrás.³⁵

³³ Con independencia de las tensiones entre los partidos políticos que integraban la Unidad Popular y de éstos con el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), y más allá del rifirrafe entre los partidarios del “consolidar para avanzar” y los del “avanzar sin transar”, o de la discusión acerca de la creación de un poder popular sometido al gobierno o un poder dual, existía el convencimiento en la amplia mayoría de la izquierda, y aun en significativos sectores del centro, de que era necesario impulsar cambios radicales: “La hegemonía (o dirección intelectual y moral) ganada por las clases subordinadas será, entonces, resultado de la penetración de los movimientos sociales en la sociedad política. Y con la hegemonía se abre la posibilidad de desarmar ‘los instrumentos de la coerción’ del Estado burgués” (Samaniego 2000, 147).

³⁴ La confianza en el triunfo del movimiento popular se trasluce en muchos actos y declaraciones; para muestra basta recordar el himno del MIR según el cual los *miristas* contaban las horas “porque a los ricos les llega su fin/porque estamos seguros de triunfar/con el pueblo, conciencia y fusil”. O el discurso a un tiempo dramático y esperanzado de Salvador Allende en su despedida desde el Palacio de La Moneda bombardeado, llamando al pueblo a no sacrificarse porque “tengo fe en Chile y su destino. Sigán ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”.

³⁵ La crítica formulada por las nuevas corrientes historiográficas señala que más importante que la fe en el progreso, en la explicación de ese desconcierto inicial, puede haber resultado el escaso y deficiente conocimiento de la historia chilena que garantizaba la reproducción de ciertos *mitos*, como el pretendido carácter no injerencista del Ejército chileno. El historiador Gabriel Salazar se ha encargado de desfondar esa creencia ampliamente difundida, demostrando que entre 1818 y 1973 el Ejército había intervenido de la mano de los sectores oligárquicos masacrando al pueblo en veintitrés ocasiones (Lavquen 2009).

El golpe puso fin a las certezas; al menos a la certeza en la inmediatez del triunfo. La “omnipotencia política” (Salazar 1986) de la que habían hecho gala los revolucionarios se demostró infructuosa para frenar el embate de la reacción. En esas circunstancias, se comprende que la traumática experiencia del fin del proyecto de la Unidad Popular provocara una catarsis teórica de consecuencias probablemente insospechadas entonces, porque como ha señalado el sociólogo Manuel Antonio Garretón (2013a): “El fracaso o la derrota de proyectos histórico-políticos son también fracaso o derrota de las categorías con que fueron pensados”. La fractura histórica trajo aparejada una revisión epistémica y teórica que, con ritmos y alcances diferentes, realizaron casi todas las colectividades políticas e intelectuales que habían impulsado aquel proyecto. La caracterización de la situación como una derrota o un fracaso tuvo diferentes implicaciones y orientó la crítica y las acciones subsiguientes por sendas distintas. Fue un proceso profundamente personal y, a la vez, vivido colectivamente. Con todo, lo que nos interesa señalar es que ese proceso nació de una situación traumática, que provocó un *quiebre* emocional:

Dicho proceso –dicho cambio en los paradigmas, dicho “quiebre epistemológico”, por llamarlo de alguna manera– únicamente se hace posible a partir del quiebre político y humano que significa el golpe de estado de 1973. El quiebre teórico es producto del quiebre afectivo. Es decir, no se trata solamente ni prioritariamente de una evolución al interior del campo de las ideas y que podría estudiarse principalmente a partir de la lectura de Marx, Gramsci o cualquier pensador europeo, sino que debe ser explicado, en primer lugar, como *un cambio de postura ante la realidad y ante la vida* (Devés 1991, 127, cursivas mías).

El cambio de postura significó una *disposición* distinta, de los sujetos derrotados, en todas las esferas de la vida; colocados en otro lugar, los actores modificaron su *perspectiva*. Este proceso de transformación tuvo una clara expresión en ciertas *élites* académicas y políticas. Los *dioses* habían sido violentamente desalojados del *Olimpo*, desplazados del lugar histórico que creían suyo: “Ya no somos dioses; no somos dueños, ni protagonistas, ni arquitectos ni parte de nada. Y esto no lo aceptamos” (Tironi 1979, 26). Estas palabras del sociólogo Eugenio Tironi traslucen esa fuerza emotiva, característica de una élite, acostumbrada a saberse tal, que no se resigna a no ser la protagonista de su/la historia.

El impacto emocional que produjo el golpe en esta generación de intelectuales y dirigentes o militantes de partidos políticos, que tras haberse sentido los “hacedores” de la revolución fueron confinados al vacío, a la impotencia, a la irrelevancia, ha sido una arista sugerida a menudo en los análisis sobre el viraje del pensamiento social y político durante la Dictadura, que ponen de manifiesto el carácter *aleccionador* del golpe de Estado y los sentimientos de trauma y de exclusión que caracterizaron a la “generación del golpe, que es a su vez la generación de la democracia post-Pinochet” (Camargo 2008, 6). La derrota, desde esta perspectiva, es vivida como una derrota generacional por cuanto “lo es de la autoimagen que las generaciones anteriores se habían hecho de sí mismas como observadoras y conductoras del proceso” (Güell 2002, 83). Y, por ende,

la *renovación*³⁶ también es una experiencia que adopta un *carácter generacional*: “Lo que se adquirió hasta ahora, que es toda una redefinición de democracia y socialismo, yo creo que es un logro enorme. Y en ese sentido, yo digo que *es un logro de nuestra generación*. No creo que sean logros del MAPU; creo que son logros de nuestra generación, en la cual hay muchos MAPU” (Garretón 2011a, 72, cursivas mías).

Los *intelectuales del MAPU*³⁷ son los que lideran este proceso de renovación en el campo de las ciencias sociales, porque ese partido-movimiento congregó a destacados académicos-intelectuales: José Joaquín Brunner, Tomás Moulian, Manuel Antonio Garretón, Norbert Lechner y Eugenio Tironi son sus más destacados exponentes en este ámbito.³⁸ Junto con los *mapucistas*, otros intelectuales de la órbita socialista, como

³⁶ El proceso de autocrítica y ruptura teórico-práctica al que aludimos ha sido nombrado como “renovación” del pensamiento social y político, pero lo cierto es que adoptó distintas expresiones en función de la colectividad de intelectuales-políticos a la que nos refiramos y de las experiencias personales y sociales vividas, tanto en *el interior* –expresión que alude a Chile– como en el exilio. Por lo que, *stricto sensu*, se trata de varias renovaciones. En algunos casos la renovación derivó en la *conversión* de los intelectuales –casi en un sentido religioso, a la luz de los compungidos *mea culpa* que entonaron– al paradigma socialdemócrata o neoliberal, según los grados de transformismo. Es el caso de la llamada *renovación socialista*, que alude al cuestionamiento y refundación de la matriz ideológica que realizaron los intelectuales y políticos del Partido Socialista (PS) y de los partidos y colectividades análogas, como la Izquierda Cristiana (IC) y el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), ambas escisiones por la izquierda de la Democracia Cristiana (DC), y algunas personalidades del MIR y, más tarde, del Partido Comunista (PC). Para Garretón, “la ‘renovación socialista’ se trató más bien de una corriente de pensamiento, sin organización formal, constituida por muchos sectores y personas, militantes e independientes, que atravesaba varios partidos o fracciones políticas y que tuvo una influencia particular en la renovación ideológica de la izquierda y en las diversas líneas políticas de ésta” (Garretón 2009, 68). A grandes rasgos, esta renovación consistió en el rechazo del marxismo, como enfoque teórico-metodológico, de la revolución, como método político para producir transformaciones radicales de la sociedad, y del socialismo como la búsqueda de una sociedad alternativa a la capitalista. Volveremos sobre este proceso en el apartado 2.2.

³⁷ El MAPU no fue un partido al uso, fue una comunidad político-ideológica y afectiva con una gran singularidad que, a pesar de sus escisiones y del hecho de que la disolución formal de la organización tuviera lugar en 1989, ha seguido operando como un referente en el imaginario político chileno. Desde esa perspectiva la historiadora Cristina Moyano se ha dedicado a estudiar las particularidades de esa colectividad “con el fin de comprender su existencia informal, pero real, en el presente vivido” (Moyano 2010a, 12). Es en ese sentido que me refiero a “los intelectuales del MAPU”, a sabiendas de que la militancia formal de algunos de ellos, Garretón y Lechner fundamentalmente, fue muy corta y no se extendió durante la Dictadura militar. Otros, como Tironi, se fueron desvinculando progresivamente de la identidad partidaria al tiempo que se integraban en la Convergencia Socialista – nombre que recibió la orgánica de los sectores *renovados*, transversal a los partidos–. Hacia 1986/1987 el MAPU había desaparecido virtualmente por la incorporación de la mayoría de sus militantes al PS y al Partido Por la Democracia (PPD).

³⁸ Entre estos intelectuales hay diferencias significativas de las que trataremos de dar cuenta en este trabajo; sin embargo, consideramos que en general y sobre todo en un primer momento comparten los pilares de lo que supone la renovación socialista. Sin duda es Moulian es el que más se aparta de este análisis, pues adoptó desde finales de los ochenta una actitud muy crítica con la transición a la democracia. Él mismo explicó *ex post* en qué radicaba esta divergencia: “Empiezo a pensar en una crítica a la transición y a mostrar que la transición es una transición en el sentido más suave del término. Es, sí, el paso de un régimen autoritario a un régimen de democracia representativa, pero no es el paso de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad, una sociedad autoritaria a una sociedad democratizada. Estos regímenes no otorgan democratización. No digo que no otorgan socialismo, digo que no otorgan democratización, es decir, no hacen avanzar la democracia más allá. Un proceso de democratización es un proceso constante de búsqueda de mayor libertad y de mayor participación, si uno quiere colocarse en una perspectiva en que no se convierta en un simple demócrata representativo y quiera ir más allá, hacia una democracia participativa” (Moulian 2008, 160). Otra diferencia que no analizamos aquí tiene que ver con el hecho de que los cuatro primeros militaron en el MAPU Obrero y

Ángel Flisfisch, Enzo Faletto o Rodrigo Baño –todos ellos académicos de Flacso– tuvieron un papel fundamental en el proceso de *renovación* de las ciencias sociales fungiendo como *punte* entre distintas colectividades políticas y comunidades académicas.

La línea de continuidad que esbozamos aquí entre la derrota de los setenta y la victoria de los noventa³⁹ –proceso de *conversión* de por medio–, se justifica porque sus protagonistas son, en gran parte, *los mismos actores*. O de otra manera, porque ni la Unidad Popular ni la transición a la democracia habrían sido posibles sin la adhesión de amplios sectores de la órbita socialista. En ese sentido, Pedro E. Güell llama la atención sobre el hecho de que “su derrota fue más bien una postergación. Con otras categorías y con otros modos de conducción, la generación del ‘68 pudo consumarse como actor en el escenario de la transición” (Güell 2002); el autor aporta en respaldo de esta tesis las propias declaraciones de uno de sus protagonistas, Enrique Correa:

Habría que ser muy imaginativo para considerar que esta generación que participó en una transición tan exitosa sea una generación derrotada. Hemos construido un país con grandes fortalezas, hemos ayudado a que Chile se sustraiga de las enormes crisis del continente. No es poca cosa, no es mucho tampoco; no es todo lo que hubiéramos querido. Pero llamarle derrota a haber gobernado el país durante doce años... (citado en Güell 2002, 83).

La *renovación socialista* se tradujo en prácticas y opciones políticas pero fue, primeramente, un fenómeno intelectual. Los actores que protagonizaron esa revisión y cuestionamiento fueron, en gran proporción, intelectuales orgánicos, o intelectuales-políticos, personalidades con un pie en el campo académico y otro en el campo político, con un gran capital científico y con posiciones de poder, en cuanto dirigentes o militantes en los partidos políticos, destacados precisamente por su condición de intelectuales. Por eso, aunque resulta imposible desprender el proceso de renovación de las ciencias sociales de la transformación que tuvo lugar en las colectividades y partidos políticos, aquí nos vamos a concentrar en ese eje de la renovación que tuvo lugar en el campo académico y, particularmente, en la sociología, que es la disciplina que mejor expresa ese proceso y también la más *golpeada* por la inquina militar, dado su nivel de institucionalización y el compromiso político que había asumido en los años sesenta y setenta con la teoría y práctica revolucionarias. Es en ese sentido que hablamos de ciencias sociales *renovadas* o de sociología *renovada*, como equivalentes.

Campeño a raíz de la fragmentación del partido en marzo de 1973, mientras que Tironi lo hizo en la vertiente que mantuvo el nombre original del partido. A su vez, el primer grupo trabajó durante la Dictadura en la sede de Flacso en Santiago de Chile, mientras que Tironi (con otros MAPU, como Javier Martínez o José Bengoa) lo hizo en la corporación de estudios SUR, fundada en 1979. Precisamente Moyano (2011b, 200) ha llamado la atención sobre esta diferenciación complementaria entre comunidades políticas y académicas. Sobre la trayectoria de las élites *mapucistas* véase también Valenzuela Van Treek (2011).

³⁹ Con victoria nos referimos al triunfo de la transición pactada con los militares, gracias a la convergencia del socialismo *renovado* con la Democracia Cristiana, que implicó aceptar la legalidad y la institucionalidad dictatorial a sabiendas de que con ello se bloqueaban las transformaciones de fondo de la sociedad chilena.

A continuación exponemos las transformaciones objetivas que tuvieron lugar en el *campo académico* con posterioridad al golpe, debido a la acción de los militares y a las estrategias de sobrevivencia desplegadas por los científicos sociales. Y damos cuenta del proceso de *renovación de las ciencias sociales* y particularmente de la sociología a partir del doble movimiento reflexivo que protagonizaron los sociólogos *mapucistas*; movimiento que es indisoluble en la realidad pero que aquí examinaremos por separado, a efectos analíticos: primero se revisaron, cuestionaron y, una parte no desdeñable, renegaron de lo que habían sido o de la autoimagen que construyeron de sí mismos en el pasado, para después empezar a edificar una nueva identidad, afirmando rasgos que anteriormente habían estado ausentes o habían sido negados.

2.1. Las ciencias sociales *desarmadas*

En este apartado damos cuenta de la acción destructiva de la Dictadura militar en el campo académico, conformado fundamentalmente por las universidades. El desmantelamiento de la institucionalidad académica y la estigmatización de las ciencias sociales, despojó a los científicos sociales de las herramientas objetivas necesarias para cultivar la investigación y el pensamiento crítico. Pero la Dictadura dio pie también a un proceso subjetivo de auto cuestionamiento, por medio del cual, los intelectuales se deshicieron de *armas* que anteriormente habían blandido, como la ideología, el marxismo, la revolución o el socialismo.

2.1.1. La depuración de las ciencias sociales

Es ya memorable el bando n° 10 emitido el mismo 11 de septiembre por la recién autodesignada Junta de Gobierno, por el que se conminaba a distintos dirigentes políticos y sociales de la época a entregarse bajo la amenaza, en caso de no hacerlo, de sufrir “las consecuencias fáciles de prever”. La lista incluía a algunos intelectuales – como es el caso del sociólogo brasileño Theotonio Dos Santos, por entonces director del Centro de Estudios Socio-Económicos de la Universidad de Chile– cuya persecución estaba justificada, a ojos de los instigadores del golpe, por su rol destacado en el proyecto de la Unidad Popular o, de otra manera, porque eran *intelectuales orgánicos de la revolución*.⁴⁰ Particular encono causaban los sociólogos a la idiocia militar, pues en los últimos años se había redefinido “el rol del practicante de la sociología en términos de una militancia teórica y política en favor de la revolución” (Brunner y Barrios 1987, 79). Estos intelectuales, estos sociólogos militantes, eran parte del *enemigo interno* a combatir.

La tesis del enemigo interno se enmarca en la Doctrina de Seguridad Nacional formulada por los Estados Unidos de América, que traslada la lógica de la guerra entre naciones al enfrentamiento dentro de la nación entre los elementos subversivos que buscan destruir la unidad nacional y los defensores de la patria; los primeros están movidos por ideas extrañas al sentir nacional o directamente son extranjeros, mientras

⁴⁰ “El peso de estos intelectuales revolucionarios, ‘orgánicos’ la mayoría de sus respectivos partidos, se hace sentir en los medios de difusión y en los comités centrales de la revolución” (Brunner y Barrios 1987, 80).

que los segundos encarnan los auténticos valores patrios. Con ese movimiento analítico, la derecha construyó la imagen de la izquierda (comunistas, socialistas, miristas) como el “otro” que amenazaba un pretendido concierto nacional pues, cual caballo de Troya, irrumpía desde dentro, enquistándose en el territorio nacional. La contrarrevolución militarizada echó mano de armas ideológicas para disputar el contenido mismo de la noción de patria y de los mecanismos legítimos para imponer/defender dicha concepción. La lógica de la guerra interna permitía identificar a algunos compatriotas como los enemigos, los bárbaros, que amenazaban desde el propio país, pero con ideologías no criollas, los valores y la identidad nacionales, y hostigarlos al punto de hacerlos *desaparecer* política y físicamente. Fue así como la voluntad exterminadora de la contrarrevolución alcanzó a los intelectuales que proveían una visión alternativa de la sociedad y que legitimaban (científicamente) la transformación profunda del *status quo* y, en algunos casos, la vía revolucionaria para transitar desde el capitalismo al socialismo. Ellos eran los portadores-constructores de “las ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el egoísmo o antagonismo deliberado entre las clases sociales, y la invasión cultural extranjerizante”, según rezaba la *Declaración de principios de l Gobierno de Chile* (Junta Militar 1974). De ahí que, como alguna vez señalara Garretón, la sociología pareciera “más bien un prontuario que una profesión” (citado en Villegas 1984, 16).

Había que extirpar el “cáncer marxista” que había llevado “a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando” –según aseguró el comandante en jefe de la fuerza aérea, Gustavo Leigh–.⁴¹ Esa labor implicaba *desaparecer* a los revolucionarios, por supuesto, pero sobre todo desaparecer la idea misma de la revolución (de su factibilidad y de su deseabilidad); idea que se había instalado como parte del *sentido común* de amplios sectores de la sociedad.⁴² Los militares actuaron en consecuencia: desataron una feroz persecución contra académicos y estudiantes críticos, e intervinieron las universidades. Su voluntad de control político sobre los espacios en los que la sociedad se piensa (y construye) a sí misma puso en evidencia la significación que le otorgaban a la dimensión autorreflexiva y a su capacidad emancipadora. No debe sorprender este interés de los militares en controlar la universidad, pues la educación siempre ha sido un asunto de la máxima importancia para las clases dominantes ya que transmite los valores, pautas y marcos de

⁴¹ Ésas fueron sus palabras en el vídeo emitido la noche del 11 de septiembre por el canal nacional (citado en Huneeus 2000, 100).

⁴² La fuerza que adquirió la idea de la revolución en los años sesenta y setenta, a la que contribuyó sin duda el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, se constata incluso en el eslogan de la campaña presidencial del nada revolucionario demócratacristiano Eduardo Frei Montalva en 1964, “Revolución en libertad”, que pretendía disputar el concepto de revolución a la izquierda aunándolo con el respeto irrestricto a la legalidad burguesa. La revolución era una auténtica *idea-en-acción* y, en ese sentido, tenía un gran potencial performativo porque, como dijera Ernesto “Che” Guevara, “el deber de todo revolucionario es hacer la revolución”; por lo tanto, una vez asumida la necesidad (viabilidad) histórica de la revolución, había que comprometerse (en la práctica) con ella. Era una idea que impulsaba a actuar. El éxito de esta batalla, para los militares, es en el plano social, la eliminación (por asesinato, desaparición, tortura, exilio, etc.) de muchos militantes y la difusión del terror en todos los espacios de la vida y, en el plano ideológico, la conversión en “sentido común” de la imposibilidad (y aun la in-deseabilidad) de la revolución y de la conveniencia del modelo de libre mercado, como veremos más adelante.

interpretación que garantizan la reproducción de las sociedades; pero también lo es para los proyectos liberadores pues “establece los fundamentos de la proyección de sociedades e individuos” (Baño 2012, 82).

La acción militar tuvo en el espacio académico, como en otras esferas de la sociedad, el carácter de una *operación quirúrgica* que intervino las universidades para extraer los elementos considerados indeseables y “limpiar” carreras, planes de estudio y departamentos; se trataba de un proceso de *higiene social* que saneaba de componentes “peligrosos” las universidades y el quehacer científico. El proceso de “sanación”, aunque pretendidamente justificado por la situación de “emergencia”, implicaba un intento por abolir la autonomía del campo académico, la crítica y la autorreflexión. Así lo declaró, sin ambages, Augusto Pinochet:

La emergencia político-social que vive nuestra patria también repercute inevitablemente en el medio universitario. Desde luego, ciertos debates universitarios tienen la tendencia subconsciente de pretender que el libre juego de ideas se admita sin limitaciones de ninguna especie, lo que equivale a instaurar un pluralismo ideológico absoluto. Debo ser franco y categórico para declarar que esto es radicalmente incompatible no sólo con la actual situación de emergencia del país, sino que con la esencia misma del régimen nacido el 11 de septiembre de 1973, porque con el advenimiento de éste, *el pluralismo ideológico irrestricto y absoluto debe entenderse como definitivamente abolido* (citado en Brunner 1986, 45, cursivas mías).

La Dictadura se propuso, en primer lugar, dismantelar la institucionalidad académica vigente que, no sin conflictos y “disputas *campales*”⁴³, había cobijado y alentado en los últimos años ese pluralismo ideológico. Su tarea comenzó el mismo día del golpe de Estado y en los subsiguientes. Los militares allanaron y ocuparon varios planteles; muchos profesores, estudiantes y personal no docente de las universidades fueron detenidos en sus mismos lugares de trabajo y estudio, y llevados a centros de detención improvisados, como el Estadio Nacional y el Estadio Chile, para ser brutalmente torturados y, en algunos casos, asesinados y hechos “desaparecer” (Baño 2012). En seguida, a golpe de decreto ley,⁴⁴ la Junta de Gobierno se arrogó el derecho de designar rectores-delegados militares en las universidades. El conjunto de atribuciones que se le otorgaba⁴⁵ implicaba una gran concentración de poderes y facultades en la persona del rector-delegado, que era la expresión directa de la voluntad de los militares de la Junta, pulverizando con ello la relativa autonomía de que habían gozado hasta ese momento las universidades chilenas, y dando marcha atrás al proceso de mayor democratización que habían conocido a partir de la reforma universitaria que estallara en 1967.

En sucesivos decretos ley, los militares fueron definiendo los estatutos de las distintas universidades del país.⁴⁶ Muchos centros y escuelas de ciencias sociales fueron clausurados o sus plantillas significativamente reducidas (Brunner y Barrios 1987, Baño

⁴³ Tomo esa expresión de Cárdenas (2015a).

⁴⁴ Decreto ley n° 50, de 2 de octubre de 1973.

⁴⁵ Decreto de Educación n° 1.300, de 8 de octubre de 1973.

⁴⁶ Decreto ley n° 111 (1.11.73) – Universidad de Chile; Decreto ley n° 112 (14.11.73) – Universidad Católica (de Santiago y Valparaíso); Decreto ley n° 139 (21.11.73) – Universidad de Concepción, Santa María, Austral y del Norte; Decreto ley n° 516 (17.6.74) – Universidad Técnica del Estado.

2012). Así, tras la persecución y la represión indiscriminada de los primeros días vinieron en seguida las delaciones y las exoneraciones. Mediante listas negras elaboradas por infiltrados en la universidad y a partir de acusaciones de miembros de la propia comunidad universitaria, los rectores-delegados fueron identificando a los estudiantes y profesores desafectos. La crítica era sospechosa; el pensamiento, superfluo y subversivo. Como declaró Pinochet años después, resumiendo su propuesta pedagógica: “Los estudiantes van a la Universidad a estudiar, no a pensar... y si aún les quedan energías, para eso está el deporte”.⁴⁷ No hay datos definitivos de la cantidad de expulsados pero algunos cálculos mesurados señalan que un 25% del plantel docente, entre un 10 y un 15% del personal no académico y un 18% de los estudiantes habría sido expulsado de sus respectivos lugares de trabajo y estudio (en las ocho universidades existentes en la época) (Garretón y Pozo 1984, 14).

A la par de la purga de personas, se inició una depuración de contenidos y enfoques teóricos. El pluralismo ideológico estorbaba al nuevo régimen, pero sobre todo incomodaba el marxismo, cuya legitimación como enfoque teórico-metodológico para el análisis de la realidad social había crecido significativamente en el interior de la universidad en muy corto tiempo (Vasconi 1991, 23); por lo tanto, no molestaba tanto la diversidad de enfoques como el influjo de un enfoque que propugnaba la inevitable crisis del capitalismo y la necesidad del socialismo o de una sociedad más humana. La sociología con “patente revolucionaria” (Brunner y Barrios 1987, 81) era una sociología esencialmente marxista, entre cuyas *armas* se contaban “la crítica del campo y la valorización del discurso sociológico en términos del compromiso, el partido y el movimiento popular” (ibíd.: 80). A ojos de los militares golpistas –y de sus adeptos en el campus universitario– se trataba de una sociología sobreideologizada, no científica, que había fomentado el odio entre la “gran familia chilena”⁴⁸ y por ello era menester erradicar el marxismo de la universidad y eliminar de los planes de estudio cualquier referencia al conflicto social o a las clases sociales.⁴⁹ Para tal fin se modificaron los programas de las materias relacionadas con las ciencias sociales y se cerraron muchas cátedras, eliminándose áreas enteras de formación, como la economía política y la sociología política, o reduciéndose drásticamente, como las referidas a los problemas estructurales del desarrollo en América Latina y en Chile (Garretón y Pozo 1984, 85). La batalla ideológica del naciente neoliberalismo de los *Chicago B oys*⁵⁰ –

⁴⁷ Pinochet, Augusto. *Revista Rocinante*, 3 de enero de 1999.

⁴⁸ Esta “fantasía ideológica social” –de acuerdo con Guerrero (2008, 266)– “tiene que ver con la visión construida de una sociedad chilena pre-Unidad Popular como una gran familia, que posibilitaba la existencia de una de las ‘democracias más antiguas de América’. El antagonismo social constitutivo de la sociedad chilena, sus luchas de clase, de género, por el reconocimiento, etc., fueron desplazados hacia otro (‘los comunistas’) como aquel cuerpo extraño dentro del mismo cuerpo social que puso en crisis a la ‘familia chilena’. De manera tal que no es la sociedad, su antagonismo inherente, la fuente de la crisis y ‘decadencia’, sino este Otro, razón por la cual merece el castigo y desaparición”.

⁴⁹ La pretensión homogeneizadora se expresó también en el diseño curricular de las carreras, acortando y definiendo rígidamente los planes de estudio para que los estudiantes salieran con un perfil uniforme. Asimismo, se impusieron las materias técnicas y orientadas explícitamente al mercado, en detrimento de las áreas humanísticas.

⁵⁰ Expresión que designa al grupo de economistas que se hicieron cargo de la economía chilena a partir de 1975, la mayoría de ellos formados en la Universidad Católica y con estudios de posgrado en la Universidad de Chicago bajo la dirección de Milton Friedman y Arnold C. Harberger.

furibundamente antimarxista– comenzó a rendir sus frutos al ganar terreno la idea de la polarización ideológica que había caracterizado el período anterior y, en la cual, los intelectuales habrían tenido una gran responsabilidad. Algunos intelectuales y políticos, partidarios en su momento del programa de la Unidad Popular, asumieron esta “culpa”, como veremos más adelante.

Tras esta primera etapa de desestructuración y destrucción del campo académico chileno que implicó la estigmatización de los científicos sociales, la jibarización de las ciencias sociales y la eliminación de enfoques y temáticas, todas ellas acciones destinadas a imponer su propio modelo de instrucción, el régimen militar inició una labor en el ámbito educativo –análoga a la de otras áreas sociales– para erigir una nueva institucionalidad, basada fundamentalmente en la liberalización del mercado de la educación, esto es, su privatización, y en la orientación profesionalizante y mercantilista de todas las actividades y saberes generados en la universidad.

El proceso de neoliberalización arrancó en 1975. Para la Dictadura militar y los grupos económicos que la sustentaban, el acceso a la universidad fue considerado una inversión que las familias debían asumir, un paso de adiestramiento (disciplinamiento) de las personas para el mercado de trabajo. A la vez, las universidades fueron vistas como empresas, que debían autofinanciarse; para ello contaban principalmente con dos fuentes: el cobro de aranceles a las familias y la venta de servicios que la propia universidad debía ofrecer a otras empresas y a las instituciones gubernamentales.⁵¹ Esta concepción se tradujo en una reducción drástica de los aportes estatales a las universidades; la educación dejó de ser considerada un derecho y un área de interés social, y pasó a ser vista como una mercancía que se transa en el mercado, y un negocio lucrativo para los inversionistas privados.⁵² La Ley General de Universidades⁵³, promulgada en 1980, fue el texto que sancionó estas políticas al formalizar una nueva legislación universitaria que culminaba el desmantelamiento de las ciencias sociales, ponía fin a la concepción de universalidad y gratuidad de la educación y abría esta área a la iniciativa privada. De las ciencias sociales, sólo la ingeniería comercial –economía–, depurada de contenidos críticos, obtuvo el reconocimiento de título universitario, de un total de doce carreras.

⁵¹ Para el Ministerio de Educación, la validez del conocimiento social se verificaba solo si era transable en el mercado de fuerza de trabajo o de conocimientos; de ahí que la venta de servicios de investigación, además de contribuir al autofinanciamiento de las universidades, constituyera la constatación empírica de que las universidades “persiguen fines prácticos” (citado en Garretón y Pozo 1984, 24). Desde esta perspectiva, las ciencias sociales carecían a todas luces de interés y utilidad para la Dictadura.

⁵² El Decreto con Fuerza de Ley n° 4, de 20 de enero de 1981, estipuló nuevas normas de financiamiento universitario: el aporte fiscal a las universidades se redujo constante y progresivamente en los años siguientes hasta estancarse en el 50% del aporte recibido hasta ese año. Es decir, se decretó que en 1981 recibieran un aporte igual al del año anterior, en 1982 el 90%, en 1983, el 75%, en 1984, el 60% y a partir de 1985, el 50%. Hay que considerar que en los años previos, el aporte fiscal ya se había reducido significativamente: de un 86.2% del total de ingresos de las ocho universidades existentes en el país en 1974 a un 66.2% en 1980 (Garretón y Pozo 1984, 86).

⁵³ Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del 30 de diciembre de 1980, del Ministerio de Educación.

La conjunción de la perspectiva militar con la orientación de la economía neoliberal fue configurando un modelo de universidad que Garretón y Pozo (1984, 103) describieron como sigue:

Ha ido surgiendo un sistema universitario cuyas características básicas son: el control militar estatal de tipo vertical, la reducción del tamaño e irradiación de la universidad, la jerarquización interna, fragmentación y dispersión, la elitización de la base social universitaria, el predominio de criterios mercantiles de rentabilidad en la asignación de recursos y en la orientación general de la actividad académica, la discriminación y el control ideológicos, y la entronización de la educación profesionalizante.

Estas características dibujan un campo académico controlado casi en su totalidad por el poder político militar, en el que resultaba difícil ejercer labores de investigación o de docencia de acuerdo con criterios “específicamente” científicos o en áreas que no tuvieran una directa aplicación comercial y un interés pecuniario.

En estos primeros años, los científicos sociales críticos, como otros sectores opositores, se vieron enfrentados a una brutal e “irracional” represión generalizada por parte de la Dictadura. En medio de la consternación y del asombro generado por la virulenta acción militar, los académicos –muchos de ellos militantes o dirigentes de partidos políticos de izquierda– buscaron distintas vías para salvar sus vidas y, a la postre, la posibilidad de seguir ejerciendo una labor académica: una de las más importantes fue el asilo y, posteriormente, el exilio. Si los acontecimientos socio-políticos que se habían sucedido en Chile desde mediados de los sesenta y más claramente desde el triunfo electoral de la Unidad Popular, habían atraído a un número significativo de investigadores sociales, convirtiendo al país en el *centro* del pensamiento crítico de la región, el golpe de Estado y la represión posterior tuvieron exactamente el efecto contrario, desencadenando, a decir de Vasconi, “un fuerte movimiento centrífugo” (1991, 42). Ello, aunado a las respectivas dictaduras en los otros países del Cono Sur, que con anterioridad habían forzado el exilio de muchos de los intelectuales que se encontraban en Chile, provocó una *diáspora* de científicos sociales hacia otras partes del mundo.

Ese proceso de éxodo se vio favorecido por la acción propositiva de algunas instituciones en otros países europeos y latinoamericanos. Algunos científicos sociales de la región, reunidos en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), consternados ante la represión y la violación sistemática de los derechos humanos ejercida por la Dictadura *pinochetista*, consideraron imperioso ampliar “la solidaridad individual, colectiva e institucional de quienes laboran en el campo de las Ciencias Sociales, en forma tal que se ofrezca de manera efectiva oportunidad de trabajo a los colegas que en razón de los hechos referidos han tenido,[o] tienen que salir de Chile” (Clacso 1974). Para ello la institución regional implementó programas de ubicación y reubicación de profesores y estudiantes en universidades y centros académicos de diversos países, para que pudieran ejercer la docencia y la investigación, en el primer caso, y concluir o profundizar sus estudios, en el segundo.⁵⁴ La “beca Pinochet”,

⁵⁴ Para un análisis detallado de estas acciones entre 1973 y 1975, véase Bayle (2008).

expresión con la que el característico humor negro chileno alude al exilio, en algunos casos se verificó como la oportunidad de acceder a instituciones de educación en el extranjero.

La primera victoria de la Dictadura en el mundo intelectual fue *táctica*, destruyó la institucionalidad que sostenía el pensamiento crítico y desterró, encarceló y asesinó a gran parte de lo mejor de la intelectualidad chilena.

2.1.2. *El desarme ideológico de las ciencias sociales*

La segunda victoria de la Dictadura fue producir una profunda mutación en gran parte de la hasta entonces intelectualidad crítica. A raíz del golpe de Estado, los intelectuales que adhirieron al proyecto de la Unidad Popular, comenzaron un proceso de *renovación*, cuyo primer paso fue un enjuiciamiento de: a) su rol como científicos y la construcción de las ciencias sociales chilenas; b) el método teórico-metodológico que habían abrazado en los años previos; y c) el proyecto político que habían apoyado. En cada uno de esos planos, el resultado fue una renuncia: primero, al ideal (o figura) del intelectual orgánico; segundo, al marxismo; y, tercero, a la revolución y al socialismo.⁵⁵ A continuación exponemos los elementos fundamentales de ese proceso de revisión y cuestionamiento.

2.1.2.1. *La primera renuncia: al intelectual total*

A diferencia del campo académico que la Dictadura modeló a su imagen y semejanza, el campo académico vigente hasta el golpe de Estado no estaba férreamente controlado por las instituciones gubernamentales: era un campo que gozaba de una considerable autonomía del poder político y, sin embargo, era un campo fuertemente politizado o ideologizado.⁵⁶ No se trata, a nuestro juicio, de una contradicción. La autonomía del campo académico no entraña en ningún caso unas ciencias (sociales) axiológicamente

⁵⁵ Los ordinales no implican, necesariamente, una sucesión cronológica. El conjunto de esferas o dimensiones sobre las que se vuelca la “crítica” es, por su naturaleza imbricada, difícil de diseccionar. A efectos analíticos establecemos esta separación.

⁵⁶ La noción de ideología merece unas líneas aclaratorias del sentido que le otorgamos en este trabajo. Quizás su ambigüedad y la disparidad de significados, a menudo contradictorios, que se le han atribuido a este concepto expliquen la fuerza y la vitalidad que ha demostrado a lo largo del siglo XX. En un sentido marxista primigenio, ideología alude a la falsa conciencia, a una concepción ilusoria (no real) en la cual la realidad aparece, precisamente, invertida y falseada. Hasta aquí el concepto tiene una connotación claramente peyorativa y Marx lo usa para referirse a las ideas de la burguesía, a una concepción deformada y alienada de la realidad. Pero, con Lenin y después con Mannheim, el concepto se amplía para denotar cualquier concepción de la realidad, vinculada a los intereses de ciertas clases sociales. Así como hay una ideología burguesa habría una ideología proletaria. Esta segunda acepción alude a la concepción o visión del mundo, y no es intrínsecamente negativa. La ideología sería el conjunto de ideas, valores, representaciones y orientaciones cognitivas vinculadas a un punto de vista social, a una clase. Así fue asumida por el movimiento obrero cuando éste comenzó a hablar de lucha ideológica, de trabajo ideológico, etc. Ambos sentidos se confunden a menudo en el cuestionamiento que realizan las ciencias sociales chilenas, como veremos en detalle más adelante: desde una perspectiva crítica, en cuanto falsa conciencia (de ahí el reconocimiento de no conocer suficientemente la realidad chilena, de derivar postulados de leyes generales, de voluntarismo, etc.) y, desde una perspectiva reaccionaria, en cuanto visión social del mundo (aquí asociándola a un pretendido “totalitarismo” del comunismo que propugnaba imponer una Dictadura del proletariado, eliminar a los burgueses y su visión social del mundo). Sobre la historia del concepto de “ideología”, véase Löwy (1991, 9-32).

neutras o unos científicos (sociales) apolíticos o despolitizados, sino unos que reconocen la *toma* de posición social y los valores y presupuestos emanados de dicho posicionamiento como *parte de* sus elaboraciones teóricas. Por el contrario, la heteronomía del campo deriva de la imposición de preceptos *desde fuera* de la academia –desde agentes que no son parte del campo y con criterios que no son los que la comunidad científica se ha dado– para evaluar el quehacer y los productos del científico social.

El carácter político de las ciencias sociales chilenas ha sido una constante histórica, al punto de que “la emergencia y el desarrollo de la sociología universitaria de corte moderno estuvieron asociados a los proyectos de cambios estructurales y políticos de signo progresista que la sociedad chilena vivió en la década del sesenta y principios de los setenta” (Garretón 2007, 212).⁵⁷ Coincide con esta apreciación el sociólogo Rodrigo Baño, quien reconoce que “la sociología nuestra siempre fue bastante política. Política en un doble sentido: porque se preocupaba de temas políticos y *porque partía de una e valuación política*” (Baño 1984, 100, cursivas mías). De acuerdo con lo anterior, la radicalización del proceso político a lo largo de la “década larga de los sesenta”⁵⁸ habría inclinado a los científicos sociales –como a muchas otras comunidades–⁵⁹ a adoptar un papel más *militante*, reconociendo plenamente la función política de su producción teórica, y entendiendo su labor como parte de la confrontación que cimbraba al conjunto de la sociedad. El conocimiento no se concebía sin un *valor de uso*, es decir, sin una *utilidad*. Muchos han querido ver en este rasgo la extrema dependencia de las ciencias sociales respecto de los mandatos políticos, pero lo cierto es que la importancia otorgada a los *usos políticos de l conocimiento social* no necesariamente iba en detrimento de la *cientificidad* de ese conocimiento. Por el contrario, resulta difícil negar que las ciencias sociales latinoamericanas dieron, por entonces, un salto cualitativo:

La década de los sesenta inicia una suerte de época de oro de nuestras ciencias sociales, que por primera vez dejan de ser una mera caja de resonancia de lo que se dice en Europa o Estados Unidos, para configurar su propia problemática y hasta pretender elaborar su propia teoría: la de la dependencia. [...] Esas ciencias sociales están además altamente politizadas y en un interesante vaivén dialéctico contribuyen, a su turno a dar asidero científico a las tareas de las diversas organizaciones políticas (Cueva 2008a, 190).

En consecuencia, la universidad no era vista como una *isla* al margen de las disputas sociopolíticas, sino como un escenario –no el menos relevante, por cierto– de la *batalla*;

⁵⁷ Por otra parte, este rasgo no sería exclusivo del país andino; según el sociólogo boliviano Fernando Calderón y la socióloga chilena Patricia Provoste, las ciencias sociales latinoamericanas siempre han tenido una gran “vocación por las transformaciones progresivas de la sociedad” (1989, 78).

⁵⁸ Aquí seguimos a Vasconi (1991), que usa esta expresión o la de “década revolucionaria” para referirse al periodo que va desde 1959 a 1973. El triunfo de la Revolución Cubana marca el inicio de la década; con él arranca una profunda *renovación* teórico-práctica de la izquierda latinoamericana, en general, y chilena, en particular, que tiene su correlato en las ciencias sociales y específicamente en el pensamiento sociológico. Renovación distinta a la que nos ocupa en este trabajo.

⁵⁹ Recuérdese, por ejemplo, la confluencia de cristianos y socialistas (v. gr. “Cristianos por el socialismo” y la propia Teología de la Liberación).

un espacio en el que se reflejaban, procesaban y, en ocasiones, proyectaban aquellos conflictos. Pero ello no anulaba la diversidad de posiciones en el seno de la universidad y la confrontación de opiniones emanadas de las distintas ubicaciones en el campo académico y de los compromisos sociopolíticos asumidos por los investigadores. Como nunca antes, en la *década revolucionaria* se evidenció el carácter de *campo de lucha* de la academia:

El compromiso de la universidad “de la reforma”, si bien tenía innegables dimensiones políticas, no era el compromiso con un gobierno determinado: nunca la universidad alienó su derecho a criticar y a cuestionar la gestión política, así como jamás confundió sus tareas con el programa y las metas del gobierno. La libertad, el pluralismo, la autonomía y la democracia interna impedían estructuralmente cualquier tipo de compromiso irrestricto. Ni el gobierno de Frei ni el de Allende pudieron seriamente pretender que la universidad fuese uno de sus aliados: tanto uno como el otro encontraron en ella adversarios intelectuales e ideológicos u oposición estudiantil. [...] El “compromiso” preconizado por la reforma no significaba otra cosa que hacer permeable la Universidad al movimiento y a las preocupaciones reales del país (Garretón y Pozo 1984, 20-21).

A pesar del reconocimiento anterior, que abona a la tesis de la notable autonomía del campo académico y de la preeminencia en su interior de los criterios específicos –científicos– frente a los políticos, el proceso de reflexión que inician los científicos sociales a partir del golpe de Estado y de la militarización del conflicto sociopolítico, va a producir una lectura muy distinta del período previo: la de un campo en donde se confunde la acción política con el quehacer académico, y la imagen de unas ciencias sociales obcecadamente militantes, al punto de coartar la libertad de los intelectuales y sesgar su capacidad crítica. Este retrato resulta aún más complejo porque la situación descrita no sería tanto el resultado del control o la injerencia gubernamental como una suerte de “auto-imposición” del científico social, debido a la presión social, a su militancia política y a la concepción predominante en el mundo académico acerca del rol del intelectual y del lugar de la universidad en la disputa ideológica. Así lo constataron Caderón y Provoste en un análisis de alcance latinoamericano que puede aplicarse, *grosso modo*, al contexto chileno:

Puede ser interesante recordar cómo en los ‘60 y los ‘70 (y aún hoy en varios países) se propendía, en un universo académico formado principalmente por las universidades, a una idea de autonomía absoluta, sin injerencia alguna del Estado, pero a la vez se buscaba construir una universidad que fuera la “conciencia crítica de la sociedad”. En los hechos, *la interferencia del Estado en los períodos de democracia parece haber afectado menos a la autonomía intelectual que a la construcción del conocimiento desde una descripción militante ideologizada* (Calderón y Provoste 1989, 79, cursivas mías).

Los científicos sociales habrían sido, pues, los responsables de su propio proceso de subordinación a su condición de militantes a-críticos (el político se habría impuesto al científico, para usar la antinomia *weberiana*). Al parecer, lo que se cuestiona, de acuerdo con este examen, no es tanto el carácter político de las ciencias sociales –que constituiría una seña de identidad en el caso latinoamericano– sino la circunstancia de

que la preocupación política se tradujera en compromiso “ciego” con un proyecto político, con los partidos que lo representaban y hasta con el Gobierno que lo impulsaba. Se cuestiona la transformación del rol del cientista social en el sentido de exigirle “la satisfacción de valores de compromiso, militancia teórica, abandono de los formalismos académicos y crítica de la racionalidad científica” (Brunner y Barrios 1987, 196). Esta conversión se habría producido a lo largo de la década de los sesenta y, más claramente, en el periodo 1970-1973, pues la sociología “es todavía tributaria hasta el año 1967 del modelo disciplinario predominante en los países centrales: el funcionalismo en la teoría, el empiricismo metodológico y el supuesto de la modernización como eje del programa de investigaciones impulsado por los diversos organismos e instituciones establecidos en Santiago” (ibíd.: 77). Pero, “en adelante, la sociología se proclama militante y hace la crítica de la academia, del funcionalismo y de la teoría de la modernización” (ibíd.: 79). Entonces, la militancia se habría convertido en un *deber ser* del científico social; el intelectual orgánico habría sido la hipóstasis de la ciencia.

En una época en la que, como dijera Allende, “ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción biológica”, habían sido mayoritariamente los científicos sociales jóvenes los que habían hecho suya aquella imagen del intelectual *comprometido con la revolución*. Entonces se impuso, a juicio de Garretón (1989, 82), la figura del “intelectual en la tradición del ‘gran intelectual’ ideólogo, aquel que tiene un saber de la totalidad, que conoce las claves secretas de la sociedad, sus leyes de desarrollo y sus niveles de conciencia falsa y verdadera”. Un “profeta”, nos dirá después el sociólogo francés Alain Touraine (1987a, 124). Desde esta perspectiva, esta intelectualidad joven había desempeñado un “rol casi mesiánico” (Tironi 1979, 26). Así lo consignó Garretón con motivo del I Congreso Chileno de Sociología, celebrado en 1984:

Fuimos ingenuos al tener desmesuradas ideas acerca del aporte que podíamos hacer a la sociedad; fuimos una élite que buscaba una posición de poder entre otras élites; reprodujimos las posiciones de antagonismo ideológico que se verificaban en todo el sistema social, y finalmente, caímos en un militanismo estrecho (citado en Villegas 1984, 16).

El “militanismo estrecho” habría anulado su condición de intelectuales críticos, habría convertido a los sociólogos en meras correas de transmisión de las directrices partidarias o, peor aún, en un “revolucionario profesional, casi un violentista, urdidor de teorías descabelladas”, en opinión de Javier Martínez (citado en Villegas 1984, 17). La concepción del intelectual orgánico, alabada hasta ayer, se tornó entonces en el centro de un férreo cuestionamiento a partir de una caracterización frecuentemente *caricaturesca* de aquella figura. Cueva, por ejemplo, denunció la falacia de esa imagen construida *ex profeso* que sustenta el viraje ideológico de la intelectualidad *renovada*, cuyo método favorito “consiste en lo siguiente: en lugar de tratar de descubrir la lógica subyacente en los procesos históricos, *fabrica* los acontecimientos que necesita para justificar su propio razonamiento” (Cueva 2008b, 210). Vasconi, también desde posiciones críticas, señala las consecuencias del razonamiento *renovado* según el cual

“el surgimiento de las dictaduras resultaba en gran parte producto de las ‘provocaciones de la ultraizquierda’ que, ‘asustando a la burguesía’ alentaron a los militares a intervenir. Lo que, por otra [parte], constituía otro y fundamental argumento para rechazar las ‘ideologías’ –teorías, paradigmas, etc.– de los años 60” (Vasconi 1991, 54).

“Intelectual orgánico” resulta ahora una *contradictio in adj ecto*. Los intelectuales vuelcan sobre sí mismos las armas de la crítica que anteriormente habían vertido sobre el “intelectual de academia” (Brunner y Barrios 1987, 196). Ese movimiento tiene dos consecuencias destacables: en primer lugar, los científicos sociales se asumen como los causantes del abandono de su “verdadera” función social, esto es, la de *interpretar e l m undo*, así como de las insuficiencias que puedan atribuírsele a las ciencias sociales chilenas y de la escasa autonomía del campo académico; y, en segundo lugar, en el terreno político y en la medida en que los científicos sociales se habían convertido en actores políticos, esto es, que habían pretendido *transformar e l m undo*, se confiesan corresponsables de la polarización ideológica que caracterizó los años de la Unidad Popular. El corolario de los dos pasos va a significar una transformación radical de las ciencias sociales chilenas.

2.1.2.2. *La segunda renuncia: al marxismo*

La hipótesis de la sobreideologización, o de la “inflación ideológica”⁶⁰, forma parte de la justificación del golpe de Estado.⁶¹ Una consecuencia del proceso de cuestionamiento iniciado por esta intelectualidad (que va a emerger de él *renovada*) es la *subsunción* de aquella tesis en su pensamiento social y político. De esa manera, Garretón caracteriza los años inmediatamente anteriores al golpe de Estado, en cuanto al desarrollo de las ciencias sociales, como un “período de ideologización y polarización dependiente del proceso político nacional” (Garretón 1989, 4). Y Ángel Flisfisch sostiene que ese fenómeno “tuvo buena parte de la responsabilidad de los golpes y advenimientos de los gobiernos autoritarios en la década de los 70” (citado en Vasconi 1991, 54). Es decir, la conclusión como destaca socarronamente Vasconi (1991, 54) es que “los ideólogos –y entre ellos con particular importancia los científicos sociales– ‘inflaron’ tanto sus

⁶⁰ Conceptualización formulada por el economista estadounidense de origen alemán Albert O. Hirschman (1979) y asumida por los intelectuales *renovados* como explicación de la radicalización del pensamiento social y político de los sesenta. Así, Lechner sostiene: “Pienso en la ‘inflación ideológica’, tan típica de la política latinoamericana: la tendencia a sacralizar los principios políticos como verdades absolutas y a guiar la acción política según planificaciones globales” (Lechner 1988, 133).

⁶¹ Es principalmente la Democracia Cristiana quien construye una versión *ad hoc* de la teoría argentina de “los dos demonios” según la cual la polarización ideológica, esto es, la radicalización de los extremos –la ultraizquierda y la ultraderecha– habría desestabilizado el régimen político provocando su colapso, el caos, la ingobernabilidad y, finalmente, la necesaria intervención de los militares. La carta de Eduardo Frei Montalva al presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, justificando el apoyo del PDC al golpe de Estado es ilustrativa de esta construcción ideológica: “El país estaba al borde del caos y [...] la voluntad del Ejecutivo era instaurar una dictadura totalitaria” (Frei 1996, 481). Y continúa: “Es efectivo que como consecuencia de este extremismo armado de la izquierda y sin duda alguna amparado por el gobierno [...] nació inevitablemente un extremismo de derecha también armado” (ibíd.: 484). De ahí que la irrupción militar fuera obligada, aunque “no defendemos los errores que se cometan, inevitables algunos” (ibíd.: 493).

conceptos revolucionarios que acabaron por ‘asustar’ a su burguesía y ‘exasperar’ a los militares”.

La ideología, como vemos, juega un papel capital en este cuestionamiento. Alude a la connotación negativa del término, como falsa conciencia, como ofuscación provocada por la adscripción ciega a consignas no emanadas de la realidad sino descendidas del reino de la abstracción. En este sentido, se reconoce, por ejemplo, que la excesiva politización del mundo académico estaba directamente relacionada con el escaso conocimiento de la realidad nacional. De hecho, la sobreideologización de la producción académica se habría dado precisamente por la desconexión “entre teoría e investigación empírica” (Garretón 1989, 6). Así, se sostiene que la ideologización y la repetición de consignas militantes serían el resultado y a la vez reforzarían las concepciones erróneas y mixtificadas de la historia chilena, del carácter de los procesos sociales y de las particularidades de los actores sociopolíticos. Es decir, a juicio de la “crítica” *renovada*, hasta 1973 la reflexión teórica operaba más como “deducción” de leyes generales –importadas acríticamente de las teorías europeas y estadounidenses– que como elaboración de teorías propias a partir de la investigación sobre realidades específicas. Y ello se debía, en parte, a la “extraordinaria receptividad en Chile para modelos institucionales y de contenido teórico y analítico de la producción académica externa” (ibíd.: 5-6). Pero también se explica, a juicio de Flisfisch (1985), por el proceso de creciente “intelectualización de la política”, característico del campo político chileno, que habría convertido a los partidos políticos en auténticos “partidos de ideas”, favoreciendo la intervención de los intelectuales en el debate político y su acercamiento a la figura de *consejero de l P ríncipe*. También la ausencia de una auténtica intelectualidad liberal-conservadora criolla contribuía, según Lechner (1988, 27), a reforzar la tendencia de la sociología chilena, de tinte claramente progresista, “a elaborar su crítica a través de la discusión europea o norteamericana, lo cual puede distorsionar sus esfuerzos por teorizar la práctica social en América Latina”. En esta lectura, la sobreideologización provenía de una exigua investigación empírica, de un pobre conocimiento de las realidades inmediatas y de una repetición *manualesca* de tesis formuladas a la luz de otros contextos históricos, geográficos y socioculturales.⁶² A la vez, la sobreideologización reforzaba esas debilidades de las ciencias sociales chilenas y, por añadidura, la intelectualización de la política y la intransigencia y dogmatismo de las organizaciones de izquierda: “Nuestra izquierda, todos nosotros, usábamos un cinturón de castidad ideológico, hacíamos una lectura canónica de la teoría, leíamos más los libros que la realidad” (Arrate 2009, 23).

Pero el cuestionamiento ideológico se refiere también a la visión social del mundo, esto es, el *marxismo*, definido como una ideología *total* que en los hechos se traducía en la adhesión a la idea de crisis (sistémica) del capitalismo, la adscripción a la

⁶² Es decir, era expresión de lo que, más tarde, los autores adscritos al giro decolonial en ciencias sociales han dado en llamar “colonialismo epistémico” o “colonialidad del saber”. Véase Lander, Edgardo (comp.) 1993. *La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: Clacso; y Castro-Gómez, Santiago y Ramón Grosfoguel. (eds.) 2007. *El giro de colonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global*. Bogotá: Siglo del Hombre; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar.

revolución como vía para transitar al socialismo, y el socialismo como idea reguladora (horizonte de visibilidad, horizonte normativo y orden social ideal). En consecuencia, había sido el marxismo, ese paradigma “total” –“totalizante” o “totalitario”, para algunos–, el responsable de la *transformación del sociólogo en ideólogo*, esto es, del científico social en intelectual orgánico, y de la reflexión social en llamados a la revolución, que era de acuerdo con esta interpretación, el corolario del análisis marxista de la realidad.

Según este razonamiento, los partidos políticos y los movimientos sociales chilenos se habrían visto arrastrados, en aquellos años, por la lógica de la *guerra fría* y la dinámica interna del país, a adherir a uno de los dos “modelos completos de sociedad” (*Informe Rettig*: 28)⁶³ en disputa: el mundo occidental (combinación de capitalismo y democracia liberal) o el mundo socialista (estatización de los medios de producción y “dictadura del proletariado”). La idea de “modelo completo” es deudora de la noción de “planificaciones globales” del historiador chileno Mario Góngora (1981, 126-138).⁶⁴ Las planificaciones serían grandes utopías, *intransables*, en virtud de las cuales se busca realizar transformaciones radicales de la sociedad, en un sentido *total*, sin admitir “modificaciones, postergaciones ni transacciones” (*Informe Rettig*: 28).⁶⁵ De acuerdo con la crítica *renovada* el socialismo había sido una gran utopía que se había demostrado falible y, además perversa, porque había llevado a una radicalización de las posiciones políticas insostenible y a la intransigencia con los adversarios/enemigos políticos. Habría sido, entonces, la pretensión de imponer uno de estos dos modelos –y aquí resulta significativo que la argumentación del *Informe Rettig* adopta esta forma *neutral* pero en realidad la acusación se refiere a la voluntad de la Unidad Popular de construir el socialismo, pues el capitalismo era el *statu quo* –, sin contar con una *mayoría electoral* suficiente lo que habría provocado el *quiebre democrático*.⁶⁶ La tesis de la polarización esgrimida por la DC y asumida por la izquierda *renovada* pretende situar en un mismo plano a los partidarios de “imponer –según el caso– el cambio o la mantención del modelo de sociedad propiciado” (íd.). Ambos proyectos habrían esgrimido la violencia como la primordial, si no la única, arma política.

⁶³ Ésta es la expresión que se emplea en el *Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación*, conocido como *Informe Rettig*, dado a conocer en 1991. El informe cuenta con un apartado de interpretación histórica del contexto político en 1973 en el que se formulan las tesis de la polarización y de la ideologización de los partidos y movimientos marxistas. El historiador que integró la comisión encargada de elaborar ese informe fue Gonzalo Vial Correa, acérrimo defensor de la Dictadura, que colaboró en la redacción del *Libro Blanco del cambio de gobierno en Chile* (1973) en el que se daba a conocer el supuesto “Plan Zeta”, según el cual algunos sectores de la izquierda iban a realizar un autogolpe; ese montaje sirvió para justificar el golpe militar. Esta interpretación del contexto político previo al golpe de Estado, sancionada en el *Informe Rettig*, se constituye en la verdad histórica oficial que, como todo discurso oficial, pretende investirse de generalidad y soslayar otras memorias.

⁶⁴ Agradezco a Mario Garcés esta referencia.

⁶⁵ Para Góngora, las planificaciones globales habrían dominado la política entre 1964 y 1980, pues tanto el proyecto de la Democracia Cristiana, como el de la Unidad Popular y el de la Dictadura militar estarían inspirados por la idea de que es necesario modificar las *estructuras* y *refundar* la sociedad chilena, adquiriendo una dimensión épica.

⁶⁶ La mayoría electoral se esgrime como condición para transformar en un sentido progresivo la realidad, no así para mantener intocadas las estructuras vigentes o para reforzarlas en un sentido reaccionario.

La argumentación que pone en el centro del análisis el “problema” de la *sobreideologización* de los partidos políticos y movimientos sociales –encarnada en el MIR y algunas fracciones del PS– resulta históricamente falsa y éticamente inaceptable porque: a) presenta una imagen en extremo simplificada de la Unidad Popular y de las tensiones vividas en su seno a lo largo de los tres años de gobierno de Salvador Allende, buscando anular sus diferencias internas en aras de construir una imagen según la cual la UP había sido sobrepasada por sectores partidarios de la vía armada; b) desconoce que el proyecto de la “vía chilena al socialismo” suponía acatar la institucionalidad democrática existente y producir transformaciones radicales *a partir de* la legalidad vigente; y c) oculta la relevancia de la radicalidad fáctica –más allá de la retórica– del gobierno de la Unidad Popular, y aún más, de los proyectos de “poder popular” impulsados desde la izquierda extra gubernamental, cuestión que de ser develada pondría en evidencia los intereses económicos de los grupos tradicionalmente dominantes que planearon el golpe de Estado.

Por otra parte, los movimientos y sectores de la izquierda que supuestamente enarbolaban la violencia política, con más frecuencia llamaban a los trabajadores a defender –con un lenguaje bélico propio de la época y de la posición avanzada del movimiento popular– las conquistas obtenidas y “a crear, fortalecer y multiplicar el Poder Popular, el poder de los Comandos Comunales, el poder de los obreros y de los campesinos, el poder de la revolución” (Enríquez 2004, 262). En ese sentido, parece que el respeto irrestricto a las instituciones democráticas y a las mayorías electorales funge como una coartada perfecta para enmascarar las verdaderas preocupaciones de la burguesía nacional e internacional, y que más bien, “se trataba de sacrificar la democracia para salvar el capitalismo” (Vasconi 1991, 52).

La izquierda *renovada*, al no develar estas falacias detrás de la tesis de la polarización y, por el contrario, recubrirla de legitimidad histórica y científica al reproducirla, va a anatemizar el marxismo como enfoque *total* (léase, conducente al totalitarismo) y no democrático. Esta lectura soslaya el hecho de que la idea de totalidad –en el pensamiento marxista– no remite al “todo”, al conjunto de fenómenos y procesos que tienen lugar en una sociedad, descripción que encaja más bien con el concepto de completitud, sino a los elementos ordenadores que permiten una comprensión de conjunto y que, en el marxismo, son las relaciones *sociales* de producción, que no son sólo económicas, aunque ciertamente algunos análisis adolecían de un economicismo vulgar. De acuerdo con el análisis marxista, la realidad no es un *tótem revolútem* ni se explica por su disposición aparente, sino que tiene un orden subyacente, que el científico social debe desentrañar. La aproximación estructural supone dar cuenta de los mecanismos profundos que condicionan o determinan, según los énfasis, los fenómenos (aparentes) y que explican, por ende, el devenir de las sociedades. Seguimos en este punto al sociólogo Jaime Osorio que describe así la posibilidad de conocer la *totalidad social*:

Conocer, por tanto, *no es poder explicarlo todo ni aprehenderlo todo*, ya que el conocimiento se encuentra limitado ante una realidad sin límites que se recrea día tras día. *Conocer es un esfuerzo que se encamina a desentrañar aquellos elementos que estructuran y organizan la realidad social* y que permiten

explicarla como totalidad. Es, por tanto, necesario distinguir entre *totalidad* y *completud*. La totalidad es lo que organiza una realidad infinita. El conocimiento puede, por tanto, formular una explicación de la totalidad, pero nunca alcanzará la completud (Osorio 2001, 24).

Tenemos, entonces, que la crítica reacciona contra ciertos análisis marxistas⁶⁷ que reducen todos los fenómenos a la existencia de determinadas estructuras económicas. En definitiva impugnan el *reduccionismo e economicista* que divide el mundo en estructura y superestructura, y restringe ésta última a una mera *figuración* de la primera. Pero por esa vía, convierten una parte en el todo: desertan no sólo del economicismo de ciertos análisis marxistas, sino del marxismo en su totalidad. Y desconocen, además, las críticas formuladas desde *dentro* del marxismo contra estas tendencias reduccionistas y simplificadoras de la complejidad social que harían que Marx volviera a exclamar aquello de “tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste”⁶⁸. En este punto coincidimos con Cueva (2008b, 207): “Una cosa es criticar el simplismo de ciertos trabajos de inspiración marxista (simplismo contra el cual el antimarxismo tampoco es el mejor antídoto) y otra, muy distinta, tomar aquello como pretexto para tirar el materialismo histórico por la borda”. Lechner (1988, 29) constató, satisfecho, que “en general, el uso de Marx ha perdido su connotación cuasirreligiosa. En el caso de América del Sur (a diferencia de México y América Central) quizás sea más correcto hablar de un posmarxismo, al menos en el debate intelectual”. Los intelectuales *renovados* habían pasado del marxismo al posmarxismo sin haber leído prácticamente a Marx.

Consideramos que el fenómeno de la polarización ideológica es, en cierto sentido, incuestionable; aunque la imagen, exagerada, de una sociedad cotidianamente al borde del caos, que a la derecha le interesó construir, no resiste un examen serio del periodo de la Unidad Popular. Finalmente, a nuestro juicio, lo que resulta problemático desde el punto de vista de las ciencias sociales y la construcción de conocimiento, es no distinguir entre los dos significados atribuidos a la ideología –como falsa conciencia y como visión social del mundo– y, más aún, atribuirle a la polarización un carácter *causal* en el desarrollo de los acontecimientos posteriores equiparando las posiciones reaccionarias con las revolucionarias. No obstante, como si de un ritual purificador se tratara, los científicos sociales para *renovarse* debían primero expiar sus culpas y redimirse. Al asumirse corresponsables de la polarización ideológica provocada por la legitimación (marxista) de la posibilidad revolucionaria, los científicos sociales renunciarán al marxismo y a la posibilidad de construir un conocimiento útil para la transformación *radical* de la sociedad.

⁶⁷ Hegemonizados por la vertiente estructuralista del marxismo, cuyos máximos representantes fueron Louis Althusser y Nicos Poulantzas. En América Latina sus postulados se difundieron masivamente a partir del texto de la discípula de primero, Marta Harnecker, *Los conceptos elementales del materialismo histórico*, publicado originalmente en 1969. También se ha hablado de marxismo “ortodoxo” o “soviético” o de marxismo de la “III internacional” o “estaliniano” para dar cuenta del predominio, entre los años treinta y los sesenta, de las interpretaciones de la intelectualidad oficial de los países del siempre mal llamado “socialismo real” sobre el marxismo (Vasconi 1991, 18).

⁶⁸ “Todo lo que sé es que no soy marxista”. Citado en Engels (1890).

La lectura de *Los cuadernos de la cárcel* proveyó una vía a esta intelectualidad para *salir del marxismo* en su versión leninista y, a la larga, de cualquier marxismo: Gramsci era “una especie de testimonio personal de anti leninismo” (Garretón 2011a) pero, además, era una víctima del fascismo. Su pensamiento había tenido una débil acogida en la época de la Unidad Popular quizás porque:

Durante esos años parecíamos a punto de “tocar el cielo con la mano”, resultaba particularmente difícil asimilar claves de lectura construidas en tiempos en que el fascismo había derrotado, aunque fuese temporalmente, a los trabajadores italianos, sin contar con que –problema mayor– la discusión sobre la construcción de hegemonía pensada como terreno en disputa, como debate que se da en el seno de las instituciones culturales e intelectuales que constituyen la sociedad civil, como “dirección intelectual y moral”, aparecía en el Chile de aquellos años mediada por la urgencia de una percepción que apuntaba a resolver los problemas del control del aparato estatal, al interior del cual la “vía chilena al socialismo”, al capturar su rama ejecutiva, había puesto una cuña (Massardo 2007, 7).

Efectivamente, las obras de Lenin –*El Estado y la revolución*, por ejemplo– parecían proporcionar un mayor *servicio* en los setenta. Pero en el nuevo contexto –que incluso dio pie a debates acerca del carácter fascista o no de la Dictadura militar–, en la zozobra de la derrota, el pensamiento de Gramsci, forjado en los tiempos oscuros de la represión y de la cárcel, parecía más adecuado para afrontar la realidad de esa inmensa *prisión* que fue Chile durante la Dictadura. La obra del intelectual italiano fue recuperada y traducida a la realidad nacional, dando lugar a muy diversas lecturas. Sin temor a equivocarnos podemos decir que, en clave *renovada*, la lectura de Gramsci tergiversó el sentido de su obra al vaciarla de contenido revolucionario, empleándola esencialmente para justificar la construcción de mayorías (electorales).

2.1.2.3. *La tercera renuncia: a la revolución y al socialismo*

El cuestionamiento académico a los paradigmas omnicomprendidos, a los “saberes de la totalidad” –como diría Garretón– tiene su correlato en el campo político, en la impugnación a la llamada vía chilena, pacífica o legalista, pero también a la revolución como *forma* de producir transformaciones profundas de la sociedad, y al socialismo como horizonte utópico.

Toda derrota política implica repensar el proyecto más allá de la brutalidad de los vencedores. El fracaso no consiste en haber carecido de fuerza armada o revolucionaria, sino en haber concebido un proyecto de tal envergadura, inédito y carente de modelo teórico o histórico como construir el socialismo desde un gobierno democrático, sin una estrategia adecuada (Garretón 2013b, 59).

El *fracaso* de la “vía chilena al socialismo”, a juicio de Garretón, habría sido estratégico. Moulían específica en qué habría consistido: “La tesis básica es que no se cumplen las condiciones de la vía chilena al socialismo, porque tal vía era una vía de tránsito institucional, y para eso se requería de mayoría en el Parlamento. Y, en vez de eso, se ponían en marcha reformas extra-parlamentarias que tensionaban al sistema político” (citado en Durán 2000, 169). La centralidad que adquieren las mayorías

electorales en esta argumentación opaca otros aspectos que tuvieron importancia en la derrota y en el fracaso –si concedemos que algo de las dos cosas hubo– de la Unidad Popular. Esta explicación del golpe otorga preeminencia a la ausencia de mayorías electorales que respaldaran las transformaciones gubernamentales. En consecuencia, la sociología *renovada* concluye que:

Si se quiere transformar la sociedad y se la quiere transformar *no con el método revolucionario*, hay una sola formula [...] porque para tomar el gobierno los necesitamos a ustedes, los demócratacristianos, porque las transformaciones que hay que hacer provocan tal tipo de reacciones que si no se tienen las armas, *y no queremos las armas*, se necesita mayoría (Garretón 2011a, 71, cursivas mías).

La tercera renuncia de la sociología *renovada* es al compromiso con la revolución como método político –generalmente expresado en la *toma* del Estado– pero también, en no pocos casos, como voluntad de transformar *radicalmente* la sociedad, asumiendo la imposibilidad de tal empresa y la viabilidad únicamente de reformas parciales progresivas. El pensamiento *renovado* vuelve a la idea del cambio social a través de *reformas* que había caracterizado a la sociología desarrollista y modernizadora, según la cual los países subdesarrollados deben cumplir determinadas etapas para arribar a un estadio mayor de bienestar económico y social. En ese sentido se cuestiona la desigualdad social provocada por la brecha existente entre sectores sociales, pero no la injusticia de un sistema sustentando en la explotación de los seres humanos. Y se confía en la capacidad de “chorreo” del sistema, esto es, la idea de que el crecimiento económico producirá, a la larga, progreso social. Esta lectura desconoce los aportes formulados por los análisis de la dependencia, que había sido uno de los esfuerzos más significativos de las ciencias sociales latinoamericanas para pensar las realidades de sus países.⁶⁹ De hecho, el cuestionamiento de la sobreideologización de las ciencias sociales, al que hemos aludido anteriormente, tuvo su primera expresión pública en el *juicio* a la teoría de la dependencia formulado inicialmente en el Congreso Latinoamericano de Sociología celebrado en Costa Rica en 1974.⁷⁰ Al desechar las tesis *dependentistas*, que entendían el subdesarrollo de unas naciones como la contracara del desarrollo de otras, los científicos sociales abandonaron también la preocupación por el imperialismo. Por ende, más allá de la antinomia entre reforma o revolución, prevaleció la idea de que cualquier política que buscara modificar el *statu quo* debía realizarse con el respaldo de mayorías parlamentarias amplias, reduciendo la democracia a la cuestión electoral y el desafío del movimiento popular al de su conducción política (partidista). En definitiva, se produjo un vaciamiento de la democracia y una *jibarización* de la política.

Algunos investigadores han llamado la atención sobre el fuerte impacto que el golpe de Estado y la violencia contrarrevolucionaria habían producido en el conjunto de

⁶⁹ Con todas las críticas que puedan formularse a los análisis de la dependencia no puede desconocerse que suponían un esfuerzo de envergadura por situar la problemática latinoamericana en el punto de partida de la reflexión, en contra de la dependencia epistémica que ha caracterizado a las ciencias sociales de la región generando “una suerte de esquizofrenia teórica” (Ruiz Contardo 2004, 52). Una revisión de la teoría de la dependencia en clave decolonial en (Cárdenas 2015b).

⁷⁰ Véase la compilación de ponencias en Camacho (1979).

la sociedad chilena y, particularmente, en la intelectualidad *renovada* (Moyano 2009). Asimismo, los propios actores que vivieron ese proceso dan cuenta de esa lección extraída a raíz de las irrupciones militares en América Latina: “La gran enseñanza de los golpes militares es que el socialismo no puede (no debe) ser un golpe” (Lechner 1988, 26). Esta conclusión desconoce que el socialismo en Chile no había pretendido ser un golpe; precisamente la *originalidad* de la “vía chilena al socialismo” consistía en la voluntad expresa de conjugar socialismo y “democracia, pluralismo y libertad” (Allende 1971). La utopía que guiaba a la Unidad Popular “buscaba la transformación de la existente democracia ‘formal o institucional’ en una auténtica ‘democracia social’” (Illanes 2010).

La imagen de la Unidad Popular como una vía, violenta y antidemocrática, para arribar al socialismo, atenta contra la historia. Tampoco se corresponde con la idea de poder popular defendida principalmente por la izquierda revolucionaria, que entrañaba el control directo –la democracia fundamental– de los trabajadores de los espacios de producción y reproducción de la vida. En ninguna de ellas, la idea de la violencia era central, aunque tampoco desconocieran su existencia. Más bien, tendía a pensarse la violencia referida a las acciones de sabotaje y represión de los grupos de choque (paramilitares) financiados por los conglomerados económicamente dominantes, con el beneplácito y sostén de algunos partidos de ultraderecha como el Partido Nacional.⁷¹

La sociología *renovada* redefine la idea de la revolución a partir de la centralidad de la necesidad de la *violencia revolucionaria*, barriendo con, y desvirtuando, los esfuerzos teóricos y las experiencias políticas que habían tratado de producir transformaciones radicales de la sociedad sin la recurrencia a la lucha armada y, en consecuencia:

Rechaza la modalidad de la revolución, no sólo porque ésta otorga a la toma del poder (metáfora desgraciada, pues el poder no es una cosa, sino una relación social) el carácter de condición previa de las transformaciones socialistas (o “revolución social”), sino porque presupone que esos procesos deben llevarse a cabo mediante la dictadura (del proletariado) y bajo la dirección del Partido (con mayúsculas) (Moulian 2001b).

Y, así, desde la renuncia a la revolución la *renovación* socialista desemboca en el cuestionamiento del socialismo, provocado en parte por el contacto con los países del

⁷¹ La radicalidad discursiva que, supuestamente, tenía un correlato en los hechos, con la preparación de la izquierda para la lucha armada, resulta históricamente insostenible. Ya hemos mencionado el montaje que supuso el “Plan Zeta”. Asimismo, otras investigaciones desde la propia izquierda han evidenciado la escasa capacidad armada al momento del golpe de Estado de los movimientos y sectores más comprometidos con la revolución; véase por ejemplo Garcés y Leyva (2005). Con todo, la necesaria reflexión acerca de los usos políticos de la coacción legítima (“violencia”) por parte de los movimientos revolucionarios, así como de las complejidades de la lucha armada, fue relegada por la renuncia a pensar los conflictos sociales en clave de lucha de clases y por la reducción de todo método político a la contienda electoral, que supone no emprender cambios que no cuenten con un apoyo parlamentario mayoritario. Nótese que esta conclusión deriva de la interpretación del golpe de Estado como respuesta a un proyecto que pretendía introducir transformaciones radicales sin los votos suficientes; cuando, más bien, fue la posibilidad del triunfo de un proyecto con pretensiones revolucionarias en las urnas lo que alertó a la burguesía del peligro que suponía la democracia. Sobre esto volveremos en el punto 2.2.2.

Este de Europa y de la URSS: “Cuando estuvimos allá, en el corazón de ellos, como que se nos derrumbó ese mundo. Y el derrumbe cayó sobre nosotros mismos”, reconoce el socialista Carlos Altamirano (citado en Salazar 2010). Sin embargo, la crítica de los modelos reales de socialismo en amplias capas de la izquierda es anterior a la *renovación* de los ochenta e incluso al golpe de Estado de 1973. En parte, la emergencia de la izquierda revolucionaria chilena constituye una crítica *teórica y práctica* a aquellas realidades y a las directrices de la vieja izquierda (hegemonizada por el PC chileno de acuerdo con la línea marcada desde Moscú).⁷² Y no sólo la izquierda llamada revolucionaria: Salvador Allende criticó sin ambages la invasión de Checoslovaquia por las fuerzas armadas del Pacto de Varsovia (Amorós 2008). Y manifestó siempre que ni la Rusia de 1917 o la China de 1949, ni aún la Revolución Cubana de 1959 constituían modelos para la revolución chilena: “No existen experiencias anteriores que podamos usar como modelo, tenemos que desarrollar la teoría y la práctica de nuevas formas de organización social, política y económica, tanto para la ruptura con el subdesarrollo como para la creación socialista” (Allende 1971).

Una vez más, recurriendo a aquella estrategia que denunciaba Agustín Cueva, estos científicos sociales construyen una caricatura de la izquierda como violentista y no democrática, y condenan sus pretendidas ansias totalitarias, así como una imagen del socialismo como un proyecto autoritario (la “dictadura totalitaria” que, según Frei, quería implantar la izquierda en Chile), que empalma en cierta forma con la denuncia que desde la izquierda europea se hace de la experiencia de los socialismos reales, pero que un análisis minucioso de la propia experiencia de la Unidad Popular pondría en evidencia. Concordamos con el profesor de física e investigador en ciencias sociales Carlos Pérez en que, en este caso, “la crítica de las realidades del socialismo, ampliamente criticables, operó como puente oportuno para la aceptación implícita de los fundamentos del modelo económico y social que se promovía desde la derecha” (Pérez 2014, 8).

Asumiendo que la “vía chilena al socialismo” no era democrática y que el socialismo que se propugnaba se concebía como una abolición de la democracia, los científicos sociales, en su proceso de renovación, sostuvieron la necesaria *democratización de l s ocialismo*,⁷³ que era en realidad su abandono. Si las ciencias sociales críticas habían planteado la incompatibilidad de capitalismo y democracia (en un sentido amplio, esto es, incorporando la dimensión económica y social); las *renovadas* plantean el desafío de conjugar socialismo y democracia.⁷⁴ Por esa vía, los

⁷² Las críticas *desde* la izquierda denunciaban el estalinismo como una “forma no revolucionaria” y llamaban la atención sobre las “desviaciones” del socialismo real respecto de los ideales orientadores del marxismo (Vasconi 1991, 47).

⁷³ Aquí la democratización alude a la democracia formal.

⁷⁴ Nótese como se va produciendo una resignificación del concepto de democracia según la cual éste alude exclusivamente a sus aspectos formales. El DC Ignacio Walker sintetiza así esta postura: “La característica principal de este nuevo socialismo democrático es su revalorización de la democracia política, otrora calificada de meramente ‘formal’ y ‘burguesa’. En esta nueva fase de desarrollo del socialismo chileno a la democracia se la define como ‘espacio y límite’ de la acción política; sus aspectos formales adquieren un valor sustantivo y, lejos de considerársele como una ‘concesión’ de la burguesía, se la aprecia como una conquista popular. En esta nueva mirada renovadora el socialismo es

intelectuales *renovados* pasan a valorar como un bien *intrínseco* las instituciones democráticas, las libertades y los derechos humanos como si éstos habitaran en el aire, desprendidos de todo condicionamiento histórico, social y político. Y reviven y encumbran la democracia parlamentaria como *la única de mocracia posible*. La democracia se desprende de sus adjetivos; se presenta como democracia a secas.

Ciertamente, podemos aceptar que los partidos y movimientos políticos de orientación marxista no tenían una idea definida de cómo tenía que ser una sociedad socialista, y de cómo se hacía para llegar a ella. Existían algunas experiencias históricas que el propio proyecto de la Unidad Popular ponía en entredicho: la “vía chilena al socialismo” era la constatación de que no había modelo para el socialismo chileno. Tampoco parece razonable negar la existencia de dogmatismos, verticalismos, vanguardismos y sectarismos, al interior de los partidos y movimientos que pugnan por el socialismo. Con todo la “crítica” *renovada* se plantea como una superación de aquél, cuando en realidad significa la ruptura con la idea de socialismo. Se trata, a juicio de Vasconi (1991), del movimiento pendular que constituye una característica propia de las ciencias sociales latinoamericanas, que se habrían demostrado incapaces de realizar una superación teórica al modo de una *aufhebung*, esto es, negando unos aspectos y conservando otros.

En definitiva, el desenlace de la Unidad Popular puso en jaque todas las certezas anteriores. Al volver la mirada sobre sí, los científicos sociales cuestionaron tanto su rol como académicos como los proyectos políticos a los que adhirieron, y con ello produjeron un quiebre epistémico y político. El proceso de renovación (socialista) supuso una “ruptura teórico-práctica” (Garretón 2011a, 69) a partir de la “refundación teórica de la matriz ideológica de la izquierda chilena” (íd.). Por eso, el proceso de cuestionamiento del intelectual y de las teorías sociológicas en boga, es inseparable de la revisión y crítica de la “vía chilena al socialismo” y de la construcción de poder popular como experiencias revolucionarias. Ello no es más que un síntoma del carácter profundamente político que siguió teniendo el pensamiento social en los setenta y ochenta y del carácter *anfíbio*⁷⁵ de muchos de los más destacados intelectuales chilenos; no se trata de una trasposición mecánica, entre lo político y lo académico, sino de una rica, compleja y en ocasiones conflictiva relación.

Las ciencias sociales de los sesenta y comienzo de los setenta, que habían asumido un compromiso explícito con la revolución y habían enarbolado la crítica como una de sus armas fundamentales sufrieron un *golpe* aquel 11 de septiembre. José Joaquín Brunner y Alicia Barrios, con sarcasmo, constataron la imagen de unas ciencias sociales finalmente *desarmadas*: con sus instituciones intervenidas por los militares, sus espacios de trabajo desmantelados, sus representantes más destacados perseguidos y exiliados, pero sobre todo cuestionadas internamente, asumiéndose responsables del

visto como una tarea de ‘profundización’ de la propia democracia política (y no como alternativa a la misma)” (Walker 1988, 5-6).

⁷⁵ La socióloga argentina Maristella Svampa propone la figura de un intelectual-investigador anfíbio cuya singularidad es “la capacidad para habitar y recorrer varios mundos, generando así vínculos múltiples, solidaridades y cruces entre realidades diferentes” (Svampa 2007), un ser que reconoce la ambivalencia o la doble pertenencia sin desgarramiento interno.

golpe de Estado, renegando de sus compromisos pasados y de sus herramientas, asomándose al vacío de su eventual irrelevancia y corriendo a salvarse en los brazos de la aquiescencia. El *desarme ideológico* de las ciencias sociales chilenas⁷⁶ es el auténtico triunfo de la Dictadura militar en el campo del pensamiento social y político.

2.2. Las ciencias sociales *renovadas*

En este apartado damos cuenta de dos procesos simultáneos: de un lado, la emergencia de centros académicos independientes, creados al margen de la institucionalidad universitaria controlada por la Dictadura, en los que los científicos sociales chilenos *del interior* y los que vuelven del exilio encuentran un espacio para ejercer la investigación social y la confrontación ideológica. A su vez, en el terreno subjetivo, constatamos la transformación que experimentan las ciencias sociales chilenas, en su versión *renovada*, en cuanto a la construcción de una nueva identidad y nuevas definiciones sobre el rol del sociólogo y de la práctica académica, así como sobre los proyectos posibles de sociedad y las vías para alcanzarlos.

2.2.1. La reconstrucción *extrauniversitaria*

No todos los científicos sociales considerados críticos se exiliaron. Algunos, cuyo compromiso con la revolución había sido menor o menos visible, o que decidieron desafiar al destino, como Enzo Faletto, resolvieron “quedarse en Santiago a la hora de los quiubos⁷⁷, para demostrar que en tiempos de canallas también era posible preservar una actividad intelectual” (Zerán 2009, 146). En este caso, se vieron forzados, sobre todo en los primeros años, a una especie de “exilio interior”⁷⁸ (Vasconi 1991, 43), una experiencia de ajenidad e introversión en una patria que ya no sentían como propia, y en un contexto en que ser sociólogo era considerado sinónimo de “subversivo” o “terrorista” (Barros y Chaparro 2014, 40-43). La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)⁷⁹, cuya sede funcionaba en Santiago de Chile desde su creación en 1957, ocupa un espacio relevante en la salvaguarda de las ciencias sociales chilenas: se convirtió inmediatamente después del golpe de Estado en uno de los pocos *refugios* académicos para un sector de los profesores e investigadores expulsados de las universidades chilenas y perseguidos por los militares: “Se comenzaba a organizar desde el mundo académico, de cuyas universidades seríamos expulsados, la resistencia y crítica de la sociedad que se instalaba a sangre y fuego” (Garretón 2013b, 58). Además de Manuel Antonio Garretón, otros intelectuales exonerados de la Universidad

⁷⁶ Queremos insistir en que no se trata del conjunto de científicos sociales, pero sí de un parte significativa que va a hegemonizar la reflexión social en Chile al menos por las próximas dos décadas.

⁷⁷ Expresión chilena que significa “a la hora de rendir cuentas”.

⁷⁸ Usamos el término en el sentido de un proceso psíquico de encierro en uno mismo, atezado por el miedo, de autocensura, de desgarramiento interno entre el deber ser y el poder, de aislamiento y marginación producida en el mundo interior subjetivo.

⁷⁹ Se constituyó como un organismo internacional, intergubernamental, con carácter regional y autónomo. Es por ello que la Dictadura no pudo intervenirla. No obstante, con el golpe vio completamente trastocados su estructura, modelo de financiamiento y relaciones interinstitucionales vigentes hasta aquel momento, y debió adaptarse al nuevo escenario, pero sobrevivió a la embestida militar.

Católica –como José Joaquín Brunner, Norbert Lechner, Ángel Flisfisch o Tomás Moulian– se integraron a Flacso desde donde pudieron reemprender su labor académica.

Pero se requirieron otros espacios además de la Flacso, por eso desde muy temprano los académicos expulsados de las universidades comenzaron a crear otras instituciones extra-oficiales, independientes del Estado, dedicadas a la investigación y a la “dinamización” social al margen de las universidades en las que ya no resultaba posible cultivar las ciencias sociales y mucho menos el pensamiento crítico.⁸⁰ Estas organizaciones, que han recibido el nombre de Centros Académicos Independientes (CAI), surgieron bajo muy diversas formas jurídicas, estructuras organizativas y objetivos específicos, pero en su gran mayoría con una explícita orientación opositora a la Dictadura.⁸¹ Esta institucionalidad alternativa a la oficial, es decir, a la universitaria, reconfiguró el campo de las ciencias sociales y garantizó la investigación social y, en buena medida, la reflexión crítica a pesar de la *razzia* militar.

En un primer momento los CAI estaban integrados por los académicos expulsados de las universidades que permanecieron en Chile, pero en la década de los ochenta se constituyeron en el mercado de trabajo, también, para los exiliados que comenzaban a regresar al país. En la época de la informalidad laboral, los CAI constituían un “sector académico informal”, una academia sumergida, el principal segmento y el más dinámico del mercado ocupacional para los científicos sociales (Brunner y Barrios 1987, 139). Estos centros eran una especie de *islas* para el ejercicio de la investigación, del pensamiento y también de la política que, como veremos, gozaron de gran autonomía con respecto al Estado,⁸² y ganaron proyección en los años ochenta, al calor de las movilizaciones populares contra la Dictadura y de los procesos de rearticulación de las fuerzas políticas opositoras. Este entramado organizativo permitió retener en el país primero, y acoger después, a un sector de la intelectualidad disidente proporcionándole condiciones de trabajo y la posibilidad de difundir los resultados de sus investigaciones. Las ciencias sociales sobrevivieron *contra* la Dictadura y *a pesar de* la intervención en las universidades, en estas instituciones que proporcionaron, a juicio de algunos autores, la “mayor y más importante producción de investigaciones sobre la realidad nacional” (Garretón 1989, 9). Así, el sector académico

⁸⁰ En las universidades, sobre todo en los años ochenta, a medida que el movimiento estudiantil retomaba fuerza, también se produjeron por parte de algunos académicos esfuerzos por resistir el control totalitario de los militares, y por crear espacios de relativa autonomía, aunque las condiciones imperantes lo hacían extremadamente difícil. Aun para algunos profesores conservadores, la injerencia militar y la nula autonomía de la vida académica, suponían una situación agravante.

⁸¹ Solo unos pocos centros tuvieron una orientación neoliberal y oficialista, como el Centro de Estudios Públicos (CEP), fundado en 1980.

⁸² No deja de sorprender, a primera vista, que tras una persecución tan encarnizada como la que sufrieron los científicos sociales y el cercenamiento tan drástico de las ciencias sociales en las universidades, la Dictadura haya permitido la proliferación de centros de investigación independientes. Quizás la propia lógica de mercado que guía la acción dictatorial provea una explicación: en la medida en que se promueve la iniciativa privada, estos centros aparecen como empresas que entregan un servicio para un mercado; al mismo tiempo, el hecho de que no proporcionen educación (formal), puesto que son centros de investigación, no de docencia, hace que no intervengan (aparentemente) con la labor de adoctrinamiento del Estado. Con todo, es en gran parte en estos centros donde se fragua la oposición (intelectual) a la Dictadura. También influyó en su crecimiento la recepción relativamente abundante de financiamiento desde el exterior, como veremos a continuación.

informal, de acuerdo con el estudio de Brunner y Barrios (1988a, 242-243), “hacia fines de 1985 se hallaba integrado por alrededor de 40 centros privados de investigación en ciencias sociales. Trabajaban en ellos hacia esa misma fecha un total de 543 investigadores, excluidos los ayudantes y becarios, de los cuales alrededor de un 30% poseía estudios de postgrado a nivel de doctorado o maestría”. Muchos científicos sociales habían logrado preservar su actividad: eran sobrevivientes. Así lo constató el presidente del Colegio de Sociólogos, Rodolfo Gálvez, con ocasión de la inauguración del I Congreso Chileno de Sociología: “No somos una especie en extinción, aunque intentaron eliminarnos... y casi lo lograron” (citado en Villegas 1984, 16).

Entre las características fundamentales de los CAI destaca su *carácter no-disciplinario*.⁸³ Ello se tradujo en que la investigación que desarrollaba cada centro se articulaba, en la mayoría de los casos, en torno a un área de estudio o un tema-problema y no en función de una orientación disciplinaria. Al mismo tiempo, esta parcelación de la realidad social dio lugar a un elevado grado de especialización temática y a una ingente cantidad de datos empíricos, en ocasiones rayana en el empirismo. Ciertamente el número de investigaciones producido en la década de los ochenta da cuenta del creciente volumen de información que los científicos sociales acumularon en este periodo sobre sus realidades más inmediatas, pero esa información no siempre se articuló en construcciones teóricas de mediano o largo alcance, ni dio lugar a nuevas teorías, por carecer de marcos interpretativos ampliamente aceptados, por un eclecticismo en el manejo de los enfoques teóricos y metodológicos o simplemente porque existía una actitud –bien valorada, como resultado de la crítica al marxismo estructuralista y a la sociología sistémica– de rechazo al empleo de estructuras conceptuales “fuertes” para interpretar los datos de la realidad. De hecho Garretón (1981, 71-72) subraya, entre las características de esta generación intelectual de los CAI, la “gran flexibilidad en los marcos teóricos, donde las orientaciones propias del investigador no le impiden indagar fuentes contrapuestas”; y Brunner y Barrios (1987, 195) constatan que los investigadores adoptan sin dramatismo “un cierto relativismo frente a los varios enfoques sociológicos”.

Tanto el carácter no-disciplinario de los CAI como la crisis de los paradigmas y, específicamente, del marxismo, a la que hemos aludido más arriba, se conjugaron para producir uno de los rasgos más notables de la sociología, en la década de los ochenta: su debilidad disciplinaria. Al punto que, de acuerdo con Güell (2002, 89), sería “más pertinente hablar de una generación de cientistas sociales que de sociólogos”. A su vez, esta característica se veía reforzada por la ausencia o jibarización de las carreras de sociología en las universidades, pues es en la docencia de pre-grado donde la presencia de criterios, normas y principios disciplinarios claros y delimitados se hace más necesaria.⁸⁴ De esa manera, la investigación estaba temáticamente orientada, no

⁸³ No convenimos en atribuirles una condición interdisciplinaria porque no hubo una voluntad expresa de desarrollar esta perspectiva epistemológica; la constitución de su planta de investigadores fue producto de las condiciones de excepcionalidad y de factores más ligados con vínculos personales o políticos, que de una clara vocación de articular equipos interdisciplinarios.

⁸⁴ La interrupción en la formación de cientistas sociales tiene consecuencias en el desarrollo de las ciencias sociales chilenas; hay en este momento una separación abrupta y casi total entre la docencia y la investigación. La primera casi inexistente; la segunda desvinculada de la formación de las nuevas

disciplinariamente (lo que supondría una tradición de teorías, conceptos y métodos compartidos). Y, en consecuencia, los patrones de evaluación y de reconocimiento de las ciencias sociales, se volvieron extremadamente laxos.

Otra característica de los CAI que influyó en la manera de investigar y en los resultados de la investigación dice relación con la modalidad de financiamiento. La totalidad de centros obtenía la mayor parte de sus recursos del exterior, de distintas fundaciones privadas, ONG, e incluso de instituciones gubernamentales, de Estados Unidos, de Canadá y de algunos países europeos.⁸⁵ Sin embargo, es posible distinguir las agencias financiadoras según la orientación de los CAI, esto es, fundamentalmente y de acuerdo con Brunner y Barrios (1987), entre aquellos que desarrollaban investigaciones “estrictamente” académicas, especializadas y dirigidas a la comunidad de pares, y los que realizaban trabajos de investigación-acción, de capacitación de colectivos, de solidaridad con proyectos comunitarios o de difusión de ideales y valores democráticos, de manera más amplia.⁸⁶ Esta diferenciación habría provocado cierta tensión entre los centros por el acaparamiento de recursos, pues no dejaban de competir en un mercado (“solidario”) de producción y difusión de saberes. Claro está que esta primera distinción orientaba el planteamiento de las investigaciones en función del tipo de agencia que se buscara para financiar el trabajo.

Güell plantea, incluso, la existencia de una suerte de división del trabajo intelectual entre la generación de sociólogos pre-golpe, que es la que organiza y hegemoniza los CAI, y la generación de sociólogos post-golpe, que engloba a los que se están formando entre los años setenta y ochenta y cuyo acceso a los CAI es muy limitado y está subordinado a los primeros; hipótesis que cuestiona la idea del carácter relativamente laxo de los criterios de pertenencia al campo. En este sentido, el autor llama la atención sobre el impacto del carácter relativamente cerrado de los CAI y su impermeabilidad a los sociólogos jóvenes⁸⁷ sobre las líneas y los estilos de investigación:

Los jóvenes encontraron un espacio propio en el trabajo orientado a la reconstrucción de la trama social en la base. Los investigadores de la academia alternativa desconfiaban del trabajo de base y del populismo que animaba a los más jóvenes. Lo acogían a regañadientes por razones presupuestarias, pues parte del financiamiento internacional se canalizaba hacia allá. Desconfiaban

generaciones y de la transmisión del conocimiento acumulado. Como resultado, en los noventa, la sociología está hegemonizada por la misma generación que se formó en los sesenta, advirtiéndose el vacío de sociólogos jóvenes hasta bien avanzada la posdictadura.

⁸⁵ Para una enumeración de las principales instituciones financiadoras véase Brunner y Barrios (1987, 138).

⁸⁶ Entre estos últimos, aquellos vinculados más directamente con los movimientos populares, con una mayor radicalidad en cuanto a las definiciones políticas, serán mal vistos por la académicos “puros”. Por ejemplo, aunque los sociólogos *renovados* describen el campo académico de los CAI como más autónomo que el campo académico en los sesenta y setenta, consideran que “la inserción social de los centros que combinan acción e investigación, da pie a otros mecanismos de cuestionamiento de la autonomía, y que en ciertos sentidos, la ideología ‘basista’ que existe en algunos de ellos opera de manera similar a la identidad militante antes referida” (Calderón y Provoste 1989, 79).

⁸⁷ Aunque el autor sostiene la posibilidad de hablar de una “generación de sociólogos de los setenta post-golpe”, también señala que ésta no se ha constituido explícitamente, esto es, no se ha construido una autoconciencia de generación.

también de la existencia de un sujeto popular y de que sus saberes fueran la fuente de un proyecto político alternativo, lo cual formaba parte del corazón teórico e ideológico de la nueva generación (Güell 2002, 88).

En todo caso, a cada tipo de centro –más inclinado a la investigación o más volcado a la acción sociopolítica y cultural– le correspondería una modalidad de flujo de financiamiento principal que favorecería, a su vez, la presencia de un tipo u otro de investigadores:

Por una parte, estaba el financiamiento académico de las fundaciones internacionales como FORD, Fullbright, CLACSO, que estaban orientados a la reconstitución de la academia, y las fundaciones vinculadas a los partidos progresistas, especialmente europeos. Este financiamiento, normalmente orientado al desarrollo institucional, permitió la actividad académica y fue captado por la generación anterior. Por otra parte, existía el financiamiento de las iglesias y de la cooperación internacional de los estados progresistas, que se justificaba como mitigación de las condiciones de miseria y desamparo de los pueblos del tercer mundo. Esas fuentes eran recelosas del gasto en investigación y exigían promoción directa. Allí se instaló, en general, la generación de los ochenta (Güell 2002, 90).

Independientemente de la agencia, este tipo de financiamiento imponía una lógica *productivista* a la investigación social, pues al estar “atado a proyectos” el monto no se otorgaba al centro en cuestión para que éste lo distribuyera según su propio criterio, sino que los recursos estaban destinados a la realización de un proyecto definido, bajo la responsabilidad de un investigador, con unas características específicas, plazos y resultados esperados, y todo ello supervisado y aceptado por la respectiva agencia. Aunque algunos autores reconocen una amplia capacidad de negociación, era la agencia financiadora, en última instancia, la que definía la idoneidad de llevar a cabo una determinada investigación. Este sistema, al tiempo que garantizaba una relativa autonomía de los investigadores, que eran los que se “conseguían” el financiamiento, con respecto al centro, los forzaba a proporcionar resultados en los tiempos estipulados. Por ende, no puede desconocerse la presión que el modelo de los CAI ejercía sobre los investigadores puesto que “el que no escribe no cobra” (Brunner y Barrios 1987, 157). Este modelo de financiamiento favoreció, indirectamente, las investigaciones de corto alcance, con objetivos relativamente “modestos” y tiempos claramente definidos, en detrimento de reflexiones y elaboraciones teóricas más complejas que, por lo común, maduran en plazos relativamente más largos e implican usos sociales menos específicos. Es, sin duda, uno de los factores que influyó en el aumento notable de la productividad de los investigadores.⁸⁸

El mayor conocimiento de los problemas sociales particulares, inmediatos, se tradujo a su vez en una suerte de *localismo o provincialismo*, por contraposición a la época precedente, en donde los debates sobre el imperialismo, la modernización, el desarrollo, la dependencia y la revolución envolvían a los distintos países de la región y

⁸⁸ También se señala como un elemento favorecedor del incremento de la productividad el hecho de que como algunos centros se dedicaban exclusivamente a la investigación (no se impartía docencia) los científicos sociales disponían de más tiempo para esa labor.

aun se entroncaban con las preocupaciones teórico-políticas de otras áreas geográficas. El *latinoamericanismo* y el *tercermundismo* habían sido rasgos definitorios de las ciencias sociales chilenas de los sesenta, en cuanto pugnaban por planear y entender la problemática del país en el contexto de la región o del conjunto de países *dependientes*. El efecto de atracción que tuvo la Unidad Popular y la “vía chilena al socialismo”, para los académicos de otras latitudes, contribuyó a internacionalizar todavía más los debates que tenían lugar en el país. Varios autores coinciden en señalar que, en la década de los ochenta las ciencias sociales perdieron este rasgo (Vasconi 1991, 11-12, Baño 2012, 88-89). Este localismo característico de las investigaciones se relacionaba con la preocupación por la acumulación de datos empíricos sobre un aspecto concreto de la realidad y la crítica de las teorías “totales”, omnicomprensivas, que habían sido enjuiciadas con la derrota de la Unidad Popular.

A su vez, el empirismo y el localismo se potencian con la llegada de ciertos aires posmodernos, provenientes del exterior, que traen las ideas del fin de los grandes relatos y de la fragmentación del conocimiento y el relativismo en cuestión de verdades. Igual que sucede con las ideologías, se cuestiona y desconfía de todo metarrelato, en favor del único gran relato que declara la imposibilidad de encontrar jerarquías de causalidad explicativa respecto de la realidad. El sociólogo Eduardo Ruiz (2004, 66-67) ha señalado que “buena parte de las ciencias sociales [...] se transforman en ciencias sociales que eluden explicar la reestructuración de las relaciones de dominación ocurrida a partir de las dictaduras de los años setenta”. En esta línea, la renovación del pensamiento social y político suponía la “superación de las ideologías’ en beneficio de la única que, cumpliendo justamente una de las connotaciones esenciales de las ideologías, resulta invisible: la de la dominación capitalista burocrática” (Pérez 2014, 24). El autor alude a la *naturalización*, al carácter evidente y, por lo tanto, incuestionable, del capitalismo desplegado en esta nueva fase de las dictaduras militares.

El abandono de la perspectiva latinoamericana no implica necesariamente una autarquía en términos académicos o la ruptura de lazos con otros espacios intelectuales. Más bien se trata de un giro en las ciencias sociales chilenas que se conecta con procesos a nivel mundial. En ese sentido, el localismo puede ser matizado al tomar en consideración el efecto del exilio en los investigadores y en su quehacer académico. El exilio proporcionó el contacto con otras realidades nacionales y con otros debates, y esa experiencia fue incorporada y procesada de distinta manera por los académicos chilenos durante su expatriación y en su posterior retorno al país. Además, si bien la circulación de ideas en el contexto dictatorial estuvo restringida, entre el exilio y *el interior* tuvieron lugar varios encuentros académicos y políticos en los que las preocupaciones fueron replanteadas en función de las distintas experiencias personales y colectivas. Los debates que dieron lugar a la renovación socialista, por ejemplo, son una buena muestra de esa internacionalización.⁸⁹ Aunque, a decir verdad, este fenómeno se refiere sólo a “un delgado segmento de las ciencias sociales latinoamericanas, aquel que configura la

⁸⁹ Y no sólo el exilio, pues varios académicos chilenos cursaron en esta época sus estudios de posgrado en instituciones académicas europeas.

élite, oligarquía académica o ‘alto clero’ de la comunidad de investigadores” (Brunner 1990, 82). No obstante, es precisamente por la relevancia de los investigadores que toman parte de ese intercambio que algunas de las preocupaciones más características de las ciencias sociales de la época, como la discusión sobre la transición política o el papel de los movimientos sociales en la redemocratización de la sociedad, estuvieron sujetas a ese creciente proceso de intercomunicación nacional y/o regional. A propósito de la influencia del exilio en los debates de las ciencias sociales y particularmente en la renovación del pensamiento político, “no es un dato menor resaltar cómo muchos de estos intelectuales habían circulado por los mismos países, instituciones y/o espacios académicos intelectuales” (Almendras 2007, 104). La importancia de algunos de esos lugares en el exilio, en los que se había alimentado la renovación del pensamiento social y político, la reconoce Moulian (2008, 151):

En Italia hubo dos seminarios. Hay que pensar en la revista *Chile América*, que organiza Viera Gallo. Está Raúl Ampuero ahí en Italia. Después, el seminario de Chantilly que organiza Jorge Arrate. Los seminarios que hace Jorge Arrate en Ámsterdam, en el Instituto para el Nuevo Chile, eso nos pone en contacto con los compañeros que están en el exilio y permite la introducción de nuevos temas, nuevos actores.⁹⁰

Ciertamente, los principales debates sociológicos de las décadas de los setenta y ochenta se nutrieron de la circulación de ideas entre el exilio y *el interior* (Moyano 2011), pero su centralidad y orientación no se explica exclusiva ni fundamentalmente por una simple importación de ideas, sino que remite a una experiencia compleja compartida y transmitida entre los miembros de la élite académica y política.

De manera un tanto sorprendente, considerando la violencia inicial de la que fueron objeto, las ciencias sociales sobrevivieron e incluso incrementaron su acervo de conocimientos durante la Dictadura: “A pesar del carácter muchas veces errático de la investigación, el conocimiento de las distintas realidades nacionales es hoy mucho más profundo y extendido” (Lechner 1988, 30). De hecho, al calor del proceso de autoorganización impulsado “desde dentro” y financiado desde fuera, la investigación social experimentó un crecimiento y una legitimidad como no había conocido hasta entonces:

Nunca antes en Chile, ni siquiera bajo el gobierno de Salvador Allende, se escribió y publicó tanto en Ciencias Sociales como el período 1983-1988. Por primera vez llegó a existir un estrato de intelectuales relativamente masivo, cuya enorme mayoría salvo, por supuesto, por el fenómeno de su “renovación” entonces plenamente en curso, podía contarse en la izquierda, en todo caso, y públicamente contraria a la dictadura (Pérez 2014, 6).

Pero las características de este sector académico extrauniversitario también imprimieron un sello distinto a las ciencias sociales practicadas: “Las ciencias sociales no

⁹⁰ José Antonio Viera-Gallo, fue militante del MAPU, después del Partido por la Democracia (PPD) y del PS; la revista *Chile-América* se editaba en Roma. Raúl Ampuero, histórico socialista “independiente”, se integró al PS a su retorno a Chile en 1989. Jorge Arrate militó en el Partido Socialista, llegando a ser presidente de ese partido en 1990-1991.

desaparecieron en Chile, pero claramente cambiaron” (Baño 2012, 84). Los científicos sociales ganaron la *batalla* en un *frente* –el de la lucha contra la voluntad exterminadora de la Dictadura–, no sin numerosas pérdidas humanas, pero las que emergieron no fueron las mismas ciencias sociales, fueron unas *renovadas*, que en el caso de la sociología hegemónica significó amputaciones teóricas y concesiones ideológicas que supusieron la auténtica derrota del pensamiento crítico:

La sociología radical, totalizante, crítica, con una perspectiva analítica centrada en el subdesarrollo y la dependencia y provista de una propuesta explícita de cambio estructural de nuestras sociedades, que caracterizó al periodo que aproximadamente va de 1965 a 1975, no sucumbió ante el solo peso de sus contradicciones y limitaciones teóricas (que por supuesto las tuvo) sino que *fue víctima de una de las contrarrevoluciones culturales (y desde luego políticas) más violentas de la historia latinoamericana* (Cueva 1988, 8).⁹¹

Los CAI tuvieron un papel muy relevante en “la revolución copernicana que ha experimentado el campo de las ciencias sociales en la región” (Brunner y Barrios 1987, 210). Su estructura organizativa y el modelo de financiamiento se conjugaron con la “crítica” *renovada* sobre los paradigmas totalizantes, sobre la idea del “intelectual total” y sobre la revolución y el socialismo para transformar significativamente las ciencias sociales.

2.2.2. *La renovación ideológica de las ciencias sociales*

Las lecciones extraídas del golpe de Estado, como la responsabilidad que se auto-atribuyeron los científicos sociales en la polarización ideológica y el cuestionamiento del pretendido carácter antidemocrático de la vía revolucionaria –en sus dos versiones: la gubernamental y la de construcción del poder popular–, forzaron deslindes, rupturas y renuncias que impactaron el desarrollo de las ciencias sociales y la concepción del rol del científico social, aunque no exactamente en el sentido que reconocen los intelectuales *renovados*, como veremos en este apartado. Estos científicos sociales y políticos, tras la negación y vaciamiento de su identidad, incorporaron nuevos elementos y afirmaciones en su definición de sí mismos, de su quehacer y de los alcances de su rol político. En ese proceso, “la élite se reinventa, se transforma con los tiempos, abandona el ideologismo pero no el afán de cambios, pero bajo el concepto de innovación, persiste en la búsqueda de lo posible que aún no llega” (Valenzuela Van Treek 2011, 190). Las científicos sociales *renovados* se presentan como menos dogmáticos e ideologizados y más *profesionales*; describen el campo académico como más autónomo de proyectos y partidos políticos; y redefinen la transformación social razonable y posible dentro de los límites de la democracia formal.

⁹¹ Cueva fue uno de los primeros intelectuales de izquierda que criticó la teoría de la dependencia, con motivo del Congreso de Costa Rica al que nos hemos referido anteriormente. Con todo, posteriormente se mostró compungido por la utilización que de esas críticas había hecho la intelectualidad *renovada* y la derecha.

2.2.2.1. ¿El fin de las ideologías?

A decir de Garretón, el “estallido de los paradigmas totalizantes” y, muy especialmente, la “crisis” del marxismo, permitió que “nuevas corrientes de pensamiento, parciales y no totalizadoras, sean tomadas libremente para el estudio de las realidades del país” (Garretón 1989, 12). Lechner es más explícito al sostener que “los golpes militares desmitifican la fe revolucionaria y hacen estallar un marxismo dogmatizado [...]. De un modo cruel y muchas veces traumático acontece una ‘crisis de paradigma’ con un efecto benéfico empero: la ampliación del horizonte cultural y la confrontación con obras antes desdeñadas o ignoradas” (Lechner 1988, 30). La necesidad de extraer lecciones positivas del golpe de Estado constituye un rasgo de la voluntad afirmativa y de la habilidad camaleónica de estos intelectuales. El eclecticismo resultante de esta relación más “libre” con la teoría aparece, desde esta perspectiva, como “un fenómeno saludable en la medida en que significa el abandono de la exégesis o la ‘aplicación’ de una teoría pre-constituida y se busca dar cuenta de determinada realidad social (Lechner 1988, 30).

No cabe duda de que la crisis del marxismo, o de cierto marxismo, abrió la puerta para repensar algunas verdades inconcusas, ciertas simplificaciones deformadoras de la realidad, y no pocos recetarios mecánicos del cambio social. En ese sentido, el proceso de enjuiciamiento de ese marxismo vulgar resultó enriquecedor para el pensamiento social, al ampliar y volver más compleja la realidad social. Con todo, ya hemos señalado anteriormente (apartado 2.1.2) que la crítica al *marxismo vulgar* se produjo también *desde el marxismo*, con vistas a recuperar el método marxista para el análisis de la realidad, que contradice cualquier aplicación mecánica o deductiva de la teoría, y que en este caso significó una vuelta a, o recuperación de, ciertas corrientes subordinadas del marxismo y aun de los trabajos del propio Marx. Por el contrario, los científicos sociales *renovados* plantearon sus cuestionamientos *desde fuera ya del marxismo*, esto es, se asumieron como posmarxistas, porque si, desde su punto de vista, el marxismo había sido el responsable, como vimos, de la sobreideologización de las ciencias sociales y de la transformación en ideólogos de los científicos sociales, lo lógico era desertar de aquel paradigma teórico-metodológico.

Así, el cuestionamiento de la teoría con mayúsculas, de los grandes relatos, y específicamente del marxismo como *un todo*, se traduce en las nuevas ciencias sociales en que en la mayor parte de las investigaciones “no hay recurso a marcos teóricos y analíticos omnicomprendivos y cerrados y hay mucho mayor respeto por la indagación de la realidad” (Garretón 1989, 10). El imperio de la *empiría* sobre la teoría dio lugar, efectivamente, a una mayor acumulación de datos, pero también a la deriva empirista de la investigación social, pues frecuentemente los investigadores coleccionaban información sin ordenarla en un modelo explicativo del fenómeno al que supuestamente se referían y sin producir tampoco, a partir del análisis de esa información, nuevos esquemas interpretativos de la realidad. Así, buena parte de estas ciencias sociales naufragaban ilusoriamente en la pretendida neutralidad valórica. A decir de Garretón, emerge un pensamiento “no ideológico, que carece de marcos monolíticos y prescinde

de opciones políticas específicas, como las de antaño” (citado en Pinto 2000, 193). Al no adherir explícitamente a modelos de análisis de la realidad, los científicos sociales presupuñían o hacían ver que investigaban sin los dogmas y prejuicios del pasado, cuando frecuentemente enmascaraban sus orientaciones valorativas tras una montaña de datos o detrás de *la naturalización de los fenómenos sociales*, como sucede con la puesta en valor de la democracia parlamentaria/burguesa/formal, presentada ahora como democracia a secas.

La crítica *renovada* valoró positivamente la *ausencia of fragmentación* de paradigmas teóricos para el desarrollo de las ciencias sociales, pero no pudo dejar de reconocer que:

Lo que entre nosotros a veces se llama renovación teórica de algunas de las ciencias sociales equivale, más bien, al abandono de los varios “modelos de ortodoxia” predominantes en parte de los años 1960 y 1970. En cambio, resultaría difícil encontrar producciones teóricas, originadas en América Latina, que hubieran sustituido el esfuerzo desarrollado por los “dependentistas”, o que, pudiera estimarse, participan de la discusión teórica en curso en los países del Norte. Más bien, nosotros nos especializamos “por temas”, pero desconectadamente del tronco central de las disciplinas y de sus especialidades y con un bajo umbral teórico (Brunner 1990, 83).

En efecto, la desconexión a la que alude Brunner fue caracterizada por otros autores como “desorientación de las ciencias sociales” latinoamericanas (Vasconi 1991, 63) o como “incertidumbre en la construcción del conocimiento científico-social” (Calderón y Provoste 1989, 69). Pero Brunner y Barrios (1987, 210) consideraban que se trataba de una postura trasnochada:

Incluso hay quienes miran con nostalgia esa vieja figura del intelectual y que rechazan las nuevas prácticas e identidades que han ido surgiendo en el campo de las ciencias sociales [...]. Se echa de menos, sobre todo, una mayor orientación de los analistas sociales hacia las “totalidades” y, en el límite, se acusa a estos “intelectuales específicos” de haber dejado caer la función “totalizadora” o sintética para convertirse en meros “profesionales” de la investigación, altamente especializados pero carentes de una visión teórica y, por tanto, incapaces de producir una crítica global de la sociedad como un todo y de ofrecer una alternativa para su transformación global.

A raíz del proceso de renovación de las ciencias sociales, aparentemente la construcción de ideologías habría sido dejada a los políticos, y los científicos sociales habrían mantenido una relación más *instrumental* –sin identificación ideológica– con los enfoques y teorías. En este sentido, el mayor eclecticismo conceptual presente en las investigaciones reforzaba la idea de que “tal vez el hecho más llamativo de las ciencias sociales latinoamericanas del presente sea, en general, su menor grado de *adscripción o paradigmas identificables*” (Brunner y Barrios 1987, 207).

Creemos que es necesario matizar la tesis de que el giro copernicano que habría caracterizado a las ciencias sociales chilenas consistiría en la “ausencia de ‘grandes debates’ unificadores del campo” (íd.). Como veremos más adelante, la transición a la democracia se convirtió en el marco teórico-ideológico desde el cual se construyó una

parte ingente de la producción de ciencias sociales (dando lugar a la *transitología*). Se trata, en cierta forma, del predominio del enfoque *politicista* (o de la *real politik*) en la investigación social; de ahí el auge de la ciencia política en la década de los ochenta que eclipsó o colonizó a la sociología. Para Cueva (2008b, 214), se trata del influjo del paradigma neoliberal por cuanto estas ciencias sociales *renovadas* “comparten la teoría liberal del orden social, en la medida en que dan por supuesto que el poder se constituye gracias a la libre competencia de ideas, imágenes y representaciones, que no como una constelación estructural ubicada a mayor profundidad”, fruto del abandono del marxismo y del análisis estructural. En este sentido, hay que reconocer que el “paradigma de la democracia” constituía una concepción más restrictiva de las teorías sociales, pues no propugnaba transformaciones sustantivas de la sociedad, sino que adhería, como señala Cueva, a la idea liberal de la democracia que descansa sobre un aparente pluralismo político y sobre el electoralismo como ideología política: se defendía la participación ciudadana para escoger entre opciones partidistas que pertenecen en realidad a la misma orientación económica y política. En definitiva, hay alternancia sin alternativa (Modonesi 2008). De esta forma, con la renovación socialista “la revolución socialista quedará aplazada *sine die*” (Cueva 2008a, 198).

2.2.2.2. ¿La autonomía del campo académico y el sociólogo profesional?

Los intelectuales *renovados* también señalan que la experiencia traumática del golpe se tradujo en una mayor autonomía del campo académico con respecto al campo político (Brunner y Barrios 1987, Lechner 1988), y en el rol más modesto y especializado que se le atribuye al científico social. Es decir, en contraposición con la imagen del intelectual orgánico, del sociólogo militante, hegemónica en las décadas anteriores, ahora “vuelve a primar el crítico por sobre el profeta y la vocación política ya no se apoya en un compromiso de militancia partidista” (Lechner 1988, 32). Para Garretón (1989, 17), “es posible percibir una mayor identificación con intereses propios, corporativos o de carrera, lo que refuerza su mayor autonomía respecto de los campos económico, político e ideológico”. Calderón y Provoste (1989, 79) comparten esta descripción de un “proceso de autonomización del quehacer profesional respecto de las adscripciones políticas y sociales” y señalan que el hecho de que la vocación académica “se defina hoy principalmente desde la práctica profesional y no tanto desde una relación adscriptiva al Estado, a los partidos, o a grupos sociales determinados, pueda contribuir a dar a las instituciones un arraigo en la sociedad civil que facilite su estabilidad en el largo plazo” (ibíd.: 78). La aparente neutralidad valorativa constituiría entonces la condición para garantizar la estabilidad de la academia y el bienestar de la “clase académica”. De acuerdo con esta lectura, en los ochenta el científico social se especializa en una determinada área de conocimiento y, por esa vía, adquiere un perfil *profesional*; abandona la búsqueda del “saber total” o de las “verdades ocultas” de la realidad social y se vuelve un *especialista* en ciertas parcelas de conocimiento. Así, el saber aparece fragmentado, pero con “mayor respecto por” la realidad, para usar la expresión de Garretón. Touraine resume la transformación que, a su juicio, habían vivido los científicos sociales latinoamericanos del siguiente modo:

En los regímenes autoritarios los intelectuales, a menudo expulsados de las universidades, obligados a una mayor profesionalización para conseguir contratos de investigación, y decepcionados por la caída de los regímenes democráticos, han desarrollado un pensamiento a la vez profesional y crítico, sin identificarse más como agentes “de progreso o revolución”. Contribuyen a definir el sistema social y político con sus límites, sus conflictos, sus mecanismos de funcionamiento. En los países donde se han mantenido elementos del sistema político anterior, en México, en Venezuela, Colombia y en parte Perú, se mantiene con fuerza el antiguo tipo de intelectuales “comprometidos y proféticos”, fuertemente desarticulados respecto de la vida política nacional. La historia y los debates de las ciencias sociales a nivel continental son dominados por la tensión creciente entre estas dos definiciones opuestas del contenido y del papel de las ciencias sociales; pero aparece rápido el progreso de la tendencia profesional crítica frente a la tendencia comprometida profética (Touraine 1987a, 124).

Desde nuestra perspectiva estas apreciaciones son absolutamente erradas: la reconfiguración del campo académico que se dio en torno a la emergencia de los CAI se constituyó en una de las principales *arenas de la lucha política* en los años ochenta y los científicos sociales *renovados* jugaron un rol fundamental –como no habían tenido anteriormente– en la construcción y legitimación de opciones políticas *específicas*; de hecho, los centros académicos independientes se constituyeron en el espacio, *par excellence*, de la discusión política, toda vez que los partidos políticos estaban ilegalizados y las instituciones de la democracia parlamentaria abolidas. Es por ello que “el trabajo intelectual no solo tenía inclinaciones políticas, sino que era ‘la forma’ pública y tolerada de hacer política” (Moyano 2011b, 198). Gonzalo Delamaza y Carlos Ochsenius amplían esta *arena* al conjunto de organizaciones de la sociedad civil:

La participación en las organizaciones de la sociedad civil –las muchas asociaciones y movimientos que desde distintas trincheras lucharon por la recuperación democrática– se demostró como una cualidad valorada, pero no en sí misma, sino en cuanto la sociedad civil constituyó una especie de sucedáneo de la arena política en la que podían ejercerse y desplegarse los liderazgos, a la espera de la reorganización partidaria (Delamaza y Ochsenius 2006, 485).

De esta manera, “los contactos entre las diversas oenegés y los centros académicos independientes sirvieron para limar suspicacias históricas entre los decés y los socialistas y operaron como viveros de futuros hombres públicos, desplazando a veces a políticos de carrera” (Otano 2006, 158).

Los científicos sociales *renovados* habían producido un quiebre con el marxismo y con el compromiso revolucionario, pero dudamos que ello signifique una ausencia de ideología o una menor adscripción a partidos o colectividades políticas. Se sostiene habitualmente que su vocación crítica se verifica en el cuestionamiento de la dictadura y la adhesión, *en abs tracto*, a la democracia. Esta adhesión no sería ideológica o partidista, porque la democracia habría sido previamente definida como un sistema político a-histórico y a-geográfico –naturalizada, por tanto– cuya validez y oportunidad está fuera de toda duda.

A nuestro parecer es, interesadamente, engañoso presentar la adhesión de los intelectuales *renovados* a la democracia como un compromiso desideologizado, porque

deja en las sombras la batalla ideológica por llenar de contenido este último concepto. En cierta forma, el concepto de democracia se convirtió en el *significante vacío* (Laclau 2005) que permitió aglutinar a la oposición contra la Dictadura. El nombre de democracia fungió como un *punto nodal* en la construcción discursiva de la oposición, que les permitió a los intelectuales *renovados* construir una hegemonía política. La posibilidad de la operación hegemónica radicaba precisamente en la vacuidad de ese concepto en el que todas las identidades parciales excluidas del modelo dictatorial podían sentirse identificadas porque ninguna de ellas se fijaba específicamente sino sólo como equivalente. La imposibilidad de especificar, de introducir la diferenciación en este momento de la operación hegemónica, es lo que permitía homogeneizar las distintas representaciones que la cadena de equivalentes expresaba y producir a la democracia como una *totalidad* a la vez imposible y necesaria: “La contraposición simple ‘democracia-dictadura’, además de operar como un muy buen eslogan de campaña, parecía no ofrecer mayor complejidad. Aparentemente todos sabían qué era una democracia, y a nadie le cabía ninguna duda de qué es lo que se rechazaba como dictadura” (Pérez 2014, 11). La democracia se va vaciando de contenidos en la medida en que se va construyendo como lo antagónico a la dictadura, funcionando como el *lugar* en el que confluyen todas las reivindicaciones que impugnan el orden existente –cuya único grado de similitud es oponerse a lo existente estructurando una *cadena equivalencial*– sin permitir una fijación de reivindicaciones o características específicas, es decir, cuya equivalencia es siempre inestable, indeterminada. A menudo a este carácter de significante sin significado se le ha nombrado como una “ambigüedad deliberada” (González 2008, 173-200).

Es precisamente por irse *vaciando de contenido* para representar todo aquello que se reclama opositor a la Dictadura, que el nombre de democracia permite estructurar un sistema de significación pleno y estable, totalizador. Pero en otro nivel, también se da una disputa de significados en torno al concepto de democracia. En este sentido, democracia se convierte en un *significante flotante*: “Si al equivalente general que unifica una cadena inalterada de equivalencias lo llamé significante vacío, a aquel cuya vacuidad es resultado de la no fijación introducida por una pluralidad de discursos que se interrumpen unos a otros, lo llamaré significante flotante” (Laclau 2004, 305). Hay una disputa entre las distintas oposiciones a la Dictadura y corrientes teóricas y políticas, que rivalizaban por llenar de contenido el nombre de democracia; pero el éxito de la transición a la democracia se sostiene sobre la imposición de la idea, como hemos dicho, de una democracia sin apellidos, eso es, sin adjetivar. Por eso democracia es un “significante vacío que sirve como recipiente a las significaciones cambiantes: todos estamos a favor de la ‘democracia’ aunque el contenido del término cambie como consecuencia de las luchas hegemónicas” (Žižek 2004, 226).⁹² La capacidad de una parte de la oposición de hegemonizar el concepto de democracia representó un triunfo no sólo frente a los sectores de la oposición que pugnaban por una democracia real o “avanzada” como acusó el demócratacristiano Alejandro Foxley (citado en Richards

⁹² Laclau se encarga de señalar que no hay una diferenciación radical entre significante vacío y significante flotante pues “las dos son operaciones hegemónicas y, lo más importante, los referentes en gran medida se superponen” (Laclau 2005, 167).

1986, 8) en alusión al PC, sino también frente a los sectores partidarios del régimen cuya dificultad para referirse a la democracia que propugnaban ponía de manifiesto, a juicio de Garretón (1988, 4, cursivas nuestras), “los enormes problemas de legitimidad que se tiene al no poder nombrar las realidades *por sus nombres auténticos*”.

Lo que nos interesa señalar en este punto es la importancia de estas operaciones discursivas para esta investigación que se refiere precisamente a la *luchas por nombrar la realidad*: la batalla por la hegemonía se juega, desde la perspectiva *laclauniana*, en las pugnas por los significantes vacíos y flotantes, en la capacidad de vaciar o llenar, de particularizar o universalizar los significantes. La lucha política es, desde este punto de vista, una lucha discursiva. Hemos llamado la atención, en el capítulo 1, sobre la interpenetración entre lenguaje y realidad social, pero la propuesta de Laclau se traduce en la unilateralidad de la explicación: la realidad social acaba explicándose por el lenguaje, y la política se aleja de la construcción real de espacios de autonomía, de la constitución de actores sociales y políticos, de la lucha concreta por disputar la capacidad efectiva de gestionar la vida. Los intelectuales y los científicos sociales, en particular, tienen en este punto una gran ventaja con respecto a otros actores sociales y políticos, especialmente, los populares: las élites académicas y políticas juegan en su terreno, en el espacio de la construcción discursiva. Y acaban reduciendo todas las luchas por transformar el mundo a la mera formulación de *demandas*, que deben ser situadas de manera equivalencial en una cadena de significados; y la búsqueda de la hegemonía a la articulación unificadora-homogeneizadora de diversos procesos políticos que para ello requieren ser desprovistos de su complejidad y de su carácter múltiple y contradictorio, en aras de una construcción politicista-formalista, donde lo que cuenta es la construcción de recipientes vacíos, pura *forma*.

Así pues, es necesario criticar la imagen edulcorada de unas ciencias sociales comprometidas con la democracia, sin más. El sociólogo estadounidense James Petras sostiene que la discusión relativa a la democratización “fue la más abiertamente ideológica: la investigación se centró en un conjunto de fórmulas que justificaban el acomodo con las élites militares y económicas locales y extranjeras como la única opción viable ‘posible’, congelando así el proceso de transformación en una transacción entre civiles conservadores y militares” (Petras 1988, 82). De manera circunstancial, Brunner y Barrios (1987) llaman la atención sobre la filiación –en mayor o menor grado según los casos– de los CAI con alguna orientación político-cultural, opción ideológica, corriente o tradición político-intelectual, como el pensamiento cristiano o el humanismo cristiano, socialista y neoliberal.⁹³ Ello se explica, según los autores, por la tradición “politicista” o de “subculturas políticas”, que es característica de la sociedad chilena, esto es, por la tradición de los intelectuales que buscan simultáneamente expresarse en

⁹³ De hecho algunos centros son creados *ad hoc* por partidos políticos como el Centro de Estudios Sociales ‘Avance’ creado por el Partido Socialista o el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz (ICAL), por el Partido Comunista. Otros, como el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH), el Centro de Estudios Sociales y Educación (CED), CIEPLAN y el Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIIE) están vinculados a la DC (Delamaza 2013). En otros casos las conexiones entre partidos políticos y centros académicos son menos explícitas y éstos cobijan un mayor pluralismo ideológico, como por ejemplo en Flacso o SUR, pero obtienen la mayor parte de su financiamiento de fundaciones socialdemócratas, sobre todo alemanas.

el *campo* académico específico y en el *campo* político. Puryear también constata esta tendencia de la intelectualidad chilena a organizarse en función de colectividades políticas. En referencia a los centros académicos independientes señala: “También eran más propensos a incluir una perspectiva ‘político-cultural’ distinta. Cada uno tendió a tener una perspectiva política relativamente cohesionada, que refleja el peso tradicional de la ideología en la ciencia social chilena, y la tendencia tradicional de las instituciones chilenas a organizarse en torno a subculturas políticas” (Puryear 1994, 48, traducción propia). Eso significa que a pesar de la pretendida autonomía del campo académico, los científicos sociales que teorizaron en los ochenta mantuvieron esa condición de “investigador-político” a la que se refiere Cuevas (1999, 10) y, por lo tanto, “sus investigaciones tenían un cierto fin prospectivo”. Este carácter prospectivo, y también normativo, de la ciencia social producida en la década de los ochenta, se demostró *performativo*, por la importancia académica y política y la proyección de las élites que enarbolaron dichos análisis. Es decir, no se trataba tanto de predecir el futuro, como de *construirlo* a partir de la enunciación de un relato sobre dicho futuro (y de una interpretación sobre el pasado). De hecho, en relación con la teoría de la transición política, el politólogo Alfredo Joignant (1999) sostiene que:

La importancia política de esta vastísima literatura provenía de la intencionalidad propiamente normativa de los científicos sociales que se situaban en la óptica de la transitología, cual es la de entregar herramientas teóricas y recetas a los actores políticos que enfrentaban el desafío de conducir exitosamente el complejo tránsito desde el antiguo régimen dictatorial al nuevo orden democrático. Pocas veces se ha estado en presencia de una literatura especializada que, apropiándose de ciertos recursos de las ciencias sociales, “se proponía explícitamente incidir en los procesos políticos”.

El propio Garretón reconoce el impacto de la sociología –bajo el influjo de la ciencia política– en la coyuntura plebiscitaria y en su desenlace: “A su vez, la participación de la oposición en el plebiscito estaba preparada por el trabajo más ideológico realizado por los científicos sociales en la renovación del pensamiento político, especialmente lo que se llamó la ‘renovación socialista’” (Garretón 2007, 230). Pero, al mismo tiempo, el sociólogo no duda en señalar que “en el momento de mayor dependencia financiera del extranjero se da el momento de mayor autonomía intelectual y de mayor creatividad local de las ciencias sociales” (Garretón 1989, 17-18). Al parecer la relación entre intelectuales y política habría seguido siendo tan fuerte o más que en el pasado, pero ahora con una mayor capacidad de los científicos sociales de imponer sus directrices y no al revés:

Todos estos trabajos de diagnóstico en los diversos ámbitos de la vida social, de estudio de las transiciones, de encuestas y estudios cualitativos, de creación de un espacio de debate público, de vinculación y discusión con la clase política, así como la inserción de muchos científicos sociales en los trabajos políticos propios del plebiscito, *implicaron una nueva forma de relación entre política y ciencias sociales* (Garretón 2007, 230).

Además de la pertenencia partidista o la adscripción explícita o, mejor aún, la construcción, de alternativas políticas específicas, nos parece que la idea de la mayor

autonomía del campo académico en los ochenta también resulta problemática debido al peso del financiamiento exterior en el funcionamiento de los CAI, al que ya nos hemos referido. El hecho de que el financiamiento de las investigaciones estuviera supeditado a los criterios de las agencias extranjeras hacía que “los estándares de productividad aplicados tendían a ser *importados de sde afuera* al igual que la vara de medir los productos de investigación” (Brunner y Barrios 1987, 159, cursivas mías). Aun así se sostiene que esa importación de estándares de calidad y productividad no implicó “una mera transferencia de modelos externos y una subordinación a patrones internacionales, ajenos a las realidades locales” (í.d.). La orientación de las agencias financiadoras, junto con el fenómeno del exilio, tuvieron, sin duda, un impacto notable en los debates de esta intelectualidad *renovada*. Varios sociólogos han puesto en cuestión esta valoración de las ciencias sociales durante la Dictadura, señalando que la injerencia de fundaciones extranjeras sí afectó el tipo de ciencias sociales producidas en la región y en Chile particularmente. Por ejemplo, el sociólogo brasileño Ruy Mauro Marini señala que:

Desde el golpe chileno de 1974, la socialdemocracia europea pasó a actuar en el escenario intelectual latinoamericano, en lo que había sido precedida por las fundaciones de investigación estadounidenses y acompañada por las instituciones culturales financiadas por las iglesias y por la democracia Cristiana. En Brasil y en el resto de América Latina, la disputa por la obtención de los recursos otorgados por ellas reconstituyó la elite intelectual sobre bases totalmente nuevas, en cualquier relación con las que –fundadas en la radicalización política y en el ascenso de los movimientos de masas– la habían sostenido en la década de 1960 (Marini c1990).

También Petras (1988, 82) destaca la influencia que ejercieron las agencias liberales y socialdemócratas financiando este nuevo mundo intelectual, pues “su meta básica fue establecer la hegemonía ideológica entre los intelectuales latinoamericanos, dado que éstos sirven como un importante terreno de reclutamiento para la clase política de centro-izquierda”. Y en el mismo sentido, se pronuncia Cueva, señalando la importancia de la socialdemocracia europea en la orientación de los caminos que sigue la renovación socialista y llamando la atención sobre cierta re-colonización del pensamiento social latinoamericano, en correspondencia con la pérdida de la conciencia latinoamericanista y tercermundista a la que aludíamos más arriba:

El eurocomunismo surge precisamente en este contexto, como una expresión más de la crisis de la izquierda europea y concibiéndose a sí mismo, en una de sus vertientes, como una alternativa conservadora a la “vía chilena”. En efecto, mientras la mayor parte de la izquierda latinoamericana reaccionó ante la derrota en Chile destacando el error consistente en no haber hecho todo lo posible para tomar realmente el poder, la dirigencia del PC italiano llegó a la conclusión estrictamente opuesta: había que proceder con más cautela, marchando al compás de una alianza con la Democracia Cristiana. Tesis que ciertamente evitaría el golpe, puesto que lo torna innecesario, aun sin llegar a

los extremos del PCI: *terza via* al socialismo bajo el paraguas protector de la OTAN (Cueva 2008a, 193).⁹⁴

Pero no son sólo los sociólogos críticos de la renovación socialista los que dan cuenta de esta influencia del pensamiento europeo. Garretón, entre otros, reconoce que el proceso de transformación ideológica al que venimos refiriéndonos se trató:

De un proceso de reflexión y revisión de la teoría y el pensamiento socialista y marxista, a la luz del debate teórico especialmente planteado en el Partido Comunista Italiano y en lo que se llamó eurocomunismo y de las prácticas del llamado socialismo real y de los partidos de la izquierda, pero en el caso chileno hecho desde la vertiente socialista y no la comunista” (Garretón 2009, 66).⁹⁵

Indudablemente la investigación social ganó en evidencia empírica en este periodo, pero en el caso de la renovación socialista no perdió un ápice su propensión a entregar recetas políticas dentro de un determinado marco ideológico, simplemente varió el marco. Los intelectuales *renovados* siguieron tan cercanos del “poder” político como lo habían estado, o habían querido estarlo, en la década de los sesenta y setenta, porque a juzgar por la deriva de la renovación socialista más de uno, como el personaje de Flaubert, “hubiera pagado por venderse”⁹⁶. El propio Garretón, ex MAPU, se ha mostrado hipercrítico con sus antiguos compañeros políticos a los que acusó de tener “una visión sectaria en relación a quienes se diferenciaban de ellos y una relación enfermiza con el poder, el que, para ese grupo generacional y sus dirigentes, con pocas excepciones, pasa a ser un objetivo en sí mismo, a veces independientemente de su contenido” (Garretón 2009, 72).⁹⁷

A nuestro juicio, no es posible hablar de unas ciencias sociales menos *comprometidas* en la década de los ochenta que durante el gobierno de la Unidad Popular; por el contrario, durante la Dictadura –y también posteriormente–, el capital académico y el capital político de algunos intelectuales se coligaron para imprimir a determinadas elaboraciones teóricas una capacidad performativa inusitada. El compromiso explícito que habían asumido los científicos sociales con la *revolución* en la década de los sesenta y setenta se trocó en compromiso explícito con la *democracia*, dibujando una trayectoria que supuso una transformación de las ciencias sociales y de la

⁹⁴ Marini pone de manifiesto el interés de la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, en la intelectualidad latinoamericana de izquierda y “el trabajo que, para atraerla, desarrollaba a través de CLACSO” (Marini c1990).

⁹⁵ Garretón y Moulian reconocen la importancia de las *Riflessioni dopo i fatti del Cile*, una serie de artículos que el secretario general del PCI Enrico Berlinguer publicó en el periódico *Rinascita* poco después el golpe de Estado en Chile, en los que extraía la lección fundamental de ese acontecimiento histórico: la necesidad de un nuevo “compromiso histórico” entre todas las fuerzas que recogen y representan al pueblo, que significaba, en los hechos, una alianza, en Italia, entre los comunistas y los demócratacristianos. En Chile esa lección fue asumida por las corrientes socialistas *renovadas*, pues el PC adoptó una línea política durante la Dictadura que incluía todas las formas de lucha, abriendo la puerta para la política insurreccional. Por otra parte, la DC ha mantenido históricamente una actitud pertinaz de rechazo hacia el PC chileno (superada, en parte, con la reciente incorporación de éste a la Nueva Mayoría).

⁹⁶ La frase proviene de *La educación sentimental* (1869).

⁹⁷ Manuel Salazar (2004) tituló sugerentemente un artículo referido a los intelectuales MAPU como “rebeldes con vocación de poder”.

política: “Si la revolución es el eje articulador de la discusión latinoamericana en la década de los 60, en los 80 el tema central es la democracia. Al igual que en el periodo anterior, la movilización política se nutre fuertemente del debate intelectual” (Lechner 1988, 24-25). En la medida en que se produjo una pugna por dotar de significado el concepto de democracia, la adhesión a la idea abstracta de democracia se traducía en la adscripción concreta a determinados proyectos y partidos políticos:

De ahí entonces que todos aquellos sectores que fueron de izquierda y que después se inscriben en esta idea de una transición constituida por la recuperación de elecciones y el parlamentarismo, no están sino transformándose en cómplices del mecanismo que ha usado históricamente la burguesía para desarmar a las organizaciones populares que pretenden cambios sustantivos (Ruiz Contardo 2004, 68).

La sociología *renovada* contribuyó a construir y a legitimar esa transición pactada, elitista, autorreferida, escindida de los sectores populares, que no llevaba a la democracia sino a la posdictadura.

2.2.2.3. *Una democracia en la medida de lo posible*

De la conmoción que provocó el impacto de la violencia contrarrevolucionaria en todos los espacios vitales surgió la condena de la violencia en abstracto, la denuncia de la “vía chilena al socialismo” y del poder popular como experiencias no democráticas, la renuncia a la revolución y al socialismo, y la puesta en valor de las instituciones parlamentarias, y de la mesura, la concertación y la negociación como formas superiores de la política. Para los intelectuales y políticos jóvenes de los sesenta, “el primer encuentro con la democracia fue subjetivo, experiencia de vida, de sobrevivencia, un encantamiento afectivo producto de su pérdida” (Moyano 2009). Corroborar esta idea el propio Lechner (1988, 29): “La revalorización de la antes criticada ‘democracia formal’ se inicia pues a partir de la propia experiencia personal más que de una reflexión teórica”. Pero, como no podía ser de otra forma, en seguida se convirtió en preocupación teórica.

Los otrora intelectuales revolucionarios “descubrieron” la importancia de las instituciones y de las *formas* democráticas; descubrimiento que, a la postre, se convirtió en la alabanza de la democracia *sin ape llidos*, porque la democracia empezó a ser concebida como el espacio y la vía de constitución de sujetos políticos y la garantía para el ejercicio de la política, con independencia de los intereses de clase. Es decir, la política empezaba –o volvía– a autonomizarse de los proyectos de sociedad en disputa y a concebirse como una instancia al margen de las disputas socioeconómicas. En la década de los ochenta, cualquier intento por caracterizar y definir a la democracia fue omitido y, frente a las dictaduras imperantes, la democracia aparecía exclusivamente como democracia formal (Vasconi 1991, 58), pretendiendo anular –totalizar– con ello la disputa ideológica sobre dicho concepto; algo que impugnaron los sociólogos críticos con la renovación:

La discusión actual en el seno de la izquierda latinoamericana no pasa por la frontera ficticia entre una corriente supuestamente democrática y otra que no lo

sería (la denominada 'leninista'); la diferencia real se da más bien entre una tendencia que trata de congelar las aspiraciones de las masas en el nivel fijado por el democratismo burgués, y otra que no niega la democracia sino que busca la manera de elevarla hasta niveles revolucionarios (Cueva 2008a, 200).

La revalorización de la democracia, como *forma* política, proviene del examen que de la Unidad Popular y de los motivos de su colapso realizó la izquierda *renovada*. El gobierno de Salvador Allende se convirtió en objeto de estudio de los primeros trabajos sociológicos e históricos, dando lugar a una gran cantidad de libros y artículos. Lo significativo de este primer examen es que el estudio de la UP se realiza *desde la derrota*, esto es, a partir de la certeza del golpe de Estado y de la Dictadura militar. No a partir de lo que pudo haber sido, sino de lo que fue. Ello imprime un sello derrotista a estos análisis. A contrapelo de la certeza en el carácter progresista de la historia que había caracterizado a esta generación en los sesenta, se advierte la sensación de estar ante una "alteridad definitiva", "un Estado todopoderoso con el cual se puede, en el mejor de los casos, negociar una coexistencia democrática, si se aceptan sus reglas de juego, pero al que jamás se podrá arrebatar, a favor de las masas, su condición de centro cristizador del poder" (Cueva 2008b, 211).

La segunda característica relevante de esta producción es el predominio de una *mirada común* que explica el fin de la Unidad Popular a partir de la lógica de desacuerdos y tensiones a nivel del aparato de Estado y de los partidos políticos. En este sentido, los historiadores chilenos Mario Garcés y Sebastián Leiva, realizando un balance sobre los trabajos más significativos de aquel periodo, han subrayado que: "La tendencia de la mayoría de los estudios ha sido, hasta ahora, constituir en objeto de análisis casi exclusivamente a los actores políticos 'formales', es decir, los partidos políticos, las temáticas vinculadas a ellos (programas, tácticas, alianzas) y los ámbitos donde éstos concentraban su accionar (sobre todo los diversos espacios del aparato estatal (Garcés y Leiva 2004).

De los quince textos examinados por los autores, sólo dos escapaban a la matriz estado-céntrica. Uno de ellos es el libro del historiador estadounidense Peter Winn (2004), *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*, que corrobora a su vez aquella conclusión:

La mayoría de los estudiosos de la revolución chilena la han visto en términos de las políticas partidistas, culpando a comunistas o demócratacristianos, socialistas o nacionalistas, extrema izquierda o extrema derecha por su curso cambiante y su conclusión trágica. Lo que estas interpretaciones divergentes tienen en común es su perspectiva: éstas son esencialmente visiones desde arriba, que asumen como hecho que los actores políticos nacionales eran los protagonistas principales en el drama revolucionario, e ignoran la relativa autonomía de los actores y movimientos locales (Winn 2004, 20-21).

Para la intelectualidad *renovada* el golpe de Estado fue el resultado, y no la causa, del *quiebre de la democracia*. Es decir, es porque ya se había quebrantado la institucionalidad y la legalidad democrática (burguesa) que se produjo el golpe; en lugar de sostener que el golpe viene a conculcar no sólo las vías de profundización de la democracia que diversos sectores sociales habían generado, sino también la propia

democracia parlamentaria existente. De acuerdo con Garretón (1990, 17) el gran “aprendizaje” del golpe dice relación con “el gran problema histórico de este siglo que llevó al derrumbe democrático: la ruptura entre clases medias y la izquierda, es decir, entre quienes pueden asegurar democracia política y cambio social”. La Unidad Popular habría sido, pues, la responsable del golpe por haber generado las condiciones para que éste se produjera, por eso la izquierda debería asumir que “el golpe lo dimos todos los chilenos. Nosotros. Los sectores políticos”, como afirmó un histórico militante comunista.⁹⁸

El argumento sigue, *grosso modo*, el siguiente orden: el Partido Demócrata Cristiano habría dejado de desempeñar el rol central que le había cabido anteriormente al centro (representando por el Partido Radical), en el sentido de equilibrar las posiciones más extremas del abanico político-ideológico, pasando a privilegiar su labor programática, esto es, interesándose en primer lugar en desarrollar su propio programa (la tesis *freísta*⁹⁹ o del “camino propio”), en lugar de hacer de *bisagra* del sistema político, entre la izquierda y la derecha. Así, el loado mecanismo de contrapesos del sistema político chileno habría empezado a tambalearse, permitiendo e incluso favoreciendo la polarización ideológica, en medio de la Guerra Fría y del enfrentamiento entre dos potencias mundiales que representaban proyectos antagónicos y que condicionaban la política interna del país. Ello habría incentivado la disputa –nada novedosa, por cierto, en la política chilena– entre el Ejecutivo y el Parlamento, provocando una retahíla de acusaciones mutuas, la descalificación permanente del “otro”, y el menoscabo de las instituciones y procedimientos democráticos. A esta *radicalización* habrían contribuido, sobremanera, las declaraciones de grupos de “extrema izquierda” (se señala fundamentalmente al MIR) y de “extrema derecha” (grupo ‘Tacna’ y Movimiento Nacionalista Patria y Libertad) acerca de la necesidad de la lucha armada y la inevitabilidad del enfrentamiento militar, minando la legalidad, incentivando la violencia y reproduciendo el odio hacia el “enemigo”.

Habría sido, entonces, la institucionalidad democrática la que colapsó.¹⁰⁰ De acuerdo con esta explicación, la Unidad Popular había tensado la democracia con su “vía chilena al socialismo”, al concebir al Estado únicamente como un *instrumento* de los sectores populares para transformar la sociedad. La vía chilena partía del supuesto de que era posible transitar al socialismo desde la institucionalidad burguesa. Si las

⁹⁸ Luis Guastavino, diputado comunista en los sesenta y setenta, Intendente de la V Región (2003-2006) designado por Ricardo Lagos, en entrevista a *El Mercurio*, 3 de agosto de 2003. El *mea culpa* de Guastavino reavivó la discusión entre los ex militantes de la izquierda acerca de los alcances de su (presumida) responsabilidad en el golpe.

⁹⁹ Enarbolada por Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970, y presidente del Senado a partir de este último año y hasta el golpe de Estado.

¹⁰⁰ Este análisis no está muy alejado de las tesis contenidas en la *Declaración de Principios del Gobierno de Chile* (Junta Militar 1974) según las cuales una democracia “ingenua” o “debilitada” como la chilena habría permitido la penetración del marxismo, “cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario”. Por eso la Dictadura se imponía la misión de “dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación”. El pilar de esta nueva democracia será la descentralización funcional entre el poder político y el poder social. Sobre los efectos de esta escisión entre lo social y lo político, y su legitimación por la Concertación, véase Iglesias (2015).

instituciones eran efectivamente democráticas debían plegarse a las decisiones del pueblo; el triunfo de un presidente que representaba el deseo de transformar radicalmente la sociedad chilena debía conducir al respeto de quienes se consideraban demócratas a las políticas de su Gobierno. En su camino, el Ejecutivo procuró no violar los procedimientos democráticos formales y echó mano de los llamados “resquicios legales”, que no eran otra cosa que decretos con fuerza de ley dictados en gobiernos anteriores. No se planteó desconocer la institucionalidad burguesa, ilustrada en la Constitución de 1925 –cuyo origen también fue ilegítimo–, aunque sí burlarla subrepticamente, desempolvando algunas leyes –olvidadas pero vigentes– que entraban en contradicción con ella o planteaban alguna ambigüedad.¹⁰¹ No obstante, los grupos económicos y la élite político-empresarial, afectados por las políticas públicas, advirtieron inmediatamente el artificio y lo denunciaron porfiada y destempladamente en el Congreso, en los medios de comunicación, en el púlpito de las Iglesias y en cuanto foro les fue posible. A medida que el conflicto se fue exacerbando, Allende se esforzó por mostrarse cada vez más apegado a la institucionalidad democrática.

La izquierda revolucionaria –el MIR fundamentalmente– siendo crítica de la democracia formal (burguesa) y considerando impotente la vía electoral para la consecución del socialismo, reconoció el triunfo de Salvador Allende y se comprometió a prestar un “apoyo crítico” a su gobierno, suspendiendo las acciones armadas. En los discursos del secretario general del MIR, Miguel Enríquez,¹⁰² no hay una condena de la democracia a secas, sino una problematización constante de la contradicción entre unas instituciones y mecanismos formalmente democráticos cuyos límites impedían la participación efectiva de los sectores explotados y dominados en la toma de decisiones y, en contraposición, la recuperación de formas democráticas que el pueblo se daba de manera autónoma y directa. La democracia –como la propia izquierda– necesitaba apellidarse.

No obstante, se insiste desde la *memoria oficial* en que fue el cuestionamiento y el desprestigio de la democracia (formal-burguesa) los que propiciaron la ruptura de los consensos socio-políticos fundamentales y el privilegio de la fuerza como forma de resolver las diferencias. En este sentido, la tesis del debilitamiento de la democracia se complementa con la “crítica” de la *sobreideologización* de los partidos y movimientos sociales y de los intelectuales de izquierda, a la que ya nos hemos referido anteriormente. La combinación permitía diseminar las culpas por el golpe de Estado:

En efecto, “el relato” de Moulian y Garretón¹⁰³ hablaba, de una parte, de la rigidez del centro DC para hacer alianzas, y de la otra, de la manía de la UP por hacer reformas sin mayoría política. Esta narrativa fue la que permitió

¹⁰¹ Mucho tiempo después del golpe de Estado se dio a conocer el penúltimo borrador –que había estado desaparecido– de una propuesta constitucional que el gobierno de la Unidad Popular preparó (Allende 1993). La elaboración de este documento no fue muy publicitada. Fue precisamente la intención de Allende de llamar a un plebiscito para decidir su continuidad y el anuncio de realizar una modificación constitucional la que aceleró la realización del golpe de Estado.

¹⁰² Véase, por ejemplo, la compilación de discursos y documentos en Naranjo, y otros (2004).

¹⁰³ El autor se refiere a los análisis realizados por Garretón y Moulian en Flacso que vieron la luz en forma de libro en 1983 (*La Unidad Popular y el conflicto político en Chile*), pero que había sido publicado parcialmente en distintos artículos entre 1977 y 1978.

compartir las culpas del golpe entre la izquierda y la DC, y fijar una plataforma intelectual (y en cierto modo también moral) a partir de la cual aspirar a un entendimiento político (Tironi 2009, cursivas mías).

A nuestro juicio, el peligro real que planteaba la Unidad Popular no era el de la destrucción de la democracia, sino el de su *profundización*, que comportaba una participación más activa de los sectores tradicionalmente postergados por las élites políticas y la inclusión de las relaciones sociales de producción entre los asuntos sobre los cuales se podían/debían tomar decisiones democráticas. Pese a todas las contradicciones de las que era expresión y aun de las que ella misma engendró, la Unidad Popular fue:

La mayor experiencia histórica de participación popular, en escala ampliada, de la sociedad chilena, que no sólo fue aplastada por el golpe de 1973, sino que en su propio desarrollo, durante la Unidad Popular, abrió nuevos derroteros para la participación y la democracia así como interrogantes que aún acompañan a la izquierda política y a los analistas de ese período histórico (Garcés 2004, 26).

Por eso, contra la ridiculización de la izquierda revolucionaria emprendida por la intelectualidad *renovada* vuelven los documentos históricos y las memorias marginadas; frente a un socialismo dogmático y totalitario emerge la definición de un proyecto que conjugaba socialismo y democracia. Auténtica democracia, que debía tender a *la superación de la separación entre lo social y lo político*. La historiadora María Angélica Illanes señala que la Unidad Popular fue golpeada justo cuando “el proyecto democrático alcanzaba su naturaleza y entraba en su fase revolucionaria” (Illanes 2002, 156), que suponía avanzar hacia “el gobierno del pueblo”. Quienes con mayor claridad expresaron el conflicto de fondo no fueron, precisamente, intelectuales ni políticos, sino los propios militares; el Ejército de Chile, todavía comandado por Pinochet, en su respuesta al *Informe Rettig*, amenazó: “Que ‘nunca más’ se pretenda en Chile poner en práctica un proyecto político de la naturaleza y alcances del que representó el de Unidad Popular. De lo contrario, será imposible impedir la experiencia que el legítimo empleo de la fuerza por sus propias características conlleva o hace difícil evitar” (Ejército de Chile 1991). Con todo, lo que no sabía el comandante en jefe del Ejército era que el socialismo *renovado* ya había renunciado mucho antes a un proyecto como el de la Unidad Popular: “En la línea del nuevo socialismo democrático con vocación de mayoría –que es la respuesta de la renovación a esta interrogante–, se descarta una reconstitución de la Unidad Popular: ‘la Unidad Popular está muerta pero no suficientemente enterrada. Hay que enterrarla, ya que no es capaz hoy de dar respuestas a las actuales demandas del país’”, dice Edgardo Boeninger (1997, 288) citando una entrevista al socialista Ricardo Núñez, de 1983.

En definitiva, la interpretación de la Dictadura como una respuesta a la crisis de la democracia, como una forma de poner fin al conflicto político que amenazaba con la disolución de la sociedad,¹⁰⁴ sitúa el problema del fin de aquella en el sentido de la

¹⁰⁴ En el *Acta de Constitución de la Junta de Gobierno* (Junta Militar 1973), los militares habían sostenido que su intervención se justificaba porque “Chile se encuentra en un proceso de destrucción

recuperación democrática.¹⁰⁵ Garretón ha sido quien mejor ha expresado esta conexión entre la lectura *renovada* de la Unidad Popular y la transición a la democracia, al sostener que:

El proceso referido hasta ahora había significado el aprendizaje de cómo se puede terminar con un régimen militar, lo que implicaba modificar los anteriores rechazos a insertarse en la institucionalidad de aquél por razones que confundían ética y política; y de cómo debía hacerse la unidad de la oposición, lo que implicaba aceptar una visión instrumental por sobre los traumas del pasado y los recelos respecto del futuro. Pero no se había completado el aprendizaje de ligar las causas del derrumbe democrático con las condiciones del restablecimiento de la democracia una vez terminado el régimen militar. Este es el aprendizaje crucial (Garretón 1993a, 152).

Ergo, si el principal problema había sido el accionar de los partidos políticos que habían desestabilizado el sistema político hasta hacerlo colapsar, la sociología y la ciencia política concluyeron que las herramientas para cerrar la *oscura noche* de Chile, debían ser también los partidos políticos y la construcción de una salida política institucional, democrática, pactada, pacífica. Salida que implicaba el reencuentro entre el “socialismo” y la Democracia Cristiana: “La visión que construyeron Moulian y Garretón sobre la política chilena contemporánea y el surgimiento y el fracaso de la UP tuvo otra virtud fundamental: permitió el reencuentro de la izquierda con la Democracia Cristiana” (Tironi 2009). En este sentido, podemos decir que “al final se impuso la imagen del poder de la generación anterior, que era expresión de su propia identidad generacional. El poder radica en el Estado; la superación de la Dictadura y la reconstrucción de la democracia debían hacerse por tanto desde ahí” (Güell 2002, 102).

Para Garretón, “democracia” se convierte en el nuevo *concepto límite*¹⁰⁶ de las ciencias sociales chilenas durante la Dictadura y, a su parecer, “esta referencia a la democracia, tiende a redefinir el papel de los intelectuales y los científicos sociales, ayudando a su desideologización” porque este concepto “por su propia *naturaleza*, aleja

sistemática e integral de estos elementos constitutivos de su ser, por efecto de la intromisión de una ideología dogmática y excluyente, inspirada en los principios foráneos del marxismo-leninismo”.

¹⁰⁵ La proyección de la situación pre-golpe a la posibilidad de la recuperación democrática se aplicó también en la construcción de escenarios posibles sobre la consolidación democrática: “Es un hecho que las condiciones de una democracia futura dependen en parte del tipo de transición y de sus características particulares. [...] Puede pensarse los procesos de consolidación a partir de los factores que hicieron posible la estabilidad democrática en Chile y de los que llevaron a su crisis” (Garretón 1986a, 15). Este análisis delegaba la responsabilidad fundamental en las élites políticas y no contradecía en ello la tradición chilena de resolución de conflictos (inter-élite); sin embargo, las dificultades y reversiones de la consolidación democrática chilena, a día de hoy, llaman la atención sobre la incapacidad de este mecanismo para resolver efectivamente el conflicto social. Quizás ello se deba al proceso de empoderamiento de los sectores populares durante el gobierno de la Unidad Popular y también en la lucha contra la Dictadura, cuya subordinación no ha resultado posible.

¹⁰⁶ Un concepto límite es “un instrumento conceptual, que es a la vez un objeto de estudio, pero también un concepto normativo que apunta a lo deseable. [...] El concepto límite es un objeto de estudio, pero es también la perspectiva, el concepto normativo, si ustedes quieren, utópico” (Garretón 2011b, 15). Los conceptos límite con los que han operado las ciencias sociales chilenas son, según el autor, por orden de sucesión: desarrollo, revolución, socialismo y democracia (Garretón 2007). El rasgo más notorio de las ciencias sociales actuales es, a su juicio, la ausencia de un nuevo concepto límite, esto es, de un concepto capaz de unificar y convocar a los científicos sociales.

de visiones globalizantes y excluyentes” (1991b, 30). Nótese cómo se produce la naturalización de lo sociopolítico, atribuyéndole una naturaleza al concepto de democracia. La *democracia* se constituyó en el *leitmotiv* de los científicos sociales y la *transición a la democracia* en su objeto de estudio y su programa político. Por lo demás, hacia fines de los 70 y principios de los 80 tuvieron lugar varios encuentros regionales en los que se emprendió la discusión acerca de la democracia, la democratización y la transición (Lesgart 2003).¹⁰⁷

La renovación académico-intelectual-política ubicó el debate acerca de la democracia en el marco de la orientación neo-contractualista, valorizando la idea del pacto y las estrategias de concertación, pues “responden –tras la experiencia de desorden bajo los gobiernos autoritarios– a una aspiración generalizada por una institucionalidad estable y participativa” (Lechner 1988, 33). Pero los mismos autores que concuerdan con esta perspectiva nos advierten del deslizamiento hacia una concepción equivocada de la vida política:

El pensamiento renovador abandona el concepto de “lucha de clases”, sin precisar un enfoque alternativo. Pero además, primordialmente preocupado por la concertación de un orden viable y estable, tiende a soslayar el conflicto mismo. El énfasis en el compromiso –acertado a la luz de la experiencia histórica– corre el peligro de impulsar una “neutralización” despolitizadora de los conflictos sociales, forjando una visión armoniosa y, por tanto, equivocada de la democracia (ibíd.: 37).

El pacto, en los hechos, era una negociación entre los agentes –concebidos como– fundamentales de la sociedad: esto es, las elites partidarias, la alta oficialidad militar y la jerarquía eclesiástica. Por eso “la historia de la transición, que es la historia de la generación anterior, muestra el despliegue práctico de la tesis de que el poder radica en el Estado y no en la sociedad” (Güell 2002, 102). En ese sentido, la renovación producida por las élites académicas y políticas se habría traducido en un cambio de los marcos, los temas y los anhelos políticos, pero habría mantenido el estilo y la concepción jerárquica y dirigista del ejercicio del poder.

La “democracia protegida”¹⁰⁸ o “democracia tutelada”¹⁰⁹ que resultó del proceso de transición es producto de la “lección” histórica del fin de la Unidad Popular, aprendida por las élites políticas y económicas que comprendieron que cuando la *democracia política* formal no está bien *tutelada* y abre vías para la *democratización social* –es decir, para la introducción de transformaciones en las relaciones sociales que

¹⁰⁷ Tampoco desconocemos la reflexión más extendida que puso en valor la democracia –formal, burguesa, liberal, o como quiera apellidársela– por contraposición a la política terrorista y sin límites del *poder concentracionario* que se instaló en Chile (y en otros país) bajo la Dictadura militar.

¹⁰⁸ Expresión que resume la concepción de la democracia defendida por la Dictadura: “Una nueva democracia que es autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social” (Pinochet 1977).

¹⁰⁹ Expresión acuñada por el sociólogo Felipe Portales (2000) que, a partir de un exhaustivo examen de fuentes documentales, sostiene la existencia de “pactos secretos” de la transición por los cuales la Concertación habría hecho concesiones políticas y socio-económicas a los militares y a la derecha política.

rompe la autonomía de la esfera socio-económica– amenazando sus intereses, deben recurrir a las fuerzas armadas y a la barbarie, cosa que no dudaron en hacer.

2.3. Las ciencias sociales *huérfanas*

A partir de 1990 se inicia un periodo gris para las ciencias sociales y el pensamiento crítico chilenos. La ansiada “democracia”, que prometía traer alegría,¹¹⁰ se mostró, a poco andar, un tiempo chato, de rutinaria administración del modelo económico y político heredado de la Dictadura: por eso, *sensu stricto*, resulta más pertinente hablar de posdictadura. Durante la posdictadura chilena se fueron *normalizando* y profundizando las políticas que habían puesto en marcha los militares, no obstante el amplio rechazo de los sectores populares y medios. En ese sentido, la reinstitucionalización oficial de las ciencias sociales ha sido un proceso arduo, incompleto y deficiente. Muchos de los intelectuales *renovados* pasaron a ocupar cargos de gobierno, *desertando* completamente de su función crítica, y aun sociológica. Otros, que habiendo sido parte del proceso renovador del pensamiento social y político, querían apuntar hacia otros derroteros no tan conservadores, han expresado su desconcierto y su desafección con el tipo de política y con la deserción de los sociólogos (Moulian 2008, 167).

2.3.1. La difícil reconstrucción universitaria

El modelo educativo impuesto *por la fuerza* no se ha visto sustancialmente modificado durante los años de la posdictadura. El Estado ha mantenido el carácter *subsidiario* que le había sido asignado en lo tocante a su función social –no así en otros espacios de actuación– y las leyes del mercado siguen rigiendo el financiamiento, la estructura y la orientación de la enseñanza.¹¹¹ La privatización experimentó un impulso con los gobiernos *concertacionistas*; en el caso de la educación superior, a las universidades privadas que proliferaron durante la Dictadura cabe agregar 19 universidades “autónomas” creadas entre 1990 y 1997 (Cruz-Coke M. 2004).¹¹² La mercantilización de la educación superior se ha implementado tanto por la colonización de las

¹¹⁰ “La alegría ya viene” fue el lema de la campaña electoral de 1989 de la Concertación de Partidos por la Democracia.

¹¹¹ El neoliberalismo se diferencia del liberalismo del siglo XVIII sobre todo en su relación con el Estado: más que impedir la injerencia estatal en el mercado empuja al Estado a abrir otras esferas de la vida social a la lógica mercantil; coloniza el propio Estado y, con el auxilio de éste, otras áreas sociales. De acuerdo con los sociólogos franceses Laval y Dardot (2013, 25): “El neoliberalismo no es heredero natural del primer liberalismo, como tampoco constituye su traición, ni su extravío. No retoma la cuestión de los límites del gobierno allí donde el liberalismo los había dejado. Ya no se pregunta sobre el tipo de límite que se deba asignar al gobierno político: el mercado (Adam Smith), los derechos (John Locke) o el cálculo de utilidad (Jeremy Bentham). Sino, más bien: ¿cómo hacer del mercado el principio del gobierno de sí? [...] Considerado como *racionalidad* gubernamental, y no como doctrina más o menos heteróclita, el neoliberalismo es precisamente el despliegue de la lógica del mercado como lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la subjetividad”.

¹¹² Hasta 1980 había 8 universidades; en los siguientes años, fruto del desmembramiento de la Universidad de Chile, a la que le fueron arrebatadas sus sedes regionales, se contaban otras 16 universidades “derivadas”; a las que se sumaron 11 universidades privadas fundadas entre 1982 y 1989. Actualmente hay 59 universidades reconocidas por el Ministerio de Educación.

universidades públicas, como por la apertura de universidades privadas. Este crecimiento exponencial de universidades, muchas de ellas sin procesos de acreditación, con nula o muy débil actividad en áreas de interés social como la investigación científica y tecnológica o la extensión universitaria, da cuenta del carácter netamente lucrativo del actual modelo educativo sustentado fundamentalmente en el subsidio a la demanda¹¹³ y en el aporte directo de los estudiantes y sus familias (aranceles) que, para hacer frente a ese costo, deben recurrir al endeudamiento tanto con instituciones privadas como con la propia administración pública. El Estado es la punta de lanza de la extensión de la lógica de mercado; al no distinguir, en materia de financiamiento, entre establecimientos públicos y subvencionados, incentivando la iniciativa privada y dificultando la subsistencia de las universidades públicas, obligadas a autofinanciarse y a competir en el mercado de alumnos y en el de servicios. Por esa vía los gobiernos de la posdictadura han perpetuado, y aun agudizado, la situación crítica de las universidades públicas y los déficits de calidad de la educación superior. El fin de la gratuidad y la lógica de la competencia se combinan para reproducir la desigualdad social, el autoritarismo y la elitización de las universidades, el carácter privilegiado de la educación superior y, en general, la baja calidad de la enseñanza proporcionada y la escasa y condicionada investigación.¹¹⁴ De hecho, ese continuismo o profundización de la lógica neoliberal está en la base de las recientes oleadas de protesta estudiantil, que han logrado poner al desnudo el fin lucrativo que inspira la provisión de educación y, por analogía, otras áreas sociales, como la salud o la previsión social.

Por otra parte, la reapertura de los espacios universitarios para las ciencias sociales no ha resultado un proceso ágil ni ha estado exento de dificultades. Hasta el día de hoy la sociología no ha recuperado el carácter de carrera exclusivamente universitaria, pudiendo ser impartida por los institutos profesionales, tal y como estipuló la Dictadura militar en correspondencia con la razón tecnocrática que caracterizó la contrarreforma de la educación superior.¹¹⁵ Las ciencias sociales y particularmente la sociología no han recuperado el espacio y el dinamismo que tenían con anterioridad al golpe de Estado.¹¹⁶

Si la recuperación del campo académico universitario para las ciencias sociales ha sido un trabajo arduo, más complicado ha resultado la reintegración de los académicos exonerados en las décadas anteriores. Las dificultades presupuestarias de

¹¹³ Se trata del aporte fiscal indirecto que reciben las universidades en relación directa con el número de alumnos matriculados de entre los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Selección Universitaria. Las universidades también reciben un aporte fiscal directo para investigación y extensión. Con todo, estos aportes fiscales representaban en 2011, en promedio, un 12,77% del presupuesto de las universidades estatales, lo que las obliga a autofinanciarse casi en su totalidad (Contraloría General de la República 2011).

¹¹⁴ Para un análisis detallado de la evolución de la educación superior durante la posdictadura, véase Austin y Araya (2004). Sobre la concepción mercantilista y elitista del modelo educativo chileno, véase Ruiz Encina (2014).

¹¹⁵ Existe un proyecto de ley que propone restablecer esa exclusividad universitaria pero se ha entrampado en el Senado después de un primer rechazo (boletín 6425-04). De las ciencias sociales, en un sentido amplio, solo los títulos de abogado, ingeniero comercial, psicólogo, periodista, trabajador social y las pedagogías, tienen ese reconocimiento de exclusividad.

¹¹⁶ Así lo constata Baño (2012) para el caso de la Universidad de Chile que fue, sin duda, una de las más afectadas por la represión.

las universidades estatales dificultaron la acogida de muchos de estos docentes e investigadores, pero fueron, mayormente, el carácter profundamente autoritario de la estructura administrativa universitaria forjada durante la Dictadura, el fanatismo neoliberal de muchos profesores que habían copado los espacios académicos y la persistencia de orientaciones enormemente conservadoras respecto de la educación, ratificadas en la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza,¹¹⁷ los factores que dificultaron seriamente la reincorporación de los académicos expulsados. El blindaje a paradigmas o enfoques que contravinieran el pensamiento oficial de la Dictadura –que a esas alturas se había tornado en pensamiento oficial de la Concertación–, se transformó en la oposición, más o menos tácita, de amplios sectores académicos –tanto *pinochetistas*, como demócratas cristianos y socialdemócratas– a la reincorporación de académicos con posturas críticas respecto del modelo dictatorial.¹¹⁸

Si la reapertura universitaria para las ciencias sociales y los científicos sociales exonerados se ha visto dificultada por la lógica mercantil de la educación, la impronta autoritaria de las estructuras universitarias y la ausencia de una política estatal de apoyo a la investigación y al pensamiento crítico, no fueron menores los desafíos que experimentaron los centros académicos independientes con el fin de la Dictadura. Éstos vieron drásticamente reducido su presupuesto; quizás en mayor medida aquellos orientados hacia la dinamización social, pues las agencias financiadoras excluyeron a la nueva “democracia” chilena de sus destinos prioritarios para la canalización de recursos económicos. Esta situación trastocó la estructura de los CAI y forzó, en algunos casos, su cierre y, en otros, la reorientación de sus actividades hacia asesorías, consultorías o investigaciones de nuevo tipo, para captar otras fuentes de financiamiento, poniendo de manifiesto cómo la dependencia económica comprometía la autonomía académica. A los problemas financieros se sumó el éxodo de académicos y profesionales desde los centros hacia los distintos niveles de la administración y hacia las universidades.¹¹⁹ Se produjo, así, un doble vaciamiento de los CAI –de recursos y de personal– que dificultó su sobrevivencia en la etapa que se abrió con el triunfo electoral de la oposición.

La perpetuación, en términos generales, de la estructura y legalidad universitarias vigentes durante la Dictadura, y la debilidad que comenzaron a evidenciar los CAI, se conjugaron para reforzar el modelo forjado en la década anterior, caracterizado por “una creciente profesionalización de los estudios de sociología, que van acompañados por una tecnificación del quehacer sociológico y una preocupación por temas y problemas específicos” (Baño 2012, 94). La creciente especialización y profesionalización de las disciplinas se tradujo en la diversificación de la estructura de oportunidades ocupacionales de los científicos sociales. Con todo, la figura que se impuso fue la del tecnócrata, que es una suerte de anti-intelectual. Visto así, no extraña

¹¹⁷ Ley N° 18.962, de 10 de marzo de 1990. La ley estipula que la autonomía y libertad académica excluye “el adoctrinamiento ideológico político, entendiéndose por tal la enseñanza y difusión que excedan los comunes términos de la información objetiva y de la discusión razonada, en las que se señalan las ventajas y las objeciones más conocidas a sistemas, doctrinas o puntos de vista” [Artículo 77(78)]. No está de más señalar que este inciso impide el “adoctrinamiento” de izquierda, pero no así el de derecha.

¹¹⁸ Véase, para el caso la sociología en la Universidad de Concepción, Aigner (2011).

¹¹⁹ Principalmente hacia las universidades privadas. En algunos casos –Academia de Humanismo Cristiano, Universidad Arcis, entre otros– los CAI se transformaron en universidades privadas.

que Brunner proclamara el *ocaso de la sociología*, teniendo en cuenta, como afirma con un dejo de ironía Baño (2012, 94), que “dado que ya se ha decretado el fin de las clases sociales, el fin del Estado Nación, el fin de las ideologías y hasta el fin de la historia, que alguien declare el fin de la sociología no es como para conmovirse”.

Pero no son sólo las dificultades estructurales, administrativas y presupuestarias las que atenazaron el desarrollo de la sociología crítica. Fue la profundización de la crisis de paradigmas que afectó a las ciencias sociales de los ochenta, en su versión *renovada*, la que se transformó hacia fines de siglo en la crisis de la sociología. La renuncia al marxismo como enfoque teórico-metodológico, el rechazo del conflicto como dimensión constitutiva de la sociedad, la adhesión a la concepción formal de la democracia y a las sutilezas de la ingeniería electoral, dejó muy poco espacio para la reflexión crítica y la discusión ideológica. Con el *fin de la historia* de Francis Fukuyama –procesado en clave chilena como la *democracia de los consensos*– la función crítica y la dimensión teórica de la sociología dejaban de tener sentido. La aceptación de la polarización ideológica y la radicalización política como causas del golpe de Estado, volcó al pensamiento *renovado* hacia la valoración del consenso como forma excelsa de la política, queriendo exorcizar la dimensión conflictual de la sociedad:

El modelo consensual del gobierno de la transición señaló el paso de la política como *antagonismo* (la dramatización del conflicto regido por una mecánica de enfrentamientos entre posiciones contrarias) a la política como *transacción*: la fórmula del pacto y su tecnicismo de la negociación que deben (re)conciliar una sociedad dividida en torno al nuevo equilibrio –centrista– del término medio (Richard 2001, 228).

En este sentido, el fin de la historia se presenta como la represión del conflicto, que se logra tanto por medios consensuados como coercitivos. El resultado es una aparente perpetuación del modelo vigente, sin alternativa posible. Por eso “una de las grandes batallas en el campo de las ideas concierne al actual ‘presentismo’; o sea la reducción de toda temporalidad al tiempo presente, amputado de pasado y carente de futuro. [...] Me parece que sufrimos una notoria esterilidad político-intelectual a la hora de pensar en el pasado mañana” (Faletto 2009, 161). También Garretón (2013a) constata la vacuidad del pensamiento social y político: “No hay –diría yo–, salvo a niveles sectoriales, pregunta sociológica por *la* sociedad y el tipo de sociedad a construir en los noventa”.

El “éxito” de la transición requería del “espectáculo de la reconciliación” (Richard 2002, 189) y de la apuesta por la gobernabilidad política, pero más determinante resultó el hecho de que algunos de los principales transitólogos y políticos *concertacionistas* ya habían aceptado plenamente las “bondades” del neoliberalismo y de la modernización capitalista:

Algunos estaban absolutamente convencidos de que esa modernización iba a significar también capacidad de chorreo. En el plano intelectual, lo importante fue este paso del análisis de los procesos sociales, entendidos como procesos de conflictos y transformación entre clases y grupos, a una mirada mucho más superestructural: mayor preocupación por las formas institucionales de manejo y que coinciden con una formación mucho más profesionalizante y tecnocrática (Faletto 2009, 148).

Este desplazamiento desde un enfoque estructuralista centrado en el peso de las variables socioeconómicas hacia factores de tipo decisional y elementos “estrictamente” políticos, permitía fundamentar la tesis de que la sociedad no estaba atravesada por conflictos (mucho menos por un conflicto *fundamental*), sino que era un espacio para la realización de todos los proyectos, siempre y cuando contaran con mayorías parlamentarias amplias, en el marco de un pretendido pluralismo partidista que no ponía en cuestión las bases del modelo económico y político.¹²⁰ En eso consiste esta democracia: es la *utopía tecnocrática*. En esa línea, la pericia de los *technopols* se enfocó a evitar que los *problemas* se convirtieran en *conflictos*: los primeros remiten a una esfera técnica y pueden ser resueltos por medio de acciones focalizadas, sin comprometer el sistema; los segundos se transforman en confrontación de intereses, poniendo al descubierto la dimensión política de las posiciones y de las acciones de los actores involucrados y dinamizando procesos de subjetivación política. Así lo constató Joignant a partir de los informes presidenciales elaborados por el grupo de asesores del primer gobierno *concertacionista*:

“Problema” o “conflicto”: he aquí los dos términos de una ecuación a la que los *technopols* van a dedicar todo un trabajo de objetivación destinado a privilegiar el primer polo en detrimento del segundo, con el fin de producir soluciones técnicas a los problemas al precio de *una forma de despolitización de los conflictos deliberadamente buscada* (Joignant 2012, 340, cursivas mías).

Sobre esta forma de despolitización del conflicto social que vuelve superfluos los movimientos sociopolíticos y que reduce todos los conflictos a la mera formulación de demandas atendibles por el gobierno de turno, volveremos en el siguiente capítulo pues está en el centro de la forma de comprender los movimientos sociales de la sociología *renovada*. Nos interesa resaltar, aquí, que la despolitización de la sociedad y la tecnificación de la política, promovidas y respaldadas por la sociología *renovada*, pusieron a la sociología en *estado de coma*. Con todo, el anuncio de la muerte inminente pareció remecer a los moribundos y hacia el cambio de siglo se reactivó el debate acerca del rol de la sociología y de su relación con la sociedad y con la política.

2.3.2. *De la sociología de la decadencia a la decadencia de la sociología*

Con motivo del II Congreso Chileno de sociología, celebrado en agosto de 1986, Tironi presentó una ponencia titulada “Para una sociología de la decadencia” en la que defendía la tesis de la imposibilidad de desplegar acciones colectivas, en un sentido clásico, en una situación de *disolución social* que “se identifica con un agregado de individuos y grupos primarios relacionados entre sí por la omnipresente autoridad del Estado” (Tironi 1986c, 15). A su juicio, la acción represiva de la Dictadura había

¹²⁰ La *democracia protegida* que consagra la Constitución de 1980 consiste en elegir libremente entre opciones distintas dentro de márgenes que no permiten decidir nada de lo fundamental. Jaime Guzmán sostenía que la Carta Magna se había elaborado de tal forma “que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque –valga la metáfora– el margen de alternativas posibles que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella, sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario” (Correa, Figueroa, y otros 2001, 325).

disuelto las agrupaciones sociales y había conducido a los chilenos o bien a la introspección comunitaria o bien a la apatía individualista. En este contexto, los individuos transitaban “entre la comunidad adscriptiva y el movimiento de masas sin mediaciones de ninguna especie” (Tironi 1986c, 15). Según el autor, la *sociología de la decadencia* sería el esfuerzo por teorizar estas situaciones de disolución social en las que la única acción colectiva posible es una involucionista, reaccionaria, integrista, violentista, como la que se había expresado, a su parecer, en las Jornadas de Protesta Nacional y en las acciones y el entramado organizacional autogestionario de los *pobladores*, que implícitamente el sociólogo compara con el “movimiento nazi” en Alemania. Volveremos en el siguiente capítulo sobre la renuncia o la incapacidad de la sociología de pensar la politicidad contenida en esas prácticas de resistencia y la posibilidad de politizar los conflictos sociales a partir de allí. Nos hemos referido a ese provocador trabajo de Tironi para dar cuenta de que la forma de pensar las luchas sociopolíticas en el contexto dictatorial y la transformación de la sociedad son la expresión más clara del declive de la sociología crítica, que caracterizó buena parte de los ochenta y de los noventa. La propuesta de Tironi de construir una sociología de la decadencia (en relación con los sectores pauperizados y golpeados por el modelo neoliberal, sin advertir sus luchas por resistirse a esos embates) simbolizaba la decadencia de la sociología.

Esta situación de decadencia de la sociología (de la sociología que se había *renovado*), se extiende *grosso modo* desde mediados de los ochenta hasta la primera década del nuevo siglo; es una etapa difícil para el pensamiento crítico en Chile. Muestra de ello es, por ejemplo, que si la disciplina había sido capaz de reorganizarse durante la Dictadura, superando la desestructuración institucional de los militares, el cierre de centros y carreras en algunas universidades, la persecución de sus miembros, etc., esta capacidad de autoorganización y de resistencia se verá seriamente coartada con el retorno de la “democracia”. Los sociólogos habían creado el Colegio de Sociólogos de Chile el 24 de noviembre de 1982¹²¹, con el fin de “dar apoyo y protección a las y los profesionales de la carrera en época de dictadura militar” según declaraciones de Rodolfo Gálvez, quien fuera su primer presidente (citado en Villafañe 2013). El Colegio organizó cinco congresos: tres durante la Dictadura (1984, 1986, 1989) y dos durante el primer gobierno *concertacionista* (1992 y 1994). A partir de entonces los sociólogos dejaron de “reflexionarse” durante 16 años, hasta la celebración del VI Congreso Chileno de Sociología en 2011. Nos parece que este itinerario es más que significativo de la deriva de una sociología que dejó de preocuparse por pensar críticamente la sociedad. El Colegio dejó de funcionar también durante el primer gobierno de la Concertación; su fin ha sido descrito en términos de una *autodisolución*, atribuida al hecho de que “no había mayor interés por parte de los socios” pues “varios se habían ido a trabajar a organizaciones internacionales y a otras instituciones y algunos

¹²¹ Impulsado, entre otros, por Teresa Valdés, Guillermo Campero, Raúl Atria, Manuel Antonio Garretón y Rodolfo Gálvez y, entre ellos, una joven socióloga por entonces desconocida, Cecilia Magni, que por la misma época se incorporaba al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) donde llegaría a ser la “Comandante Tamara”. Así consta en el acta de constitución, firmada ante notario, disponible para su consulta en <http://colegiodesociologos.cl/>

pensaban que ya se había cumplido su función y que *en democracia no tenía razón de seguir existiendo*”, declara Gálvez (Villafañe 2013). Recién en 2012 tomó fuerza la idea de refundar esa institución. La idea de que las instancias aglutinadoras y de autorreflexión de la comunidad de sociólogos no tuvieran razón de ser en democracia es indicativa del tipo de sociología que se había impuesto durante la Dictadura y del rol que se les reservaba a los sociólogos, en el sentido de su tecnificación y deriva profesionalizante. La victoria de la Dictadura, en el ámbito de las ciencias sociales, también se verifica en esa incapacidad de producir un pensamiento crítico de la nueva etapa histórica. Metafóricamente, Illanes (1994, 224) sostiene que “antes de caer, el gorila alcanzó a expulsar a todos los antropólogos fuera del recinto paradisíaco, y a condenarlos a no saber de sí, ni a poder hacer historia; condenarlos al trabajo alienado e inconsciente, mecánico perpetuo. Los transformó en entes técnicos”.

Con todo, la historia de la disciplina tiene un punto de quiebre en 1997; en el momento mismo en que se formula en voz alta *el ocaso de la sociología* comienza el fin de su decadencia. El agorero fue José Joaquín Brunner, a la sazón ministro secretario general de Gobierno, que con motivo del 40 aniversario de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, pronunció un discurso en el que constató –lo que en su opinión era– “el crepúsculo de la sociología y el comienzo de otras narrativas” porque la sociología “al parecer ya no tiene mucho que decir al mundo” (Brunner 1997). Después de describir las dos derivas sociológicas en el siglo XX –la “épica” (la “gran sociología”) y la “minimalista” (la del micro–relato del presente)– el autor concluye que los informes del Banco Mundial proporcionan mejores análisis y directrices que la primera, y la novela contemporánea, pasajes más ricos acerca de la vida interior y colectiva que la segunda. El *enmudecimiento* de la sociología estaría determinado, en el primer caso, por la muerte de sus referentes y, en el segundo, por la marginalidad y prescindencia de los suyos¹²²:

La gran sociología habla bien de hombres muertos; los actores del pasado: el Estado, los partidos, las clases sociales, los sindicatos, las civilizaciones, las revoluciones. [...] Por su parte, las sociologías dramáticas y situacionistas hablan mal o poco de los muertos –de las guerras o las epidemias, por ejemplo– y, entre los vivos que son su especialidad, elige preferentemente a quienes se hallan de alguna forma excluidos de la corriente principal de la modernidad (Brunner 1997, cursivas mías).

El tono de su intervención está en sintonía con el estado de ánimo de las élites que Fukuyama captó y develó en su ensayo sobre “el fin de la historia”, que más que un diagnóstico fue el blanqueo de un íntimo deseo (Moulian 1997, 55).¹²³ El razonamiento de Brunner consiste en advertir que la “gran sociología” habla de lo que ya no existe más –esos grandes actores del pasado–, y la micro-sociología se ocupa de lo que resulta irrelevante para la corriente hegemónica de la modernidad –los excluidos–. Por lo tanto, ni los grandes actores colectivos del pasado –épicas, según su apreciación– ni los

¹²² Un buen ejemplo de este segundo caso sería la sociología de la decadencia de Tironi.

¹²³ Fukuyama, Francis. “The End of History?”; *The National Interest* (verano de 1989). La timidez expresada con el interrogante desapareció poco después, cuando publicó *The End of History and the Last Man* (Free Press, 1992).

marginados de hoy día –intrascendentes– encuentran un lugar de enunciación desde la sociología chilena. Ergo, concluye Brunner, no queda más que decretar el fin de esa “ciencia” que ya no tiene referentes en la actualidad. Pocos años antes, Niklas Luhmann (1992) había registrado “el ocaso de la sociología crítica”, vinculando ese acontecimiento con la caída del muro de Berlín; sin embargo, como dijo Moulian (1997, 54), “nuestro Muro se había caído antes, se había –más bien– descascarado/desmoronado”, desde mediados de los setenta.

Y, sin embargo, el hecho de verbalizar este presagio tuvo el efecto de comenzar a conjurar los males de la sociología. El veredicto de Brunner incomodó no tanto por su contenido –que sorprendió a pocos, habida cuenta de la inacción y desorientación de la sociología en los últimos lustros– como por la liviandad, y hasta complacencia, con la que el intelectual vaticinó la inutilidad de las preocupaciones sociológicas. Como suele decirse en estos casos, si algún mérito hay que concederle a su intervención fue el de haber propiciado un debate en torno a la cuestión del quehacer sociológico, compeliendo a quienes se sintieron interpelados a participar en la discusión; además del de descubrir su posición frente a sus pares –políticos y académicos–.

Del análisis de la sociología en sus dos vertientes y de la constatación de su declive frente al auge de otras narrativas (como la novela, el cine o la televisión), Brunner aterrizó su reflexión en la derrota de los movimientos y partidos de izquierda: “¿Qué ocurriría si la izquierda se encontrara de pronto no sólo apabullada y sobrepasada sino completamente descolocada, hablando un discurso absolutamente fuera de tono con la modernidad?” (Brunner 1997). Ese giro en el argumento está relacionado con el carácter *científico* de la sociología, que Brunner pone en cuestión. Es cierto que la novela u otras narrativas pueden a menudo proporcionar una buena comprensión de los fenómenos sociales –incluso una más cabal que la sociología o que cierta sociología–.¹²⁴ Sin embargo, frente a la comprensión proporcionada por esos otros relatos, la sociología, como *actividad científica*, pretende tener un valor añadido: el rigor epistemológico, la pretensión de verdad y la capacidad de proporcionar elementos para actuar sobre la realidad. De todos, es quizás este último rasgo el más relevante, pues se entiende que un buen análisis sociológico debería permitir una comprensión de la realidad que alumbrara el carácter de los conflictos y, en consecuencia, las vías para resolverlos. Así se había concebido la sociología en el pasado: “Queríamos comprender el sentido del mundo, el sentido de la existencia, el sentido de la vida; pero no tan sólo en un afán de comprender lo que ahí estaba, sino también de –a partir de esos sentidos racionales– poder construir en cierta medida un mundo” (Faletto 1998, 23). De ahí su compromiso con la revolución. Ese tipo de sociología, claro está, era una sociología crítica –que partía de la *negación*, desde lo que en el sistema vigente está negado (excluido, marginado, oprimido, explotado)– y se convertía en algo así como una *sociología par a l a acción*, una sociología que invitaba a actuar, a transformar la realidad.¹²⁵ Había sido ese tipo de análisis el que había “orientado” la acción de

¹²⁴ Por otra parte, una no excluye a la otra: el mismo Faletto se encarga de constatar la coexistencia en la década de los sesenta de buena novela y buena sociología (Faletto 1998, 21).

¹²⁵ Establecemos una analogía con la noción de Salazar de “memoria para la acción” (Salazar 2001b).

organizaciones y movimientos políticos de izquierda y lo que la había llevado a los científicos sociales a embarcarse con sus aparejos teóricos en proyectos emancipadores. Para muchos, ese rasgo había atravesado a las ciencias sociales chilenas desde su nacimiento hasta la transición a la democracia:

La vocación crítica de la sociología, tanto en la etapa de fundación y consolidación como durante la dictadura, se tradujo en una función aliada de los proyectos de transformación del orden vigente. En cambio, a partir de la transición a la democracia e incluso desde mediados de los 80', no parece predominar una visión teórica crítica para el conjunto de la sociedad (Garretón, Cruz y Espinoza 2010, 86).¹²⁶

Por eso, la referencia a la izquierda derrotada no es baladí: esa izquierda estaría hablando ahora –después del *fin de la historia* y del consenso sobre el modelo neoliberal– un lenguaje *fuera de tono*, porque la sociología (“grande” y “pequeña”) ya no hablaría *sobre* la realidad, según Brunner. De ahí que su propuesta sea abandonar la sociología recurriendo a otras narrativas –supuestamente– más perspicaces, pero *renunciando* al mismo tiempo –esto no se dice explícitamente– a la vocación transformadora que era parte consustancial de la sociología desarrollada en Chile, a su dimensión crítica. En definitiva, ¿qué otra cosa debería hacer la izquierda (derrotada) que asumir su incapacidad para comprender el mundo a través de la sociología (crítica) y de paso para transformar el estado de cosas actual? Así lo sugiere Faletto (1998, 23): “¿No se trataría entonces, detrás de este abandono de la sociología de una duda con respecto a la posibilidad de cambiar el mundo?”.

En un tiempo histórico modelado por la *realpolitik* y “la medida de lo posible”, no otra cosa podía ser la sociología sino una *sociología en la medida de lo posible*, un conjunto de técnicas para realizar encuestas o análisis de opinión, un entrenamiento para construir índices de diversas realidades, un procedimiento para registrar los datos del mejor de los mundos (neoliberales) posible. Faletto advierte, tras las palabras de Brunner, los peligros de la pasividad, de la facticidad (esto es, del peso de las verdades de hecho, pero no de razón), la coartada para el conformismo o la complacencia de los científicos sociales. Ello contraviene la propia historia de la sociología chilena y latinoamericana: “La sociología y las ciencias sociales [...] *son ciencias con intencionalidad*, tienen ellas mismas, intenciones. Por eso conviene destacar que la

¹²⁶ Faletto, en cambio, es bastante crítico con esta imagen, un tanto mitificada, de una sociología chilena (sobre todo en los sesenta y principios de los setenta) crítica. A su juicio la criticidad de la sociología chilena en ese periodo estaría dada fundamentalmente por la presencia del exilio intelectual latinoamericano en Chile: “La dimensión más crítica no era parte de la tradición de la sociología chilena [...] La dimensión más crítica, la verdad, es que venía con una reflexión sobre la cosa latinoamericana en su conjunto y era mucho más propia de los sociólogos latinoamericanos: brasileños, argentinos, etcétera” (Faletto 2009, 154). Significativamente, a juicio de este sociólogo, la disciplina volvería a adquirir ese rasgo tradicional (a-crítico) en los noventa, “al tener como referente su colaboración profesional en las políticas estatales” (ibíd.: 55). La reflexión de Faletto entraña, no obstante, un peligro: al enfocar el problema nuevamente en los intelectuales y su “inflación ideológica”, aquellos más radicales, que serían los extranjeros, se convierten en la cabeza de turco. Con ello, se le otorga cierta validez al argumento esgrimido por los militares *golpistas* según el cual “elementos” extranjeros habrían pretendido socavar los valores nacionales; en consecuencia, el pueblo chileno aparece como “naturalmente” inclinado hacia los principios del orden y la estabilidad.

tradición de las ciencias sociales, y de la sociología en América Latina y en Chile, ha sido la intención de no someterse a ‘lo real’, a lo real entre comillas; esto es, de no someterse a las cosas tal como son” (Faletto 1998, 24, cursivas mías). La sociología había contribuido históricamente a la apertura de posibles, por eso se había vinculado con proyectos “progresistas” de sociedad; sin embargo, el golpe militar, primero, y la transición política, después, produjeron una *mutación* de la sociología que la condenó a la inacción y, en último término, a la esterilidad.

De acuerdo con lo anterior, más allá de la absurda tesis del fin de la sociología, la intervención de Brunner planteaba una arista que sí merecía ser considerada: la constatación de un desencuentro, una inadecuación, entre la sociología y la realidad social contemporánea.¹²⁷ En ese sentido, resultaba pertinente la pregunta por “¿cuánto de realidad está quedando fuera de la tematización científica de la sociología?” (Basaure 1998, 17), máxime cuando pocos años antes, habían sido los sociólogos quienes habían determinado –por decreto sociológico– la *inexistencia de los movimientos sociales* y, con ello, habían dejado fuera del análisis de la realidad social a un conjunto significativo de actores, prácticas sociales y experiencias transformadoras. La conveniencia de la provocación de Brunner la confirma el hecho de que también Garretón, en su intervención en el mismo evento, participara de un estado de ánimo similar al de su colega al constatar la disociación entre el campo sociológico y el mundo real. Desde su punto de vista, la situación de la sociología contemporánea es de mutación desde una identidad forjada por la *trinidad* de las dimensiones –o funciones– intelectual, científica y profesional a “una fase plástica” de readecuación de los paradigmas disciplinarios (Garretón 1998, 28). De acuerdo con el *estallido* operado en el campo sociológico, Garretón (1998, 27-28) sostiene, entonces, que “nos falta una reconceptualización teórica que dé cuenta de una disciplina cuya vocación intelectual está disociada de su dimensión científica”, y es esa falta de correspondencia la que obliga a la sociología, para cumplir con su vocación intelectual, a recurrir “a otros lenguajes que no provienen de su ciencia” (ibíd.: 27).¹²⁸ Con todo, Garretón (ibíd.: 29) difiere notoriamente de Brunner, al señalar que “lo propiamente sociológico será la permanente pregunta por el sentido y por los actores. Ésa es la mirada y la pregunta sociológica”, abogando por la necesidad de repensar la disciplina pero relevando su función social.

El hecho de que estamos ante un clima de época lo corrobora la publicación, también en 1997, del libro de Tomás Moulian, *Chile Actual: Anatomía de un mito*, que remeció el panorama intelectual cosechando un éxito inusitado.¹²⁹ Allí el sociólogo

¹²⁷ La tesis de Brunner aludiría no tanto al fin efectivo de la sociología, esto es, la desaparición de la disciplina y de sus cultivadores, sino a la muerte real, a su incapacidad para pensar/criticar la sociedad contemporánea.

¹²⁸ Garretón sostiene que el callejón sin salida en el que se encuentra la sociología chilena en la actualidad se debe al divorcio de las dimensiones profesional, científica e intelectual, cuya articulación había definido históricamente el perfil del sociólogo: “Hoy día, los componentes intelectual (análisis ideológico-teórico-crítico), profesional (académico), y científico (investigador) dan origen por separado a diversos tipos de científicos sociales” (Garretón 2007, 236).

¹²⁹ Llegó a ser un *bestseller*, categoría que no suelen ocupar los ensayos e investigaciones sociológicas, poniendo de manifiesto la oportunidad de un libro que cuestionaba la transición a la democracia, cuando ésta evidenciaba su agotamiento o carácter mítico.

realiza una radiografía completa y un análisis cáustico de la transición a la democracia y de los gobiernos de la Concertación, haciendo énfasis en las mutaciones intelectuales. Para Moulian (1997, 141), “el Chile Actual es la culminación exitosa del ‘transformismo’”, esto es, “del largo proceso de preparación durante la dictadura, de una salida a la dictadura, destinada a permitir la continuidad de sus estructuras básicas bajo otros ropajes políticos, las vestimentas democráticas”. Es decir, la explicación de cómo la dictadura, su modelo económico, político y social, consagrado en la Constitución de 1980, *devino democrático* al tiempo que una parte significativa de la oposición a la Dictadura devenía *pinochetista*.

Por eso, la nueva democracia debía sobre todo salvaguardar “la obra” de la Dictadura. Este reconocimiento del legado de Pinochet, desprendido ya de cualquier atisbo de culpabilidad, fue realizado por el demócratacristiano Alejandro Foxley en una entrevista concedida en el año 2000:

Pinochet... realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73 [...]. Ésa es una contribución histórica que va [a] perdurar por muchas décadas en Chile y que quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues *terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal*. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado normalmente ensombrecida (citado en Fazio, y otros 2005, 44).

La adhesión de la Concertación al modelo neoliberal ha sido reconocida por uno de los cerebros de la transición: “El éxito económico postrero del gobierno militar influyó significativamente en las propuestas de la Concertación, generando de hecho una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer” (Boeninger 1997, 368-369). Y esto es extremadamente relevante porque pareciera que “es porque se concuerda sobre fines, con la sociedad de mercado, que se acepta pactar sobre las reglas del juego democrático” (Ruiz Schneider 1993, 170) y no al revés. Es decir, se produce un “acuerdo metapolítico” que permite, en segundo lugar, pactar sobre las reglas del juego democrático. De ahí que capitalismo y democracia pasen a ser aliados:

El capitalismo chileno ya se ha reconciliado con ella [la democracia]. En su madurez sin embargo, hay que ir más lejos: debe transformarse en su aliado, porque es el entorno natural del capitalismo. La democracia crea el clima de libertad, de innovación, de apertura, de tolerancia al riesgo, que éste necesita para desarrollarse. Un sólido *joint venture* entre ambos es otro reto de la madurez (Tironi 1999, 80).

Por eso, para Illanes (2002, 161):

Más allá de su lógica economicista, la clave política de este proyecto neo-liberal consiste justamente en que restablece el orden mítico de la alianza entre los dioses, los señores y los guerreros. Este factor cultural y político del modelo económico es importante, a mi juicio, para comprender su actual hegemonía: su arraigo tiene la fuerza de una mitología refundacional (facilitada por el trauma histórico de la pérdida de las claves del proyecto y poder popular).

La obra de Moulian, que es producto de un malestar creciente a nivel de las ciencias sociales¹³⁰ y del pensamiento político con qué, incluso entre aquellos que fueron sus principales impulsores no logra resarcir, a juicio de Faletto, el abandono que caracteriza a la sociología de los noventa:

La sociología no está cumpliendo con su rol. Un libro bastante bueno e importante fue *Chile actual, anatomía de un mito*, de Tomás Moulian, pero ese texto no es lo suficientemente sociológico. El libro se hacía cargo de un malestar, pero si uno lo lee en una lectura quizás superficial aparece la culpa en la conducta, como que alguien de repente traicionó los viejos ideales, fallando en el análisis más estructural de por qué estos cambios de conducta. No es la intención de Tomás, pero aparece como una especie de crítica de traición de los intelectuales, pero sin que nadie te explique por qué, salvo que sean todos traidores natos (Faletto 2009, 153).

La acusación de traición, ante el tribunal de la historia, es frecuente y no cabe descartarla del todo, aunque no logre explicar completamente la mutación de las élites políticas e intelectuales *renovadas*. Por ejemplo, en su conversación con Gabriel Salazar (2010), Carlos Altamirano, señala: “Fíjate que presidentes como Ricardo Lagos o Fernando Henrique Cardoso han cambiado radicalmente respecto de sus antiguas ideas. Eran hombres de izquierda, sin embargo, una vez en la presidencia, ni siquiera se comportaron como socialdemócratas, sino como convencidos neoliberales”. El señalamiento amaga la imputación de traidores, oportunistas que habrían cambiado su pensamiento una vez en el gobierno. Pero esta formulación no da cuenta de proceso de mutación que vivieron los intelectuales y las élites políticas *renovadas*, y de las condiciones que lo hicieron posible. Por otra parte, puede complicarse este diagnóstico si se considera que, en su calidad de élites, estos sectores no mutaron su concepción del poder como estrategia referida exclusivamente al control del Estado, como lo señala Güell (2002), o el carácter *dirigista* y desde arriba de su práctica política, como lo indica el mismo Garretón (2009, 72):

Por eso creo que no cabe hablar de traición como plantea en la pregunta: yo los veo actuando y haciendo las cosas igual que siempre, con ese mismo estilo que los marcó en la década de los '70 y que me parece nefasto. Llama la atención también que entre los núcleos de orientación derechista y también puramente pragmática de la Concertación, sean los ex-MAPU los principales protagonistas (cualquiera fuera su fracción de origen). En general, mi balance sobre lo que

¹³⁰ Otros libros emblemáticos completaron el diagnóstico de la desazón existente con el modelo consensuado por las élites en esos años, desde perspectivas distintas pero confluyentes en parte: Jocelyn-Holt, Alfredo. *El Chile perplejo. Del avanzar sin transar al transar sin parar* (Santiago: Ariel, 1998); De la Parra, Marco Antonio. *La mala memoria: Historia personal de Chile contemporáneo* (Santiago: Planeta, 1999).

significó el MAPU para una generación, a la cual pertenezco, es abiertamente negativo.

La obra de Moulian aporta elementos para comprender el ocaso de la sociología y también de la política en virtud “del utopismo neoliberal, que tiende a tecnificar lo político, matando para ello a las otras ideologías” (Moulian 1997, 63). La utopía neoliberal o tecnocrática consistió en construir “un proyecto que podía esgrimirse como saber científico” (ibíd.: 32). La eliminación de la discusión sobre *los fines*, significó que la política –como elaboración de grandes proyectos de sociabilidad– ya no tenía razón de ser, a lo sumo debía reconvertirse en la administración del mejor mundo *posible*: el resultante del contubernio entre mercado social y democracia política.

El retorno del debate intelectual revivió en algo a la sociología crítica proyectándola más allá de la versión tecnocrática que la había dominado en los primeros años de gobiernos *concertacionistas*, hacia el reencuentro con su “vocación pública”:

Las ciencias sociales chilenas en los noventa aparecían como un espacio de modelamiento del debate público, vehiculizando el relato de los nuevos tiempos más allá de la academia pero tampoco no mucho más lejos de las elites (Aritzía y Bernasconi 2012, 137).

Finalmente, el año 1998 constituye un punto de quiebre de la historia reciente chilena. La detención de Pinochet en Londres, en octubre de ese año, a instancias del juez español Baltasar Garzón, detonó el *mito* de la transición perfecta, de una sociedad que había dejado atrás los conflictos y desavenencias, unida por la benevolencia de una élite política con altura de miras y la bonanza de la economía de libre mercado. En palabras de la crítica de arte y ensayista Nelly Richard (2001, 238):

El caso Pinochet hizo estallar la zona de acumulación de lo “no-dicho” en cuyo silencio se habían depositado reclamos y frustraciones. La explosión noticiosa del caso Pinochet provocó un espectacular “retorno de lo reprimido” que hizo saltar todo el aparato retórico de cálculo y moderación de la transición que hasta entonces había bloqueado el trabajo activo de la memoria en nombre de una prudencia hecha de minuciosas estrategias de ocultación del conflicto. [...] Durante los meses que siguieron a la captura y detención del ex dictador, el caso Pinochet produjo un desarreglo simbólico en la máquina tan bien programada de la política concertacionista.

Fue la detención del tirano la que puso en evidencia la fragilidad del arreglo transicional “socavando con ello el consenso a-histórico que pretendía instaurar el discurso oficial de la gobernabilidad y del crecimiento económico” (Salazar y Valderrama 2000, 6). Y con la detención de Pinochet y la emergencia de la historicidad frente a la quietud de la gobernabilidad, regresaron los análisis, y se produjeron relecturas *problematizadoras*, de la transición política y de sus consecuencias, tensando el discurso oficial –unívoco y excluyente– del pasado reciente y el devenir del pensamiento y quehacer sociológicos.

2.4. Consideraciones finales

Pinochet murió en 2006 a la avanzada edad de 91 años, después de casi 17 años de Dictadura, terrorismo de Estado e imposición del modelo neoliberal, y tras otros casi 17 de democracia neoliberal. Esta última no ha gozado de buena salud, al punto de que muchos científicos sociales y políticos han preferido referirse a ella como transición a la democracia, dando cuenta de un proceso largo y dificultoso del que la democracia no acababa de nacer y la Dictadura no terminaba por morir. Así, cada poco tiempo, políticos e intelectuales decretaban el fin de esta interminable transición chilena: con el término del gobierno de Patricio Aylwin (1994), con las reformas constitucionales realizadas en 2005, con la muerte del tirano (2006), con la alternancia partidista expresada en el triunfo electoral de Sebastián Piñera por la Coalición por el Cambio¹³¹ (2009) y, por último, con el cambio de nombre de la Concertación de Partidos por la Democracia por el de Nueva Mayoría (2013). Por eso la transición a la democracia, aquel acuerdo entre élites políticas (y económicas) y los militares, sustentado en pactos “implícitos” porque “no necesitaba pactarse explícitamente, porque además era un costo a pagar por la transición. Un costo, por lo demás, temporal” (Godoy 1999, 104) parece haberse demostrado “más que una simple estrategia sostenida en un criterio de realismo político [...] una concepción de democracia de largo alcance” (Durán 2006, 224).

En un ejercicio de formalismo asombroso, Godoy (1999, 84) define la transición a la democracia como “el proceso a través del cual se realizan las condiciones procedimentales mínimas para que la democracia entre en la fase de consolidación y profundización”. Por su parte, Garretón ha sostenido que la transición abarca la última etapa de la Dictadura, en la que una vez implementados los mecanismos dispuestos en la Constitución de 1980 para permitir los registros electorales y la inscripción de los partidos políticos, tiene lugar la celebración del plebiscito de 1988 y las elecciones de 1989, y que finaliza con la transmisión del mando entre Pinochet y Aylwin el 11 de marzo de 1990 (Garretón 1993a). De acuerdo con esta periodización, el gobierno de este último no debería considerarse parte del periodo transicional; pero esta etapa tampoco es plenamente democrática, nos advierte el sociólogo, porque, a su juicio, la pervivencia de “enclaves autoritarios”¹³² impide el funcionamiento pleno de las instituciones

¹³¹ Coalición formada por los partidos herederos de la Dictadura, Unión Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

¹³² La expresión fue acuñada por Garretón (1991a, 104) y se refiere a reductos de autoritarismo heredados de la Dictadura: “Estos enclaves puede ser institucionales (Constitución, leyes, etc.), ‘actorales’ (Fuerzas Armadas con poder de veto, derecha no democrática, etc.), socioculturales (valores autoritarios, conformismo, etc.) o ético-simbólicos (problemas de derechos humanos no resueltos)”. Las “leyes de amarre” son consideradas enclaves autoritarios de tipo institucional. A raíz del plebiscito de 1988 en el que Pinochet perdió la posibilidad de prolongarse en el poder, y más claramente durante la segunda mitad de 1989, la Dictadura dictó varias leyes que buscaban asegurar el blindaje del modelo económico y político vigente. Entre las más importantes citamos: la Ley de Amnistía para todos los crímenes cometidos por los aparatos represivos de la Dictadura entre 1973 y 1978; la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; la asignación automática y sin control parlamentario del 10% de las ventas del cobre para la compra de armamento; el establecimiento de 9 senadores designados para el Congreso Nacional; el poder de veto de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional donde cuatro de los siete miembros son militares; el sistema electoral binominal que produce la sobrerrepresentación de la derecha, que con un tercio de la votación electoral obtiene la mitad de la representación parlamentaria, siendo que la Constitución estipular mayorías de

políticas. Desde su perspectiva, la tarea del primer gobierno *concertacionista* debía ser precisamente superar dichos enclaves para completar la transición y avanzar en la consolidación democrática, pero lo que se produjo fue, a su parecer, “una doble consolidación, tanto de los aspectos democráticos como de los no democráticos (sic), es decir, un alejamiento de la posibilidad de inestabilidad y regresión autoritaria, pero también de la posibilidad de una superación de los enclaves autoritarios que permitiera mejorar la calidad del régimen” (Garretón 1994, 25).

A nuestro juicio, la democracia chilena *nació senil*.¹³³ No era una democracia nueva, sino la continuidad dictatorial revestida de legitimidad democrática. “Pues es de sobra sabido que los ‘poderes fácticos’, al irrumpir, ciñen traje dictatorial, y al retirarse, toga de legislador; que, por ello, dejan tras sí –en garantía de perpetuación– un (socialmente espurio) ‘derecho constitucional’” (Salazar 1994, 93). La idea de que no podía volverse a la “antigua democracia”, que había dado pie a la intervención de los militares, parece una idea compartida por éstos y por los sociólogos *renovados*.

La gesta que protagonizó una amplia mayoría de la oposición a la Dictadura, haciendo posible el triunfo electoral de la Concertación de Partidos por la Democracia, difuminó los rasgos de permanencia evidentes en dicho acontecimiento y en la etapa que abría, posibles ambos sobre la base de acatar la Constitución de 1980 y la institucionalidad dictatorial y de subordinar, postergar o anular las ansias democratizadoras del movimiento popular. Por eso, para algunos como el Comandante “José Miguel”¹³⁴, “sea cual sea el resultado del plebiscito, éste lleva implícito la continuidad del sistema” (citado en Rojas 2011, 427). La dicotomía dictadura-democracia, útil para aglutinar alrededor del polo democrático a todos los desafectos de la Dictadura y sus disímiles reivindicaciones, adquiriendo ese carácter de significativo vacío que le sirvió a los sectores partidistas-pactistas para hegemonizar (o totalizar) la oposición, resulta engañosa para explicar la naturaleza profundamente autoritaria del sistema político en funcionamiento desde 1990: “En este sentido, la democracia actual no es sino la interrupción de los actos de democratización desplegados, de las prácticas de liberación que lograron escapar y poner en crisis los controles y codificaciones de la dictadura” (Guerrero 2006, 152).

El pacto *implícito* de la transición fue posible, precisamente, por la redefinición que la izquierda *renovada* hizo de la democracia en el sentido de vaciarla de contenido: si en los años sesenta y setenta a la democracia formal o burguesa se le contraponía una democracia sustantiva, real o, simplemente, democracia a secas, la *renovación* del pensamiento social y político provocó una mutación en el concepto de democracia, en el sentido de entenderla únicamente a partir de sus atributos formales y de anteponer la

dos tercios para poder ser reformada. Algunas de estas leyes (como la de la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, los senadores designados, y la función del Consejo de Seguridad Nacional) fueron derogadas o modificadas en las reformas constitucionales aprobadas en 2005. Para Portales esas reformas fueron la culminación de la consolidación de la democracia tutelada, pues la Concertación sancionó la Constitución de 1980 con leves modificaciones (Portales 2005).

¹³³ Seguimos en esto al grupo de Los Incontrolados, un colectivo libertario, que en el *Manifiesto encontrado en Vitoria (1977)*, consideró a la democracia española “nacida senil” (2004, 108).

¹³⁴ Raúl Alejandro Pellegrin Friedmann, fundador del FPMR, brazo armado del PC, y más tarde FPMR-Autónomo.

negociación y el consenso inter-élites a la confrontación de proyectos sociales. La renovación socialista fue un proceso transversal a distintas fuerzas políticas, que tuvo una expresión muy fuerte en la academia y en la mutación de las ciencias sociales, en las que destacaron los trabajos de los sociólogos del MAPU. Este fenómeno es de especial interés para nuestro trabajo porque necesitamos comprender el espacio en el que surge la reflexión sobre los movimientos sociales y quiénes son los científicos sociales que hegemonizan la producción académica sobre las acciones colectivas.

Por ello hemos descrito las transformaciones que sufrieron las ciencias sociales chilenas, desde la intervención de las universidades por parte de los militares, el control exhaustivo de carreras y planes de estudio, la expulsión de académicos, estudiantes y personal no docente, la criminalización de las ciencias sociales, pasando por el proceso de reconstrucción extrauniversitaria que se articuló en los centros académicos independientes que proliferaron en Chile durante la década de los ochenta de la mano del financiamiento de fundaciones extranjeras, para llegar en la posdictadura, al dificultoso y prolongado camino de recuperación de las universidades para la investigación y la docencia en ciencias sociales.

Asimismo nos hemos referido al proceso subjetivo de renovación que llevaron a cabo los científicos sociales, que produjo rupturas y abandonos, adscripciones y afirmaciones, engendrando una mutación radical de las ciencias sociales chilenas. El efecto del golpe de Estado es más corrosivo, si cabe, en esta dimensión; el proceso de cuestionamiento proviene del fuerte impacto que el golpe y la Dictadura produjeron en amplios sectores de la sociedad y específicamente en los intelectuales. Las transformaciones a las que aludimos las hemos ordenado en tres ejes: en la concepción del científico social y de su rol en la sociedad; respecto de los paradigmas teórico-metodológicos hegemónicos; y en cuanto a los proyectos de sociedad definidos como posibles o racionales.

Respecto de primer aspecto, los sociólogos cuestionaron el carácter ideológico que impregnaba su práctica y su producción con anterioridad al golpe de Estado, evidenciando una supuesta ceguera ideológica que redundaba en el dogmatismo de sus análisis y posiciones. Además, se acusaron de haberse creído profetas, visionarios capaces de anunciar la revolución que se avecinaba. El golpe produjo, en este sentido, un quiebre de todas las certezas anteriores. Los científicos sociales denunciaron este papel y se responsabilizaron, por ende, de la sobre-ideologización que habría caracterizado el pensamiento político y sociológico, contribuyendo con ello a la polarización política. Supuestamente asumieron un rol más modesto para sí mismos, construyendo la imagen de profesionales abocados al conocimiento de ciertas parcelas de la realidad social. Con todo, durante la Dictadura los científicos sociales e intelectuales siguen jugando un rol fundamental en la definición/construcción de proyectos políticos. Rol todavía más importante porque la academia se convirtió en la forma tolerada y pública de hacer política. En este sentido es que hemos cuestionado la valoración que los científicos sociales y los sociólogos particularmente han hecho de su transformación en dos sentidos: primero, respecto de la construcción en extremo caricaturizada de la ideologización previa al golpe de Estado que sirvió no tanto para criticar y proponer superaciones de aquel tipo de ciencias sociales, sino para abandonar

el compromiso explícito con la transformación radical de la sociedad; y, en segundo lugar, respecto de la visión desideologizada de las ciencias sociales durante la Dictadura, porque si bien es cierto que se produjo un cuestionamiento de los paradigmas anteriores y de los “grandes metarrelatos”, no lo es menos que la producción sociológica en los ochenta se circunscribió al marco analítico proporcionado por la transitología, contribuyendo sobremanera a definir el camino de la transición chilena.

La transformación de los científicos sociales renovados tiene que ver más con la renuncia al marxismo como paradigma teórico-metodológico, al análisis de clase como eje estructurador de la producción académica y a la idea de conflicto como elemento central de la producción de la sociedad. El marxismo es denunciado como un enfoque total y, a la vez o quizás por ello, reduccionista de la complejidad social. El abandono del marxismo, presentado como ideológico, dogmático, simplificador, etc. dio paso al relativismo teórico o al eclecticismo de modelos y fuentes. A pesar de que los análisis sociales se abrieron a esa diversidad de enfoques, lo cierto es que en el pensamiento sociológico de los ochenta y noventa primó el enfoque *politicista* de la transición a la democracia, que se convirtió en el nuevo marco desde el cual se encuadraban los problemas de la democratización de la sociedad. Por lo tanto, la renuncia no es tanto a los enfoques teórico-metodológicos, sino al marxismo como paradigma crítico que estructura la realidad a partir del conflicto entre capital y trabajo. La crítica a cierta tendencia economicista o mecanicista en algunos trabajos marxistas, así como al carácter frecuentemente teleológico del estudio de la historia y de los actores sociales, se transforma rápidamente en el abandono del análisis marxista de la realidad. Y en la adscripción a formulaciones sobre la construcción de la sociedad basadas en la centralidad de la gobernabilidad, la idea del consenso y los pactos inter-élites.

En ese sentido, es que se produce la tercera renuncia, que es a la revolución tanto como método político, como en cuanto idea, esto es, como creencia de que es necesario transformar radicalmente la sociedad. La sociología *renovada*, al abandonar las categorías de clases sociales y de conflicto de clases, asume como superiores las estrategias concertacionistas entre distintos sectores sociales, y la negociación de reformas parciales que cuenten, aparentemente, con apoyos electorales mayoritarios, con independencia de que la propia Constitución de 1980 impide la consecución de esas mayorías. Por esa vía, se pretende vaciar a la política de su contenido utópico, de ser el espacio de la disputa de proyectos de sociedad alternativos y se convierte en administración de lo dado, por medio de partidos políticos distintos que no transgreden los márgenes del sistema vigente. El realismo político se transforma en pragmatismo y en reproducción de la esfera política, *como si* estuviera al margen de los intereses de determinados grupos socioeconómicos.

La sociología contribuyó a construir esta imagen a-conflictiva de la sociedad chilena. Por eso, el proceso de “renovación” ha supuesto, en las ciencias sociales, la pérdida de su capacidad crítica. Es en ese contexto en el que emergieron los estudios sobre los movimientos sociales en Chile y su construcción teórica desde la sociología *renovada*. El concepto de movimiento social se constituyó en un *campo de batalla*, el *locus* de un conflicto ideológico (en cuanto visión de mundo) por dotar de significado ese concepto. Desde la perspectiva *renovada*, en Chile no existían movimientos sociales

o éstos debían subordinarse a la conducción partidista en la estrategia de la transición política; las protestas y las luchas sociopolíticas, específicamente las de los *pobladores*, que albergaban un mayor contenido rupturista que las de los sectores medios, eran descritas como tendencias anómicas o de disolución de la sociedad y, como tal, fueron negadas y estigmatizadas. No hubo espacio en la sociología –salvo excepciones– para pensar la radicalidad y la politicidad de aquellas formas de protesta y de organización. La respuesta provino de otros sectores académicos, más *orgánicamente* articulados con las propias comunidades y organizaciones de pobladores, que impugnaron la imagen deformada de las protestas y de las estrategias de los sectores populares para producir una democratización efectiva de la sociedad, evidenciando las trampas contenidas en la separación entre transición política y democratización social, dicotomía *par excellence* del pensamiento *renovado*. Sobre estas construcciones teóricas y sus efectos políticos, y sobre las disputas entre la sociología política y la historia social –que es la corriente historiográfica que ha aglutinado la reflexión *afirmadora* de los movimientos sociales– trataremos en los capítulos siguientes.

CAPÍTULO III

La decadencia de la Sociología (Política): negación y subordinación de los movimientos sociales

No digáis que el movimiento social excluye el movimiento político. No hay jamás movimiento político que, al mismo tiempo, no sea social.

Sólo en un orden de cosas en el que ya no existan clases y ante el agonismo de las clases, las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas. Hasta que ese momento llegue, en las vísperas de toda reorganización general de la sociedad, la última palabra de la ciencia social será siempre:

“El combate o la muerte, la lucha sangrienta o la nada.. Así está planteado inexorablemente el dilema (George Sand)”.

Karl Marx (1987[1847], 121)

Se oirá la voz desde palacio para decir que todo es fruto de la generosidad y de la madurez cívica. Hasta aquí se ha llegado. Se hará un monumento.

Tal vez en algún elogio se diga algo alguna vez, pero nada sistemático. No habrá nombres, todos seguirán siendo anónimos, las víctimas, los verdugos y los cómplices. Lo digno, lo justo, resultó imposible.

Carlos Poblete (2004)¹³⁵

¹³⁵ Prisionero político, torturado y exonerado; palabras pronunciadas con motivo del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, dado a conocer por el Presidente Ricardo Lagos en 2004.

En este capítulo exponemos –y criticamos– las características de la producción sociológica que ha hegemonizado la reflexión sobre los movimientos sociales en Chile. Primero damos cuenta de las circunstancias en las que emergió la preocupación por los *nuevos movimientos sociales*, vinculando las peculiaridades del caso chileno con un proceso regional que afectó tanto a las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, habida cuenta del fenómeno de “neoliberalización” (Ruiz Contardo 1995) que supusieron las dictaduras militares y el *giro* conservador de los ochenta, como al pensamiento sociológico y político que se caracterizó por el cuestionamiento de los grandes paradigmas teóricos y del “sujeto histórico” que había encarnado anteriormente los designios de la revolución.

La reflexión sociológica sobre los movimientos sociales, o sobre las movilizaciones –pues a fin de cuentas los sociólogos *renovados* negaron que existieran movimientos sociales, en sentido estricto, en Chile–, se concentró en dos espacios institucionales: la Flacso y SUR. Si bien los ejes fundamentales de la lectura interpretativa de los autores de ambos centros son los mismos, consideramos que en buena medida se complementan en sus desarrollos: SUR se enfocó en el proceso de constitución del sujeto, mientras que la Flacso se interesó en las movilizaciones y las protestas desde una perspectiva más institucional. Moyano atribuye, en parte, las diferencias observadas entre los trabajos de ambas instituciones a las distintas pertenencias partidarias de los investigadores en cuestión: los primeros, miembros del MAPU Obrero Campesino (en Flacso), y los segundos, del MAPU Garretón¹³⁶ (en SUR). Una de las diferencias más significativas tiene que ver con el sesgo institucional y politológico de los primeros, y el predominio del análisis social en los segundos, cuyos análisis giraron en torno del “sujeto, sus transformaciones internas y la sociedad civil” (Moyano 2011b, 200). Como hemos señalado, ello no obstó para que el diálogo, el intercambio de análisis y la circulación de las ideas fuera posible entre ambas colectividades, “confluyendo en un pensar la transición de manera complementaria” (id.).

Por último, analizamos cómo la manera de conceptualizar a los movimientos sociales y la consecuente negación o subordinación de los mismos, justificó la *transición a la democracia*, entendida exclusivamente como un cambio de régimen pactado con el “mundo de la dictadura”, y facilitó la subsiguiente marginación de las reivindicaciones emanadas de los movimientos sociales y el disciplinamiento de los sectores “rebeldes”, desde mediados de los ochenta y durante la posdictadura.

3.1. La irrupción de “nuevos” actores

La construcción de los movimientos sociales como un *campo* de estudio específico de las ciencias sociales chilenas tuvo lugar en los años ochenta del siglo XX. Hasta entonces, la nomenclatura académica y política incluía principalmente las categorías generales de “movimiento de masas” y “movimiento popular”, y las más específicas de “movimiento obrero”, “movimiento campesino” y “movimiento

¹³⁶ En referencia a Óscar Guillermo Garretón, secretario general de esta fracción del MAPU.

estudiantil”. Obreros –en un sentido laxo–, campesinos y estudiantes eran los tres sectores sociales que habían nutrido, históricamente, las luchas sociales y políticas para transformar la realidad en un sentido democratizador. De manera concomitante, desde las versiones hegemónicas del marxismo se había realizado el papel del proletariado como sujeto *verdaderamente* revolucionario, al que las otras expresiones del movimiento popular debían subordinarse. Sin embargo, a partir de los años cincuenta, las luchas por la vivienda adquirieron tal masividad y radicalidad que forzaron la reflexión acerca del *movimiento de pobladores*, es decir, de aquellos que organizaban su protesta y su acción sociopolítica alrededor de la reivindicación de un *sitio* para vivir, hecho que decantaba su identidad social, por encima de otras auto-atribuciones y de imposiciones identitarias. Con todo, el *movimiento de pobladores* “en los años sesenta era todavía una suerte de movimiento social ‘auxiliar’ de los movimientos sociales en sentido estricto, es decir, el movimiento obrero y campesino” (Garcés 2003a, 1). La efervescencia social y política que tiñó de rojinegro los años sesenta y setenta hizo que los *pobladores* adquirieran una formulación también más radical, expresada en la consigna “nuestra lucha es más grande que la casa” (Cortés 2013), que auguraba los gérmenes de *poder popular*, cercenados por el golpe de Estado de 1973. Durante la Dictadura fueron los *pobladores* los protagonistas tanto del entramado asociativo vinculado a la sobrevivencia y la resistencia –sobre todo las *mujeres pobladoras*– como de las Jornadas de Protesta Nacional –principalmente los *jóvenes pobladores*–

137

Con todo, la emergencia, en la década de los ochenta, de la preocupación por los movimientos sociales no es exclusiva de Chile; es un fenómeno transversal a América Latina. El advenimiento de los golpes militares y las dictaduras en el Cono Sur, y la persistencia de regímenes autoritarios en otros países de la región, modificaron sustancialmente el escenario en el que habían emergido las movilizaciones nacional-populares de los años veinte y treinta, sustentadas en grandes coaliciones entre los sectores populares y medios, el Estado y la embrionaria burguesía nacional, y pusieron fin al *clima d e época* que había animado los desafíos rupturistas planteados por los partidos y movimientos de la izquierda revolucionaria inspirados por el triunfo de la Revolución Cubana. La contrarrevolución militarizada buscó dismantelar y anular las formas de organización y de acción de los movimientos que habían protagonizado la anterior oleada de luchas, específicamente del movimiento obrero–popular y de los sectores medios, prohibiendo sus partidos y sindicatos, y suprimiendo la legislación laboral y social que los amparaba:

Los golpes militares y la reacción que se tuvo en casi todos lados significaron la desestructuración fundamentalmente de los sectores medios y, obviamente, también de lo que había como movimiento obrero o campesino. Los grupos

¹³⁷ Pero también adquirieron fuerza paulatinamente el movimiento de derechos humanos –que aglutinaba a distintas organizaciones tanto de los sectores populares (*pobladores*) como de los estratos medios–, el movimiento estudiantil, el mapuche, el de mujeres o feminista, distintas expresiones culturales de los jóvenes, etc.

intelectuales quedaron sin referentes sociales, ni siquiera con aquellos a los cuales socialmente pertenecían: los sectores medios (Faletto 2009, 148).

Pero, siguiendo la máxima *foucaultiana*, “donde hay poder, hay resistencia” (Foucault 1990, 116).¹³⁸ La violenta transformación en las condiciones sociales, económicas y políticas que habían sustentado la emergencia de los movimientos considerados tradicionales, propició necesariamente la mutación en las formas de organización y de protesta, y en la construcción de subjetividades políticas, así como la irrupción de actores sociopolíticos que anteriormente habían tenido menor visibilidad o no habían concitado la atención de los científicos sociales, abriendo el camino a la reflexión sobre el carácter novedoso de las luchas en esta nueva etapa. Es el caso de aquellos segmentos de los sectores populares tradicionalmente caracterizados como *informales* o *marginales*, cuya vinculación con la estructura productiva era débil, intermitente o formalmente inexistente,¹³⁹ y que una interpretación en extremo reduccionista del concepto de clase obrera propendió a considerar secundarios o retardatarios del proceso revolucionario. Sin embargo, en los ochenta, en el contexto de desarticulación de las formas productivas “fabriles”, y de control y desmantelamiento de las organizaciones sindicales asociadas a dicho patrón industrial, los “marginales” adquirieron una centralidad inusitada y, frecuentemente incomprendida, en la lucha social y política, que rompía con los patrones clásicos de la acción colectiva. Es el caso también de las mujeres y de las reivindicaciones de género, que la centralidad de la masculinidad en el mundo del trabajo asalariado y en el ámbito de la política institucional, anteriormente invisibilizaba e inhibía. Por eso, “paradojalmente, el movimiento de mujeres de los años ochenta adquiere cuerpo, voz y visibilidad pública cuando se desmantelan las formas históricas de asociatividad política y social, y cuando los varones pierden su tradicional protagonismo bajo amenaza de persecución, cárcel y exilio” (Valdés, y otros 2000, 220). El predominio de las mujeres en las organizaciones de sobrevivencia y en las movilizaciones contra la Dictadura “permitió la emergencia de *otras formas de hacer política* como rendimiento de una práctica de lo femenino en el espacio del poder masculino” (Olea 2000, 54, cursivas mías).

¹³⁸ Michel Foucault entiende el poder como la capacidad de gobernar y dirigir la conducta del otro, es decir en la acepción *weberiana*: “Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia, y cualquiera sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber 2005, 43).

¹³⁹ No obstante, los estudios de principios de los setenta, ponen de manifiesto tanto la dificultad de encasillar a los pobladores en un mismo estrato social, dada la heterogeneidad del mundo poblacional, como el predominio obrero entre esos sectores definidos como marginales (Espinoza 1988, 336-337). En las poblaciones *callampas* coexistía una proporción significativa de personas formalmente ocupadas en la industria, con otros sectores sin ocupación formal o con trabajos temporales y esporádicos. Esos hallazgos pusieron en entredicho los presupuestos de la teoría de la marginalidad. Con todo, la discusión teórica al respecto fue especialmente intensa por sus implicaciones políticas: entender a los pobladores como parte de la clase obrera, significaba incorporarlos a las directrices del movimiento obrero y de sus representantes sindicales y políticos; en cambio, validar la especificidad de los pobladores suponía otorgarles un estatus político propio y reconocer la diversidad del mundo popular y, por ende, descentrar la lucha política del movimiento obrero en su formulación más cerrada.

La discusión europea y norteamericana respecto de los *nuevos movimientos sociales*, instalada al menos una década antes, adquirió, en los ochenta, suficiente densidad teórica como para proporcionar un conjunto de postulados y herramientas metodológicas que guiaran la investigación sobre las formas de protesta y de movilización en la nueva fase de desarrollo capitalista definida como *posfordista o posindustrial*.¹⁴⁰ Como ha sucedido tradicionalmente, las ciencias sociales latinoamericanas, y chilenas en particular, fueron considerablemente receptivas de esas producciones intelectuales, frecuentemente adoptadas de manera acrítica, traslapando categorías y tesis elaboradas en relación con otros contextos geográficos y socioeconómicos y culturales a las realidades nacionales, y produciendo con ello, frecuentemente, “visiones y expectativas esquizofrénicas” (Ruiz Contardo 2004, 52).¹⁴¹ La *colonialidad de la saber*¹⁴² y el eurocentrismo presentes en el examen de la acción colectiva en América Latina permiten explicar el hecho de que muchos de los estudios latinoamericanos sobre movimientos sociales consistan, en gran parte, en la reproducción de las teorías y enfoques contruidos a la luz de experiencias de otras latitudes. Una idealización de esas otras realidades hace ver los fenómenos latinoamericanos como “enanos deformes”¹⁴³, es decir, entidades a las que les falta *algo* para alcanzar el “desarrollo” deseado y/o esperado, pero que, además, tienen particularidades que las hacen aparecer como amorfas, anómalas y desviadas.¹⁴⁴

En estas circunstancias, el pensamiento del sociólogo francés Alain Touraine alcanzó preeminencia en la orientación de la sociología chilena, volcándola hacia el estudio de los movimientos sociales, en cumplimiento de la tesis de este autor según la cual *el* objeto de la sociología *debían ser* los movimientos sociales (Touraine 1987b). El francés que era, a esas alturas, el teórico, *par excellence*, de los *nuevos movimientos sociales* advierte:

Aparecen nuevos problemas; se forman o se formarán nuevos movimientos sociales. Nos expondríamos a no comprenderlos ni percibirlos, si consideramos

¹⁴⁰ El concepto de “sociedad posindustrial” adquirió estatuto teórico hacia finales de la década de los sesenta, con la obra del sociólogo francés Alain Touraine, *La sociedad posindustrial*, publicada en 1969. Posteriormente, el sociólogo estadounidense Daniel Bell, en su libro *El advenimiento de la sociedad postindustrial: Un intento de prognosis social* (divulgado en 1973), continuará la reflexión sobre las transformaciones en el capitalismo contemporáneo y la estructura de la sociedad posmoderna.

¹⁴¹ Particularmente, las tesis de Alain Touraine tuvieron especial influencia en el contexto chileno, como veremos más adelante.

¹⁴² Una buena síntesis de esta perspectiva, en clave latinoamericana, en el libro compilado por Edgardo Lander (2000).

¹⁴³ Metáfora que Ernesto Guevara (1961) utilizara para referirse al subdesarrollo.

¹⁴⁴ Ya en 1972 Ruy Mauro Marini advertía, durante su exilio en Chile, del problema que venimos señalando: “En sus análisis de la dependencia latinoamericana, los investigadores marxistas han incurrido, por lo general, en dos tipos de desviaciones: la sustitución del hecho concreto por el concepto abstracto, o la adulteración del concepto en nombre de una realidad rebelde a aceptarlo en su formulación pura” (Marini 1972, 1). Y precisaba: “El segundo tipo de desviación ha sido más frecuente en el campo de la sociología, en el que, ante la dificultad de adecuar a una realidad categorías que no han sido diseñadas específicamente para ella, los estudiosos de formación marxista recurren simultáneamente a otros enfoques metodológicos y teóricos; la consecuencia necesaria de este procedimiento es el eclecticismo, la falta de rigor conceptual y metodológico” (id.).

que el movimiento obrero de tradición europea es el centro inamovible de todos los movimientos de importancia histórica. Sin embargo, si nos esforzamos en comprender el movimiento obrero no sólo como respuesta al capitalismo sino como orientación colectiva, directa o indirecta, hacia el desarrollo económico y hacia la democracia social, estaremos preparados para comprender tanto los nacionalismos que se sitúan en una fase anterior de la evolución económica como los nuevos movimientos que definen a los futuros sistemas de acción histórica (Touraine 1969, 407).

El influjo de la propuesta teórica de este autor en la sociología chilena y particularmente de la “centralidad” que le otorga a los movimientos sociales, constituye un diagnóstico consensuado entre sus pares chilenos. Garretón (2001b) señala que el más importante y decisivo hito en el vuelco del paradigma clásico de la acción colectiva fue el trabajo de Touraine sobre *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina* (1987a).¹⁴⁵ Baño (1985, 117) da cuenta del peso de Touraine “como teórico de los estudios sobre movimientos sociales que postula la institucionalización del conflicto y la transformación no revolucionaria”. Y Vasconi explica la emergencia del estudio de los nuevos movimientos sociales no sólo por las transformaciones socioeconómicas y culturales sino también por la proyección de las investigaciones que Touraine venía realizando desde hacía años:

Habría otro tema de particular significación sobre el cual también rodarán ríos de tinta: los nuevos movimientos sociales. Esto también responde a una experiencia: quienes primero comienzan a reaccionar contra las dictaduras, son heterogéneos movimientos de “pobladores” (“marginales”) urbanos, movimiento por los derechos humanos, de madres de presos y desaparecidos políticos, feministas, etc., etc. Pero no es sólo esa experiencia la que lleva a relevar el tema: juegan también aquí algunos antecedentes y una evidente intención. Los antecedentes: desde los años sesenta, Alain Touraine, el sociólogo francés que tanta influencia ha tenido, y tiene, en los medios sociológicos latinoamericanos, venía trabajando el tema en Europa (Vasconi 1991, 58-59).

No obstante, la recepción del pensamiento *tourainiano* en Chile no se explica sólo por la tradicional propensión de las ciencias sociales de la región a abrazar métodos y enfoques del “exterior”; la adopción de los presupuestos de la *sociología de la acción* tiene mucho que ver con el “estado de ánimo” de los científicos sociales chilenos y las transformaciones producidas en el mundo académico en las décadas de los setenta y ochenta.¹⁴⁶ Como hemos visto anteriormente, en Chile, con el golpe de Estado de 1973 y la instalación de la Dictadura cívico-militar creció la necesidad, tanto en la academia como entre los propios actores sociopolíticos

¹⁴⁵ Se trata de su primera formulación sistemática sobre esas problemáticas latinoamericanas, desarrollada posteriormente en *América Latina: Política y sociedad* (1989).

¹⁴⁶ También se relaciona con la cercanía del teórico francés a la realidad chilena, y los vínculos personales e institucionales que estableció desde muy temprano entre Francia y Chile; no obstante estos factores se comprenden mejor en el contexto de transformación del campo académico chileno y de renovación de las ciencias sociales. Touraine fue el invitado especial en el Primer Congreso Chileno de Sociología, celebrado en 1984. En los siguientes, el contacto con los sociólogos chilenos se profundizó a través de estudios conjuntos con el CADIS, del que Touraine era director, y por la estancia de los sociólogos chilenos en Francia para realizar bajo su supervisión, sus investigaciones doctorales.

derrotados, de revisar críticamente los presupuestos que habían inspirado las luchas precedentes; a la luz de ese examen, una parte significativa de los intelectuales y políticos asumió que el fin del proyecto de la Unidad Popular había sido también un *fracaso*. La crítica se enfocó hacia el carácter “mecanicista” y “reduccionista” de la concepción de las clases sociales del marxismo estructuralista:

Si bien es cierto que nunca ha podido probarse fehacientemente el traslado de la situación estructural a una determinada acción social o la conversión de una categoría socio-demográfica en un actor social, también es cierto que durante décadas predominó un paradigma teórico y práctico de la acción colectiva y los actores sociales en la región, concordante con los paradigmas predominantes de las Ciencias Sociales a escala mundial. Éste afirmaba, primero, una unidad o correspondencia entre estructura y actor; segundo, el predominio de la estructura sobre el actor, y tercero, la existencia de un eje central provisto por las estructuras y los procesos emanados de ellas, que actuaba como principio constitutivo de toda acción colectiva y de la conformación de actores sociales (Garretón 2001b, 7).

La *renovación* del pensamiento sociológico y político comportó el cuestionamiento de las teorías omnicomprendivas, los metarrelatos, las identidades preconcebidas y la preeminencia de los factores estructurales (el “reduccionismo economicista”) para explicar los fenómenos sociales: “Ni qué decir que la discusión dentro de las ciencias sociales latinoamericanas ha avanzado durante los últimos años lo suficiente como para no esperar que un movimiento social cualquiera posea una identidad prefijada, anclada no se sabe en qué condiciones estructurales” (Brunner 1985, 6). Con esta purga teórica también fueron desterradas del análisis social todas las categóricas que podían fungir como ordenadores globales de la realidad: modo de producción, formación económico-social, clases sociales, etc. Con base en las críticas –en parte acertadas– al marxismo hegemónico en la década de los sesenta, los sociólogos constataron que:

Explícita o implícitamente se suponía que los sujetos sociales sólo son sujetos de clase mientras que, paradójicamente, estudios concretos probaron que en América Latina no existen clases puras, plenamente constituidas y que los sujetos sociales están adscriptos a múltiples posiciones que corresponden a diferentes capas sociales que se jerarquizan y ordenan según los conflictos y las luchas sociales, culturales y étnicas (Micieli y Calderón 1986, 11-12).

En consecuencia, la sociología sistémica, el marxismo, el reduccionismo economicista y la deriva teleológica de ciertos análisis sociales fueron abandonados en favor de la diversidad factual, de la multiplicidad de microrrelatos, de la pluralidad de identidades y, por lo tanto, del predominio de la perspectiva culturalista en las nuevas ciencias sociales. Cristina Micieli y Fernando Calderón (1986, 13) confirmaron esta mudanza en la perspectiva sociológica: “Nuestra mirada recorre un nuevo espacio social. [...] Los antiguos instrumentos para comprender los nuevos actores sociales, culturales y políticos que lo surcan, ya no sirven. La heterogeneidad, la fragmentación social resisten a los modelos totalizadores y omnicomprendivos”. Los científicos sociales comprobaron la

emergencia de nuevos actores o, como dijo Eder Sader (1988), registraron el momento “cuando nuevos personajes entraron en escena”. Pero el énfasis en la novedad ha sido morigerado posteriormente; no se trata tanto de que emerjan nuevos actores como de que miremos el paisaje social con *ojos nuevos*. Por lo tanto, podríamos decir, parafraseando a Micieli y Calderón, que “una nueva mirada recorre nuestro espacio social”. De lo que se trata, en definitiva, es de evitar los riesgos de ver sólo la novedad o de creer que todo es más de lo mismo.

La expresión del pensamiento social latinoamericano propensa al cuestionamiento de la centralidad de ciertos actores sociales, fue sugerentemente nombrada como *juicio a ls ujeto*. Esta interpretación “al negar ciertas discursividades o acentos ideológicos reduccionistas y, al parecer, teleológicos, pretende reconocer fuerzas sociales originadas y constituidas en las coyunturas en tanto que espacios de formación de una nueva subjetividad contingente de los actores” (Guido y Fernández 1990, 119-120). Ése habría sido el desplazamiento más importante operado por las ciencias sociales chilenas y latinoamericanas a partir de la crisis teórica de los setenta: desde el sujeto determinado *estructuralmente* hacia la constitución *contingente* de subjetividades e identidades. En consecuencia, “lo que tenemos aquí, aparentemente, es el agotamiento de la sociología de las grandes estructuras y, paralelamente, el resituamiento de la sociología de los actores” (Basaure 1998, 14). Con el juicio al movimiento obrero el pensamiento sociológico produjo, teóricamente, una escisión radical entre el viejo movimiento social y los nuevos movimientos sociales, que adquirieron, en esta lectura, características contrapuestas; al enjuiciar a los viejos actores sociales “se anulan sus presumibles potencialidades y se descubre, en la *sociedad civil*, la emergencia de nuevos sujetos con formas inéditas de activación, movilización y capacidad de organización” (Guido y Fernández 1990, 119, cursivas mías).

Correlativamente, con tiempos y énfasis distintos se cuestionó la centralidad del Estado como herramienta para la transformación social y, por lo tanto, la vía de la “toma” del poder, la idoneidad de su instrumento –el partido político *leninista*– y el carácter privilegiado del proletariado como sujeto revolucionario. Es en ese contexto en el que emerge la reflexión sobre la acción colectiva y los movimientos sociales, vistos *más allá de* las clases sociales y de los partidos políticos. Tal y como señalara Vasconi (1991, 59), la sociología *renovada* concluyó, alegremente, que los movimientos sociales eran “la forma alternativa a la lucha de clases –que proponía el ‘reduccionismo’ marxista– y al Partido de ‘cuadros’ de Lenin”. Y de esa manera:

Una sociología que había estado muy ligada a procesos sociales y a una concepción de la política como proceso social, como incorporación de grupos, como conflictos entre grupos y clases sociales, *en un principio* adopta el tema de los nuevos movimientos sociales, ligado a la experiencia brasileña con los movimientos de base, sociales, y declara la liquidación de los partidos (Faletto 2009, 147, cursivas mías).

La derrota/fracaso de los proyectos reformistas o revolucionarios, pensados *desde* el Estado, aunada a la omnipresencia de un Estado terrorista se tradujo, efectivamente, en el traslado de las esperanzas democratizadoras hacia la *sociedad civil*. Ésta fue vista como la condición, *per se*, de la reconstrucción de la sociedad y de los lazos solidarios, sugiriendo inicialmente un giro en el pensamiento sociológico; sin embargo, la *naturalización* de la esfera de la sociedad civil, como un espacio al margen de las relaciones de dominación que imperan en el Estado y de las relaciones de explotación que prevalecen en el mercado, derivó, a nuestro juicio, en una mirada engañosa sobre las características de las movilizaciones sociales, observándolas como si éstas fueran pre o a-políticas. Es por ello que la preeminencia concedida a la sociedad civil pronto fue abandonada, en favor de los actores (considerados) propiamente *políticos*, esto es, los *partidos*.¹⁴⁷ Los desafíos planteados por la emergencia de múltiples formas de organización y de lucha no fueron plenamente asumidos ni por los científicos sociales *renovados* ni por los políticos de la *vieja guardia*; en el proceso de la transición a la democracia, “el problema político-institucional iba a ser clave” (Faletto 2009, 147), y en consecuencia, los partidos políticos retomaron la delantera en la reconfiguración de las estrategias políticas. Finalmente, “la democracia no trajo ningún predominio de la ‘sociedad civil’ sobre el Estado; éste sigue omnipresente manteniendo un carácter altamente autoritario, aunque ese autoritarismo, no cabe duda de ello, no se exprese de ningún modo por la vía de la represión directa y típica de las dictaduras militares” (Vasconi 1991, 60). La consideración a-conflictiva, homogeneizadora y a-histórica de la llamada “sociedad civil”, si bien permitió concitar la atención de los científicos sociales sobre los *pobladores* y las dinámicas *comunitarias* de resistencia al autoritarismo, al definir ese espacio como el *locus* de las luchas por la democratización, facilitó también su marginación y prescindencia en el momento de la salida político-institucional, pactada por las élites partidarias, pues, la consideración reduccionista (y liberal) de la política hizo que la oposición renovada y conservadora cerrara filas sobre los actores, tradicionalmente considerados, políticos: los partidos y el Estado.

Así pues, la mayor atención teórica que recibieron los *nuevos* actores sociales, frente a los tradicionales movimiento obrero, campesino y estudiantil tiene que ver con la emergencia de luchas efectivamente diversas, protagonizadas por colectivos heterogéneos o que no se reconocían primordialmente en una identidad clasista, pero también con el *momento crítico* que atravesaba el pensamiento social y político de la región, que había quedado *huérfano* de referentes teóricos y epistemológicos. En el caso chileno, en particular, la Dictadura cívico-militar supuso el derrocamiento *en toda su magnitud* de un proyecto de sociedad distinta y de las vías para lograrlo, ya fuera la reformista o la revolucionaria. Aunque la posibilidad del golpe de Estado estuvo en la atmósfera política durante el gobierno

¹⁴⁷ “Sociedad civil” es uno de esos conceptos que, debido a su ambigüedad, ha recibido diversos y a menudo contrapuestos significados. En general ha sido comprendida como el ámbito público no estatal, es decir, el de las organizaciones de ciudadanos que median entre los individuos y el Estado. Sobre la historicidad del concepto véase Ibarra (2005, 19-42).

de la UP y se hizo más palpable hacia los últimos meses, ninguna de las dos izquierdas tuvo capacidad de previsión, y mucho menos de reacción, ante la brutalidad que le seguiría. El traslado del *foco*, por parte de los cientistas sociales, hacia otros actores que no habían ocupado anteriormente un lugar privilegiado dentro del *teatro* de la historia –para mantener el lenguaje escénico– estuvo motivado por, y a la vez reforzó, lo que fue bautizado como “la rebelión del coro”; título que empleó el politólogo José Nun, iniciando la década de los ochenta, para referirse a las rebeliones de la vida cotidiana, es decir, de grupos que tradicionalmente no habían sido considerados *actores* de la política, que abandonaban así el lugar que les había sido asignado (el del *coro*). Si bien el autor reconocía que aquella tendencia era más notoria en las sociedades capitalistas avanzadas, señalaba:

La importancia que deben asumir tales movimientos en la reflexión actual de la izquierda latinoamericana me parece incuestionable y no sólo porque también han venido surgiendo en nuestras latitudes, sino porque procuran *liquidar una imagen heroica de la política* que no es para nada ajena a las tradiciones del marxismo criollo (Nun 1981, cursivas mías).¹⁴⁸

Lo que estaba en retirada, pues, no era el proletariado en sí mismo, sino el carácter heroico atribuido a la clase obrera: “Se trata de reivindicar y de potenciar los contenidos políticos de la cotidianeidad de todos los sectores oprimidos; y esto incluye, obviamente, la de los campesinos y la de los obreros” (Nun 1981). De ahí que los estudios sobre los movimientos sociales en Chile reflejen al mismo tiempo las características de la acción colectiva social y política y el *estado de ánimo* de las ciencias sociales, particularmente, del pensamiento crítico.

Hablar de movimientos sociales implicaba, necesariamente, *diversificar* los actores sociales y *descentrar* el sujeto revolucionario de la figura del proletariado (industrial). Además, el énfasis en la *dimensión cultural* que comportaba el análisis de los nuevos movimientos sociales (más que en el carácter pre-constituido, como expresión mecánica de ciertas posiciones en la estructura productiva, como proponían algunas lecturas simplificadoras de la lucha de clases o el cuestionamiento *renovado* del análisis marxista), tornaba más complejo el examen de la acción colectiva, pero también prometía abrir vías diversas y sugerentes para la comprensión de las luchas y, por ende, caminos nuevos para la transformación social. Así, la sociedad civil aparecía como un terreno fértil para la democratización sustantiva de la sociedad; el campo de la conflictividad social se mostraba heterogéneo, producto de las transformaciones objetivas y subjetivas que se habían producido en el campo popular, pero vivo. Al mismo tiempo, la crítica de un cierto fin teleológico en las concepciones precedentes y el énfasis en el carácter novedoso de los actores emergentes presentaba las luchas como un *campo* “abierto”,

¹⁴⁸ Más recientemente los estudiantes chilenos también han aprovechado las metáforas que proporciona la terminología escénica, al referirse a sí mismos como ‘actores secundarios’, en relación con su condición de estudiantes de secundaria –“pingüinos”–, en el documental *Actores Secundarios* (Santiago, 2004) o en el libro *De actores secundarios a estudiantes protagonistas* (Varios Autores 2010), reactivando la discusión de los ochenta, como veremos más adelante.

indefinido, con múltiples líneas de fuga. Sin embargo, estas notas características del (incipiente) análisis de la acción colectiva, en principio favorecedoras para la experimentación y la búsqueda de alternativas a la rigidez y mecanicismo de las formulaciones clásicas, fue cuestionada pronto por los científicos sociales ávidos de definiciones claras y clasificaciones excluyentes. El debate sociológico derivó rápidamente en la pregunta por la existencia de movimientos sociales en América Latina, para acabar dando una respuesta *negativa*. América Latina pareciera no ser una tierra pródiga en movimientos sociales de acuerdo con la sociología *europalizada*. Así, la prometedora propuesta de Touraine, cálidamente acogida por la sociología *renovada*, tempranamente se demostró estéril para pensar los movimientos sociales chilenos y sirvió, más bien, para decretar su inexistencia.

Paradójicamente, Touraine no asume el sesgo *estatista-institucionalista* de su propuesta de análisis de los movimientos sociales y de las investigaciones de los sociólogos chilenos:

Los chilenos y yo defendimos mucho el tema de los movimientos urbanos en Buenos Aires, en Santiago, en São Paulo o después del terremoto de México en 1985. Pero Fernando Enrique Cardoso y sobre todo su esposa Ruth, respondían: ésta es una ilusión. Si los movimientos urbanos reemplazan la acción política, se creará un nuevo clientelismo, porque el grado de integración de la sociedad no es suficiente para que se formen movimientos sociales. Prioridad a la política. Hay que apoyarse menos sobre los curas [de la iglesia popular] y más sobre los senadores y los diputados: hay que repolitizar. Ruth Cardoso, históricamente hablando, ha tenido razón. La reconstrucción política ha jugado un rol más durable que los movimientos, los que a menudo han zozobrado en un radicalismo ciego (citado en Urrutia 2004, 65).

Un examen superficial de la literatura sociológica sobre movimientos sociales podría evidenciar que la conclusión negadora se mantiene dentro de estrictos límites conceptuales, en el sentido de que, de acuerdo con la categoría al uso de movimientos sociales, no se encuentran en América Latina formas tales que encajen en la definición, esto es, en el *tipo ideal*. No podemos menos que considerar que, de ser así, esta sociología no busca estudiar los movimientos sociales *reales*, sino los modelos ideales. Efectivamente, como sostiene el historiador Manuel Bastías (2011, 158):

La investigación se centró más en lo que no eran los actores estudiados que en lo que eran; se acentuó lo que no hicieron los actores más que lo que hicieron; y se estudiaron menos las acciones concretas llevadas a cabo y más el nivel de 'auto-conciencia' con el que actuaban. En estas investigaciones *aprendimos mucho sobre lo que en Chile no había, pero se avanzó poco en el conocimiento de los procesos sociales que efectivamente estaban desarrollándose*.

En contradicción con lo que el proceso de renovación prometía, la sociología *renovada* siguió presa de categorías y de enfoques que supuestamente había desterrado del análisis y la definición de lo que *es/debe ser* un movimiento social, enmarcó el análisis particular de las experiencias consideradas y condicionó las conclusiones formuladas. De esta manera, la categoría de "movimiento social", tal

y como había sucedido anteriormente con la de “movimiento obrero” o “clase obrera”, sirvió para excluir o descalificar determinadas experiencias de resistencia y de transformación de la sociedad.¹⁴⁹

Pero, además, como toda categoría es parte de una *batalla de significados*, un examen más profundo de la negación o subordinación de los movimientos sociales nos revela que esas conclusiones se explican también con referencia a la concepción más amplia de los proyectos de sociedad en juego/disputa. En este sentido, Garretón, por ejemplo, sostiene que “no todo lo que se mueve o actúa en una sociedad es un actor en el *sentido sociológico* del término, podríamos llamarlo simplemente agente. Tampoco todo lo que llamamos actor es siempre *portador de una alta densidad histórica*” (Garretón 2001b, 13, cursivas mías). La primera parte de la cita resulta incontrovertible; la segunda nos adentra en los vericuetos de las definiciones estratégicas (la expresión “densidad histórica” remite a la noción *tourainiana* de “historicidad”, esto es, la conciencia de la capacidad de la sociedad de actuar sobre sí, a través de la disputa de algunos actores por las orientaciones culturales fundamentales, al involucrarse en proyectos históricos que persiguen conservar o cambiar la sociedad). Las concepciones de los científicos sociales (hegemonizadas por este pensamiento *renovado*) sobre la política, la democracia y el cambio social, se traducirán en al desestimación de ciertas formas de organización y lucha popular que no encajan en sus *proyectos ideales* o que no son portadoras, a su juicio, de suficiente densidad histórica. Existe en ellos una propensión ideológica subyacente a considerar a los partidos políticos como los sujetos históricos portadores de proyectos de sociedad, y la democracia electoral como el *centro* de la disputa política.

3.1.1. *Emergencia de los estudios sobre movimientos sociales: El Encuentro de Chantilly (1982)*

Fruto de las condiciones de represión y marginación de los científicos sociales opositores a la Dictadura en Chile, uno de los primeros encuentros públicos en los que la problemática de los movimientos sociales fue abordada tuvo lugar *en el exilio*: en Chantilly (Francia), entre el 3 y el 5 de septiembre de 1982.¹⁵⁰ Se trató de una reunión de científicos sociales y militantes de los partidos de izquierda, de la órbita de la *renovación socialista*.¹⁵¹ La convocatoria del evento apelaba al carácter

¹⁴⁹ Cuando el pensamiento se esclerotiza, corre el riesgo de no ver, o de invisibilizar, las potencialidades contenidas en los procesos sociales.

¹⁵⁰ Fue una iniciativa de ASER Chile (París) –Asociación para el Estudio de la Realidad Chilena– y del Instituto para el Nuevo Chile (Rotterdam). Hubo un segundo encuentro, aunque con un carácter “exclusivamente político”, que se conoce como “Encuentro de Chantilly II - Chile en los ochenta. Los desafíos de la redemocratización”, celebrado entre el 2 y el 4 de septiembre de 1983.

¹⁵¹ Para efectos de este trabajo resultan de particular interés las ponencias de los siguientes sociólogos: “Sobre la teoría de la renovación. Notas introductorias” y “Evolución histórica de la izquierda chilena: La influencia del marxismo” (Tomás Moulian); “La segunda renovación” y “La coyuntura: un ensayo de interpretación” (Eugenio Tironi); “El sindicalismo en la actual crisis” (Guillermo Campero); “El desafío de la modernización” (Javier Martínez); “Vida cotidiana, sociedad y cultura. 1973-1980” (José Joaquín Brunner); “La evolución política del régimen militar” y “La política ayer y hoy” (Manuel Antonio Garretón).

novedoso de las condiciones sociales y políticas en momentos en los que la Dictadura atravesaba por una fuerte crisis económica, y a la emergencia de “nuevos” actores sociales:

En Chile se configuran nuevos escenarios políticos. No cambia sólo el decorado, sino también los actores y la obra. Se insinúan otros protagonistas. Alzan su voz. Entran en escena y, de consuno, como en las tragedias griegas o en el teatro clásico español, se mueven y recitan. Expresan demandas particulares. Luchan por objetivos específicos. Dan vida a movimientos sociales (*Actas Chile-80* 1982, 1).¹⁵²

Un repaso de las Actas del encuentro permite vislumbrar cuáles fueron los consensos alcanzados o ratificados entonces en la perspectiva de la renovación del pensamiento social y político que sus participantes venían impulsando: el abandono y la superación del esquema marxista-leninista, ya fuere como teoría interpretativa o como guía práctica; la valorización de la democracia, en su doble sentido, como pluralismo y democracia política, por una parte, y como democratización de la sociedad en un sentido amplio, por otra; el reconocimiento del carácter secular y, por tanto, autónomo, de la política en relación con las elaboraciones culturales; el reconocimiento de que las contradicciones en una sociedad no pasan solamente por el conflicto de clases estructuradas económicamente, lo que obliga a incorporar en el análisis el aporte de los distintos grupos y movimientos sociales que se expresan en la sociedad chilena; y el rechazo del “socialismo real” y el planteamiento de un *socialismo no pre-configurado*.

La discusión se articuló en torno a cuatro ejes temáticos: 1) Problemas del marxismo, el socialismo y la democracia; 2) Presencia y composición de las fuerzas sociales en conflicto; 3) Evolución político-cultural del régimen militar y escenarios posibles de una *transición a la democracia*; y 4) Sobre los contenidos de una propuesta alternativa. Con respecto al primer eje, y en relación con nuestro tema, interesa destacar, en primer lugar, la problematización de la relación entre democracia y socialismo, que derivó hacia la revalorización de la democracia en su forma representativa –independiente de la esfera económico-social– y el reconocimiento del carácter plural –nacional y popular– que inspiraría, a juicio de esta intelectualidad, al socialismo chileno; y, en segundo lugar, la dificultad de consensuar una respuesta en torno al significado de “lo político”, entre quienes consideraron que lo político es la política (esto es, una esfera especializada, anclada en el régimen de gobierno y los partidos políticos) y quienes se refirieron a una dimensión de la sociedad en donde la separación entre gobernantes y gobernados (por lo tanto la profesionalización de la política) tiende a disminuir.

El segundo eje de análisis se refirió abundantemente al papel de los movimientos sociales, en sentido clásico, fundamentalmente al movimiento obrero. En el desarrollo del debate se concluyó que el peso del sindicalismo había

¹⁵² Las Actas del encuentro fueron publicadas, como una separata, en la revista *Chile-América* que, nacida en Roma a un año del golpe de Estado, se constituyó en uno de los espacios de confluencia y de expresión de la oposición socialista y demócratacristiana a la Dictadura (Asociación para el Estudio de la Realidad Chilena - Chile (Paris, Francia); Instituto para el Nuevo Chile (Rotterdam, Holanda) 1982).

disminuido notablemente, debido al contexto dictatorial y sobre todo a las transformaciones operadas a nivel de la estructura económica, que había sido desarticulada, sin avizorarse todavía un nuevo sistema económico-social. En ese sentido, no se había generado “un nuevo tipo de clase obrera” (*Actas Chile-80* 1982, 4) ni otro tipo de movimiento social, por lo que “existe un gran vacío de actores sociales, no nuevos actores” (í.d.). Los participantes reconocieron las dificultades para la reconstitución de los sujetos populares tradicionales, así como para la emergencia de otros actores. Quizás por ello, al preguntarse sobre los futuros escenarios posibles concluyeron que de haber *apertura política* podrían darse las siguientes situaciones (por separado): “Los comportamientos tradicionales en el ámbito político partidario serán nuevamente los predominantes o bien que se desarrollarán prácticas sociales en que el aporte de los nuevos valores solidarios y alternativos al modelo imperante, será fundamental” (í.d.).

En el marco de la tercera problemática se presentaron varias ponencias sobre los “nuevos” actores sociales y políticos y los “nuevos” movimientos sociales. Los análisis reconocen la relevancia de la vida cotidiana en la conformación de subjetividades políticas; la reflexión da cuenta de que la sociología estaba a la búsqueda del nuevo actor social que substituyese al debilitado movimiento obrero tradicional. No obstante, el peso del paradigma clásico de la acción colectiva sigue teniendo un peso significativo en el estudio de esos otros actores sociales emergentes; de ahí que, a pesar de la concepción culturalista y procesual que pretendidamente orientaba el examen de los nuevos movimientos sociales, con frecuencia se constata, en estos análisis, la desazón por la incapacidad de los *pobladores* de acercarse a la imagen (entre el deseo y la realidad) del movimiento obrero. Esta interpretación, más que indagar las potencialidades de los conflictos para constituir a los actores en un presente siempre abierto, y analizar sus capacidades novedosas, cerrará la proyección de los actores sociales destacando sus falencias y sus debilidades en comparación con un supuesto “modelo” de movimiento social.

En todo caso, el consenso respecto de la existencia de movimientos sociales parece haber sido menor que en los otros ejes, dibujándose en el horizonte dos tendencias de interpretación y propuesta de acción, en función de la preeminencia otorgada a la esfera “social” o la esfera “política”, prefigurando uno de los ejes analíticos fundamentales del análisis de los movimientos sociales en Chile. La escisión es formulada y justificada sobre la base de distinguir la *acción política* como “aquella que se articula en torno a la acción de fuerzas expresadas orgánicamente y referidas principalmente al Estado, al sistema político y a las relaciones de concertación y alianza” (*Actas Chile-80* 1982, 5), y la *sociedad* como el espacio de “la reconstitución de un tejido social de base y la potencialidad de la vida cotidiana como un lugar de cambios fundamentales; en fin, la democratización de las relaciones sociales que se constituyen más allá del Estado y la formación institucional de decisiones políticas” (í.d.). Así pues, se trataba de dar prioridad a la sociedad o a la política; a la constitución de actores sociales y políticos o a la articulación de los partidos políticos tradicionales en coaliciones fuertes capaces de

negociar y resolver conflictos. Se escenificaba así la escisión entre lo social y lo político (la política) y, desde esta lógica, la difícil relación entre los partidos políticos y los movimientos sociales, por eso para muchos asistentes, “los partidos deben politizar los movimientos sociales respetando su autonomía” (íd.). Ésta fue la gran ruptura teórica y práctica evidenciada en los análisis y propuestas políticas de los científicos sociales y militantes que asistieron al primer encuentro de Chantilly.

Con arreglo a esta escisión entre lo social y lo político es que se podía plantear el socialismo como una tarea siempre inacabada hacia la *democratización de la sociedad* y la *democracia política*. Ambos procesos tenían lógicas y tiempos diferentes: la primera es siempre una tarea a largo plazo, plena de contradicciones y conflictos, no siempre circunscrita a los límites de la política institucional; la segunda en cambio plantea un cambio de régimen en un plazo cercano, pero para “ello habrá que garantizar que todos los sectores sociales se expresen a través de *partidos*” (*Actas Chile-80* 1982, 6, cursivas mías) pues se evidenciaba “la necesidad de un centro político, una derecha institucional y un fuerte movimiento de izquierda pluralmente expresado” (íd.).

En relación con el último eje de reflexión, señalamos que todos los participantes compartieron una mirada crítica con respecto al gobierno de la Unidad Popular y a las premisas sobre las que se basaba la “vía chilena al socialismo”, así como sobre los presupuestos económico-sociales de las décadas del sesenta y setenta. No obstante, se aprecian diferencias en los participantes en cuanto a las propuestas futuras posibles y deseables, sobre todo con respecto al modelo socio-económico a construir: de la misma manera que opera la escisión entre sociedad y política, aquí se produce una diferenciación análoga entre economía y política. Una tendencia consiste en posponer los problemas de definición del modelo económico, para después de la recuperación democrática y otorgar entonces preeminencia al Estado en su formulación; otra, señala la necesidad de que la transición política vaya de la mano de la resolución de los problemas económicos y sociales y la reconfiguración de las relaciones sociales (es decir, proponen reunir los procesos de democratización social y democracia política).

El encuentro de Chantilly se realiza en el momento en que la Dictadura atraviesa una crisis económica de proporciones significativas. Esa circunstancia y la potencialidad que se le atribuye configuran un escenario muy esperanzador. Hay un influjo de la coyuntura que atraviesa las intervenciones. Chantilly I es sumamente importante, no por ser la primera reunión de científicos sociales e intelectuales para revisar la experiencia contemporánea de Chile y las nuevas tendencias que emergían en la sociedad chilena de principios de los ochenta pues habían tenido lugar otros encuentros, sino por tratarse del acto que refleja y constituye al mismo tiempo un punto de inflexión: lo que a esas alturas se conocía ya como proceso de *renovación* de la izquierda, aparecía como un fenómeno diverso y complejo, en algún sentido contradictorio, con propuestas alternativas para imaginar otro pensamiento y acción políticos. Sin embargo, ese encuentro evidencia claramente el clivaje que determinará en gran medida el pensamiento y las decisiones políticas posteriores: la escisión entre lo social y lo/la político/a.

Se ha señalado que fue la emergencia de las Jornadas de Protesta Nacional, lo que forzó a Pinochet a abrir el espacio político y que ello redundó en la división de la oposición a la Dictadura entre una oposición “intransigente” o “violenta” y una oposición “moderada” o “democrática” y que una vez establecida la separación se requería de una justificación ideológica de la misma, circunstancia que habría promovido la discusión acerca de los movimientos sociales en clave *negacionista* o *transicional* con el fin de reforzar la posición de los partidos políticos; en esta misma línea se ha señalado que habría sido la coyuntura del plebiscito de 1988 la que habría provocado una reflexión científica y política en el sentido de subordinar a los movimientos sociales a la estrategia partidista. Consideramos que, sin duda, esos acontecimientos reforzaron el pensamiento sociológico en ese sentido, pero las conclusiones del encuentro de Chantilly demuestran que la elaboración teórica que escinde lo social y lo político, que considera que los movimientos sociales no son actores políticos y que, por lo tanto, requieren de la conducción de los partidos, que concibe la democracia exclusivamente como un sistema político parlamentario, independiente de determinaciones socioeconómicas y culturales, ya estaban plenamente asentadas en el pensamiento *renovado*, fruto del cuestionamiento y de la renuncia al proyecto que había encarnado la Unidad Popular.

3.2. SUR y la sociología *negacionista*

A pesar del énfasis en el carácter *novedoso* de los actores sociales que protagonizaron, durante la Dictadura, las acciones de protesta y de recomposición de lazos sociales frente a la atomización y al individualismo inducido por las políticas neoliberales y la acción represiva de la Dictadura, la sociología chilena fue refractaria al uso de la categoría de “nuevos movimientos sociales”. Si bien es cierto que las acciones de los pobladores no eran, *stricto sensu*, nuevas, pues su organización y lucha habían alcanzado gran proyección histórica, y también relevancia teórica, al menos desde mediados de los cincuenta (Garcés 2002), el protagonismo de los *pobladores* en las Protestas Nacionales inspiró una discusión sociológica acerca, no de la novedad expresada en dichas acciones, sino de la posibilidad de calificarlas como “movimiento social” a secas. La pregunta la formuló claramente el sociólogo Guillermo Campero (1986): “¿Se constituyen movimientos sociales en Chile?”.¹⁵³ Así pues, aunque de manera esporádica y más como contagio de las discusiones europeas, se habló de nuevos actores y nuevas prácticas, la sociología chilena abordó el examen de las expresiones de acción colectiva con las antiparras de la teoría clásica de los movimientos sociales y el ejemplo del movimiento obrero como paradigma de comprensión, y con los presupuestos del enfoque de la modernización como telón de fondo, dando muestras de rigidez intelectual, y demostrándose incapaz de proporcionar explicaciones satisfactorias más allá de la *negación* de la existencia de movimientos sociales en el Chile dictatorial (Iglesias 2011, Cortés 2013).

¹⁵³ Y Touraine se preguntó: “¿Existen movimientos urbanos?” (Touraine 1989, 235-252).

La discusión sobre movimientos sociales, y específicamente sobre los *pobladores*, se alimentó en gran medida de los trabajos del centro académico independiente SUR y se articuló a partir de la revista de su patrocinio: *Proposiciones*.¹⁵⁴ Esta revista buscaba ser “expresión del estado actual de la reflexión crítica de un grupo intelectual: reflexión provisoria, parcial, que aspira sin embargo a revisar profundamente el pensamiento dogmático de cualquier especie, rechaza su coagulación en redacciones rígidas o articuladas en extremo”.¹⁵⁵ En gran medida cumplió su cometido, por eso constituye uno de los materiales fundamentales para analizar la reflexión sobre los movimientos sociales y los actores políticos en Chile. Los propósitos de revisión y de renovación, la voluntad de estimular “el parto de un pensamiento nuevo” se vieron satisfechos, pues salvo algunas “notas discordantes” –como las intervenciones del historiador Gabriel Salazar– a lo largo de sus números –lo cual es síntoma de cierto pluralismo sostenido en su interior– la producción de *Proposiciones* es reflejo de la constitución de una corriente intelectual.

El número 14, publicado en 1987 con el título “Marginalidad, movimientos sociales y democracia”, es de particular importancia porque recoge los trabajos presentados en el seminario “Movimientos sociales urbano-populares y procesos de democratización”, realizado entre el 14 y el 16 de abril de aquel año. Allí se analiza la condición de la marginalidad y específicamente el “fenómeno de los pobladores” y, muy importante, la situación de los actores sociales en los contextos de democratización. A excepción de la exposición del economista Luis Razeto,¹⁵⁶ el resto de trabajos realzan las deficiencias, límites e insuficiencias del movimiento de *pobladores* y, en casos más extremos, su carácter derechamente pernicioso de cara a la democratización *posible*.

El debate acerca de las luchas de los *pobladores* consideró dos aristas principales: en primer lugar, se actualizó la necesidad de clarificar los vasos comunicantes entre la clase obrera y los *pobladores*, para determinar hasta qué punto el llamado “movimiento poblacional” no era sino, en el mejor de los casos, una fracción o una expresión articulada y dependiente del movimiento obrero. En

¹⁵⁴ SUR, Centro de Estudios Sociales y Educación, se creó en 1978, agrupando a profesionales e intelectuales en torno “a un proyecto de información, estudio e investigación de la realidad nacional y latinoamericana” que a partir de 1981 estuvo claramente enfocado a trabajar “en la línea de apoyo a la transición democrática”. SUR desarrolló una intensa actividad, de investigación y de “capacitación” de dirigentes de los movimientos estudiantiles, poblacionales y sindicales. Los talleres, escuelas de verano, seminarios, etc. convocaron a numerosos participantes y originaron materiales de gran calidad, que fueron publicados básicamente en dos boletines –*Correo de l sur* y *Hechos Urbanos*– y en la *Revista Proposiciones*. Ésta fue creada en 1980 para “promover el pensamiento académico de los profesionales ligados a la institución”, con la pretensión de discutir en torno a los grandes problemas nacionales, económicos, sociales y políticos. El grueso de su producción y los debates más importantes alrededor de los temas que anunciaba anteriormente se desarrollaron entre su fundación y 1990. “Un poco de Historia”, en www.sitiosur.cl.

¹⁵⁵ *Proposiciones*, vol. 1, n° 1, 1980, Santiago, SUR.

¹⁵⁶ En la que analiza el fenómeno de las organizaciones económico-populares que habían proliferado en Chile de la mano de la necesidad de sobrevivencia de los *pobladores*, como portadoras de una *racionalidad distinta de la del capitalismo* y, por lo tanto, como gérmenes de una sociedad pos o anticapitalista (Razeto 1987).

este sentido, siguiendo los presupuestos de la sociología de la acción de Touraine, se cuestionó la debilidad de la identidad de los pobladores, su auto-identificación como obreros y su voluntad de ser integrados al sistema social y económico –en lugar de presupuestas tendencias rupturistas– (Tironi 1991, 163); también, su incapacidad de definir un oponente en términos sociales y la apelación al Estado como garante de derechos sociales (Campero 1987), a lo que se agregaba la falta de un proyecto de sociedad alternativa, pues convivían en su seno múltiples orientaciones (Espinoza 1986). Todo ello indicaba que los *pobladores* debían ser concebidos como el segmento más precarizado de la escala social y el más fustigado por la crisis política y económica. Pero, en ningún caso, constituían un movimiento social en sí mismo, sino apenas un “deseo de movimiento social” (Tironi 1991, 150), la “desintegración de un *movimiento social imposible*” o incluso un “antimovimiento social” (Touraine 1989, 248). De acuerdo con Cortés (2014, 254, traducción propia): “Se establece, así, una idealización teórica de lo que debe ser un movimiento social que termina por descalificar las expresiones reales de los movimientos. El concepto comienza a ser más importante que la realidad misma”.

En segundo lugar, se consideró que, teniendo en cuenta la ubicación *marginal* de los pobladores, jamás éstos podrían constituir un movimiento social (Dubet 1987, Touraine 1989). O que, en todo caso, eso no dependía de ellos: “La constitución de los pobladores en un actor colectivo –o más bien dicho, la constitución de múltiples actores colectivos en un medio internamente segmentado, como es el marginal– no va a depender tanto de factores internos, como del contexto político-institucional que se consolide en Chile en el futuro” (Tironi 1990b, 227). Los análisis giraron entonces en torno de la caracterización de las acciones de los pobladores como expresión de conductas *desviadas*, incapaces de configurar un actor sociopolítico autónomo y legítimo, pues se movían pendularmente entre el *retraimiento social* (*comunitarismo*) y las acciones *vandálicas* y *delincuenciales*. La reformulación del concepto *durkheimiano* de anomia y las proposiciones acerca de la desviación social, del sociólogo estadounidense Robert K. Merton, y particularmente su tipología de comportamientos desviados o anormales (conformismo, ritualismo, retraimiento, rebelión e innovación) sirvieron como sustento de estas interpretaciones (Merton 1964, 140-168, Tironi 1990b, 86-89).¹⁵⁷

La *centralidad de los marginales* (Touraine 1987c) en los escenarios de conflicto forzó su consideración por parte de la sociología, como lo demuestra la profusión de trabajos y eventos para examinar y discutir sobre los movimientos urbano-populares, en el contexto nacional y regional (Calderón 1986). Empero, la conclusión de la vertiente sociológica hegemónica, en los ochenta, fue negar el potencial democratizador de las acciones de los *pobladores*. Como sostiene Salazar, con ironía, “la turba marginal ha sido, en los últimos siglos, el eterno invitado de piedra, la barbarie intrusa que aparecía (y aparece) invariablemente en momentos

¹⁵⁷ Una descripción detallada del uso de estas perspectivas para caracterizar las acciones *poblacionales*, en Iglesias (2011).

de desorden, acompañando las protestas urbanas de los actores integrados y civilizados” (Salazar 2012a, 154).

En definitiva, mientras la *terca* realidad asediaba con protestas y procesos de reorganización y de reconstrucción de lazos y de prácticas creativas alternativas al individualismo imperante, en los más distintos ámbitos –organizaciones económico-populares, jornadas de protesta nacional, solidaridad con los presos políticos y con los familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados, iniciativas culturales, de educación popular, de iglesia popular, etc.– evidenciando la riqueza y densidad del movimiento popular, la sociología concluía que no existían movimientos sociales en Chile y, con ello, escamoteaba legitimidad social y política a los protagonistas de la movilización social para participar activamente en los procesos de democratización de la propia sociedad y no sólo en la reforma del Estado.

3.2.1. La “desintegración de un movimiento social imposible”: anomia, fragmentación, desviación

Para Touraine (1982, 690) un movimiento social es “una acción colectiva organizada entablada contra un adversario social por la gestión de los medios a través de los cuales una sociedad actúa sobre sí misma y sobre sus relaciones con su entorno”. Esto implica que el movimiento social “es una acción conflictiva mediante la cual se transforman las orientaciones culturales y un campo de historicidad en formas de organización social, definidas a la vez por normas culturales generales y por relaciones de dominación social” (Touraine 1987b, 97).¹⁵⁸ Con arreglo a esta definición, el tipo de conflicto que expresa el movimiento social es muy distinto del de que denotan las *luchas* específicas, circunscritas a ámbitos concretos de la sociedad. El movimiento social disputa el modelo de sociedad, y se plantea por lo tanto, en torno a un conflicto estructural, por eso debe ser un actor social central, que condense las luchas sociales de un determinado tipo de sociedad y que dispute la definición de las orientaciones culturales (esto es, la historicidad o la capacidad de la sociedad de producirse a sí misma). Desde este marco de sentido fueron interpretadas las protestas y movilizaciones desplegadas por los *pobladores*; y la conclusión “lógica” fue que no existían movimientos sociales en este país, porque el movimiento social no podía construirse jamás a partir de un sujeto (definido como) *marginal* y desde las prácticas anómicas y desviadas que lo caracterizaban (tal y como habían sido descritas las acciones de los *pobladores*). Los sociólogos de SUR, siguiendo al francés, afirmaron que en Chile “no hay movimientos sociales propiamente tales, esto es, acciones colectivas sistemáticas dirigidas contra un antagonista también social en un campo cultural e institucionalmente regulado” (Tironi 1986c, 15), aplicando taxativamente la

¹⁵⁸ A su vez, la formación de un movimiento social, requiere para Touraine (2006, 259), “la combinación de un principio de identidad, un principio de oposición y un principio de totalidad”. Esto es, definir en nombre de quién, contra quién y sobre qué terreno se lucha.

definición antes citada.¹⁵⁹ Quien mejor sintetizó la conclusión de este grupo de académicos fue, quizás, François Dubet¹⁶⁰ (1987, 98):

A causa de la exclusión y de su marginalidad, nunca los pobladores han podido constituir un real movimiento social, y es sólo de manera metafórica e ideológica que algunos han llegado a analizar las luchas de los marginales en los mismos términos que una acción de clases o el movimiento obrero. De la misma manera, nunca la lucha de los pobladores ha podido ser identificada como una lucha revolucionaria capaz de impulsar un cambio de tipo de sociedad.

Nótese, por un lado, la referencia explícita al movimiento obrero, como prototipo de movimiento social; y, por otro, la consideración reprobatoria, también categórica, de la lucha *poblacional*, negándole cualquier capacidad de transformación sociopolítica. Desde esta perspectiva, más allá de las restricciones impuestas por el contexto dictatorial para la constitución de sujetos sociales *autónomos* –ausencia de libertades políticas y de espacios democráticos, y débil o nula institucionalización de procedimientos para regular el conflicto–, los *pobladores* no podían constituir un movimiento social debido a sus *propias* limitaciones.

Los análisis de las acciones desplegadas por los *pobladores* nos permiten vislumbrar el concepto de movimiento social que subyace en esta perspectiva, a partir sobre todo, de lo que “les faltaba” o “les sobraba” a esos actores para constituirse en un “real” movimiento social. Las conductas de los *pobladores* eran definidas como *anómicas* y *desviadas*, pudiendo expresarse su *inadaptación* o *comportamiento antisocial* de distintas maneras: ya fuera en su *ensimismamiento* o en su *violencia desatada*, en el *retraimiento comunitario* o en las *acciones delincuenciales*. Además, la anomia presuponía la falta de integración interna; algo que se reflejaba en la diversidad de expresiones que adoptaba la acción de los *pobladores*, y que conspiraba contra la unidad del movimiento porque “pese al esfuerzo muchas veces heroico de los activistas, la lucha de los pobladores bajo el autoritarismo adoleció de una extrema desarticulación y jamás logró dar origen a un genuino movimiento social” (Tironi 1990b, 210, cursivas mías).

Los sociólogos de SUR identificaron cuatro “orientaciones” en su conducta:

Una *revindicativa*, que razona en términos clasistas; otra *populista*, que se dirige al Estado en la defensa de los derechos ciudadanos; una tercera *comunitaria*, que busca la constitución de “un mundo de los pobladores”; y, por

¹⁵⁹ Cabe señalar que esta conclusión de los discípulos chilenos de Touraine fue cuestionada por el mismísimo preceptor cuando, en el año 1987, participó en un seminario en Chile, argumentando que si bien no podía hablarse de movimientos sociales tal y como él los entendía, la sociología no podía conformarse con esa constatación, toda vez que la protesta y la organización popular eran también innegables: “¿Pero acaso no se puede decir nada más? Yo no lo creo [...] si no hay movimientos sociales, es porque existen pedazos, imágenes, elementos desocializados de tal movimiento. Aquí tenemos que ir un poco más allá” (Touraine 1987c, 220).

¹⁶⁰ Contraparte por el Centro de Análisis e Intervención Sociológica (Cadis) de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (Ehess), del proyecto de investigación sobre los *pobladores*.

último, una orientación *revolucionaria*, que desea aprovechar las contradicciones para destruir al capitalismo (Tironi 1987b, 15, cursivas mías).

Las vías *revindicativa* y *populista* apenas fueron consideradas, en sus análisis, por tratarse de las menos frecuentes y con menores condiciones de posibilidad, dadas las circunstancias impuestas por la Dictadura.¹⁶¹ Las otras, más extendidas, y con mayor “visibilidad bajo el autoritarismo” (Tironi 1990b, 220-221) denotaban que los *pobladores* estaban demasiado imbuidos de nostalgias *comunitarias* o de ansias *revolucionarias* y, en cualquiera de los dos casos, esos sentimientos indicaban una desviación de la conducta adaptativa juzgada normal, a partir del mito de la modernización, que consideraba prototípico el proceso de transición desde las sociedades “arcaicas” a la moderna sociedad capitalista, experimentada por los países de Europa occidental. En ese sentido, la Dictadura podía ser leída –como hizo Tironi (1990a, 32)– como un proceso modernizador “en lo económico, social y cultural”, que armonizaba la realidad nacional con el proceso de reestructuración del patrón de acumulación iniciado en los países centrales del sistema capitalista desde mediados de los años setenta. Dicha mutación no respetaba, a juicio del sociólogo chileno, “ideologías, ni grados de desarrollo, ni posición geográfica” (ibíd.: 29). Este juicio se sostiene a costa de hacer abstracción y de invisibilizar, por supuesto, las violaciones de los derechos humanos y del embate represor de los derechos sociales y políticos.

De acuerdo con la lectura *modernizadora*, las acciones de los pobladores expresaban su incapacidad de adaptarse a las nuevas condiciones –modernas– reforzando actitudes conservadoras o retrógradas. En este sentido, las tendencias definidas como “comunitarias” eran las más contraproducentes, a decir de estos sociólogos, porque suponían un retroceso en los valores de la modernidad y eran consideradas como esencialmente apolíticas, afectivas y éticas, proposiciones que facilitaban su menosprecio y que reforzaban la idea de que la lucha política sólo tenía lugar a través de los partidos políticos, concepción fuertemente arraigada en los propios militantes o activistas sociales a juzgar por la siguiente constatación: “En lo que respecta a la orientación ‘comunitaria’, tuvo que conformarse al hecho de que la reconstrucción del sistema político a partir de 1983 llevara a muchos de sus militantes a preferir la lucha política al testimonio moral” (Tironi 1990b, 221). La frase contribuye a reforzar la propia posición del sociólogo, pero no da cuenta de que muchos otros militantes prefirieron permanecer en las luchas que libraba el movimiento, siendo marginados por la teoría sociológica y por la política de la transición. Para Touraine (1989, 242) “estos movimientos de *pobladores* se han vuelto hacia el interior, hacia la defensa de la comunidad y la afirmación de los derechos de los pobres, en vez de constituir un movimiento propiamente político que participe en la búsqueda de una solución institucional”, por lo que “pueden transformarse con mayor facilidad en violencia política que en apoyo a unas iniciativas institucionales” (íd.).

¹⁶¹ Para un análisis más detallado de la descripción de las “orientaciones” de las acciones de los pobladores véase Iglesias (2011: 46-56).

En definitiva, esta diversidad de “orientaciones” entre los *pobladores* organizados y movilizados, redundaba en la imposibilidad de que sus acciones los constituyeran en un *actor social*, en un *movimiento social*, porque les restaba homogeneidad en sus rasgos constitutivos y en sus lógicas de acción.

El “movimiento” a nombre del cual hablan y actúan los militantes que tomaron parte en nuestros grupos de IS [Intervención Sociológica], es un movimiento que no tiene existencia real; lo que parece unido en las intenciones, se revela en la realidad profundamente desarticulado. Los militantes “reivindicativos” y “comunitarios” hablan un *lenguaje esencialmente social*: el de las necesidades y de los valores; los militantes “populistas” y “revolucionarios”, en cambio, razonan en *términos puramente políticos y estratégicos* (Tironi 1990b, 220, cursivas mías).

Por ende, lo que estos autores advertían era que el denominado movimiento de *pobladores* –que, a su parecer, tenía un “carácter fantasmagórico” (Tironi 1986a) pues constituía “más un deseo de construir que una realidad” (Bengoa 1987, 19)– actuaba más como la expresión, a nivel *poblacional*, de “las distintas tendencias ideológicas nacionales que como intérprete de posiciones sociales homogéneas” de ese mundo (Tironi 1987a, 74). Y, así, concluyeron que “las lógicas de acción que conviven en el *movimiento de pobladores* no logran pues constituirlo como un movimiento social” (Tironi 1987a, 74); y que “no se puede hablar de los pobladores como movimiento ni tampoco, todavía, se puede hablar de los pobladores como *actor válido*” (V. Espinoza 1983, 74, cursivas mías). El “desliz” del sociólogo no puede ser más revelador: la validez que le negaba a los *pobladores* aludía a su falta de legitimidad para participar en el diseño de la transición, en la negociación política.¹⁶² Y es que a pesar de las tempranas alabanzas a la sociedad civil como espacio privilegiado para la reconstrucción de la sociedad, y a la emergencia de actores diversos descentrados de la figura del proletariado industrial y más autónomos de los partidos políticos, esta mirada sociológica consideró que “sin el Estado –y qué decir contra el Estado–, no hay modo de levantar un ‘movimiento de pobladores’” (Tironi 1990b, 222).

La pluralidad de “orientaciones” que hemos referido se plasmaba, asimismo, en la ausencia de programa político: los *pobladores* carecían de la suficiente claridad estratégica para concretar, en una propuesta *orgánica*, sus aspiraciones políticas, económicas y culturales. Por lo tanto, no existía, desde esta perspectiva, un proyecto de transformación social, sino huidas a la comunidad, demandas clientelísticas al Estado o rebeliones vandálicas. Por eso, concluía Espinoza: “A los pobladores se les asigna un rol destacado en el proceso del derrocamiento de la Dictadura pero, en la conformación del proyecto hacia futuro, tienen un rol *subordinado* a la conducción de la *clase obrera*” (V. Espinoza 1983, 73, cursivas mías).

¹⁶² La conclusión era asumida como una suerte de diagnóstico general no sólo de Chile sino de América Latina, dado el dominio de Estados autoritarios: “Es por ello que en nuestros países la existencia de movimientos sociales es muy *precaria* o, muchas veces *inexistente*” (Bengoa 1987, 19, cursivas mías).

mías).¹⁶³ Esto es, en la difundida expresión de la época: había *protestas in propuesta*. De ahí la siguiente inferencia: “Tenemos acción, tenemos organización pero lo que falta es proyecto” (V. Espinoza 1983, 74).

La conclusión de esta perspectiva sociológica fue que durante la Dictadura “el ‘movimiento de pobladores’ no pudo alcanzar la dimensión de un movimiento social con identidad, adversario y proyecto definidos” (Tironi 1990b, 222). Esto es, no pudo definir y combinar los tres principios que, a juicio de Touraine, debe expresar un movimiento social: no “sabían” quiénes eran, y contra quién y por qué luchaban. Habría sido, entonces, el *basismo* o *movimientismo* de algunos intelectuales “insatisfechos de las formas de acción política anteriores y *agentes principales*”¹⁶⁴ de la protesta moral contra la dictadura” que “apoyan esos movimientos y los presentan como factores de rejuvenecimiento y de extensión de la democracia” (Touraine 1989, 243, cursivas mías) los que habrían creado la *ilusión* de que se formaban *auténticos* movimientos sociales en Chile –y en Latinoamérica– cuando los fenómenos descritos “no son de la misma naturaleza que las luchas generales entre adversarios sociales, a las que casi siempre se reconoce el nombre de movimientos sociales. Aquí hablamos de movimientos de base, o incluso sublevaciones, pero *no de movimientos sociales*” (ibíd.: 245, cursivas mías).

3.2.2. Del “miedo al Estado” al “miedo a la sociedad”

La heterogeneidad de los *pobladores* y la ausencia de proyecto formalizado explican, a los ojos de los sociólogos de SUR, no sólo la *inexistencia* de un movimiento social propiamente tal, sino que las acciones desplegadas por ellos fueran vistas como teniendo un sentido totalmente opuesto (incluso “contrarrevolucionario”): “La crisis de la acción reivindicativa y los límites del comunitarismo desembocan en un fenómeno que corresponde bastante aproximadamente a lo que Touraine denomina a veces genéricamente como un ‘antimovimiento social’, cuya expresión más patente es la violencia” (Tironi 1986c, 31). La supuesta “violencia” –especialmente de los jóvenes durante las Jornadas de Protesta Nacional–, constituía la excusa perfecta para estigmatizar a los *pobladores* y a la oposición que pugnaba por un escenario de insurrección (de sublevación) como forma de derrocar a la Dictadura. Por esa vía los pobladores eran presentados como explosivos, irracionales, antidemocráticos, violentistas, y toda una serie de calificativos que construían la imagen del poblador como el elemento conflictivo a

¹⁶³ Pese a la consideración recogida en las Actas de Chantilly y constatada en los primeros trabajos sobre movimientos sociales que estuvieron referidos a las transformaciones en el campo sindical, que daba cuenta de la debilidad y desestructuración del “viejo” movimiento obrero, sorprende la referencia a la clase obrera como la vanguardia de la lucha contra la Dictadura. Los primeros trabajos sobre movimientos sociales buscan, por decirlo así, determinar las características del movimiento obrero *fracasado*, por lo que predomina en ellos la perspectiva histórica (Baño, Faletto, y otros 1982) y dar cuenta la magnitud de su derrota a partir del golpe de Estado y con las transformaciones producidas por las políticas de la Dictadura (Campero y Valenzuela 1984, Martínez y Tironi 1985).

¹⁶⁴ La reprobación de que esos intelectuales serían los “agentes principales” de la protesta, recupera la crítica de la figura del intelectual comprometido; aquéllos serían una suerte de “nuevos intelectuales orgánicos de los movimientos sociales”. Y su “compromiso” estaría dificultando su capacidad crítica.

exorcizar, como el peligro de disolución social. Curiosamente, como se encarga de recordar Tironi, en ese punto tanto la Dictadura como la oposición pactista –a la que él presenta como *la* oposición, sin apellidos– mostraron comprometedoras coincidencias:

El régimen militar presentó insistentemente la “violencia de los pobladores” como una amenaza inminente para la paz social. Apelaba para ello al recuerdo de la violencia que estalló con las “protestas” de los años 1983/84; y al hacerlo, automáticamente reavivaba en la memoria colectiva el recuerdo de la crisis traumática de 1973 [...] Por varios años, esta operación le reportó al régimen un significativo apoyo en las clases medias, que ven en los pobladores una espada de Damocles que pende sobre la estabilidad de la sociedad moderna [...] Curiosamente esta percepción predomina también entre los dirigentes que estuvieron en la oposición al régimen militar (Tironi 1990b, 180-181).

A decir del sociólogo chileno, la falta de homogeneidad en sus orientaciones y de la necesaria independencia de otros actores sociales y políticos –principalmente de los partidos políticos, pero también de la Iglesia y de las asociaciones de técnicos y educadores sociales–, para hacer valer sus intereses, su débil institucionalización, así como su explosiva acción y la alta dosis de violencia que acompañaba algunas de sus protestas, hacían de los *pobladores* una amenaza para la recuperación democrática y ponían en peligro la ansiada negociación para la transición. Tironi llegó a sostener que “el *miedo al Estado* [...] que había logrado cohesionar a los más amplios grupos sociales en las primeras protestas, se revirtió en un *miedo de la sociedad civil a sus propias tendencias auto-destructivas*” (Tironi 1987a, 67), lo cual podría convertirse “en un respaldo a una solución autoritaria” (ibíd.: 65). En definitiva, desde este punto de vista, la acción de los *pobladores*:

Carece de la articulación necesaria como para que ellos puedan hacerse representar en la *edificación de un orden democrático según una lógica concertacionista*; su situación, por el contrario, se identifica más con la peligrosa situación de masas “en disponibilidad” para pasar de la apatía a una movilización de tipo milenarista, y viceversa (Tironi 1986b).

La referencia a las “masas” no es baladí; este concepto tiene en la trayectoria de las ciencias sociales una pesada carga de negatividad, pues niega el carácter racional de aquel colectivo al que se le aplica, y lo supone, en todo caso, moldeable desde “afuera”, con arreglo a intereses externos. Una vez más se hacía hincapié en que los *pobladores* que resistían las agresiones del autoritarismo neoliberal no eran capaces de actuar de acuerdo a principios y fines que estructuraran una lógica interna, pues supuestamente *carecían* de tal lógica. De ahí la insistencia en el carácter anómico, desviado, retraído, apático, conformista, pre-político, impredecible y violento que se les atribuía. Y esa interpretación cimentó el camino para que las aspiraciones de los *pobladores* fueran desdeñadas y sus acciones estigmatizadas y anatemizadas por quienes se consideraron capaces de edificar una sociedad “democrática”:

Las representaciones y demandas sociales de los grupos marginales tienen como rasgo común el *no ajustarse a los requisitos convencionales de un régimen*

político democrático, resistiendo el traslado a arenas institucionalizadas de concertación social. Como es obvio, esto plantea un problema de envergadura a los proyectos democratizadores y a la salida de regímenes autoritarios. Las movilizaciones de los marginales, se preguntan muchos, ¿hasta qué punto no son incompatibles con un tránsito pacífico a la democracia y con su consolidación? (Tironi 1987b, 10, cursivas mías).

En los ochenta, en el contexto de la lucha antidictatorial, se dibujaron dos alternativas políticas en el seno de la oposición: una apostaba por la movilización y la organización de los sectores populares, combinando “todas las formas de lucha”¹⁶⁵, inclusive las acciones armadas, con miras a generar una situación insurreccional; la otra, colocaba en el centro de la estrategia la negociación con el Dictadura cívico-militar. La primera se apoyaba en las organizaciones y movilizaciones populares; la segunda en las maniobras y acuerdos de las élites. La primera, pugnaba por una *democratización real*, no sólo un cambio de régimen, que revertiera las transformaciones económicas y culturales que había introducido la Dictadura; la segunda, concebía la *democracia* como una cuestión *formal* que decía relación con el ejercicio parlamentarista de la política. Sobre estos aspectos, volveremos en el capítulo siguiente; lo que nos interesa señalar aquí, es que la sociología que negó la existencia de los movimientos sociales, se mostró temerosa de los desafíos que las luchas populares presentaban a la estrategia negociadora. Por ello, advirtió en dichas prácticas la amenaza del caos, de la anomia, de la destrucción de la sociedad, tal y como la burguesía y los militares golpistas habían visto el periodo de la Unidad Popular.

El pensamiento conservador se caracteriza por su adaptación y adhesión al orden establecido. En este sentido, estos sociólogos, consideraron las luchas de los *pobladores* como destructivas, desordenadoras, perturbadoras del orden dado (con independencia de que fuera el orden impuesto a sangre y fuego por la Dictadura); y confundieron esa acción desestabilizadora de las normas impuestas ilegítimamente con la amenaza de la *disolución social*, en lugar de ponderar la capacidad regeneradora de los lazos sociales de las prácticas comunitarias y la potencia creadora de las luchas frontales contra el orden impuesto; fueron incapaces de ver en las acciones de los *pobladores* la gestación de otro mundo posible, el germen de relaciones sociales más humanas, la posibilidad real de producir una democratización efectiva de la sociedad. La escisión entre lo social y lo político, traslucía una distinción entre los sectores populares y las élites; y, en su condición de élite y de militantes políticos, los sociólogos *renovados* percibieron las luchas de los pobladores como una amenaza para la recomposición de un orden en el que ellos volverían a tener un lugar destacado.

¹⁶⁵ La expresión remite al discurso que Luis Corvalán, secretario general del PC, pronunció el 3 de septiembre de 1980 desde Moscú, y que marcó un viraje trascendental en la línea política de ese partido, que hasta entonces había defendido la necesidad de crear un “Frente Antifascista”. Corvalán (1980, 16) planteó abiertamente el derecho a la rebelión, pues “es el fascismo el que crea una situación frente a la cual el pueblo no tendrá otro camino que recurrir a todos los medios a su alcance, a todas las formas de combate que lo ayuden, incluso de violencia aguda, para defender su derecho al pan, a la libertad y a la vida”.

El pensamiento conservador acata la legalidad y *facticidad* del orden impuesto, prescindiendo de su supuesta legitimidad; y se atribuye la potestad de imponer la categorización de lo que es políticamente válido o no. Por eso las acciones de los *pobladores* fueron vistas y descritas incluso como un riesgo para la transición a la democracia que se negociaba en las alturas, que nacía del acatamiento de la Constitución de 1980 y del pacto con los militares para impedir transformaciones profundas de la sociedad:

Los pobladores, en efecto, son vistos como un foco de demandas económico-sociales que pueden arrastrar en cualquier momento a estallidos de violencia, lo que desde un punto de vista democrático sería doblemente disfuncional: de una parte, la “violencia de los pobladores” estimula en la sociedad las demandas autoritarias, lo que bloquea la transición; y de otra, está la posibilidad de que ella se haga incontenible con el fin del autoritarismo, lo que va en contra de la consolidación del nuevo régimen democrático. ‘Qué hacer’ con los pobladores, por lo tanto, se ha transformado en una de las grandes preocupaciones de la clase política chilena (Tironi 1990b, 181).

Si de alguna manera es expresión de la performatividad de la ciencia social el hecho de que la realidad nombrada se sienta reconocida en el nombre dado, la interpretación sociológica de las acciones colectivas de los *pobladores*, si bien hegemónica en la disciplina, generó resistencias entre ciertos sectores *poblacionales* que no se sintieron representados por la construcción teórica que de ellos se hacía y entre algunos científicos sociales, que advirtieron, desde su particular perspectiva, una contradicción entre la realidad concreta y la teoría, como veremos en el capítulo IV.

3.3. La Flacso, la sociología *transicional* y la subordinación de los movimientos sociales

El complemento de la sociología *negacionista* es, a nuestro modo de ver, lo que en ocasiones se ha llamado sociología *transicional*¹⁶⁶: ésta enfoca su análisis de los movimientos sociales desde el punto de vista del lugar que ocupan en la estrategia de la *transición a la democracia*; una preocupación que también está presente en los trabajos analizados anteriormente, pero como un segundo momento de la reflexión sobre el carácter del actor, o en cuanto trasfondo de la misma. En cambio, el análisis de los actores sociales desde la perspectiva de la transición no reflexiona tanto sobre las características que hacen de una determinada acción colectiva un movimiento social sino que, compartiendo con la primera la opinión de que no existían en el Chile de los ochenta movimientos sociales “propiamente tales”,

¹⁶⁶ La expresión hace alusión, precisamente, a los sociólogos que se dedicaron a la investigación/construcción de la *transición pactada*. Se trata de una sociología con un fuerte predominio de la ciencia política –preocupada, como hemos señalado anteriormente, por el cambio de régimen–. Entre los transitólogos más destacados se encuentran José Joaquín Brunner, Ángel Flisfisch, Enrique Correa, Eugenio Tironi y Manuel Antonio Garretón. Coincidimos con Tomás Moulian en que “M. A. Garretón, el menos oído, es el más importante desde el punto de vista del análisis, porque no se queda en la pura transición” (Moulian 2008, 163).

examinan el papel que las movilizaciones y protestas deben jugar en aquella estrategia política –la transición política–, y por añadidura, el rol de los movimientos sociales en el sistema democrático. Así, esta sociología acabará *subordinando* a los movimientos sociales (o a las movilizaciones o protestas), primeramente, a la estrategia partidista de negociación cupular para poner fin al régimen dictatorial y, en último término, a las directrices de los partidos políticos, concebidos como los actores privilegiados de la política. Por eso, “la transición se hace sin sujeto popular” (Baño 2013a).

3.3.1. *El lugar de los movimientos sociales en la transitología*

Uno de los lugares en los que floreció el *pensamiento de la transición* fue en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ya hemos dado cuenta de cómo esta institución se convirtió en uno de los *refugios* de los académicos expulsados de las universidades chilenas. Se debe, en parte, a la continuidad operativa de la que gozó la Flacso el hecho de que allí se produjeran los primeros análisis académicos de la derrota/fracaso de la Unidad Popular, como vimos previamente, contribuyendo significativamente al proceso de *renovación socialista* desde *el interior*. Hacia fines de la década de los setenta, la producción intelectual que revisamos en el capítulo anterior da cuenta de que los sociólogos *renovados* habían completado la primera etapa de auto-cuestionamiento, produciendo con ello una serie de redefiniciones de las nociones de socialismo y democracia.

En 1980 el dictador hizo aprobar una nueva Constitución que dibujaba la futura institucionalidad política y –aspecto fundamental en ese momento– fijaba los plazos de la entrega del “poder político”, que se preveía, en el mejor de los casos, para 1990. La oposición a la Dictadura cuestionó inicialmente la legitimidad de la carta magna, negando su validez por haberse refrendado en un plebiscito carente de garantías democráticas y, a todas luces, fraudulento (Hamuy 1984), mientras imperaba la represión política y la violación sistemática de los derechos humanos. Sin embargo, Pinochet “sacó adelante su plebiscito y su constitución” (Tironi 1979). La fase de institucionalización de la Dictadura acabó con las esperanzas de una pronta retirada de los militares. Por eso, a poco andar, el itinerario esbozado en la Constitución de 1980 operó como un *mapa* con el cual una parte de la oposición decidió orientarse. De manera explícita, a partir de 1984, el sector más conservador de la oposición, aquel que había saludado el golpe de Estado, retomó la cercanía con los militares al reconocer la legitimidad *de facto* de la Constitución (Godoy 1999, 90). Aylwin declaró: “La única ventaja que él [Pinochet] tiene sobre mí es que esa Constitución está rigiendo. Es un hecho, y lo acato”.¹⁶⁷ Por eso, el demócratacristiano recomendó “eludir deliberadamente el tema de la legitimidad [...] hagamos un esfuerzo en buscar coincidencias para llevar al país a la normalidad democrática” (íd.). Pero lo que se presentaba como una posibilidad de salida del régimen, en realidad era su aceptación; la que era “la Constitución de

¹⁶⁷ Citado en la revista *Hoy*, n° 367 (del 1° al 7 de agosto de 1984), pp. 10-11.

Pinochet” acabaría siendo también la Constitución de la futura Concertación de Partidos por la Democracia.

De esta manera la Concertación terminó legitimando lo ilegítimo. Pero previamente, comenzó por reconocer la existencia de una legitimidad *de facto* frente a la inexistente legitimidad *de jure*, como fuente del ejercicio de la autoridad de los gobernantes. La legitimidad de facto consiste en *reconocer la validez* de una práctica –la capacidad de gobernar–, por el hecho de tener realidad fáctica –de constituir un hecho–, por más que aquélla no se sustente en los principios y normas ratificadas por la comunidad política.¹⁶⁸ Es decir, tal y como reza el lema del Escudo Nacional chileno, ya fuera *por la razón o la fuerza*, la institucionalidad dictatorial gozaba de *derecho* para gobernar.

El reconocimiento de la “facticidad autolegitimadora”¹⁶⁹ (Hinkelammert 1984, 37) del régimen dictatorial, se transformó, acto seguido, en la aceptación de los mecanismos y plazos de la transición a la democracia establecidos por dicho régimen, para, supuestamente, modificarlo utilizando sus propias *reglas del juego*. Así, “las fuerzas políticas de la oposición, junto con aglutinarse y organizarse internamente, se van incorporando al marco institucional creado por el régimen autoritario. De este modo, tanto a nivel discursivo como práctico, aceptan tácitamente el orden político, se someten a sus reglas y esperan conseguir resultados favorables operando a su interior” (Godoy 1999, 92-93).

En esas circunstancias, en el ámbito de las ciencias sociales y políticas, *renovadas*, la fórmula de la *transición a la democracia* se constituyó en la preocupación principal y el concepto de “democracia” en un “ideal práctico” o un nuevo “concepto límite” de las ciencias sociales. Flisfisch constató:

La preeminencia y centralidad que ha adquirido la idea de la democracia, no sólo como tema de la reflexión teórica y de la elaboración ideológica, sino a la vez como ideal práctico, orientador de las luchas políticas, y como una cuestión principal que gravita con altísima intensidad en las consideraciones, definiciones y decisiones estratégicas es hoy dramática y visible (Flisfisch 1987, 154).

La reflexión sobre la democracia y los procesos de democratización fue tomando cuerpo en varios encuentros regionales (Lesgart 2003). Este debate, así como antes

¹⁶⁸ La consideración de *la fuerza de los hechos* como fuente de legitimidad proviene –en su formulación teórica– de Thomas Hobbes. Según el filósofo inglés el gran Leviatán “posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero. En ello consiste la esencia del Estado” (Hobbes 1999, 20). A su juicio el poder soberano se alcanza tanto por la fuerza natural (esto es por el uso de la violencia) como por el acuerdo de los hombres entre sí para someterse a algún hombre o asamblea voluntariamente; ambas formas son igualmente legítimas, pero “en este último caso puede hablarse de Estado político, o Estado por institución, y en el primero de Estado por adquisición” (Hobbes 1999, 20-21).

¹⁶⁹ De acuerdo con Hinkelammert, “el hombre vive este mundo, y viviéndolo lo construye y mantiene como legítimo; de esta manera, la legitimación no es un acto teórico separado del orden social y, por tanto, no es un simple acto teórico, sino que es parte del orden social que se vive como ‘plausible’” (1984, 35).

el que se refería a la noción de “Estado burocrático-autoritario”¹⁷⁰, tuvo un alcance latinoamericano, toda vez que la instalación de dictaduras militares y la adopción de rasgos autoritarios aun en los países en donde los militares no se hicieron con el poder político caracterizó las décadas de los setenta y ochenta en América Latina, salvo unas pocas excepciones. Es por ello que se sucedieron varios eventos en los que los científicos sociales compartieron y discutieron los presupuestos y los *pasos* necesarios en el proceso de la recuperación democrática, dando lugar a un pensamiento especializado en la llamada *transición a la democracia*, que constituye una “rama” específica de las ciencias sociales y políticas, nombrada como “transitología”. Ésta se preocupa por entender los procesos de transformación de los regímenes políticos, principalmente en el caso de la salida de un régimen dictatorial, y por allanar el camino para que dicha transición sea “exitosa”.¹⁷¹ Tiene por lo tanto un claro fin *performativo y normativo*. Los estudios sobre la transición constituyen, a decir de Garretón, un “libreto” que al menos Chile siguió al pie de la letra: “Si decimos que estamos en transición es porque, objetivamente, estamos presenciando los fenómenos típicos que se dan en este tipo de proceso y porque se ha seguido paso a paso el ‘libreto’ de las transiciones” (Garretón 1991a, 13).

Es de esta manera como la *transición a la democracia* adquirió categoría de programa de investigación y, sobre todo, de programa político. Los estudios dirigidos por los politólogos Guillermo O’Donnell y Philippe C. Schmitter, cuyos resultados se publicaron en *Transiciones desde un gobierno autoritario* (1988), se convirtieron en el vademécum de los políticos y científicos sociales chilenos, en la órbita de la *renovación socialista* y de la Democracia Cristiana. El aspecto más significativo es que:

La transitología, acotó o redujo el concepto de transición –y por ende el de la democracia recuperada– a su aspecto exclusivamente político-institucional, es decir, la etapa de transición comprende el cambio del régimen dictatorial en crisis hasta las primeras elecciones de un gobierno democrático y la afirmación de reglas de juego institucional acatadas por los actores políticos principales. De allí que se entendieran por consolidación institucional, precisamente: el “proceso de estabilización de la democracia política, evitando las regresiones autoritarias (M.A. Garretón)” (Rico s.f.).

La redefinición de la democracia como una esfera, esencialmente formal, *por encima de* los aspectos socioeconómicos y de los proyectos políticos, producto del cuestionamiento formulado por los sociólogos chilenos al modelo democrático que había posibilitado el triunfo de la Unidad Popular allanó el camino para la consideración de la transición a la democracia como un tránsito institucional, una mera formalidad. De acuerdo con los *transitólogos*, la transición se refiere exclusivamente a la democracia política, es decir, al cambio de régimen, dejando pendientes para una etapa posterior los problemas de *democratización social*,

¹⁷⁰ Categoría construida por Guillermo O’Donnell.

¹⁷¹ El éxito se mide aquí exclusivamente por la consolidación del reemplazo de un régimen político por otro; desde ese ángulo, la transición chilena ha sido altamente exitosa, pues exorcizó el peligro de restauración de la conducción política directa por parte de los militares (Garretón, 1999: 59).

referidos a los “cambios sociales tendientes a la mayor igualdad de oportunidades y a la participación social” (Garretón 1993b, 3), que se verifican durante la “consolidación democrática” (ibíd.: 4). Algo así como una democratización *en dos pasos*: primero la restauración del sistema político liberal, después la transformación socioeconómica y del propio marco institucional dictatorial, *desde su interior*. Desde esta perspectiva, el gran logro de la Concertación fue haber sido capaz de dejar de lado las “cuestiones éticas” e insertarse en la institucionalidad dictatorial, con la pretensión (aparentemente) de cambiarla *desde dentro* en un momento posterior (Garretón 1993a). Por eso Garretón reprueba la actitud de los sectores de la oposición que no estaban dispuestos a dejar de lado aquellas cuestiones para negociar con la Dictadura:

Ahora bien, si por razones éticas y políticas bien fundadas, no se quiere negociar con Pinochet [...] o si se piensa, también con razones bien fundadas, que Pinochet no negociará en ningún caso, entonces, hay que aceptar que no habrá transición hasta 1989. Porque no hay otra salida que no sea con negociación, impuesta, forzada, pero negociación al fin (Garretón 1987a, 12).

O'Donnell reconocerá, años después, el sesgo formal de su enfoque, excusándose en que “en esa época (segundo quinquenio del ‘80) el logro de una democracia política aparecía tan inmensamente importante que quisimos concentrarnos en los factores y procesos políticos y sociales que podían conducir con la mayor celeridad a ella” (O'Donnell 2004, 18). Un régimen democrático, así entendido, nada tiene que ver con el modelo económico y social; de ahí que el “padre” de la transitología afirme:

¿Es posible la democracia sin un mínimo bienestar social? Yo creo que es posible y la experiencia de América Latina lo está demostrando. Tenemos regímenes democráticos que coexisten con grados tremendos de desigualdad y autoritarismo social, así como con Estados que funcionan de manera poco democrática. Lo que tenemos es un régimen democrático, nada más y nada menos (O'Donnell 2001, 7).

Sin embargo, los sectores populares no podían escindir, completamente, los aspectos *formales* de los *sustantivos* de su concepto de democracia: “No era simplemente un cambio de régimen, poder ir a votar, no, se pensaba que se iba a producir un proceso de igualación” (Baño, 2013b). La noción de democracia que albergaban los sectores populares era *la de antes del golpe*, es decir, aquel período efímero de la historia de Chile, entre 1958¹⁷² y 1973, que había permitido la incorporación progresiva de los marginados a la participación política y el reconocimiento de sus reivindicaciones por una parte significativa del espectro

¹⁷² Fecha en la que se derogó la Ley de Defensa Permanente de la Democracia –conocida popularmente como Ley Maldita– promulgada diez años antes para proscribir la actividad del Partido Comunista y restringir la organización y lucha sindical. Aunque pueden advertirse límites y déficits democráticos significativos en ese período, no puede dejar de reconocerse que se permitió la incorporación de amplias capas sociales anteriormente marginadas de los mecanismos institucionales y que, por esa vía, también se esbozaron proyectos de profundización de la democracia, no sólo de extensión de sus aspectos formales y/o electorales.

partidario (Roitman 2005, 201-212), hasta culminar en aquello que llamaron “gobierno mío” (Illanes 2002, 161). Es más, es posible sostener que la concepción de democracia, entre los sectores populares, se amplió y profundizó durante la Dictadura, a la luz de sus prácticas autónomas de autogestión.¹⁷³ Las enseñanzas de la lucha antidictatorial proveyeron elementos para una conciencia de una democracia radical, porque “la experiencia de organización para resistir a la Dictadura fue *empoderante*, y fue un ejercicio de autogobierno” (Greaves 2002, 112, traducción propia). La comprensión popular de la democracia se transformó con el aprendizaje que los *pobladores* elaboraron de las experiencias colectivas de resistencia, de lucha y de construcción en la *población*. En esas experiencias, la mayor parte de las veces, las *élites* políticas y académicas habían estado ausentes de los procesos de organización y acción colectivas. En ausencia de una arena pública reconocida, ante la proscripción de los partidos políticos y del ejercicio político, frente al exilio y desbandada de una gran parte de líderes políticos, la acción social discurrió por otros derroteros, extrayendo valiosas lecciones: en esencia, una concepción de la democracia que vincula el régimen de gobierno, entendido en un sentido amplio, como participación activa y no solo “derecho a voto”, con la satisfacción de los derechos sociales básicos (Greaves 2002, 118). Todo lo contrario del giro que había dado el socialismo *renovado*, en su versión política y académica. Volvamos a los científicos sociales *renovados*.

Los transitólogos chilenos debieron definir cuáles eran los problemas fundamentales que la oposición debía resolver, de cara a la transición política, a saber: *qué actores políticos* –o no políticos, pero con un rol político en esa coyuntura– iban a jugar un papel relevante en la transición; *qué modalidades de acción política* debían privilegiar, cuáles subordinar y cuáles descartar, y *qué acontecimientos* constituirían los hitos políticos que marcaban el camino de la transición. Con base en lo anterior, concluyeron que los partidos políticos, las fuerzas armadas y la Iglesia debían ser los actores privilegiados; que debían combinar la movilización social con la negociación política, con fuerte preeminencia de la segunda; y que las fechas que establecía la propia Constitución *pinochetista* definirían la hoja de ruta. En definitiva, como ha señalado el historiador Mario Garcés (2012, 23), propusieron “una salida ‘a la chilena’, un pacto en las alturas, sin pueblo, para retornar y hacer posible el viejo ‘Estado en forma’ y una democracia restringida o, mejor aún, con realismo político”. Por eso, desde esta perspectiva, los estudios indagaron fundamentalmente las potencialidades de los actores sociales para coadyuvar a la recuperación de la democracia o, mejor, a la democratización política, esto es, a la recuperación de un régimen de partidos. En este sentido, su papel estaba claramente circunscrito y subordinado a la estrategia de los actores centrales del proceso: las élites políticas. Es en este contexto donde se ubican los análisis específicos acerca del papel que los

¹⁷³ Concepción que hundía su raíz en las prácticas de poder popular desplegadas durante la Unidad Popular.

movimientos sociales deberían desempeñar en la transición a la democracia, e implícitamente de lo que son o deben ser los movimientos sociales.

3.3.2. *La “columna vertebral” de la sociedad chilena y la “transición invisible”*

Con la Dictadura cívico-militar se cancelaron las *instituciones* y las *formas* que hasta ese momento habían constituido la democracia chilena; también se violó el *contenido* que había inspirado y encarnado las luchas democratizadoras en el pasado: los logros –contradictorios pero progresistas– de participación política, equidad económica y justicia social. Tanto en los hechos –clausura del Congreso, disolución de los partidos políticos *de izquierda*, de la CUT y de otras organizaciones populares, destrucción de los registros electorales, etc.–, como en el discurso, los militares se encargaron de poner de manifiesto su propósito de *despolitizar* la sociedad chilena y *desideologizarla* –al identificar ideología con marxismo–. La derecha –incluida la Democracia Cristiana– instigó y aplaudió el golpe de Estado, y consideró oportuna la prescindencia de los partidos políticos justo cuando “el proyecto democrático alcanzaba su naturaleza y entraba en su fase revolucionaria” (Illanes 2002, 156); y en sintonía con el mandato militar, el Partido Nacional se declaró en “receso político” y, poco después, se auto-disolvió (Valdivia 2006, 29-35).

Los militares consideraron necesario *formatear* la conciencia histórica, o de otra manera, “cambiar la mentalidad de los chilenos”, como estableció la *Declaración de Principios del Gobierno de Chile*, de 11 de marzo de 1974, y dar forma a una nueva sociedad. La *Declaración de Principios* es uno de los primeros documentos oficiales que da cuenta de la pretensión refundadora y totalitaria de la recién inaugurada empresa. Allí está formulada la clave, a nuestro parecer, del diseño institucional ideado por la Dictadura, que a la postre fue acatado y perfeccionado por la Concertación. Esa clave es la “descentralización funcional”:

La nueva institucionalidad que hoy se está creando distinguirá entre el poder político y el poder social, separando claramente sus titulares y su forma de ejercicio. El poder político o facultad de decidir en los asuntos de interés general para la nación, constituye propiamente la función de gobernar al país. El poder social, en cambio, debe entenderse como la facultad de los cuerpos medios de la sociedad para desarrollarse con legítima autonomía hacia la obtención de sus fines específicos (Junta Militar 1974, 8).

Los militares asumieron la plenitud del “poder político” y no estipularon plazos para devolverlo a los civiles porque, a su juicio, la meta “de reconstruir moral, institucional y materialmente al país, requiere de una acción profunda y prolongada” (Junta Militar 1974, 8). Con respecto al poder social, se impusieron la tarea de “asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado” (íd.). Con ello se establecía que el “poder político” debía descansar en una élite técnico-militar desgajada de los grupos sociales (bajos y medios); y que las organizaciones sociales (de existir) debían abocarse a asuntos *al margen* de la política. La escisión entre lo social y lo político,

o la política, implicaba también la reducción de la política a lo estatal –por lo demás, una formulación tradicional– y, lo que es más novedoso, una concepción no *conflictiva* de la misma, esto es, la presunción de que la actividad política al autonomizarse de la sociedad exorciza la posibilidad del antagonismo entre intereses distintos; así, la política quedaba restringida a la mejor “administración de lo dado, de lo instituido” (Retamozo 2009, 81) por parte de un “gobierno impersonal” que se arrogaba la potestad de decidir sobre la procura “del bien común y de la justicia”, “por encima de todo grupo particular de cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias” (Junta Militar 1974, 6).

Las transformaciones introducidas por los militares alteraron la forma tradicional de articulación de los distintos actores socio-políticos.¹⁷⁴ Según Garretón, la persecución y represión de cualquier forma de expresión política, quebró la “columna vertebral” de la sociedad chilena, esto es, la forma clásica de relación entre la sociedad y el Estado –o la política– (Garretón 1987b). De manera más concreta esa relación se había caracterizado, a juicio del sociólogo chileno, por el hecho de que los actores sociales se constituían en estrecha vinculación con la estructura política, definida por la existencia de un espectro político de carácter nacional, esto es, la representación de distintas orientaciones político-ideológicas en organizaciones políticas de alcance nacional; la imbricación de las organizaciones sociales con la estructura política partidaria, de lo cual dependía su alcance y significación; una relativa debilidad y dependencia de las organizaciones autónomas de la sociedad civil; un proceso de *democratización sustantiva* realizado a través del sistema político democrático formalizado, que no logró la cooptación ideológica de los sectores populares integrados, por lo que aun siendo integrados siguieron manteniendo ideologías políticas radicales de revolución; y una adhesión fundamentalmente de tipo instrumental al régimen democrático. De esa vinculación dependía el alcance y la significación de las organizaciones sociales, hecho que redundaba, a su vez, en una escasa autonomía y mayor dependencia de las mismas con respecto de los partidos políticos. Todo ello determinaba que “hacer política en Chile consistía en organizar una base social vinculándola a la estructura partidaria y presionar sobre el Estado” (Garretón 1982). Ello provocaba que no existieran actores sociales autónomos, pues si existían actores sociales eran porque “dependían” de un partido, de lo contrario, su marginación determinaba su debilidad e incapacidad de actuar; dicha debilidad, esto es, su extrema dependencia del sistema partidista, desapareció con aquél, durante la Dictadura militar.

Según esta interpretación, el sistema de partidos constituía la “columna vertebral” de la sociedad chilena hasta el momento del golpe de Estado: “Es decir, los movimientos ‘dentro’ del sistema político partidario y no ‘frente’ o al margen de él. Es lo que hemos llamado la imbricación del sistema partidario con la organización social o, hace mucho tiempo, el sistema partidario como ‘columna

¹⁷⁴ Las principales transformaciones se conocen como las “siete modernizaciones”, anunciadas por Pinochet en 1979 y que constituían el programa esencial del neoliberalismo que los *Chicago Boys* buscaban implementar en Chile. Se trata de reformas que afectaban a siete áreas básicas: política laboral, seguridad social, educación, salud, descentralización regional, agricultura y aparato judicial.

vertebral' de la sociedad" (Garretón 2014, 216). La articulación entre Estado, partidos políticos y base social, determinaba la forma particular de constitución y configuración de los actores sociales, de los movimientos sociales, y en general, la relación específica entre política y sociedad (Garretón 1987b). Si aceptamos –sin conceder– que aquélla haya sido la forma prioritaria de construcción de actores socio-políticos durante el período predictatorial, lo cual habría impedido una mayor autonomía de éstos, tanto en sus formas como en sus fines, es evidente que durante la Dictadura esa dependencia fue segada de tajo. Al cercenar el “estamento” intermedio (la estructura partidaria), que funcionaba como *correa de transmisión* de los actores sociales hacia el Estado –y viceversa–, la base social quedó descolgada, incapaz ya de dirigirse al Estado por los canales y formas tradicionales, desarticulada y atomizada; y el Estado, cuyo rol anterior lo constituía en el más importante agente distribuidor y ordenador de la vida social y económica, en una posición ambigua, dado el poco peso teórico que le otorgaba el modelo neoliberal implementado a partir de 1975¹⁷⁵ y, en contraposición, el gran *poder concentracionario* (Calveiro 2006) y terrorista que desplegó a lo largo de los 17 años que duró la Dictadura. Así, la base social fue sometida a una *autonomización* forzada y se vio obligada a *actuar por sí misma*, sin estructuras mediadoras y sin posibilidad de interlocución con el Estado: “Precisamente en las peores condiciones, parecen darse elementos que apuntan a la construcción de actores populares autónomos que si bien inicialmente reproducen en una nueva arena la vinculación político partidista, poco a poco adquieren dinámicas propias” (Garretón 1987b, 10-11). Frente a la tensa y dificultosa independencia que las experiencias de *poder popular* trataron de cultivar durante la UP, la mayor autonomía de los actores sociales provino de un proceso contrarrevolucionario, de la represión y de la fragmentación social. Por ello Garretón se preguntaba: “¿Se trata de un proceso de organización social transitorio en que predominan los aspectos defensivos de la organización frente a un mundo que se rechaza y la rechaza? ¿Están condenadas a morir *cuando lo político reaparezca* y en un futuro democrático?” (1987b, 11, cursivas mías).

“Cuando lo político reaparezca” es la consideración clave. Paradójicamente, la consideración de la mayor autonomía relativa de los actores sociales no suponía atribuirles un carácter político, porque lo político siguió interpretándose, desde esta perspectiva, en un sentido tradicional y restringido, como lo partidario y lo estatal, como una esfera específica separada de lo social. Porque si las organizaciones sociales eran *autónomas*¹⁷⁶ o habían ganado en autonomía de los partidos políticos, ¿no significa eso que habían comenzado a tomar en sus manos la resolución de los problemas propios que antes delegaban en el Estado por intermedio de los partidos

¹⁷⁵ Que fue contestado, sin embargo, en los hechos, con políticas activas en favor de la reestructuración capitalista. Contrariamente a la imagen de un Estado “arbitro”, con poca injerencia, lo que tenemos es un Estado neoliberal, basado en el principio de subsidiaridad.

¹⁷⁶ Entendiendo la ‘autonomía’ como una relación con uno o más elementos con los que resulta indispensable relacionarse, y que en dicha relación producen un influjo, una incidencia o un condicionamiento mayor o menor, por lo que la autonomía siempre es relativa, expresa grados de independencia con respecto a otros actores y procesos, nunca un absoluto.

políticos? ¿No indicaba que estaban hablando y actuando *con voz propia* en lugar de cedérsela a los líderes de los partidos políticos? Y eso ¿no implicaba que habían iniciado la *reapropiación de lo político*, la reunificación de lo social y lo político? Garretón no puede leer el proceso así porque sigue aplicando el mismo esquema de análisis a la configuración de actores sociales que había primado durante la breve “democracia” chilena. Esquema que escinde lo social y lo político. Lo primero, lo social, aparece entonces como una *masa* estadística, un conjunto de sectores y estratos diferenciados en función de su ubicación en la estructura económica, un magma de individuos a ser ordenados, clasificados y movilizadas; lo segundo, la política, es atribución exclusiva de los partidos políticos y del conjunto de dirigentes y líderes abocados a la dirección de las masas. Durante la Dictadura, la desaparición de la estructura político-partidaria legal y la fragilidad de los partidos políticos, obligó a leer las movilizaciones sociales como acciones más *autónomas*, pero carentes de dirección e intencionalidad política, lo cual nos parece un sinsentido.

Las movilizaciones y luchas sociales en ese contexto habrían tratado de llevar a cabo, a juicio de Garretón, una “transición invisible”, independiente de la transición política, de la transición a la democracia que protagonizó la coalición de partidos que conformó la Concertación. El concepto de transición invisible es empleado por el autor para dar cuenta, con anterioridad a la emergencia masiva y pública de las protestas y movilizaciones sociales populares a partir de 1983, del proceso de “recomposición y reorganización de sujetos y actores colectivos” (Garretón 1987c, 3) desarrollado de manera local, “fragmentaria” e invisible, es decir, sin repercusiones a nivel público, por distintos grupos en sus respectivos lugares de trabajo, estudio y residencia. Para Garretón, el proceso de transición requiere inevitablemente, como un componente definitivo, de la negociación o concertación entre los representantes del régimen militar y los “líderes políticos” de la oposición. Sólo este tipo de proceso produce el fenómeno de la transición política. Para ello, las movilizaciones y protestas sociales populares son importantes, igual que otras “figuras” como la descomposición interna de la Dictadura o la intervención de actores mediadores por encima o por fuera de la Dictadura y de la oposición, como bien pueden ser la Iglesia u organizaciones internacionales. Entonces, las movilizaciones por sí mismas no constituyen una estrategia de transición, pueden coadyuvar a una vía insurreccional, o a una estrictamente política, en cuyo caso requerirán de la *conducción* política: “Así, en transiciones políticas, la relación entre movilización popular y negociación política adquiere un carácter crucial y definitorio en toda estrategia opositora” (Garretón 1987c, 9). Veamos de qué manera se articulan movilización y negociación en la perspectiva transicional.

3.3.3. *La democracia política contra la democratización social: la subordinación de los movimientos sociales*

Para la transitología, que devino el pensamiento oficial de la oposición a la Dictadura que optó por la negociación, la movilización social cumple un papel menor porque la transición se refiere *sólo* al cambio de régimen, en el que las élites políticas desempeñan el papel principal. Algunos, incluso, han llegado a sostener que su repercusión fue absolutamente irrelevante, cuando no contraproducente: “Los movimientos populares no han tenido ningún papel en la caída de las dictaduras” (Touraine 1987c, 218-219). El sociólogo francés ratificó esta opinión dos años después, atribuyendo la incapacidad de los movimientos de resistencia de derrocar a la Dictadura a su supuesto carácter infra-político (1989, 243). Para hacer operativa y justificar esta opinión se emplearon diversos mecanismos; uno de los más importantes fue *escindir la democracia en dos dimensiones: una política y otra social*, subordinando la segunda a la primera, conceptual y temporalmente. Esta operación fue posible por la *reducción* que la sociología *renovada* había hecho del concepto de democracia. De esta manera, la democracia, que para el imaginario de izquierda había aunado en un mismo concepto los designios de mayor participación política con el propósito de suprimir la explotación laboral –o en el peor de los casos, distribuir de forma más equitativa la riqueza producida socialmente–, fue vaciada de esta última connotación. Por democracia debíamos entender exclusivamente un régimen político organizado conforme a determinadas reglas del juego: elecciones libres y regulares, sistema de partidos políticos vigente y funcional, instituciones políticas tradicionales emanadas de la representación, libertad de expresión, etc.

La transición a la democracia fue pensada, en consecuencia, como la recuperación exclusivamente de la *forma* de la democracia. De ahí que fuera necesario apartar de la discusión y de la protesta cualquier aspecto que tuviera relación con el *contenido*, esto es, con el modelo económico, social y cultural, so pretexto de comprometer la meta de la mudanza de régimen político. Así, se construyó un modelo explicativo de la transición que sancionaba y dotaba de “cientificidad” la escisión entre lo social y lo político, y que consistía en separar la *democracia política* de la *democratización social*, sosteniendo que “las transiciones políticas dejan pendientes los problemas de *democratización social* [...] y ésta pasa a ser, como hipótesis general para este tipo de países, una de las condiciones de la consolidación democrática” (Garretón 1991a, 104, cursivas mías).

De suyo es que esta construcción conceptual contribuye a relevar el papel de las élites políticas en detrimento de los sectores populares o, de otro modo, de los partidos políticos, menoscabando a los movimientos sociales. En los trabajos referidos a los problemas de la transición, las protestas y las movilizaciones sociales ocupan un lugar menor, como la propia relevancia conceptual que les concedió la sociología dominante. La sociología *transicional* se interesó en las movilizaciones sociopolíticas desde el punto de vista de su capacidad para contribuir a la recuperación formal-democrática. De acuerdo con las premisas

referidas más arriba, “no cualquier movilización en cualquier momento es funcional a un proceso de transición política” (Garretón 1986a, 7). De ahí que fuera necesario realizar unas y anatemizar otras. Entre las luchas que no se consideraban convenientes se encontraban aquellas que se insertan en procesos defensivos o de *autoafirmación de identidad*, las que se ubican en la *dimensión revolucionaria* y las que apuntan a la *democratización global*, según las propias caracterizaciones de Garretón. Cabe hacer notar que la mayoría de las movilizaciones y protestas que habían tenido lugar entraban dentro de alguna de estas categorías, como resultado precisamente de la fractura violenta de la “columna vertebral” de la sociedad chilena.

Tanto el largo ciclo de las protestas que, pese a haber despertado y reorganizado la sociedad, terminó desgastado, como las movilizaciones de 1986, acusaron el mismo defecto: no se insertaron en un diseño y propuesta de cambio y transición coherente y unitario *de las fuerzas políticas que la dirijan* (Garretón 1987a, 8).

Frente a aquellas lógicas de acción, Garretón contraponía acción “instrumental, racional, orientada hacia el uso de la institucionalidad y la concertación en torno a metas precisas” (Garretón 1987d, 17). Coexistían, pues, dos orientaciones disociadas: una propiamente *racional*; la otra, *simbólico-expresiva*. Encarnadas por actores distintos, que eran la expresión palmaria de la ruptura de la matriz socio-política clásica: “La primera queda entregada a cúpulas y organizaciones políticas que no logran convocar movilizaciones amplias. La segunda a sectores motivados y activados que no saben cómo transformar una fuerza *social* en fuerza *política*” (ibíd.: 17-18, cursivas mías). Pero lo cierto es que “las negociaciones y concertaciones en el nivel de las cúpulas y de las élites tienden a reemplazar las movilizaciones sociales durante la transición democrática y los procesos de consolidación” (Garretón 1996). Ante esa realidad, una de las preocupaciones del sociólogo era, precisamente, “evitar la polarización y el desborde institucional” que podían propiciar los grupos no funcionales a la transición política poniendo en aprietos los pactos entre élites (Garretón 1986a, 17).¹⁷⁷

En efecto, esta diversidad de oposiciones, que se relaciona con la multidimensionalidad de las luchas contra la Dictadura, planteaba un difícil desafío a los grupos de la oposición que entendían la transición en un sentido *exclusivamente* formal, pues según el sociólogo “en parte, la aceleración de un proceso de transición depende de la capacidad de los componentes de la oposición de *aislar y priorizar* la dimensión de transición política en relación a las otras” (Garretón 1986a, 2-3, cursivas mías). Ese proceso se precipitó, ciertamente, después del fracaso de la “Operación Siglo XX”, el atentado contra Pinochet protagonizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tras el cual Garretón se apresuró a

¹⁷⁷ Se actualizaba, así, el problema de los “desbordes institucionales” y de la “conducción política”. Las fallas en la conducción política por parte de la Unidad Popular, es una de las hipótesis aceptadas tanto por la derecha como por los partidos de ese conglomerado –desde una perspectiva partidista y elitista– sobre la responsabilidad que le habría cabido a ésta en el advenimiento del golpe de Estado.

señalar: “Es irreal pensar que podrá haber una transición por la vía de la sublevación o insurrección” (Garretón 1986b). Además de las organizaciones político-militares, otros sectores planteaban dificultades a la plena aceptación de la negociación, por ejemplo, aquellos que seguían insistiendo “a menudo en temas del futuro que dicen relación con los modelos económicos o sociales, que sólo empantanar un acuerdo que debe excluir todo contenido que no sea el cómo se resuelve el problema de quién y cómo gobierna la sociedad” (Garretón 1987a, 13). Ése era, a su juicio, el problema esencialmente político. El predominio del formalismo en su propuesta permite pasar por alto que los mecanismos por los cuales se decidiría quién y cómo se gobierna la sociedad constituía un asunto excluido del ámbito de decisión general. Por eso acatar la Constitución de 1980, que definía esas cuestiones, suponía en el fondo amoldarse a la institucionalidad dictatorial.

La política de sublevación popular del PC, las acciones armadas del FPMP, pero también las reivindicaciones y prácticas radicales (que decían relación con el contenido de las propuestas) de muchas organizaciones sociales suponían un escollo para la transición pactada a la democracia. La disputa por la orientación y conducción de la oposición alcanzó un punto álgido precisamente después del frustrado atentado a Pinochet. Entonces, el demócratacristiano Alejandro Foxley acusó al PC –y también a Pinochet– de desmovilizar a Chile y estableció en qué radicaban las diferencias entre ellos y los comunistas:

La Democracia Cristiana ha dicho que no va integrar ninguna coalición con el PC, porque tiene discrepancias en los métodos y en el objetivo final que el PC quiere alcanzar, que es distinto al nuestro. Nosotros queremos una democracia pluralista con un sentido de justicia social y de cambio social, cosa muy distinta a una “democracia avanzada” (Foxley 1986, 8).

El carácter de *significante flotante* del término “democracia” se aprecia aquí con toda nitidez: la contraposición entre una “democracia pluralista” y una “democracia avanzada” da cuenta de la disputa por llenar de contenido un concepto que a estas alturas ya se había convertido en la bandera aglutinadora de la oposición a la Dictadura, pero que la línea política del PC y, más ampliamente, del Movimiento Democrático Popular (MDP) disputaba a la orientación elitista y negociadora de la Alianza Democrática.¹⁷⁸ No obstante, el demócratacristiano diluía el carácter de esa disputa de significados; así, al ser interrogado acerca de la cuestión de si plegarse a los términos de la transición establecidos en la Constitución de 1980 suponía una oportunidad para reformar, desde dentro, dicha legislación o, por el contrario, la vía de “entrada” al régimen dictatorial, Foxley argumentó que “esa es una distinción

¹⁷⁸ En su mea culpa posterior Moulian reflexionará en este sentido: “Primero hay que preguntarse si esta transición realmente existe en cuanto a transición del autoritarismo a la democracia; yo creo que lo que aquí hemos tenido es *una transición del autoritarismo a un orden institucional representativo que es algo distinto de una democracia*, entonces esto no es, esto es una confusión permanente en Chile. Constantemente hablamos de nuestra tradición democrática porque constantemente confundimos democracia con estabilidad política, con orden constitucional representativo, pero que no necesariamente es democrático” (Moulian 2000, 49, cursivas mías).

puramente semántica. Lo que interesa es iniciar un proceso de cambio. La forma cómo se inicie no es importante; lo fundamental es el objetivo final: instaurar una democracia plena” (Foxley 1986, 7). A juzgar por sus palabras pareciera que efectivamente la “forma” no era importante, pero inmediatamente después sostenía que en ese proceso de cambio “los partidos deben ser fundamentales” y que las movilizaciones son importantes pero requieren *conducción política*.

De esa manera, excluir, desdeñar y subordinar a los movimientos sociales no significaba *prescindir* completamente de ellos, sino incorporarlos de manera *dependiente y subordinada* a la estrategia política diseñada por las cúpulas políticas y los intelectuales asociados. Para los teóricos de la transición, “la relación entre movilización popular y negociación política adquiere un carácter crucial y definitorio en toda estrategia opositora” (Garretón 1987c, 9). La negociación con los militares podría realizarse desde una mejor posición si había *detrás* un fuerte movimiento social que presionara y amenazara incluso con radicalizar la protesta, pero que fuera en última instancia controlable por los dirigentes políticos. El reto entonces estribaba en saber “combinar los elementos de movilización y presión social, negociación y concertación y presión de instancias mediadoras o arbitrales” (Garretón 1986a, 5).¹⁷⁹ Y es que, a su juicio, sólo esa combinación es capaz de producir un fenómeno de transición política.

Una vez legitimada la escisión entre movimientos sociales y partidos políticos, la relación adquiere la forma de un juego de suma cero: más de lo uno significa menos de lo otro. Aparentemente la relación entre partidos políticos y movimientos sociales habría presentado históricamente, en el caso chileno, esa peculiaridad; sin duda uno de los esfuerzos más radicales por superar la escisión entre lo social y lo político habían sido los gérmenes de poder popular construidos por los trabajadores y *pobladores*, desde finales de los sesenta y hasta el golpe de Estado. Pero salvo esas experiencias, que adquieren la condición de excepciones, podríamos decir que, desde los años veinte, la transformación de la sociedad casi siempre se pensó desde el partido, *instrumentalizando la protesta y la movilización social*, con lo que medios y fines se invirtieron: el partido (y la política) tendió a autonomizarse de las comunidades, de los sindicatos, de los movimientos sociales.

La centralidad del Estado y de los partidos políticos en la constitución de las subjetividades políticas y de las movilizaciones sociales constituye una de las tesis centrales de la sociología política chilena.¹⁸⁰ Ya hemos visto que, para Garretón, la

¹⁷⁹ Foxley plasmaba esta oposición en la siguiente declaración: “La DC cree en la presión social como un instrumento para negociar con las FF.AA., y para esto es necesario una concertación política muy amplia, de tal modo que el país pueda enfrentar el periodo posterior a Pinochet en forma estable y ofreciendo garantías que los intereses mayoritarios del pueblo de Chile, van a estar representados en ese gobierno. [...] creo que se hace difícil movilizar a un país cuando esa movilización puede ser utilizada por un partido, el PC, que para conseguir sus fines introduzca medios de lucha que la DC no comparte” (Foxley 1986, 8).

¹⁸⁰ A nuestro juicio esta tesis, aun siendo verdad en gran medida, desconoce otras formas de subjetivación política y de compromisos que no pasan por los partidos políticos. Illanes (2002, 154) aporta elementos para proponer otra mirada: “En una encuesta realizada por la revista *Ercilla* a 1000 jóvenes entre 16 y 18 años el año 1968, se les preguntó qué era lo que más les avergonzaba de ser chilenos.

política consistía en organizar un partido y dirigirse al Estado. De acuerdo con Lechner (1989, 99) “podría afirmarse que chilenos y chilenas se reconocen entre sí públicamente a través de los partidos. Ello ayuda a explicar la fuerte identificación y lealtad a los partidos. Éstos no son algo externo, simples instrumentos de acción, sino una expresión ‘existencial’ –la existencia pública de la subjetividad”. Por su parte, Guerrero (2000, 147) señala que “los partidos han tendido históricamente a dominar a los movimientos. Los líderes de los movimientos son frecuentemente militantes de partidos, por lo que los partidos han tenido facilidad de influir en las estrategias, las tácticas y objetivos de los mismos”. Por eso Moulian advierte de los riesgos del predominio de los partidos:

Yo creo que la estructura central de la lucha política de masas en Chile son los partidos, pero ellos tienen que estar constantemente en relación con movimientos sociales, no tienen que impedir que surjan, no tienen que manipularlos cuando surjan y tienen que estimularlos cuando no surgen. Porque los puros partidos pueden dar lugar a procesos de democratización muy problemáticos (Moulian 2008, 171).

La tradicional preeminencia del partido político, de la disputa electoral y del juego parlamentario, en los procesos de subjetivación política, contribuye a sostener el argumento *transitológico* que reafirma y legitima la escisión entre lo social y lo político, porque las movilizaciones sociales –de tipo expresivo-simbólico o de corte instrumental-reivindicativo– son concebidas como carentes de proyecto, y en cambio la “movilización propiamente política” (Garretón 1986a, 7) se presenta como la única que “se guía por metas y métodos referidos al término y cambio del régimen militar” (íd.). Por lo tanto, es ésta la única que tiene una estrategia, a la cual se deben sujetar las otras. La política discurre exclusivamente por los cauces de los partidos políticos; así lo social aparece como carente de dimensión política pero, además, la política se circunscribe a las acciones moderadas, institucionales, de negociación y pactos cupulares.¹⁸¹ Esta política debía *disciplinar* a lo social:

En relación al orden social, el fin de la fase de movilización social, marcado por el fracaso del intento populista de la “Demanda de Chile” formulada por la Asamblea de la Civilidad, radicó definitivamente en los partidos políticos la conducción de la oposición. Las organizaciones sociales reconocieron la primacía de lo político, pasando a apoyar la nueva estrategia político-electoral de naturaleza eminentemente conciliadora en el plano social (Boeninger 1997, 370).

La Asamblea de la Civilidad fue una instancia multisectorial creada en 1986, tras un ciclo de protestas y movilizaciones dilatadas y sostenidas desde 1983; sustituyó

Respondieron que el subdesarrollo, la miseria, la explotación, la dependencia. Curiosamente sólo 31 de los 1000 militaban en algún partido, mostrando gran consenso en el rechazo hacia dichos partidos”.

¹⁸¹ Recuérdense los reiterados reproches de la Democracia Cristiana y del socialismo *renovado* al PC que, con todo y ser partido, no se plegaba en los ochenta a las directrices de la *transacción*. Por eso, en cierto sentido, la contraposición movimiento social-partido político esconde el giro conservador de los partidos que, reclamándose expresión de los anhelos populares de democracia, habían modificado radicalmente su proyecto político.

a la anterior instancia de coordinación de la oposición sociopolítica –el Comando Nacional de Trabajadores– y fue la más amplia agrupación de los movimientos sociales y organizaciones gremiales en la lucha antidictatorial. Sin embargo, la vida de la Asamblea fue corta; en su seno se escenificaron las tensiones entre lo social y lo político. Algunos sectores partidistas fueron contrarios a su creación por considerar que podía desviar a la oposición del objetivo prioritario, que era el plebiscito en el que los partidos políticos tenían un rol protagónico, por lo que, desde un inicio, trataron de controlarla y, finalmente, lograron desactivarla. A juicio de estos sectores: “La Asamblea de la Civilidad ha mostrado una notable capacidad de conducción, pero también ha dejado en claro, con toda franqueza, sus límites. La resolución de éstos es responsabilidad de los partidos políticos” (Maira 1986).

Otro de los espacios que permiten ejemplificar las tensiones entre las prioridades del movimiento y las lógicas de los partidos políticos fue el Congreso Unitario de Pobladores (CUP), que se llevó a cabo en abril de 1986 y en cuya organización confluyeron algunos de los principales “referentes” partidarios de los *pobladores* –correas de transmisión de los partidos en las poblaciones, fueron llamadas por algunos–: el Movimiento Poblacional Dignidad, la Coordinadora Metropolitana de Pobladores (METRO), y la Coordinadora de Agrupaciones Poblacionales (COAPO). En el Congreso pesaron más los intereses partidarios que la voluntad originaria de constituir un órgano representante elegido democráticamente para una nueva organización intermedia, provocando la frustración de gran parte de los delegados asistentes (Oxhorn 2004, 73-74). Dos años más tarde, en la coyuntura ya del plebiscito que debía decidir la continuidad de Pinochet, se vivieron nuevas confrontaciones:

Las tensiones entre el naciente movimiento social popular y los partidos políticos llegaron a su punto más álgido en junio de 1988, cuando los líderes del CUP [Comando Unitario de Pobladores] desobedecieron a los partidos y organizaron una segunda Marcha contra el Hambre, bajo el argumento de que podría ayudar a consolidar la autonomía del movimiento popular. La dura lección sacada de 1986 les llevó a priorizar su rol de líderes sociales por sobre su rol de militantes políticos. Esperaban que el fortalecimiento del movimiento popular obligara a los partidos políticos a aceptar su decisión. Sin embargo, éstos reaccionaron rápidamente, negando recursos y reconocimiento partidista al movimiento. Incluso redistribuyeron a docenas de líderes del CUP en actividades políticas fuera de las poblaciones. En un plazo de seis meses, el CUP había dejado de existir (Oxhorn 2004, 75).

La condición que sobresale en estos ejemplos es la escisión esencial que se produce entre los dos tipos de procesos –el de movilización y el de negociación/concertación– y los grupos que los llevan a cabo, lo que redundó en que los sectores que se movilizaban en la lucha contra la Dictadura fueran a la postre subordinados a los tiempos y prioridades definidos por las cúpulas políticas. De ahí que esta mirada descuidara, en general, el análisis de los movimientos sociales, y que al abordarlo, su investigación derivara en dos conclusiones negadoras: o bien les regateó el carácter de movimiento social, confinándolos a la

condición de actitudes anómicas y desviadas, o bien argumentó la necesidad de que se subordinaran a la maniobra política definida por las cúpulas partidarias, exigiendo “una estrategia política coherente que [...] debe ser orientada a las negociaciones y las mediaciones institucionales, *subordinando y orientando así las varias expresiones de protesta popular*” (Garretón 2001c, 310, cursivas mías). Para justificar este disciplinamiento de los movimientos sociales el sociólogo apela a un imperativo táctico: “El éxito de la unidad y la predominancia del factor político-partidario, tiene como contraparte, *quizás i nevitabile*, el decaimiento del movimiento propiamente social, lo cual también tendrá efectos en el carácter del primer gobierno democrático” (Garretón 1993b, 11, cursivas mías).

Una vez acatado, por las élites políticas *renovadas* y conservadoras, el derrotero electoral propuesto por Pinochet, el plebiscito de 1988 se presentaba como la fecha clave para la oposición, y ése era “un escenario apto para los partidos, no para los movimientos sociales” (Tironi 1987b, 17), así pues, la oposición debía “reconocer la transición como un momento político, que requiere de una *(momentánea) desarticulación entre lo político y lo social*” (íd., cursivas mías). Esa disociación no fue momentánea; como hemos tratado de reseñar hasta aquí, está en la concepción misma de la política, forma parte del modelo de sociedad diseñado por la Dictadura, que acató la Concertación de Partidos por la Democracia.¹⁸² Por eso “la democracia se ha convertido en un medio eficaz para la contención y disgregación del movimiento social. Más eficaz que los gobiernos militares, más eficaz que la totalización de lo social bajo las consignas de algún doctrinarismo ideológico” (Pérez 2014, 1). De esa manera, estamos ante “una izquierda que ha neoliberalizado la sociedad chilena y al neoliberalizarla en democracia le ha aumentado la legitimidad al neoliberalismo” (Moulian 2008, 173);

¹⁸² Cabe señalar que la coalición es, sustancialmente, una *concertación p olítico-partidista*, aunque inicialmente también se sustentara en organizaciones sociales y amplias mayorías ciudadanas. En este sentido, la exclusión del PC de la Concertación fue advertida como un riesgo de desestabilización, en la medida en que “plantea el problema del posible resurgimiento de las tendencias más radicalizadas y exige repensar las formas de canalizar o integrar lo que se ha llamado ‘cultura comunista’, claramente minoritaria, pero aún significativa” (Garretón 1990, 14). La misma opinión sostenía Foxley, para quien “es absolutamente desafortunado para el país que exista un partido, el Partido Comunista, que en lugar de marchar en el sentido de la historia aparece embarcado en una estrategia de apoyar todas las formas de lucha, las cuales conducirían en un escenario de sublevación popular a una *democracia avanzada* con miras al socialismo. Esto introduce una brecha muy grande en la oposición y sin duda contribuye a disminuir la capacidad de presión social” (Foxley 1986, 8, cursivas mías). Y agregaba que “el PC tiene el pleno derecho, si acepta las reglas del juego democrático, que están diseñadas en el Acuerdo Nacional, a participar en plenitud de la vida democrática. Más aún: creo que la única solución sana para el país es que todas las fuerzas políticas estén incorporadas en el juego democrático” (íd.). De lo contrario, el PC “quedará aislado en el espectro político chileno por ahistórico y por ir en contra de la corriente fundamental de la historia y del cambio en Chile” (íd.). Las declaraciones de Foxley constituyen una joya discursiva por presentar, sintéticamente, las principales estrategias de naturalización de las opciones políticas propias y de atribución de irracionalidad y sinsentido a las opciones políticas que disputaban el sentido de la democracia. Desde esta perspectiva, la reciente incorporación del PC a la Nueva Mayoría puede ser leída como el cierre del compromiso de la cúpula política-partidista con la transición pactada; mantenerlo fuera de los acuerdos de Gobierno supone marginar a un actor que puede desde la lucha socio-política dificultar la gobernabilidad. Por eso, para los transitólogos, “el regreso pleno de los comunistas a la arena democrática no es una amenaza. Al revés, es un signo positivo para una sociedad que necesita institucionalizar sus conflictos” (Tironi 2013).

y más aún, ha dotado de legitimidad teórica y práctica, la escisión entre lo social y lo político, y la subordinación de lo primero a lo segundo. Los propios sociólogos que legitimaron la escisión lo han reconocido:

Ello confiere a los actores políticos, en el gobierno y la oposición, roles claves en la acción social subordinando, de esta manera, los principios de acción de otros actores a su propia lógica. A su vez, las tareas relacionadas con el proceso de consolidación privilegiaron, al comienzo, las necesidades y requerimientos del ajuste y estabilidad económicos desincentivando, así, la acción colectiva que se pensaba ponía en riesgo tales procesos. Como resultado, se produce un cierto grado de desarticulación y desactivación de los movimientos sociales (Garretón 1996).

Frente a consideraciones “idealistas” o “éticas”, la transitología propuso optar por el pragmatismo porque “en política, a partir de la gran visión de lo que se quiere, hay que transformar la hipótesis de probabilidad real de lo que se desea en diseño y compromiso efectivo de acción, sin concesiones a lo que uno hubiera deseado en abstracto” (Garretón 1987a, 2). Paradójicamente, el sociólogo –sin que mediara acto de contrición– habría acusado, recientemente, el predominio en la Concertación de un alma:

Pragmática, que expresaba la postura de no entrar en las discusiones, de evitar una desestabilización económica, de tomar las correlaciones de fuerzas como algo dado, de emprender todas las transformaciones posibles pero no avanzar sin negociar con la derecha, de no alentar movilizaciones (Garretón 2012).

En definitiva, en la década de los ochenta, se ensayaron dos alternativas para poner fin al régimen dictatorial: una se apoyaba en la participación popular y buscaba una salida que permitiera no sólo acabar con un modelo político tiránico sino también revertir las transformaciones económicas implementadas desde el golpe de 1973; el otro apostaba por una negociación con los militares y con la derecha política, que garantizara el traspaso del Gobierno de manera ordenada, dejando intactos los aspectos económico y social, sometiéndose a los plazos y formas fijados por la Constitución de 1980, para lo cual debía controlar, subordinar y encauzar las protestas de los sectores populares. Los propios defensores y protagonistas de la transición pactada, reconocieron años después, en medio de una crisis política de la Concertación, la existencia de esas dos alternativas, en los siguientes términos:

Dentro de la oposición de entonces se perfilaron nítidamente dos estrategias enfrentadas para cumplir este propósito: una que buscaba un camino político, pacífico, de superación de la dictadura; y otra que sostenía la estrategia del derrocamiento por todos los medios, relevando el papel de la “violencia”. [...] Resultó exitoso el camino político, que se expresó primero en la Alianza Democrática y después en la Concertación (*La gente tiene la razón* 2009, 44).¹⁸³

¹⁸³ La cita proviene del manifiesto *La gente tiene la razón* dado a conocer en 1998, firmado, entre otros, por los sociólogos Manuel Antonio Garretón y Guillermo Campero.

En opinión del historiador Gabriel Salazar, la escisión de la oposición a la Dictadura habría sido el resultado de la acción deliberada de los propios militares; y, a posteriori, como consecuencia de la fractura en el seno de la oposición, el sector *renovado* habría elaborado una “teoría” para justificar dicha división:

La táctica del repliegue militar comenzaba, de ese modo, a construir uno de los más brillantes éxitos políticos de la dictadura: el desdoblamiento de la oposición antidictatorial en dos frentes diferenciados, y en dos movimientos sociopolíticos distintos. La diferenciación de los frentes, al producirse, abrió la necesidad correlativa de justificar las diferencias, analizar “el escenario”, y elaborar la teoría del acceso eventual al poder. El movimiento mesocrático, tradicionalmente capacitado para satisfacer tales necesidades, comenzó a elaborar sus discursos, y desde 1984-85 evacuó una completa teoría sociopolítica acerca de la “transición chilena a la democracia” (G. Salazar 2006, 303).

A nuestro juicio, la división de la oposición en dos alternativas no se explica exclusivamente por la estrategia “política” de los militares, sino por el proceso de autoinculpación en el desenlace del golpe de Estado y de *renovación* de una parte de la “izquierda” anterior a 1973. Ciertamente, la apertura –muy limitada y conflictiva, como pusieron de manifiesto las dificultades de la “primavera de Jarpa”– del espacio de “negociación” por parte del dictador, reforzó las tensiones y fracturas en el seno de la posición, que derivaron en un mayor distanciamiento. Pero la producción teórica de los sectores *renovados*, con anterioridad incluso a la emergencia de las Jornadas de Protesta Nacional (por ejemplo, durante el encuentro de Chantilly) pone de manifiesto una reinterpretación de la política y de la democracia que legitimaba la escisión entre lo social y lo político, y que acercaba a esos sectores a la vertiente más conservadora de la Democracia Cristiana. Por eso:

Al inaugurarse la democracia política en Chile se estaba en las puertas de una democratización política exitosa, resolviendo el gran problema histórico de este siglo que llevó al derrumbe democrático: la ruptura entre clases medias y sectores populares, entre el centro y la izquierda, es decir, entre quienes pueden asegurar democracia política y cambio social. La Concertación de Partidos por la Democracia, sus candidaturas presidencial y parlamentarias, su programa de gobierno, eran expresión de esta posibilidad (Garretón 1993b, 28-29).

La complacencia de Garretón encubre el hecho de que la reunificación del centro y la izquierda se da sobre la base de negociaciones cupulares, desconectadas de las reivindicaciones y de la experiencia de las bases sociales, de la mano de partidos políticos que sancionan la subordinación de los movimientos sociales, y que por esa vía se van autonomizando y vaciando de contenido y de sentido histórico. Esa alianza, a la postre, no aseguró democracia política y, menos aún, produjo un cambio social.

3.3.4. La autonomización de la política

El análisis que realizaron las ciencias sociales, en su proceso de *renovación*, de las “causas” que llevaron al golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y, por esa

vía, el balance que hicieron del período de la Unidad Popular, ha estado enfocado en (y desde) los problemas de la élite política, expresados en el Gobierno, en las contradicciones entre los partidos políticos que conformaban la coalición, y en el Parlamento, en las tensiones entre los distintos grupos parlamentarios. Ha sido un análisis que ha privilegiado o aislado los factores estrictamente “políticos” (en el sentido restringido del término); un enfoque elitista y por arriba de las contradicciones y dificultades que enfrentó el proceso de transformación de la sociedad encarnado en la “vía chilena al socialismo”. Estas notas características del tipo de análisis elaborado hacia el pasado, fue reproducido por las ciencias sociales *renovadas* en la década de los ochenta, en prospectiva, al examinar las posibilidades de salir de la Dictadura.

Según esta lectura, así como el conflicto que había quebrado la democracia chilena en la década de los setenta, se había desencadenado, enquistado y finalmente estallado en las instituciones políticas como el Parlamento, quebrando el sistema de equilibrios partidistas, abusando de los llamados “resquicios legales” y, por esa vía, violentando las garantías democráticas consagradas en la Constitución de 1925, debilitando el consenso existente con anterioridad a aquella década acerca del prestigio de la institucionalidad político-jurídica y del respecto a los procedimientos sancionados constitucionalmente; en definitiva, como el análisis de la *crisis de 1973* se encapsuló en la *esfera política*, también la interpretación de la superación posible de esa crisis (que había llevado a la instalación de la Dictadura militar) se realizó en los *estrechos pasillos* de la *alta* política, y no en las *anchas alamedas*. De esa manera, la *transitología* chilena (en general, la latinoamericana) minimizó la importancia de los actores socio-económicos y privilegió la acción política de los actores políticamente relevantes (desde esa perspectiva: partidos políticos, fuerzas armadas, Iglesia). Si el problema había radicado en el Estado y en la acción política, la solución habría que buscarla también en el Estado y en la política. Y, en el fondo, la *transitología* propuso una *restauración* del Estado y de la sociedad al orden anterior a la década del setenta.¹⁸⁴ No hay mejor metáfora de esta restauración que la figura del, primero golpista y después “demócrata”, Patricio Aylwin: la Democracia Cristiana expulsada del *paraíso terrenal* por la insólita e insolente irrupción de la izquierda, regresando a la sede del poder político, en consorcio con los antiguos izquierdistas, restableciendo “el orden mítico de la alianza entre los dioses, los señores y los guerreros” (Illanes 2000, 138). Es desde esta perspectiva que resulta comprensible la escisión propuesta y justificada entre democracia y democratización o, de otra manera, entre democracia política y democratización social. Lo que interesaba era asegurar sobre todo la primera, la otra se postergaba para una futura fase de consolidación democrática, se sacrificaba al altar de la resignación.

¹⁸⁴ La contradicción radica en que la Dictadura no sólo había pretendido una *restauración* similar, es decir, una vuelta a un tiempo en que los sectores populares no tuvieran una gravitación relevante en el sistema político (en ese sentido su restauración seguramente se pretendiera hacia un momento bastante anterior a 1970) sino que había operado una *refundación* de la sociedad en términos socio-económicos y culturales.

El proceso de *renovación socialista* del pensamiento político y sociológico comportó, inicialmente, una innovación significativa: el reconocimiento de la necesaria autonomía de los actores sociales, fruto de la crítica al vanguardismo y al “dirigismo” leninista. En lo que no se ha hecho tanto hincapié es en la otra cara de ese planteamiento, que conlleva, desde esta perspectiva, la *necesaria autonomización de la esfera política*. Como hemos indicado en los apartados anteriores, el mayor interés que despertaron los movimientos sociales y la actitud “más respetuosa” por parte de los líderes políticos respecto de sus dinámicas y espacios, no redundó en la consideración del carácter intrínsecamente político de los procesos de resistencia y lucha gestados en el “mundo social”. Tironi expresó, con meridiana claridad, el riesgo que comportaba, a su juicio, las pretensiones de que la política rebosara los márgenes del Estado:

El movimiento de “todo es política”/“nada con los partidos”/“todo con los movimientos sociales” va generando su propia práctica, caracterizada por el particularismo, el basismo, el localismo, el largo-placismo. Su diagnóstico tiende básicamente a mistificar el desarrollo de los movimientos sociales, actividades culturales, comunidades cristianas, etc. Ello resulta indispensable porque, invisiblemente, se le transfieren a estas instancias las obligaciones políticas (y la fe) que los partidos no lograron cumplir (o que “traicionaron”), por lo cual en su momento fueron descalificados. Pero estos actores sociales – como es obvio– no logran satisfacer tales expectativas. El esfuerzo desplegado por politizar los daña y *desnaturaliza a movimientos nacidos para otros fines y cuya dimensión política es por de finición marginal*. Por otra parte, esta pretensión elude o posterga la resolución de una cuestión crucial, como es la organización propia que requiere la política para desplegarse (Tironi 1984, 57, cursivas mías).

Así pues, no todo es política; por el contrario, “la política ha devenido una actividad profesional, que exige vocación y talento especiales precisamente por el grado de institucionalización en que se desenvuelve” (Tironi 1984, 67). A nuestro juicio, la *escisión entre la política y lo social* no puede ser sino la *fetichización de lo político*, esto es, la ruptura y separación entre el *fundamento* de algo y ese *algo* (es decir, lo *fundado*) que adquiere entonces “vida propia” y aparenta tener *por sí mismo* unas cualidades que no obtiene sino de aquello que constituye su raíz. Así, la política aparece como una esfera distinta, escindida, autónoma del mundo social, en el que se encuentran las fuerzas que producen y reproducen la vida. Por una parte, ello implica que el *medio* se convirtió en *fin*. La política, en cuanto método y organización –dimensión importante pero reducida–, dio pie a una estructura burocrática tan compleja y extendida que desarrolló lógicas de profesionalización, tecnificación y especialización, que se auto-reproducen y producen a los “políticos profesionales”. Una vez dentro de la estructura política la permanencia y ascenso exige gestionar –no modificar– las dinámicas administrativo-burocráticas.

Pero, por otra parte, indiscutiblemente esta autonomía de la “esfera política” no es sino *aparente*, aunque sus efectos son definitivamente *reales*. Se produce una imagen distorsionada, falsa, de la política, según la cual ésta aparece completamente desligada de los actores sociales. Esto es así sólo en parte. El

“bloque dominante en el poder”, como se denominó al conjunto de personas que *administran el Estado* y toman decisiones sobre la organización social y económica, mantiene una *autonomía* relativa, mientras su actuación no afecte gravemente los intereses de los grupos económicos más poderosos. Su labor consiste en asegurar la *governabilidad* (eufemismo de dominación), misma que garantiza la vigencia del orden existente (con mayores o menores grados de redistribución de la riqueza, pero sin afectar las lógicas de la explotación, de la desigualdad, de la dominación). Así la autonomía es sólo parcial –en un sentido– y relativa: no responde a los intereses y necesidades de los sectores populares, tampoco a una parte significativa de los sectores medios, pero sí asegura el proyecto de neo-oligarquización de los sectores económicamente poderosos. La política aparece como una esfera autónoma de los proyectos populares de transformación radical (e incluso reformista) de la sociedad, no así de los de las élites económicas. El *divorcio* de la política respecto de lo social-popular esconde su *matrimonio de conveniencia* con lo social-elitista. En este sentido, la imagen deformada de la autonomización de la política se asemeja a la pretensión de neutralidad atribuida –en la teoría liberal– al Estado.

Pero, desde la perspectiva de la transitología, la *autonomía de la política* permitía resolver el problema de la “governabilidad” a través de los pactos intra-élite, postergando y difuminando el conflicto social. En los análisis que venimos describiendo, los movimientos sociales, y en general, toda la asociatividad y experiencias que se habían desarrollado a lo largo de las décadas de los setenta y ochenta, fraguados en la lucha contra la Dictadura, *por fuera* o *al margen* de los componentes del sistema político,¹⁸⁵ carecen de relevancia para el proceso de transición a la democracia, son apenas actores secundarios o figurantes, llamados a integrar el coro de *vivas* y aplausos a los artífices de la democratización. De ahí la insistencia de los científicos-políticos sociales en que los *pobladores*, por ejemplo, uno de los actores sociales más dinámico, prolífico y propositivo en los hechos, en la lucha anti-dictatorial, constituían el paradigma de la *protesta sin propuesta*. Y en consecuencia su insistencia en que los movimientos sociales –en cuanto son esencialmente movilización, reivindicación y protesta– debían subordinarse a la estrategia política, definida por los “hombres de Estado”, rebosantes de racionalidad: los intelectuales y políticos profesionales de los principales partidos políticos de la oposición. Y en todo caso, si querían aspirar a ejercer presión sobre los partidos políticos para que éstos tuvieran en consideración sus problemas debían

¹⁸⁵ Lo cual resulta extremadamente curioso porque el sistema político había sido desmantelado por la Dictadura: sus instituciones cerradas, las asociaciones prohibidas, y las normas vigentes con anterioridad al golpe, conculcadas. Con lo cual, de alguna forma, la transición a la democracia supone la inserción de los antiguos partidos políticos –con ciertas transformaciones, muy radicales en algunos casos, que no podemos desconocer, pero que se refieren sobre todo a su ideología e imaginario político (transformación, por otra parte, que resulta indispensable –es la *clave*– para que su “retorno” a la institucionalidad pos-pinochetista se pueda dar), pero no en su estructura, funcionamiento, liderazgos, etc., su inserción, decimos, en una nueva estructura política de tinte autoritario, garantizada por la *camisa de fuerza* de la Constitución de 1980, que limita sus movimientos al punto de convertirlos o bien en un elemento decorativo de la nueva dinámica política o bien en sus mejores administradores, pues su ambigüedad ideológica, la aparente democracia formal y la excusa de la institucionalidad dictatorial, les permiten asegurar la gobernabilidad mejor que la *mano dura* de sus pares militares.

ser capaces de formular propuestas *ad hoc*. La política *por arriba* desconoció los planeamientos de los movimientos sociales y de las organizaciones que durante el periodo dictatorial habían resistido el modelo neoliberal implantado por Pinochet de la mano de los *Chicago Boys* y habían desarrollado experiencias de autogestión que cuestionaban el tipo de relaciones sociales propio del capitalismo (esencialmente competitivas) y que auguraban una sociedad más justa (solidaria, colaborativa). Ese proceso fue posible porque la sociología desconoció también las propuestas que emanaban del *mundo social*, no les dio estatuto de conocimiento válido, y justificó la opción política de excluir a los movimientos sociales de la alternativa a la dictadura sobre la base de negar su capacidad de construir y proponer un *proyecto* social y político alternativo. Cuestión sin duda rebatible.

En definitiva, las ciencias sociales en los ochenta fueron absolutamente *comprometidas* políticamente y, tal vez, en ningún otro momento como entonces tuvieron tanto éxito en su cometido, pues no sólo pretendieron *explicar* el presente y, por esa vía, proporcionar elementos para *predecir* el futuro (en sentido clásico en eso consiste la ciencia) sino en sentido estricto, *construir* el futuro. La transición a la democracia es, en ese sentido, su mejor constructo, y el modelo de sociedad resultante un engendro de aquella teoría.

3.4. Una sociología “en la medida de lo posible”: ¿La desaparición de los movimientos sociales?

Patricio Aylwin, símbolo de la restitución del poder político a los partidos políticos, ha dado, quizás sin quererlo, una de las mejores definiciones del modelo de la sociedad chilena de la posdictadura. En el discurso pronunciado al final de su primer año de gobierno recordó que había prometido hacer “justicia *en la medida de lo posible*, porque todos sabemos que la justicia plena, absoluta, es muy difícil de alcanzar en este mundo” (Aylwin 1992, 121, cursivas mías). Si la justicia sólo podía hacerse “en la medida de lo posible”, lo mismo sucedía con la democracia, porque la *democracia plena* también parecía imposible, a juzgar por las disputas por apellidarla. Y una democracia “en la medida de lo posible” requería unos movimientos sociales dóciles, heterónomos o fundamentalmente desarticulados. En la nueva etapa que se abría con el triunfo de la Concertación, los movimientos sociales debían entender que su momento había pasado, ahora era el tiempo de la política.¹⁸⁶

Si concebimos la política precisamente como la disputa por definir aquello que es *posible*, entonces veremos que estamos ante la reconfiguración conservadora

¹⁸⁶ A lo sumo los transitólogos reconocen que este periodo plantea el problema de la *representación* de algunas reivindicaciones por parte de la coalición de Gobierno pues “Su responsabilidad de administración del proceso de transición y consolidación, deja a los actores sociales huérfanos de representación en aquello que no se refiere directamente a la transición o les exige subordinar su dinámica a los requerimientos de ésta. Es decir, el rol fundamental jugado por los partidos en la democratización política, y sin el cual ésta no se habría realizado en Chile, tiene como contraparte la dificultad de representación de la sociedad bajo el régimen democrático” (Garretón 2001a, 59).

de las alternativas abiertas en la lucha antidictatorial. La Concertación se plegó al *rayado de cancha*¹⁸⁷ de los militares y convino, en los hechos, en administrar el modelo con leves modificaciones. En este sentido cabe tener presente que el origen de la transición a la democracia “no estuvo en el triunfo de las luchas de los ‘movimientos sociales’ –cualesquiera haya sido su importancia, que la tuvieron, en los distintos países– ni menos aún de organizaciones de carácter revolucionario, ni surgieron de un ‘pacto social’ amplio, sino que resultaron de un proceso de *negociación*” (Vasconi 1991, 59).¹⁸⁸ Desde esta perspectiva, la transición a la democracia supuso la “derrota” de la Dictadura pero no del modelo económico y político impuesto por la fuerza sino su normalización, y la legitimación del proyecto de sociedad fundado por aquélla. En este contexto:

La crítica radical, o la pregunta respecto a la validez o legitimidad de las finalidades, no tiene ninguna función positiva porque habla de lo imposible, de un mundo no natural. Turba la paz del fin de la historia. Como he dicho, ese momento es muy turbulento. Al contrario de lo que se cree, el fin de la historia no es una sociedad sin cambios, sino una en la cual éstos se multiplican justamente para que la necesidad de transformación no tenga hueco ni espacio, para asegurar que el futuro sea pensado como prolongación de lo actual y no como una brecha (Moulian 2001a).

Los sectores que reivindicaran o propusieran medidas que excedieran los límites de lo posible fueron tildados de ilusos, maximalistas, extremistas, irracionales. Y acusados de promover las conductas anómicas, desviadas, la desintegración de la sociedad, el caos. El reconocimiento de algunos líderes sociales y políticos de que *no había modelo alternativo* al propuesto por la dictadura-Concertación y que, en el mejor de los casos, de lo que se trataba era de humanizar el capitalismo (Joignant 2012), contribuyó a reforzar la idea de irracionalidad o anacronismo de cualquier propuesta alternativa (recuérdese a Brunner a propósito de la izquierda que habla un lenguaje fuera de lugar). De acuerdo con los defensores de la transición a la democracia, “los mercados libres son económicamente eficientes” pero se requiere la intervención del Estado para corregir “las desigualdades extremas en la distribución del ingreso que pudieran resultar, y de hecho resultan, de la simple operación de los mercados, tanto de bienes y servicios como de factores productivos, en función de los criterios éticos que se expresan a través de un sistema político democrático” (*La gente tiene la razón* 2009, 60). Visto así, su proyecto no se distingue del de la Dictadura, definido por Jaime Guzmán como un proyecto político que “apunta a una sociedad libre, justa y basada en sólidos valores morales. Una sociedad libre requiere combinar una democracia política eficiente y una economía social de mercado, combatiendo así por igual a los totalitarismos y estatismos socialistas” (Guzmán 1989).

¹⁸⁷ Recuérdese la descripción de la Constitución de 1980 dada por Jaime Guzmán.

¹⁸⁸ Es decir, la iniciativa en esta estrategia de transición estaba del lado de los militares: “El acto de conceder una democracia protegida al país provenía de un régimen autoritario coherente y bien articulado. Y no de una crisis” (Godoy 1999, 88).

Esta *política de lo posible* no se presentó como un proyecto ideológico de la sociedad, sino que construyó una imagen de sí misma como ejercicio técnico, frío, racional, neutral, amparada en el conocimiento sociológico (*transitológico*) en cuanto saberes científicos y prácticas profesionales, desprendidos de los ideologismos y militanismos que habían sido predominantes, de acuerdo con los sociólogos *renovados*, en las décadas de los sesenta y setenta. Fue así como esta sociología se convirtió en el “oráculo de la transición” (Durán 2000, 165) o en su lengua “lengua oficial”:

Desde los tiempos de Flacso en que la Renovación Socialista ayudó a diseñar la Concertación, la sociología chilena fue ganando legitimidad disciplinaria hasta convertirse en una especie de “lengua oficial” de la Transición (se habla, incluso, de “transitología”). Varios profesionales de la sociología chilena transitaron desde los centros de estudios alternativos hacia los ministerios y las consultorías internacionales. [...] La sociología de la Transición en Chile se encargó de recomponer parámetros de legibilidad del cambio político que pudiera sobre todo integrar los efectos de la violencia histórica a un marco de comprensión técnicamente adaptado a los requerimientos del mercado y del consenso. [...] Para algunos de nosotros, la palabra “transición” va ligada no sólo al artefacto político-institucional que regularizó el tránsito entre dos períodos históricos; se asocia también a la mediación oficial de un cierto sociologismo integrado que puso sus lenguajes eficientes al servicio de la recomposición funcional –y funcionaria– de una sociedad dócil (Richard 2002, 190).

El conocimiento sociológico legitimó, con base en su aparente científicidad, la desmovilización y el disciplinamiento de la sociedad chilena desde la segunda mitad de la década de los ochenta y más claramente desde principios de los noventa. Durante la posdictadura el interés “político” por los movimientos sociales se desplazó hacia las instancias de gobierno, con el propósito de procurar su neutralización. En correlación, en la academia los movimientos sociales prácticamente desaparecieron de las investigaciones. El desinterés académico por los movimientos sociales, en los noventa, fue tan notorio como la *euforia* que habían provocado en la década precedente (Salman, 1999). Los estudios constataron, en todo caso, la pérdida de centralidad de los movimientos sociales: “Digámoslo de una vez. Lo que más llama la atención en los últimos años es la ausencia de conflictividad en la sociedad; tanto que parece que los movimientos sociales hubieran desaparecido” (Espinoza 2000, 207). Con todo, para Espinoza “ello indica no tanto una debilidad coyuntural del movimiento sindical como un cambio radical en las pautas de acción colectiva en las últimas décadas” (íd.). Es decir, se trataría de la transformación profunda de las formas de organización y de acción de los sujetos sociopolíticos, que habría mutado radicalmente la acción colectiva. Ante la “desaparición” de los movimientos sociales, la producción académica –escasa en esta línea de investigación– siguió remitiéndose al período dictatorial y fue elaborada fundamentalmente por autores extranjeros (Oxhorn 1995, Salman 1997, Guillaudat y Mouterde 1998). En ese abandono influyó, además, la *deriva pragmática y tecnicista* de las ciencias sociales (Faletto 2009, 148) –a la que

nos hemos referido en el segundo capítulo—, que esgrimieron un proyecto político como saber científico; entelequia que se relaciona, a su vez, con la concepción elitista y especializada de la política, que hace “de la relación medios-fines un asunto de ‘One best way’” (Moulian 1997, 63). Esta democracia “en la medida de lo posible” (Garcés 2012, 23), o *marketing d emocracy* (Paley 2001), requería decretar la desaparición del conflicto social y político para garantizar la gobernabilidad y para ello utilizó a su favor el miedo, real, a un nuevo “ruido de sables”. Además, precisaba apaciguar los ánimos caldeados de aquellos que pensaban que era necesario ir más allá. Apaciguar o *pacificar*, cuando no desarticular, fueron los verbos empleados para referirse a la desarticulación de los movimientos sociales. En consecuencia, la élite política desbancó a los movimientos sociales y “cualquier intento de movilizar fue motejado de peligroso en función de la ansiada materialización de la posibilidad democrática” (Moulian 1997, 352). Los jóvenes y en general los actores sociales fueron considerados “objetos de políticas remediales y no [...] sujetos con capacidad de co-construir ciudadanía a partir de su propia realidad social y cultural” (Goicovic 2000, 117) y fueron criminalizados, convertidos en delincuentes, reduciendo el conflicto político a una cuestión de “seguridad ciudadana” (Rosas 2004, 18). Así, los movimientos sociales, en esta nueva etapa que prometía *la al egría*,¹⁸⁹ se debatieron entre la integración o la ruptura (Goicovic 1996).

3.4.1. Constatando una paradoja: ¿Democracia sin movimiento social?

El Chile de los noventa ha sido definido como el “paraíso del consumidor” y el “páramo del ciudadano” (Moulian 1997). La culminación de la transición¹⁹⁰ a la democracia inauguró una fase de desarticulación del tejido social reconstruido durante la Dictadura. El hecho de que el retorno de la llamada democracia política no trajera aparejado un fortalecimiento de los movimientos sociales resultó incomprensible para muchos investigadores y analistas. El sentido común y el discurso *concertacionista* hacían prever, efectivamente, “el reencuentro de sectores sociales y políticos” (Garretón 1986a, 17): “Lo lógico era suponer que el actual proceso político se apoyaría en la fuerza del pueblo movilizado” (Cárdenas Squella 1991, 3). Por el contrario, los Gobiernos de la Concertación evidenciaron, progresivamente, su profundo vaciamiento social; y la institucionalidad democrática se mostró como la “cáscara vacía” que había presagiado Lechner (1987, 259). Y aún más, “el oficialismo concertacionista, a fin de cumplir su parte en los acuerdos, se ha empeñado todos estos años en desmovilizar a la ciudadanía” (Correa, Figueroa, y otros 2001, 339).

Así, en el caso que nos ocupa, paradójicamente, la Dictadura “alentó” la organización y la movilización social y política (Oxhorn 2004), al mismo tiempo que pretendía desaparecerla por real decreto, mientras que los Gobiernos

¹⁸⁹ “La alegría ya viene” fue el eslogan de la campaña de la Concertación en el Plebiscito de 1988.

¹⁹⁰ Asumimos aquí la periodización de Garretón, que establece que la transición finalizó con el cambio de mando.

concertacionistas, revestidos de legitimidad democrática, la desactivaron y, cuando lo consideraron oportuno, también la reprimieron (Rosas 2004, Goicovic 2010). El carácter *paradójico* de este proceso fue significativamente señalado por numerosos autores (Oxhorn 2004, Guerrero 2008, Bastías 2010, entre otros), lo que indica un cierto desconcierto ante la contradicción entre lo que se esperaba (basándose en un cierto sentir general) y lo que se constataba en la nueva etapa “democrática”. Pero, a nuestro juicio, tal extrañeza no se justifica en quienes construyeron y legitimaron un modelo que escindía lo social y lo político, que concebía la política como un esfera autónoma, autorreferida, “explicativa per se” (Almendras 2007, 98); y lo social como un espacio idealmente homogéneo y a-conflictivo, por lo que resultaba necesario subordinar y disciplinar a los colectivos sociales que no se conformaran con volver a ocupar el lugar secundario que, de acuerdo con esta interpretación, siempre han tenido. En ese sentido, compartimos con Delamaza la tesis de que “contrariamente a la imagen corriente, el diseño de la transición política chilena de fines de los años ochenta contemplaba como prerequisite la desactivación de los movimientos sociales anti-Dictadura que la habían hecho posible” (Delamaza 1999, 377). Aquel diseño buscó dotar de *cientificidad* la separación entre democracia política y democratización social, justificando la sujeción y la postergación de la segunda; de esa manera se avaló la elitización de la política y la subordinación y/o criminalización de lo social.

De acuerdo con Philip Oxhorn, la paradoja era doble: de un lado, la *autonomía forzada* a la que se habrían visto sometidos los actores sociales durante la Dictadura, fruto del des-anclaje obligado por las modificaciones introducidas en el mundo del trabajo, por las políticas de tipo neoliberal, y por la destrucción y prohibición de las actividades y espacios políticos, tal y como los habían conocido en el pasado, había dado lugar a un amplio, diverso y profundo proceso de recomposición de solidaridades sociales (T. Valdés 1986), de organización, de resistencia y de protesta. Así, la primera paradoja “reside en el hecho de que tal actividad autónoma se hizo posible debido, precisamente, a las dislocaciones socioeconómicas extremas asociadas al gobierno militar y a la intensa represión política” (Oxhorn 2004, 58). Pero, a continuación, ese proceso de constitución de subjetividades políticas fue coartado por la estrategia *transicional* que privilegió la transición política y, posteriormente, desarticulado durante la posdictadura, que otorgó preeminencia a la *normalización* y la *governabilidad*. Es decir, la segunda paradoja –o “el lado opuesto de esta paradoja”– radica en el hecho de que la acción social autónoma fue subordinada nuevamente por la presión de los propios partidos políticos opositores y la dinámica *transicional*. De acuerdo con el cientista político: “El carácter de la transición y la dinámica de la nueva era democrática crearon retos a los que los sectores populares no pudieron hacer frente” (í.d.). Planteadas así las cosas, la responsabilidad parece recaer exclusivamente en los actores sociales populares, pues “aunque la antigua matriz sociopolítica no ha sido recreada y los partidos políticos parecen más dispuestos y más capaces de trabajar con varios actores de la sociedad civil sin absorberlos, aun así los sectores populares, al menos

hasta ahora, no han logrado aprovechar las nuevas oportunidades abiertas por la vuelta a la democracia” (í.d.).¹⁹¹

Según esta lectura el déficit democrático radica en lo “social”, en la ciudadanía, incapaz de hacer valer su autonomía –misma que los partidos políticos estarían dispuestos a aceptar, e incluso habrían favorecido– en pro de una participación más activa en la política. A nuestro juicio, ciertamente existen inercias y rasgos propios de la cultura política de los movimientos sociales que hacen que éstos tiendan a delegar su capacidad de creación en los partidos políticos. No se puede desconocer que la articulación entre movimiento social y partido político operó históricamente en ese sentido. Pero esa lectura desconoce, en primer lugar, que la escisión entre lo social y lo político opera como un potente mecanismo disuasivo –y alienante– de la acción política de los movimientos sociales, enajenando el monopolio legítimo de la política en los partidos y en las instituciones estatales, y reduciendo a los movimientos a la mera condición de grupos de presión, contrapesos del poder político, o medios (instrumentos) para el “momento” político. A su vez, esta perspectiva tampoco da cuenta de los mecanismos activos que ha empleado el Gobierno y los partidos para inducir la apatía, la delegación de la acción política, y la desmovilización.

En correspondencia con la mirada que exculpa al “mundo de la política” de la desmovilización o que trata de explicarla como resultado exclusivamente de factores endógenos de los movimientos sociales, también se ha tratado de dar cuenta de la “desaparición” del movimiento social distinguiendo entre los “períodos de emergencia –en que adquiere visibilidad pública– y los períodos de introversión/latencia –entendida como ocultamiento e invisibilidad–” (Valdés, y otros 2000, 222-223). Así, por ejemplo, en el caso del feminismo –aunque el análisis bien puede generalizarse al resto de movimientos sociales–, el retorno de la “democracia” habría supuesto la vuelta del movimiento a su estado de latencia y abriría inaugurado “un nuevo período marcado por la fragmentación y la institucionalización: tanto de la acción del movimiento en ONGs y espacios abiertos por el retorno democrático, como de las propuestas del movimiento en organismos de gobierno” (Valdés, y otros 2000, 222).¹⁹²

De acuerdo con Melucci:

Los actores se hacen visibles sólo cuando un campo de conflicto público surge; de lo contrario, permanecen en un estado de latencia. Latencia no significa inactividad. Más bien, el potencial de resistencia u oposición se cose en la trama misma de la vida cotidiana. Se encuentra ubicada en la experiencia molecular de los individuos o grupos que practican los significados alternativos de la vida cotidiana (Melucci 1989, 71, traducción propia).

¹⁹¹ Garretón también deja caer la responsabilidad de su desactivación en los propios movimientos sociales.

¹⁹² Este diagnóstico sería generalizado entre las feministas chilenas: “La recomposición democrática [...] ha significado la fragmentación y dispersión de los movimientos de mujeres que tanta fuerza político-contestataria ejercieron en los tiempos de la lucha antidictatorial” (Richard 2001, 229)).

Distinguir entre las fases de latencia y de visibilidad del movimiento resulta pertinente para comprender la construcción de movimientos sociales más allá de la visibilidad pública y de la acción *contenciosa*¹⁹³ frente al gobierno de turno; es decir, desde esta perspectiva, *existen* movimientos aun cuando no haya movilizaciones y aquéllos no resulten visibles desde el horizonte de las dinámicas político-públicas. Melucci sostiene que las dos fases del movimiento están interrelacionadas por un nexo “fisiológico” y que se refuerzan mutuamente (Melucci 1989, 71). Pero no queda claro cómo el movimiento pasa de una fase a la otra. De entrada, podría pensarse que existe un *ciclo del movimiento* que responde a dinámicas internas, propias, de los actores implicados, que pasan más o menos armónicamente de un estado al otro, en una cadencia orgánica, natural. Sin embargo, una somera revisión de la historia chilena, demuestra que esto no es así¹⁹⁴: con el golpe militar, fue el terrorismo de Estado el que forzó al movimiento a recluirse en sus *lugares privados o comunitarios*.¹⁹⁵ Esto no sorprende pues el golpe es la herramienta de la reacción conservadora para impedir la profundización democrática, el cambio reformista/revolucionario de la sociedad, y para disciplinar a los actores sociales y políticos que lo habían impulsado. Sin embargo, con el triunfo de la Concertación, las razones y mecanismos de lo que el sociólogo Manuel Guerrero ha llamado “segundo disciplinamiento” resultan más intrincados y menos evidentes, porque la Concertación misma y su triunfo electoral son fruto del entramado organizativo y de la oleada de protestas y movilizaciones que abrieron espacios de rearticulación y de construcción de propuestas políticas, y porque el conjunto de partidos políticos que integraron esa coalición se reclamaron los legítimos “intérpretes” históricos del movimiento popular y, en efecto, incorporaron a su discurso, y en ocasiones, a sus políticas, las reivindicaciones que habían formulado las organizaciones sociales.¹⁹⁶

Por eso, la fase de latencia o de subsidencia del movimiento debe ser abordada desde una perspectiva más amplia. En efecto, en comparación con la etapa previa de organización y movilización de los sectores populares “de lo que no cabe duda es que el conjunto de estas expresiones entra a partir de los noventa en un estado de latencia, o abiertamente de crisis, que parecería responder tanto a una voluntad política temerosa de que la base social recupere una cierta autonomía, como a una reconfiguración general de nuestra cultura y nuestra sociedad” (Pinto 2000, 114). El historiador Julio Pinto acierta al apuntar tanto a una estrategia diseñada desde el Gobierno y los partidos políticos, como a las transformaciones

¹⁹³ La acción colectiva contenciosa o la *contienda política* es un tipo de acción que “es episódica y no continua, se produce en público, implica la interacción entre los generadores de reivindicaciones y otros, es reconocida por esos otros como afectando a sus intereses y tiene al gobierno como mediador, blanco o reclamante” (McAdam, Tarrow y Tilly 2001, 5, traducción propia).

¹⁹⁴ Previo al periodo de latencia, existe una fase de desmovilización inducida desde fuera y desde dentro del movimiento, por el consenso y por la coerción. Por otra parte, las fases de latencia y de visibilidad indican cierto predominio de rasgos más o menos visibles, pero siempre coexisten.

¹⁹⁵ Salazar utiliza la metáfora geológica de la “subsidencia” para dar cuenta de los periodos de “soterramiento” del movimiento social, frente a los momentos de emergencia (Salazar 2001a).

¹⁹⁶ Es por eso que recurrentemente la explicación aparentemente más sensata es la de la “traición”.

sociales y culturales producidas durante la Dictadura, que habían trastocado los espacios y las dinámicas de los actores sociales. La evolución de los movimientos sociales debe atender necesariamente a ambas direcciones. Nuestra hipótesis es que, en este caso, el diseño *transicional* formulado desde la institucionalidad dictatorial y posdictatorial requería la subordinación o la prescindencia de los movimientos sociales, como *condición*¹⁹⁷, no como “efecto secundario o no deseado”, y en ese sentido, nos interesa indagar en los dispositivos por los cuales se desmovilizó a los actores que se habían reconstruido y emergido durante la Dictadura.¹⁹⁸

Partiendo de lo anterior, debemos preguntarnos: ¿Cuáles fueron las estrategias que hicieron que el movimiento se sumiera en una fase de latencia? O de otra manera, ¿qué factores propiciaron la desmovilización de los movimientos sociales? Sostenemos que la primera herramienta de disciplinamiento, y quizás la más importante, es la propia *concepción sociológica de los movimientos sociales*, que jugó un papel fundamental en el objetivo de su desmovilización: esto porque, apelando al carácter performativo de la ciencia social, construyó a los movimientos desde la negación y la subordinación, esto es, se arrogó el derecho de determinar que no existían movimientos sociales, y que los que se reclamaban tales no tenían legitimidad política, y la prerrogativa de establecer que los grupos que se movilizaban, protestaban, exigían y construían alternativas concretas a sus problemas cotidianos, debían subordinar su acción a las direcciones de los partidos; en segundo lugar, estas definiciones se vieron reforzadas cuando la Concertación se constituyó en Gobierno y lo que antes había implementado desde los espacios limitados de la oposición a la Dictadura, luego lo ejecutó desde la institucionalidad gubernamental. En ese momento, algunos de los sociólogos e intelectuales que habían construido esta imagen negativa de los movimientos sociales se constituyeron en auténticos *consejeros de l Príncipe* y contribuyeron desde esta nueva posición a delimitar las políticas públicas para contener y subordinar a los movimientos sociales.

El análisis de Joignant (2012), construido sobre la base de una serie de informes elaborados por el grupo de *technopols* durante el primer gobierno de Patricio Aylwin, aporta elementos significativos para fundamentar la hipótesis de que *el saber sociológico contribuyó al control de los movimientos sociales*. De acuerdo con este análisis, la transición a la democracia, modélica y exitosa según los transitólogos, “implicaba también un ideal de orden social que a menudo era puesto a prueba por el temor a una escalada de conflictos y al desborde popular” (Joignant 2012, 339). Los documentos revisados por el politólogo ponen al

¹⁹⁷ Coincidimos en que “si la transición política a la democracia, entonces, hereda un tiempo democrático incompleto, se debería situar la responsabilidad en errores estratégicos, incapacidades actorales y contingencias críticas que no tienen relación con el proyecto mismo de refundación democrática. Sostendremos, a contrapelo de estas conclusiones, que dichos *errores, incapacidades y contingencias* no son tales, sino que más bien constituyen el ethos mismo de una arquitectura democrática ya consumada” (Durán 2006, 231).

¹⁹⁸ La paradoja radica en que la condición de posibilidad de la transición es la presencia activa de movimientos sociales, pero una vez abierta esa posibilidad, la condición de materialización de la transición es la contención, subordinación y prescindencia de dichos movimientos.

descubierto la estrategia general desmovilizadora de las organizaciones sociales y sindicales, acción que recaía fundamentalmente en los partidos políticos de la coalición gobernante y que no se limitaba a la mera representación de las reivindicaciones de aquellos colectivos, sino a un ejercicio activo de disciplinamiento y a la prescindencia de los movimientos sociales porque, a la luz de esta concepción sociológica, el rol de los actores sociales siempre estuvo subordinado al de los partidos políticos:

Es así como, en este asunto crudo y repleto de argumentos públicamente inconfesables, se ve operando la dimensión propiamente política del capital de los *technopols*, aunque los recursos políticos, y en particular la especie militante del capital, no son empleados para fines de la organización, sino paradójicamente de desmovilización, e incluso de despolitización (Joignant 2012, 340-341).

Con todo, la tesis de que la Concertación desmovilizó es tajantemente rebatida por los transitólogos, para quien la responsabilidad de la “desaparición” de los movimientos sociales recae exclusivamente en estos últimos:

No es cierto, no es cierto que la Concertación desmovilizó, eso es una mentira absoluta, no hay una sola movilización, una sola [...] incluso en las comunidades de base [...] que no haya sido hecha por militantes políticos y militantes de partidos, una sola, no hay ni una, porque en todas las de comunidades de base, en fin, en todas ellas, estaban militantes de partidos, entonces, digo, hay que tener cuidado con ese tipo de afirmación, porque si a mí me dicen entonces que la Concertación sistemáticamente desmovilizó, yo digo: ¿Y de qué pueblo, de qué movimiento social hablamos que se deja desmovilizar durante 17 años? ¿Qué estaban haciendo los movimientos sociales en ese período? ¿En el período del 90 hasta 2006? Consumiendo, pues. En eso estaban” (Garretón 2013c).

De un lado, Garretón confunde intencionadamente las movilizaciones de los ochenta con las de los noventa. De otra parte asume que el hecho de que hubiera militantes de partidos políticos en las movilizaciones sociales –que los había, sin duda– supone que los partidos políticos no discriminaron las movilizaciones y legitimaron unas y boicotearon otras, y que una vez en el Gobierno, consideraron que ya había pasado el tiempo de los movimientos sociales. Por último, siembra la duda sobre el movimiento social, apelando al consumismo como conducta primordial. En fin, la sombra de sospecha que Garretón vierte sobre los movimientos sociales, por su debilidad o falta de consistencia, contribuye a reforzar el diagnóstico anterior de que en Chile no había movimientos sociales. Y así: “No pocos intelectuales de pasado socialista y presente neoliberal han proclamado con cierta alegría el fin de los ‘movimientos sociales’. Y denuncian con júbilo: ‘las masas están ahora comprando en los *malls* y en los grandes supermercados, haciendo debido uso de sus tarjetas de crédito y de sus respectivos celulares’” (Salazar 2007, 26).¹⁹⁹

¹⁹⁹ Efectivamente la *mercancía* fue empleada por los gobiernos posdictatoriales como un dispositivo disciplinante para satisfacer por la vía del consumo, el descontento generado con la transacción ética y política. Sin embargo, más allá del tema del consumo (y el crédito) como mecanismos

Con la claridad que lo caracteriza, aunque a destiempo, ya bien entrado el siglo XXI, Garretón pronuncia palabras que dan cuenta de la “traición” que habría significado los gobiernos de la Concertación:

Por último, la que considero fue el alma principal, que fue la pragmática, que expresaba la postura de no entrar en las discusiones, de evitar una desestabilización económica, de tomar las correlaciones de fuerzas como algo dado, de emprender todas las transformaciones posibles pero no avanzar sin negociar con la derecha, de no alentar movilizaciones. Fue ese pragmatismo el que impidió mayores cambios, más que el peso de la ideología neoliberal (Garretón 2012).

Sin embargo habría sido ese pragmatismo el que el sociólogo habría defendido durante la transición.

3.4.2. *Democracia de los consensos: abstracción del conflicto*

“Mañana nos movilizaremos, mañana haremos movilizaciones de masas para obligar a Pinochet a irse antes... No se hizo nada...” (Moulian 2008, 146), porque lo cierto es que la aceptación del plebiscito de 1988 implicaba acatar un modelo de sociedad que relegaba a los movimientos sociales a un lugar secundario y privilegiaba la negociación protagonizada por las élites políticas, quienes “consideraron que no era posible” una política de movilizaciones (ibíd.: 173). Por eso, a nuestro juicio, es incorrecto atribuir la elitización de la política a una supuesta traición de los líderes políticos a los movimientos sociales, por más que en casos particulares sea así;²⁰⁰ sin embargo, la defensa del modelo transicional supone, necesariamente, la escisión socio-política. No se trata propiamente de una desviación del modelo original o de una traición de ciertos líderes, sino de una concepción de fondo de *qué es la política* –administración del orden– y de quienes son los sujetos con derecho para ejercerla –partidos políticos–. En esta secuencia la sociología respalda una lógica *transitiva*²⁰¹, en la que el movimiento social –sus

desmovilizadores, y las otras estrategias seguidas por las cúpulas partidistas, un elemento merece más atención, y dice relación con los “factores endógenos de los movimientos que operaron como condiciones posibilitantes de su digestión” liberal” (Guerrero 2008, 277). En este sentido, cabe señalar la preeminencia de una cultura política que tiende a delegar en los partidos políticos, esto es, en la forma representativa, la constitución de sujetos políticos, y que es reforzada por las concepciones hegemónicas (o dominantes) en los campos académico y político.

²⁰⁰ Es más, de pensar en la traición como hipótesis explicativa, debería precisarse que se produjo una traición de las élites políticas a la gente que participaba en los movimientos sociales, entre la que se contaba a muchos militantes de base de los partidos. Este reconocimiento le ha servido a Garretón para justificar que no hay tal escisión entre lo social y lo político, o alguna manipulación de los movimientos por los partidos. Lo que desconoce este argumento es que el partido político, a estas alturas, había dejado de ser una herramienta al servicio de un proyecto impulsado por la sociedad, para constituirse en una “empresa” autónoma. La autonomía de los movimientos sociales, alabada por esta sociología, soslaya la correspondiente autonomía de los partidos y de la “política” y el hecho de que la primera sirvió como excusa para inducir la prescindencia de los movimientos sociales, de sus reivindicaciones y de sus propuestas.

²⁰¹ Sobre la “lógica transitiva” de la concepción política clásica, véase la entrevista a de Amador Fernández-Savater a Miguel Benasayag: “Resistir no es sólo oponerse, sino crear, situación por situación, otras relaciones sociales”, en www.eldiario.es 24/4/2015.

prácticas, sus dinámicas, sus reivindicaciones, su construcción de lazos sociales— es el instrumento para “otra cosa”, para la futura democracia, para el “momento político”, para la acción de los partidos políticos, pero no tienen *interés* o *validez* por sí mismo, no se le atribuye ninguna capacidad transformadora de las relaciones sociales, ninguna virtud creadora, y por lo tanto, no se subrayan, ni siquiera se advierten, las potencialidades contenidas en esas experiencias de organización y de acción.

El diseño de la transición comportaba un modelo *ideal* de sociedad; por lo que la escisión, supuestamente temporal, entre lo social y lo político, o el “costo” que había que pagar por llevar a cabo una “vía tranquila y negociada a la democracia” (Joignant 2012, 339), constituía en verdad una hipoteca a largo plazo. Pinochet fue quien lo expresó, tempranamente, con meridiana claridad: “No se debe hablar de transición, sino de normalización. Dicho de otra manera, el cambio emprendido no conduce a la antigua democracia, que está definitivamente terminada. Lo que tenemos ahora en Chile es un período de normalidad y completarlo es la tarea imperativa de este instante” (Pinochet 1983). No creemos que el dictador fuera un visionario, sino que se cumplió a rajatabla su programa político. Y, en ese sentido, la transición política chilena fue exitosa porque evitó “el drama de las transiciones en que unos administran las demandas sociales retrocediendo a situaciones de gran inestabilidad y reproduciendo las polarizaciones que terminaron con el régimen democrático precedente” (Garretón, 1990). Para Garretón resultaba fundamental evitar una “una situación de empate catastrófico, de resultado final incierto, en que el país se desintegra y se hace ingobernable” (Garretón 1987a, 22). En este sentido, el recurso a la amenaza de la *regresión autoritaria* y el abuso del terror inspirado por los militares, argumentos reforzados por la continuidad de Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, fueron utilizados una y otra vez por los dirigentes de la Concertación para advertir del peligro de ir demasiado lejos en las transformaciones propuestas.²⁰² Pero lo cierto, es que la Concertación no sólo se limitó a administrar el modelo *dictatorial*, sino que lo profundizó, en cuanto al carácter subsidiario del Estado, la privatización de las empresas y de los servicios públicos, etc. Por eso, el argumento inconfesable — como diría Boeninger— era que los líderes de la Concertación habían adoptado el modelo de libre mercado y la escisión entre lo social y lo político favorecía su posición de gobierno (la gobernabilidad). Así pues, la excusa de las regresiones autoritarias —sin desconocer la existencia de presiones y bravatas por parte del Ejército— y de los enclaves autoritarios no es la única ni la principal explicación de la desmovilización.

La propia escisión, que autonomizaba la esfera de la política como una dimensión que se explica por sí misma, requería, además, una concepción *no conflictiva* de la política. Asumiendo, de alguna manera, la tesis del “fin de la

²⁰² La presencia de elementos autoritarios en la posdictadura constituye un hándicap y una ventaja para la Concertación, pues torna verosímil la amenaza de la regresión autoritaria, que se constituye así en una eficaz herramienta domesticadora de los movimientos sociales (Durán 2006, 233). De esa manera, la Concertación consigue la tan ansiada gobernabilidad que garantiza su perpetuación en el gobierno.

historia”, la política ya no sería más la disputa de proyectos de sociedad distintos, sino la administración de lo dado, la “gestión de los entendidos” (Moulian 2008, 150): “Durante los años de la Transición, la mecanización del Consenso sometió lo político (sus conflictos, sus indeterminaciones, sus antagonismos) a una especie de *rutina de lo programable* basados en criterios técnicos de administración de lo social” (Richard 2002, 189). Tempranamente y antes de la tesis de Fukuyama, el economista alemán Franz Hinkelammert había advertido que “donde se quiere sustituir la sabiduría política por criterios técnicos, hay que sospechar de que se quiere hacer otra vez política en nombre de algunas *societas* perfecta, que siempre de nuevo reclamará el fin de la historia” (Hinkelammert 1984, 28). Esta abstracción del conflicto en la concepción de la política, en realidad, lo que muestra, a nuestro juicio, es la esterilización de la política que dejaba de ser construcción de sociedad, para volverse administración y gestión del orden heredado. La política, en un sentido radical, siempre ha residido en los colectivos y en los espacios en los que se lleva a cabo la transformación de la sociedad (que puede incluir el Estado, pero no sólo); con la autonomización de la esfera política y la concepción formal de la democracia, la política dejó de residir definitivamente en las instituciones del gobierno y en los partidos políticos. La pretendida desaparición de los movimientos sociales suponía un intento de la contrarrevolución conservadora, ahora en versión “democrática”, por anular el conflicto y, por ende, por decretar la muerte de la política.

La *democracia de los consensos* es, con propiedad, una falacia. Aparentemente, la idea de consenso descansa en la búsqueda de acuerdos entre los partidos políticos sobre la base de su carácter representativo del mundo social, pero esto desconoce la desconexión entre movimiento social y partido político operada durante la Dictadura (la fractura de la “columna vertebral” si se quiere) y el hecho de que la reconstrucción del sistema de partidos se hizo sobre la base de la marginación de las movilizaciones (y hasta de parte significativa del espectro político partidista, posteriormente conocida como “izquierda extraparlamentaria”... por el llamado sistema binominal). Por lo tanto, el consenso no es entre propuestas sociales representadas en los partidos políticos, sino entre las élites partidistas y el “mundo” de la Dictadura. Por eso, la idea de consenso se constituyó en uno de los mecanismos de control y contención de las eventuales protestas sociales durante la posdictadura: “La fórmula instrumentalizadora del consenso redujo lo político (sus disputas y sus antagonismos de poder) al ejercicio técnico-administrativo de la política” (Richard 2002, 190). De esa manera, “el consenso actuó como una garantía normativa destinada a sujetar los desarreglos de lo social, forzando –para ello– la unanimidad de las conductas y los discursos en torno a las consignas oficiales de la moderación y de la resignación” (Richard 2001, 228). Al altar de la moderación, de la cordura, de la madurez política se sacrificaron todas las

reivindicaciones de democratización que provenían de las organizaciones socio-políticas.²⁰³

La primera escenificación pública de esta concepción no conflictiva de la sociedad tuvo lugar con motivo del discurso que Aylwin pronunció en el Estado Nacional un día después de la transmisión del mando, momento en el que manifestó asumir el compromiso de guardar fidelidad al “alma de Chile” que, a su juicio, suponía “la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales” (Aylwin 2002, 227). Así, uno de los principales instigadores políticos del golpe de Estado de 1973, defendía la necesidad de superar las divisiones, de reconstruir la (supuesta) unidad nacional, apelando a la *mítica* “familia chilena” cuyas diferencias se habían resuelto siempre, con anterioridad a la Unidad Popular, de forma “civilizada”. En su alocución no desconocía “las numerosas limitaciones, trabas y pies forzados que, en su afán de prolongarse, nos deja el régimen hasta ayer imperante” (ibíd.: 228), pero alababa la “forma pacífica y sin grandes traumas en que ha operado el tránsito hacia el gobierno democrático” (íd.), que se debía al hecho de que “los demócratas chilenos escogimos, para transitar a la democracia, el camino de *derrotar e l aut oritarismo en s u pr opia cancha*”.²⁰⁴ A su juicio esa vía “fue la mejor entre las posibles” (íd.). El tono paternalista y ufano de esta aseveración se confirma unas líneas después, al

²⁰³ Queremos apuntar una hipótesis en la que no ahondaremos aquí pero que parece tener visos de realidad. La preeminencia de mujeres en las organizaciones populares, y de los jóvenes en las protestas, sugiere la idea de que una concepción machista de sociedad y de los espacios y dinámicas de la política tenía mayores dificultades para incorporar esas expresiones al concepto de movimiento social. El trabajo de la socióloga Julieta Kirkwood, *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*, contiene sugerencias para pensar esas dificultades sobre la base de entender la política como el ejercicio de “cuestionar, para negar –o por lo menos empezar a dudar– la afirmación de la necesidad vital de la existencia de dos áreas experienciales tajantemente cortadas, lo público (político) y lo privado (doméstico), que sacraliza estereotipadamente ámbitos de acción excluyentes y rígidos para hombres y mujeres” (Kirkwood 1986, 181). La neoliberal escisión entre sociedad, considerada como natural, y Estado, como el *locus* de la política, refuerza la hipótesis de que como las organizaciones que emergieron en la Dictadura tenían más que ver con el mundo de la vida cotidiana, de la reconstrucción de los lazos de solidaridad, de la satisfacción de las necesidades elementales, y estaban hegemonizadas por mujeres, eran apolíticas. El retorno de los partidos políticos también trae la preeminencia de los hombres, protagonistas naturales de la política, del uso de la racionalidad, etc. mientras que “el hacer de las mujeres, como grupo o categoría cultural, se instaba [sic] en ese privado. En lo ‘privado de...’, en la marginalidad política” (Kirkwood 1986, 198). La tradicional separación entre lo público y lo privado, la sociedad y el Estado, hombres y mujeres, el primer término de la dicotomía como lo natural, apolítico o pre-político, femenino, y el segundo término como lo cultural, lo político y lo masculino, es anterior al régimen dictatorial y lo trasciende, constituyendo un síntoma del patriarcalismo imperante en la sociedad. Curiosamente, en el contexto del plebiscito esta separación abrupta entre espacios de la política se filtraba en las encuestas políticas. Así, con respecto a la “vocación democrática”, Baño constataba que “en relación al sexo no parecieran existir diferencias de gran importancia, con excepción de una clara mayor indiferencia hacia los diversos regímenes políticos por parte de las mujeres. Tal indiferencia puede explicarse en términos de los factores que creemos que inciden mayormente en la cultura política femenina, esto es, la definición de su rol en el ámbito privado y el *sentido ajeno de la política*; y el fuerte sentimiento comunitario, también propio de la definición social de su rol, que la lleva a evitar el conflicto y buscar fórmulas de integración social. Esto puede quizás apreciarse más claramente al distinguir a las mujeres dueñas de casa de aquellas dedicadas a otras actividades” (Baño 1988, 62, cursivas mías). Al mismo tiempo, en el caso de los jóvenes, la interpretación de sus conductas como violentistas, se relaciona con la consideración pre-política, emotiva, expresiva, poco madura, etc.

²⁰⁴ De acuerdo con Moulian (2008, 161), “tenemos una victoria táctica pero no una derrota estratégica”.

proclamar su voluntad “de ser para todos mis compatriotas como un buen padre de familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el bienestar y la felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los hijos que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes” (ibíd.: 230). Finalmente postulaba la necesidad de “evitar también la tentación de querer rehacerlo todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo existente mereciera ser conservado” (ibíd.: 229). Así pues la recién estrenada democracia no venía a refundar la sociedad chilena, a echar abajo la institucionalidad dictatorial, a revertir las políticas autoritarias, a moderar la algazara del mercado, mucho menos a establecer la verdad histórica y enjuiciar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, o lo haría sólo “en la medida de lo posible”.

La diferenciación entre la democracia política y la democratización social, garantiza a la élite política una administración disciplinante del tiempo, tanto hacia el pasado, decretando superadas las condiciones dictatoriales, como hacia el futuro, “desplazando para tiempos mejores (la democracia por venir) a la expectante demanda social” (Durán 2006, 220). La amnesia respecto del pasado –que se complementa con la resignación respecto del futuro– constituye una operación de control empleada por la Concertación: “El pasado no se puede reconstituir. Ni podemos devolverle la vida a los muertos ni devolverle el trabajo a los que lo perdieron... El pasado se fue. Qué le vamos a hacer. Las injusticias las cometieron otros”.²⁰⁵ La indulgencia de Aylwin para consigo mismo no tiene límite.

La adhesión a esta concepción pretendidamente consensuada, que consistía en establecer “arreglos” entre la clase política civil y la clase política militar, es fruto de las “lecciones” del golpe. Por eso el país *posible* para esta oposición era “el país que –a través de un acto racional colectivo– debiera rehusar ese futuro de mediocridad²⁰⁶; el que tendría que poner sus energías en mejorar la convivencia y en desarrollar el principio de la cooperación –por encima del conflicto destructivo– para comenzar a resolver los múltiples problemas acumulados” (Foxley 1987, 210). Queremos llamar la atención sobre la construcción semántica: el consenso es racional; el conflicto destructivo e irracional.

Es precisamente el imaginario de la salida democrática al conflicto –como lo es, por ejemplo, el de la promesa de “la alegría ya viene” que puso en juego como escatología la Concertación en Chile durante la década de 1990– lo que hace posible la segunda forma de desmovilización popular: aquella en que la ilusión de la paz social que implica la transición a la democracia neutraliza el carácter conflictivo de la política misma. Se trata de la ilusión de la política liberal como política sin conflicto, siendo que el conflicto es justamente el lugar de la política

²⁰⁵ Diario *La Época*, 6 de agosto 1993, p. 1.

²⁰⁶ Foxley (1987, 209) alude a la descripción previa de los problemas que, a su juicio, debe enfrentar Chile y que de no hacerlo comportarían un “futuro de atraso y mediocridad, de disgregación social y violencia política”. En su propuesta de un *Chile posible*, conecta precisamente el análisis de las razones del golpe con la proyección de futuro: “Un desafío así implica comprometerse colectivamente con la construcción de un país, no de los varios países alternativos que tratamos de imponer en el pasado, a través de los proyectos excluyentes que cada grupo perseguía, como su visión –totalizante y sectaria– de lo que constituía ‘la buena sociedad’” (Foxley 1987, 210).

como cuestionamiento del orden dado y del poder que da su medida (G. Díaz 2013, 114)

Cuando dentro de la Concertación empezaron a aflorar las voces “críticas”, originando un debate que se popularizó, caricaturescamente, como la disputa entre “autocomplacientes” y “autoflagelantes”, los artífices de la transición a la democracia salieron en su defensa, criticando las administraciones de Aylwin y Frei, como si de una desviación de los propósitos originales se tratara:

Ese camino fue una definición de principios. Implicó una concepción y una práctica sobre el significado mismo de la política. Lo político es aquí sinónimo de civilización, tolerancia y capacidad para tejer desde la sociedad misma acuerdos que den soluciones reales a los conflictos habida consideración de convicciones, proyectos, posibilidades y riesgos, consciente y colectivamente asumidos. La política es principios, reflexión y responsabilidad” (*La gente tiene la razón* 2009, 44).

Allí mismo se asevera que la misión fundamental de la política es la *representación* de la gente; de ahí que el desencanto y el malestar expresado por las organizaciones sociales, y la desafección de la política, se tradujera desde esta perspectiva en una “crisis de representatividad”. Si la política es, esencialmente, representación, a los movimientos sociales se les concede, a lo sumo, el carácter de “contrapeso” de la dimensión política: “La organización y la acción colectiva de la gente al nivel de la sociedad civil y a partir de intereses, necesidades, cultura, identidades o ideas, configura la dimensión social que contrapesa a la dimensión política de la democracia” (*La gente tiene la razón* 2009, 55). Las dificultades de la articulación entre lo social y lo político en este período provienen, en parte, del hecho de que la Concertación se arrogó la representación del movimiento social:

Los partidos políticos que fueran de oposición en acuerdo con el *anciano régimen* [sic] conformaron así un dominio regulado, en el cual los diversos fenómenos y relaciones sociales que emergieron en la lucha antidictatorial pudieron ser controlados, a partir del establecimiento de criterios compartidos por la nueva coalición gobernante y el “mundo” de la dictadura, acerca de lo válido, lo permisible y lo normal. Los partidos políticos “retomaron” su rol “natural” de autoproclamados interlocutores válidos entre la sociedad civil y el Estado, reduciendo la capacidad de influencia de los movimientos sociales en la política, cuyas demandas no se ajustaban a la transición pactada (Guerrero 2006, 153-154)

Más de dos décadas después, tras las movilizaciones más grandes de toda la posdictadura y en medio de una crisis política que ha remecido los cimientos de la institucionalidad “democrática”, Aylwin puso nuevamente en ejecución su concepción de la democracia y de la política; al recibir el premio ICARE²⁰⁷ pronunció un discurso que llevaba por título “la democracia hay que cuidarla” y, en tono amonestante, señaló: “El voluntarismo es un atajo engañoso, *no es posible*

²⁰⁷ El Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas, es decir, una organización de los empresarios chilenos.

lograr lo imposible y cuando se deteriora la convivencia política, la consecuencia es la división de los chilenos. El diálogo y la búsqueda de grandes acuerdos permiten avanzar más que los intentos de imposición de unos sobre otros” (Aylwin 2014, cursivas mías).

Siguiendo a Hinkelammert, podríamos decir que la democracia de los consensos constituye propiamente un caso de *Realpolitik*²⁰⁸, no de realismo político:

Si la política, como el arte de lo posible, fuera la adaptación a este tipo de imposibilidades, excluiría la búsqueda y realización de alternativas. Sería un simple saber oportunista, como en gran parte de América Latina efectivamente lo es. No obstante, la política es realismo, y el realismo es hacer posible lo imposible. Por eso es arte. Es dar cuenta de las posibilidades abiertas para hacer posible lo imposible, y para realizarlo. Para que la política sea realista no debe ser *Realpolitik*, sino transformación de la realidad (Hinkelammert 1995, 186).

Es decir, la política en un sentido contrario al que le otorgó el pensamiento conservador y *renovado*, consiste en extender la frontera de lo posible más allá de lo imposible, esto es, en demostrar la imposibilidad de lo (que el pensamiento conservador define, en cada época histórica como) imposible, para así conocer aquello que es posible, que por otra parte, sólo se demuestra como tal en la práctica, en un ejercicio de transformación que está abierto *a priori* (Hinkelammert 1984). El pacto, la negociación, la transacción entre élite políticas, autorreferidas y desconectadas de los sectores populares que pugnaban por abrir otros futuros, por ampliar el horizonte de lo posible, suponía en definitiva la imposición de los límites definidos por el régimen militar a las posibilidades de transformación social. Por eso, la transición:

Está marcada, desde su interior, por el signo de la *transacción*, digo transacción como “tranca” de una transición temerosa que exhibe por todas partes residuos de autoritarismo, restos de un imaginario que piensa lo social uniformado y homogeneizado. Frustración de esta democracia que cumple bajo la legitimidad de la ley los disciplinamientos de los cuerpos que la dictadura no pudo llevar a cabo bajo su régimen de terror (Olea 2000, 53, cursivas mías).

Así, la construcción discursiva de *este* consenso como una práctica sana, racional, expresión de madurez política, producto del aprendizaje originado con el golpe de Estado, supuso un elemento fundamental de legitimación del modelo de sociedad autoritario y elitista. En este sentido, debe reconocerse “la influencia de campañas intencionales por parte de ciertas elites políticas en pro de la desmovilización, con el objeto de poder llevar a cabo transiciones negociadas. Esto es logrado mediante la difusión de discursos que llaman a la racionalidad y al realismo político” (Guerrero 2000, 146). Pero el falaz consenso no fue la única estrategia, cuando

²⁰⁸ Que define como “la imposición, por parte del poder dominante –a sangre y fuego–, de los límites a cualquier política de alternativas, de parte de los otros, para que se ajusten a las posibilidades que el poder deja abiertas” (Hinkelammert 1995, 186).

aquél no fue suficiente, los gobiernos de la Concertación no han dudado en recurrir a la violencia.

3.4.3. *Disciplinamiento de los movimientos sociales*

La gobernabilidad política se sustentó esencialmente en la idea de una sociedad que había conjurado sus “grandes” conflictos, en la ansiada reconciliación de los chilenos, el fin de la historia, la búsqueda de la paz y del orden, etc. Por esta vía las “estrategias” de desmovilización implicaron la construcción narrativa de una sociedad desprovista de las inquinas del pasado y deseosa de recuperar la “normalidad”, el recurso a la amenaza de la regresión autoritaria, la institucionalización de muchas de las demandas emanadas de los sectores movilizados, cercanos a la Concertación, la cooptación de líderes y dirigentes sociales para puestos de gobierno, la aplicación de políticas sociales destinadas a paliar la pobreza y la exclusión. Pero contra aquellos grupos que no transigieron con el “ejemplar” diseño de la transición y con la “modélica” imagen de la sociedad chilena, los gobiernos *concertacionistas* no dudaron en emplear la coerción, en disciplinar a los grupos que pugnaban por extender la frontera de lo posible más allá de lo que las nuevas autoridades disponían: es el caso de los grupos políticos que siguieron realizando acciones armadas, de sectores del movimiento mapuche, etc. En estas situaciones los gobiernos posdictatoriales recurrieron a la criminalización de los actores, a la judicialización de la protesta, a la aplicación de leyes antiterroristas heredadas de la Dictadura y a la cárcel.

En primer lugar, se ha recurrido a la dimensión subjetiva del movimiento para explicar la desmovilización. Con la llegada de la Concertación al gobierno se habría producido una desbandada generalizada de militantes del movimiento hacia los puestos de la administración. Este trasvase de militantes de movimientos sociales hacia las instituciones gubernamentales es una de las características del *segundo disciplinamiento social*, entendido como un “proceso de ‘digestión’ de los movimientos sociales, que utiliza a la institucionalización de los mismos como estrategia de control” (Guerrero 2006, 153), en un movimiento de inclusión-excluyente. La cooptación ha operado como un factor explicativo para dar cuenta de la desarticulación de los actores sociopolíticos que durante la dictadura habían emprendido una lenta reconstrucción y participado activamente en la lucha antidictatorial: “Se instaló un proceso de cooptación que originó cierto elitismo y, en alguna medida, un grado de separación entre los dirigentes, sus bases políticas y la población” (Falaha 1993, 73). En un trabajo sobre los “hijos drogadictos de la dictadura”, el autor recogía el testimonio de uno de esos jóvenes *pobladores* que participó en las luchas sociales en los ochenta y se decepcionó con la llegada de la democracia política:

Yo no sé qué pasó, que al cabo de un par de años el mismo compañero, que estaba contigo apedreando a los pacos, estaban en el PPD, y ese huevón ahora ni te saludaba y uno que siguió en la lucha y con los ideales terminó mal y el

que se vendió está bien, hay unos sentimientos hasta de rencor sin duda (citado en Riquelme 2011, 214-215).

La institucionalización de los movimientos sociales, vía cooptación de algunos de sus militantes va acompañada de “la promoción, como únicos modos de expresión legítimos, de la negociación, el proceso electoral y el trabajo indirecto, a través de las mediaciones de las instituciones gubernamentales” (Guerrero 2006, 153). La misma política social de los gobiernos *concertacionistas* permite entender que las reivindicaciones sociales son atendidas, recuperando la “filantropía y asistencialismo [...] como un reelaborado mecanismo para *frenar e impedir la participación social activa* y, por ende, la conformación de una sociedad democrática” (Illanes 2010). Es decir, esta nueva-vieja democracia no descansa en la constitución de actores sociopolíticos activos, críticos y creadores, sino en la pasividad de los individuos –la *gente*, de acuerdo con el manifiesto concertacionista–, sujetos de la “pedagogía del ‘bono’ y de la ‘protección’” (íd.). Así:

A nivel político, la respuesta a la pregunta por las razones de la desmovilización en los noventa, debe considerar que la “governabilidad política” tiene en la desmovilización social uno de sus componentes claves. El discurso de la participación social en la última década ha estado orientado a favorecer la institucionalización de los movimientos y la canalización de las demandas. Los dirigentes de pobladores son hoy alcaldes o concejales, las dirigentes de mujeres están en el SERNAM y sus bases presentan proyectos al FOSIS, donde se encuentran con antiguos funcionarios de ONG. La institucionalización del movimiento social es el resultado del clima de negociación de la transición política de los 80, pero también de las orientaciones propias de las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los actuales funcionarios públicos hace poco más de diez años apedreaban o se tomaban las oficinas en las cuales hoy concurren rutinariamente a realizar su trabajo. Los dirigentes de base de los ochenta pueden apreciar con más claridad que no todo lo que brilla es oro, ya sea que quedaran a uno u otro lado de la institucionalidad (Espinoza 2000, 208).

La cooptación no significa necesariamente deglutir el movimiento pero sí descabezarlo o provocar la división del mismo, situaciones que tanto en el movimiento de mujeres, como en el de *pobladores* o en el sindical, fueron muy notorias. De hecho,

Durante algunos años hubo cierta esperanza de que el distanciamiento del Estado del movimiento sindical había sido algo propio del período de la Dictadura. Con el retorno a la democracia se elevaron transitoriamente los índices de afiliación, como reflejo de las expectativas que se habían desarrollado. Pero pronto se constató que los mayores espacios alcanzados en ciertos ámbitos no mejoraron sustancialmente la capacidad de negociación a través de la institucionalidad legal (Rojas y Aravena 2000, 233-234).

Los activistas sociales, aun siendo también militantes de los partidos de la Concertación, advirtieron pronto que estaban siendo marginados de los procesos de toma de decisiones sobre el curso de la transición: “El escepticismo sobre el rol que

las organizaciones populares jugarían en la postransición estaba siendo alimentado por la constatación de que las demandas por mayor participación en la toma de decisiones no estaban siendo atendidas por la Concertación” (Greaves 2002, 101, traducción propia). Por eso, la acción de los movimientos sociales en esta etapa estuvo, en parte, encaminada a evidenciar esa disociación entre los planteamientos generales de los líderes políticos de la Concertación a propósito de la democracia y la participación, y la práctica de exclusión de los movimientos sociales e imposición de sus directrices, es decir en “demostrar que al distanciarse de los movimientos populares, los dirigentes de la Concertación no estaban practicando la democracia que articulaban en su retórica” (ibíd.: 104, traducción propia).

La bifurcación entre los planteamientos de los partidos políticos agrupados en la Concertación y los anhelos y propósitos de los luchadores sociales y políticos se traslució, en mayor medida, en el espacio de los municipios y en torno a la democratización de las Municipalidades, expresándose el conflicto entre lo político y lo social, como pugna y desencuentro entre lo local y lo nacional. Efectivamente, los partidos de la Concertación tenían una idea de cómo debía llevarse a cabo la transición y del tipo de sociedad que debería ser la chilena a partir de entonces, pero esas directrices estaba apenas definidas a nivel nacional, macro, general, y era necesario “bajarlas” e implementarlas en los ámbitos concretos de acción y en los territorios específicos. De esa manera, la lucha por la democratización de la comuna se convirtió en un escenario ideal para plasmar los distintos proyectos en pugna y las distintas concepciones de democracia en juego. Los movimientos sociales tensionaron los límites impuestos por el modelo *concertacionista* de transición poniendo en juego el mismo discurso del que la Concertación hacía gala y que le había granjeado el triunfo en las elecciones de 1989. Emplearon ese discurso, radicalizándolo y mostrando las deficiencias y limitaciones de las propuestas concertacionistas. Es esa escisión entre lo nacional-político y lo local-social lo que explica que “en varias *poblaciones*, comunistas y representantes del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) fueran elegidos para puestos de liderazgo a pesar de que en las elecciones presidenciales y parlamentarias generales, estas mismas *poblaciones* votaron en general por los candidatos de la concertación” (ibíd.: 106, traducción propia). Así:

En el contexto de la democratización de las juntas de vecinos y otras estructuras de la comunidad, una lucha se desarrolló entre los líderes de los movimientos de base y las élites políticas que se centró en torno al conflicto sobre el significado de la democracia y la participación popular: en el centro de este conflicto estuvo el papel que los movimientos sociales populares y las asociaciones comunitarias desempeñarían en el gobierno local y en la democracia posterior a la transición. Es decir, la democratización de los consejos reveló un cisma discursivo que enfrentó a los líderes de la Concertación y sus partidarios a nivel de base, contra los líderes de movimientos más radicales –algunos de los cuales eran también partidarios de la Concertación– pero que vieron la democracia en términos más amplios, sobre el papel que la participación popular jugaría en la post-transición (ibíd.: 106, traducción propia).

En la senda de los trabajos que tratan de explicar la desmovilización por la cooptación, que supone la reubicación de los activistas del movimiento en puestos de la administración pública y la reestructuración de los espacios de encuentro y de las alianzas, se ha señalado que los procesos de desmovilización observados a principios de la década de los noventa se deben a la desestructuración de las alianzas que habían hecho posible las movilizaciones y protestas contra la dictadura: “Uno de los efectos del cambio de régimen fue precisamente el reducir la cantidad de aliados disponibles” (Bastías 2010, 23). Efectivamente, “después de la elección del nuevo gobierno civil, por el contrario, los dirigentes comunitarios señalaban que se sentían abandonados por los partidos políticos, desconectados de los movimientos sociales más amplios, y aislados de sus vecinos” (Paley 2001, 88). La desvinculación de quienes antes habían sido los aliados de los *pobladores* se verifica en las protestas que tuvieron lugar durante los primeros años del gobierno de Aylwin bien por la neutralidad adoptada frente a aquéllas –negar su participación incluso en términos de declaración de solidaridad–, bien por la frontal oposición a las mismas –declarando su carácter inoportuno o ilegítimo, negándoles de esa forma validez–. Habría sido entonces el paso desde la oposición al gobierno lo que habría restado aliados al movimiento, y declarado incluso su carácter superfluo, una vez que los partidos políticos que “conducían” las protestas y movilizaciones, se instalaron en el Palacio de la Moneda. Así, en las protestas de 1990 y 1991 el autor observa que “los grupos que actúan como aliados han cambiado considerablemente en su composición, ocupando las Iglesias, la CUT, y los partidos políticos de gobierno, lugares marginales dentro de las redes” [...]. “La Vicaría de la Solidaridad y la Comisión Chilena de Derechos Humanos juegan un rol marginal. La Iglesia, la CUT y el Partido Socialista, por ejemplo, se desvinculan de las protestas y prefieren ocupar el lugar de observadores neutrales o asumir posiciones antagónicas débiles” (Bastías 2010, 21).

Al perder a sus importantes “aliados”, el movimiento fue incapaz de incidir sobre otros grupos no movilizados, de encuadrar su protesta en un determinado marco de sentido (*framing* o encuadre) y de colocar una problemática en la agenda pública. Este enfoque permite iluminar la relevancia de la dimensión relacional del movimiento; pero a la vez constata la escisión entre movimiento y partido, al concebir al segundo como “aliados” del movimiento, y no parte del mismo o su instrumento político. Por otra parte, el excesivo énfasis “en los aliados, los públicos y los medios” presente en esta perspectiva, nos proporciona una imagen del movimiento que lo convierte esencialmente en un fenómeno mediático. Así lo reconoce el propio autor al afirmar que:

No es posible determinar si la disminución tiene que ver con una disminución real en la protesta o si, por el contrario, significa una disminución en la cobertura de la protesta. Siguiendo la perspectiva de la esfera pública, es irrelevante si la disminución es sólo un problema de cobertura, pues el efecto es en gran medida el mismo: protesta sin cobertura es un no-evento (Bastías 2010, 20).

La reducción de la esfera pública al fenómeno mediático nos plantea el problema efectivamente de que lo que no sale en los medios de comunicación masivos (fundamentalmente la televisión y los periódicos de mayor tiraje) no existe. Y un análisis de ese tipo no puede abordarse sin tomar en consideración las características y dinámicas de los medios de comunicación existentes: generalmente grandes grupos monopólicos vinculados estrechamente al poder económico y político. En este sentido no es baladí que muchas de las revistas surgidas en dictadura –con censura y férreo control de las “autoridades”– hayan desaparecido en los primeros años de la transición, frente a la consolidación de un monopolio o duopolio mediático, controlado por los principales empresarios del país. Si no, el análisis presupone la neutralidad de la prensa o la diversidad y libertad de la misma, ambos fenómenos inexistentes en el Chile posdictatorial.

Por otra parte, el movimiento es presentado como un esfuerzo esencialmente volcado hacia la *visibilización* exterior, dimensión que no dudamos que sea relevante, y que ha sido quizás excesivamente considerada por los distintos grupos y colectivos movilizados, sin embargo, aun reconociendo esa primacía otorgada a la aparición en la prensa de las acciones de protesta, el análisis enfocado de esa manera desconoce o infravalora los aspectos de construcción interior del movimiento y de las propias alianzas.

A las estrategias anteriores se habría sumado, a juicio de Moulian (1997, 354), “el deseo de normalización” de la ciudadanía, es decir, “ese deseo de no tener que continuar desempeñando papeles heroicos, de que la política perdiera su ‘insoportable gravedad’”.²⁰⁹ Esta tesis contradice, en parte, la hipótesis de la reivindicación de un mayor protagonismo de los sectores tradicionalmente excluidos: los actores que habían reclamado en los ochenta un papel principal, protagónico, parecían desear ahora retirarse a un rincón sosegado y alejado de los focos. Sin embargo, entronca, con la concepción arraigada de la política, según la cual los actores políticos se forman, fundamentalmente, a partir de la delegación y la representación.

De otra parte, la política en materia de “seguridad pública” se orientó a “desactivar” a los grupos socio-políticos que no habían renunciado a las acciones armadas, como lo demuestra el tratamiento de los presos políticos. O la aplicación de la ley antiterrorista a los luchadores mapuche. Y es que “una vez cerrado el ciclo de movilización considerado legítimo por aquellos sectores que retornaron al ejercicio del poder, los restantes movimientos y movilizaciones comenzaron a ser

²⁰⁹ Es más, esta reivindicación de paz y orden constituiría un rasgo de la idiosincrasia chilena pues, de acuerdo con Lechner (2009, 159), existiría, en este caso, “un miedo ancestral al caos y una obsesión a veces compulsiva por el orden”. En el mismo sentido, Baño constata, en una encuesta realizada en la segunda quincena de agosto de 1987, “que la falta de participación y de interés en participar no implican solamente el sentirse ajena a la actividad política, sino que también pueden descansar en un rechazo a la política debido precisamente al carácter conflictivo que tiene. Este es un aspecto que nos interesa especialmente en este estudio, debido a que hay fuertes indicios de que el rechazo al conflicto y la búsqueda de una solución comunitaria al quiebre social puede ser un elemento importante en la cultura política chilena actual” (Baño 1988, 46-47). La conclusión de este estudio es que “es posible apreciar un fuerte rechazo al conflicto y una búsqueda de consenso y de unidad para la sociedad y la política en general” (ibíd.: 146).

etiquetados y calificados como conductas desviadas, por los que se les aplicó políticas de control, neutralización y castigo” (Guerrero 2006, 153). El cierre de “ciclo legítimo”, como hemos visto, se había dado, con propiedad, desde mediados de los ochenta. De ahí en adelante, esas expresiones fueron consideradas un problema de orden público y, una vez en el gobierno, tratadas como un problema de delincuencia común, no como un asunto político. La Concertación no dudó en emplear la fuerza contra aquellas expresiones del movimiento popular más rebeldes a su política de consenso e institucionalización. Así fue durante los primeros años con las organizaciones político-militares que siguieron realizando acciones armadas, como el Movimiento Juvenil Lautaro o el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. La construcción de la Cárcel de Alta Seguridad constituye uno de los hitos de esa política represiva. Junto con ellos, el movimiento mapuche ha sido uno de los más castigados por la aplicación de las leyes antiterroristas – heredadas de la dictadura–, en este caso “la respuesta también ha sido represión policial. Y la mayor prueba de ello lo constituye la represión sistemática ejercida contra el movimiento político *Mapuche* en el período pos dictatorial, desplegada desde el comienzo mismo de la transición” (Levil 2006, 225).

CAPÍTULO IV

La emergencia de la Nueva Historia (Social): afirmación del movimiento popular

La Nueva Historia Social es una ciencia para una nueva historia social. Es, por eso, una ciencia que prepara la venida de los nuevos movimientos sociales.

Gabriel Salazar (2002a, 22)

En el plano teórico, la derrota de la “vía chilena al socialismo” supuso la necesidad de repensar los paradigmas desde los cuales se había examinado la transformación de la sociedad y, particularmente, la revolución. Las ciencias sociales –y, específicamente, la sociología– experimentaron un proceso de *renovación* particular, que no coincide con la revisión y crítica que formularon otras corrientes intelectuales. De ahí que las distintas *renovaciones* se concretaran en opciones teóricas y políticas muy diversas, incluso contradictorias. Desde el grupo de historiadores que formularon lo que se conoce como Nueva Historia (Social), también se enarboló la bandera de la *renovación*. En muchos aspectos (vanguardismo, teoricismo, sobreideologización) la crítica de la Nueva Historia entronca con la que realizó la sociología *renovada*. Pero en este caso, la *renovación* supuso una auténtica revolución epistémica, gestada por la modificación del *punto de partida* del conocimiento y de la práctica política, que hizo emerger a los sectores populares como el epicentro de otra propuesta interpretativa de la historia. Así, la Nueva Historia, a diferencia del giro conservador de la sociología *renovada*, ahondó sus raíces en la realidad de los sectores populares y, por esa vía, ha buscado constituirse en un esfuerzo honesto y radical por leer la transformación de la sociedad desde los movimientos sociales, potenciando sus capacidades.

Los gérmenes de esta Nueva Historia quizás haya que buscarlos en el periodo pre-golpe de Estado²¹⁰, pero fue sin duda desde finales de los años setenta y más claramente en la década de los ochenta, cuando se fraguó su emergencia como corriente historiográfica manifiestamente diferente de las historiografías tradicionales. En ese sentido, la Nueva Historia también es hija de su época: hija de la derrota de la Unidad Popular, del repliegue del movimiento popular, de las transformaciones neoliberales que afectaron a los sectores populares, de la lucha contra la Dictadura. Cabe señalar que una de las tendencias generales posgolpe, tanto en las ciencias sociales como en la historia, fue *la revalorización de la investigación histórica*, con el fin de acumular un mayor y mejor conocimiento de las condiciones concretas de la realidad chilena, toda vez que una de las críticas formuladas a la historiografía marxista y a la sociología “sistémica” ponía de manifiesto su obsesión filosófica y su escaso conocimiento de la realidad nacional.²¹¹ Por eso, tras el fin de las certezas, “uno tras otro, los intelectuales (otrora rebeldes) de la izquierda chilena se han encaminado al reencuentro de un santuario olvidado: el de la Historia” (Salazar 1986, 102). Esta necesidad provenía de la constatación de la propia ignorancia sobre la historia nacional que, de acuerdo con esta lectura, había caracterizado a los militantes de los años sesenta. La adhesión de éstos al proyecto revolucionario no habría provenido tanto del *conocimiento* de la realidad como de una “fe ciega” en la razón que les asistía; por eso su compromiso:

²¹⁰ El historiador Gabriel Salazar cuenta la experiencia de trabajo que desarrollaba en el departamento de Historia de la Universidad Católica de Santiago, donde habían comenzado a tomar cuerpo algunas de las críticas que luego formularía *explícitamente* a la historiografía tradicional (entrevista de la autora, diciembre 2013).

²¹¹ Sobre los grupos de historiadores que, en distintos centros académicos independientes, durante la década de los ochenta llevaron a cabo esfuerzos de *renovación* de la disciplina véase (Salazar 1990b). Bajo la iniciativa del grupo de historiadores adscriptos a Flacso se organizó en noviembre de 1982 el Encuentro de Historiadores Jóvenes, un espacio de encuentro y debate de la historia alternativa, que celebró reuniones periódicas hasta 1988.

No fue difícil, no es que necesitábamos ser convencidos, y antes de leer “los clásicos” –y a veces, sin leerlos– sabíamos que teníamos razón. No teníamos que investigar nada, ni inquirir nada, ¿para qué, si la justicia era evidente, los clásicos eran científicos y la razón –o, cuando menos, la injusticia– estaba de nuestro lado? No había, pues, que preocuparse demasiado por “interpretar” la realidad, sino por transformarla. No se trataba de ser un “sujeto social de la política”, sino un “militante” en un partido organizado para la acción (Salazar 1986, 103-104).

Como sucede siempre con la indagación histórica, pero en este caso con mayor dramatismo considerando la situación de “desconcierto” más o menos generalizado tras el derrumbe del sueño emancipador, la preocupación por el pasado vino de la mano de las urgencias del presente. En esas circunstancias, “la necesidad vital de averiguar sobre nuestra situación actual, ha hecho derivar una cantidad importante de investigaciones hacia *la historia contemporánea*” (Cruz 1986, 5). De este modo, la ruptura histórica suscitó un “giro copernicano” (Garcés 2003b, 473); giro que, en el campo de la historiología, se expresó en el desarrollo de una corriente *nueva*, la Nueva Historia, cuyo principal signo distintivo ha sido reinstalar a los sectores populares en el centro del análisis sociohistórico, al reconocer su centralidad sociopolítica. De manera más general esta propuesta implica:

Elegir un punto de vista que interroga el pasado desde la experiencia de los sujetos de carne y hueso, y que reconoce en la experiencia concreta de los sujetos, individuales y colectivos, un principio fundamental de agenciamiento, de protagonismo, de historicidad. *No hay historia sin sujeto y no hay sujetos sin historia*, esta parece ser la premisa que organiza a la historia social (Garcés 2003b, 473, cursivas mías).

Esta premisa deriva de la crítica realizada por los historiadores a la historiografía prevaleciente hasta la década de los setenta –tanto a la conservadora como a la marxista–, pero arraiga en la constatación empírica de la centralidad *fáctica* de los sectores populares en la resistencia y en la lucha antidictatorial, expresada en las iniciativas populares de autogestión y, de manera incontestable, en las Jornadas Nacionales de Protesta. Es la confluencia de aquellos dos procesos lo que determina “la entrada en la teoría política e histórica del ‘sujeto social’ en tanto que tal” (Salazar 1985, 102).

El nacimiento de esta corriente historiológica es el resultado de muchas y variadas trayectorias personales y colectivas, pero en ella convergen dos experiencias que sobresalen: en primer lugar, los trabajos que un grupo de historiadores y educadores sociales jóvenes –entre los que destaca Mario Garcés²¹²–, venía realizando desde inicios de la década de los ochenta, en lo que se llamó significativamente *Taller Nueva Historia*, y más tarde en ECO²¹³, para escribir las historias y recuperar las memorias de sindicatos, *poblaciones* y comunidades locales, con el propósito de recomponer los

²¹² Y Pedro Milos.

²¹³ Dada la constitución interdisciplinaria o a-disciplinaria del campo académico alternativo y del tipo de centros académicos que emergieron en los ochenta, a la que ya nos hemos referido en el segundo capítulo, también trabajaron en ECO o participaron en sus actividades profesionales de otras disciplinas, como sociólogos o psicólogos.

lazos sociales *rotos* por los efectos de la Dictadura y contribuir a la rearticulación del movimiento popular. La *nueva historia*, desde esta vertiente, está intrínsecamente vinculada con la *educación popular*, y ello influirá en la definición de los movimientos sociales como experiencias de autoeducación. Y, en segundo lugar, las investigaciones del historiador Gabriel Salazar que, especialmente desde el exilio en Inglaterra, dio inicio a un esfuerzo de recuperación de la historia del “bajo pueblo”; y, después de su retorno a Chile, en 1985, comenzó a trabajar en SUR, circunstancia que le permitió estar en contacto con las discusiones de la sociología *negacionista*, y que propició una respuesta de su parte a los postulados de aquella acerca del movimiento popular. Salazar es considerado el “motor teórico” de la Nueva Historia porque ha realizado el intento más acabado por sistematizar los principios y planteamientos de esa corriente.

En síntesis, la emergencia de la Nueva Historia es resultado de un desplazamiento que no afectó exclusivamente a la temática (lo que en otra época se llamó la “cuestión social”) o al período temporal (etapas más recientes de la historia contemporánea, incluso el tiempo presente) considerado en las investigaciones, sino que derivó en una auténtica revolución epistémica al interior de la disciplina. La nueva historiografía chilena comporta un desplazamiento *epistémico*, es decir, modifica el lugar desde donde se construye el conocimiento, y supera –o trata de hacerlo– la dicotomía sujeto (cognoscente)–objeto (conocible), pues el “objeto” de conocimiento, el sujeto popular, es considerado un sujeto de conocimiento también, un *sujeto cognoscitivo*. Es este reacomodo en la definición de quién conoce, desde dónde y para qué, lo que supone una auténtica ruptura con la historiografía anterior. Por eso, los nuevos historiadores dicen que se trata de una historia “desde abajo y desde dentro” (Salazar 2003a), porque está construida a partir de la centralidad conferida a los sectores populares, frente a la historia elitista erigida en torno de personalidades destacadas y acontecimientos cupulares, y porque emerge desde el seno de esos propios actores, y no sólo trata de *los de abajo* vistos por *los de arriba*.

En este capítulo describimos, en primer lugar, la historicidad del pensamiento desplegado en ECO respecto de la apuesta epistémica y política del protagonismo popular y acerca de la centralidad de la educación popular en la constitución de subjetividades políticas. En seguida, sistematizamos, de la mano fundamentalmente de la reflexión *salazariana*, los presupuestos detrás de la Nueva Historia; por último, damos cuenta de las dificultades por las que atravesaron las prácticas de educación popular y la Nueva Historia en la posdictadura, pero también del influjo que parecen tener en las experiencias más recientes de movilización, y problematizamos las tensiones al interior de la “corriente”, específicamente en torno a la escisión entre lo social y lo político.

4.1. ECO: Educación popular y protagonismo popular

ECO, Educación y Comunicaciones fue uno de los tantos centros académicos independientes creados durante la Dictadura, concretamente en 1980, por un pequeño equipo de profesores (algunos exonerados de la universidad) y alumnos, cuyas líneas de investigación-acción se ordenaron en torno de tres grandes áreas: educación popular,

iglesia popular y comunicación popular.²¹⁴ Esta tríada conceptual constituye el entramado de una orientación epistemológica y política que buscaba dotar de centralidad a los sectores populares. La “opción por los pobres” se transmutó, en ECO, en la *tesis del protagonismo popular*. Desde su constitución, “ECO apostaba a la *rearticulación de un movimiento popular pre existente* arrasado y fragmentado por la dictadura” (Villela 2012, 7). Y “este objetivo práctico, era la razón del trabajo de intervención, y en definitiva, la *epistemología* legitimadora de la acción” (ibíd.: 8). De acuerdo con lo anterior, la práctica se antepone a la teoría, o más bien, la elaboración teórica se concebía un momento de la praxis transformadora; la *unidad del saber*, esto es, la articulación entre conocimiento y práctica, constituye uno de los cimientos de esta perspectiva. Los trabajos en torno a la importancia de la “educación popular” proporcionan los análisis más sugerentes para la comprensión de los movimientos sociales, en cuanto la dimensión educativa fue ganando centralidad en la construcción que los *nuevos* historiadores realizaron del movimiento social.

4.1.1. *La educación popular: de lo transitorio a lo permanente*

La educación popular “nació vinculada orgánicamente a los movimientos sociales” (Garcés 2010, 55). Desde la década de los sesenta y, más claramente, en los ochenta del siglo XX se verificó una proliferación de las experiencias de educación popular y una revitalización de los movimientos sociales. Esta “correlación” entre la extensión y profundización de las prácticas de educación popular y la vigorosidad de los movimientos sociales, plantea la sugerente hipótesis de que los movimientos sociales pueden ser vistos como movimientos educativos. En buena medida, la reflexión de los educadores populares se orientó a fundamentar la idea de la práctica *auto-educativa* como una dinámica constitutiva del movimiento social, e intrínseca a la transformación social. Incluso la propia educación popular asumió una dimensión *movimientista* en la expresión “movimiento de educadores populares” (Garcés 2010). Sin embargo, esta concepción profunda de la autoeducación como un eje constitutivo del movimiento social se fue construyendo con el tiempo, a medida que la Dictadura se afianzaba y el proceso de cuestionamiento de las estrategias del movimiento popular alumbraba falencias históricas y problemas insuficientemente abordados en el pasado.

En un primer momento la impresión generalizada fue que la Dictadura iba a *caer* pronto, que la derrota del movimiento popular no se prolongaría por mucho tiempo, y que se estaba viviendo una situación de excepción que pronto retornaría a la “normalidad”.²¹⁵ Mientras persistió la “ilusión” de la pronta retirada de los militares o

²¹⁴ Quizás por su vocación más dirigida a la dinamización del mundo popular, ECO se reconoce principalmente como una ONG.

²¹⁵ La promesa de los militares había sido “extirpar el cáncer marxista” que, a su parecer, ponía en riesgo la “democracia” burguesa y los valores de la identidad nacional; por ello algunos políticos “ingenuos” o interesados –como la dirigencia del Partido Demócrata Cristiano– creyeron que pronto les sería devuelto el poder político, e instigaron, primero, y aplaudieron, después, la asonada militar. Sin embargo, como ya hemos desarrollado en los capítulos anteriores, la pretensión refundadora de la Dictadura se puso de manifiesto desde las primeras declaraciones y documentos propalados por la Junta militar. La evidencia del carácter permanente de las reformas introducidas por los militares se dejó sentir primero en el terreno económico, con la ola privatizadora iniciada a partir de 1975 bajo la orientación de los *Chicago Boys* y la reforma laboral. Más tarde, en 1980 la Dictadura hizo aprobar la

de su posible derrota, la educación popular –incluso por aquellos que la “promovían”– fue vista principalmente como un “parche”, una solución temporal para contribuir al proceso de rearticulación de los militantes en lugares de encuentro y de diálogo, toda vez que el ágora pública había sido desmantelada y no existían espacios “propriadamente” políticos. La educación popular se “insertó” en las organizaciones populares que surgieron con un fin distinto al educativo, con propósitos muy concretos vinculados generalmente a la sobrevivencia de los sectores populares: comedores infantiles, talleres productivos, bolsas de cesantes, grupos de salud, comités de sin casa, etc. Es decir, las organizaciones populares se presentaban “como el principal espacio de desarrollo de la educación popular” (ECO 1983, 5). Ciertamente también emergieron organizaciones juveniles y culturales, más vinculadas con la reconstrucción identitaria, que tuvieron una participación destacada en las movilizaciones de los años siguientes.

Las prácticas educativas (que emergieron antes que la reflexión sobre la educación popular) se anclaron a espacios de organización del pueblo y propiciaron un cuestionamiento, una reflexión *consciente*, acerca de las características, las potencialidades y los límites de dichas organizaciones; el tipo de relaciones entre sus miembros, y con otros espacios o sectores; las necesidades de los sectores populares; el contexto dictatorial, etc. Es en esa voluntad de interrogarse sobre la realidad circundante y las capacidades de los sectores populares para transformarla donde anida el carácter educativo de las prácticas, muy heterogéneas, a las que hacemos referencia. Esas prácticas buscaban promover la adquisición entre los sectores populares de un tipo de *saber* (síntesis de teoría y práctica) *vinculado a un pr oyecto de liberación*: “Saber pensar, saber trabajar, saber producir, saber crear, saber conocer, saber sentir, etc. En este sentido saber es sinónimo de capacidad” (ECO 1983, 5). Es decir, el saber es un *poder*, no como dominación sino como *potencia*.²¹⁶ Más tarde, acompañarán a esa labor los talleres y los encuentros de educadores populares, en los que se buscaba examinar los presupuestos teóricos y epistemológicos que estaban detrás de la práctica de la educación popular y fundamentar la vigencia y el desarrollo de lo que los educadores populares denominaban “protagonismo popular” y que constituía la apuesta de su labor investigativa y de intervención social.

Por lo tanto, cuando hablamos de la educación popular nos referimos al proceso que se dio al calor, de manera *dialógica*, con los esfuerzos de reconstrucción del movimiento popular chileno. Un proceso reforzó al otro. Al cuestionarse los actores populares sobre sus deficiencias históricas, se revelaron las prácticas heterónomas, de extrema dependencia del Estado y de los partidos políticos, de instrumentalización por parte de éstos, de machismo y autoritarismo en el seno de las organizaciones obreras y populares, de escasa democracia interna, de marginación y subordinación de las mujeres, que ahora eran las protagonistas de las organizaciones de sobrevivencia y, de los jóvenes, que tomaron el lugar central en las Jornadas de Protesta Nacional erigidas en contra de la Dictadura. Todo ello fue arrojando luz sobre la relevancia de cultivar la

nueva Constitución política del país en la que asentaba los principios de organización del Estado y de la sociedad, que rigen hasta hoy, con pequeñas modificaciones, al pueblo chileno.

²¹⁶ No un *poder-sobre* sino un *poder-hacer*, diríamos con Holloway (2001b).

auto-educación como un ejercicio perenne en el seno de las organizaciones populares, es decir, fue construyendo la educación popular como un componente esencial de las luchas. Así se fue transitando desde aquella concepción de la educación popular como un *paliativo* para la situación de extrema fragmentación y debilidad del movimiento popular, en tanto no se ponía fin a la Dictadura, a una idea de *los movimientos sociales como procesos educativos*, y acerca de la necesidad de las comunidades de problematizar constantemente la realidad social y su inserción en ella.

El hecho de desarrollar *conscientemente* una reflexión ubicada socialmente determinaba el carácter del conocimiento emanado de las prácticas de educación popular: se sabía necesariamente subjetivo y parcial. Esta insistencia en el conocimiento concreto pretendía ser una respuesta a la elucubración *teoricista* que, desde su perspectiva, había prevalecido anteriormente en el pensamiento social y político. Esta valoración y la crítica a la configuración histórica del movimiento obrero y popular coincide con la revisión que las ciencias sociales *renovadas* hicieron de algunas derivas de la teoría política marxista: el extremo determinismo economicista, la preponderancia de los sistemas, la excesiva burocratización de las decisiones, la relación vertical y jerárquica entre la vanguardia y la masas, la concepción de la toma del poder como *súmmum* de la estrategia revolucionaria, la exclusividad de la “forma partido” en la lucha política, etc. Con todo, las consecuencias de esta revisión fueron diametralmente opuestas: en el caso de la sociología, la *renovación* derivó en una actitud pretendidamente *distante* respecto de los actores sociales en lucha, que soslayaba el compromiso con las élites políticas, es decir, en una opción elitista y conservadora; por el contrario, los educadores populares y *nuevos* historiadores consideraron que el teoricismo había sido producto de una teoría despegada del devenir real de los sectores populares, y apostaron a una relación más estrecha con el mundo popular y a un compromiso explícito con los procesos de democratización gestados desde abajo, es decir, enterraron más profundamente sus *raíces* en las necesidades de los sectores populares y forjaron una concepción radical de la democracia.²¹⁷

Con la clara pretensión de constituir una práctica política *situada en y desde el pueblo*, la principal preocupación planteada por los educadores populares se refería a la *real contribución política de la educación popular*.²¹⁸ Como ya hemos indicado, se proponían contribuir a la reconstrucción del movimiento popular que existía antes del golpe, capaz de impulsar un proyecto de democratización desde la base. Esa reconstrucción no se pensaba como una mera reinstalación de aquel movimiento, sino como la formación de uno que hubiera aprendido de los errores del pasado. La educación popular –o la auto-educación popular, como prefiere Salazar²¹⁹–, ha sido

²¹⁷ En este caso, la revisión del marxismo y la recuperación, entre otros, de los trabajos de Gramsci, aportaron elementos para la revitalización de propuestas populares que habían emergido al calor de la práctica. Por ejemplo la idea de que la lucha política es una disputa por la hegemonía, puso en el centro del análisis la cuestión educativa, y permitió constituir lo educativo como un arma política, que no se erige en reemplazo de todas las luchas pero sí en un complemento indispensable de cualquier proyecto de humanización (ECO 2012c, 99).

²¹⁸ Una buena síntesis de esos trabajos en (ECO 2012a).

²¹⁹ Desde los inicios del sistema nacional de educación las élites chilenas pensaron en la necesidad de proporcionar algún tipo de “educación” al pueblo, capaz de inocularle las ideas de respeto al orden y a

definida como “ese conjunto de procesos educativos *suplementarios* que, sobre el margen del sistema dominante, prepara a las generaciones pobres para desempeñar adecuadamente, no roles estructurados, sino *roles hi stóricos*, atingentes a su propia liberación y a la refundación por debajo de la sociedad chilena” (Salazar 1987, 87, cursivas mías). La “refundación por debajo de la sociedad” requería del protagonismo de *los de abajo* y la educación popular debía ser parte de la práctica cotidiana del movimiento.

4.1.2. *El protagonismo popular: La afirmación de los saberes populares*

Los militares consideraron a los sectores populares “rotos alzados”²²⁰ que se habían atrevido a desafiar el orden existente y a reclamar un lugar protagónico en la sociedad y en la historia. Por eso:

La ira desatada contra los cuerpos de los prisioneros y torturados expresaba a cada momento este mensaje: qué se creían “éstos”, pretender gobernarnos a nosotros, los legítimos emisarios de los dioses del poder. Había que matarlos, violarlos, hacerlos comer mierda, hacerlos mierda, para que aprendan de una vez por todas “lo que es bueno”, para que sepan lo que les ocurrirá cuando se atrevan nuevamente a decir “este gobierno es mío” (Illanes 2002, 161).

Y en venganza, desde un primer momento la represión se cernió con especial virulencia sobre el *pueblo*. Las fábricas y las *poblaciones*, señaladas como sus lugares “naturales”, fueron allanadas, cercadas, y los obreros y *pobladores* despedidos de sus trabajos, perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados y hechos *desaparecer* en gran proporción. En Chile, la represión tuvo un *componente de c lase* mucho más significativo que en otros países donde, por la misma época, se sucedieron dictaduras militares y regímenes de terror (Guerrero 2008, 263). La acción dictatorial significó la ilegalización y el desmantelamiento de las organizaciones tradicionales de trabajadores y *pobladores* –sindicatos y Juntas de Vecinos– y, por supuesto, de las experiencias organizativas desarrolladas durante el gobierno de la Unidad Popular –Cordones Industriales, Comandos Comunales y Juntas de Abastecimiento y Precios–; también fueron declarados ilegales los partidos de la izquierda al tiempo que se perseguía a numerosos militantes, provocando la sangría y el descabezamiento del movimiento popular, su fragmentación y su *virtual* desaparición.²²¹

la autoridad, como forma de poner freno a los “desmanes populares”; en definitiva, como una *forma de disciplinamiento de l a fuerza de t rabajo*. Esta educación también se llamó *popular*, y consistía fundamentalmente en la aculturación y homogeneización de los sectores populares. Para Salazar, educación popular –como proyecto de las élites dirigido al pueblo– y auto-educación popular –como proyecto del pueblo de educarse a sí mismo– habrían tenido objetivos históricos diferentes y hasta contrapuestos: mientras el primero promovía la uniformización del pueblo para su mejor control, la adhesión al modelo vigente y a los valores de la clase dominante, y la adopción de conductas individualistas y conformistas, a través del segundo era el propio pueblo el que colaboraba para potenciar las actitudes que reforzaban su cultura, su identidad, su autonomía, sus propias capacidades y un proyecto que asegurara tanto su liberación como la reorganización de la sociedad chilena (Salazar 1987, 86).

²²⁰ Término peyorativo que se usa para referirse a los pobres urbanos.

²²¹ En consecuencia, no sería errado “hablar de politicidio o militanticidio, siendo la militancia una forma de la política” (Modonesi 2008, 118).

Esta última consideración –la *desaparición* del movimiento popular– fue objeto de un intenso debate durante los primeros meses y años de la contrarrevolución burguesa, y las conclusiones extraídas por los distintos sectores de la izquierda tuvieron consecuencias también diferentes de cara a la estrategia política a seguir: si se consideraba que el movimiento había sido “completamente” derrotado y extinguido, entonces de lo que se trataba era de empezar de muy abajo y reconstruir o construir un *nuevo* movimiento; en cambio, si se consideraba que la derrota había sido táctica, parcial, significaba que, aun con la gravedad de la situación, era posible poner en pie el movimiento y “salvaguardar” el proyecto de transformación de la sociedad tal y como había sido interrumpido aquel funesto 11 de septiembre. No sin algunas diferencias, la mayoría de los educadores populares adhirieron a la primera tesis y se impusieron la “tarea de reconstruir el movimiento popular como sujeto político” (ECO 1983, 3), entendiendo que “aquella tarea no podía limitarse a ‘poner de pie’ las organizaciones pre-existentes; no bastaba con intentar reconstruir el tipo de organización popular anterior, tal cual era” (ECO 1983, 10). Y esto por dos razones fundamentales: porque la realidad del movimiento había cambiado y a poco andar se fue viendo que esos cambios no iban a ser transitorios, ya que la voluntad de refundación de la Dictadura implicaba modificaciones sustanciales de las relaciones sociales y de los valores culturales imperantes; y porque el propio movimiento popular se comenzó a interrogar acerca de su historicidad y de sus limitaciones históricas que, a la luz de esta revisión, estaban detrás no sólo de su “incapacidad” de hacer frente a la Dictadura, sino también de las dificultades que había encontrado durante las décadas precedentes y que se evidenciaron en el proyecto de la Unidad Popular y en el de la izquierda revolucionaria. Es decir, “cobra cuerpo, con el correr de los años, la conciencia de que la derrota fue más ‘amplia’ y se relaciona con limitaciones que el movimiento popular fue incubando a lo largo de su desarrollo histórico” (ECO 1983, 2). Así, la derrota del movimiento popular aparecía, en cierta forma, como un *fracaso*.

Develar y reflexionar sobre aquellas debilidades históricas se volvía una tarea ineludible para pensar en rearticular un movimiento popular, y uno que tuviera real proyección transformadora y democratizadora: “Un movimiento que se reconstruye social y políticamente; un movimiento que aspira a ser ‘sujeto’, protagonista; un movimiento enfrentado al desafío de recrear un proyecto histórico alternativo” (ECO 1983, 11). Por lo tanto, la preocupación educativa y la interrogación histórica respondían a necesidades reales de quienes querían transformar la sociedad, es decir, se afianzaban en la idea de *historicidad*, que “no es otra cosa que el presente vivo y puro” (Salazar 1990a). Desde esta perspectiva, el movimiento popular debía enfrentar la distribución desigual de los saberes –que lo marginaba de la posibilidad de desarrollar sus proyectos e incidir en la sociedad– y producir su propio saber, porque “las formas de comprender no sólo son de comprender sino que también son de actuar, como una síntesis compleja de teoría y práctica, de pensamiento y acción” (ECO 1983, 5). Crear su propio saber formaba parte del proceso de lucha de los movimientos sociales e implicaba recurrir a su propia experiencia, y analizar sus capacidades y límites, en relación con sus necesidades concretas. Por la vía de la *educación popular* y de la valorización de la *cultura popular* se avanzaba en la construcción de una *identidad*

popular y de una *visión popular del mundo*, componentes imprescindibles de todo movimiento social y de cualquier proyecto de transformación de la sociedad.

En relación con esa indagatoria histórica y cultural, algunas de las preocupaciones más recurrentes se referían a la democracia de base, al rescate del conocimiento popular y a la crítica del machismo y de las relaciones sexistas de opresión. Todos ellos problemas que afectaban a los movimientos tradicionales (obrero, campesino, estudiantil) de manera medular; y de los que no estaban exentos los “nuevos movimientos sociales”. Pero como la educación popular no sólo “enseña” la democracia sino que la ejerce, fomentó incesantemente nuevos métodos de construcción de saber: las propias prácticas horizontales y participativas de las organizaciones populares y la reflexión grupal, colectiva, sobre dichas prácticas. Por esa vía, los educadores populares –en cuanto facilitadores, acompañantes y parte del proceso educativo– se proponían fomentar el protagonismo popular, y formar sujetos populares “más conscientes” que en el pasado. Explícitamente, buscaban contribuir a la edificación de una “sociedad socialista [...] construida a partir de la constitución de clases populares en sujeto histórico y enraizada en las características propias de nuestro país” (Agurto y Milos 1983, 7). En esta afirmación hay dos cuestiones que bien vale destacar: la primera es la referencia al socialismo, una palabra que a estas alturas ya había sido prácticamente erradicada del discurso de la intelectualidad *renovada* y substituida por la de democracia, en cuanto régimen político independiente de cualquier proyecto socioeconómico. El socialismo, como horizonte político, parecía muy lejano y, en algunos casos, incluso indeseable; como pensamiento político, ya había sido sometido a una profunda revisión, cuestionamiento y *depuración*.

El segundo aspecto que causa sorpresa dice relación con un planteamiento todavía insuficientemente desarrollado entonces pero que apuntaba a poner de manifiesto el *carácter dependiente del conocimiento* que había prevalecido en Chile respecto de otras realidades socio-geográficas y culturales.²²² Este cuestionamiento es uno de los ejes rectores de la educación popular y está en el núcleo de la redefinición teórica y epistemológica que funda la nueva perspectiva historiográfica, la Nueva Historia. El planteamiento de los educadores populares es que la acción –tanto la posibilidad de actuar, como la forma que adopta esa acción– está directamente ligada a la interpretación que las personas puedan hacer de su contexto. La *experiencia vivida* (y transmitida) posibilita un determinado tipo de comprensión de la realidad circundante, que garantiza y condiciona la acción. Esa unidad, a la que ya nos habíamos referido, constituye el “saber”: “El concepto de saber apunta entonces a una capacidad de los individuos de asumir su situación en forma autónoma, en la posibilidad de poder elaborar respuestas transformadoras, o al menos nuevas, frente a nuevas situaciones” (ECO 1983, 5). De todo ello se deriva que el actor social para poder constituirse *positivamente* necesita forjar un saber propio: “En el proceso de lucha por la transformación social, requiere elaborar su propio ‘saber’, requiere enfrentar esa distribución desigual, que busca marginarlo de la capacidad de actuar autónoma y

²²² Esta interpretación se vincula con lo que más recientemente ha dado en denominarse, en la región, teoría decolonial, que denuncia el *colonialismo de la saber* imperante en los conocimientos sobre América Latina en general.

organizadamente para influir sobre el funcionamiento de la sociedad” (ECO 1983, 6). Es en este sentido que el *saber popular*, la educación popular, resulta un elemento constitutivo de la subjetividad política; y se comprende, entonces, que su ausencia contribuyera a explicar las falencias históricas del movimiento popular.

Los riesgos que tiene que sortear el saber propio (y *popular*, en este caso) son la desviación extranjerizante, por un lado, y el extravío elitista, por otro. Algo de ambas cosas había tenido el pensamiento hegemónico –incluso el que se pretendía crítico– hasta entonces: había asumido como propias consideraciones que se correspondían exclusiva o primordialmente con otras realidades socio-geográficas y culturales o bien con la “realidad” de las clases económicamente dominantes de la sociedad chilena, bastante europeizadas, por otra parte. El calificativo *popular* implicaba, entonces, que la educación “incorpora un saber como herramienta de liberación en manos del pueblo” (ECO 1983, 6). En ello consistía, precisamente, la labor de los educadores populares: dinamizar ese proceso de recuperación y construcción de ese saber popular. De este modo: “La educación popular pasa a constituir una dimensión de la práctica social popular, que tiende a modificarla. Y la modifica a través de la reflexión crítica de la práctica social, en donde operan mecanismos de dominación que requieren ser descubiertos y superados con un accionar alternativo” (ECO 1983, 6).

El desarrollo de la educación popular y la preocupación histórica que ésta conlleva se relacionan con dos fenómenos de la mayor trascendencia para las luchas por una sociedad más humana: una nueva *conceptualización del movimiento popular* y una ampliación de la *noción de la política*. Las necesidades prácticas del movimiento popular en el contexto de desmantelamiento de sus organizaciones tradicionales y de modificación de sus reivindicaciones y proyectos, interrogaron sobre las interpretaciones históricas acerca de sus limitaciones y potencialidades y, a la vez, esta reflexión promovió el desarrollo de formas organizativas, de acción y de comprensión de los sujetos sociales y políticos y de los proyectos de transformación de la sociedad, también novedosas. Así, práctica y teoría se retroalimentan.

Uno de los cuestionamientos más profundos a la concepción del movimiento popular hasta la década de los setenta, hacía referencia a la centralidad política de la clase obrera, entendida de manera muy restrictiva; idea que dejaba fuera del sujeto revolucionario a la amplia mayoría de los sectores populares que no se definían por su vinculación asalariada a la estructura productiva, inserción en el sector industrial y sindicalización. Esta evidencia será más fuerte en la medida en que la mayoría de las organizaciones comunitarias que proliferaron en la década de los ochenta emergieron en el ámbito de la *población*, no de los sectores obreros tradicionales, ya que la legislación laboral había sido drásticamente modificada y, en las nuevas condiciones, los sindicatos se habían mostrado inoperantes, mientras que aquellas organizaciones contenían “gérmenes de resolución de los problemas que la realidad le ha puesto al tipo de organización tradicional” (ECO 1983, 10).²²³ Las organizaciones comunitarias

²²³ Una parte significativa de los *pobladores* eran trabajadores asalariados en los sectores tradicionales; sin embargo, el sindicato como forma organizativa privilegiada de la clase obrera, separaba el ámbito de trabajo y de lucha de esos sectores, de su espacio habitacional. La ilegalización de los sindicatos y la represión del movimiento obrero hará que la *población* se constituya en un espacio de lucha y de

populares se caracterizaban por una gran heterogeneidad y diferenciación interna, en su composición, en su organización y en sus objetivos. De esta manera, la definición de “lo popular” se tornaba un tanto más compleja, más problemática, pero también más real e integradora: “De allí que la idea de ‘conciencia de clase’ se amplía hacia la diversidad de lo popular, no se trata solamente de la conciencia (modo de actuar y significar) de un grupo social específico, sino de un conglomerado más amplio que conforma el mundo popular” (ECO 2012, 54).²²⁴ Bajo este prisma, el movimiento popular está compuesto por una constelación de actores diversos y una de las tareas de la educación popular es contribuir a identificar los rasgos en común, que posibilitan la articulación no jerárquica de esos actores, sin denostar sus diferencias. A su vez, el proyecto popular pierde la definición y la unilateralidad que se le había atribuido en épocas pasadas; se vuelve más plural, más diverso y, en cierto sentido, más impreciso. La dificultad, en este caso, estriba en saber articular reivindicaciones y propuestas muy concretas con una idea más general de la sociedad.²²⁵

Esta imagen del movimiento popular implica también, desde esta perspectiva, la noción de *proceso*. Las identidades –también la *popular*– no constituyen algo dado de antemano o de una vez para siempre, sino un proceso de búsqueda, de participación y de identificación con ciertos valores y prácticas concretas. Esta consideración procede de la crítica a la noción de actores sociales estructuralmente predeterminados; por el contrario, la “novedad” contenida en esta perspectiva implica que es *en la propia lucha y en la experiencia concreta de formar parte de maneras de relacionarse alternativas*, donde las personas van modificando su identidad y su manera de comprender el mundo y de imaginar otros mundos posibles; y no por inoculación de ideas, una concepción más propia de la educación tradicional y de las versiones iluministas de la izquierda que habían querido llevar la conciencia al pueblo. Por eso la tarea de la educación popular consiste en “impulsar colectivamente la construcción de nuevas maneras de pensar, actuar y sentir a partir de la realidad existente” (ECO 1983, 8). Y ello porque “no hay un desarrollo de conciencia acabado ‘antes’ de actuar frente a la realidad, ni existe la acción desprovista de significados” (ECO 1983, 11). Así pues, no hay conciencia (de clase) *ex ante*, sino que se construye en la propia lucha y en la realización práctica de relaciones sociales distintas. Uno de los escollos más grandes en esa labor procede de la *naturalización de la realidad*, de la circunstancia de que “la realidad se percibe como un [hecho] dado, como un fenómeno natural: ‘El mundo está hecho así’. Para la conciencia crítica, en cambio, el mundo aparece como un construido histórico-social, como un

construcción de alternativas para garantizar la vida. Las mujeres tendrán un papel fundamental en las organizaciones surgidas en la *población*; se considera que sus roles tradicionales vinculados al cuidado serán más “útiles” en esas nuevas circunstancias. Así pues, hay un desplazamiento de la fábrica a la *población*, de la centralidad del varón a la de la mujer, del sindicato y el partido a las organizaciones de sobrevivencia, de la política como disputa pública a la política como construcción cotidiana.

²²⁴ Publicado originalmente en *Educación y Solidaridad* n° 3, mayo 1984, pp. 5-22.

²²⁵ La lucha hegemónica –fruto del influjo *gramsciano* en el pensamiento chileno de los ochenta– consiste precisamente en la definición de un proyecto que articule a los distintos sectores explotados, oprimidos y excluidos frente al modelo capitalista de sociedad. Es en este sentido que, para algunos autores, la educación popular “aparece como una propuesta movimientista e historicista de carácter popular pluriclasista” (Bengoa 1987, 17).

proceso de permanente creación humana” (ECO 2012, 46).²²⁶ Por lo tanto, la educación popular devela el carácter socialmente determinado e históricamente construido de las identidades sociales.

La preeminencia de la práctica resulta fundamental porque permite apelar a la *fuerza ejemplificadora de la experiencia* para la conformación de identidades y de proyectos alternativos y, de ese modo, recuperar los saberes despreciados por la academia. Entonces, los movimientos sociales son vistos como concreciones de otras formas sociales posibles y, en ese sentido, *prefiguran otro mundo*: “En las prácticas educativas, la liberación se presenta como algo que es factible de ir construyendo desde ahora, cotidianamente” (ECO 1983, 13).²²⁷ Por lo tanto, no es que otro mundo sea posible, sino que ese otro mundo se está realizando en distintas experiencias y contextos, todavía más o menos restringidos, más o menos circunscritos, pero que ya existen.

Todo ello arroja una idea muy distinta del cambio social; una idea que revaloriza lo cotidiano, lo normal, lo plebeyo de la revolución, frente a una concepción mucho más heroica, disruptiva, transcendental de la misma. No significa esto que se renuncie a la idea de la fuerza o de la ruptura: la revolución nunca es un proceso desprovisto de lucha y de cierta imprevisibilidad, pero las transformaciones culturales, fundamentales para provocar una efectiva revolución social, requieren de pequeños cambios acumulativos y de la condensación que facilita el tiempo. Con todo, la concepción de la transformación social como algo cotidiano y continuo, no resuelve la cuestión de los proyectos más amplios, nacionales o estatales, que logren articular el conjunto de experiencias locales y comunitarias, para superar el riesgo del “enclave alternativo”, esto es, de una especie de guetos de personas muy “concientizadas” y que practican entre sí una democracia sustantiva o radical pero que no logran interpelar a otros sectores sociales. Trascender el peligro del aislamiento constituye una premisa del éxito mismo de las experiencias alternativas, considerando que el cercamiento (*enclosure*) es una de las estrategias del capital desde sus orígenes –allá por la llamada “acumulación primitiva”– pues evita el “contagio” y facilita la represión de esas experiencias por la fuerza si las clases dominantes lo consideraran necesario.

Desde esta perspectiva, la política es reapropiada por los actores sociales, que toman en sus propias manos la responsabilidad de transformar su realidad.²²⁸ Y se avanza en la comprensión de la política como una actividad que trasciende los espacios de la democracia representativa; ello implica una redefinición de la política y una repolitización de lo cotidiano. El movimiento popular siempre fue visto, desde la

²²⁶ Publicado originalmente en *Educación y Solidaridad* n° 3, mayo 1984, pp. 5-22.

²²⁷ Es en conformidad con lo anterior que revalorizan las “prácticas auto-educativas que, aunque limitadas y marginales, contienen por lo común una carga social y una intencionalidad histórica de alcances insospechados, que comprometen no poco la legitimidad y la estabilidad de los ‘sistemas’” (Salazar 1987, 86). Pero para una mirada todavía anclada en los paradigmas tradicionales, “la educación se transforma en una práctica preorganizativa, de convivencia democrática, de interrelacionamiento personal; en fin, en una práctica que postula germinalmente la sociedad que se pretende construir” (Bengoa 1987, 22). Pero que no constituye propiamente una práctica política.

²²⁸ Con su acción buscan hacerse “cargos en común de lo común” (Fernández-Savater 2014); ésa es propiamente la definición de la política.

educación popular, como un proceso y un *sujeto social y político*; y el propio educador como un político. De ahí la necesidad:

De trabajar en la perspectiva de *reconstrucción del movimiento popular como sujeto político*. Es decir, un movimiento capaz de asumir la lucha por su liberación de manera protagónica; un movimiento que desarrolle sus fuerzas y capacidades de manera amplia –tan amplia como la derrota que sufrió–; un movimiento que enfrente la necesidad de renovar su práctica política y social (el problema de los estilos, las formas de participación, la instrumentalización, el cómo se concibe la organización, la relación base-superestructura, etc.) (ECO 1983, 2, cursivas mías).

La ampliación de la noción de política implica el abandono de la concepción liberal que escinde ambas esferas. En correspondencia con el eslogan feminista según el cual “lo personal es político”, podríamos decir que *lo social, lo comunitario, también es político*. Esto implica “asumir la consideración política del conjunto de los aspectos de la vida del pueblo” (ECO 1983, 2). La orientación política de la educación popular estaba dada, como ya vimos, por la voluntad explícita de coadyuvar al “descubrimiento de las bases, la explicitación y la valoración de ese ‘proyecto popular’, por parte del pueblo oprimido” (ECO 1983, 10). De ahí deriva el carácter político de la educación popular y de los educadores populares. Por lo tanto, la consideración de que la educación popular estaba restringida a una práctica pre-política choca con la renovación del pensamiento y de la acción desplegada por las organizaciones populares; por el contrario, desde esas experiencias se concibe como “una práctica que impacta de manera significativa la acción y movilización del pueblo” (ECO 1983).

En este análisis, la separación entre lo social y la política, se traduce en ocasiones en la contradicción entre la democracia participativa y/o sustantiva y la democracia representativa, que se refieren además a escalas espaciales, de lo local a lo nacional.²²⁹ Ciertamente, la diferenciación de la política –entre una política formal y una política sustantiva, o una política institucional y una política popular, etc.– no resulta del todo satisfactoria para comprender la acción de los movimientos sociales; éstos continuamente han conjugado distintas formas de relación con la política estatal pero han desarrollado formas de hacer política, más ancladas en lo local y en lo micro-social: la política popular se ejerce en los ámbitos concretos y cotidianos de la experiencia de los sectores populares, *al margen*, y a menudo *contra*, el Estado. Pero esto naturalmente no resuelve el problema de la política estatal y de la configuración de poder que desde el Estado amenaza los proyectos alternativos de construcción de sociedad:

El acertijo que los movimientos siempre deben resolver es justamente aquel que es capaz de proponer *un modo particular de articular lo social político con lo*

²²⁹ A su vez, se utilizan continuamente dos acepciones, o niveles, de la política, que se confrontan: “La educación para los movimientos sociales se plantea la búsqueda de la personalización y la humanización de las relaciones sociales. Es, por tanto, un proceso educativo que no tiene que ver con la política, entendida en su aspecto contingente y de lucha por el poder, sino con la política en su aspecto sustantivo, en la readecuación de las bases mismas de lo que es el ‘hacer política’, esto es, la convivencia social” (Bengoa 1987, 19).

estatal p olítico, es decir, la dimensión política que emerge de sus propias prácticas y experiencias y los modos en que esas propuestas pueden transformar las relaciones de poder cristalizadas en el Estado (Garcés 2010, 67, cursivas mías).

El problema de si se puede cambiar o no el mundo sin tomar el poder (el Estado),²³⁰ sigue siendo una cuestión de la mayor importancia para los movimientos sociales. Pero sin lugar a dudas, las prácticas de los *pobladores* hicieron evidente que se puede pensar la política más allá del Estado y de los partidos políticos, y que la acción colectiva no es siempre o necesariamente una forma pre-política.

4.1.3. *Las Jornadas de Protesta: rupturas y desafíos para el movimiento popular*

El 11 de mayo de 1983 se produjo una jornada de movilización y protesta en contra de la Dictadura, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre y en la que se verificó una elevada participación de *pobladores*, sobrepasando cualquier expectativa acerca de la adhesión que podía suponer un llamado de esas características tras diez años de persecución de los luchadores sociales, anatemización de la organización colectiva y auténtico terror. Esa primera jornada de protesta inauguró un ciclo de movilizaciones que se sucedió, con altibajos, hasta 1987. El éxito de la protesta sorprendió a los propios organizadores. En los años previos, los sectores populares habían erigido un sinfín de organizaciones comunitarias vinculadas estrechamente a su sobrevivencia diaria, a su quehacer cotidiano, configurando un denso entramado de iniciativas populares. Ese período se denominó de “recomposición de las solidaridades” o de “reconstrucción del tejido social”, entendiéndose que había algo que se había roto, que había sido destrozado por la reacción militar, y que requería ser suturado, soldado. Fue vista como una etapa de introspección, en la que el movimiento se volvió sobre sí mismo, tratando de reconocerse después de la derrota y de rearticularse. Para los sociólogos *renovados*, se trató de una etapa de comunitarismo, involución pre-moderna y ensimismamiento.

La irrupción de las protestas masivas es fruto, en parte, del proceso de organización de los sectores populares, pero éste no la explica completamente. La sinergia de voluntades que se sumaron a la expresión del descontento trasciende con mucho a los colectivos y organizaciones populares previamente organizadas. A la vez dichas jornadas de protesta significaron un aliciente para el crecimiento y réplica de las organizaciones comunitarias; pero también plantearon nuevos desafíos para los cuales todavía no estaban preparadas. El ciclo ascendente de movilización y de interpelación con el Estado forzó el retorno oficioso de los partidos políticos –todavía ilegalizados–, abrió espacios de “negociación” con un régimen hasta entonces absolutamente autista, y alimentó la esperanza del retorno de la democracia y de la política con mayúsculas. De esa forma, las organizaciones comunitarias y la propia praxis de la educación popular se vieron confrontadas, en sus tiempos y en sus espacios, con las urgencias de la coyuntura política.

²³⁰ Que revitalizaron los zapatistas con sus luchas y prácticas de autonomía y, en el ámbito académico, el intelectual John Holloway (2001a)

Las protestas desarrolladas entre 1983 y 1986 abrieron el “gran capítulo de los ‘actores’ populares” (ECO 1983b) en lo social, en lo político, en lo cultural y en lo académico. El ciclo de jornadas de protesta abrió el espacio no sólo político sino también académico, y proporcionó la “materia prima” para una reflexión intensa y rica acerca de los actores sociales y de su constitución en movimientos sociales. Las movilizaciones populares fueron la “excusa” para la organización de seminarios y encuentros académicos destinados a discutir las características y las potencialidades de dichas formas de protesta. El primer encuentro de ese tipo en Chile fue convocado precisamente por ECO, el 8 de octubre de 1983, en torno al tema “Protestas y Protagonismo Popular”.²³¹ Hasta ese momento se habían desarrollado cinco jornadas de protesta, habiendo alcanzado ya un punto álgido en cuanto a la radicalización de los sectores populares y al grado de represión por parte del gobierno militar, especialmente en las dos últimas.

Las críticas vertidas por los educadores populares e historiadores sociales sobre las dinámicas precedentes de los movimientos sociales redundaban necesariamente en el anhelo de “constituir un movimiento popular *sujeto de su acción*” (Agurto y Milos 1983, 6). Esto es, un movimiento que no fuera manipulado, acarreado o hipotecado por otros actores sociales y/o políticos, principalmente por los partidos políticos, pero también por el Estado, como había sucedido en épocas anteriores. En ese sentido, una de las inquietudes con respecto a la participación de los sectores populares en las recientes movilizaciones era que éstos –según algunas interpretaciones– no sólo estaban siendo “masas de maniobra” sino algo más grave: “carne de cañón” (V. Espinoza 1983, 71). Pues ya en este temprano momento emergía con fuerza, entre los propios activistas y educadores sociales, la inquietud por el hecho de que si bien los sectores populares –principalmente los *pobladores*– estaban siendo los protagonistas de las jornadas de protesta, se veían ausentes en la incipiente rearticulación del campo político y en la elaboración de propuestas de cara a la transición hacia un régimen democrático, es decir, estaban quedando *al margen de las propuestas*. Lo que estaba en cuestión no era, entonces, la gran movilización y presencia de los sectores populares en las protestas nacionales, sino su capacidad para incidir en los procesos de redemocratización que las jornadas pusieron en marcha, por lo tanto, a lo que apuntaban las inquietudes políticas y teóricas era a “*su capacidad de ser actor político*, a su capacidad de proponer un orden social distinto” (Agurto y Milos 1983, 7, cursivas mías).

Dos son las preocupaciones que hegemonizan la reflexión durante este encuentro: por un lado, el problema de la *identidad* (quién y quiénes son los que protestan, los que se movilizan) y, en relación con ella, la dificultad de la representación (política, se sobreentiende) de los actores sociales; por otro lado, y vinculado con lo anterior, la *potencialidad* de esos sectores para orientar un proceso de redemocratización de la sociedad (esto es, si tienen un proyecto propio y en qué consiste). En relación con esos dos ejes de análisis se sitúan las referencias a “lo

²³¹ Este encuentro resulta especialmente interesante porque hubo una participación significativa de sociólogos (Irene Agurto, Fernando Ossandón, Fernando Castillo, Ricardo Lizana, Vicente Espinoza), evidenciándose en algunas ponencias la contraposición que tratamos de recoger en este trabajo entre la perspectiva sociológica y la orientación de otros profesionales que darán lugar a la Nueva Historia.

popular”, como elemento aglutinador de las múltiples identidades sociales, y al protagonismo popular, como proyecto de *empoderamiento* de los sectores populares y afirmación de su apuesta por una democratización sustantiva de la sociedad, y no sólo por una transición política.

Efectivamente los sectores populares y especialmente los jóvenes habían tenido una gran presencia en las movilizaciones. Su participación fue interpretada como un ejercicio de reconstrucción de su identidad: en las protestas, los jóvenes se reconocían, se manifestaban con voz propia. Las barricadas, las fogatas, las *poblaciones*, se convirtieron en símbolos de convivencia humana, en momentos de gran expresividad y vivencialidad, en los que los jóvenes (pero no sólo) se reconocían como parte de un colectivo, recuperaban un sentido para su vida. Sin embargo, esos momentos de máxima visibilidad y su espectacularidad ocultaban, según los asistentes al encuentro, otros elementos más profundos e importantes, como la incapacidad de esos jóvenes (y de los *pobladores* en general) para tener una incidencia en los momentos más reflexivos (sobre la propia coyuntura) y el rechazo observado por parte de otros actores sociales y políticos hacia sus prácticas. En general, la explicación para este punto fue que los sectores populares se habían mostrado incapaces de generar propuestas políticas. El fin explícito, recuperar la democracia, resultaba demasiado general; no constituía un proyecto y, a juicio del sociólogo Vicente Espinoza (1983, 72), “sólo con una propuesta de los pobladores, con una propuesta política, los pobladores pueden convertirse en actores válidos, reconocidos pública y nacionalmente”. Pero esto resultaba sumamente complejo porque se afirmaba que los *pobladores* no tenían “intereses generales” y que su proyección hacia el conjunto de la sociedad (la necesaria y ansiada perspectiva de totalidad) sólo la alcanzaban por medio de la afiliación a los partidos políticos, por lo tanto lo que sucedía en la práctica era que en el sector poblacional se producía “un reflejo del debate a nivel de los partidos políticos” (V. Espinoza 1983, 72). Ése era uno de los impedimentos para la constitución de un movimiento real, sujeto de sí mismo: las organizaciones de *pobladores* seguían siendo vistas, según esta interpretación, como meras correas de transmisión de las ideas y directrices emanadas desde los partidos políticos.

Otro planteamiento se refiere precisamente al tipo de reivindicaciones enarboladas por los sectores populares y su relación con las jornadas de protesta observándose un riesgo de “divorcio” entre las movilizaciones nacionales y las acciones parciales (ECO 1983c, 77). Si bien es cierto, que la reivindicación *poblacional* había experimentado un proceso de politización, en el sentido tradicional, como síntesis de propuestas conducente a la impugnación sistémica, pues desde las primeras exigencias a fines de los setenta y principios de los ochenta, vinculadas con el problema del acceso a la vivienda y los servicios básicos (agua, luz, transporte, salud, guarderías, etc.), el trabajo, y la canasta básica (alimentación), se había transitado hacia la exigencia de poner fin a la Dictadura, por lo tanto, del cambio de régimen, en los últimos meses de 1983 se combinaba esta exigencia con procesos locales como las *tomas* de terreno, que habían recuperado vigor entre las formas de lucha de los *pobladores*. La debilidad concreta se identificaba en la articulación entre *tomas* y jornadas de protesta, por cuanto se consideraba que las primeras asumían a menudo un carácter anti-político, apolítico,

pre-político o despolitizado, según el autor al que se haga referencia. La pregunta giraba en torno al carácter político de lo reivindicativo o la necesidad de vincular lo uno con lo otro.

La distancia existente entre los actores sociales de base y los actores políticos nacionales se manifestaba en ambos sentidos: desde los actores sociales existía una desconfianza hacia las expresiones partidarias, superestructurales o cupulares (una suerte de susceptibilidad hacia el comportamiento de esas instancias por una experiencia vivida de traición, abandono o utilización); desde los partidos políticos se evidenciaba la incapacidad de conducir las protestas, lo que se expresaba en “vacíos de conducción” y procesos de “autonomización de las protestas” (ECO 1983c, 77). Ello redundaba en la siguiente paradoja: “Quienes protagonizan las protestas y quienes elaboran las propuestas” eran sectores distintos (íd.). La dificultad de los sectores populares, de los pobladores, para estar presentes en los espacios en los que se construían las propuestas políticas se atribuía a una debilidad propia: era su incapacidad para “producir y elaborar propuestas expresivas de sus intereses y demandas” la que explicaba su ausencia de dichos espacios (íd.). Sin embargo, en el Comando Nacional de Trabajadores (CNT) sí estaban representadas las principales organizaciones sindicales; a partir de la tercera protesta, la convocatoria de las mismas, sin embargo, fue asumida por los partidos políticos –pese a encontrarse en la clandestinidad–. Posteriormente, en la Asamblea de la Civilidad también hubo representación de casi todos los gremios y organizaciones sindicales. No obstante, con la ventaja que nos permite la distancia de los hechos y el paso del tiempo, podemos decir que aquellos actores sociales fueron igualmente marginados del proyecto político de la transición. Su identidad como actores sociales y la existencia de un proyecto emanado de ellos nunca se puso en duda, ni por parte de los académicos ni de los políticos, pese a que se reconocieran dificultades internas, sin embargo, ello no obstó para que no tuvieran tampoco incidencia en la post-dictadura.

Por eso, lo que se estaba evidenciando con la reactivación de la vida partidista era un retorno de la “vieja” política, que ponía en entredicho el proceso de *renovación* tan aireado por la intelectualidad y la élite política:

Del accionar de los Partidos Populares, se puede visualizar que aún no se supera lo que fue diagnosticado con majadera insistencia. Esto es, *la distancia que opera entre los dirigentes políticos nacionales y la dirigencia y/o militantes de territorios populares*. Pareciera ser que se está reproduciendo una “clase política” que no expresa los desafíos de la renovación a partir del aprendizaje de estos 10 años. Para la base social y política no está clara la aparición de los “nuevos políticos”, frente a los cuáles pareciera estar reproduciéndose una “masa de maniobra”, ya no electoral, sino que grite fuerte, que armen barricadas, que raye muchas murallas, que meta ruido (Lizana 1983, 62, cursivas mías).

Recordemos que la identidad plural, diversa, heterogénea de los sectores populares se interpretó a menudo como ausencia de identidad e incapacidad de “proyectarse” en la esfera política. Desde una concepción tradicional de la política, que la restringe a la función de representación, la ausencia de identidad o la pluralidad de identidades irreductibles, dificultaba la transición de la lucha social al proyecto político. Esto es, ya

fuera que se sostuviera la tesis de la existencia de múltiples identidades o de la ausencia de identidad de los sectores populares, ello dificultaba tanto la construcción de un proyecto que reflejara sus reivindicaciones y sus propuestas y que fuera capaz, además, de incluir a otros sectores sociales, como la posibilidad de que una organización política, a la manera de un partido político, recogiera esas propuestas, impulsara un proyecto hegemónico y se convirtiera en la representación efectiva de los sectores populares, valga decir, del movimiento de *pobladores*. De ahí la pregunta reiterativa acerca del *carácter válido* de los actores de la protesta: “¿Es posible que ‘alguien’ sea efectivamente representante del sector poblacional, y se constituya por lo tanto, en interlocutor político válido?” (Lizana 1983, 63). Aparentemente la situación dictatorial imponía la necesidad de convergencia en torno al fin del régimen militar: “Si los pobladores lo levantan [un proyecto político] van a tener a todo el mundo detrás, pero si lo levanta otro yo creo que también va a tener a todo el mundo detrás porque el problema central es como sacar a Pinochet y el que resuelva ese problema, evidentemente que va a ser el que gane” (V. Espinoza 1983, 75). Pero, a nuestro juicio, la preocupación por la capacidad de “hacerse representar” de los sectores populares revela una concepción profunda de la política que tiende a excluir de dicha categoría a todos aquellos procesos que no conduzcan a la disputa electoral por el gobierno. Es decir, esa turbación ante las experiencias comunitarias de los *pobladores* daba cuenta de la existencia de “tiempos, urgencias, sensibilidades y hasta racionalidades distintas (o desfasadas) entre los movimientos de base y la clase política opositora” (ECO 1988c, 2).

La confrontación de miradas entre la sociología y la perspectiva de la educación popular resultó evidente en la siguiente afirmación de Espinoza: “Ya no hay nadie que siga sosteniendo esto de que ‘hay que echarle pa’ delante’ o de que ‘se hace camino al andar’” (V. Espinoza 1983, 72). Precisamente, una de las guías epistemológicas y metodológicas de la educación popular era *hacer camino al andar*, desprendiéndose de las concepciones preconcebidas de los actores sociales y las prácticas políticas para identificar y desarrollar las potencialidades largamente marginadas por las teorías y enfoques predominantes. Por eso, las certezas del sociólogo son contrastadas, aunque tíbilmente, por la mirada de los educadores populares, cuya apuesta política era la de reinstalar a los sectores populares en el centro de la política y de la academia o, de otra manera, apostar por el protagonismo popular. Los sectores populares habían estado históricamente excluidos de ambos espacios y cuando habían sido considerados, lo habían sido en cuanto clientela, en el primer caso, o inspiración literaria, en el segundo. Pero nunca como sujetos de su acción, sujetos de su historia, y sujetos efectivos de la transformación social. El protagonismo popular, entendido así, debía constituir el eje fundamental de otra política, de una “política de renovación”; la renovación precisamente “postula una nueva concepción de la política” (Lizana 1983, 60). Y para ello se hacía indispensable pensar la política más allá del Estado, como ámbito de actuación, y de la representación, como forma primordial de constitución de los actores sociopolíticos.

Ello conducía automáticamente a la necesidad de repensar la relación entre el partido y el “pueblo”, en el sentido de que éste último presentaba una diversidad y

complejidad mayores de lo que se había tendido a pensar, y por supuesto mucho más amplia que la que se le atribuía a la clase obrera y, por lo tanto, el partido se mostraba como un instrumento demasiado débil o inadecuado para dar cuenta de aquel carácter multifacético. La crítica a la forma partido no implicaba, necesariamente, renunciar a él como instrumento político, pero sí comportaba la necesidad de diversificar los canales sociales, socio-políticos y culturales que pudieran encauzar la potencialidad del “actor popular”, y ello significaba obligatoriamente redefinir el papel que tradicionalmente había desempeñado el partido y morigerar su centralidad en la construcción de una alternativa social y política. Emergía la crítica a la vinculación unilateral entre la política y lo estatal, predominante en una mirada más tradicional de la política, y se formulaba de manera incipiente la necesidad de ampliar los marcos de lo público, incluyendo los espacios comunitarios, los mundos de la vida cotidiana, los lugares en los que la resistencia se había mostrado efectiva y en los que se habían ensayado otro tipo de relaciones sociales: la solidaridad, la cooperación, el compañerismo, la dignificación, la humanización.

Las prácticas educativas a las que venimos aludiendo se habían dado en el seno de organizaciones comunitarias, vinculadas con la práctica cotidiana de sus integrantes para resolver sus necesidades inmediatas. Así pues la educación popular se había circunscrito al ámbito local y a las pequeñas modificaciones cotidianas, que no hacen la diferencia de un día para otro.²³² Sin embargo, es posible sostener que en las organizaciones comunitarias se estaban produciendo transformaciones significativas: tanto en los productos de dichas organizaciones como en las relaciones sociales que imperaban en ellas, aspectos que se retroalimentan. En cuanto a las relaciones, en general, y sin olvidar que se trató de un abanico amplio y variado de experiencias organizativas, se constata en todas ellas la voluntad de establecer relaciones más igualitarias, más horizontales, tendiendo al estrechamiento de la distancia –y a la propia anulación de la diferencia– entre dirigentes y bases. Asimismo, son esfuerzos de autoorganización, de autogestión, en los que los propios necesitados se organizan para satisfacer esas necesidades, poniendo a disposición suya y del colectivo sus capacidades, sus saberes, guardando una mayor autonomía del Estado. Esto produce una modificación sustancial en la consideración de lo que se crea: no son mercancías, sino bienes *comunes*, resultado del esfuerzo de todos los que participan de la organización, y de los que se benefician también todos los integrantes. A la vez, esta dinámica va asentando la idea de que los problemas que padece una persona o una familia no son exclusivos, particulares –consideración que refuerza la búsqueda de soluciones también individuales–, sino de un grupo, sociales, y que su solución debe ser también colectiva. Todo ello refuerza la solidaridad, la ayuda mutua, la colaboración, la corresponsabilidad, la co-implicación tanto en la definición de los problemas, como en la búsqueda de soluciones. Es decir, un cambio en la pauta de las relaciones sociales produce también la solidaridad, el compañerismo, la democracia, la igualdad como

²³² Los zapatistas dicen: “Caminamos despacio porque vamos lejos”. Con esta máxima nos proponen una reflexión sobre los ritmos y los alcances del proyecto transformador. Las transformaciones culturales sin duda son mucho más lentas que los cambios políticos entendidos como alternancias de gobierno o de régimen político.

resultados y como prácticas cotidianas. Y por esa vía, la política se torna parte de la vida cotidiana.

Esta configuración de relaciones sociales alternativas se vio confrontada y, en buena medida, desafiada, ante la nueva coyuntura y la presión de los sectores que proponían la reorganización de los partidos políticos, la formulación de alianzas, el desarrollo de una estrategia y un proyecto de cara a la negociación con los sectores afectos al régimen dictatorial, etc. En cierta forma, las jornadas de protesta desataron una aceleración del tiempo histórico, y en períodos de tiempo relativamente cortos se asistió a modificaciones sustanciales del escenario político que exigían también definiciones rápidas y contundentes. Pero:

El desarrollo práctico de la labor de concientización supone tiempos relativamente prolongados, supone grupos con alguna permanencia, precisamente porque se busca aprendizaje, o sea modificación de las formas de pensar y actuar. Estas condiciones no siempre están presentes, por diferentes motivos, siendo uno de los principales la tensión entre reflexión y acción. En situaciones de agudización de la movilización social y de urgencias de la acción, la tensión que señalábamos se suele resolver a favor de la acción (ECO 2012, 52).²³³

Ciertamente, como en otras ocasiones, se impuso la consideración de lo urgente por sobre lo importante. No defendemos que la recuperación del *régimen formalmente democrático* no fuera importante. Pero sí que el proceso de reflexión y de innovación creativa que habían venido desplegando las organizaciones comunitarias fue denostado, considerado pre-político, carente de proyecto, insuficiente en sus formas y contenidos, y rápidamente marginado de la alternativa opositora. La reapertura parcial del escenario político propició el retorno de los partidos políticos a la vieja usanza; algunos también *renovados* en sus contenidos –no en un sentido progresista– pero no en sus formas. Así volvió por sus fueros la política de las negociaciones, de los pactos entre élites, de la gobernabilidad democrática, de la preeminencia de la idea de Estado y de la democracia formal, arrasando con las experiencias comunitarias de reapropiación de la política, de la historia, de la cultura.

4.1.4. La transición a la democracia: “Un tiempo peligroso”

1986 fue un año de redefiniciones. Había sido declarado por el Partido Comunista como el “año decisivo” porque el Frente Patriótico Manuel Rodríguez había puesto en marcha la “Operación siglo XX”. Iba a ser sin duda la operación del siglo, pero fracasó: el dictador salió ileso de una emboscada en el Cajón del Maipo, en un camino estrecho al borde de un precipicio, después de haber recibido una lluvia de balas, granadas de mano y cohetes Law.²³⁴ La reacción no se hizo esperar, la represión alcanzó niveles cercanos a los de los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado: estado de sitio, allanamientos en las *poblaciones*, secuestros y asesinatos brutales de dirigentes políticos

²³³ Publicado originalmente en *Educación y Solidaridad* n° 3, mayo 1984, pp. 5-22.

²³⁴ El fracaso de la operación empujó al PC a abandonar la lucha armada, hecho que decantó la escisión del FPMR.

y sociales. La sociología *renovada* argumentó que las acciones violentas del PC “le hacían el juego” a la derecha al “justificar” el recrudecimiento de la represión y la desmovilización del pueblo chileno. Sin embargo, sin desconocer el impacto de la represión de los militares, el miedo no parece ser la única ni la más importante explicación de las dificultades por las que atravesaba el movimiento popular en la coyuntura. El “retroceso” y aislamiento del movimiento popular responde también a la lógica impuesta desde las cúpulas políticas, al creciente distanciamiento entre aquéllas y las dinámicas propias de los sectores sociales, y a la redefinición de la estrategia política para transitar hacia la democracia adoptada por los partidos políticos. A la altura de 1986, los partidos de la oposición agrupados en la Alianza Democrática se habían decantado definitivamente por acordar los pasos de la transición con el dictador, respetando su Constitución espuria y los plazos que allí se estipulaban. La presión popular debía servir para garantizar unas mejores condiciones en la negociación, pero la salida de la Dictadura sería definitivamente pactada, es decir, transada. En ese escenario, las decisiones se tomarían en los salones alfombrados de La Moneda; y, para sentarse a la mesa, había que saber guardar las formas, y ser mesurados; todos los “excesos” y “radicalismos” estaban de más, pues ponían en peligro las negociaciones.

En diciembre de 1987 ECO organizó el primer “Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura”, motivado por el hecho de que “en los análisis políticos más frecuentes y de mayor divulgación, normalmente las dinámicas de base y de los movimientos sociales populares ocupan un discreto segundo plano o sencillamente no son abordados” (ECO 1988a, 1-2). En esos trabajos, los movimientos sociales habían *desaparecido* del acontecer nacional y ya no tenían visibilidad en los análisis coyunturales. Los educadores populares y los historiadores sociales se proponían contrarrestar esa dinámica al “realizar un análisis socio-político que tuviera *como punto de partida la realidad, los intereses y las subjetividad de los actores populares* y, desde allí, considerar la realidad nacional” (ibíd.: 2, cursivas más). El “punto de partida”, pues, es lo diferente y lo relevante: pensar lo nacional a partir de lo popular, de *los de abajo*, y no sólo de las cúpulas partidistas y las élites políticas y económicas. Y eso implicaba “considerar en toda su significación los ‘proyectos’ y los ‘tiempos’ que otorgan sentido y dinamismo a los movimientos sociales populares, ya no sólo en relación al acontecer político nacional, sino que *en relación a sus propias dinámicas internas*” (ibíd.: 2, cursivas más).

El reconocimiento de tiempos y de proyectos distintos de los movimientos sociales supone pensar al movimiento en sí mismo, como un proceso complejo y completo, también como una *estrategia* y no sólo como una *táctica*, y tampoco exclusiva o principalmente en relación con los otros actores sociales y políticos y con el Estado. Este enfoque ilumina el grado de autonomía que guarda el movimiento con respecto a los otros actores presentes en el campo de conflicto en el que actúa; es decir, la capacidad del propio movimiento de decidir sobre sus formas organizativas, acciones y reivindicaciones, en función del propio proceso interno de deliberación y construcción de alternativas, y no tanto de los tiempos o prioridades impuestas de acuerdo con procesos “externos”, aunque adyacentes. La novedad de esta mirada epistémica es significativa, en el contexto chileno; algo de lo que estaban conscientes los educadores

populares e historiadores sociales. Sin embargo, no hay una elaboración sistemática todavía de esa nueva construcción teórica. Por eso, apuntaban los convocantes: “Considerando que se trataba de una empresa, en ciertos aspectos, inédita y con escasa acumulación teórico-metodológica, pero en otros aspectos urgente y necesaria, fuimos partidarios de partir con una propuesta metodológica mínima y de ‘*hacer camino al andar*’” (íd.).

Ese “hacer camino al andar” implicaba en sí mismo una postura teórico-metodológica, basada en la creencia de que lo teórico debe tener un menor peso en el proceso de investigación y comprensión de los fenómenos sociales y que, por lo tanto, es posible realizar trabajo académico sin enfrascarse de antemano en la construcción de aparatajes conceptuales. Pero, sobre todo, suponía partir de la concepción de que la construcción de los conceptos que permitieran ordenar la información y facilitar la comprensión, podría venir –o debería venir– de los propios actores sociales involucrados. En ese sentido, se le otorgaba un poder epistémico a los grupos que constituían el “objeto” de investigación, que de esa forma se convierten también en sujetos cognoscentes reconocidos como válidos. De hecho, el seminario consistió en las presentaciones y discusiones de distintos voceros de los movimientos sociales que tenían mayor presencia en ese momento. Junto al movimiento obrero –a la vieja usanza, aunque con procesos profundos de rearticulación– los “nuevos rostros y nuevas voces” (ECO 1988a): pobladores, jóvenes, organizaciones económicas populares, derechos humanos, mujeres, cristianos.

Los análisis del encuentro pusieron de manifiesto que si bien se habían realizado numerosos estudios en relación con las condiciones estructurales que modificaron la situación de los sectores populares induciendo fenómenos de fragmentación, desarticulación, desintegración, etc., no se había hecho el mismo hincapié en caracterizar las “diversas formas de respuesta [del movimiento popular] que tienden a *afirmar su vocación transformadora*, no sólo de sus realidades más inmediatas, sino que dando lugar a *procesos de creación histórica de mayor significado*” (ibíd.: 15, cursivas mías). Es decir, desde esta perspectiva, se sostenía que la fragmentación y pluralidad de “identidades” presentes en el mundo popular, respondía también a una débil o escasa preocupación teórica por dotar de unidad a esas expresiones; y que la consideración negativa de las luchas de los *pobladores* se explicaba, en gran parte, por la incapacidad de los intelectuales de percibir su densidad histórica.

Junto con la constatación de que se había modificado el rostro histórico del movimiento popular chileno, diversificándose los actores populares que lo integraban, las participaciones del seminario trataron de dar relevancia a aquel tipo de realidades *de afirmación y de democratización*:

Los sectores populares han procesado la exclusión en sus espacios democráticos de base no sólo inventariando lo perdido, sino *afirmando su existencia social* a través de diversas iniciativas y dinámicas que comprometen proyectos y movimientos sociales económicos (OEP), religiosos (cristianismo popular), de género (mujeres), de jóvenes, ético-políticos (derechos humanos) y reivindicativo-políticos (sindicales y poblacionales) (ECO 1988b, 16, cursivas mías).

Los autores constataron, además, “significativas modificaciones en los procesos mismos de constitución de los actores” (í.d.). Esas modificaciones estaban dadas por un quiebre fundamental en la forma de interrelación entre el Estado y la sociedad. Tradicionalmente los movimientos sociales se habían constituido “de cara al Estado”, es decir, con un carácter exclusiva o fundamentalmente reivindicativo, peticionista. A menudo los movimientos sociales habían tenido como origen la propia acción estatal, es decir, emergieron promovidos o directamente creados por iniciativas desde los partidos políticos y el propio gobierno en turno: leyes que fomentaban la organización social – como la Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias, que pretendió abrir un espacio institucional para la acción de un sector calificado como “marginal”– u organizaciones sociales articuladas desde los propios partidos –como los distintos frentes de campesinos, estudiantes, poblacionales que todos los partidos políticos impulsaron en la primera mitad del siglo XX–.

Esa particular génesis de los movimientos sociales había primado, según los participantes en el seminario, durante gran parte del siglo XX, y especialmente durante la década de los sesenta y hasta el golpe de Estado de 1973. La movilización social había constituido un dispositivo fundamental de la política partidaria y de la legitimación política, especialmente amplificado en los últimos gobiernos democráticos. Con grados variables de clientelismo y de vocación modernizadora de la sociedad –lo que suponía el ingreso a la vida institucional de los sectores tradicionalmente postergados de la participación política– el sistema político había fomentado la organización de los sectores insatisfechos, para canalizar por las vías reglamentarias la resolución de sus demandas. Ello no significa que los actores constituidos no tuvieran un fuerte arraigo social y mantuvieran, según los casos, ciertos grados de autonomía con respecto a los partidos políticos que los promovían o al gobierno que atendía parcialmente sus reivindicaciones; es más, el propio proceso de promoción de la asociatividad, impulsado desde el Estado, y concebido para procurar la reforma de la sociedad garantizando la estabilidad social, derivó durante el período de la Unidad Popular en una espiral peticionaria, y también de “acción directa”, que rebasó con creces los límites impuestos por los propios requerimientos del “juego político”. Ese desborde estuvo en algunos casos inducido desde los partidos de derecha, interesados en provocar el colapso del gobierno de Allende. Pero la experiencia más interesante, en este sentido, es la proporcionada por los Cordones Industriales, los Comandos Comunales y los campamentos organizados por el MIR, en donde la iniciativa popular logró trascender, sin abandonarla completamente, la lógica peticionista hacia el gobierno de turno, buscando la constitución de sus propias instituciones, en lo que buscaba instaurarse como un “poder dual”.²³⁵

En el contexto dictatorial, la desaparición formal de los partidos políticos, la jibarización de la arena política, el cierre del sistema político y la modificación de la forma de relacionarse el gobierno con los diversos sectores sociales (especialmente con los populares), hizo prácticamente inviable la lógica peticionista al no existir canales de interlocución, ni una predisposición por parte del gobierno a atender las

²³⁵ Véase Iglesias (2015).

reivindicaciones sociales.²³⁶ Pero habrían sido, precisamente, esas condiciones las que forzaron a los movimientos sociales a “volverse sobre sí mismos”, en otras palabras, a no esperar nada de afuera y a confiar en “sus recursos y capacidades propias para constituirse como tales” (ECO 1988a, 16). Aunque efectivamente el cambio de escenario hubiera trastocado sustancialmente las lógicas de acción de los movimientos sociales, forzándolos a virar la mira de su quehacer hacia lo que por sí mismos eran capaces de crear, en una suerte de autonomía forzada, lo cierto es que las tendencias a la autonomización estaban presentes ya dentro del movimiento popular desde mucho antes del golpe, aunque difícilmente hubieran logrado manifestarse de forma mayoritaria o hegemonizar las formas de acción y organización del conjunto de actores sociales, mientras la función representativa de la política tuviera preeminencia en la democracia chilena. Entonces, en ese contexto, como anteriormente, lo que se observa es una superposición de lógicas de acción; hecho que constituye una fuente de constantes “tensiones al interior de los propios movimientos” (ECO 1988b, 16), quizás más explícita o más áspera ahora porque la tendencia autonomista, o “movimientista” alcanza una mayor implantación en el seno de los sectores populares.

Otra tensión que observan los analistas y los propios activistas, en la vida interna de los movimientos sociales, se produce en la contraposición entre los procesos de afirmación de identidad y los de configuración de reivindicaciones políticas. Pareciera que los dos procesos son incompatibles y que la disputa por hacer valer los propios intereses en los espacios políticos –como la Asamblea de la Civilidad y la Demanda de Chile–, y en última instancia, dada la restauración del juego político-partidario, para que los partidos políticos asumieran como parte de su proyecto las reivindicaciones propias de los sectores sociales, restaba energía a los esfuerzos por afirmarse en tanto actores autónomos, con una identidad propia, claramente definida. La primera tarea suponía un desgaste del movimiento *hacia afuera*; la segunda, un trabajo *hacia dentro*. En el primer caso se corría el riesgo de desfigurarse y quedar amarrado a la lógica externa de los partidos políticos y de la política nacional; en el segundo, el peligro era la marginación, la postergación de los reclamos y la autoexclusión de las esferas de decisión a nivel nacional, cuando se reconocía, en efecto, que muchos de los problemas eran estructurales y, por lo tanto, requerían un abordaje integral.

Esta tensión se agravó sin duda, a raíz de la reconstitución de los partidos políticos, del inicio de la negociación con la Dictadura y del proceso de concertación social y política de las fuerzas de la oposición, y sobre todo, cuando empezó a hacerse evidente para los distintos sectores sociales que la recuperación de la democracia política no significaba paralela o inmediatamente la incorporación de las reivindicaciones de los sectores populares y la profundización de la democratización social. La vocación “realista” de la mayoría de fuerzas políticas limitaba seriamente las posibilidades de todos los movimientos sociales en las esferas políticas tradicionales, aunque se evidenciara con mayor crudeza en el caso del movimiento de defensa y

²³⁶ Este escenario, sin embargo, fue significativamente modificado a raíz de las jornadas de protesta nacional, al generarse una situación de “ingobernabilidad” y de apertura forzada de los espacios políticos, que obligó al gobierno a realizar concesiones limitadas y parciales a ciertos sectores sociales, provocando así su desactivación o su moderación en la coyuntura.

promoción de los derechos humanos, puesto que éstos eran considerados intrínsecamente no negociables. De esa forma, la *orientación é tico-política* de los movimientos sociales chocaba gravemente con las posibilidades efectivas (según la orientación de la *Realpolitik*) que proporcionaba la vía de la transición pactada a la democracia, amarrada desde un inicio a la voluntad de los militares.

Según los autores, esta tensión entre las dos lógicas de acción presentes en los movimientos sociales –una volcada hacia el Estado para demandar de él o para transformarlo y otra volcada hacia la vida interna de los propios movimientos– comprometía “la autovaloración –y en algunos casos– la persistencia misma de los movimientos” (ECO 1988b, 16). Y añadían: “No es casual, en este sentido, que los actores se interroguen permanentemente acerca de si efectivamente constituyen ‘movimientos’ o si se trata, simplemente de iniciativas parciales, actividades o expresiones de movimientos que no se terminan de constituir” (íd.). No queda claro, sin embargo, hasta qué punto ésta es una preocupación genuina de los propios movimientos, o más bien el traslado de las preocupaciones de los científicos sociales. O de otra manera, ¿cuál es la relevancia de cara a los actores sociales y su labor, de concebirse a sí mismos como movimiento o no? En todo caso, esa inquietud refleja que la negación de los movimientos sociales no era, en absoluto, una cuestión meramente “académica” sino una valoración con efectos políticos evidentes. Por lo demás, esta discusión evidencia que la noción de movimiento que se impone en la consideración de los actores sociales es la empleada por la sociología *renovada*; una noción maximalista, que considera que los movimientos sociales deben tender hacia la configuración de proyectos de transformación social globales, de alcance nacional, excluyendo de la definición las acciones u organizaciones que procuran transformaciones parciales – aunque puedan ser significativas–, inmediatas o locales.

A la complejidad observada respecto de la relación entre los movimientos sociales y el Estado, se suman las dificultades en la siempre problemática y abigarrada relación entre los movimientos sociales y los partidos políticos: “Que los partidos han sido agentes fundamentales en la constitución de los diversos actores y movimientos sociales populares no cabe la menor duda. Pero es también evidente que *han mostrado grandes dificultades para valorar e internalizar los nuevos procesos, prácticas y sentidos que animan a los movimientos de base*” (ibíd.: 117, cursivas mías). Uno de los problemas identificados se refiere a los tiempos distintos que priman en la lógica de los movimientos sociales y los “usos y costumbres” de los partidos políticos: estos últimos operan en función de los plazos marcados por el régimen político de cara a la disputa electoral y el ejercicio del gobierno, que están delimitados principalmente por las contiendas electorales.

La indefinición acerca de la apertura del régimen y la posibilidad de la recuperación de la vida democrática, la ausencia de una contienda electoral a la vista, la incertidumbre sobre los grados de libertad y competencia que toleraría el régimen militar, permitió que convivieran durante un breve periodo de tiempo la tendencia a la insurrección popular para forzar la caída de la Dictadura y la preferencia por presionar a la Dictadura a abrir los espacios de decisión y de ejercicio del poder a los partidos políticos, y especialmente a los de la oposición. Paulatinamente se fue imponiendo esta

segunda opción, que significó en la práctica, aceptar los tiempos, procedimientos y patrones de Pinochet. A partir de 1986, observamos como la actividad partidaria, en gran medida, se vuelca hacia los esfuerzos de negociación con la Dictadura y de articulación de la oposición en torno a esta posición, marginando las otras posibilidades. En consecuencia, “a partir del segundo semestre de 1986, se extendió el desencanto, la frustración y la confusión política entre los sectores populares y sus diversas expresiones sociales” (ECO 1988a, 18). De esa manera, el plebiscito del 5 de octubre de 1988 orientó las prioridades de los partidos políticos opositores (incluyendo ya a los partidos liberales de derecha). Ello impuso un *cortoplacismo* en la orientación estratégica de los partidos políticos, agrupados en la Concertación por el No;²³⁷ éstos buscaban ante todo revertir la situación política por medio de las elecciones, aun a sabiendas de que esta vía implicaba la aceptación de la Constitución *pinochetista* –que imposibilita cambios de fondo del modelo económico, político y social– y la tutela de los militares. De ahí la máxima *aylwinista*: “en la medida de lo posible”.

En este escenario los movimientos sociales debían conjugar las acciones dirigidas a hacerse presentes en esos procesos articulados en torno de las contiendas electorales –que suponen “victorias” *a corto plazo*– con una orientación vital hacia las actividades de carácter más permanente. De hecho, volcarse en los primeros supuso a menudo descuidar o posponer sus labores cotidianas, cuyos efectos sólo son apreciables, frecuentemente, en el *largo plazo*. La disputa con los partidos políticos, en este terreno, está signada por el hecho de que “se percibe que los partidos políticos generalmente valorizan poco este tipo de prácticas y de su potencial organizativo y de cambio” (ibíd.: 17). Tanto desde la mayoría de los partidos políticos, como desde ciertas perspectivas académicas, las prácticas más ordinarias de los movimientos sociales fueron interpretadas como ensimismamiento y/o incapacidad de proyectarse hacia la sociedad en su conjunto. En definitiva, como muestra de debilidad de los movimientos sociales. En cambio los movimientos sociales percibían las actitudes de los partidos políticos como el retorno de las prácticas reprobables que ya habían sostenido en el pasado: clientelismo, manipulación, dogmatismo, verticalismo. Por eso, los movimientos sociales se batieron “entre el desencanto y la auto-afirmación” (ECO 1988a).

Estas dificultades se presentaban con mayor frecuencia o más intensamente en el caso de los “nuevos actores”, pues “las lógicas reivindicativas, de constitución de representaciones (referentes’), de confrontación, etc., no siempre se encuentran con los procesos educativos, comunitarios o locales que *no tienen traducción mecánica en las formas más tradicionales de la política*” (ibíd.:17, cursivas mías). En consecuencia, se suponía que los “nuevos actores” traen aparejadas nuevas formas de ejercer la política, o lo que es lo mismo, que comportan una nueva concepción, más amplia, de la política, en definitiva, una política distinta. En todo caso, lo que resultaba evidente era la inadecuación entre las lógicas partidarias y las *movimentistas*, y la necesidad –palpable sobre todo en la práctica concreta de los movimientos– de redefinir la relación partidos políticos-movimientos sociales. Esa necesidad práctica urgía a la reflexión

²³⁷ Los defensores de la transición política acusaban, en correspondencia, “el particularismo, el basismo, el localismo, el largo-placismo” del “movimiento del ‘todo es política’/‘nada con los partidos’/‘todo con los movimientos sociales’” (Tironi 1984, 57).

teórica y evidenciaba, precisamente, “*un déficit teórico al respecto, particularmente en las representaciones partidarias y en las ciencias sociales*” (ECO 1988a, 17, cursivas mías). La razón realista, que se imponía como la única, empataba –según los autores– con aquellas formas tradicionales de la política “concebidas prácticamente como una relación ‘medios-fines’” y que “carecen de flexibilidad y tensionan el propio desarrollo de los movimientos” (íd.). Mientras que “el carácter de éstos, por su parte, compromete aspectos y dimensiones de identidad y auto-constitución que cuestionan las formas políticas tradicionales, ya sea porque la acción de los movimientos se resiste a ser ‘constreñida’ o reducida a formas políticas estrechas, ya sea porque sus proyectos se juegan en otra noción de temporalidad” (íd.). Así pues había desajustes en los tiempos y en los espacios, y en el fondo una racionalidad distinta.

La coyuntura alrededor de 1988 y 1989 presentaba grandes desafíos para los movimientos sociales y, en gran medida, éstos se sintieron traicionados por otros actores, especialmente por los partidos políticos, o bien estériles frente al campo de posibilidades que la situación abría. Pero esos “sentimientos” convivieron con la tenacidad para reinventarse y autoafirmarse como movimientos sociales, con lógicas de acción, identidades, tiempos y proyectos propios. Los trabajos de los historiadores y educadores sociales, enmarcados en la coyuntura, recogieron esas apreciaciones ambivalentes acerca de su rol e identidad social:

Los movimientos sociales para ser tales *afirman* sus propios símbolos y prácticas. Reclaman historia y proponen sus propias claves para *hacer historia y hacer política a su modo*. Es entonces del todo evidente que no se constituye movimiento en profundidad si no se elabora una identidad colectiva, capaz de trascender la fragmentación y de modificar relaciones sociales, económicas, culturales y políticas (íd.).

Identidad y proyección de los movimientos sociales constituyen las máximas preocupaciones tanto de los movimientos sociales como de sus “intelectuales orgánicos”. En ese proceso de definición y diferenciación, la recuperación de una historia propia y la construcción de una memoria colectiva jugaban un papel preponderante. La identidad particular de cada movimiento parecía ser la clave de su existencia, de su arraigo y de su capacidad para incidir y transformar su entorno; sin embargo, esa misma diferenciación parece constituir una dificultad para superar la fragmentación, evidente al interior del mundo popular, y la articulación con las expresiones políticas –a nivel nacional– existentes. De tal manera que se produce, en este momento, la siguiente paradoja: *aquello que afirma y fortalece el movimiento social se erige en un impedimento para su proyección y para la configuración de una “alianza” popular de izquierda.*

Los esfuerzos de los movimientos –analizados en el seminario– estarían encaminados entonces a profundizar en “procesos de auto-afirmación y de redefinición de sus estrategias de acción” (ECO 1988a, 18) que consistirían en reforzar la “acumulación de fuerza propia” (íd.) y redefinir las estrategias (en el caso del movimiento sindical); revisar prácticas y valorar el “espacio local y la especificación de las demandas” (íd.) (en el caso de los *pobladores*); persistir en los “procesos de

modificación y creación de relaciones sociales económicas y culturales asentadas en la iniciativa colectiva” (íd.) (principalmente las organizaciones económicas populares); y resistir “las tendencias a la absorción partidaria” (especialmente el movimiento de mujeres). En definitiva, los coordinadores del taller comparten “la percepción de que más allá del desencanto con la acción política en la coyuntura, *desde los movimientos sociales germinan procesos que trascienden el ‘tiempo político’ más inmediato y que se refieren principalmente a su propia auto-afirmación en tanto que movimientos*” (íd.).

Esta mirada, posicionada desde dentro de los movimientos sociales pone de relieve los problemas –identificados por los propios “activistas”– que enfrentaban aquéllos para constituirse o afirmarse como tales, destacando las tensiones entre las distintas expresiones sociales de protesta y organización, y con el mundo político tradicional –Estado y partidos políticos–. Al mismo tiempo, subraya las tendencias presentes en los movimientos sociales que pretenden superar aquellas dificultades. La visión, por lo tanto, es mesurada y profunda pues no sólo constata un hecho sino que devela el proceso por medio del cual se arriba a la situación descrita y los esfuerzos empleados para trascenderla. Independientemente de que esos esfuerzos se continuaran y/o tuvieran los efectos deseados, el hecho de constatarlos permite reconocer los límites y las posibilidades de los propios movimientos sociales y de los otros actores sociales y políticos, y examinar los nudos problemáticos para pensar la transformación liberadora de la sociedad. Para los movimientos sociales, los desafíos de la coyuntura solapaban factores estructurales e históricos que resultaban también “determinantes de sus posibilidades de desarrollo” (ibíd.: 19).²³⁸

4.2. “Una ciencia para una nueva historia social”

Desde *el exilio*, un grupo de historiadores, entre los que sobresale Gabriel Salazar, agrupados en la Asociación de Historiadores Chilenos, emprendieron un esfuerzo de reflexión e investigación que pretendía renovar la historiografía chilena y desde 1981 editaron una revista para la divulgación de sus trabajos a la que llamaron *Nueva Historia*:

El “Nueva” es porque era distinta a la historia tradicional y también distinta a la marxista. [...] En fin, la idea nuestra era diferenciarnos de la historia tradicional, del ensayismo, del marxismo vulgar, que fuera *una historia de origen social*, muy fundamentada en la investigación empírica, apoyada en datos estadísticos, con análisis conceptual y crítico desde las ciencias sociales (Salazar 2003b, 10-11).

El abordaje de los problemas examinados supuso una revisión y revitalización del trabajo historiográfico en cuanto a métodos y enfoques epistémicos. Se trataba en este caso de contar la historia no sólo de los sectores populares o del “bajo pueblo”, sino de

²³⁸ En ese sentido, la coyuntura de la transición actualizó un dilema histórico para los movimientos sociales: “O mantienen su ‘autenticidad social’ trabajando en los sectores postergados su autonomía relativa frente al sistema dominante; o se comprometen trabajando determinadas ‘reformas parciales’ de ese sistema (incluyendo la educación nacional), aceptando de algún modo la convocatoria integracionista del mismo” (Salazar 1987, 87).

contar la historia *desde* esos sectores: esto es, una historia con *otro* origen social. Esta perspectiva historiográfica supone una posición epistémica –y también ética– no tradicional ni elitista, pero claramente *situada*. Por ello, naturalmente, los *nuevos* historiadores han sido a menudo descalificados por hacer *explícito* con quién, desde dónde y para qué escriben la historia. Salazar ha rebatido en más de una ocasión esa falsa acusación: falsa porque presupone que los historiadores de otras corrientes no tendrían orientaciones ideológicas y políticas. En una discusión *indirecta* con el historiador conservador Sergio Villalobos sostuvo: “La Historia de Chile ‘tradicional’ [...] ha sido escrita por numerosos historiadores ‘para’ y ‘desde’ las élites de este país, y nadie discute a esos historiadores su deslizamiento subjetivo hacia esa perspectiva particular y no, por ejemplo, hacia la de los pobres o de la gran masa ciudadana” (Salazar 1999). Por eso, considera que, si alguien ha incurrido en un militante son, precisamente, ciertos historiadores y científicos sociales apegados a la historia tradicional y a los grupos centrales de esa historia: un “militante oligárquico” (Salazar 1999). A su juicio, “el trabajo actual del científico social es operar y desarrollar el conjunto dialéctico de verdades posicionales, sin autohipnotizarse con supuestas verdades absolutas” (Salazar 1999). Y aclara, respecto de la perspectiva que subyace tras la Nueva Historia, que “hemos elegido esta posición porque nos interesa, precisamente, el sentido *humano* de la historia y la *legitimidad* del poder” (Salazar 1999, cursivas mías). El reconocimiento del carácter *comprometido* y *situado* del conocimiento producido por la Nueva Historia es una de los axiomas de esta corriente historiográfica, como ya constatamos, anteriormente, en la reflexión de los educadores populares.

Dice Salazar que el *nuevo* historiador “trabaja muy poco con conceptos teóricos puros” (2003a, 415) porque “estar apegado a la realidad en su movimiento no lleva a trabajar con conceptos puros, sino con ‘nombres’; es decir, con las voces y signos que los propios sujetos históricos o actores sociales usan para designar esa realidad, designarse a sí mismos o a los cambios que van ocurriendo a su alrededor” (Salazar 2003a, 416). Por eso el historiador no alberga la pretensión de elaborar un sesudo marco teórico que encuadre su trabajo; por el contrario, considera que el empleo de categorías abstractas y conceptos puros dispuestos en rígidos marcos teóricos (que, a su juicio, son más propios de la sociología que del pensamiento histórico) no permiten integrar “cognitivamente toda la realidad vital e histórica, sino, sólo, ciertos *aspectos y escorzos*” (Salazar 2012a, 162). También ha rehusado “disputar” los significados de algunos conceptos centrales del pensamiento social –sin renunciar a emplearlos cuando lo ha considerado oportuno– al estimar que ese tipo de disputa semántica “convierte el debate teórico y político en un diálogo de sordos” (Salazar 2012a, 422). Con todo, Salazar ha sistematizado y explicitado, en distintas obras, los presupuestos epistemológicos y políticos que subyacen a esta perspectiva y ha discutido las teorías y caracterizaciones que desde otras corrientes y disciplinas se han hecho de la historia de Chile y de los sujetos que encarnan la posibilidad de la transformación social. Y ha defendido vehemente la necesidad de una “ciencia popular”; así pues, aunque los escritos de Salazar incluyan a menudo una declaración antiteoricista, su propuesta apunta más bien a la crítica de un modo particular de hacer ciencia, crítica de la que

emergerá una ciencia distinta, “una ciencia para una nueva historia social” (Salazar 2002a, 22).

A continuación nos proponemos delimitar y evaluar la propuesta de la Nueva Historia, desde la perspectiva *salazariana*: en primer lugar, recuperamos el ejercicio crítico de los historiadores respecto de la *vieja* historiografía y los elementos que permiten sostener el nacimiento de una nueva corriente historiográfica; en segundo lugar, los rasgos más característicos de esta corriente definida como una “historia desde abajo y desde dentro”; en tercer lugar, cómo los *nuevos* historiadores comprenden a los movimientos sociales, y por último, anotamos algunas reflexiones en torno de los tiempos, espacios y formas que caracterizan a la política popular, que es la que ejercen los movimientos sociales.

4.2.1. *La generación del ‘85: el juicio al teoricismo*

El *acta de nacimiento* de la Nueva Historia está fechada en 1985, por eso esta generación de historiadores ha sido habitualmente conocida como “generación del ‘85”. Entre julio y noviembre de ese año se realizaron en Chile varios encuentros en el marco de un seminario titulado “Historiografía chilena: balance y perspectivas”, cuyo objetivo era precisamente hacer “un balance de la historiografía chilena, sus tendencias principales, y su actual posición con respecto a los ‘sistemas teóricos’” (*Actas del Seminario de Historia de Chile* 1986, 157). En un tiempo histórico significativamente distinto de los últimos doce años (caracterizados por el miedo denso que atenazaba a la sociedad), tras los episodios de protesta popular y los procesos de constitución y reconstitución de fuerzas políticas, un grupo de historiadores y de profesionales de otras disciplinas –entre los que se encontraban algunos sociólogos como Enzo Faletto, Eduardo Valenzuela o Tomás Moulian–, sintieron la necesidad de replantearse su trabajo y de poner al menos un punto y aparte con lo que había sido la forma de concebir y de escribir la historia en el pasado.²³⁹

La necesidad de realizar este “balance” colectivo traslucía que *el juicio a la vieja historiografía* era la condición necesaria para decretar la existencia de una Nueva Historia. En esa línea, la primera conferencia²⁴⁰ planteaba, efectivamente, la “búsqueda de una nueva historiografía”, lo que suponía iniciar un proceso de reflexión conjunto acerca de las tradiciones precedentes y, por contraste, de explicitación y sistematización sobre lo que en la práctica los *nuevos* historiadores ya venían realizando. Es por ello que las sucesivas conferencias versaron sobre la historiografía conservadora, la interpretación marxista (clásica) de la historia de Chile, y específicamente sobre la teoría de la dependencia, la historia demográfica y cuantitativa, la historia económica, la historia urbana y la historia política actual. Se dedicaron dos sesiones particulares a la historiografía chilena en *el exterior* y a la historiografía chilena *del interior*; además de una sesión específicamente reservada a la nueva historiografía inglesa. No es nuestra

²³⁹ No todos los historiadores que participaron en esos encuentros se reconocen como parte de la Nueva Historia pero, como decíamos, ese seminario permitió el diálogo y el reconocimiento de aquellos que venían posicionándose en una perspectiva crítica respecto del pensamiento histórico anterior y apuntando a una renovación historiográfica.

²⁴⁰ A cargo de Gabriel Salazar, que había regresado del exilio ese mismo año.

pretensión hacer una revisión del seminario en todos los aspectos y problemáticas que abordó; sólo nos detendremos en aquellos elementos que dicen relación directa con la modificación de la perspectiva sobre el estudio de los movimientos sociales y el quehacer del historiador, que sintetiza a nuestro juicio el meollo de la nueva propuesta historiográfica, que quiere ser, en palabras del propio Salazar, una “ciencia que prepara la venida de los nuevos movimientos sociales” (Salazar 2002a, 22).

De particular interés resulta el “juicio” a la historia marxista clásica cuyo trabajo habría constituido, desde esta perspectiva, un esfuerzo por “‘ilustrar’ el marxismo ortodoxo con ejemplos históricos locales” (*Actas del Seminario de Historia de Chile* 1986, 160). Es decir, los historiadores marxistas chilenos se habrían limitado a buscar en la realidad chilena experiencias que ejemplificaran las tesis fundamentales de la teoría general marxista, tesis de pretendida validez general, o habrían reproducido sin comprobación empírica algunos mitos propalados *urbi et orbi*, sin profundizar en el conocimiento específico y particular de los procesos nacionales. Esta hipótesis no desconoce el proceso más general “de lo que se ha llamado ‘la crisis del marxismo contemporáneo’” (íd.), por lo que las dificultades por las que atravesaba el marxismo chileno entroncarían con la crisis del marxismo teórico en general. En este punto, el cuestionamiento de los historiadores se acerca al juicio formulado por los científicos sociales *renovados*. Pero aquéllos no avanzan tan rápidamente hacia el abandono total del marxismo, por eso constatan la “revitalización” del posmarxismo que habría dado lugar a diversas expresiones o derivas: posmarxismo, “marxismo mínimo”, o “reacción socio-historiográfica contra el imperialismo filosófico” (íd.). Con todo, a partir de las dificultades que enfrentaba el marxismo teórico internacional y de las insuficiencias que presentaba el marxismo chileno, Salazar concluyó que:

Plantear la revitalización de la “historiografía marxista” en Chile es apuntar a un problema difícil, debido a la crisis de “las formas crudas”, del marxismo “objetivista-legalista” (stalinista), de las “obsesiones filosóficas” y a la precariedad que todavía ostenta el “marxismo mínimo”. Aparentemente, *los marxistas chilenos ne cesitan más empaparse de la propia realidad local que leer o re-leer las afirmaciones y negaciones sucesivas de la gran teoría* (íd., cursivas mías).

Conjugando las críticas a la *obsesión teoricista* y a la *desviación universalista*, Salazar conculcaba las posibilidades de la tradición marxista para pensar la historia chilena. La Nueva Historia se sitúa en una pretendida vía de superación de las insuficiencias detectadas en la historiografía marxista “clásica”, poniendo de manifiesto cómo del diálogo con las corrientes anteriores, no sólo con las epistemológica e ideológicamente opuestas, sino sobre todo con aquellas que se reclamaban parte de una misma orientación política, esto es, de la izquierda, surgiría un nueva manera de investigar y escribir la historia. Con el transcurrir del tiempo, la crítica a la tradición marxista fue matizada por algunos de los integrantes de la corriente de la Nueva Historia, advirtiendo debilidades y apreciaciones superficiales en las primeras resoluciones sobre el valor del pensamiento marxista nacional, y recuperando algunos de sus conceptos y categorías centrales. Esta “revisión” del juicio al marxismo permite establecer diferencias y particularidades al interior de la Nueva Historia, como veremos más adelante.

Por otra parte, la crítica a la *gran teoría* tampoco redundaba, en este caso, a diferencia de la deriva de la sociología *renovada*, en un particularismo exacerbado o en un microanálisis (en la línea de la corriente posmaterialista), sino que trata de conjugar la profundidad de su mirada sobre determinados períodos, eventos y actores sociales, con la referencia a ejes articuladores que otorgan sentido a todas aquellas particularidades:

El desarrollo de “las parcelas históricas” ha significado a veces eludir hacer la historia de lo que es globalmente importante, a pretexto de trabajar a fondo “un” tema según “una” metodología determinada; el resultado es una relativa fragmentación del conocimiento histórico, con el riesgo adicional de que muchos historiadores intenten “totalizar su análisis histórico” sin salirse de su parcela, extrapolando métodos y haciendo historias generales encubiertas (ibíd.: 164).

Tal y como señalara Salazar en referencia a la revista *Nueva Historia*, su opción epistemológica apostaba a conjugar un sólido arsenal empírico con el análisis conceptual y crítico, y con una mirada de los procesos en el *tiempo largo* de la historia. Aun así, los historiadores reconocen en esta etapa el predominio de un cierto positivismo, justificado por la carencia de “datos” sobre la realidad chilena. En este sentido, la posición antiteoricista es formulada por la historiadora Isabel Torres como sigue: “‘*El sueño de la Cenicienta murió*’, es decir, es un hecho que las categorías (ideales) no calzan con el dato empírico; hoy parece obvio que hay que buscar primero ‘*toda*’ la información” (íd.). Nos parece que la formulación no deja de resultar problemática y un tanto ingenua: el desajuste entre teoría y realidad parece en mayor o menor medida un hecho constatado e inevitable; la pretensión científica debería tender entonces a formular conceptos y categorías que calcen cada vez mejor con la realidad, a partir de la mayor información o mejor comprensión de ésta, sin embargo, nunca podemos estar en posesión de *toda* la información, ni el problema epistémico se reduce a una cuestión de cantidad, por lo tanto en la aprehensión de la información también debemos contar con los conceptos y categorías previamente formulados por más que éstos resulten insuficientes o inadecuados. Por ello, el historiador Mario Garcés sostiene que “lo que el pueblo demanda es ‘*información histórica*’, y esto en cierta manera ha determinado una ‘*etapa positivista*’ entre nosotros, pero es claro que esta etapa debe ser superada; no se trata sólo de ‘*entregar materiales*’ al pueblo, sino algo más, que puede ser, por ejemplo, tratar teóricamente el problema de ‘*la unidad*’” (ibíd.: 165).

Además de las diferencias con la historiografía marxista, entre los elementos que harían suponer la emergencia de una nueva historiografía chilena, el coordinador del evento (Salazar) señaló las materias que habían hegemonizado la preocupación de los historiadores en los últimos años, entre los que resultaba “de especial relevancia el caso de la nueva historia política, de los movimientos sociales y la de difusión popular” (ibíd.: 157). Así pues, la temática de los movimientos sociales no estaba reservada a la perspectiva sociológica, sino que constituía uno de los ejes de esta *nueva historia* y, a juzgar por el desarrollo de esta corriente historiográfica, su *razón de ser*. Es por ello que los seminaristas dedicaron una sesión específica a discutir la historia de los movimientos sociales y, muy especialmente, la relevancia que éstos habían adquirido en

las investigaciones de historiadores y sociólogos. Sobre esta centralidad de los movimientos sociales en el pensamiento contemporáneo, Faletto señaló que:

Son las situaciones históricas las que definen la relevancia de “ciertos temas”; de hecho, los temas se constituyen socialmente, y así como en el pasado se buscó “la integración nacional” en función de objetivos de desarrollo, hoy se busca algo distinto: “la identidad de los movimientos sociales” a fin de incidir sobre los procesos. [...] En cierto modo, por la actual crisis, las masas populares están allí, como disponibles... ¿qué hacer con ellas?; por de pronto, se estudian esos grupos en función de lo que esos mismos grupos pueden hacer, y eso está bien; lo importante sería no caer en [su] idealización (ibíd.: 162, cursivas mías).

Esta reflexión resulta interesante porque trasluce dos de las preocupaciones que están presentes en las discusiones típicamente sociológicas de la época: las problemáticas de la *identidad* de los actores sociales y de su *potencialidad* para transformar o coadyuvar a la transformación del escenario dictatorial.²⁴¹ El sociólogo atribuye al momento histórico la explicación de la centralidad que han adquirido estas dos preocupaciones. Pero frente al planteamiento de la duda por la identidad y la densidad histórica de los actores de las protestas, la historiadora María Angélica Illanes señaló la imposibilidad de desarrollar una “*historiografía escéptica, sin sujetos*”, porque en todo movimiento social (aun si no se mueve) hay siempre un “*sujeto*” (ibíd.: 168); y precisó “que son nuestros propios ‘*valores*’ los que nos permiten reconocer la presencia de un ‘*sujeto histórico*’; por lo tanto, el recurso a la historia no puede ser un mero instrumentalismo, sino una inmersión” (íd.). Encontramos por primera vez planteada, de forma explícita, la consideración acerca de la existencia permanente de sujetos sociales, de actores sociales, aun cuando éstos no se muevan y la referencia a los presupuestos valóricos como fundamento del tipo de ciencia (en este caso, de historiología) practicada. Ello descarga sobre la orientación académica (en este caso de la historia), y los valores de los historiadores, la responsabilidad de *saber ver* y de *valorar* a esos actores sociales.

4.2.2. La “historia desde abajo y desde dentro”

Recientemente ha sostenido Salazar, en su crítica de las teorías sobre movimientos sociales elaboradas en Europa y Estados Unidos de América, que de lo se trata es de saber “si los movimientos sociales reales de este continente requieren de *ese tipo* de teoría” (Salazar 2012a, 406). Este planteamiento sugiere al menos dos consideraciones. Una, se refiere a la necesidad de repensar el concepto mismo de “teoría” y los presupuestos y procedimientos de la actividad científica. La otra, ligada con la anterior, alude a la exigencia de considerar la *especificidad* latinoamericana como el centro de la reflexión, entendiendo que lo propio de la realidad, chilena en este caso, no constituye una desviación de una supuesta condición general y *normal*, sino una configuración social, económica y política distinta.

Con respecto al primer punto, Salazar dinamita el concepto más estrecho y rígido de “ciencia”. Desaloja a la ciencia de su supuesto “altar” de observación

²⁴¹ Recordemos, en este punto, que las mismas inquietudes había transmitido Espinoza en el encuentro sobre las protestas organizado por ECO.

privilegiado, la desembaraza de su carácter omnicomprendido y de sus verdades absolutas y definitivas. No significa esto que niegue el carácter científico de la labor del cientista social y del historiador, y los rasgos específicos que adopta la *investigación sistemática* sobre un asunto; ni mucho menos que abogue por una posición relativista en la que todo vale. Pero *su* historia cuestiona la preconizada objetividad de la ciencia y del científico, o más bien, considera que la aludida objetividad no es más que intersubjetividad. Es por lo tanto una ciencia no-objetivista. La Nueva Historia se sabe (y se quiere) situada, subjetiva y comprometida. Y resulta que, desde esa perspectiva, no es menor el *lugar desde donde* se contemplan/construyen los problemas.

El *punto de partida* de la Nueva Historia son “los de abajo”, los sectores excluidos, explotados, marginados, criminalizados, estigmatizados, etc., los que por largos períodos de tiempo han constituido –y constituyen– mayorías (más frecuentemente que minorías) sociales. Se trata de los actores que se mueven en la “sociedad fronteriza”²⁴², entendida en sentido literal –como franjas de tierra que están en los bordes, en las periferias, más lejos, más abajo– y en sentido figurado –como los marginales, los bárbaros, los anómalos, los que no tienen cabida en la “sociedad civilizada”–. Esos que integran el “bajo pueblo” o la “plebe marginal” constituyen el verdadero interés de esta perspectiva epistemológica. Ésos, que han sido estigmatizados y marginados incluso por la así llamada clase trabajadora y por sus organizaciones más representativas (Salazar 2012a, 127).

La Nueva Historia emerge, en cierta forma, como una respuesta a una concepción estrecha y excluyente de la *clase obrera*, que había invisibilizado a otros actores populares y sus luchas; y se “foguea” en la disputa con la sociología *renovada* que, parapetada tras el concepto de movimiento social, infravalora las luchas de los *pobladores*. Hay una insistencia tenaz, sobre todo en la perspectiva *salazariana*, en mostrar cuán diferentes han sido, históricamente, los espacios en los que se *mueve* la “masa marginal” o el “bajo pueblo” y aquellos que frecuenta el movimiento obrero, así como la distancia “insalvable” en las lógicas que los rigen, las tácticas que emplean, las necesidades que los aquejan, etc. Y aún más, en demostrar cómo el proletariado (industrial), o sus intelectuales, ha encabezado el esfuerzo por distinguir(se) de esos *otros* sectores populares por considerarlos inferiores, despreciándolos y descartándolos como “aliados” o “compañeros” de lucha. Esos *otros* fueron vistos como “la nunca fenecida ‘ciudad bárbara’”. El ancho y profundo estrato fangoso del ‘lumpen’. El mundo de los seres abominables que no podían ni debían confundirse con el pueblo ‘consciente’” (Salazar 2012a, 168-169). Porque el “bajo pueblo” que reivindica Salazar fue –y es– el que:

²⁴² Concepto desarrollado por el antropólogo Van Lier en su obra *Frontier Society: A Social Analysis of the History of Surinam* (1971), que fue empleado originalmente por el historiador norteamericano Frederick Jackson Turner –‘The Significance of the Frontier in American History’ (1893)– y que en Chile trabajó exhaustivamente el historiador Mario Góngora –‘Vagabundaje y sociedad fronteriza en Chile siglos XVII a XIX’– (1966). El concepto de sociedad fronteriza (“frontier society”) refiere tanto a la ubicación física como a las condiciones sociales, al hecho de vivir una ‘situación limítrofe’ (“border-line situation”); integra, por lo tanto, la dimensión geográfico-histórica, con las dimensiones político-social y psicológica.

Muchos –incluso “revolucionarios”– no lo han considerado “pueblo”, sino “bárbaros”. O sea, salvajes incivilizados de allende las fronteras... del Imperio Occidental. Habitantes primitivos de la estepa inconquistada de la premodernidad, del tiempo frustrado de la prepolítica, de la etapa jurásica de la “lucha de clases”. Que, por tanto, nunca han tenido nada que ver con nosotros. Nosotros, los civilizados. Nosotros, los modernos. Nosotros, los homínidos. Los políticos, los auténticos marxistas. Los que habitamos Santiago, y no ¡por favor! los valles salvajes hundidos en la cordillera, o los desiertos donde “arriba, quemando el sol”. Bárbaros, demasiado rellenos por “lo social” (y por la cultura agreste de los caminos) para hacer política; demasiado cargados por la inmoralidad, el vicio, el delito y la prostitución, para ser ciudadanos. Demasiado violentos, para ser “históricos” (Salazar 2012a, 126-127).

Salazar sabe bien con quién está discutiendo: con una corriente académica que negó el carácter de actor social y, por lo tanto, la legitimidad de un amplio abanico de expresiones de protesta y resistencia sociopolítica, por todos los motivos aludidos en el pasaje citado más arriba; con un grupo de militantes y políticos que se hicieron eco de esas interpretaciones y que actuaron en consecuencia, ninguneando y despreciando a esos actores sociales y desbancándolos de los espacios de discusión y de la toma de decisiones. En los años ochenta –momento en que la reflexión académica, de carácter sociológico, acerca de los movimientos sociales toma vuelo en Chile–, esos académicos y políticos fueron los llamados por Salazar (2012a, 59) “Touraine’s Boys”.²⁴³

Frente a ellos, la Nueva Historia no plantea el examen del actor social desde fuera, desde la distancia metodológica, desde la neutralidad valorativa, tratando de definir sus contornos, de delimitar su alcance, sino desde “dentro” de los sectores populares, “en un intento por percibirlo desde el interior de su identidad” (*Actas del Seminario de Historia de Chile* 1986, 168); porque los investigados no son “objeto” sino “sujeto”, y como tal crean y recrean –de manera más o menos consciente– su propia historia, misma que el científico puede ayudar a rescatar, explicitar, ordenar y problematizar. Pero, aun desempeñando papeles diferenciados, el “nuevo historiador” y los actores sociales están involucrados en un mismo *proceso* constante e inacabado de autoaprendizaje y de autoeducación.

Esta manera de abordar la labor científica rompe con varios estereotipos acerca de la ciencia, en su versión más elitista y conservadora. En primer lugar, el proceso de conocer se concibe aquí como una actividad social en todo su sentido. *Social* porque el sujeto del conocimiento no es nunca un *individuo* sino una colectividad. Y no sólo porque todo individuo sea también social en el sentido de que su existencia está troquelada por el conjunto de relaciones sociales en las que participa y ha participado, o porque los científicos sometan a la consideración de sus “pares” sus avances en la investigación, sino porque *la praxis del conocimiento* se realiza en la relación con los

²⁴³ La denominación *salazariana* responde a la influencia del sociólogo francés Alain Touraine en la sociología chilena y específicamente en este conjunto de sociólogos, al que nos hemos referido en el capítulo anterior, aportando autoridad académica y proporcionando en gran medida las tesis para justificar sus análisis sobre los movimientos sociales chilenos, o mejor dicho, acerca de la inexistencia de los mismos. Como bien señala Garcés (2012, 37): “Desde la perspectiva de Touraine, América Latina no es una tierra prolífica en movimientos sociales, ya que los movimientos del primer tipo, que llama ‘estructurales’, son muy débiles y los movimientos del segundo tipo, que denomina ‘históricos’, a pesar de ser muy importantes, son muy poco autónomos”.

demás, comunicando ideas, discutiéndolas, reforzándolas o rechazándolas. No es un “yo” el que conoce sino un “nosotros”.

La Nueva Historia cuestiona la relación sujeto-objeto, porque es unidireccional y jerárquica: la mirada va desde el sujeto que conoce hacia la *cosa* que quiere conocer, y desde arriba, abarcando al “objeto” de estudio. Además, el sujeto cognoscente no está sometido a su propia mirada ni, por supuesto, a la de los “otros” que están siendo observados, cuantificados, analizados, etc. Por otra parte, *eso* que se puede conocer es presentado como un objeto y por lo tanto con unas características más o menos permanentes y definidas. En la Nueva Historia subyace una epistemología que fusiona al sujeto cognoscente y al *sujeto* conocible: no hay objetos aquí, hay *sujetos* que se involucran en procesos de autoconocimiento y de autoeducación, pues sólo en ellos reside la capacidad de producir “ciencia popular”; actores de sus propias memorias, historias y ciencias. Tal y como anotamos al referirnos a la educación popular, el conocimiento es concebido como un momento más de la praxis transformadora. La relación de conocer, por lo tanto, se plantea en forma de *espiral* y de modo *horizontal*. No hay miradas desde arriba o desde abajo, sino al lado, a los que están con nosotros, hacia nosotros mismos; el sujeto colectivo en el proceso de conocerse va acumulando saberes, experiencias, memorias, que se van sedimentando, y configuran un *poso* desde donde interpretar las situaciones y tomar las decisiones.

Esta manera de mirar a los actores sociales requiere, además, *otorgarles razón*. Quiero decir, concebirlos como sujetos *racionales*, capaces de actuar conforme a principios y a fines que estructuran una lógica interna, y no como a meras “masas”, carentes de toda racionalidad y, en todo caso, moldeables desde “afuera”. Es decir, concederles el carácter de “actor social” y, en consecuencia, la capacidad de acción razonada y de reflexión. Los científicos, intelectuales y políticos a menudo han negado el carácter racional de las acciones emprendidas por “los de abajo”, incapaces de (o no interesados en) desentrañar su lógica interna.²⁴⁴ Desde la teoría de los movimientos sociales, y desde distintas (e incluso enfrentadas) corrientes de pensamiento, se ha procedido en distintos momentos de la historia a “juzgar” a los que protestan, exigen, se rebelan, o se enfrentan, y a determinar *desde afuera* el peso específico que la razón tiene en su actuar, confiriéndoles el rótulo de “movimiento social” o negándoles tal título, como hiciera la sociología *renovada* en Chile.

La crítica a estas teorías de los movimientos sociales, además de la perspectiva conservadora que está presente en muchas de ellas, es que no contribuyen a explicar y *potenciar* las capacidades contenidas en las luchas, en los procesos de construcción de

²⁴⁴ Los prolegómenos de las teorías (específicas) sobre movimientos sociales fueron contruidos sobre los supuestos del carácter emocional, instintivo, espontáneo e irreflexivo de las acciones de protesta y/o de rebelión. Lo cual contribuyó a despertar un temor fundado en la condición impredecible e irracional de ese tipo de expresiones populares. Más tarde, los estudios avanzaron en la caracterización de los movimientos sociales como “empresas” racionales, erigidas en torno a medios y fines, pero a costa de reducir la racionalidad al cálculo de costos y beneficios, al pensamiento de tipo instrumental. Por otra parte, algunas expresiones del llamado “marxismo estructural” contribuyeron a menospreciar el carácter racional de los movimientos sociales, no por la vía directa de negarlo, sino por la colateral de otorgar preeminencia a los desajustes estructurales y a la inevitabilidad de la crisis del capitalismo, restándole importancia a la capacidad de los propios actores sociales de definir los problemas y construir las alternativas, así como de crear identidades sociales y elaborar proyectos políticos.

identidades y de alternativas sociopolíticas, procesos siempre complejos, contradictorios y cambiantes, sino que esclerotizan el movimiento al pretender fijarlo en un concepto que, es de por sí, general, abstracto e inmóvil. Por el contrario, para la Nueva Historia, la fuerza de la teoría consiste sobre todo en saber plantear *problemas*; porque evidenciando las tensiones resulta más probable arribar a planteamientos que superen las dificultades reales (más que teóricas). La ciencia y la historia, por lo tanto, tendrían el desafío de sugerir y redefinir las cuestiones problemáticas que aquejan la vida social y que, a menudo, se arrastran por décadas, “tejiendo el pasado con el presente y el futuro” (Salazar 2012a, 391). Es así, por medio de la actualización de esos problemas, como es posible enfrentar el presente a partir del pasado.

Abordar el conocimiento científico a partir del planteamiento de problemas supone concebirlo como una tarea abierta, compleja, multifacética e inacabada. Implica pensar en *procesos* y no tanto en estructuras; menos en “lo dado” y más en “lo dándose”. Desde esta perspectiva, no se puede pretender examinar los *movimientos* sociales, con herramientas que miden la estabilidad, la permanencia, la inmutabilidad. Esto sería más evidente aún en el caso de los sectores populares, cuya precariedad material los ha forzado históricamente a asumir estrategias de sobrevivencia más cambiantes; el movimiento popular “estrictamente, se trata de un sujeto predominantemente desestructurado *que se constituye como tal sobre todo en la acción y en el movimiento*” (Salazar 2006, 169, cursivas mías). Es este carácter móvil, inestable, cambiante, de las identidades sociales frente a la naturaleza relativamente fija de las estructuras sociales el que dificulta la aprehensión de sus acciones por parte de una teoría ciega *al devenir histórico*. Los movimientos sociales son inevitablemente un proceso “porque su verdadero ideal está en el *caminando*, en la sinergia misma del movimiento, en el goce colectivo de hacer eso uno junto al otro” (Salazar 2012a, 397).

El planteamiento contenido en la Nueva Historia entraña la superación de la racionalidad cartesiana, al reconocer la materialidad de la vida como sustento y *punto de partida* del conocimiento, en tanto la posibilidad de vivir es la precondition de la actividad racional y, sobre todo, por cuanto la negación de aquélla o la imposibilidad de vivir dignamente es el imperativo del conocimiento y de la memoria. Desde esta perspectiva, también las emociones y los sentimientos son parte de la conducta racional de los sujetos. *Y los afectos, no sólo las ideas, son considerados elementos constitutivos de las identidades colectivas y de las prácticas de transformación social*. Este planteamiento lleva a relativizar y ampliar lo que se ha entendido en la cultura occidental por “racionalidad”, incorporando *en condiciones de igualdad* otras miradas subalternas e invisibilizadas acerca de lo que se considera lógico, sensato o razonado, y contemplando, por lo tanto, no una, sino *varias* racionalidades.

Sólo ubicándonos *desde el punto de vista* de los que tienen negada una vida digna será posible desplegar el sentido profundo del saber, su naturaleza *liberadora*. No se trata de “conocer por conocer” ni de una estimulante curiosidad humana, por mucho que ésta pueda tener injerencia en el proceso de investigación. La función de la ciencia es *social y comunitaria*. Por eso, la labor del científico consiste en “perfeccionar más las metodologías colectivas de la ‘auto-educación’ que las de la teorización pura” (Salazar 2012a, 406), para contribuir al proceso de recuperación de la *memoria* y de la

historicidad de los actores sociales que pugnan por la transformación de la sociedad actual en pro de mayores cuotas de *humanización*. El saber (científico) debe estar al servicio, pues, de la tarea de construcción de una nueva sociedad, y para ello es fundamental desde esta perspectiva que contribuya a potenciar la *cultura interna* de los movimientos sociales y desarrollar su *poder social*.

Una segunda consideración, como decíamos, tiene que ver con el lugar que ocupa la *especificidad* latinoamericana, y en este caso chilena, en la teoría sobre los movimientos sociales. De alguna manera se desprende de lo que veníamos comentando que si la historia (y la ciencia en general) tiene que surgir de la propia comunidad y tiene que revertir sobre ella, esa historia y esa ciencia tienen que estar ancladas en los “movimientos sociales reales” latinoamericanos, y ser productos concretos de la reflexión *desde, por y para* ellos. La Nueva Historia sugiere que esto no habría sido así en los estudios sobre movimientos sociales en Chile: “La ‘teoría de los movimientos sociales’ no va de la mano sólo con los MS [Movimientos Sociales], sino también con *la de sus enemigos*. Y esto determina que, como ‘teoría’, forma parte de un finteo académico que tiene poca incidencia en los hechos reales” (Salazar 2012a, 423, cursivas mías).²⁴⁵ Ya hemos dado cuenta de la influencia del pensamiento de Alain Touraine en el examen de los movimientos sociales chilenos y latinoamericanos, pero el problema parece no estar necesariamente en recurrir a hipótesis y conceptos construidos, y sobre todo a preguntas planteadas, con referencia a otros espacios geográficos, sino en adoptar una actitud a-crítica ante esas teorizaciones sin evaluar en qué medida contribuyen a esclarecer la mirada histórica concreta y ubicada en nuestros actores sociopolíticos y en nuestros problemas o, por el contrario, la enturbian. Nuevamente el problema tiene que ver con la colocación de la mirada y con el alcance de nuestros lentes: la ubicación no se refiere tanto al lugar geográfico desde donde surgen las propuestas teóricas y metodológicas, sino a la *posición epistemológica* desde donde se enfoca el problema. Si bien es cierto que el *canon occidental* del pensamiento científico se construyó históricamente en torno al pensamiento de autores occidentales, no es menos cierto que ese canon desconoció y descalificó otras miradas dentro del espacio geográfico europeo y norteamericano, como también que ha sido asumido y reproducido por pensadores de otras geografías. Por ello no resulta sencillo establecer una completa identificación entre lugar geográfico-cultural y ubicación epistémica.

Hemos visto hasta aquí que la ruptura epistémica que se expresó en la Nueva Historia implicó una serie de desplazamientos, abandonos y reafirmaciones. La primera de esas opciones estratégicas supuso desprenderse de cualquier atisbo de pretendida neutralidad valorativa en el quehacer científico. Una vez ratificadas las implicaciones políticas de toda ciencia social, el siguiente paso suponía explicitar desde dónde, con quién y para qué se construye conocimiento y, aquí, el historiador social adoptó decididamente el punto de vista de los sectores populares para, en palabras de Salazar (1985, 15), “construir una *mirada teórica* distinta a la que nos ha regido en la academia”, a cuyos ojos el movimiento de *pobladores* había carecido de una existencia

²⁴⁵ Salazar es especialmente crítico del *afán teorizante* y la voluntad de establecer una *teoría general* de los movimientos sociales, que habría caracterizado a las ciencias sociales chilenas y latinoamericanas, haciendo hincapié, así, en lo abstracto, lo superficial, lo estable y lo estructural.

real. En este caso, la reposición de los sectores populares como actores centrales de la historia vino de la mano de la modificación del *locus* epistémico. Es decir, fue al mudar el lugar desde donde se pensaba la historia y la transformación de la sociedad, que otros actores pudieron emerger como auténticos *protagonistas de la obra*. Partiendo de la premisa de que “no existe una posición privilegiada para conocer” (Salazar 1999), la epistemología que subyace en la Nueva Historia supera la división canónica de la ciencia social moderna entre el investigador y su “objeto de estudio” –que pasa a ser considerado como “sujeto de acción” (Salazar 1985, 18)–. Y se devela también la esterilidad –y aun la falsedad– de la ciencia por la ciencia, buscando “una mirada teórica que se hace acción teórica” (Salazar 1985, 15); esto es, que entiende todo saber (praxis cognitiva) como un momento de la praxis transformadora, en una simbiosis imprescindible y fecunda.

4.2.3. *La afirmación de la afirmación: opción epistemológica y política*

Frente a una concepción de los sectores explotados, dominados y marginados del sistema, en términos predominantemente de lo que en ellos está *negado*, de lo que *no son*, de lo que *no tienen*, de lo que *no dicen*, de lo que *no pueden*, Salazar recupera la visión estrictamente *marxiana* al subrayar el aspecto positivo, “la posición o autoafirmación y autoconfirmación que va implícita en la negación de la negación” (Marx 1962, 110), porque el “ser” se afirma a sí mismo al negar lo que lo niega, y en esa lucha ya están presentes –en proceso *incesante* de construcción– las identidades y los proyectos de los sectores populares. Así, Salazar propone una mirada del movimiento popular centrada “en la *afirmación de la afirmación*. O sea: centrada en ‘lo propio’ (no en lo ajeno o en el enemigo), en la ‘identidad’ (no en la alienación), y en el ‘poder’ que emana de la solidaridad y la mirada colectiva” (Salazar 1985, 17). Por esta vía, el análisis de los movimientos sociales se sustenta no tanto en la historia de miserias y carencias del “bajo pueblo”, sino sobre todo en los aspectos positivos –*afirmativos*– que dichos sectores potencian para garantizar su vida. Por ende, sobresalen sus prácticas de solidaridad, de compañerismo, de ayuda mutua, de fraternidad; experiencias que cimentan su identidad y aseguran su sobrevivencia.

Lo anterior no significa que el movimiento popular, o el pueblo, sea pensado exclusivamente a partir de sus rasgos y prácticas afirmativas;²⁴⁶ al contrario, conviven en su seno esas cualidades con las tendencias a la asimilación, al acomodo y a la subalternización. El proceso de afirmación “lleva, por tanto, en su entraña su contraposición” (Marx 1962, 110). Quizás el reconocimiento más franco de ese carácter *contradictorio* del pueblo sea el que realizara Salazar en su tesis doctoral al referirse a

²⁴⁶ Como ha pretendido una lectura superficial y a menudo (mal)intencionada de los trabajos de Salazar, con el propósito de atribuir a su perspectiva un “reduccionismo esencialista”. Por el contrario Salazar advierte: “La sinergia solidaria e identitaria interna de los rotos no podía, por tanto, ser estudiada de modo aislado. Como un fenómeno histórico químicamente puro” (2003a, 21). Sobre la formulación más explícita de la crítica y la respuesta del propio historiador, ver el prefacio a la segunda edición de su libro *La violencia política popular en las “Grandes Alamedas”. La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)* (Salazar 2006, 5-24). Otro cuestionamiento en el mismo sentido pero desde la propia historia social, en el artículo de Sergio Grez “Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social” (2005).

sus vivencias personales: “Mi infancia se pobló densamente de las imágenes proyectadas por la sociedad ‘de la esquina’: hombres, mujeres, niños, perros, harapos, tarros, hambre, frío, riñas, heridas, alcohol, pero sobre todo, calor humano. Calor humano que emanaban esos hombres y mujeres cada vez que percibían cerca de ellos el aliento inconfundible de la solidaridad” (Salazar 1985, 19). Es esta *identidad solidaria* la que el historiador asume como médula de su labor investigativa. Y es en virtud de ello que el movimiento popular se constituye como el *reducto* desde donde pensar la transformación del sistema,²⁴⁷ pues es expresión de lo que está negado por él y, a la vez, *afirmación* de otro mundo posible, ya que “comporta principios sociales alternativos y eventualmente superiores de reintegración y redemocratización de la sociedad” (Salazar 2006, 307). Esta premisa queda más claramente formulada en la siguiente definición de movimiento social:

El “movimiento social” no es más que la sociedad (especialmente la popular) en su estado puro; es decir, en el gerundio de la creación social de sí misma. Es por ello que *el “movimiento social” tiene su origen en el estrato del “bajo pueblo”*. Y, principalmente aquí. Puesto que, normalmente, el “bajo pueblo” siente la necesidad de la “recreación permanente” como un imperativo categórico. Por lo tanto, en ese sentido específico, el “movimiento social” no admite la anomia como una parte de sí, ya que la anomia está siempre donde no está el pueblo (Salazar 1986, 118, cursivas mías).

No cabe duda de que, desde esta perspectiva, es precisamente la resistencia de los *pobladores* y su capacidad socio-constructiva lo que resulta de particular interés, desechando la atribución de tendencias auto-destructivas *per se*. Por ende, la interpretación de las prácticas comunitarias y de las protestas de los ochenta debía ser radicalmente distinta de la que defendieron los sociólogos a los que nos hemos referido en el capítulo anterior. De entrada, los historiadores sociales evidenciaron el trasfondo eurocéntrico y elitista de los análisis de los *pobladores*, que contraponían la barbarie y la irracionalidad, a la modernidad y la civilización (Salazar 2012a, 154). Y denunciaron, a su vez, la estrechez del concepto de movimiento social al ser reducido, de manera más o menos explícita, al de movimiento obrero, con las consecuencias políticas que dicha simplificación comportaba. Por el contrario, Salazar sostiene:

Que el proletariado industrial sea la identidad social “ideal” –en tanto estrato masivamente dependiente de un salario– para situar los objetivos populares de liberación, *no significa que los que no son dependientes de un salario carezcan de identidad social y de capacidad para “entrar” en la lucha de clases*. En un país como Chile, tan coaccionado por “desviaciones desestructurantes”, los “sectores independientes” copan la mayor parte del “polo popular” de la lucha. Y por su independencia, acaso, se hallan eventualmente más “libres” para entrar en la lucha. Pues, para la mayoría de los casos, esa independencia “consiste” en la extrema pobreza, la máxima opresión y la suprema desviación, o sea, en el fondo “definitorio” de lo que es en sí mismo el “bajo pueblo” (Salazar 1986, 116, cursivas mías).

²⁴⁷ O de otra forma: “El movimiento popular posee, casi en términos de unción monopólica, el carisma de ser el arranque social de una sociedad humanamente mejor (no tecnológicamente superior, tan solo)” (Salazar 2006, 310).

Para una gran parte de la izquierda chilena la constatación de la disminución de la *clase en sí* (en términos cuantitativos proporcionales) y el deterioro de la *clase para sí* (en cuanto a conciencia, organización y proyección política), hizo que quedara sin “objeto” de estudio y sin sujeto revolucionario, con la sensación de orfandad a la que aludía Faletto. La jibarización de la clase obrera entrampaba, de acuerdo con los análisis tradicionales, las posibilidades de la recuperación democrática en el contexto dictatorial. Frente a ese vacío histórico y teórico, la mirada de la Nueva Historia llama la atención, en primer lugar, sobre el hecho de que en la historia de Chile, aun habiéndose estructurado una clase obrera significativa en términos cuantitativos y cualitativos, con organizaciones potentes, aquélla nunca fue mayoritaria dentro de los sectores populares. Por lo tanto, junto con las tendencias estructurales propias del desarrollo capitalista que impulsaron la proletarización de los trabajadores y su organización sindical, estuvieron siempre presentes las “desviaciones desestructurantes” que, aunque desviaciones, siguieron siendo “normales”. Esas desviaciones provocaron permanentemente la existencia de una amplia masa de trabajadores no asalariados de los más variados tipos. Y ese conjunto multiforme, diverso y cambiante fue el que se vio acrecentado con las políticas económicas neoliberales implementadas por la Dictadura, cuando “se abultó a tasas record el subsistema popular de tipo ‘arcaico’ (léase: ‘peonaje’)” (Salazar 1986, 116).

El calificativo de “arcaico” alude a la caracterización de la sociología *renovada* de las organizaciones comunitarias, que se circunscribían a la *población* y que, de acuerdo con esta perspectiva, no interpelaban al conjunto de la sociedad ni contenían un proyecto democratizador. Esas organizaciones se enfocaban en la sobrevivencia y se articulaban en torno de los “grupos primarios” (familia, amigos, vecinos y comunidades de base, principalmente). Para Salazar, en cambio, el movimiento social está siempre encarnado en los “grupos sociales vivientes”, no así en sus representaciones políticas. Y los grupos primarios han sido siempre, desde esta perspectiva, los espacios *privilegiados* para la resocialización y para la emergencia de lazos de solidaridad, por eso es en esos grupos primarios en donde se gestan también los procesos de *recreación de la sociedad*, en el sentido de la transformación de los lazos de sociabilidad. La vigorosidad de la vida política está directamente vinculada con la fortaleza y vitalidad de esos grupos primarios y el grado de sujeción de la primera a los segundos. En ocasiones la política (institucional) se escinde ella misma, por sus propias dinámicas, de la base social que le da sustento y, con ello, pierde legitimidad y se *fetichiza*. En otras ocasiones, hay intervenciones “ajenas” que fuerzan el aniquilamiento de la esfera política, como pretendió la Dictadura. En ese caso, “cuando un dictador arrolla al pueblo desde las urbes institucionales y asociativas hacia el potrero distante de lo social y comunitario, no ha hecho otra cosa que meter la sociedad dentro de sí misma, y al movimiento político dentro del movimiento social, y a todos dentro de su poder histórico” (Salazar 1986, 117).

Como hemos visto anteriormente, la ausencia de identidad atribuida a los sectores populares no constituía exclusivamente una característica descriptiva *aséptica*, sino que ello implicaba automáticamente la negación también del potencial movilizador, renovador, reconstructor, de esos sectores y de las experiencias colectivas que

protagonizaban. En definitiva, los inhabilitaba también para “entrar en la lucha”. Por el contrario, para el “nuevo historiador social”, esos sectores compartían una situación de precariedad absoluta –y una historia de carencias, de exclusiones pero también de luchas y de afirmaciones– que le otorgaba ciertos rasgos de homogeneidad pero que, sobre todo, los configuraba como los que *nada tienen que perder*.

Pero más allá de este piso común de máxima exclusión social –que dotaría a estos sectores de una *experiencia co mpartida* que fortalece su sentimiento de pertenencia a un colectivo con los mismos intereses–, ¿qué es lo que convierte a los sectores populares en un sujeto potencialmente rebelde y, por lo tanto, en cuna de movimientos sociales? La vertiente más radical de la nueva historiografía chilena apuesta epistemológica y políticamente por la existencia de una *cultura popular* que pervive transformándose en el “bajo pueblo” y que labora permanentemente –aunque a veces lo haga inconscientemente– por la humanización de la vida. Lo humano entendido en un sentido amplio y dialéctico, como lo bueno y lo malo, las grandezas y las miserias del ser humano, no sólo aspectos positivos pero sí una pulsión tenaz hacia mayores cuotas de humanización. Ese presupuesto epistemológico y político se ratifica en los periodos de mayor represión y control estatal; entonces, “cuando llega el tiempo de los dictadores, la historia se renueva dentro de los grandes prisioneros y en la sociabilidad de los hombres simples” (Salazar 1986, 117).

Tenemos, pues, que “en la historia misma, el sujeto popular es más ancho y abigarrado que la clase proletaria en sentido estructural estricto” (Salazar 2006, 150). Pero ello no obsta para que el movimiento popular haya tenido una participación decidida en numerosos momentos de la historia de Chile y, particularmente, en los ochenta, cuando los *pobladores* se constituyeron “en el sector social más activo y movilizado, contribuyendo de modo muy significativo a la recuperación de la democracia” (Garcés 2013, 76). El fracaso de la opción movilizadora –de la política de rebelión popular de masas, según la formulación del Partido Comunista– en el derrocamiento de la Dictadura no determina su (in)existencia, ni la profundidad de su propuesta democratizadora, pues de acuerdo con los *nuevos* historiadores, el movimiento popular “ni se origina ni se agota en el derrocamiento de generales o presidentes impopulares, ni consiste en una *mera táctica*” (Salazar 2006, 305). Muy por el contrario, el examen de las organizaciones económico-populares y, en general, de la asociatividad desplegada por el movimiento de *pobladores* revela la hondura y la proyección –el carácter *estratégico*– de sus motivaciones. Con todo, el historiador reconoce que, para el movimiento popular, el balance general de las Jornadas de Protesta Nacional es agrídulce:

De un lado, con ellas abrió una decisiva brecha psicológica y política en el flanco popular de la dictadura; pero, de otro, perdió la batalla de “la transición” en el segundo frente (el de la negociación), enceguecido por la inercia VPP [violencia política popular], empantanado por las tácticas distractoras del estamento militar, desarmado por la compulsión parlamentarista de su aliado mesocrático, y formalmente superado en los mismos umbrales de la eventual “democracia” (ibíd.: 304).

Salazar no desconoce la heterogeneidad del movimiento popular y tampoco niega sus limitaciones para explicitar y *formalizar* los elementos y las propuestas que laten en sus prácticas sociopolíticas; en ese sentido, reconoce su dificultad para “pasar fluidamente de la protesta a la propuesta” (ibíd.:306). Pero no considera que esas características anulen su historicidad y el potencial para desplegarse como actor sociopolítico. En ese sentido, llama la atención sobre la necesidad de analizar a los sujetos de “carne y hueso”, prescindiendo de categorías abstractas que buscan hacer encajar la realidad en la teoría, pues la base social –en *movimiento*– “no podrá ser detectada ni valorada, si para ello se utilizan y se aplican categorías sistémicas de definición y observación” (ibíd.: 169). Por lo tanto, desde esta perspectiva, el movimiento social es visto como un “proceso lento, cualitativo, diverso, amplio, de continuidad y ruptura, a partir de la subjetividad popular” (Agurto y Milos 1983, 8). Con ello, pierde centralidad en la reflexión el peso de las estructuras, la influencia de las minorías lúcidas, de las vanguardias, la linealidad de los procesos; y gana terreno la complejidad del sujeto, la pluralidad de los actores, el despliegue de las contradicciones, las abigarradas vías de construcción de la subjetividad popular.

Salazar sintetiza la posición de la Nueva Historia frente a las conclusiones de la sociología dominante. De acuerdo con el historiador, la generación rebelde del ‘68 había adoptado una opción de crítica y rebeldía hacia el sistema político, económico y social vigente en el Chile del momento; en ese sentido, fue “una generación que se hizo anómica, por opción crítica y descuelgue práctico” (Salazar 1986, 99). Esa decisión la había llevado a buscar la destrucción del orden normativo e institucional por medio de la revolución, y ella misma se había concebido como la “vanguardia” destinada a dirigirla. Esa “nueva izquierda” había desplegado, según el historiador, una “trinidad política: crítica a fondo, entrega sin retorno, poder total” (Salazar 1986, 100). Pero estaba escindida, separada del grueso de la población, y sobre todo de los sectores populares, a los cuales les exigía un compromiso y una entrega similares a los que los integrantes de esa generación creían estar entregando. No obstante, subsistía una diferencia sustancial: ellos estaban viviendo un tiempo histórico excepcional, unos “sentimientos de omnipotencia, que parecían bastarse a sí mismos para finiquitar el proyecto revolucionario” (Salazar 1986, 100). Por el contrario, el pueblo, las grandes mayorías, experimentaban el tiempo cotidiano, normal, gris. Las “acusaciones” de vanguardismo y voluntarismo vertidas por Salazar sobre aquella generación del ‘68 que creyó posible hacer la revolución en Chile y avanzar hacia una sociedad socialista, se refieren a un problema práctico pero también a una concepción teórica: la que tiene que ver con la consideración de la práctica política y del cambio social, y en definitiva, con el o los sujetos de ese cambio. A su juicio la preeminencia de:

La macroscopía epistemológica de la crisis ha impedido, por diferencias de escala, centrar las perspectivas en la línea débil del hollamiento “social” de la salida. Esta línea, arada en piel propia y a ras de sociedad, es de vuelo lento y bajo, pero se orienta al resoldamiento social de las rupturas. Como los cóndores, necesita tomar vuelo. Y aunque tarde, vuela lejos. Pero además de lejos, sube tierra fresca, sangre revitalizada, ideas nuevas. Renovación (Salazar 1986, 100).

Era ese enfoque macro-sistémico el que orientaba los análisis sociológicos hacia la primacía, una vez más, del factor estructural frente a la historicidad de los actores sociales:

Revalorizando el carisma prometedor de “las organizaciones” y desechando, como desperdicio súbito, los “grupos comunitarios del Pueblo”, las ideas de “movimiento social”, de “educación popular”, de “proyecto histórico popular”. Motejando a los que se han rezagado en esas “prácticas de repliegue, hoy superadas”, de románticos, o “basistas”, cultores de “comunitarismo populista”, etc. (Salazar 1986, 103).

De otra parte, la diferente interpretación de las acciones de los *pobladores* se explica por una concepción distinta de la *política*.²⁴⁸ Frente a lo que Salazar define, acertadamente, como una propuesta de modernidad neoliberal y una lectura estatalista de la política, que identifica esta dimensión de la vida social con una esfera auto-centrada circunscrita al Parlamento y a los partidos políticos, y la representación con la vía primordial de constitución de los sujetos políticos, la Nueva Historia plantea una forma distinta, *popular*, de hacer política, que se caracteriza por la “tendencia del ‘bajo pueblo’ a territorializar, concretizar y socializar la acción directa. Es decir, a *hacer política pr ivilegiando la ‘acción di recta’*” (Salazar 2006, 309, cursivas mías). A su juicio, esa *política popular* adolece de un déficit de formalización, explicable porque el movimiento popular ha carecido históricamente del entrenamiento y de la experiencia necesarios (Salazar 2006, 306); y también por “la persistente acrimonia y el desinterés ejercitados por la alta intelectualidad chilena *frente a l as ne cesidades t eóricas específicas del movimiento popular*” (Salazar 2006, 307, cursivas mías).

Ese desabrimiento que Salazar atribuye a una parte del pensamiento social estaría dado por la adhesión a los postulados modernos (sistémicos) en su comprensión de la sociedad y de los actores sociopolíticos, y por el compromiso con el régimen económico y político neoliberal en sus formas esenciales, que en la década de los ochenta se expresó en el apego a la salida pactada de la Dictadura, presentada como la única opción viable, responsable y racional, para lo cual resultaba imprescindible “negar teóricamente y bloquear políticamente el protagonismo histórico del movimiento popular” (Salazar 2006, 306). Y esto porque las reivindicaciones y las formas de organización y de lucha del movimiento popular resultaban incompatibles con la propuesta formalista de una transición pacífica a la democracia política. El antagonismo entre esas dos propuestas fue bella y amargamente expresado por el profesor y artista Gastón Vidaurrázaga²⁴⁹, en su poema *La partera* (1987):

La patria sangra
ha perdido sus hijos
sus hijas
llora sus mártires.
¿Reconciliarse con la bestia?
con tumbas inexistentes

²⁴⁸ Aspecto sustancial también de las controversias al interior de la historia social.

²⁴⁹ Militante *mirista*, asesinado por la CNI en venganza por el atentado a Pinochet, la madrugada del 8 de septiembre de 1986.

crímenes adeudando verdades
aceptar su fuerza y renunciar a desarrollar la propia
(no lo dicen pero lo quieren).
Su camino es fácil y jodido
nosotros ponemos el pellejo y los huesos
mientras ustedes se arrepienten
hacen discursos y se enredan en las
elecciones del tirano.

En definitiva, para la Nueva Historia, “los protagonistas de los hechos de VPP han levantado y echado a andar un movimiento social que no tiene sistematicidad (ni lealtad al sistema, ni orden sistemático, ni racionalidad funcional), pero sí tenacidad del proyecto, y en consecuencia, lógica de historia, que apunta (solo apunta) a construir un orden nuevo” (Salazar 2006, 149). Esta perspectiva contribuye a visibilizar y apreciar un movimiento social que no había sido suficientemente estudiado ni valorado por la teoría social, específicamente por los sociólogos *negacionistas* y *transitólogos*, cuyos trabajos dan cuenta de una mirada miope o prejuiciada que pre-conceptúa la realidad, clasifica y fija a los actores sociales y descarta todo aquello que no tenga cabida dentro de los estrechos márgenes de conceptos “importados” y absolutamente “cerrados”. Frente a la *negación* de los movimientos sociales y la interpretación desdeñosa de las luchas de los *pobladores*, la Nueva Historia emprende un esfuerzo teórico honesto por comprender los movimientos sociales *reales* que han emergido en Chile, trabajando “una perspectiva complementaria que, al día de hoy, parece ser indispensable” (Salazar 1985, 18).

4.2.4. *Los movimientos sociales: Tiempos, espacios y formas de la política popular*

Si el actor social que está en el centro de la perspectiva de la Nueva Historia es el sujeto marginal, el excluido por el sistema, el pobre (de miseria económica), el despreciado por la academia y el anatemizado por la política elitista, entonces, la lucha que interesa desde esta mirada, es también aquella que se lleva a cabo en los márgenes, en los intersticios, en las grietas, en los subterráneos, no en las “anchas alamedas” sino en los “estrechos pasajes”. En fin, en todos aquellos *espacios residuales*, pequeños, frágiles, fragmentados, “insignificantes”, a los que habitualmente han sido relegados por el sistema “los nadies”. Esos recovecos no acaparan los focos de los medios de comunicación de masas ni atraen la atención de los estrategas de la mercadotecnia política, por lo que no resulta fácil registrar, cuantificar, transformar en números y porcentajes lo que allí sucede. Se trata de “esa íntima dimensión olvidada por los estudiosos que sólo quieren percibir las grandes magnitudes del todo. Los estruendos máximos. Las hecatombes absolutas. La macro-historia del pueblo” (Salazar 2012a, 384). En cambio, la Nueva Historia presta atención a “la vida histórica ‘normal’” (Salazar 2012a, 384). Las acciones desplegadas allí tienen generalmente un carácter microscópico y comunitario. No constituyen acciones públicas ni privadas, sino *comunitarias*, surgen desde y hacia un colectivo determinado, más o menos definido, que constituye una comunidad, en el sentido de un grupo de personas vinculadas entre sí

de manera directa, en el marco de un proyecto de vida, que muy a menudo es –apenas– la supervivencia. Desde esta perspectiva, los procesos revolucionarios no son más que “miles y aun millones de actitudes y acciones microscópicas, fragmentarias y proteicas” (Salazar 2012a, 383).

Para que podamos pensar en un movimiento social debemos considerar una precondition social necesaria, aunque insuficiente: la existencia de una “asociación comunitaria”.²⁵⁰ Para que aquélla contribuya al surgimiento de un movimiento social, o se erija ella misma en movimiento social, debe ensanchar y profundizar su “capital social”, o su “cultura interna”, que no es otra cosa que la memoria común de dicha colectividad (de los momentos importantes de su historicidad, de sus capacidades para realizar acciones comunes, de sus logros y fracasos, etc.). Esa cultura interna es el sustento de la *potencia histórica* del movimiento social y del *empoderamiento* de esa colectividad. De acuerdo con esta mirada, una colectividad con una amplia y rica cultura interna tiene *poder* y tenderá a proyectarlo.

Es por lo anterior que, para Salazar, el estudio de los movimientos sociales se ha desplazado desde el plano económico al *cultural*. El elemento fundamental que permite explicar y comprender a los movimientos sociales es el “grado” de cultura interna que éstos poseen y crean. Y ésta constituye la diferencia esencial entre los movimientos sociales y aquellos otros que el historiador denomina “movimientos de masas”. En realidad, con esta expresión, está aludiendo principalmente al movimiento obrero. Se trata, a su juicio, de una forma de expresión social y política que predominó entre los años 30’s y 70’s del siglo pasado, caracterizada por las manifestaciones de fuerza “externas”, como las marchas, los desfiles, los mítines, etc. pero en las que prevalecía la “ideología”, entendiendo por ésta una forma de cohesión disciplinante impuesta desde afuera, en la forma de “verdades preestablecidas” (Salazar 2012a, 415). En ese sentido, el “movimiento de masas” no tendría verdadera *autonomía*, pues estaría a la merced de las ideologías y de quienes se encargan de propagarlas, interpretarlas y defenderlas (en ese caso, serían los partidos y sindicatos de izquierda y sus intelectuales). Este movimiento, por lo tanto, sería *dependiente*. Y es precisamente la dependencia de un recurso externo (la “ideología”), que parece potenciarlo en ocasiones, lo que explicaría su “traición”. La traición consistiría en la incapacidad de profundizar por vías de verdadera humanización y en el recurso al sempiterno vagabundaje de derechos y prebendas. La ideología es definida frecuentemente en su obra como una “nube de humo” o un “nubarrón discursivo” (Salazar 2012a, 268-269 y 288, respectivamente), que enmascara y desvirtúa la realidad de esos actores y sus potencialidades, fungiendo como un denso e hinchado *techo* que impide el desarrollo de una cultura interna. La ideología es vista como una forma discursiva de encuadrar simbólica y físicamente a los actores sociales desde el *exterior*, retomando el sentido marxiano original de *falsa conciencia*.

Por lo tanto, el movimiento social, en esta propuesta interpretativa, no es principalmente un proceso volcado hacia fuera de sí mismo (hacia el Estado, o los

²⁵⁰ Un concepto que el autor atribuye a la filósofa judío-alemana Hannah Arendt y que se refiere a la condición de posibilidad –y *locus*– del poder.

medios de comunicación, u otros actores sociales y/o políticos), no es fundamentalmente un conjunto de reivindicaciones o de acciones de denuncia, de propaganda o de reivindicación, no es sustancialmente un conglomerado de organizaciones e instituciones articuladas en torno a una demanda específica, como sostenían a rasgos generales las corrientes sociológicas. El movimiento social es, para la historia social, la sociedad siendo, haciéndose, recreándose, reinventándose. Este juicio despoja al concepto de movimiento social de sus rasgos de excepcionalidad, de eventualidad, de espectacularidad y de visibilidad, tan relevantes para su consideración desde otras perspectivas; lo devuelve a un plano de cotidianeidad y de rutina. Los movimientos sociales, por tanto, se refieren a la dimensión ordinaria, corriente y gris de la vida; a las acciones cotidianas y corrientes de los hombres y mujeres también comunes. No se trata de procesos excepcionales o de fenómenos extraordinarios, sino sólo de la creación social de sí misma, que tiene lugar primordialmente en los estratos bajos de la sociedad porque éstos, al estar negados por el sistema, sienten la necesidad de transformarlo. El movimiento nace de la negación, pero para existir debe afirmarse.

Salazar está mirando los movimientos sociales como procesos esencialmente internos, esto es, auto-centrados, *volcados sobre sí mismos*. Esto no significa que la existencia de los movimientos sociales y las características de los mismos no esté condicionada por los rasgos de los sistemas económico, político y cultural, y las transformaciones que experimentan. Pero son los momentos en los que el movimiento trabaja más intensamente su vida interior, los que más interesan al historiador social. Los períodos de “introversión” e “inter-subjetivación” potencian “el decantamiento de identidades populares de creciente autonomía cultural y fuerte consistencia histórica” (Salazar 2012a, 29). Bajo esta mirada, el poder creativo del movimiento se expresaría sobre todo “de puertas adentro”. Esa capacidad creativa desplegada en la *intimidad* del movimiento sería la que exhibiría la potencialidad del mismo, para forjar una identidad propia fuerte, instaurar prácticas autónomas y autogestionar los recursos disponibles. La *fuerza* del movimiento social está dada, en esta interpretación, por la vigorosidad de ese *mundo interior*, que en algún momento puede exteriorizarse y expresarse en la dimensión “nacional”. Porque el poder histórico que detenta el pueblo, que se expresa en sus movimientos sociales y que florece en sus espacios de vida cotidianos, en la esfera social y comunitaria, puede llegar a desbordar esos espacios y forzar el reordenamiento completo de la sociedad. Ésa sigue siendo la noción de la “revolución”. El impacto de la extraversión del movimiento social estaría determinado, a su vez, por la fortaleza y la vitalidad de la *cara interna del movimiento*, pero aun cuando éste no llegue a manifestarse y proyectarse en la vida pública, esto no redundaría en una disminución de su consideración en tanto movimiento social, pues de acuerdo con esta perspectiva *no hay historia sin sujeto*. Por eso, el historiador social se refiere a los movimientos sociales con la metáfora del *volcán*; el movimiento social trae aparejado un anuncio de erupción, pero siempre es lava candente y densa, trabajando incansablemente bajo la superficie.²⁵¹ O con la expresión “monstruo social subterráneo”

²⁵¹ También el intelectual irlandés radicado en México John Holloway (2000) utiliza esta metáfora.

(Salazar 2012a, 183), que, como el “viejo topo”, trabaja tenazmente bajo tierra, horada, abre túneles, conecta galerías y, un buen día, sale a la superficie.

De acuerdo con lo anterior, Salazar identifica distintas *etapas* en el desarrollo de los movimientos sociales, que configuran el “tranco del pueblo” (Salazar 1986, 118):

1. Tiempo uno: “largo”. Estática aparente. Introversión. Los grupos primarios como refugios herméticos. Siembra. Maduración de gérmenes soterrados.
2. Tiempo dos: “trémolo”. Indignación visible. Rabia. Extraversión floreciente. Movimiento expresionista descoordinado. Avances y retrocesos caóticos.
3. Tiempo tercero: “allegro”. La solidaridad está inundando todos los poros. Crece la confianza, codo a codo. Primavera. La movilización tiende a hacerse sostenida y confluencial. Las coyunturas comienzan a anudarse, unas con otras.
4. Tiempo cuarto: “andante cantábile”. El movimiento sostenido construye su propio cauce melódico. Las expresiones aisladas se anudan, estructurándose. Comienza a sentirse el peso de la fuerza histórica. Hay politización. Los grupos oyen su poderoso coro conjunto: es la Ley (Salazar 1986, 118).

A simple vista, no parece haber grandes diferencias entre su descripción y las de otras corrientes del pensamiento histórico, político y sociológico. También hay un proceso de “maduración” de unas condiciones que permite evidenciar una situación injusta y construirla socialmente como tal; en ese proceso se visibiliza el malestar y ello permite mostrar la generalidad de la insatisfacción o el hecho de que existen distintas situaciones que son percibidas como injustas; posteriormente, el proceso avanza hacia la confluencia y coordinación de esas experiencias; y, por último, el movimiento logra un grado de unidad, profundidad y radicalidad que le permite proponer un nuevo sistema normativo (es el momento *constituyente*, según la terminología en boga).²⁵² De todas maneras, el movimiento social “está ‘cargado’ de una racionalidad histórica latente desusadamente rica, que, cuando llegue su hora se expresará bajo un forma ‘normativa’” (Salazar 1986, 117). Esa expresión, “cuando llegue su hora”, contiene un principio teleológico, se refiere a una finalidad intrínseca, a un movimiento interno de los sectores populares que los conduce hacia la causa final.

La Nueva Historia pone en valor el hecho de que las acciones tengan un carácter cotidiano y más o menos urgente, ya que atienden necesidades reales *presentes*. La inmediatez de las acciones y del proyecto de estos actores sociales está determinada por sus condiciones de exclusión, marginalidad y pobreza económica: “Por su extrema condición de miseria [...] no podía comprometer días o meses de su vida en ‘procesos’ o ‘movimientos’ de temática distinta a la supervivencia y con objetivos diferidos en el tiempo” (Salazar 2012a, 153). Esta urgencia –“cuestión de vida o muerte”– es la que explicaría, bajo esta mirada, la dificultad o incapacidad de sumar a la “masa marginal” al proyecto de la clase obrera, junto con el carácter inapropiado de sus formas organizativas –sindicato y partido– para las necesidades de aquella. De esta manera, aunque no directa o reflexivamente, las prácticas de los actores sociales considerados suponen una crítica a las tácticas y a los tiempos de las políticas hegemónicas de la clase

²⁵² La diferencia estriba en que, aquí, los momentos uno y dos son tan o más importantes como los momentos tres y cuatro.

obrera y, por supuesto, de los partidos políticos de izquierda. En este último caso, la vía electoral impone lapsos de tiempo muy definidos, metas y plazos absolutamente delimitados que ordenan, sin lugar a dudas, la agenda de los movimientos sociales y el tipo de acciones a desarrollar.

El movimiento social para la Nueva Historia es entonces aquel que desarrolla la capacidad propia de *autogestión colectiva*, que no delega las funciones de gestión y la toma de decisiones en un cuerpo diferenciado (“clase política”), que ha logrado “liberarse del yugo partidista y comenzar a hacer política por sí mism[o]” (Salazar 2012a, 38), que desarrolla su conciencia ciudadana, que se involucra, que discute, que organiza, que construye su vida colectiva. De esa forma, el poder local comunitario se asimila al poder constituyente, es decir, el que corresponde única y exclusivamente a la soberanía popular (al pueblo) para organizarse, dictando y reformando su Constitución, es decir, aquel que decide qué orden social y político desea darse, y las garantías para mantenerlo. Ese poder constituyente empieza, en primer lugar, en el nivel local, en las formas que adopta la convivencia en esas “asociaciones comunitarias” que ya se rigen según *otros* principios. Desde esta perspectiva, el movimiento social no es sólo el germen de otro mundo, sino la *concreción misma de ese otro mundo* en pequeña escala.

Esta caracterización de los movimientos sociales se sustenta sobre un tipo de experiencias sociales y populares de rebeldía caracterizadas efectivamente por elevadas cuotas relativas de *autonomía* (aun en condiciones de marginalidad), por procesos culturales muy intensos autocentrados en la propia comunidad para encuadrar interpretativamente las experiencias vividas y proyectar desde el presente hacia el futuro otras formas de vida, de ejercer la política, de concebir el trabajo y la relación entre los seres humanos y con la naturaleza, basadas en el control efectivo de los recursos que garantizan la (sobre)vivencia de la comunidad, en la participación directa y en la horizontalidad.²⁵³ En ese sentido, la propuesta *salazariana* resulta en extremo sobresaliente y sugerente. Salazar reserva el concepto de “movimiento social” a ese tipo de experiencias, que constituyen explícitamente el centro de su interés “científico” y político. O, de otro modo, dirige su mirada hacia esas dimensiones de los procesos de resistencia, lucha y transformación social. Sin embargo, desde este enfoque, resulta difícil explicar otro conjunto de experiencias (o dar cuenta de otras dimensiones) en las que el actor social opta por otro tipo de medios para desplegar sus potencialidades. Gran parte de esas otras formas de protesta y de movilización son definidas como “movimientos de masas”, y esta caracterización lleva implícita también una descalificación. ¿Acaso no forman parte también del movimiento social? ¿Cómo podemos dar cuenta de las complejidades de los actores sociales populares y de las formas de acción y de organización de éstos? Para problematizar las complejidades, interrelaciones y abigarramientos propios del mundo popular y de los movimientos sociales, parece necesario ubicar históricamente esas experiencias y ponerlas en relación

²⁵³ Según el autor, a lo largo de la historia de Chile, sólo dos movimientos han logrado desarrollar plenamente sus potencialidades y llegar a ejercer el poder constituyente (como expresión máxima de su soberanía): el movimiento de los “pueblos” de provincia entre 1822 y 1829, y el movimiento de los actores sociales (gremios) entre 1918 y 1925. En ambos casos, sin embargo, este ejercicio autónomo y soberano se desplegó durante un corto tiempo.

con el contexto político, económico, cultural en el que están insertas, pues su carácter “autónomo” sólo se evidencia con respecto a los condicionamientos externos (objetivos y subjetivos) que impactan sobre sus condiciones de vida.

4.3. Lo social y lo político: miradas desde la Historia Social

4.3.1. La posdictadura: ¿Caminos divergentes?

Pinochet fue derrotado en el plebiscito y su candidato –Hernán Büchi– perdió las primeras elecciones “libres”, todavía en Dictadura. El 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin, presidente del Partido Demócrata Cristiano y vencedor en la contienda electoral con poco más del 55% de los votos, recibió la banda presidencial de manos del dictador, en un momento de gran simbolismo, que no alcanzó a ensombrecer las esperanzas depositadas en el futuro y expresadas en el estribillo que encandiló a la mayoría opositora: “Chile, la alegría ya viene”. Aylwin había instigado el golpe de Estado; días antes del mismo, en una entrevista a *The Washington Post*, declaró que si le dieran a elegir entre “una dictadura marxista y una dictadura de nuestros militares, yo elegiría la segunda”.²⁵⁴ Y en los meses posteriores mostró su satisfacción por el golpe y la plena adhesión a los militares, y difundió falsedades a mansalva sobre el gobierno de la Unidad Popular: “El gobierno de Allende había agotado, en el mayor fracaso, la ‘vía chilena hacia el socialismo’, y se aprestaba a consumar un autogolpe para instaurar por la fuerza la dictadura comunista”.²⁵⁵ Igual actitud asumieron otros dirigentes de su partido, a excepción de los 13 militantes que dos días después del golpe hicieron público su rechazo.

No es nuestra intención ahondar en la trayectoria de Aylwin y del PDC; es de sobras conocida su connivencia con la Dictadura militar. Pero mencionamos estas notas para introducir esta nueva etapa que demostrará ser, en lo esencial, la continuación –aún más, la consumación– del modelo político, económico y cultural instaurado por la Dictadura. Y esto porque el gobierno de Aylwin llevó a cabo, en muchos sentidos, una labor que no habría podido realizar un gobierno manifiestamente *pinochetista*. En el ámbito que nos interesa, logró aplacar, contener y desarticular a los movimientos sociales, poniendo freno a los procesos de construcción de subjetividad política antagonista y autonomista que habían fermentado durante la Dictadura. Hemos tratado de mostrar cómo la “derrota” de los movimientos sociales se había fraguado ya desde los años 80, y no propiamente en el terreno militar o en el de la “autonomía” social, sino precisamente en el de las alianzas, coaliciones y negociaciones políticas a nivel de la cúpula. Hubiera podido pensarse que una vez instalados en el gobierno, los partidos de la Concertación podrían haber modificado su manera de relacionarse con los movimientos sociales, esto es, otorgándoles mayores espacios, incorporando sus reivindicaciones y respetando sus dinámicas internas, entre otros modos. De hecho, durante un tiempo, largo, los movimientos sociales estuvieron a la expectativa. Sin

²⁵⁴ Citado en *La Tercera*, 11 de agosto de 2012, pp. 10-11, sección Reportajes, «El movimiento estudiantil entró en un túnel del que no puede salir».

²⁵⁵ *Corriere della Sera*, 17 de septiembre de 1973.

embargo, ya hemos argumentado en el capítulo anterior, que *la subordinación de los movimientos sociales no es una táctica coyuntural del pensamiento renovado sino un principio constitutivo de su concepción de la política y de la transformación social*. Con todo, fue precisamente esa relación ambivalente con las nuevas autoridades lo que explica, en parte, la fragilidad exhibida por los movimientos sociales y la facilidad con la que fueron puestos, nuevamente, fuera de escena.

La amenaza de la regresión autoritaria –mitad real, mitad excusa– fue bien aprovechada por los gobiernos *concertacionistas* para acallar cualquier protesta. Un testigo de excepción fue Arturo Martínez²⁵⁶, en ese momento vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT):

La Concertación Social era agitada desde los partidos. Éstos ayudaron muchísimo y en el momento en que ya les molestaba para la negociación, *trataron de desarticularla, labor que cumplieron especialmente los partidos de centro*. Asumido el primer gobierno de la Concertación, vimos una contradicción profunda al constatar que no se avanzaba en los temas, que no era verdad que íbamos a lograr lo que habíamos conversado, y por otro lado no pudimos seguir presionando en la calle, lo que terminó por quebrar el movimiento social. [...] La misma CUT, que se había conformado el año 88, estuvo a punto de quebrarse entre los que querían salir a la calle presionando al gobierno de la Concertación y los otros que decían que había que ayudar a fortalecer esta democracia que era muy débil porque los milicos, los empresarios y la derecha presionaban. [...] *los partidos de la Concertación cooptaron a los dirigentes sociales para que no se metieran en el campo de la movilización social*. El primer gobierno de la Concertación llega a su fin con un movimiento sindical totalmente atomizado, debilitado, confrontado en su interior, querellado entre medio. [...] Entonces *el movimiento sindical pagó un costo grande con la instalación de la democracia, pagó el costo de su debilitamiento*, que nos pesa hasta hoy (citado en Moreno y Ortega 2002, 139, cursivas mías).

Las investigaciones realizadas en este momento por los *nuevos* historiadores constataron los problemas que la coyuntura presentaba para los movimientos sociales y, al mismo tiempo, la tendencia que ya se dibujaba abiertamente hacia la desarticulación y/o cooptación de los mismos. Los trabajos más relevantes en esta línea aparecieron en *Cal y Canto: revista de movimientos sociales*, publicación editada por ECO, que fue la continuación del Informe del Taller de Análisis de Movimientos Sociales y Coyuntura, que había comenzado a editarse en enero de 1988. La revista apareció con el número 6 en agosto de 1990, es decir cinco meses después de la llegada al gobierno de Aylwin, y marcada por la impronta del momento: “El nacimiento de *Cal y Canto* coincide con el comienzo de la transición democrática, con sus componentes de esperanza, incertidumbre y escepticismo” (Delamaza 1990, 1). La temática aglutinadora de ese primer número fue precisamente “los movimientos sociales populares y la crisis de la izquierda”. Y el eje analítico giró en torno de la distancia o *alejamiento entre el mundo*

²⁵⁶ Militante del MAPU, primero, y del Partido Socialista después; fue presidente de la CUT entre el 2000 y el 2012. Martínez fue reiteradamente señalado por su estilo corrupto de manejar la multisindical, que incluyó una condena judicial por prácticas antisindicales, presiones, comicios fraudulentos, etc. en connivencia con los gobiernos *concertacionistas*. Véase Saleh (2008).

social y el mundo político, entre los movimientos sociales y las representaciones políticas, fundamentalmente las de izquierda. Y aún más, de la subordinación de lo social a lo político en la “fase decisiva de la lucha de la oposición contra la dictadura” (ECO 1990, 5).

Uno de los principales límites que enfrentaron los movimientos sociales fue el compromiso del gobierno con los militares, y con los grupos empresariales detrás de ellos, de no alterar los equilibrios macro-económicos, que en la práctica significaba perpetuar el modelo económico neoliberal y continuar con el tipo de políticas económicas y sociales que había venido diseñando la Dictadura. La debilidad política del gobierno, junto con la fuerza de sus propias convicciones y el proceso de *renovación* que había experimentado el socialismo, alentaba el discurso sobre la economía social de mercado, pero con justicia social que significaba, en lo profundo, no tocar las estructuras capitalistas y repartir las migajas –posteriormente transmutadas en bonos– entre los menos favorecidos. Ello implicaba que los movimientos sociales sólo iban a recibir cambios superficiales y llamados a la madurez política, a la moderación y a la resignación:

Se confirma lo que veíamos en talleres anteriores, de que íbamos a entrar en una etapa en la que *los movimientos sociales tendían a bajar su perfil e iban a ser los partidos los que subían*. El movimiento sindical llega a negociar con su fuerza debilitada y se enfrenta a un empresariado que no cede, no está dispuesto a disminuir sus tasas de ganancias y con un gobierno que también *chantajea políticamente* la firma del acuerdo²⁵⁷ (ibíd.: 7, cursivas más).

Como ya comentábamos: “El éxito de la transición pasa por que la deuda social se pague a plazos, eso es la gradualidad de la deuda social, y por que los trabajadores disminuyan todo tipo de reivindicación que tenga un costo económico, no sólo para el Estado, sino que incluso para los empresarios, por todo el período de transición” (ibíd.: 7). En definitiva, se trataba de otorgar un “cheque en blanco” a la coalición gobernante, en aras de, supuestamente, fortalecer la democracia, y a sabiendas de que los políticos “tenían las manos atadas”. Paralelamente, se consideraba que había que trabajar en las líneas que fortalecieran *hacia el interior*, a los movimientos sociales, constatando que las dificultades por las que atravesaban dependían de esa tensión entre sujeción política-partidista y la acción política propia.

Si el movimiento sindical se vio “obligado” a firmar el “Acuerdo Marco” con el gobierno y los empresarios, que suponía bajar el perfil de –y en algunos casos abandonar– sus reivindicaciones históricas con respecto al salario y las condiciones laborales, los *pobladores* ni siquiera fueron convidados a participar en las políticas habitacionales del gobierno, que no se vieron tampoco sustancialmente modificadas, mientras siguieron siendo objeto de desalojos forzados de terrenos *tomados* y remates

²⁵⁷ Alusión a las negociaciones del Acuerdo Marco, pacto tripartito de “concertación social”, firmado el 28 de abril de 1990, por la Confederación de la Producción y el Comercio, la CUT y el Gobierno, por el que “se comprometieron a respetar ciertos principios que básicamente concernieron al reconocimiento de la economía de libre mercado y el rol de la propiedad privada y de los empresarios en el crecimiento económico, mientras que el Estado debía ser el agente que garantizara el funcionamiento de la institucionalidad económica y promoviera el desarrollo” (Araya 2011, 50).

de viviendas en el caso de deudas impagas. La interlocución de los *pobladores* con el gobierno era ficticia:

Se ha dado con el gobierno un diálogo netamente formal, de protocolo, para la prensa, de que se está haciendo participar a los pobladores. Pero los pobladores no tuvimos una participación en ninguna instancia de discusión; *ni siquiera los pobladores que e e staban en l a C oncertación, t uvieron pa rticipación* en la elaboración de los diferentes proyectos del programa de gobierno (ECO 1990, 7, cursivas mías).

El tipo de transición encauzado en Chile, basado en los equilibrios políticos o la “política de acuerdos” requería, entonces, morigerar las reivindicaciones de los movimientos sociales –que de obstinarse en la vía democratizadora, eran interpretados como “elementos desestabilizadores”– que ponían en riesgo la consolidación de la todavía incipiente “democracia”. Los movimientos sociales, vía sus dirigentes, experimentaban así una suerte de “chantaje emocional” que los situaba en una situación compleja. Esta transición, para afirmarse, necesitaba de “la *pérdida de protagonismo de los m ovimientos s ociales* y la constitución de un *protagonismo c laro de la ‘ clase política ’*” (ECO 1990, 8, cursivas mías), en un momento en que los partidos políticos no respondían a las necesidades de los movimientos sociales, pues habían establecido acuerdos por sobre, o al margen, de ellos, y cuando el distanciamiento entre los líderes de los movimientos y sus propias bases se profundizaba y hacía notorio, pues los acuerdos, cuando lo requerían, contaban con la participación de los primeros. Es decir, la política de la transición confrontaba en su corazón la apuesta de la educación popular y la Nueva Historia.

Los movimientos sociales tuvieron que hacer frente a las nuevas dinámicas impuestas desde el Estado: por ejemplo, la creación de programas sociales con un cariz predominantemente asistencial pero que asumían formalmente los objetivos y las formas de la educación popular, o aún más, que eran implementados por educadores populares que habían transitado desde el ámbito de las organizaciones populares a los cargos de gobierno. Además, la ayuda económica que habían recibido los proyectos sociales, proveniente de fundaciones internacionales, desapareció o fue considerablemente reducida con el retorno de la democracia, pues Chile ya no constituía para aquellas instancias un destino prioritario. Así, las organizaciones comunitarias y las prácticas de educación popular debieron enfrentar un nuevo contexto social y político caracterizado por el carácter desdibujado del proyecto popular, la iniciativa estatal en la resolución de los problemas sociales, la sangría de educadores populares y luchadores sociales hacia las instituciones del Estado y la disminución de los recursos financieros con los que había contado hasta entonces.²⁵⁸

A pesar de la constatación de los límites que imponían las restricciones presupuestarias y la continuidad en materia económica, a las propuestas democratizadoras de los movimientos sociales, así como el amarre de la dinámica de complejos equilibrios políticos para no “importunar” a los militares y a la derecha empresarial y política, los sectores populares apreciaron en el Gobierno el esfuerzo por

²⁵⁸ Sobre las dificultades de la educación popular en el contexto posdictatorial, véase Garcés (1996).

abrir canales de interlocución, aunque limitados. Las preocupaciones de los movimientos se centraron, entonces, en la articulación entre sus reivindicaciones y procesos propios y las dinámicas del mundo político. No obstante, subsistieron procesos de fortalecimiento interno muy fecundos, como la democratización experimentada por las Juntas de Vecinos y demás organizaciones, a raíz de la recuperación de las alcaldías por parte de la oposición, o los proyectos de articulación y extensión de las coordinadoras de *ollas comunes*. Estos procesos, chocaron rápidamente, sin embargo, con los cauces impuestos por el Gobierno, aunque éste garantizara un espacio mayor que la Dictadura. Los movimientos debieron lidiar, entonces, con las nuevas condiciones formalmente democráticas, que suponían un mayor margen para la acción y el aminoramiento de la respuesta represiva, pero que no garantizaban un aumento de la participación real de los movimientos sociales en los proyectos políticos y que exigían, además, la ausencia de movilizaciones. Ese contexto era radicalmente nuevo para los movimientos sociales, sobre todo para aquellos surgidos durante el período dictatorial, que se habían fraguado en la lucha y la resistencia contra una estructura y una lógica criminales (las de la Dictadura militar).

El desplazamiento del protagonismo desde los movimientos sociales hacia los partidos políticos, provocó también el traslado del lente teórico desde la vida interna, los procesos cotidianos, las fuerzas propias de los movimientos sociales, hacia las dinámicas y articulaciones necesarias con el mundo exterior, especialmente con los partidos políticos y el gobierno. Los desafíos que habían planteado los movimientos sociales a la “forma partido” tradicional durante la Dictadura, y que habían tenido relevancia tanto entre las preocupaciones de los actores sociales y políticos como en los análisis teóricos, no produjeron, por el momento, cambios sustantivos de aquella forma. Los partidos políticos retomaron dinámicas de funcionamiento muy similares a las del pasado y aun agravadas por la experiencia de desarticulación e ilegalización del período dictatorial. Por eso se constata que los movimientos sociales “comienzan a percibir de manera muy concreta que la lógica que subyace a la práctica del Estado es muy distinta de la que inspira la práctica de los movimientos” (ECO 1990, 10).

Y, de esa manera, el análisis de los movimientos se vincula con la “crisis de la izquierda”, entendiendo por ésta la “crisis del ‘socialismo real’ [...]; del pensamiento o teoría socialista (más precisamente del marxismo-leninismo como análisis y como teoría de la revolución); [...] de las estrategias de la izquierda en la lucha contra la dictadura, etc.” (ibíd.: 11). Y todo ello expresado en las “dificultades para establecer una relación fluida y políticamente productiva con los movimientos sociales” (íd.). Lo que estaba en crisis, pues, era la relación *entre la izquierda social y la izquierda política*, o lo que parecía lo mismo, la capacidad de la izquierda política de representar las aspiraciones y proyectos de los movimientos sociales, o de los movimientos sociales de construir instrumentos políticos propios, que respondieran efectivamente a sus necesidades. O dicho de otro modo, se planteaba el problema del proyecto –la estrategia– y de cómo defenderlo –la táctica–. Sin embargo, la constatación realizada por los autores en este momento es que “la crisis de la izquierda no tiene repercusiones demasiado directas y fuertes en los MSP [movimientos sociales populares]. Debilitada o rota la relación entre izquierda política e izquierda social, los movimientos funcionan

con autonomía en la discusión de sus problemas, sus análisis y estrategias” (ibíd.: 12). Aun así, se sigue manteniendo la división formal entre lo social y lo político. Los movimientos sociales aparecen como carentes de politicidad, porque la politización supuestamente se lograría sólo por la vía de los partidos políticos.

Y, sin embargo, se contradice esta afirmación al constatar que mientras los partidos de izquierda parecían estar más vacilantes a la hora de plantear un proyecto político, los movimientos sociales solían dotar de contenido la democratización “en el sentido de participación popular” (ibíd.: 13). El tema de la participación, que involucra la lucha por el poder y su ejercicio, resultaba uno de los nudos gordianos de la relación entre el Estado y la sociedad, entre la política y lo social. Los historiadores sociales se preguntaron: “¿Cómo se construye un poder desde los movimientos?” (íd.). La respuesta a esta pregunta requería la crítica por parte de los actores sociales y políticos a lo “que está dado como Estado, poder, institucionalidad, como un dato inamovible” (íd.), pues según los autores, “se ha buscado, o bien incidir dentro de esto que está dado introduciendo algunos cambios, o bien cambiarle el signo, sin cambiarle su naturaleza” (íd.). Por el contrario, era necesario “poner en cuestión, en el fondo, el hacer política ‘desde el Estado’, sin desarrollar lógicas participativas, que coloquen frente al Estado el contrapeso de la ‘sociedad civil’” (íd.). Poder, Estado y sociedad civil aparecen entonces como categorías centrales del análisis, y sobre todo procesos a ser repensados desde la práctica política. Una vez constatada la distancia entre lo social y la política, la democracia en un sentido formal, como renovación de fuerzas políticas a partir del ejercicio electoral, se evidenciada no sólo como insuficiente sino incluso como una *limitante* a los procesos de construcción efectiva de soberanía popular y de poder popular, es decir, una limitante al proceso de democratización. Por eso concluyen: “*El problema es no plantearse en serio la posibilidad de construir poder o fuerza fuera del Estado*” (íd.). Lo contrario supondría un “despilfarro de lo acumulado en la historia de estos años bajo dictadura” (íd.).

El problema del poder se relaciona también con la pregunta por el proyecto. Ante la desorientación de una parte de la izquierda por el desmoronamiento del socialismo realmente existente, la reconversión de otra parte de la “izquierda” en un proyecto descafeinado de semi-keynesianismo y la hegemonía del modelo neoliberal, la interrogante para los movimientos sociales es si ellos tenían algo distinto que ofrecer. No es iluso pensar que mucho de ese “algo distinto” estaba presente en las experiencias que los movimientos sociales echaron a andar durante la Dictadura, en el terreno económico, con las organizaciones económico-populares, que suponían una forma efectiva de enfrentar la escasez de bienes necesarios para la vida y una forma distinta de interrelación, más cooperativa y horizontal, además de una participación social muy intensa; en el terreno cultural, con la organización de grupos diversos –literarios, musicales, de danza, de teatro, etc.– también animados por un espíritu democrático y crítico, etc. Sin embargo, la mayoría de esas experiencias fueron evaluadas como meras iniciativas *reactivas*, producto del contexto dictatorial, exclusivamente culturales, pre-políticas, ineficientes e incapaces de profundizarse en el periodo democrático.

En otro nivel operó una modificación ideológica significativa: el nuevo contexto produjo un clima de autocomplacencia general en muchos sectores.²⁵⁹ Aun a sabiendas de la debilidad política de la Concertación y de las deficiencias de origen del nuevo régimen, las ansias por recuperar la normalidad y la tranquilidad, alentaron el convencimiento de que el nuevo Gobierno trabajaría en pro de la democratización social, de que no era conveniente presionar más de lo debido, y de que los sectores populares debían confiar en las nuevas autoridades. La estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad se convirtieron en las primeras preocupaciones, en general, dentro de las nuevas condiciones. Con el debilitamiento de los movimientos sociales y su pérdida de centralidad en la nueva configuración socio-política, también perdieron peso los enfoques que tenían a los sectores populares y sus reivindicaciones como el centro de su concepción epistemológica y política, es decir, concretamente la Nueva Historia. Se impuso la perspectiva de la corriente sociológica que afirmó la irrealidad de los movimientos sociales en la década previa y la inutilidad de éstos en la década que se abría. En ese sentido, es más notoria la cercanía y la seducción de los sociólogos con el nuevo Gobierno, evidenciadas en la incorporación de varios de ellos a puestos de la administración pública o bien que siguieron trabajando como asesores de los partidos opositores, que ahora eran parte del Gobierno. Configurándose, así, una elite político intelectual, que representa la *intelligentsia* de la coalición gobernante. Sin embargo, el proceso de fuga desde los centros académicos hacia puestos de gobierno también afectó a los *nuevos* historiadores y educadores populares.

Por eso, a raíz de la transición a la democracia el grupo de historiadores que había dado origen a la corriente historiográfica de la Nueva Historia experimentó un proceso de replanteamiento y adecuación a las nuevas circunstancias impuestas por el contexto político:

Esta generación comenzó a dispersarse con el retorno a la democracia. Quizá la fecha puede extenderse hasta 1995, pero con todo es una generación que se congregó como opositora a la dictadura y fue ahí donde recayó su vinculación más poderosa. [...] Por ello, tal como señala Salazar existe un repliegue de este grupo hacia la década de los noventa. [...] Podemos, sin embargo, agregar que este grupo al perder su elemento más explícito de aglutinación, la dictadura, no pudo suplirlo por otro que tuviera la misma fuerza convocante (Bastías 2004).

Estas dificultades parecieron confirmar la tesis de que la educación popular y la Nueva Historia habían sido una moda pasajera, resultado de la imposibilidad de desplegar la

²⁵⁹ Si bien es cierto que buena parte de los analistas constataron la “desaparición” de los movimientos sociales en la década de los noventa, ello no supone en ningún caso la ausencia de importantes eventos de protesta social, aunque circunscritos y con menor capacidad de interpelar al conjunto de la sociedad. En todo caso, cabe destacar la organización y movilización de los estudiantes universitarios desde 1992, y especialmente durante 1997; las luchas del pueblo mapuche, desde ese último año, que se expresan en la ocupación de sus tierras ancestrales y en la construcción de autonomía en el territorio recuperado; la multitudinaria “toma” de Peñalolén, en 1999, que puso de manifiesto el déficit de las políticas de vivienda implementadas por los gobiernos concertacionistas, y la exclusión y vulnerabilidad social de amplios sectores de la ciudad, confiriendo visibilidad a las reivindicaciones de los *pobladores*; las protestas de los trabajadores portuarios, de los empleados públicos y municipales; las movilizaciones de los trabajadores del carbón con motivo del cierre de las minas de Lota y Coronel (entre 1992 y 1998), entre otros ejemplos de acción colectiva.

actividad política de manera abierta mientras permaneció *interdicta* y, por lo tanto, un sucedáneo destinado a desaparecer con el retorno del sistema de partidos. Sin embargo, podemos decir que la mayoría de autores que se había aglutinado en torno de la nueva corriente historiográfica, siguieron desarrollando su actividad de investigación social – aunque en condiciones más adversas, irónicamente, que durante la década de los ochenta–, se mantuvieron fieles a la epistemología de la “ciencia popular”, conservaron a los sujetos populares y a los movimientos sociales en el centro de su mirada y de su preocupación teórica y política. Perdieron visibilidad e influjo en la discusión sobre los “grandes temas nacionales”; pero ganaron, a cambio, radicalidad en sus propuestas. Profundizaron en los presupuestos epistemológicos, teóricos y metodológicos que se habían asentado en la década anterior. Pero, sobre todo, reafirmaron su proyecto político: desarrollar la “ciencia popular” a partir del fortalecimiento de la “identidad popular” y de la “memoria” de los sectores populares, potenciando su protagonismo epistémico y político. Los estudios sobre la memoria colectiva, que pronto darían lugar a un *boom* de investigaciones y trabajos académicos, constituyéndose incluso en un área específica dentro de la carrera de historia, primero, y después en un área con un fuerte carácter interdisciplinario –fenómeno, por otra parte que no es exclusivo de Chile– están presentes en el origen de la propuesta historiográfica de la “generación de 1985” y no pueden ser abordados sin tomar en consideración a ese colectivo.

4.3.2. *El Chile contemporáneo y “el topo de la historia”*

Como no podía ser de otra manera, la rearticulación de viejos movimientos sociales y la emergencia de otros ha marcado otro quiebre histórico en la historia reciente de Chile, una sacudida más fuerte que la que provocó el terremoto de 2010. No ha sido la teoría la que ha decretado la reaparición de la protesta y de la movilización social, sino que aquélla vino *a posteriori*. Pero es cierto que la perspectiva de la Nueva Historia, que hemos venido describiendo, estaba más o mejor preparada para dar cuenta del profundo malestar que corroía la sociedad (en pequeña escala) por dentro y de los procesos de repolitización que se venían fraguando desde los ochenta. Malestar consustancial al sistema capitalista, pero que adopta su peculiaridad en la manera cómo se genera, y sobre todo cómo se procesa, en esta etapa neoliberal. Malestar agravado por el descrédito creciente de las instituciones y, especialmente, de los “representantes” políticos. Pero malestar que no siempre aparecía reflejado –o fue bien interpretado– en las expresiones públicas, en los comportamientos cotidianos o en las encuestas de opinión.

Como siempre, resulta difícil estipular fechas concretas en situaciones que se fraguan durante un lapso de tiempo más o menos largo. Sin embargo, dos momentos resultan indiscutiblemente sobresalientes: 2006 y 2011. En ambos, el movimiento disparador de la protesta fue el movimiento estudiantil. Éste ya había vivido momentos de gran efervescencia en la década de los ochenta, participando activamente en las jornadas de protesta popular, y alcanzando logros impensables en ese momento para otros movimientos en sus respectivos sectores, como fue la democratización de las organizaciones estudiantiles. Sin embargo, la relevancia del movimiento estudiantil en estas dos coyunturas consistió en haber trascendido el ámbito específico de la educación

y de sus centros de estudio, para interpelar a toda la sociedad y poner en cuestión no sólo el sistema educativo, sino el diseño de la sociedad en su conjunto. La trascendencia del movimiento estudiantil (secundarios –o *pingüinos*– y universitarios) radicó en haber sido capaces de interpretar el malestar social subterráneo, o incluso auto-escondido o disfrazado, identificando las causas profundas y generales que lo provocan y develando los mitos que lo encubren o permiten sobrellevarlo.

Algunos autores aventuraron la tesis del *derrumbe del modelo* (Mayol 2013). Con todo, resulta controvertido hablar de “derrumbe” por dos motivos: primero, porque consideramos que, en estricto sentido, el sistema político, económico, social, cultural, etc. erigido desde el modelo neoliberal no se *derrumbará* por sí solo, sino que deberá ser destruido, minado, corroído por las acciones de protesta y por la construcción de espacios y procesos diferentes o “al margen” de las lógicas que rigen el modelo; y la palabra “derrumbe” podría inducir a confusión en este sentido. En segundo lugar, porque nos consta que esa tarea es ardua, compleja y de largo aliento, y aunque reiteradamente se hable de la “crisis” del capitalismo, la historia nos ha dado muestras de la gran capacidad regeneradora de éste, por lo que el derrumbe del capitalismo no parece ser todavía “fruta madura”.

En todo caso, el ciclo de movilización que se vivió entre 2011 y 2013 constituyó la mayor impugnación al modelo económico y político desde el fin de la Dictadura. ¿Cómo explica la historia social la emergencia de ese movimiento estudiantil, el contagio *movimentístico* a otros sectores sociales y la articulación entre movimientos sociales? Gabriel Salazar escribió un libro, *En el nombre del poder popular constituyente (Siglo XXI)*, al calor de las movilizaciones del 2011, en el que planteaba algunas respuestas a estas cuestiones. En un tono esperanzado y que desafía a la “clase política civil”, “políticos de autorreferido y hermético ámbito elitista” (Salazar 2011b, 23), constituida en el principal “enemigo” del pueblo y de los movimientos sociales, pregunta:

¿Y de dónde creen, señores, que los “pingüinos” sacaron su energía y sabiduría como para impulsar su poderosa e inesperada rebelión, que ha convulsionado el espacio público desde el 2005? ¿Acaso de lo que les enseñaron en el aula, debidamente evaluado por el SIMCE²⁶⁰? ¿Por generación espontánea?

Ténganlo presente, no lo olviden nunca: *ellos son hijos nue stros, v ástagos directos, en primer lugar, del endeudamiento con el Mercado. Y a través de sus padres, de la “ transición ” traicionada. Y por sus abue los, de l t errorismo militar. Y por sus bisabuelos, de la tronchada democracia liberal de 1938-73. Son hijos, pues, de una memoria social profunda, de luchas y combates por el desarrollo y la i gualdad, traicionada tres veces por ustedes mismos* (Salazar 2011b, 24, cursivas mías).

He ahí el sentido profundo de la memoria social: contribuir a forjar la identidad social y, con base en ella, identificar las prioridades del pueblo (el proyecto) y las capacidades (herramientas) para llevarlas a cabo. Con ese propósito habían estado trabajando los *nuevos* historiadores desde la década de los ochenta y, a decir de Salazar, habían cumplido parte de su labor. Los movimientos sociales, en este caso el movimiento

²⁶⁰ Sistema de Medición de la Calidad de la Educación.

estudiantil, no surgen por “generación espontánea” y en su formación los procesos de (auto)educación y de recuperación de la memoria cumplen un papel preponderante. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos que plantea la nueva coyuntura histórica para los movimientos sociales? En un documental a propósito de la trayectoria intelectual del historiador chileno y del desarrollo de la Nueva Historia social, líneas difícilmente disociables, sostiene:

Ahora, este desarrollo ha sido espectacular desde el 85, yo lo he estado viviendo paso a paso, desde que llegué en el 85, ya venía de antes, hasta el día de hoy. Pero se llegó un momento, que debe haber sido el año antepasado, en que los mismos estudiantes jóvenes comienzan a preguntarse: “Bueno ya, ya *po* tenemos la historia social, tenemos bastante historia e historiografía social, no hemos dejado rincón donde no nos hemos metido para estudiar, bueno y ahora ¿qué vamos a hacer con todo esto?” Porque ésa es la cuestión. Todo este conocimiento acumulado, toda esta metodología acumulada: ¿qué hacemos con eso? *Y obviamente la pregunta lleva a lo político*. Entonces, es el punto preciso en que es necesario *pasar de la mera reproducción histórica a la acción histórica*. Y ahí es donde yo planteo que no podemos quedarnos en la pura descripción de los sujetos sociales, porque eso lleva a la estética de la pobreza o a la estética, qué se yo, de la vida social o la estética de la explotación. Pero *la estética no es política, no es acción*. Entonces, cómo hacemos ahora para *pasar a la acción política*, es el tema vigente (Salazar 2012b, cursivas mías).

Es entonces cuando Salazar ahonda en una categoría que ya había trabajado –en estudios sobre el siglo XIX y principios del XX– para dotarla de sentido y explicar (y proyectar) el movimiento estudiantil (y el movimiento social, en general) de principios del siglo XXI, el *poder constituyente*:

...Y hemos llegado hasta aquí, hasta este tiempo de maduración y eclosión de esa larga, lenta pero *fructífera “transición por abajo”*. A un punto en que ya conocemos el poder que tenemos, la cultura propia que calzamos, la voluntad colectiva que perfila nuestro futuro y, aun, *la sabiduría de cómo movernos frente a las cosas políticas que, desde hace de masiado tiempo, pretenden gobernarnos...* Hemos aprendido a conocer cómo es el jueguito asociado que ustedes juegan y hemos aprendido, de eso, a autoeducarnos en soberanía... ¿cómo, pues, no querer cambiar de raíz la educación mercantil y mercenaria que nos han implantado?... Y esto, claro, es solo, para empezar...

...Porque, más temprano que tarde, sabrán también de nuestro *poder constituyente*... (Salazar 2011b, 25).

El poder constituyente es la capacidad “que puede y debe ejercer el pueblo por sí mismo –en tanto que ciudadanía soberana– para construir, según su voluntad deliberada y libremente expresada, el Estado (junto al Mercado y la Sociedad Civil) que le parezca necesario y conveniente para su desarrollo y bienestar” (Salazar 2011b, 27). El desafío del movimiento social (de la articulación de movimientos sociales) es, desde esta perspectiva, llegar a ejercer su poder constituyente, esto es, desembarazarse del actual Estado (acción que en los términos del lenguaje politológico contemporáneo recibe el nombre de “poder destituyente”) y darse las instituciones por medio de las cuales satisfaga efectivamente sus necesidades y alcance el grado de bienestar posible –dadas las condiciones materiales existentes– y deseado. La tendencia anti-estatal y refractaria

a la política partidista muy presente en la epistemología de la *nueva* historiografía social no conduce, en este caso, a propugnar la irrelevancia o la perversidad *per se* del Estado, sino su perversión e inutilidad en las condiciones vigentes. El problema consiste en que las instituciones políticas ya no se sostienen en la voluntad soberana de la ciudadanía y, por lo tanto, están sumidas en una profunda *crisis de representatividad* y, sobre todo, de *legitimidad*. Soberanía que no se puede circunscribir al ejercicio del voto cada cuatro años, sino a la capacidad efectiva de las comunidades, de los colectivos, de los ciudadanos, de incidir sobre su entorno comunitario y de tender puentes desde ese espacio hacia el ámbito público-estatal. En definitiva, la crisis remite a un problema de larga data: ¿Cómo pensar la relación entre lo social y lo político? Para lo cual es necesario repensar lo social, advirtiendo ahí su politicidad, y repensar lo político, ampliando los horizontes de su definición tradicional.

La Nueva Historia sitúa a la “clase política civil” como el principal escollo y adversario de los movimientos sociales en la situación contemporánea. De hecho, esto es así porque históricamente habrían sido los políticos (profesionales) los que habrían contribuido a aniquilar, opacar o desvirtuar el poder constituyente del pueblo soberano. Esta conclusión deriva de varias investigaciones en las que los historiadores han identificado los procesos que generaron la frustración de los esfuerzos realizados por los sectores populares para hacer valer sus proyectos, durante la Dictadura –a las que nos hemos referido en las páginas precedentes– y, aún antes, al menos desde el siglo XIX. En algunos casos, la frustración vino de parte de la clase política de derecha (por medio de sus lacayos militares), que reprimió violentamente aquellos esfuerzos e impuso la versión oficial de su superioridad (construyendo una historia oficial de derecha); en otros casos, la embestida provino de la propia izquierda parlamentaria que se identificó con el Estado que supuestamente pretendía cambiar, y se instaló a sus anchas en las estructuras anquilosadas del viejo orden liberal. En este último caso, la dinámica es más compleja, porque esa izquierda parlamentaria se arrogó el deber de dirigir, cual vanguardia política, a las masas desesperanzadas, existiendo por y para ellas, y por medio de ese artilugio acabó santificando el mecanismo electoral y velando la capacidad destituyente-constituyente de la ciudadanía empoderada, pues se ancoró en los propios intereses que garantizaban su existencia como “clase”. Una vez ocurrido esto, la diferencia entre derecha e izquierda, si bien no desaparece completamente, pierde toda relevancia en el análisis. Es más, como decía, la superior complejidad del subterfugio por el cual la izquierda parlamentaria combina elementos de representatividad del proyecto popular, con la contención y desmovilización de los actores sociales populares, supone una mayor dificultad para identificar los límites reales que impone a la constitución de actores sociales autónomos y soberanos.

La evidencia de la actual crisis política, es decir de la escisión de lo social y la política o de la fetichización de lo político, se ve reforzada por la perseverancia de la memoria. Los *nuevos* historiadores remarcan el hecho de que la memoria, a diferencia de la(s) historia(s), es *una verdad construida con base en la propia experiencia vital*. Es esta cualidad la que hace a la memoria tan porfiada en el esfuerzo por mantener viva una manera propia de interpretar los acontecimientos. Si los sectores populares, por haber estado perpetuamente al margen de la narración oficial de la historia, han

mantenido una interpretación propia y diferente del acontecer social, pueden desde *allí* contrastar la veracidad de los discursos emanados desde el mundo elitista de la política. Lo vivido en carne propia no puede ser fácilmente descartado; de lo que se trataría entonces es de sistematizar esa experiencia y el saber emanado de ella.

Por lo tanto, es contra esta “clase política” contra la que deben reaccionar los movimientos sociales. La política entendida aquí como el espacio físico y simbólico restringido en el que tiene lugar los acuerdos, los pactos y negociaciones que refuerzan y garantizan su carácter exclusivo, cerrado y elitista. Frente a la política, así entendida, se yergue lo social. Así lo constata, una vez más, Gabriel Salazar:

La relación entre “lo social” y “lo político” sigue siendo un problema no resuelto en la cultura política chilena. La mayoría de *los políticos profesionales y los intelectuales atrapados en el concepto reificado y cosificado de la política, niegan la politicidad contenida en lo social* (incluyendo, por tanto, la soberanía popular), lo que les lleva a privilegiar el partido político formal sobre el movimiento social ciudadano (Salazar 2012a, 115).

El problema al que se enfrentan los movimientos sociales sigue siendo en la actualidad el mismo al que se enfrentó con motivo de la coyuntura plebiscitaria para poner fin a la Dictadura, y en tantos otros momentos de la historia de Chile. Por eso, a propósito de la reciente movilización estudiantil, Salazar dice:

Está animada por una cultura social autogestionaria con 35 años de desarrollo... Pero está a medio-camino. Necesita ampliar su articulación de actores y definir un itinerario de empoderamiento continuo. El movimiento estudiantil es el que trae el mayor bagaje de temas “soberanos” (la autogestión juvenil viene “asesorada” por *las nuevas ciencias históricas y sociales*, que han elaborado una gran “caja de herramientas” sobre la realidad chilena, que no existía en 1970) junto a una decidida voluntad de cambio. [...] La crisis está. El proceso de empoderamiento ciudadano, también. Hay pues razón y fuerza para “avanzar sin transar”. El problema es definir cuál es la lógica de los pasos siguientes. Aparentemente, hay dos rutas: a) la de deliberación popular continua, que implica desarrollo del ‘poder constituyente’, de plazo socio-cultural y b) la ruta tradicional de negociación, acuerdos parciales, frentes políticos y avance por etapas, con plazos de calendario (Salazar 2011a, cursivas mías).

Según el historiador social, sólo la primera “ruta” conduciría al desarrollo del poder constituyente y a la construcción de un poder efectivamente popular.

4.3.3. Historia Social e Historia Política: ¿Un debate necesario?

Algunos de los puntos desarrollados en torno de la *Nueva Historia* –en la clave *salazariana* que hemos descrito– no son compartidos por todos los historiadores que se reconocen parte de esta corriente, por lo que han emergido algunas diferencias de interpretación y de énfasis, sobre todo, con respecto a la consideración de *la política* (en sentido tradicional, es decir, de la vía partidaria y de la disputa estatal) como dimensión fundamental de la vida de los sectores populares y parte constitutiva del movimiento popular y, por lo tanto, del relato historiográfico sobre la trayectoria de aquellos sectores. Esta controversia se ha *corporeizado* en las figuras de Gabriel Salazar y Sergio

Grez –aunque convoca a muchos otros historiadores– desde que el segundo escribiera un artículo manifestando sus diferencias con la perspectiva *salazariana*.²⁶¹ En ese trabajo, Grez (2005) se cuestionaba acerca de dos modos de escribir la historia de los sectores populares: “¿Con o sin la política incluida?”. A pesar de que la crítica formulada por el autor considera explícitamente dos obras que tratan del desarrollo del movimiento popular en el siglo XIX,²⁶² la discusión tiene alcances directos sobre la interpretación de los movimientos sociales contemporáneos y se ha expresado, en otras oportunidades, en debates historiográficos del *tiempo presente*. Grez (2005, 21), refiriéndose a una vertiente de la *nueva* historiografía (popular), sostiene que:

La puesta en relieve de otros sujetos históricos como el peonaje, los vagabundos y marginales de todo tipo, ha redundado en la reconstrucción de historias predominantemente “culturalistas” en las que frecuentemente estos sujetos aparecen como objetos de las políticas de la elite, pero *raramente como actores de la política* porque en ciertos momentos históricos carecían de estas capacidades o porque, desde que su propia transformación social y cultural hizo de ellos *hombres plenamente políticos, dejaron de ser atractivos para aquellos investigadores que valoraba su “ser natural”*. De la apología al racionalismo, la modernidad, las ideologías de redención social, los proyectos y vanguardias políticas, se ha pasado casi sin matices a la valoración de la “barbarie”, lo espontáneo, pre-moderno, irracional y sensual.

Apreciamos la tensión contenida en esta cita. Se acusa el hecho de que la dimensión política de la acción social sea dejada de lado o, incluso, que los actores que desarrollan una actividad propiamente “política” –en el sentido tradicional del término– no caigan dentro del campo de observación de la historia social. Sin embargo, advertimos también en el párrafo citado la permanencia de un enfoque epistémico –expresado en el lenguaje empleado– que mantiene las dicotomías propias del pensamiento tradicional, en donde la *plenitud política* se alcanza por la vía de la acción partidista y desde/hacia el Estado. Aun denunciando los excesos en ambos sentidos, no hay una superación del *punto de vista*: la modernidad va de la mano con la racionalidad y la política; lo pre-moderno o bárbaro con la espontaneidad, la irracionalidad y la sensualidad. La primera realidad, la del actor moderno, se vuelca hacia el espacio público, hacia los proyectos nacionales; la segunda condición, la de la barbarie habita en los espacios cerrados, oscuros y laberínticos de las zonas populares. Por eso el autor afirma con respecto a la historia *salazariana*: “Su supuesto teórico y metodológico reposa en la convicción de que a la sociedad popular es preciso estudiarla tal como es ‘naturalmente’, en los espacios donde vive y se reproduce” (Grez 2005, 22). Habría, desde esta perspectiva, una *naturalización* de lo popular, de lo social, de la pobreza; y una idealización. Ciertamente, lo que para Grez aparece como una carencia efectiva de los movimientos sociales –su nula proyección política–, para Salazar constituye una virtud:

²⁶¹ Se trata de “Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX)”, *Política*, vol. 44, 2005 (otoño), pp. 17-31.

²⁶² Grez contraponen su libro *De la “regeneración del pueblo” a la huelga general. Génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890)* (1988) y, el de Salazar, *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX* (1985).

¿Qué importa que no hayan desarrollado un discurso político general, unificado y coherente? ¿Qué importa que no hayan formado una organización para fines electorales y parlamentarios? ¿Qué importa que no hayan puesto por escrito sus memorias, sus cabildeos marginales, sus desenfrenos regados de alcohol, la camaradería y el sexo? Su historicidad estuvo siempre allí, a todo lo largo del siglo XIX, estorbando en todo el territorio, sin dejar dormir tranquilo a ningún oligarca demasiado millonario. La historicidad de los rotos fue, durante ese siglo, un ‘poder’ social y cultural agazapado, presto a saltar no sólo sobre los tesoros mercantiles sino también sobre la yugular de la Cultura y el Estado (Salazar 2002b, 160).

Lo que cuestiona Grez es finalmente la potencialidad subversiva de estas expresiones (en el siglo XIX o en el XXI), es decir, hasta qué punto ponen en cuestión el orden social vigente, hasta qué punto los desacatos y la insubordinación practicada en el ámbito cotidiano representa efectivamente una amenaza para las estructuras de poder vigentes; y la posibilidad efectiva que desde aquellas transgresiones se construyan alternativas potenciales de organización social (el siempre recurrente problema del proyecto), una proyección real en el plano de defensa de sus intereses, y su irrupción en el juego de relaciones de poder (bien delimitadas y no dispersas en el seno de la sociedad, como presupone la escuela *salazariana*).

La conclusión de Grez es que definitivamente hay sectores en la historia de Chile que no han tenido una vocación política clara y por lo tanto, en su apuesta (“la historia social con la política incluida”) no son relevantes o no tiene una presencia única. Por el contrario define su perspectiva epistémica de la siguiente manera:

Al estudiar los movimientos populares he procurado dar cuenta de *la relación compleja y dinámica entre lo político (y la política) y lo social* considerando no sólo los “desencuentros” entre la política y lo social que son frecuentes en el mundo popular, sino también, y muy especialmente, las relaciones entre lo social y la política. Como *supuesto teórico y metodológico rechazo la dicotomía maniquea de lo social versus lo político (o la política)*, así como la tentación de buscar refugio en el terreno supuestamente inmaculado de lo social popular (Grez 2005, 25, cursivas mías).

En definitiva, el resultado de este enfoque sería la necesaria superación de la escisión entre lo social y lo político. Algo que también propone, sin duda, Salazar, pero en otro sentido. Pareciera que Grez propone buscar la interacción entre lo social y la política, fijando la atención en los espacios en los que se produce esta interacción, mientras que Salazar busca *superar esa dicotomía*, al sostener que *lo social no es apolítico*, y que *la política no se ejerce exclusivamente a través del partido político*; no se trataría ya de dos esferas que se vinculan en algún punto, en el que residen los actores sociales con voluntad política, sino de una esfera única, en donde lo político y lo social se superponen. El primero aboga por la necesidad y la conveniencia de la distinción entre las dos esferas (a pesar de la denunciada “dicotomía maniquea”), pero negando la pretendida autonomía de la política respecto de lo social; el segundo plantea la inconveniencia de dicha separación. El problema reside, consideramos, en cómo se está entendiendo entonces “lo social” y “la política”. Un problema que permanece a la luz de estas referencias, irresoluto.

A nuestro juicio, la propuesta epistemológica y política que representa Salazar constituye, sin lugar a dudas, un intento por valorizar *lo social* frente a la “política” (entendiendo por ésta la esfera escindida, profesionalizante, auto-centrada), porque “‘la’ política sacrificaba en vano ‘lo’ social, que era la matriz vital de la verdadera soberanía” (Salazar 2012a, 307). Consideramos que la historia provee suficientes ejemplos para sostener esta tesis; la revisión que hemos realizado de los estudios sobre movimientos sociales en los ochenta y noventa confirma esa tensión entre lo social y la política. Por eso Salazar sostiene:

Intentar desvirtuar o denigrar “lo social” tildándolo de “barbarie” (incluyendo en eso, por tanto, a la mayoría de los movimientos sociales chilenos) a pretexto de que se sale o no entra en el círculo monocular del prisma político funcional-estadista y porque lo rebasa en todas direcciones, equivale, sin duda, a instalarse dentro de los sistemas políticos, a mirar con los ojos acusadores de los fabricantes (militarizados) de la Constitución, y a trabajar con la epistemología popular al revés. No pocos políticos profesionales, y otros no tanto, en Chile miran los movimientos sociales de ese modo. Y disparan desde allí (Salazar 2012a, 115).

En contraposición, a juicio de Grez, la propuesta de Salazar produciría una apología de lo social, y una suerte de idealización de los actores sociales, aun con sus cuotas de “barbarie” e “irracionalidad”. Efectivamente Salazar (2012a, 115) ha dicho que “En ‘lo social’ (chileno), todo cabe y todo vale. Y la soberanía popular real (en Chile) se nutre de todo eso”. Pero a nuestro juicio esa opinión no significa una idealización de lo social; por el contrario, ese “todo” reconoce la contradicción, la mixtura, la diversidad. Pero sí construye una interpretación de los procesos de subjetivación que no se limita a las formas tradicionales e institucionales (legalizadas, por tanto) de la política, sino que reconoce otras vías y otras herramientas que los sectores populares habrían usado para reconocerse como actores de la historia y para incidir en ella. Por lo tanto, esos sectores aunque no hayan creado partidos políticos o no hayan disputado elecciones, no significa que no se hayan organizado, luchado, creado alternativas, etc. y que no hayan estado guiados en sus acciones por principios racionales.

Desde esta perspectiva, la concepción de lo social está impregnada de lo político, en el sentido de una recuperación de *la politicidad de lo social*, entendiendo que –en la versión liberal– se habían escindido y “lo político” había dado lugar a “la política”, una esfera independiente de ocupación específica en los asuntos públicos. Es la reificación y cosificación de la política la que la había negado. Sin embargo, Salazar, recuperando a Marx, considera que “‘lo político’ no tiene existencia *esencial* fuera del ser social” (Salazar 2012a, 230). Todo movimiento social es político porque la lucha “es, desde su médula, esencia humana, social” (Salazar 2012a, 218). Y con ello no está negando la posibilidad –incluso la necesidad– de la función de la representatividad en determinadas instancias, sino la profesionalización de la “representación” que hace que un grupo de personas se especialice y se eternice en los cargos de dirección, gestión y administración políticos, acopiando y acrecentando intereses personales vinculados con las prerrogativas ligadas a esas posiciones, y adquiriendo, por lo tanto, las características de una “clase política”. Estas consideraciones fuerzan al autor a

distinguir entre la “política convencional” y la “política por soberanía”, o a explicitar que hay otras formas de hacer política, distintas a “la política del día”, que sería la convencional. Mario Garcés también ha señalado la existencia de dos políticas: una política “de élite” y una *política popular* (Garcés 1994). La necesidad de distinguir entre dos políticas es síntoma de la propia escisión de la sociedad.

La crítica de Grez a Salazar se fundamenta en una concepción liberal de la política, entendida fundamentalmente como poder y como dominación, que no permite a la historia social trabajar con los sujetos tradicionalmente dominados. Bastías (2007, 22) ha señalado, con gran acierto, que si no se discute previamente qué se entiende por política “se puede terminar trabajando una concepción elitista de la política, excluyente de toda manifestación ajena al Estado o a los partidos como meras expresiones de lo social, lo cual, en última instancia, no hace sino reducir la determinación de los movimientos populares a elementos externos, negándoles su propia autonomía”. Grez introduce una distinción entre actores sociales, reconociendo sólo a algunos de ellos su carácter político. Por eso queremos apuntar nuestra discrepancia, en este punto, con Grez (2005, 24) quien recrimina a la perspectiva *salazariana* “no aspirar a la politización plena y continuar, en cambio, una rebeldía que de acuerdo con esa opción debiera ser eterna”. Efectivamente, las implicaciones profundas de la renovación historiográfica presuponen una comprensión del movimiento social como una lucha perenne por mayores cuotas de humanización; y, por otra parte, entrañan la superación de la escisión excluyente entre lo social y lo político, al no identificar la “politización plena” exclusivamente con la incorporación a las instituciones y disputas estatales. Lo contrario supone ansiar proyectos totalizadores que supuestamente conjuran los conflictos sociales; aspiración que ya concretó el socialismo realmente existente del siglo XX con efectos desastrosos.

Ciertamente, puede ser útil diferenciar espacios y aún niveles de politicidad. Al mismo tiempo trasluce la preocupación por la capacidad transformadora –o “eficacia política” (Garcés 1994)– de ciertos actores sociales. Sin embargo, la propuesta de Grez resulta reduccionista por cuanto sólo considera *políticos* a los actores que enfocan su acción desde y hacia la esfera institucional de la política, desconociendo o desvalorizando las acciones de construcción y de proyección del movimiento popular en otros espacios de sociabilidad. Pero “no se puede refundar una política popular si ésta no da cuenta sólo de las frustraciones y reivindicaciones populares, sino que, en forma mucho más relevante, de las capacidades de creación de sociedad que reiteradamente se manifiestan en la cultura popular chilena” (Garcés 1994, 263). Esa fue, en general, la postura de la izquierda política con respecto al movimiento de pobladores; la acción política, que se distanciaba tanto de la política institucional, como de la vía insurreccional, “requería ser procesada y elaborada teórica y políticamente” (íd.); y no lo fue. Ahí cabe identificar una debilidad de la Nueva Historia Social como del propio movimiento popular.

Consideraciones finales

El examen de los movimientos sociales en Chile ha sido abordado fundamentalmente por sociólogos e historiadores. En el primer caso, desde la sociología *renovada*, corriente hegemónica desde los años ochenta del siglo pasado, y cuyas preocupaciones giraron en torno de la “transición a la democracia”; se trata de una sociología eminentemente *política*, no sólo por el ámbito de estudio que privilegia sino, sobre todo, por la orientación general de su reflexión, desde las instituciones estatales y el sistema político como constructores de la sociedad. En el segundo caso, desde una corriente historiográfica afín a la Historia *Social*, llamada *Nueva Historia*, definida por el protagonismo histórico y epistémico reconocido a los sectores populares y, sobre todo, comprometida con las perspectivas de democratización que emergen *desde* esos sectores. Podríamos decir, entonces, que la Sociología (Política) estudia los movimientos sociales *desde arriba y desde fuera*, mientras que la Nueva Historia (Social) lo hace *desde abajo y desde dentro*.

Ese examen aflora en un contexto de autoritarismo y represión de los movimientos que habían aupado el anterior ciclo de luchas y reivindicaciones que se cerró con el golpe de estado de 1973. La derrota/fracaso de aquellas experiencias propició un proceso de cuestionamiento y crítica que derivó en la necesidad de *renovación* del pensamiento social y político y de las prácticas de transformación social. En el caso de la sociología, la evaluación de las causas que habían llevado al golpe de Estado significó el abandono del compromiso asumido con la transformación *radical* de la sociedad, la aceptación de la democracia formal como un sistema válido *per se* y de la política como una esfera autónoma del mundo social. Al mismo tiempo, los sociólogos *renovados* concluyeron que el tipo de ciencia social practicada con anterioridad al golpe de Estado estaba profundamente ideologizada, había asumido un compromiso demasiado estrecho con las luchas sociales y había carecido de autonomía y objetividad. En consecuencia, el análisis de los movimientos sociales fue abordado desde una pretendida neutralidad valorativa, esto es, desde la supuesta autonomía del pensamiento sociológico, soslayando los compromisos con una concepción de la democracia que la reduce a los aspectos formales y de la política como monopolio exclusivo de los partidos políticos y del gobierno y con un proyecto político de salida de la Dictadura que enfatizaba el papel de las élites políticas y los consensos entre partidos. Esa reconstrucción del devenir de la sociología *renovada*, me demostró que más que de traición –que, en cierto nivel la hubo– se trató de un proceso que guarda más elementos de continuidad con el pasado que de ruptura. En ese sentido, el viraje de la sociología renovada no tuvo lugar con ocasión del plebiscito o de las elecciones presidenciales de 1989, aunque se intensificó durante la gestión gubernamental de la Concertación. El viraje, en términos teóricos y políticos, de los intelectuales que habían estudiado los movimientos sociales, se produjo casi inmediatamente después del golpe y más claramente entre fines de los setenta e inicios de los ochenta. Es un proceso que está

íntimamente ligado con la renovación socialista, que fue también *renovación sociológica*.

La sociología *renovada* se aproximó al análisis de los movimientos sociales con el aparataje conceptual de la *sociología accionista* de Alain Touraine. La definición de movimiento social del sociólogo francés fue usada como vara de medir de las distintas expresiones de descontento, de organización, de protesta y de movilización de los sectores que enfrentaron los efectos de la Dictadura cívico-militar, muy especialmente de los sectores populares. Esos “fenómenos” no encajaban en la definición, por lo que los sociólogos concluyeron, en primer lugar, que no existían movimientos sociales en Chile porque las experiencias que había no exhibían una identidad homogénea ni un proyecto político definido, y porque sus actitudes se ubicaban entre el comunitarismo (el refugio pre-moderno) y la violencia anómica (pura irracionalidad) y la voluntad revolucionaria (la pretensión de cambiarlo todo). La negación de la existencia de un movimiento de *pobladores* pone de manifiesto cómo el concepto de movimiento social se convirtió, de algún modo, en un compartimento estanco que, tal y como sucediera anteriormente con la categoría de “clase obrera”, dificultó más la comprensión de las particularidades de la realidad chilena, que lo que ayudó a su esclarecimiento: el propio mentor de los sociólogos chilenos *renovados* concluyó que poco se había avanzado en el terreno del conocimiento con decir que “no hubo, no hay, no habrá” (Touraine 1987c, 218-219) movimientos sociales en Chile.

La rigidez del enfoque sociológico revisado se tradujo en una actitud de *reproche* hacia la realidad, ante la inadecuación de los hechos a la teoría, debido a aquello que le faltaba para constituir un “verdadero” o “real” movimiento social. La heterogeneidad presente en el sector *poblacional* y la diversidad característica del actor *poblacional* fueron interpretadas, desde esta perspectiva, como un impedimento para la constitución de movimientos sociales y, por ende, de prácticas con un potencial transformador (en un sentido positivo) de la sociedad. La unidad fue pensada como uniformidad, homogeneidad de características sociales, de tácticas de acción, de proyectos de futuro; y además fue considerada un punto de partida.

En segundo lugar, esta sociología concluyó que las movilizaciones y protestas que sacudieron el panorama sociopolítico en la década de los ochenta no eran propiamente políticas, por lo que debían subordinarse a la conducción de los partidos políticos, ya que sólo éstos tienen la capacidad de enarbolar proyectos propiamente políticos, racionales e instrumentales. La política fue concebida como una esfera profesional separada del “mundo social”, guiada por principios racionales y por conocimientos profesionales; a su vez, lo social sin la política parecía pura expresividad, irracionalidad, emociones primarias, inviabilidad.

Por lo tanto, la sociología, *renovada*, explícitamente argumentó que en la democratización de la sociedad, los movimientos sociales cumplen un papel secundario y subordinado. En consecuencia, legitimó la escisión entre lo social y lo político que defiende el pensamiento liberal y que la Dictadura forzó a sangre y fuego. La escisión supuso la preeminencia del “mundo político” frente a las experiencias de movilización, de autoorganización, etc., de los sectores populares. Esta interpretación sobre los procesos de subjetivación política y la transformación de la realidad, constituye un

postulado esencial de la sociología *renovada*, no una caracterización de las luchas sociales durante la Dictadura. Es decir, desde esta perspectiva los movimientos sociales no son políticos, porque la política reside en los actores que disputan y ejercen el gobierno, y por lo tanto, a los primeros les cabe, en el mejor de los casos, la tarea de “demandantes”, “fiscalizadores” o “contrapesos” del poder político.

La negación de los movimientos sociales y la subordinación de las movilizaciones por no constituir propiamente una estrategia política, fue rebatida desde la Nueva Historia. La renovación del pensamiento histórico y de la práctica política, no derivó, en este caso, en el abandono por parte de los *nuevos* historiadores sociales de los proyectos de transformación de la sociedad, más bien el compromiso con ellos se profundizó. Ciertamente se cuestionó el economicismo y el vanguardismo presentes en los análisis anteriores, y se consideró necesario ampliar el concepto de “clase obrera” para incluir a los sectores populares previamente excluidos de ese concepto por el predominio de un cierto obrerismo en el pensamiento marxista precedente. Asimismo, los *nuevos* historiadores abandonaron –con grados diversos– la centralidad conferida al partido político y la orientación estatalista (de confrontación y/o de reivindicación) de las luchas y pusieron en valor las prácticas de construcción local, cotidiana, de los movimientos sociales. De esta manera, se pensaron las experiencias de autoorganización, de autoeducación, de protesta, etc. de los sectores populares como procesos de constitución de actores sociales más autónomos y más conscientes que en el pasado, lo cual implica, a pesar de cierta incompreensión entre los propios historiadores, que la Nueva Historia concibe la politicidad en el seno mismo de lo social, es decir, cuestiona cualquier posibilidad de pensar en la autonomía de la política, pues cuando esto sucede, se fetichiza lo político.

El carácter procesual y la perspectiva no lineal de la historia que rescata esta mirada historiológica, supone concebir la unidad no como homogeneidad, ni siquiera como hegemonía, sino como complementariedad, encontrando los elementos comunes que permiten la comunicación, y el encuentro, entre los distintos movimientos sociales. Así entendida, la unidad es un fin –y no un principio–, aunque siempre reversible y mudable. Ello supone abandonar también la visión (y la ambición) totalizante de las luchas. Además, la unidad de los procesos antagonistas no excluye el reconocimiento de las particularidades. Valorar lo diverso, lo plural, lo distintivo, esto es, concebirlo como algo que suma, en lugar de restar, como una condición que enriquece los procesos de transformación, que permite complementarse mejor y abrir *distintas* vías de revolución, permite avanzar en un acercamiento más complejo e integral de los problemas sociales. Desde esta perspectiva, el proyecto político no se expresa exclusiva o necesariamente en la propuesta formal de un número determinado de principios programáticos; el proyecto es una constelación de propuestas –más o menos explícitas– que van *configurando* una sociabilidad distinta, pero siempre en tensión. Obviamente la imagen propuesta de la revolución social resulta un poco más compleja, y quizás un punto menos romántica, que la tradicional, pero quizás también más factible y fructífera para quienes albergan deseos de humanización.

Aunque la confrontación de interpretaciones sólo excepcionalmente se hizo de manera directa, en algunos espacios y momentos muy delimitados –algunos encuentros

o seminarios en los que confluyeron sociólogos e historiadores dada la configuración del campo académico durante la Dictadura— existe entre la Sociología (Política) y la Nueva Historia (Social) una *disputa* por el concepto de movimiento social, que involucra una contienda también por las concepciones de la política y la democracia. Mientras la primera negó al movimiento social, la segunda ha buscado afirmarlo. La primera lo hizo desde la aplicación de un concepto definido *ex ante*, fijo y restrictivo, de lo que son los movimientos sociales (de acuerdo con la lectura *tourainiana*); pero además negó el carácter político y por lo tanto el carácter de “actor válido” de las organizaciones y colectivos que desde las *poblaciones* enfrentaron a la Dictadura y desarrollaron relaciones sociales y prácticas de vida alternativas al individualismo y autoritarismo imperantes. La segunda se ha aproximado al “examen” de quiénes son y qué quieren los que actúan, a partir del proceso mismo de la *lucha*, del despliegue de sus capacidades de hacer y de decir, y también de sus dificultades. Desde esta perspectiva, los movimientos *son* en movimiento y las identidades y subjetividades políticas se crean y recrean en el propio despliegue del conflicto; por lo tanto, no resulta posible cancelar de antemano los alcances del desafío anti-sistémico o democratizador que puede involucrar una lucha y los actores involucrados en ella. Pero además, como la Nueva Historia apuesta por el desarrollo de esas experiencias, se compromete con la profundización de los aspectos que pueden reforzar la identidad y el proyecto de los actores sociales.

Así pues, la construcción teórica de los movimientos sociales se convirtió en un *campo de batalla*, no siempre explícito, de las propuestas epistemológicas y teóricas de la Sociología *renovada* y la Nueva Historia. Y ello porque detrás de la definición de qué son los movimientos sociales, en sentido conceptual, se ubica la consideración de qué papel juegan en la democratización de las sociedades. En el contexto dictatorial, negar la existencia de movimientos sociales y subordinar las protestas a la conducción partidaria, suponía relegar a los sectores populares, y postergar sus reivindicaciones y propuestas de democratización efectiva de la sociedad, implicaba reforzar la idea de que la única opción viable y razonable de poner fin a la Dictadura pasaba por acatar la Constitución *pinochetista* de 1980 y las transformaciones que los militares habían introducido en la sociedad, suponía, en definitiva, legitimar el modelo autoritario, elitista y neoliberal. Por el contrario, defender las experiencias populares y conferirles centralidad en la estrategia democratizadora significa erigir una propuesta popular frente al modelo dictatorial.

Casi tres décadas después del reventón popular de las Jornadas de Protesta Nacional, el movimiento estudiantil remeció la sociedad chilena, protagonizando multitudinarias marchas y diversas e innovadoras formas de protesta, dinamizando un proceso amplio y heterogéneo de lucha social y marcando por largo tiempo la agenda política del país. En ese contexto, uno de los ideólogos de la transición, pronunció el siguiente veredicto: “Las marchas se han vuelto una performance *rutinaria*, con un corolario de *violencia* que reflejan la elección de un ‘método de lucha’, una expresión de *acción irracional-anárquica* y una manifestación de jóvenes *desintegrados* que utilizan la calle como escenario para la *anomia*” (Brunner 2012, cursivas mías). La reiteración de los mismos atributos para caracterizar al movimiento estudiantil que antes

servieron para descalificar al movimiento de *pobladores*, no puede ser sino signo del anquilosamiento de una sociología que decretó su propio ocaso (Brunner 1997). A la luz de lo anterior no cabe duda de que resulta indispensable una perspectiva de análisis de las luchas sociopolíticas capaz de superar los diagnósticos apriorísticos y comprender las dinámicas profundas de las contradicciones y de los antagonismos que atraviesan el cuerpo social y los actores *en lucha*.

El desafío en el que avanza la Nueva Historia y al que no debe renunciar una sociología crítica estriba, a nuestro parecer, en la posibilidad de comprender los movimientos sociales como entidades-procesos complejos, diversos, contradictorios, abiertos y cambiantes; y las dinámicas de transformación de la sociedad a partir del despliegue de posibilidades que se configuran en las propias *luchas*, en la confrontación de propuestas, en el aprendizaje continuo y en el ensayo incesante de formas diversas de apropiarse de la capacidad de construir mundos alternativos. En definitiva, en reconocer que la posibilidad de un mundo justo y solidario se funda en la afirmación de aquello que afirma ese tipo de valores y relaciones, o de otra manera, en la negación de lo que lo niega.

Referencias bibliográficas

- ACTAS DEL SEMINARIO DE HISTORIA DE CHILE. Historiografía chilena: Balance y perspectivas (1986). *Proposiciones*, n° 12: 157-170.
- ACTAS CHILE-80: MOVIMIENTOS, ESCENARIOS Y PROYECTOS. Encuentro de Chantilly I: 3-5 de septiembre de 1982. Roma: INC / ASER-Chile.
- AGURTO, Irene, y Pedro MILOS (1983). «Momento político y protagonismo popular.» *Educación y Solidaridad*, n° 4: 5-10.
- AIGNER, Michel (2011). «La historia de la sociología como disciplina académica en la Universidad de Concepción-Chile.» *La sociología en sus escenarios* (Centro de Estudios de Opinión) Año 14, n° 23 (enero).
- ALLENDE, Salvador (1971). «La "vía chilena al socialismo", discurso ante el Congreso de la República de Chile reunido en sesión plenaria.» 21 de mayo. <http://www.marxists.org/espanol/allende/21-5-71.htm> (último acceso: 30 de abril de 2014).
- . (1993). «Un Estado soberano y democrático. Mi propuesta a los chilenos (texto póstumo).» España: Centro de Estudios Políticos Simón Bolívar y Fundación Presidente Allende.
- ALMENDRAS, Antonio (2007). «Usos de la transición política. El saber sociológico como oráculo de la transición política chilena.» *Tesis para optar al grado de Magíster en Ciencia Política [Prof. Guía: Alfredo Joignant]*. Santiago: Universidad de Chile, Instituto de Asuntos Públicos, Departamento de Ciencia Política.
- AMORÓS, Mario (2008). «Salvador Allende ante el mundo.» *Historia 16*, n° 386: 54-69.
- ARAYA, Rodrigo (2011). «El Acuerdo Marco chileno. ¿Un caso frustrado de pacto social?» *Tiempo Histórico*, n° 2: 43-63.
- ARIZTÍA, Tomás, ed., (2012). *Produciendo lo social. Usos de las Ciencias Sociales en el Chile reciente*. Santiago: Universidad Diego Portales.
- ARIZTÍA, Tomás, y Oriana BERNASCONI (2012). «Sociologías públicas y la producción del cambio social en el Chile de los noventa.» En *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente*, editado por Tomás ARIZTÍA, 133-163. Santiago: Universidad Diego Portales.
- ARRATE, Jorge (2009). «Entrevista: Jorge Arrate: "No comparto las derivaciones de la actual renovación".» En *Las cartas sobre la mesa. Entrevistas de Rocinante*, de Faride ZERÁN, 22-44. Santiago: LOM.
- AUSTIN, Robert, y Francia ARAYA (2004). «¿Dictadura Imaginaria? De Transición Democrática a Renovación Concertacionista en la Educación Superior Chilena, 1990-2001.» En *Intelectuales y Educación Superior en Chile: de la Independencia a la Democracia Transicional, 1810-2001*, editado por Robert AUSTIN, 229-262. Santiago: CESOC.
- AYLWIN, Patricio (1992). «En ceremonia de conmemoración de los 42 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el 12° aniversario de la

- Comisión Chilena de Derechos Humanos.» En *La transición chilena. Discursos escogidos marzo 1990 -1992*, de Patricio Aylwin, 120-122. Santiago: Andrés Bello.
- . (1998). *El Reencuentro de los Demócratas. Del Golpe al Triunfo del No*. Santiago: Ediciones B.
- . (2002). «Discurso de s.e. el Presidente de la República, Don Patricio Aylwin Azócar, en Estado Nacional. 12 de marzo de 1990.» En *¿La concertación desconcertada? Reflexiones sobre su historia y su futuro*, de Eugenio ORTEGA y Carolina MORENO, 226-231. Santiago: LOM.
- . (2014). «"La democracia hay que cuidarla".» <http://www.icare.cl/noticias/la-democracia-hay-que-cuidarla-sostuvo-patricio-aylwin-al-recibir-el-premio-icare-2014-2>.
- BAÑO, Rodrigo (1984). «Nuevos estilos y temas en los análisis de ciencias sociales en la última década.» Editado por A.G. Colegio de Sociólogos de Chile. *Primer Congreso Chileno de Sociología*: 94-106.
- . (1985). *Lo social y lo político, un dilema clave del movimiento popular*. Santiago: Flacso.
- . (1988). «Transición y cultura política en Chile.» *Documento de Trabajo* (Flacso) n° 390 (diciembre).
- . (2012) «Las ciencias sociales como conocimiento de la época.» *Revista Anales séptima serie*, n° 4 (noviembre): 79-96.
- . (2013a). «El golpe a la igualdad: cuarenta años después.» *Anales de la Universidad de Chile*, 2013a: 43-57.
- . (2013b). «Conferencia: El Golpe a la Igualdad: 40 años después.» Santiago: Facso, 15 de mayo.
- BAÑO, Rodrigo, Enzo FALETTO, Leopoldo BENAVIDES, Ángel FLISFISCH, y Julieta KIRKWOOD (1982). «El proyecto popular alternativo en la historia reciente de América Latina.» *Documento de Trabajo* n° 163. Santiago: Flacso, noviembre.
- BARROS, Manuel, y Carolina CHAPARRO (2014). «La sociología chilena durante la dictadura.» *Tesis para optar al grado de Licenciado en Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales e Historia, Universidad Diego Portales.
- BASAURE, Mauro (1998). «Tradición de la crisis y tradición de los abolicionismos. Posturas frente a la inadecuación entre sociología y realidad social contemporánea.» *Némesis. Revista de e estudiantes de s ociología de l a Universidad de Chile*, n° 1 (junio): 13-19.
- BASTÍAS, Manuel (2004). «Historiografía, hermenéutica y positivismo. Revisión de la historiografía chilena camino a la superación del positivismo.» *Tesina para optar al grado de Licenciado en Historia*. Santiago: Universidad de Chile.
- . (2007). «Historiografía social y política. Algunos comentarios críticos.» *Proposiciones*, n° 36: 16-32.
- . (2010). «Las paradojas de la transición. La conquista del sufragio y la desarticulación de la sociedad civil en Chile.» *Independencias - Dependencias - Interdependencias VI Congreso CIESAL*. Toulouse.

- . (2011). «Los movimientos sociales en la historia social chilena. Balance crítico en busca de un programa de investigación.» *Nuestra Historia*, n° 4: 149-181.
- BAYLE, Paola (2008). «Emergencia académica en el Cono Sur: el programa de reubicación de científicos sociales (1973-1975.» *Iconos. Revista de Ciencias Sociales*, n° 30 (enero): 51-63.
- BEASLEY-MURRAY, Jon (2010). *Poshegemonía: teoría política y América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- BENGOA, José (1987). «La educación para los movimientos sociales.» *Proposiciones*, n° 15: 12-41.
- BOENINGER, Edgardo (1997). *Democracia en Chile. Lecciones para la gobernabilidad*. Santiago de Chile: Andrés Bello.
- BOURDIEU, Pierre (2000a). *Cosas dichas*. Barcelona: Gedisa.
- . (2000b). *Los usos sociales de la ciencia*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- . (2002). *Lección sobre la lección*. Barcelona: Anagrama.
- . (2008 [1984]). *Homo academicus*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- BOURDIEU, Pierre, y Loïc WACQUANT (2005). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- BRIONES, Guillermo, Alicia FROHMANN, Sergio GÓMEZ, Guillermo SUNKEL, y Teresa VALDÉS (1993). *Usos de la investigación social en Chile*. Santiago: Flacso.
- BRUNNER, José Joaquín (1985). «El movimiento estudiantil ha muerto. Nacen los movimientos estudiantiles.» *Material de Discusión n° 71*. Santiago: Flacso, julio.
- . (1986). *Informe sobre Educación Superior en Chile*. Santiago: Flacso.
- . (1990). «La construcción de las Ciencias Sociales en América Latina. Comentarios sobre su institucionalización.» *David y Goliath* Año XIX, n° 56: 81-84.
- . (2007). «Mercados universitarios: Los nuevos escenarios de la educación superior.» 12 de marzo. <http://www.brunner.cl/?p=645> (último acceso: 18 de 11 de 2014).
- . (1997). «Sobre el crepúsculo de la sociología y el comienzo de otras narrativas.» *Celebración de los 40 años de Flacso en América Latina*. Santiago: Flacso. 19-23.
- . (2014). «Sociología de la sociología.» *Estudios Públicos*, n° 133 (verano): 147-163.
- BRUNNER, José Joaquín, Martín HOPENHAYN, Tomás MOULIAN, y Ludolfo PARAMIO (1993). *Paradigmas de conocimiento y prácticas social en Chile*. Santiago: Flacso.
- BRUNNER, José Joaquín, y Alicia BARRIOS (1987). *Inquisición, mercado y filantropía. Ciencias sociales y autoritarismo en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay*. Santiago: Flacso.
- . (1988a). *El caso de la sociología en Chile. Formación de una disciplina*. Santiago: Flacso.
- . (1988b). *La sociología en Chile. Instituciones y practicantes*. Santiago: Flacso.

- BRUNNER, José Joaquín, y Guillermo SUNKEL (1993). *Conocimiento, sociedad y política*. Santiago: Flacso.
- BUTLER, Judith (2004). «Performative acts and gender constitution. An essay in phenomenology and feminist theory.» En *The Performance Studies Reader*, de Henry BIAL, 154-166. Nueva York: Routledge.
- CALDERÓN, Fernando, ed., (1986). *Los movimientos sociales ante la crisis*. Buenos Aires: UNU / CLACSO / IISUNAM.
- CALDERÓN, Fernando, y Patricia PROVOSTE (1989). «La construcción institucional de las Ciencias Sociales en América Latina.» *David y Goliath*, Año XVIII, n° 55: 66-79.
- CALVEIRO, Pilar (2006). *Poder y desaparición: Los campos de concentración en Argentina*. Buenos Aires: Colihue.
- CAMACHO, Daniel (1979). *Debates sobre la teoría de la dependencia y la sociología latinoamericana*. Costa Rica: EDUCA.
- CAMARGO, Ricardo (2008). «El carácter traumático del consenso en torno al 'Modelo Chileno': una investigación sobre la elite política democrática post-Pinochet.» *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, n° 8: 1-14.
- CAMPERO, Guillermo (1986). «Luchas y movimientos sociales en la crisis: ¿Se constituyen movimientos sociales en Chile?: Una introducción al debate.» En *Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile*, de VARIOS AUTORES, 9-19. Santiago: CLACSO-UNU.
- . (1987). «Organizaciones de pobladores bajo el régimen militar.» *Proposiciones*, n° 14.
- CAMPERO, Guillermo, y José Antonio VALENZUELA (1984). *El movimiento sindical en el régimen militar chileno, 1973-1981*. Santiago: ILET.
- CÁRDENAS, Juan Cristóbal (2015a). «Disputas campales. En torno a la biografía intelectual de un sociólogo disruptivo: Eduardo Hamuy Berr [1916-1989].» (inédito).
- . (2015b). «La subsunción de la Teoría de la Dependencia por la Filosofía de la Liberación: Del giro dependientista al giro decolonial.» (inédito).
- CÁRDENAS SQUELLA, Juan Pablo (1991). «Los Riesgos de la Apatía.» *Análisis*, n° 392 (del 22 al 28 de julio): 3.
- CLACSO (1974). «Declaración de Científicos Sociales Latinoamericanos reunidos en Maracaibo sobre la situación chilena de 27 de marzo, Maracaibo.» *Boletín Clacso*. Vol. Año V. n° 22-23. Maracaibo, 27 de Ene-Feb-Mzo/Abr-May-Jun de 1974. 16-17.
- CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (2011). «Análisis de Universidades Estatales.» Santiago.
- CORREA, Sofía (2001). «Historiografía chilena de fin de siglo.» *Revista Chilena de Humanidades*, n° 21: 47-62.
- CORREA, Sofía, Consuelo FIGUEROA, Alfredo JOCELYN-HOLT, Claudio ROLLE, y Manuel VICUÑA (2001). *Historia de los siglos XX y XXI en Chile: Balance por adojar*. Santiago: Sudamericana.

- CORTÉS, Alexis (2013). «A Struggle Larger Than a House. Pobladores and Favelados in Latin American Social Theory.» *Latin American Perspectives* 40, n° 2: 168-184.
- . (2014). «Favelados e pobladores nas ciências sociais: A construção teórica de um Movimento Social.» *Tesis para optar al grado de Doctor en Sociología*. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro.
- CORVALÁN, Luis (1980). «A 10 años de la Revolución Chilena: se gesta la acción común contra la tiranía.» Editado por Partido Comunista de Chile. *Boletín del Exterior*, n° 43 (septiembre-octubre): 12-18.
- COURARD, Hernán, y Alicia FROHMANN (1999). *Universidad y ciencias sociales en Chile, 1990-1995*. Santiago: Flacso.
- CRUZ, Nicolás (1986). «Intervención.» *Boletín del Encuentro de Historiadores*, n° 3-4.
- CRUZ-COKE M., Ricardo (2004). «Evolución de las universidades chilenas 1981-2004.» *Revista Médica de Chile* 132, n° 12: 1543-1549.
- CUEVA, Agustín (1988). «Sobre exilios y reinos (Notas) críticas sobre la evolución de la sociología sudamericana.» *Estudios Latinoamericanos*, n° 4 (enero-junio): 8-15.
- . (2008a). «El marxismo latinoamericano: Historia y problemas actuales.» En *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana*, de Agustín Cueva, editado por Alejandro MOREANO, 177-200. Bogotá: Clacso y Siglo del Hombre.
- . (2008b). «El análisis 'posmarxista' del Estado latinoamericano.» En *Entre la ira y la esperanza y otros ensayos de crítica latinoamericana*, de Agustín Cueva, editado por Alejandro MOREANO, 201-222. Bogotá: Clacso y Siglo del Hombre.
- CUEVAS, Hernán (1999). «La democratización chilena: Democracia limitada e ideología.» *Tesis para optar al grado de magíster en Ciencia Política*. Santiago: PUC.
- DELAMAZA, Gonzalo (1990). «Acta de Nacimiento.» Editado por Educación y Comunicaciones ECO. *Carl y Canto: revista de movimientos sociales*, n° 6 (agosto).
- . (1999). «Los movimientos sociales en la democratización de Chile.» En *El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa*, de Paul W. DRAKE y Iván JAKSIC, 377-404. Santiago: LOM.
- . (2013). «De la elite civil a la elite política. Reproducción del poder en contextos de democratización.» *Polis*, n° 36.
- DELAMAZA, Gonzalo, y Carlos OCHSENIUS (2006). «Trayectorias, redes y poder: Sociedad civil y política en la transición democrática chilena.» En *La disputa por la construcción de mocrática e n América Latina*, de Evelina DAGNINO, Alberto J. OLVERA y Aldo PANFICHI, 450-500. México: FCE, CIESAS, Universidad Veracruzana.
- DEVÉS, Eduardo (1991). «La cultura obrera ilustrada chilena y algunas ideas en torno al sentido de nuestro quehacer historiográfico.» *Mapocho. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, n° 30 (segundo semestre): 127-136.
- . (1998). «El desprestigio de las Ciencias Sociales: sociología y política en Chile, 1950-1973.» *Mapocho, Revista de Humanidades y Ciencias Sociales*, n° 44 (segundo semestre): 165-183.

- DÍAZ, Francisco (2014). «La reducción naturalista de lo popular en la Nueva Historia Social. Renovación historiográfica en tiempos de Dictadura.» *Izquierdas*, n° 21 (octubre): 152-177.
- DÍAZ, Gonzalo (2013). «Dictadura y apertura del campo político. Desmovilización transicional y modulaciones de la resistencia.» *Escrituras A neconómicas. Revista de Pensamiento Contemporáneo Año II*, n° 4: 107-127.
- DONATI, Paolo R. (1992). «Political Discourse Analysis.» En *Studying C ollective Action*, de Mario DIANI y Ron EYERMAN (eds.), 136-167. Newbury Park/London: Sage Publications.
- DUBET, François (1987). «Las conductas marginales de los jóvenes pobladores.» *Proposiciones*, n° 14: 94-100.
- DURÁN, Carlos (2000). «Saber transitológico y proceso político chileno: Hacia una genealogía de la transición política.» En *Dialectos e n t ransición. Política y subjetividad e n e l Chile ac tual*, de Mauro SALAZAR y Miguel VALDERRAMA (eds.), 163-181. Santiago: LOM / U. Arcis.
- . (2006). «Transición y consolidación democrática. Aspectos generales.» En *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina*, de Gerardo CAETANO (Comp.), 213-240. Buenos Aires: CLACSO.
- ECO (1983a). «La educación popular hoy en Chile. Elementos para definirla.» *Educación y Solidaridad*, n° 1 (abril): 1-14.
- . (1983b). «Educación Popular y Cultura Popular.» *Educación y Sol idaridad*, n° 2 (mayo): 1-12.
- . (1983c). «Práctica educativa y organización popular.» *Educación y Solidaridad*, n° 4 (noviembre): 5-24.
- . (1983d): «Introducción.» *Educación y Sol idaridad. P rotestas y P rotagonismo Popular*, n° 4 (octubre): 3-4.
- . (1983e). «A modo de síntesis: Preocupaciones compartidas.» *Educación y Solidaridad*, n° 4 (octubre): 76-79.
- . (1988a). «De cara la crisis: Entre el desencanto y la afirmación.» *Taller de Análisis de Análisis Movimientos Sociales y Coyuntura*, n° 1.
- . (1988b). «Comentario a los informes: Confiando en las fuerzas propias.» *Taller de Análisis de Análisis Movimientos Sociales y Coyuntura. De cara la crisis: Entre el desencanto y la afirmación*.
- . (1988c). «Los movimientos sociales en la coyuntura post-plebiscitaria: Un tiempo peligroso.» *Taller de Análisis M ovimientos Soc iales y C oyuntura*, n° 3 (diciembre).
- . (1990). «Los movimientos sociales en los primeros meses de la transición.» *Cal y Canto: revista de movimientos sociales*, n° 6 (agosto).
- . (2012a). *ECO en el Horizonte Latinoamericano (II): La Educación Popular bajo la dictadura*. Santiago: ECO.
- . (2012b). «Los procesos de concientización.» En *ECO e n e l H orizonte Latinoamericano (II): La E ducación P opular baj o l a di ctadura*, 39-54. Santiago: ECO.

- . (2012c). «Educación Popular y Politización: Tareas viejas en condiciones nuevas [Publicado por el Centro de Estudios y Asesoría Laboral (CEAL), diciembre de 1981].» En *ECO en el Horizonte Latinoamericano (II): La Educación Popular bajo la dictadura*, 97-99. Santiago: ECO.
- EJÉRCITO DE CHILE. (1991). «Posición del Ejército» http://www.archivochile.com/Derechos_humanos/Com_Rettig/hhddrettig0016.pdf, marzo.
- ENGELS, Friedrich (1890). «Carta a Konrad Schmidt.» https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e5-8-90.htm#n**. 5 de agosto. https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e5-8-90.htm#n** (último acceso: 1° de abril de 2015).
- ENRÍQUEZ, Miguel (2004). «Vivimos un momento histórico fundamental.» En *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria*, MIR, de Pedro NARANJO, Mauricio AHUMADA, Mario GARCÉS y Julio PINTO, 261-270. Santiago: LOM.
- ESPINOZA, Vicente. (1983). «Protesta, movilización y construcción de movimiento en el sector poblacional.» *Educación y Solidaridad*, n° 4: 65-75.
- . (1986). «Los pobladores en la política.» En *Los movimientos sociales y la lucha democrática en Chile*, de VARIOS AUTORES, 31-52. Santiago: CLACSO-ILET.
- . (1988). *Para una historia de los pobres de la ciudad*. Santiago: SUR.
- . (2000). «Reivindicación, conflicto y valores en los movimientos sociales de la segunda mitad del siglo XX.» En *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS y Miguel URRUTIA. Santiago: LOM, 2000.
- ESPINOZA, Violeta (2000). «1988 La Negra Ester 1998.» En *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS y Miguel URRUTIA, 369-378. Santiago: LOM.
- FALAHA, Boris (1993). «Chile: ¿Transición o democracia limitada?» *Revista de Sociología*, n° 8: 71-78.
- FALETTO, Enzo (1998). «¿Crisis de la sociología?» *Némesis. Revista de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile*, n° 1 (junio): 20-25.
- . (2009). «Entrevista: Enzo Faletto: "En torno a la desestructuración".» En *Las cartas sobre la mesa. Entrevistas de Rocinante*, de Faride ZERÁN, 145-156. Santiago: LOM.
- FAZIO, Hugo, y otros (2005). *Gobierno de Lagos: balance crítico*. Santiago: LOM.
- FERNÁNDEZ-SAVATER, Amador (2014). «Emocional-político. Encuentro sobre la visibilización y la potencia de las emociones en los movimientos sociales.» http://www.youtube.com/watch?v=P0q_IWslGpo. Valencia: Facultad de Bellas Artes San Carlos de la Universidad Politécnica de Valencia, 2 de abril.
- FLISFISCH, Ángel (1985). «Algunas hipótesis sobre la relación entre intelectuales y partidos políticos en Chile.» *Documento de Trabajo n° 234*. Santiago: Flacso, enero.

- . (1987). *La política como compromiso democrático*. Santiago: Flacso.
- FOUCAULT, Michel (1990). *Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- FOXLEY, Alejandro (1986). «Entrevista de Jorge Andrés Richards: "Pinochet y el PC han desmovilizado a Chile".» *APSI*, del 15 al 28 de diciembre: 7-8.
- . (1987). *Chile y su futuro: Un país posible*. Santiago: Cieplan.
- FRANK, André Gunder (1967). *Capitalism and underdevelopment in Latin America*. New York: Montly Review Press.
- FREI, Eduardo (1973). «Carta a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana.» En *Eduardo Frei Montalva (1911-1982)*, de Cristián GAZMURI, Patricia ARANCIBIA y Álvaro GÓNGORA, 476-496. México: FCE, 1996.
- GARCÉS, Mario (1994). «Izquierda y movimiento popular: viejas y nuevas tensiones de la política popular chilena» *Proposiciones*, n° 24: 259-263.
- . (1996). «Educación popular ¿Continuidad en el cambio?» *Última Dé cada*, n° 4 (marzo).
- . (2002). *Tomando su sitio. El movimiento de pobladores de Santiago, 1957-1970*. Santiago: LOM.
- . (2003a). *Crisis social y motines populares en el 1900*. Santiago: LOM.
- . (2003b). «Reseña de Gabriel Salazar y Julio Pinto. Historia Contemporánea de Chile, Volúmenes I al V, Lom Ediciones, Santiago de Chile, 1999-2002.» *Historia*, n° 36: 470-473.
- . (2004). «Los movimientos sociales populares en el siglo XX: balance y perspectivas.» *Política* n° 43: 13-33.
- . (2010). «Movimientos sociales y educación popular.» *La Piragua*, n° 32: 55-68.
- . (2011). «Las ONG, la educación popular y la política en los años 80: el caso de ECO, educación y comunicaciones.» En *Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos de la noche*, editado por Marcelo MELLA, 301-323. Santiago: RIL.
- . (2012). *El despertar de la sociedad. Los movimientos sociales en América Latina y Chile*. Santiago: LOM.
- . (2013). «Las luchas urbanas en Chile en el último tercio del siglo XX.» *Trashumante. Revista Americana de Historia Social*, n° 1: 74-95.
- GARCÉS, Mario, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS, y Miguel URRUTIA (2000). *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*. Santiago: LOM.
- GARCÉS, Mario, y Sebastián LEIVA (2004). «Perspectivas de análisis de la Unidad Popular: Opciones y omisiones.» Informe de Avance, FONDARCIS, disponible en www.bibliotecaobrera.cl, Santiago.
- . (2005). *El Golpe en la Legua: Los caminos de la historia y la memoria*. Santiago: LOM.

- GARCÍA, Rolando (2006). *Sistemas complejos. Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria*. Barcelona: Gedisa.
- GARRETÓN, Manuel Antonio (1981). «La evolución de las Ciencias Sociales en Chile al inicio de los ochenta: situación, problemas y perspectivas.» *Documento de Trabajo* (Flacso), n° 113 (mayo).
- . (1982). «La política ayer y hoy.» *Ponencia presentada en el encuentro de Chantilly I*. Chantilly, Francia. [<http://www.blest.eu/doxa/garreton82.html>, consultado el 27/11/2013].
- . (1986a). «Seis proposiciones sobre redemocratización en Chile.» *Documento de Trabajo* (Flacso-Chile), n° 314 (septiembre).
- . (1986b). «Y fue el año decisivo.» *Apsi*, del 15 al 28 de diciembre.
- . (1987a). «1986-1987. Entre la frustración y la esperanza. Balance y perspectivas de la transición a la democracia.» *Documento de Trabajo n° 329*. Santiago: Flacso, enero.
- . (1987b). «Política y sociedad en la marginación e integración del mundo popular. Notas para un esquema de análisis.» *Material de Discusión n° 95*. Santiago: Flacso, marzo.
- . (1987c). «Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile.» *Documento de Trabajo n° 334*. Santiago: Flacso, abril.
- . (1987d). «Reconstrucción y democracia. La doble problemática del sistema político chileno.» *Documento de Trabajo n° 364*. Santiago: Flacso, diciembre.
- . (1987e). «Las complejidades de la transición invisible. Movilizaciones populares y régimen militar en Chile.» *Proposiciones*, n° 14.
- . (1988). «La posibilidad democrática en Chile. Dilemas de transición y consolidación.» *Documento de Trabajo*, n° 394. Santiago: Flacso, diciembre.
- . (1989). «La evolución de las ciencias sociales en Chile y su internacionalización. Una síntesis.» *Documento de Trabajo n° 432*. Santiago: Flacso, octubre.
- . (1990). «La democracia que se inaugura y sus condiciones socio-políticas.» *Convergencia*, n° 17 (enero a marzo): 13-18.
- . (1991a). «La redemocratización política en Chile. Transición, inauguración y evolución.» *Estudios Públicos*, n° 42: 101-133.
- . (1991b). «La evolución de las ciencias sociales en Chile y su internacionalización.» *Universidad de México. Revista de la Universidad Nacional Autónoma de México*, n° 491 (diciembre): 26-31.
- . (1993a). «Aprendizaje y gobernabilidad en la democratización chilena.» *Nueva Sociedad*, n° 128.
- . (1993b). «La redemocratización política en Chile: transición, inauguración y evolución.» Santiago: Flacso.
- . (1994). «Transición incompleta y régimen consolidado. Las paradojas de la democratización chilena.» *Revista de Ciencia Política* 16, n° 1-2: 21-32.

- (1996). «Movimientos sociales y procesos de democratización. Un marco analítico.» *Excerpta* (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile), nº 2.
- (1998). «La triple problemática intelectual, científica y profesional en la sociología de hoy.» *Némesis. Revista de estudiantes de sociología de la Universidad de Chile* (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Chile), nº 1 (junio): 26-30.
- (2001a). «Balance y perspectivas de la democratización política chilena.» En *Estabilidad, crisis y organización de la política: Lecciones de medio siglo de historia chilena*, editado por Paz MILET, 43-83. Santiago: Flacso-Chile.
- (2001b). «Cambios sociales, actores y acción colectiva en América Latina.» Editado por CEPAL, Naciones Unidas División de Desarrollo Social. *Serie Políticas Sociales*, nº 56.
- (2001c). «Movilización popular bajo el régimen militar en Chile: De la transición invisible a la democratización política.» En *Poder y protesta popular. Movimientos sociales latinoamericanos*, de Susan ECKSTEIN, 292-312. México: Siglo XXI.
- (2007). «Las ciencias sociales en Chile. Institucionalización, ruptura y renacimiento.» En *Las ciencias sociales en América Latina en perspectiva comparada*, de Hélgio TRINDADE (coord.), 193-248. México: Siglo XXI.
- (2009). «Entrevista: Manuel Antonio Garretón: "Aquí nadie ha traicionado a nadie".» En *Las cartas sobre la mesa. Entrevistas de Rocinante*, de Faride ZERÁN, 66-75. Santiago: LOM.
- (2011a). «Intervención de Manuel Antonio Garretón.» En *El Mapu: Realidad o mito. Encuentro de Memoria Histórica*, 67-72. Santiago: Comité Memoria MAPU.
- (2011b). «Las ciencias sociales ante la dictadura, la democratización y la sociedad del Bicentenario.» *Democracia y cultura en tiempos neoliberales. Seminario Internacional de las Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y de la Comunicación, del 25 al 27 de octubre*. Santiago. 13-25.
- (2012). «Entrevista: "Hay que construir un nuevo sujeto político".» *Página 12*. Buenos Aires, 31 de diciembre.
- (2013a). «40 años después. Sociología política y sociedad en América Latina y Chile.» *Conferencia inaugural, XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología, 29 de septiembre*. Santiago: ALAS-Chile.
- (2013b). «Lo que fue Santiago ensangrentada.» *Caras y Caretas* Año 52, nº 2286 (septiembre).
- (2013c). «Crisis y dictadura, democracia incompleta y nueva democracia.» *Conferencia presentada en la Cátedra de la Memoria 2013. "A 40 años del Golpe"*. Santiago: Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Universidad Diego Portales, Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, 5 de septiembre.
- (2014). *Las ciencias sociales en la trama de Chile y América Latina*. Santiago: LOM.

- GARRETÓN, Manuel Antonio, María Angélica CRUZ, y Francisco ESPINOZA (2010). «Ciencias Sociales y Políticas Públicas en Chile: qué, cómo y para qué se investiga en el Estado.» *Sociologías* Año 12, n° 24 (mayo/agosto): 76-119.
- GARRETÓN, Manuel Antonio, y Hernán POZO (1984). «Las universidades chilenas y los derechos humanos.» *Documento de Trabajo n° 213*. Santiago: Flacso, agosto.
- GAUDICHAUD, Franck (2013). «A 40 años del Golpe. Historiografía crítica y pistas de investigación para (re)pensar la Unidad Popular.» *Tiempo Histórico*, n° 6: 63-79.
- GODOY, Óscar (1999). «La transición chilena a la democracia: pactada.» *Estudios Públicos*, n° 74 (otoño): 79-106.
- GOICOVIC, Igor (1996). «Movimientos sociales en la encrucijada. Entre la integración y la ruptura.» *Última Década* (Centro de Investigación y Difusión Poblacional de Achupallas), n° 5 (1996): 1-14.
- . (2000). «Del control social a la política social. La conflictiva relación entre los jóvenes populares y el Estado en la historia de Chile.» *Última Década* n° 12 (marzo): 103-123.
- . (2006). «La refundación del capitalismo y la transición democrática en Chile (1973-2004).» *Historia Actual Online*, n° 10 (primavera): 7-16.
- . (2010). «Transición y violencia política en Chile (1988-1994).» *Ayer, Revista de Historia Contemporánea* 79, n° 3: 59-86.
- GÓMEZ, Galo (1977). «La universidad el golpe fascista en Chile.» *Cuadernos Casa de Chile*, n° 4.
- GÓMEZ, Ricardo J. (2009). «Karl Marx. Una concepción revolucionaria de la economía política como ciencia.» *Revista Herramienta* (<http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-40/karl-marx-una-concepcion-revolucionaria-de-la-economia-politica-como-ciencia>) Año XIII, n° 40 (marzo).
- GÓNGORA, Mario (1981). *Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX*. Santiago: La Ciudad.
- GONZÁLEZ, Jorge (2008). *El efecto de la ambigüedad en la transición chilena*. Santiago: RIL.
- GREAVES, Edward Francis (2002). «Reorganizing civil society: popular movements, municipalities, and the state in post-dictatorship Chile.» *Thesis (Ph. D.)*. Florida: University of Florida.
- GREZ, Sergio (2004). «Historia social: importancia y vigencia en la actualidad.» *Ciclo de Charlas preparatorias para la 1ª Jornada de Historia Social: Debates en torno a la historia social, una aproximación desde los historiadores*. Santiago: Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, 2 de junio.
- . (2005). «Escribir la historia de los sectores populares. ¿Con o sin la política incluida? A propósito de dos miradas a la historia social (Chile, siglo XIX).» *Política* 44 (otoño): 17-31.
- . (2007). «Historiografía, memoria y política. Observaciones para un debate.» *Cyber Humanitatis*, n° 41 (verano).

- . (2008). «Historiografía y memoria en Chile. Algunas consideraciones a partir del Manifiesto de Historiadores.» *Historia Actual Online*, nº 16 (primavera): 179-183.
- GREZ, Sergio, y Gabriel SALAZAR (1999). *Manifiesto de historiadores*. Santiago: LOM.
- GÜELL, Pedro E (2002). «La generación de sociólogos de los setenta post-golpe: Una cuestión de poder.» *Revista de Sociología*, nº 16: 80-102.
- GUERRERO, Manuel (2000). «Democratización chilena y control social: La transición del encierro.» En *Dialectos en transición. Política y subjetividad en el Chile actual*, de Mauro SALAZAR y Miguel VALDERRAMA (comps.), 129-160. Santiago: LOM / U. ARCIS.
- . (2006). «El conjuro de los movimientos sociales en el Chile neoliberal.» *Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales* 12, nº 2 (mayo-agosto): 147-156.
- . (2008). «Tras el exceso de la sociedad: emancipación y disciplinamiento en el Chile actual.» En *De los saberes de la emancipación y de la dominación*, de Ana Esther CECEÑA (coord.), 261-182. Buenos Aires: CLACSO.
- GUEVARA, Ernesto (1961). «Cuba: ¿Excepción histórica o vanguardia en la lucha anticolonial?» *Verde Olivo*, abril.
- GUIDO, Rafael, y Otto FERNÁNDEZ (1990). «El juicio al sujeto: un análisis de los movimientos sociales en América Latina.» En *El juicio al sujeto. Un análisis global de los movimientos sociales*, de Immanuel WALLERSTEIN, y otros, 117-170. México: Flacso-México / Porrúa.
- GUILLAUDAT, Patrick, y Pierre MOUTERDE (1998). *Los movimientos sociales en Chile, 1973-1993*. Santiago: LOM.
- GUZMÁN, Jaime (1989). «A juicio de Jaime Guzmán: "Büchi es la mejor opción para enfrentar a Aylwin".» *El Mercurio*, 6 de febrero: C.2.
- HAMUY, Eduardo (1984). «El plebiscito de 1980. Un problema de legitimidad.» En *Actas del Primer Congreso Chileno de Sociología*, de Colegio de Sociólogos de Chile, 211-237.
- HINKELAMMERT, Franz (1984). *Crítica a la razón utópica*. San José, Costa Rica: DEI.
- . (1995). *Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusión*. San José, Costa Rica: DEI.
- HIRSCHMAN, Albert O. (1979). «The turn to authoritarianism in Latin America and the search for its economic determinants.» En *The New Authoritarianism in Latin America*, editado por David COLLIER, 61-98. Princeton: Princeton University Press.
- HOBBS, Thomas (1999). *Del Leviatán de Hobbes*. México: Publicaciones Cruz.
- HOLLOWAY, John (2000). «Teoría Volcánica.» *Bajo el Volcán*, nº 1: 119-134.
- . (2001a). «El zapatismo y las ciencias sociales en América Latina.» *OSAL* (CLACSO) Año II, nº 4 (junio).
- . (2001b). «Doce tesis sobre el Anti-Poder.» En *Contrapoder. Una introducción*, editado por Edgardo FONTANA, Natalia FONTANA, Verónica GAGO, Mario SANTUCHO, Sebastián SCOLNIK y Diego SZTULWARK, 73-82. Buenos Aires: De mano en mano.

- HUNEEUS, Carlos (2000). *El régimen de Pinochet*. Santiago: Sudamericana.
- IBARRA, Pedro (2005). *Manual de sociedad civil y movimientos sociales*. Madrid: Síntesis.
- IGLESIAS, Mónica (2011). *Rompiendo el cerco. El movimiento de pobladores contra la dictadura*. Santiago: Radio Universidad de Chile.
- . (2015). «Lo social y lo político en Chile: Itinerario de un desencuentro teórico y práctico.» *Izquierdas*, n° 22 (enero): 227-250.
- ILLANES, María Angélica (1994). «Marginalización y des-marginalización en el movimiento popular.» *Proposiciones*, n° 24 (agosto): 220-225.: Planeta/Ariel.
- . (2002). *La batalla de la memoria. Ensayos históricos de nuestro siglo. Chile 1900-2000*. Santiago
- . (2010). «La república de la gratitud. De la promoción participativa al neo-asistencialismo. (Dos tradiciones y Chile actual).» En *Ciencias, tecnologías, culturas. El desafío del Conocimiento para América Latina*, de Cristián PARKER y Fernando ESTENSSORO (Eds.), 377-395. Santiago: Explora-Conicyt / USACH.
- JOIGNANT, Alfredo (1999). «Límites temporales y obstáculos de la transición chileno. Comentarios metodológicos para una crítica política.» *Revista InFraganti*, n° 1 «La transición chilena: Carcajadas en la niebla» (junio): 74-82.
- . (2011). «Tecnócratas, technopols y dirigentes de partido. Tipos de agentes y especies de capital en las élites gubernamentales de la Concertación (1990-2010).» En *Notables, tecnócratas y mandarines. Elementos de sociología de las élites en Chile (1990-2010)*, de Alfredo JOIGNANT y Pedro GÜELL, 49-76. Santiago: Universidad Diego Portales.
- . (2012). «La razón de Estado: usos políticos del saber y gobierno 'científico' de los 'technopols' en Chile (1990-1994).» En *Produciendo lo social. Usos de las ciencias sociales en el Chile reciente*, de Tomás ARIZTÍA, 311-348. Santiago: Universidad Diego Portales.
- JUNTA MILITAR (1973). «Acta de Constitución de la Junta de Gobierno.» *Decreto Ley n° 1*. 11 de septiembre.
- . (1974). «Declaración de Principios del Gobierno de Chile.» [www.archivochile.com](http://www.archivochile.com/11deseptiembre).
11 de septiembre.http://www.archivochile.com/Dictadura_militar/doc_jm_gob_pino8/DMdocjm0005.pdf (último acceso: 28 de abril de 2015).
- KIRKWOOD, Julieta (1986). *Ser política en Chile. Las feministas y los partidos*. Santiago: Flacso.
- LA GENTE TIENE LA RAZÓN (2009). En *El debate silenciado. Un testimonio 1995-2009*, de Carlos OMINAMI, 39-66. Santiago: LOM.
- LACLAU, Ernesto (2004). «Construyendo la universalidad.» En *Contingencia, hegemonía universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*, de Judith BUTLER, Ernesto LACLAU y Slavoj ŽIŽEK, 281-306. Buenos Aires: FCE.
- . (2005). *La razón populista*. Buenos Aires y México: FCE.
- LANDER, Edgardo, ed., (2000). *La colonialidad de la saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas*. Buenos Aires: CLACSO.

- LARAÑA, Enrique (1999). *La construcción de los movimientos sociales*. Madrid: Alianza.
- LAVAL, Christian, y Pierre DARDOT (2013). *La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal*. Barcelona: Gedisa.
- LAVQUEN, Alejandro (2009). «Entrevista: Chile al desnudo. Historiador Gabriel Salazar derriba mitos nacionales.» *Punto Final* (http://www.puntofina.cl/694/Chile.php), n° 694 (17 de septiembre al 1° de octubre).
- LECHNER, Norbert (1987). «La democratización en el contexto de una cultura posmoderna.» En *Cultura política y de democratización*, de Norbert LECHNER (comp.), 253-262. Santiago: Flacso/Clacso/ICI.
- . (1988). *Los patios interiores de la democracia*. Santiago: Flacso.
- . (1989). «El sistema de partidos en Chile: una continuidad problemática.» En *Los sistemas políticos en América Latina*, de Lorenzo MEYER y José Luis REYNA, (coords.), 69-105. México: UNU-Siglo XXI.
- . (2007). «Intelectuales y política: nuevo contexto y nuevos desafíos.» En *Obras escogidas, volumen II*, de Norbert LECHNER, 339-345. Santiago: LOM.
- . (2009). «Entrevista: Norbert Lechner: "Nos hemos quedado sin historia".» En *Las cartas sobre la mesa. Entrevistas de Rocinante*, de Faride ZERÁN, 157-163. Santiago: LOM.
- LENIN (2010[1902]). *¿Qué hacer?* Caracas: Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información.
- LESGART, Cecilia (2003). *Usos de la transición a la democracia: Ensayo, ciencia y política en la década del '80*. Rosario: Homo Sapiens.
- LEVIL, Rodrigo (2006). «Sociedad mapuche contemporánea.» En *¡...Escucha, winka...! Cuatro ensayos de Historia Nacional Mapuche y un epílogo sobre el futuro*, de Pablo MARIMÁN, Sergio CANIQUERO, José MILLALÉN y Rodrigo LEVIL, 219-252. Santiago: LOM.
- LIZANA, Ricardo (1983). «Actores socio-políticos en los territorios populares.» *Educación y Solidaridad*, n° 4: 55-64.
- LOS INCONTROLADOS (2004). «Manuscrito encontrado en Vitoria.» En *Crónicas de la España salvaje 1976-1981*, de Los Incontrolados, 107-128. España: Klinamen/Biblioteca Social Hermanos Quero.
- LÖWY, Michael (1991). *Ideologías e Ciência Social: elementos para uma análise marxista*. São Paulo: Cortez.
- LUHMANN, Niklas (1992). «En el ocaso de la sociología crítica.» *Revista Sociológica*, año 7, n° 20 (septiembre-diciembre): 185-194.
- MAIRA, Luis (1986). «La urgencia de una propuesta política.» *Análisis*, 15 al 21 de julio.
- MARILEO, Genaro (2007). «Disputas entre autores y teorías en el campo de la sociología chilena. Una observación desde la sociología de la sociología.» *Revista Central de Sociología* 2, n° 2: 31-48.

- MARINI, Ruy Mauro (1972). *Dialéctica de la dependencia*. Documento de Trabajo. Centro de Estudios Socio-Económicos (CESO), Santiago.
- . (c1990). «Memoria.» <http://www.marini-escritos.unam.mx>
- MARTÍNEZ, Javier, y Eugenio TIRONI (1985). *Las clases sociales en Chile. Cambio y estratificación, 1970-1980*. Santiago: SUR.
- MARX, Karl (1843). «Carta a Arnold Ruge.» <https://www.marxists.org/espanol/m-e/indice.htm>
- . (2006 [1894]a). *El capital*. Vol. Tomo III/Vol. 6. México: Siglo XXI.
- . (2006 [1894]b). *El capital*. Vol. Tomo III/Vol. 8. México: Siglo XXI.
- . (2007[1857-1858]). «El método de la economía política.» En *Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grundrisse) 1857-1858, volumen I*, de Carlos MARX, 20-30. México: Siglo XXI.
- . (1962). «Manuscritos económico-filosóficos.» En *Escritos económicos y filosóficos [traducción de Wenceslao Roces]*, de Karl MARX y Friedrich ENGELS, 25-125. México: Grijalbo.
- . (1999). *Manuscritos: economía y filosofía*. Madrid: Alianza.
- . (1987[1847]). *Miseria de la filosofía: respuesta a la filosofía de la miseria de P.-J. Proudhon*. México: Siglo XXI.
- . (2008 [1872]). *Prólogo a la edición francesa*. Vol. Tomo 1/Vol. 1, de *El capital*, de Karl MARX, 21. México: Siglo XXI.
- . (1845). *Tesis sobre Feuerbach*. <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm>.
- MARX, Karl, y Friedrich ENGELS (1972 [1846]). *La ideología alemana*. México: Ediciones de Cultura Popular.
- . (1848). *Manifiesto del Partido Comunista*. <https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm>.
- MASSARDO, Jaime (2007). «Gramsci en Chile. Apuntes para el estudio de una experiencia de difusión cultural.» *Comunicación a la I V Conferencia Internacional de Estudios gramscianos "Gramsci a setenta años de la muerte", organizada por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Fondazione Istituto Gramsci, la International Gramsci Society*. 29 y 30 de noviembre y 1° de diciembre.
- MAYOL, Alberto (2012). *No al lucro. De la crisis del modelo a la nueva era política*. Santiago: Debate.
- . (2013). *El derrumbe del modelo. La crisis de la economía de mercado en el Chile contemporáneo*. Santiago: LOM.
- MCADAM, Doug, Sidney TARROW, y Charles TILLY (2001). *Dynamics of Contention*. Cambridge: Cambridge University Press.
- MELLA, Marcelo, ed., (2011a). *Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos del conocimiento durante la transición chilena*. Santiago: RIL.
- . (2011b). «Los intelectuales de los centros académicos independientes y el surgimiento del concertacionismo.» En *Extraños en la noche. Intelectuales y*

- usos políticos de la desconocimiento durante la transición chilena*, editado por Marcelo MELLA, 153-194. Santiago: RIL.
- MELUCCI, Alberto (1989). *Nomads of the Present: Social Movements and Individual Needs in Contemporary Society*. Londres: Hutchinson Radius.
- . (1996). *Challenging codes: collective action in the information age*. Cambridge: University Press.
- MERTON, Robert K (1964). *Teoría y estructura social*. México: FCE.
- MICIELI, Cristina, y Fernando CALDERÓN (1986). «El encantamiento de las estructuras: las ciencias sociales en la década del '60.» *David y Goliath* Año XVI, n° 50 (diciembre): 10-13.
- MODONESI, Massimo (2008). «Crisis hegemónica y movimientos antagonistas en América Latina. Una lectura gramsciana del cambio de época.» *A Contracorriente. Una revista de historia social y literatura de América Latina* 5, n° 2 (invierno): 115-140.
- MORENO, Carolina, y Eugenio ORTEGA, comps., (2002). *¿La Concertación desconcertada? Reflexiones sobre su historia y su futuro*. Santiago: LOM.
- MOULIAN, Tomás (1997) *Chile Actual: Anatomía de un mito*. Santiago: LOM/Arcis.
- . (2000). «Las complicidades de la transición.» En *Escrituras de la diferencia sexual*, de Raquel OLEA (ed.), 49-51. Santiago: LOM / La Morada.
- . (2001a). «El papel de la anticrítica.» *El Mostrador*, 29 de noviembre.
- . (2001b). «Superar las distinciones binarias, o la noción de transformación.» *El Mostrador*, 6 de diciembre.
- . (2008). «Tomás Moulian: itinerario de un intelectual chileno. Entrevista de Emir Sader, Juan Carlos Gómez Leyton y Horacio Tarcus.» *Crítica y Emancipación: Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales* (CLACSO) Año 1, n° 1 (junio): 129-174.
- MOYANO, Cristina (2009). «Un acercamiento histórico-conceptual al concepto de democracia en la intelectualidad de la izquierda renovada. Chile, 1973-1990.» *Izquierdas*, n° 3 (abril).
- . (2010a). *El MAPU durante la dictadura. Saberes y prácticas para una microhistoria de la renovación socialista en Chile, 1973-1990*. Santiago: Universidad Alberto Hurtado.
- . (2010b). «Elementos teóricos y metodológicos para estudiar a los partidos políticos y a la militancia.» *clase magistral en I V Jornadas de Historia Política: Vitalizando la Historia Política: Utilidades Teóricas y Prácticas, Estudios sobre Chile 1970-2010*. Santiago, 20 de octubre.
- . (2011a). «La historia política en el bicentenario: entre la historia del presente y la historia conceptual. Reflexiones sobre la nueva historia política.» *Revista de Historia Social y de las Mentalidades* 15, n° 1: 227-245.
- . (2011b). «Pensar la transición a la democracia. Temas y análisis de los intelectuales MAPU en SUR y FLACSO.» En *Extraños en la noche. Intelectuales y usos políticos del desconocimiento durante la transición chilena*, editado por Marcelo MELLA, 195-240. Santiago: RIL.

- . (2011c). «Diálogos entre el exilio y el interior. Reflexiones en torno a la circulación de ideas en el proceso de renovación socialista, 1973-1990.» *Izquierdas*, n° 9 (abril): 31-34.
- NARANJO, Pedro, Mauricio AHUMADA, Mario GARCÉS, y Julio PINTO (2004). *Miguel Enríquez y el proyecto revolucionario en Chile. Discursos y documentos del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR*. Santiago: LOM.
- NICHOLLS, Nancy (s/f). «Chile: paradojas de la memoria entre el boom y la negación. En busca de la identidad perdida.» <http://www.comisionporlamemoria.org>
- NUN, José (1981). «La rebelión del coro.» *Nexos*, n° 46 (octubre).
- O'DONNELL, Guillermo (2004). *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*. Buenos Aires: Paidós.
- . (2001). «Latin America.» *Political Science and Politics*.
- O'DONNELL, Guillermo, y Philippe C. SCHMITTER (1988). *Transiciones de un gobierno autoritario*. Buenos Aires: Paidós.
- OLEA, Raquel (2000). «Femenino y feminismo en transición.» En *Escrituras de la diferencia sexual*, de Raquel OLEA (ed.), 53-60. Santiago: LOM / La Morada.
- OSORIO, Jaime (2001). *Fundamentos de la análisis social. La realidad social y su conocimiento*. México: UAM-X y FCE.
- OTANO, Rafael (2006). *Nueva crónica de la transición*. Santiago: LOM.
- OXHORN, Philip (1995). *Organizing Civil Society: The Popular Sectors and the Struggle for Democracy in Chile*. University Park: The Pennsylvania State University Press.
- . (2004). «La paradoja del gobierno autoritario: Organización de los sectores populares en los ochenta y promesa de inclusión.» *Política*, n° 43 (primavera): 57-83.
- PALEY, Julia (1994). «Knowledge and urban social movements in post-dictatorship Chile.» *Tesis de grado de Doctorado en Filosofía, e especialización en Antropología*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
- . (2001). *Marketing democracy: power and social movements in post-dictatorship Chile*. Berkeley: University of California Press.
- PALIERAKI, Eugenia, y Carolina TORREJÓN (2008). «Reflexiones sobre los límites y usos de la memoria en las historiografías chilena y francesa.» *Actual Marx Intervenciones*, n° 6 (primer semestre): 27-46.
- PÉREZ, Carlos (2014). «La democracia como dictadura.» <http://carlosperez.cc/pdf-la-democracia-como-dictadura/> (último acceso: 30 de abril de 2014).
- PETRAS, James (1988). «La metamorfosis de los intelectuales latinoamericanos.» *Estudios Latinoamericanos* 3, n° 5: 81-86.
- PINILLA, Juan Pablo, Francisco GODOY, Tania MANRÍQUEZ, Luis VARGAS, y Bernardita INHN (2009). «En la Universidad de Chile. Memorias de titulación en Antropología Social y Sociología. Una reflexión sobre el desarrollo de las Ciencias Sociales en Chile, 1988-2008.» *XXVII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología* (Asociación Latinoamericana de Sociología).

- PINOCHET, Augusto (1977). «Discurso de Chacarillas.» Santiago, 9 de julio.
- . (1979). *El día decisivo. 11 de septiembre de 1973*. Santiago: Andrés Bello.
- . (1983). «Habla Pinochet: "Soy el general de los pobres".» *Interviú*, 24 de agosto.
- . (1998). «Carta a los chilenos.» http://www.emol.com/especiales/pinochet2006/cartas_04.htm, diciembre.
- PINTO, Julio (2000). «Balance de un medio siglo: historiadores y científicos sociales enfrentan el 2000.» En *Memoria par a un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS y Miguel URRUTIA, 107-119. Santiago: LOM.
- POBLETE, Carlos (2004). «Seguimos Prisioneros y Torturados.» *www.sepiensa.cl*. 16 de noviembre (último acceso: 15 de mayo de 2014).
- PONCE, José Ignacio, y Aníbal PÉREZ (2013). «La revitalización de la historiografía política chilena.» *Polis, Revista Latinoamericana* 12, n° 36: 453-476.
- PORTALES, Felipe (2000). *Chile: una democracia tutelada*. Santiago: Sudamericana.
- . (2013). «La Concertación se compró todo el modelo de la dictadura.» *Diario Uchile*, 29 de septiembre: <http://radio.uchile.cl/2013/09/29/felipe-portales-la-concertacion-se-compro-todo-el-modelo-de-la-dictadura>.
- . (2015). «La consolidación de la democracia tutelada.» 20 de septiembre de 2005. http://www.g80.cl/noticias/columna_completa.php?varid=84 (último acceso: 7 de abril).
- PURYEAR, Jeffrey M. (1994). *Thinking Politics. Intellectuals and Democracy in Chile, 1973-1988*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- RAMOS-ZINCKE, Claudio (2005). «Cómo investigan los sociólogos chilenos en los albores del siglo XXI: Paradigmas y herramientas del oficio.» *Persona y Sociedad*, XIX, n° 3: 85-119.
- RAMOS-ZINCKE, Claudio, Andrea CANALES, y Stefano PALESTINI (2008). «El Campo de las Ciencias Sociales en Chile: ¿Convergencia disciplinar en la construcción del objeto de estudio?» *Cinta Moebio*, n° 33: 171-194.
- RAUBER, Isabel (2013). *Estrategia y tareas de los actuales movimientos sociales. Una síntesis del libro "Sujetos Políticos"*. Euskadi: Manu Robles-Arangiz Institutua.
- RAZETO, Luis (1987). «La economía de solidaridad en un proyecto de transformación social.» *Proposiciones*, n° 14: 44-54.
- RETAMOZO, Martín (2009). «Lo político y la política: los sujetos políticos, conformación y disputa por el orden social.» *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales* LI, n° 206 (mayo-agosto): 69-91.
- RICHARD, Nelly (2001). «La problemática del feminismo en los años de la transición en Chile.» En *Estudios Latinoamericanos sobre cultura y transformaciones sociales en tiempos de globalización 2*, editado por Daniel MATO, 227-239. Buenos Aires: CLACSO.
- . (2002). «La crítica de la memoria.» *Cuadernos de Literatura* 8, n° 15 (enero-junio): 187-193.

- RICHARDS, Jorge Andrés (1986). «Alejandro Foxley, dirigente democratacristiano: "Pinochet y el PC han desmovilizado a Chile".» *Apsi*. Santiago, del 15 al 28 de diciembre. 7-8.
- RICO, Álvaro (s/f). «Las "transiciones" en perspectiva bibliográfica.» *ANEP, Medio Siglo de Historia*. <http://www.anep.edu.uy/historia> (último acceso: 13 de abril de 2015).
- RIQUELME, José Luis (2011). «Esperanza, decepción y anomia en los hijos de la dictadura.» *Revista Sociedad & Equidad*, n° 2 (julio): 206-226.
- ROITMAN, Marcos (2005). *Las razones de la democracia en América Latina*. México: Siglo XXI, 2005.
- . (2007). *Democracia sin demócratas y otras invenciones*. Madrid: Sequitur.
- ROJAS, Luis (2011). *De la rebelión popular a la sublevación imaginada. Antecedentes de la Historia Política y Militar del Partido Comunista de Chile y del FPMR, 1973-1990*. Santiago: LOM.
- ROSAS, Pedro (2004). *Rebeldía, subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena 1990-2004*. Santiago: LOM.
- RUIZ CONTARDO, Eduardo (1995). «Crisis, descomposición y neo-oligarquización del sistema político en América Latina.» *Política y Sociedad*, n° 5 (otoño): 69-87.
- . (2004). «La desconocida y manipulada relación entre ciencia social e ideología.» En *El de bate latinoamericano 1. A mérica L atina: Los desafíos del pe nsamiento crítico*, de Irene SÁNCHEZ y Raquel SOSA, (coords.) 50-73. México: Siglo XXI / FCPyS-UNAM / CELA.
- RUIZ ENCINA, Carlos (2014). «Lo público y lo estatal en el actual problema de educación.» *Revista Anales Séptima Serie*, n° 7 (noviembre): 93-105.
- RUIZ SCHNEIDER, Carlos (1993). «Derechos, justicia y política. Sobre la articulación de la democracia política y la democracia social.» En *Seis ensayos sobre teoría de la democracia*, de Carlos Ruiz Schneider. Santiago: Universidad Andrés Bello.
- SADER, Eder (1988). *Quando nov os pe rsonagens e ntraram e m c ena. Experiências e lutas dos t rabalhadores da gr ande São P aulo 1970-1980*. São Paulo: Paz e Terra.
- SALAZAR JAQUE, Mauro, y Miguel VALDERRAMA (2000). «Introducción: Rapsodia a los dialectos.» En *Dialectos en transición. Política y subjetividad en el Chile actual*, de Mauro SALAZAR y Miguel VALDERRAMA (comps.), 5-11. Santiago: LOM / U. Arcis.
- SALAZAR Salvo, Manuel (2004). «Compañeros de ruta de Enrique Correa: Rebeldes con vocación de poder.» *Punto Final*, n° 573 (agosto).
- SALAZAR, Gabriel (1985). *Labradores, peones y proletarios. Formación y crisis de la sociedad popular chilena del siglo XIX*. Santiago: SUR.
- . (1986). «De la generación chilena del '68: ¿Omnipotencia, anomia, movimiento social?» *Proposiciones*, n° 12: 96-118.
- . (1987). «Los dilemas históricos de la auto-educación popular en Chile: ¿Integración o autonomía relativa?» *Proposiciones*, n° 15: 84-131.

- (1990a). «Educación popular y movimientos sociales en Chile.» Editado por CIDE. *Boletín "El Mensajero", Fascículos Educativos*, n° 7 (mayo).
- (1990b). «Historiografía y dictadura en Chile (1973-1990). Búsqueda, identidad, dispersión.» *Cuadernos Hispanoamericanos*, n° 482-83 (agosto-septiembre): 81-94.
- (1993). «Epílogo. Investigadores jóvenes de los 60 e investigadores jóvenes de los 90: ¿a dónde va la diferencia?» *Proposiciones*, n° 27.
- (1994). «Construcción de Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad.» *Proposiciones*, n° 24: 92-110.
- (1999). «Sobre unas críticas indirectas a la Historia Contemporánea de Chile.» *El Mercurio*, 6 de junio.
- (2001a). «Memoria histórica y capital social.» En *Capital social y políticas públicas en Chile. Investigaciones recientes*, de John DURSTON y Francisca MIRANDA, 11-21. Santiago: CEPAL.
- (2001b). «Memoria, hermenéutica y movimiento de la baja sociedad civil.» En *Memoria para un nuevo siglo. Chile: miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS y otros, 61-68. Santiago: ECO-Usach.
- (2002a). «La Nueva Historia y los Nuevos Movimientos Sociales.» *Némesis. Revista de los estudiantes de sociología de la Universidad de Chile*, n° 2 (diciembre): 19-26.
- (2002b). «Proyecto histórico social y discurso político nacional. Chile, siglo XIX.» En *Los proyectos nacionales en el pensamiento político y social chileno del siglo XIX*, editado por Manuel LOYOLA y Sergio GREZ, 155-164. Santiago: Universidad Católica Raúl Silva Henríquez.
- (2003a). *La historia de abajo y de dentro*. Santiago: Facultad de Artes, Universidad de Chile, Departamento de Teoría de las Artes.
- (2003b). «Entrevista al historiador Gabriel Salazar.» *Pensamiento Crítico. Revista Electrónica de Historia*, n° 3: 1-21.
- (2006). *La violencia política popular en las "Grandes Alamedas". La violencia en Chile 1947-1987 (Una perspectiva histórico popular)*. Santiago: LOM.
- (2007). «El viejo 'pacto social' del librecambismo.» *Revista Central de Sociología*, n° 2: 11-28.
- (2010). *Conversaciones con Carlos Altamirano. Memorias críticas*. Santiago: Debate.
- (2011a). «Perspectivas históricas del movimiento social-ciudadano chileno...» *The Clinic*, 6 de agosto.
- (2011b). *En el nombre de la P o der P opular C onstituyente (Chile, Si glo X XI)*. Santiago: LOM.
- (2012a). *Movimientos sociales en Chile. Trayectoria histórica y proyección política*. Santiago: Uqbar.
- (2012b). «Serie Documental. Historiadores Chilenos Contemporáneos: Tres Visiones de la Historia de Chile. Vol. 3. Gabriel Salazar: Un Historiador

- Social.» Dir. Jorge Díaz Arroyo. Santiago: Panquehue Films, en coproducción con la Universidad de Playa Ancha y la Universidad Finis Terrae.
- . (2015). «La Concertación traicionó a la ciudadanía y hoy está pagando las consecuencias.» *Diario U Chile*, 25 de marzo: <http://radio.uchile.cl/2015/03/25/gabriel-salazar-la-concertacion-traiciono-a-la-ciudadania-y-hoy-esta-pagando-las-consecuencias>.
- SALEH, Felipe (2008). «El presidente de la CUT va por su cuarto período. Cómo operan las redes de poder de Arturo Martínez.» *El Mostrador*, 28 de agosto.
- SALMAN, Ton (1997). *The Diffident Movement. Desintegration, Ingenuity and Resistance of the Chilean Pobladores, 1973-1990*. Amsterdam: Thela Publishers.
- SAMANIEGO, Augusto (2000). «Estado y democracia (en el medio siglo chileno). Los sujetos del trabajo y la construcción del Estado.» En *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS y Miguel URRUTIA, 139-150. Santiago: LOM.
- SANTOS, Boaventura de Sousa (2009). *Una epistemología del Sur. La reinención del conocimiento y la emancipación social*. México: CLACSO y Siglo XXI.
- SILVA, Patricio (1992). «Intelectuales, tecnócratas y cambio social en Chile: pasado, presente y perspectivas futuras.» *Revista Mexicana de Sociología* 54, n° 1 (enero-marzo): 139-166.
- SORKIN, Carolyn K (2003). «Intersections of Power and Knowledge: Chilean Social Scientists and the Transition to Democracy.» *Tesis de grado del Doctorado en Filosofía, mención en Educación*. New York: New York University, School of Education.
- SVAMPA, Maristella (2007). «¿Hacia un nuevo modelo intelectual?» *Ñ Revista de Cultura*, n° 209 (septiembre).
- THIELEMANN, Luis (2013). «El Movimiento Popular y la historiografía en Chile: Elementos para un balance a 40 años del Golpe de Estado.» *Revista de Historia y Geografía*, n° 29: 105-130.
- TIRONI, Eugenio (1979). «Solo ayer éramos dioses...» *Análisis*, n° 30: 25-27.
- . (1984). *La Torre de Babel. Ensayos de crítica y renovación política*. Santiago: SUR.
- . (1986a). «El fantasma de los pobladores.» *Estudios Sociológicos*, n° 12: 391-397.
- . (1986b). «La revuelta de los pobladores. Integración social y democracia.» *Nueva Sociedad*, n° 83: 24-32.
- . (1986c). «Para una sociología de la decadencia.» *Proposiciones*, n° 12: 12-16.
- . (1987a). «Pobladores e integración social.» *Proposiciones*, n° 14.
- . (1987b). «Introducción - Marginalidad, Movimientos Sociales y Democracia.» *Proposiciones*, n° 14.
- . (1990a). «Crisis, desintegración y modernización.» *Proposiciones*, n° 18: 16-42.
- . (1990b). *Autoritarismo, modernización y marginalidad. El caso de Chile 1973-1989*. Santiago: SUR.

- . (1991). «Pobladores en Chile: protesta y organización.» En *El sector informal en América Latina. Una selección de perspectivas analíticas*, de Jacobo SCHATAN et ál., 143-165. México: CIDE.
- . (1999). *La irrupción de las masas y el malestar de las elites. Chile en el cambio de siglo*. Santiago: Grijalbo.
- . (2009). «Los hijos no siempre reconocidos de Tomás Moulian.» *La Nación*, 6 de septiembre: <http://www.lanacion.cl/los-hijos-no-siempre-reconocidos-de-tomas-moulian/noticias/2009-09-05/203825.html>.
- . (2013). «Los Comunistas.» *El Mercurio*, 18 de junio.
- TOURAINÉ, Alain (1969). *Sociología de la acción*. Barcelona: Ariel.
- . (1982). «Reacciones antinucleares o movimiento antinuclear.» *Revista Mexicana de Sociología* 44, n° 2: 689-701.
- . (1987a). *Actores sociales y sistemas políticos en América Latina*. Santiago: PREALC.
- . (1987b). *El regreso del actor*. Buenos Aires: Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- . (1987c). «Conclusión: La centralidad de los marginales.» *Proposiciones*, n° 14: 214-224.
- . (1989). *América Latina: Política y Sociedad*. Madrid: Espasa-Calpe.
- . (2006). «Los movimientos sociales.» *Revista Colombiana de Sociología*, n° 27: 255-278.
- URRUTIA, Miguel (2004). «La hégira Touraine y el perpetuo ocaso de los movimientos sociales en América Latina.» *Ciencias Sociales Online* (Universidad de Viña del Mar) I, n° 1 (septiembre): 64-75.
- VALDÉS, Teresa (1986). «El movimiento poblacional: la recomposición de las solidaridades sociales.» *Documento de Trabajo n° 283*. Santiago: Flacso.
- VALDÉS, Ximena, Loreto REBOLLEDO, Diana VENEROS, y Teresa VALDÉS (2000). «El movimiento social de mujeres: memoria, acción colectiva y democratización en Chile en la segunda mitad del siglo XX.» En *Memoria para un nuevo siglo. Chile, miradas a la segunda mitad del siglo XX*, de Mario GARCÉS, Pedro MILOS, Myriam OLGUÍN, Julio PINTO, María Teresa ROJAS y Miguel URRUTIA, 213-227. Santiago: LOM.
- VALDIVIA, Verónica (2006). «"Crónica de una muerte anunciada": La disolución del Partido Nacional, 1973-1980.» En *Su revolución contra nuestra evolución. Izquierdas y rechas en el Chile de Pinochet (1973-1981)*, de Verónica VALDIVIA, Rolando ÁLVAREZ y Julio PINTO, 15-47. Santiago: LOM.
- VALENZUELA VAN TREEK, Esteban (2011). «El MAPU y el rol transformador de las élites iluministas: Revolución, pragmatismo y disidencia.» *Revista de Ciencia Política* 31, n° 2: 187-206.
- VARIOS AUTORES (2010). *De actores secundarios a estudiantes protagonistas*. Santiago: Quimantú-OPECH.

- VASCONI, Tomás Amadeo (1991). «Las Ciencias Sociales en América del Sur y Chile, 1960-1990.» *In memoriam. Homenaje de la Universidad Arcis a Tomás A. Vasconi (1928-1995)* (Universidad Arcis), julio: 1-75.
- VIDAURRÁZAGA, Gastón (1987). «La partera.» *El Rebelde en la clandestinidad*, n° 243 (septiembre): 12.
- VILLAFANE, Lorena (2013). «Reapertura del Colegio de Sociólogos de Chile.» *uchile.cl*. 31 de mayo.
- VILLEGAS, Fernando (1984). «Sociólogos: En caso alguno una especie en extinción.» *Cauce*, Semana de 28 de agosto al 3 de septiembre: 16-17.
- VILLELA, Hugo (2012). «Prólogo.» En *"Las Trancas": Análisis de tres coyunturas significativas y las cuestiones estratégicas (1983-1989)*, 7-9. Santiago: ECO.
- WALKER, Ignacio (1988). «Un nuevo socialismo democrático en Chile.» *Colección Estudios Cieplan*, n° 24 (junio): 5-36.
- WEBER, Max (2005). *Economía y sociedad*. México: FCE.
- WINN, Peter (2004). *Tejedores de la revolución. Los trabajadores de Yarur y la vía chilena al socialismo*. Santiago: LOM.
- ZIBECHI, Raúl (2008). «Dibujando fuera de los márgenes. ¿Movimientos sociales o sociedad en movimiento? En América Latina.» *Entrevista a Raúl Zibechi, por Susana Nuin*. Buenos Aires: La Crujía.
- ŽIŽEK, Slavoj (2004). «Da Capo senza Fine.» En *Contingencia, hegemonía universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda*, de Judith BUTLER, Ernesto LACLAU y Slavoj ŽIŽEK, 215-262. Buenos Aires: FCE.